



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

TESIS DOCTORAL

**La crisis mundial del desplazamiento forzoso:
un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas
para personas desplazadas internamente y su aplicación
en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011
y la guerra civil desde 2014**

**The global crisis of forced displacement:
an analysis of the protection system of the United Nations
for internally displaced persons and its implementation
in the context of the military intervention in Libya in 2011
and the civil war since 2014**

DOCTORANDA
FARINA GREINER

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E
HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO**
PROGRAMA:
RD 99/2011, CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

DIRECTOR DE LA TESIS
DR. MANUEL TORRES AGUILAR

CÓRDOBA, ESPAÑA
Abril de 2018

TITULO: *La crisis mundial del desplazamiento forzoso:un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas para personas desplazadas internamente y su aplicación en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011 y la guerra civil desde 2014*

AUTOR: *Farina Greiner*

© Edita: UCOPress. 2018
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A
14071 Córdoba

<https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/ucopress@uco.es>

**La crisis mundial del desplazamiento forzoso:
un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas
para personas desplazadas internamente y su aplicación
en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011
y la guerra civil desde 2014**



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

TESIS DOCTORAL

**La crisis mundial del desplazamiento forzoso:
un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas
para personas desplazadas internamente y su aplicación
en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011
y la guerra civil desde 2014**

DOCTORANDA
FARINA GREINER

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E
HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

PROGRAMA:

RD 99/2011, CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO Y ECONOMÍA

DIRECTOR DE LA TESIS
DR. MANUEL TORRES AGUILAR

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E
HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, ESPAÑA
1 de abril de 2018



TÍTULO DE LA TESIS:

La crisis mundial del desplazamiento forzoso: un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas para personas desplazadas internamente y su aplicación en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011 y la guerra civil desde 2014

DOCTORANDA: Farina Greiner

INFORME RAZONADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS

La presente tesis se ha desarrollado bajo mi dirección, cumpliendo con todas las indicaciones que le han sido realizadas por mí. La doctoranda ha realizado un trabajo coherente con el título planteado que ha debido ser modificado en atención al propio desarrollo de la investigación. La tesis hace un planteamiento general de la doctrina, la legislación y la teoría del tema general de las IDP, para luego desarrollar exhaustivamente el estudio de la situación de los desplazados en Libia, tras su guerra civil. Hace un análisis jurídico, sociológico, ético y político de la situación planteada de altísima calidad. Las conclusiones aportadas y las propuestas formuladas abren la investigación a otros espacios en los que se han planteado y se puedan plantear idénticas situaciones de conflicto.

Como previo a la finalización de la Tesis, la doctoranda ha publicado como resultado de la misma el siguiente estudio:

GREINER, Farina, “Los retos para la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria del desplazamiento interno”, en COCA VILLAR, Cristina; GARCÍA VALLINAS, Eulogio; MARTÍN SOLBES, Victor M.; RAMÍREZ HURTADO, Carmen, *Estudios en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. In memoriam Francisco A. Muñoz*, Editorial Síntesis, Madrid, 2015, pp. 97-111.

La Editorial Síntesis es una de las mejor situadas en el ranking de revistas tal y como se expone en el documento de índices de calidad. Los autores que participaron en el mismo número en el que publicó su artículo, son algunos de ellos, de primer nivel y máximo reconocimiento en los estudios de la paz y los conflictos.

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.

Córdoba, 1 de abril de 2018

Firma del director

**TORRES AGUILAR
MANUEL - 30461817L**

Firmado digitalmente por TORRES
AGUILAR MANUEL - 30461817L
Fecha: 2018.04.11 06:03:09 +02'00'

Fdo. Prof. Dr. Manuel Torres Aguilar

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi agradecimiento más sincero a todas las personas que, en sus distintas formas, me han alentado y han estimulado esta tesis doctoral:

Danke an meine Eltern, die mir den Weg gezeigt haben und mich immer unterstützt haben. Für ihre ständige Sorge und unendliche Geduld. Danke, dass ihr mich ermutigt habt, meine Zweifel zu überwinden und mir selbst treu zu bleiben.

Um grande obrigado ao Rafael pelo apoio, confiança, paciência, amor e amizade durante os últimos anos, por ter acreditado em mim incondicionalmente; e pelo seu sorriso também nos momentos menos doces.

Ein herzliches Dankeschön an Sabine, für ihre unermüdliche Unterstützung, aufbauenden Worte und die unzähligen schönen Momente, vor allem auch in nicht so leichten Zeiten.

A mi amiga del alma Maren, por compartir los mismos ideales y la misma ‘locura’. Por aprender juntas y crecer. Y porque las preguntas de investigación también las aplicamos a la vida real.

Un ¡gracias! enorme a Juanita, por su constante presencia, ayuda y su amistad desde hace muchos años. Por el valor de sus palabras, intercambio de ideas y los gratos recuerdos fruto de innumerables encuentros.

A Victoria y su familia, por haberme acogido en su hogar con mucho cariño, por su apoyo, su amistad y los numerosos momentos de alegría que compartimos.

Un gracias especial a Orlaith, por su amistad y compañía en Córdoba y las incontables conversaciones alentadoras.

Ein besonderer Dank gilt auch Opa, Annemarie und Ewald, Angelika und Jürgen, Reiner, Jörg, Veronica und Riana – für eure Unterstützung und dass es euch gibt.

Gracias a María Jesús, Isabel y el equipo entero del grupo local de Amnistía Internacional en Córdoba por su compromiso apasionado con los derechos humanos y por haberme inspirado mucho durante mis estudios en España.

To my Libyan interview partners for having shared your experiences with me. Thank you so much for your confidence and trust.

Finalmente, expreso mi agradecimiento especial a Manuel Torres Aguilar, director de esta tesis. Gracias por haberme ofrecido la oportunidad de seguir con los estudios de doctorado justamente después de haber terminado la defensa de mi TFM. Sin su apoyo y confianza, la realización de este proyecto nunca habría sido posible.

Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado.
André Gide

A mis padres, por todo.

*Para Rafael, por ter estado ao meu lado, por ter sido minha inspiração,
minha motivação para seguir em frente.*

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen	xxiv
Abstract	xxv
Lista de abreviaturas	xxvi
A. Introducción	1
B. Estructura de la tesis y objetivos	10
C. Justificación e interés del tema y otras cuestiones derivadas de la investigación	13
D. Metodología	17
 <i>I. La crisis mundial del desplazamiento forzado: sobre la necesidad de reformas del sistema de protección de las Naciones Unidas para personas desplazadas internamente</i>	 19
1. Introducción e hipótesis	19
2. El marco jurídico respecto a la protección de las personas desplazadas internamente (IDP por sus siglas en inglés)	23
2.1 La situación legal de los refugiados <i>versus</i> IDP: una comparación	23
2.2 Lagunas jurídicas respecto de la situación actual	25
3. Debilidades generales del sistema de protección	28
3.1 Debilidades dentro de las Naciones Unidas	28
3.2 Debilidades dentro de las responsabilidades de los órganos de la ONU	29
3.3 Debilidades debido al contexto	31
3.4 Resumen conclusivo de las debilidades generales	33
4. Los agentes más importantes en el sistema de protección	35
4.1 Los órganos responsables de las IDP y sus mandatos	36
<u>4.1.1 El Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos / El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos</u>	36
<u>4.1.2 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados</u>	37
<u>4.1.3 El Comité Internacional de la Cruz Roja</u>	38
<u>4.1.4 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia</u>	39
4.2 El <i>Cluster Approach</i> y el <i>Global Protection Cluster</i>	40
<u>4.2.1 Críticas y debilidades</u>	47
4.3 La responsabilidad del Estado	50

5. La soberanía estatal	53
5.1 La <i>Responsibility to Protect</i>: una introducción a la doctrina	53
5.2 La actitud de la comunidad internacional frente a la soberanía estatal	54
6. La intervención humanitaria: una visión general	57
6.1 El desplazamiento interno en la agenda humanitaria	57
6.2 El concepto de la intervención humanitaria	58
6.3 Debilidades y reparos frente al concepto de la intervención humanitaria	59
6.4 El concepto de la obligación de intervenir	61
7. Los <i>Guiding Principles on Internal Displacement</i>: un enfoque global para hacer frente al desplazamiento interno	65
7.1 El contenido de los <i>Guiding Principles on Internal Displacement</i>	65
7.2 El desarrollo histórico de los <i>Guiding Principles</i>	66
7.3 Conclusiones, preocupaciones y debilidades	67
8. Enfoques de solución y propuestas de mejora del sistema de protección para las IDP	69
8.1 La creación de nuevas leyes	69
8.2 La creación de un órgano nuevo de la ONU	70
8.3 La ampliación del mandato de un órgano existente de la ONU	71
<u>8.3.1 El mandato del ACNUR</u>	71
<u>8.3.2 El mandato de UNICEF</u>	72
<u>8.3.3 Resumen conclusivo</u>	73
8.4 El aumento de los recursos financieros	75
8.5 La ampliación de las medidas de seguridad y protección	77
<u>8.5.1 El refuerzo de las capacidades locales</u>	77
<u>8.5.2 El restablecimiento de la vida cotidiana de las víctimas</u>	78
<u>8.5.3 Resumen conclusivo</u>	79
8.6 El <i>Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons</i>	80
8.7 La elaboración de soluciones duraderas	81
9. Oportunidades de cambio en organizaciones desde un punto de vista antropológico organizacional	86
9.1 Influencias externas y constataciones claves	86
9.2 Conceptos erróneos de las organizaciones	88
9.3 Repensando el cambio organizacional	89
10. Reflexiones finales y conclusiones	91

II. La intervención militar en Libia en 2011: ¿una obligación normativa para proteger a la población civil o intereses políticos de poder?	95
1. Información de contexto e interrogantes claves	95
1.1 Los instrumentos de un análisis teórico: las normas en las relaciones internacionales	97
<u>1.1.1 La actuación gubernamental por las normas internacionales</u>	97
<u>1.1.2 El desarrollo de una obligación normativa internacional de protección: una visión general</u>	99
<u>1.1.2.1 Proteger al intervenir: la controversia de la Responsibility to Protect (R2P por sus siglas en inglés)</u>	101
<u>1.1.2.2 Antecedentes y criterios de aplicación: del concepto a la doctrina</u>	102
<u>1.1.2.3 De la intervención humanitaria a la R2P</u>	109
<u>1.1.2.4 El principio de la soberanía estatal versus la R2P</u>	111
<u>1.1.2.5 El principio de no intervención y de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza</u>	112
<u>1.1.2.6 La obligación normativa de una intervención humanitaria</u>	116
<u>1.1.2.7 Los criterios de evaluación de una intervención humanitaria</u>	117
1.2 El concepto del neorrealismo	120
<u>1.2.1 La estructura del sistema internacional</u>	120
<u>1.2.2 La aspiración al poder de los Estados como un imperativo</u>	122
<u>1.2.2.1 Estrategias defensivas</u>	124
<u>1.2.2.2 Estrategias ofensivas</u>	125
<u>1.2.3 El aspecto de la motivación tras una intervención</u>	126
2. Libia en el contexto de la Primavera Árabe	128
2.1 Las Resoluciones 1970 y 1973 de la ONU contra Libia y su impacto en el derecho internacional	128
2.2 Informaciones claves sobre Libia y el papel de los recursos petrolíferos	131
2.3 Antecedentes históricos	135
3. La intervención humanitaria en Libia: ¿una obligación normativa para la protección de la población civil?	138
3.1 Sine qua non: la causa justa	138
<u>3.1.1 La situación en Libia y la Responsibility to Protect</u>	138
<u>3.1.2 Las pruebas necesarias para evaluar la situación</u>	142
3.2 La adecuación de la intervención	145

3.3 La cuestión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la intervención	147
<u>3.3.1 La base jurídica formal para la intervención</u>	148
<u>3.3.2 El uso de la fuerza por parte de los poderes intervinientes</u>	148
<u>3.3.3 Sobre el papel del Consejo de Seguridad y la cuestión sobre la legitimidad de la Resolución 1973</u>	151
<u>3.3.4 El papel de la <i>Responsibility to Protect</i> en la intervención humanitaria en Libia</u>	153
<u>3.3.5 Los conceptos de la legítima defensa y del estado de emergencia en las Leyes de la Guerra para legitimar el uso de la fuerza en el derecho internacional</u>	157
<u>3.3.6 Los <i>threshold criteria</i> y su aplicación a la situación en Libia antes de la intervención</u>	161
<u>3.3.7 Resumen: la ilegitimidad de la Resolución 1973</u>	165
<u>3.3.7.1 La Resolución 1973 y la violación del principio de la <i>Collective Security</i></u>	166
<u>3.3.8 Perspectivas de futuro</u>	169
4. ¿La intervención humanitaria en Libia en beneficio de intereses políticos de poder?	171
4.1 Las potencias principales de la intervención militar y el impacto del petróleo	171
<u>4.1.1 El papel de Francia</u>	173
<u>4.1.2 El papel del Reino Unido</u>	176
<u>4.1.3 El papel de los Estados Unidos</u>	177
4.2 Las potencias defensivas de la intervención militar	180
<u>4.2.1 El papel de Rusia</u>	181
<u>4.2.2 El papel de China</u>	183
5. Reflexiones finales desde una perspectiva crítica	186
5.1 El papel de los medios de comunicación	187
5.2 Reflexiones sobre la intervención humanitaria y la R2P	191
5.3 Las causas de la guerra libia más allá de los motivos oficiales	197
<u>5.3.1 El proyecto del <i>Great-Man-Made-River</i></u>	197
<u>5.3.2 El proyecto del dinar de oro</u>	200
5.4 Reflexiones sobre los rebeldes libios y el NTC	205
5.5 El impacto de la muerte de Gadafi en los fundamentos del derecho internacional	207
6. Resumen conclusivo	212
6.1 El éxito está en el ojo de quien lo contempla	213

III. Las IDP en Libia, migrantes capturados en crisis: la comunidad internacional frente al reto de encontrar respuestas humanitarias y soluciones duraderas	216
1. Informaciones generales sobre la crisis libia del desplazamiento	216
1.1 Dos conceptos, dos realidades jurídicas: IDP <i>versus</i> refugiados	220
2. El significado de la justicia transicional y de la reconciliación nacional en el contexto de la crisis libia	223
2.1 El concepto de la justicia transicional y su aplicación en Libia desde 2011	223
2.2 La reconciliación nacional como parámetro de transición frente a una sociedad escindida	225
3. Cronología de los acontecimientos bélicos más importantes desde 2011	229
4. Libia en el contexto de una crisis humanitaria	236
4.1 Las víctimas del desplazamiento forzado: hechos y cifras sobre los IDP y refugiados	239
4.2 El impacto del estallido de la guerra civil libia en la crisis del desplazamiento forzado	243
<u>4.2.1 Aclarando los frentes: el papel de las milicias y el surgimiento de la <i>Operation Dignity</i> y <i>Libya Dawn</i></u>	243
<u>4.2.2 La guerra civil a nivel político: la transición del NTC al GNC</u>	246
<u>4.2.3 El GNC, el papel del general Jalifa Haftar y la HoR</u>	246
<u>4.2.4 Un intento de reconciliación: el <i>Libyan Political Agreement</i> versus tres gobiernos paralelos</u>	248
<u>4.2.5 Jalifa Haftar, las luchas continuas del poder y el significado del petróleo</u>	249
<u>4.2.6 La crisis del desplazamiento frente a las luchas de poder y un sistema jurídico paralizado: un asunto abandonado</u>	252
<u>4.2.6.1 El reto de encontrar posibles soluciones para abordar la anarquía</u>	254
<u>4.2.6.2 La Corte Penal Internacional en el caso de Libia: influencia limitada</u>	256
5. La crisis del desplazamiento interno tras la caída del régimen de Gadafi	260
5.1 La situación del desplazamiento forzado de los tawerghanos	263
<u>5.1.1 Antecedentes a la crisis humanitaria de los tawerghanos</u>	264
<u>5.1.2 Ataques arbitrarios y condiciones de vida precarias</u>	266
<u>5.1.3 La negación de la libertad de circulación y de residencia</u>	268
<u>5.1.4 Tortura, detenciones arbitrarias y la negación del derecho a un juicio justo</u>	269

5.1.5 El derecho a una vivienda y al reconocimiento de la personalidad jurídica	274
5.1.6 La cuestión del origen étnico en el conflicto libio en el caso de Misrata y Tawergha	276
5.1.7 Resumen de los obstáculos a soluciones de la crisis humanitaria de los tawerghanos	279
6. Empezar el camino hacia la reconciliación nacional: la aplicación de la ayuda humanitaria en el contexto libio	285
6.1 Cuestiones relativas a las viviendas, tierras y propiedades	287
6.1.1 Antecedentes históricos y el marco jurídico del régimen de Gadafi	287
6.1.2 La distinción entre comunidades de IDP perseguidas y no perseguidas, refugiados y extranjeros	293
6.1.2.1 Comunidades de IDP perseguidas de Misrata y Tawergha	298
6.1.2.2 La aplicación selectiva de la justicia transicional y de la política de indemnizaciones en la nueva Libia	302
6.1.3 Libia y sus obligaciones del derecho internacional	303
6.1.3.1 Normas internacionales de derechos humanos y su vínculo con el derecho a la vivienda, la tierra y la propiedad	304
6.1.3.2 La aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, de los <i>Guiding Principles on Internal Displacement</i> y de los <i>Pinheiro Principles</i> a las IDP	308
6.1.3.3 El derecho a la seguridad de tenencia y medidas de protección en situaciones de desplazamiento	313
6.1.4 Recomendaciones relativas al apoyo humanitario a las IDP	314
6.1.4.1 Implementar un enfoque de desplazamiento basado en los derechos humanos	315
6.1.4.2 La importancia de la seguridad jurídica de la tenencia de las IDP en sus refugios	318
6.1.4.3 El reto de elaborar soluciones duraderas y ofrecer compensaciones para las IDP	321
6.1.5 Recomendaciones de reformas jurídicas para abordar las reclamaciones relativas a la restitución de viviendas, tierras y propiedades	324
6.2 El <i>Global Protection Cluster</i> y su implementación en la crisis libia	331
6.2.1 El <i>Humanitarian Response Plan 2017</i> para Libia	332
6.2.2 Las prioridades esenciales del HRP 2017 en la crisis libia	335
6.2.3 Los objetivos estratégicos del HRP 2017	339
6.2.4 La capacidad operativa del HRP 2017 y la cuestión del acceso a las regiones deprimidas	340
6.2.5 La estrategia de respuesta humanitaria según el HRP 2017	342
6.2.6 La presencia de las Naciones Unidas en Libia	347
6.2.6.1 El sector de <i>Health</i>	350

6.2.6.2 El sector de <i>Protection</i>	351
6.2.6.3 El sector de WASH	352
6.2.6.4 El sector de <i>Shelter and NFI</i>	353
6.2.6.5 El sector de <i>Food Security</i>	354
6.2.6.6 El sector de <i>Education</i>	355
6.2.6.7 El sector de <i>Coordination</i>	357
6.2.6.8 El sector de <i>Refugee and Migrant Response Plan</i>	358
6.2.6.9 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios	360
6.2.6.10 El Programa Mundial de Alimentos	361
6.2.6.11 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	362
6.2.6.12 La Organización Internacional para las Migraciones	363
6.2.6.13 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	364
6.2.6.14 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia	366
6.2.6.15 La Organización Mundial de la Salud	367
6.2.6.16 El Fondo de Población de las Naciones Unidas	368
6.2.6.17 El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos	370
6.2.6.18 La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer	371
6.2.6.19 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	373
6.2.7 Reflexiones finales: la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria internacional para Libia	374
E. Conclusiones finales	382
Anexos	411
Listado de fuentes	427

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1:	El <i>Cluster Approach</i> . Las organizaciones involucradas y sus responsabilidades (Humanitarian Response, 2005)	42
Gráfico 2:	La estructura de coordinación en el <i>Cluster Approach</i> (Humanitarian Response, 2005)	44
Gráfico 3:	Las fuerzas combatientes en Libia: enero de 2017 (Estelle, 18.01.2017)	243
Gráfico 4:	Las facciones beligerantes más importantes en la guerra civil libia (elaboración propia, diciembre de 2017)	245
Gráfico 5:	Personas necesitadas y destinatarias por sectores (OCHA, HRP 2017)	334
Gráfico 6:	Impactos, desafíos y consecuencias humanitarias de la crisis libia (OCHA, HNO 2017)	335

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y
FILOSOFÍA DEL DERECHO

La crisis mundial del desplazamiento forzoso: un análisis del sistema de protección de las Naciones Unidas para personas desplazadas internamente y su aplicación en el contexto de la intervención militar en Libia en 2011 y la guerra civil desde 2014

Autora: Farina Greiner
Director: Dr. Manuel Torres Aguilar

RESUMEN

En el contexto posterior a la Guerra Fría, una creciente conciencia mundial sobre las violaciones de los derechos humanos ha captado la atención de la comunidad internacional más que nunca. El desplazamiento forzado ha creado un desafío sin precedentes y la cuestión de la protección humana se ha convertido en un asunto grave de controversia en la agenda humanitaria, que implica repensar el significado de la soberanía estatal con respecto al suministro de ayuda en crisis humanitarias y el concepto de la Responsabilidad de Proteger, así como la cuestión sobre los criterios fundamentales a los que se recurre para justificar una intervención humanitaria. En el marco de la presente tesis, por lo tanto, será señalada la necesidad urgente de reformas en numerosos ámbitos para poder suministrar el apoyo humanitario a las *internally displaced persons* (IDP) de forma eficaz y duradera. Asimismo, se mostrará que es imprescindible efectuar cambios en cuanto a una reestructuración interna de las Naciones Unidas, en la esfera jurídica y económica, así como en las medidas de protección y seguridad *in situ* para los desplazados. Será crucial identificar las circunstancias interdependientes entre una intervención humanitaria llevada a cabo en nombre de los derechos humanos y la protección civil, y el impacto que conlleva sobre el desarrollo de una crisis migratoria. Con el ejemplo de Libia, se demostrará cómo se condicionaron la intervención militar por la OTAN en 2011 y la crisis de desplazamiento que ha desencadenado progresivamente tras la caída del régimen de Gadafi y el estallido de la guerra civil en 2014. Partiendo de los orígenes de la crisis humanitaria en Libia, se investigarán las normas vigentes en las relaciones internacionales, el desarrollo de una obligación normativa internacional de protección e intervención humanitaria, los criterios de evaluación de una intervención militar (*just cause*), la adecuación de la intervención en Libia, así como las causas de la guerra en el país más allá de los motivos oficiales de la seguridad humana y la protección de la población civil. La investigación de los crímenes de guerra cometidos por las partes beligerantes involucradas en el conflicto libio desde 2011, así como el significado de la justicia transicional y la reconciliación nacional para el futuro de la nueva Libia constituyen otros temas centrales. Asimismo, será de interés fundamental examinar la aplicación del sistema internacional de protección y del apoyo humanitario en el caso real de Libia. A este respecto, el análisis práctico del *Global Protection Cluster* y de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, así como su implementación sobre el terreno es un aspecto clave. La Libia post-revolucionaria se está enfrentando a desafíos enormes como polarización política, anarquía y la guerra civil continua. Con el fin de alcanzar la paz, seguridad y estabilidad duraderas, Libia todavía deberá emprender amplias reformas legales, judiciales y políticas, fomentar el diálogo nacional y comprometerse a respaldar procesos inclusivos de reconciliación nacional mediante el apoyo de la comunidad internacional, ONGs, las autoridades nacionales y locales, así como la sociedad civil, mujeres y tribus.

Palabras clave: desplazamiento interno, Libia, IDP, refugiados, intervención militar, soberanía estatal, Responsabilidad de Proteger, crisis humanitaria, guerra civil, Naciones Unidas, sistema de protección, apoyo humanitario, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, *Global Protection Cluster*, derechos humanos, derecho internacional, crímenes de guerra, reformas, transición, justicia transicional, reconciliación nacional, paz.

UNIVERSITY OF CORDOBA
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND HISTORICAL LEGAL SCIENCES AND
PHILOSOPHY OF LAW

The global crisis of forced displacement: an analysis of the protection system of the United Nations for internally displaced persons and its implementation in the context of the military intervention in Libya in 2011 and the civil war since 2014

Author: Farina Greiner
Supervisor: Dr. Manuel Torres Aguilar

ABSTRACT

In the post-Cold War context, growing global consciousness of human rights violations has captured the attention of the international community as never before. Forced displacement has created an unprecedented challenge and the issue of human protection has become a serious issue of controversy in the humanitarian agenda. This involves rethinking the meaning of state sovereignty with regard to providing assistance in humanitarian crises, the concept of the Responsibility to Protect and the question of fundamental criteria used to justify humanitarian intervention. Therefore, in the context of this thesis, the urgent need for reforms in many pertinent areas will be demonstrated in order to ensure the provision of humanitarian support to internally displaced persons (IDP) in an effective and enduring manner. Furthermore, the necessity of essential changes in terms of an internal restructuring of the UN, as well as in the legal and economic field, and in the protection and security measures on site for the displaced will be shown. It will be crucial to identify the interdependent circumstances between a humanitarian intervention carried out in the name of human rights and civil protection, and the impact it has on the development of a migratory crisis. Based on the example of Libya, it will be demonstrated how the NATO-led military intervention in 2011 is interrelated with the displacement crisis progressively triggered by the fall of the Gaddafi regime and the outbreak of civil war in 2014. Starting from the origins of the humanitarian crisis in Libya, the following will be explored: the existing standards in international relations; the development of an international regulatory obligation to protect and to intervene on humanitarian grounds; the assessment criteria of a military intervention (just cause); the appropriateness of the intervention in Libya; as well as the causes of the war behind the official reasons of human security and protection of the civilian population. The investigation of war crimes committed by the warring parties involved in the Libyan conflict since 2011, as well as the significance of transitional justice and national reconciliation for the future of the new Libya are further central aspects. In addition, another major concern is to examine the application of the international protection system and humanitarian support in the actual case of Libya. In this regard, the practical analysis of the Global Protection Cluster and the Guiding Principles on Internal Displacement, as well as their implementation on the ground constitutes a key aspect. Post-revolutionary Libya is facing enormous challenges, such as political polarization, anarchy and the ongoing civil war. In order to achieve durable peace, security and stability, Libya must undertake extensive legal, judicial and political reforms, encourage national dialogue and engage in inclusive processes of national reconciliation with the support of the international community, NGOs, national and local authorities, as well as civil society, women and tribes.

Keywords: internal displacement, Libya, IDP, refugees, military intervention, state sovereignty, Responsibility to Protect, humanitarian crisis, civil war, United Nations, protection system, humanitarian support, Guiding Principles on Internal Displacement, Global Protection Cluster, human rights, international law, war crimes, reforms, transition, transitional justice, national reconciliation, peace.

Lista de abreviaturas

ACLED – *Armed Conflict Location and Event Data Project*

ACNUDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (o OHCHR según sus siglas en inglés)

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (o UNHCR según sus siglas en inglés)

AI – *Amnesty International*; Amnistía Internacional

AMC – Asociación de Medicinas Complementarias

CAP – *Consolidated Appeals Process*; Procedimiento de Llamamientos Unificados

CBI – *Cash-Based Interventions*; intervenciones basadas en dinero efectivo

CCCM – *Global Cluster for Camp Coordination and Camp Management*; Grupo Temático de Coordinación y Gestión de Campamentos

CCEAG – Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (o GCC según sus siglas en inglés)

CDH – Comité de Derechos Humanos (o HRC según sus siglas en inglés)

CDN – Convención sobre los Derechos del Niño (o CRC según sus siglas en inglés)

CERF – *Central Emergency Response Fund*; Fondo Central de Respuesta a Emergencias

CESCR – *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CESVI – *Cooperazione e Sviluppo*; Cooperación y Desarrollo

CETFDCM – Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW según sus siglas en inglés)

CFA – Franco de la comunidad financiera africana

CIAR – Colectivo de Investigación sobre las Armas Radioactivas

CICR – Comité Internacional de la Cruz Roja (o ICRC según sus siglas en inglés)

CIEFDR – Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (o CERD según sus siglas en inglés)

CIISE – Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (o ICISS según sus siglas en inglés)

CIJ – Corte Internacional de Justicia (o ICJ según sus siglas en inglés)

CIPDTMF – Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (o ICRMW según sus siglas en inglés)

CIREFCA – Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos

CNPC – *Chinese National Petroleum Corporation*

CPI – Corte Penal Internacional (o ICC según sus siglas en inglés)

CTTCID – Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes (o CAT según sus siglas en inglés)

DDHH – Derechos Humanos (o HR según sus siglas en inglés)

DRC – *Danish Refugee Council*

DTM – *Displacement Tracking Matrix*; Matriz de Seguimiento de Desplazados

DUDH – Declaración Universal de los Derechos Humanos (o UDHR según sus siglas en inglés)

ECHA – *Executive Committee on Humanitarian Affairs*; Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas

EI – Estado Islámico (o IS según sus siglas en inglés)

ELNL – Ejército de Liberación Nacional Libio (o NLA según sus siglas en inglés)

EMIS – *Education Management Information System*; Sistema de Información de la Gestión de Educación

ERC – *Emergency Relief Coordinator*; Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas

EWARS – *Early Warning and Response System*; sistema de alerta precoz y de respuesta

EPRU – *Emergency Preparedness and Response Unit*; unidad de preparación y respuesta a emergencias

FAO – *Food and Agriculture Organization of the United Nations*; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FICR – Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

FMI – Fondo Monetario Internacional (o IMF según sus siglas en inglés)

FNSL – Frente Nacional para la Salvación Libia (o NFSL según sus siglas en inglés)

FPNU – Fondo de Población de las Naciones Unidas (o UNFPA según sus siglas en inglés)

FTS – *Financial Tracking Service*; Servicio de Seguimiento Financiero

GIS – *Geographic Information System*; sistema de información geográfica

GLIL – Grupo de Lucha Islámica Libio (o LIFG según sus siglas en inglés)

GNA – *Government of National Accord*; Gobierno de Acuerdo Nacional

GNC – *General National Congress*; Consejo General de la Nación

GPC – *Global Protection Cluster*; Grupo de Protección Global

HAP – *Humanitarian Accountability Partnership*; Asociación Internacional para la Rendición de Cuentas en el Ámbito Humanitario

HC – *Humanitarian Coordinator*; Coordinador de Asuntos Humanitarios

HCT – *Humanitarian Country Team*; Equipo de Asistencia Humanitaria en el País

HNEC – *High National Electoral Commission*; Comisión Electoral Nacional de Alto Nivel

HLP issues – *Housing, land and property issues*; problemas relacionados con la vivienda, la tierra y la propiedad

HoR – *House of Representatives*; Cámara de Representantes

HRP – *Humanitarian Reform Project*

HRW – *Human Rights Watch*

IASC – *Inter-Agency Standing Committee*; Comité Permanente entre Organismos

IDH – Índice de desarrollo humano (o HDI según sus siglas en inglés)

IDMC – *Internal Displacement Monitoring Centre*; Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos

IDP – *Internally Displaced Persons*; personas desplazadas internamente

IRIN – *Integrated Regional Information Networks*

ISAF – *International Security Assistance Force*; Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

JTCC – *Joint Technical Coordination Committee*; Comité de Coordinación Técnica Conjunta

LEA – Liga de Estados Árabes (o LAS según sus siglas en inglés)

LNA – *Libyan National Army*; Ejército Libio

LPA – *Libyan Political Agreement*

MINUSTAH – *Mission des Nations Unies pour la STabilisation en Haïti*; Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

NGNC – *New General National Congress*; Congreso General de la Nación (remanente)

NOC – *Libyan National Oil Corporation*

NRC – *Norwegian Refugee Council*

NSG – *National Salvation Government*; Gobierno de Salvación Nacional

NTC – *National Transitional Council*; Consejo Nacional de Transición

OACDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OCAH – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (u OCHA según sus siglas en inglés)

OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (u OECD según sus siglas en inglés)

OCI – Organización para la Cooperación Islámica (u OIC según sus siglas en inglés)

OIM – Organización Internacional para las Migraciones (o IOM según sus siglas en inglés)

OMS – Organización Mundial de la Salud (o WHO según sus siglas en inglés)

ONGs – Organizaciones No Gubernamentales (o NGOs según sus siglas en inglés)

ONU – Organización de las Naciones Unidas (o UNO según sus siglas en inglés)

ONU-HABITAT – Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (*UN-Habitat*)

ONU Mujeres – La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (*UN Women*)

OPAQ – Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (o OPCW según sus siglas en inglés)

OP-CRC-AC – *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

OTAN – Organización del Tratado del Atlántico Norte (o NATO según sus siglas en inglés)

OUA – Organización para la Unidad Africana (desde 2002: UA; OAU según sus siglas en inglés)

PC – *Presidential Council*

PCSD – Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (o CSDP según sus siglas en inglés)

PFG – *Petroleum Facilities Guard*

PIDCP – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (o ICCPR según sus siglas en inglés)

PIDESC – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (o ICESCR según sus siglas en inglés)

PIL – *Political Isolation Law*; Ley de Aislamiento Político

PMA – Programa Mundial de Alimentos (o WFP según sus siglas en inglés)

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (o UNDP según sus siglas en inglés)

PSUA – Partido Socialista Unificado de Alemania (o SED según sus siglas en alemán)

R2P – *Responsibility to Protect*; Responsabilidad de Proteger

RDA – República Democrática Alemana (o DDR según sus siglas en alemán)

ROAS – *Regional Office for the Arab States*; Oficina Regional de los Estados Árabes

RZhD – *Rossiskiye zheleznye dorogi*; Ferrocarriles Rusos

SARRED – *International Conference on the Plight of Refugees, Returnees and Displaced Persons in Southern Africa*; Conferencia internacional sobre la difícil situación de los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas en el África meridional

SAS – *Special Air Service*; Servicio Aéreo Especial

SCBR – *Shura Council of Benghazi Revolutionaries*; Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Bengasi

SDG – *Sustainable Development Goals*; Objetivos de Desarrollo Sostenible

Shelter and NFI – *Shelter and non-food-items*; materiales para refugio y no alimentarios

SIPRI – *Stockholm International Peace Research Institute*

SPC – *Senior Policy Committee*; Comité Superior de Políticas

SRSG – *Special Representative of the Secretary-General*; Representante Especial del Secretario General

SSC – *Supreme Security Committee*; Comité Supremo de Seguridad

STACO – *Shaikh Taher Azzawi Charity Organization*

UA – Unión Africana (o AU según sus siglas en inglés)

UCDP – *Uppsala Conflict Data Program*

UE – Unión Europea (o EU según sus siglas en inglés)

UNCAT – *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

UNCCSF – *UN Common Country Strategic Framework*

UNCT – *United Nations Country Team*; Equipo de las Naciones Unidas en el País

UNICEF – *United Nations International Children's Emergency Fund*; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNSMIL – *United Nations Support Mission in Libya*; Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia

URSS – Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (o USSR según sus siglas en inglés)

WASH – *Water, Sanitation & Hygiene*; Agua, Saneamiento e Higiene

A. Introducción

Desde finales de los años ochenta, la crisis global del desplazamiento interno se ha convertido en una de las mayores tragedias humanas de nuestro tiempo. También ha conllevado un desafío sin precedentes para la comunidad internacional a encontrar medidas efectivas para responder adecuadamente a lo que en esencia es una crisis nacional. A finales de 2016, unas 40,3 millones de personas a nivel mundial se encontraron en situaciones de desplazamiento interno como resultado de conflictos armados, violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Desde el año 2000, este número casi se ha duplicado y ha incrementado considerablemente en los últimos cinco años. Tanto en intensidad como en alcance, la gravedad del problema es evidente por el número de *internally displaced persons* (IDP por sus siglas en inglés) y por el hecho de que prácticamente ninguna región del mundo está a salvo de este problema. Para las víctimas es particularmente traumático, dado que se ven enfrentadas a humillación física, social y psicológica, así como a la discriminación y exclusión por diversos motivos. Si encuentran refugio en campamentos, o se instalan en comunidades frecuentemente también devastadas, el desplazamiento interno casi siempre tiene efectos radicales en familias enteras, la economía, educación, atención médica, estabilidad política y la situación general de seguridad en una sociedad. Dado que este grupo de personas frecuentemente carece de protección por parte del Estado, están expuestas a violencia y explotación y muchas veces no tienen acceso regular a alimentos, refugio seguro y medicinas. Por las dinámicas que conlleva, el desplazamiento interno no sólo causa inestabilidad nacional, sino también puede traspasar fronteras y alterar la estabilidad externa y regional. Por lo tanto, en lo que concierne a la comunidad internacional, existe una necesidad acuciante de reforzar su apoyo a los países afectados con el fin de ayudar y proteger a las poblaciones desplazadas.

Cabe señalar que la necesidad urgente de proteger a las IDP es, en gran medida, una cuestión de protección de los derechos humanos. La asistencia humanitaria y las actividades de protección tradicionalmente han sido consideradas de manera diferenciada; pero a lo largo de los años, las Naciones Unidas han estado intentando dar tanto énfasis al aspecto humanitario del problema como a su elemento de los derechos humanos. Los vastos esfuerzos para incluir activamente a los desplazados internos, especialmente por parte de ONGs locales y regionales, han contribuido a sensibilizar sobre el problema del desplazamiento interno a nivel mundial y en particular en la Comisión de Derechos Humanos¹. Cabe mencionar dos conferencias internacionales importantes que se centraron en las cuestiones relacionadas con los refugiados e IDP. La primera, llamada Conferencia internacional sobre la difícil situación de los refugiados,

¹ UN, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, E/CN.4/RES/2003/51, 23.04.2003.

los repatriados y las personas desplazadas en el África meridional (SARRED)², tuvo lugar en Oslo en 1988, seguida por la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) en 1989 en la Ciudad de Guatemala³. En 1991, la Comisión de Derechos Humanos encomendó al Secretario General la elaboración de un informe analítico sobre las IDP (Deng 1993: 149). Este importante informe llevó a un compromiso mucho más firme de las Naciones Unidas con el asunto, lo que, entre otros, condujo al nombramiento del sudanés del sur Francis Mading Deng como primer Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos en 1992. Una de sus primeras tareas incluyó el análisis integral del marco normativo de protección para las IDP que en 1998 resultó en la formulación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Otra misión clave del mandato abarca la revisión del marco institucional existente y buscar medios para mejorar el funcionamiento y la coordinación entre las diversas agencias de las Naciones Unidas. El último aspecto del mandato consiste en visitas *in situ* con el fin de documentar las diferentes situaciones de desplazamiento interno, sensibilizar sobre el problema y los peligros que conlleva, y reunirse con representantes de los gobiernos en cuestión con el fin de analizar vías y medios para mejorar la situación de las IDP. En este contexto, conviene realzar que por lo general los gobiernos que se muestran menos dispuestos a colaborar con el Representante son también los que están involucrados en las crisis o incluso son causantes de desplazamiento interno⁴. No obstante, pese a su papel principalmente promotor, el mandato desempeña funciones importantes, sobre todo en el ámbito de la concienciación y el fomento de los derechos de los desplazados. Debido a un mayor enfoque en los derechos humanos, en 2010, por lo tanto, fue renombrado en Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos. Desde que la cuestión del desplazamiento interno mereció por primera vez a la atención de la ONU, la comunidad internacional ha estado buscando medidas eficaces para hacer frente a este desafío. A lo largo del tiempo, muchas organizaciones intergubernamentales y ONGs han ampliado sus mandatos y actividades humanitarias para los refugiados con el fin de poder cubrir también las necesidades de las IDP. Asimismo, se ha reconocido que suministrar protección y apoyo a poblaciones afectadas que se encuentran dentro de un determinado territorio nacional sí son responsabilidad principal del correspondiente Estado, de acuerdo con el concepto de la soberanía estatal, pero cuando éste no pueda o quiera cumplirla, corresponde a la comunidad internacional ofrecer asistencia.

El presente estudio brinda propuestas necesarias para resolver las carencias todavía existentes en las normas jurídicas vigentes para las IDP. Basado en un amplio análisis y la

² UN, General Assembly, "International Conference on the Plight of Refugees, Returnees and Displaced Persons in Southern Africa (SARRED): Report of the Secretary-General", 19.10.1988.

³ ONU, "Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)", abril 1989.

⁴ UN, Commission on Human Rights, E/CN.4/RES/1997/39, 11.04.1997.

evaluación exhaustiva de una gran cantidad de literatura diversa al respecto, en la primera parte de la presente tesis se hará hincapié en que la garantía de la protección debe ser un elemento central de la respuesta internacional y que la asistencia debe brindarse de manera integral al reunir componentes humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo de las Naciones Unidas. Asimismo, demostrará la importancia de buscar soluciones políticas a los conflictos y de impedir la aparición de condiciones que generan el desplazamiento. Con respecto a las operaciones de mantenimiento de la paz, la experiencia ha demostrado que las Naciones Unidas instan cada vez más a adoptar un enfoque integral centrado no sólo en el mantenimiento de la paz, sino también en la protección a la población civil, la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos, la facilitación de la asistencia humanitaria y la promoción de soluciones duraderas, que incluyen tanto la reintegración y el desarrollo como la transición a un Estado de derecho. La implementación de estos mandatos multidimensionales claramente constituye un desafío enorme para las Naciones Unidas, y es evidentemente que no podrán abordarlo sin el firme compromiso y apoyo por parte de la comunidad mundial y sobre todo de los Estados afectados. También requiere una serie de reformas exhaustivas a distintos niveles, tal como serán detalladas en esta tesis.

Como lo demostrará el estudio del caso de Libia a partir de la segunda parte de la tesis, desde su inicio en 2011, la crisis humanitaria se ha caracterizado por complejas dimensiones de desplazamiento y movilidad. Aunque los efectos de los masivos flujos migratorios sobre todo de africanos subsaharianos a través de Libia sea el aspecto más divulgado a nivel internacional y más presente en la percepción pública, el desplazamiento interno de cientos de miles de libios como resultado de los diversos brotes de conflicto en el país no es un asunto menos preocupante. En el punto álgido del conflicto, al menos medio millón de personas habían sido desplazadas de sus hogares, de las que muchas sufrían múltiples desplazamientos y numerosas siguen encontrándose en situaciones prolongadas de desplazamiento durante más de seis años. Si bien la mayoría de las IDP en Libia está alojada en viviendas privadas, se ven afectadas desproporcionadamente por los problemas sociales, políticos y económicos a los que se enfrenta el país, incluida la escasez de efectivo como resultado de las restricciones de liquidez, carencias de alimentos básicos, artículos esenciales en el mercado, el acceso irregular a servicios médicos y oportunidades de empleo, así como frecuentes cortes en el suministro de electricidad y en las redes de telecomunicación. Los problemas continuos de seguridad en el país también siguen siendo un desafío enorme para los agentes humanitarios que dependen mucho de la obtención de datos precisos y oportunos para la organización y el suministro efectivo de la asistencia humanitaria.

Esta tesis proporciona un análisis exhaustivo de la evolución del desplazamiento forzado en Libia desde 2011 con el fin de contribuir a una comprensión mejor de sus complejas dimensiones, así como del diseño de respuestas y soluciones inmediatas y duraderas basadas en pruebas para las poblaciones más vulnerables del país. Ciertamente, para obtener una visión completa de la crisis humanitaria en Libia, es crucial entender los orígenes del conflicto que han llevado a la actual situación de desplazamiento prolongado. Por lo tanto, como segundo tema central, en el marco de esta tesis se analizarán los orígenes de los primeros levantamientos que ocasionaron protestas masivas contra el régimen de Muamar el Gadafi en el contexto de la Primavera Árabe en 2011, la Revolución del 17 de febrero y la posterior intervención militar dirigida por la OTAN. Al evaluar la intervención en Libia desde una perspectiva jurídica y de sus principios, se plantean dos cuestiones principales: (1) ¿se atuvieron los Estados intervinientes a los límites impuestos por la Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Y (2) ¿fue la resolución realmente conforme con el derecho internacional? Es decir, con su adopción ¿el Consejo de Seguridad se mantuvo dentro de los límites legales a los que debe sujetarse de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas?

Como se mostrará en el marco de la investigación, los poderes intervinientes rápidamente sobrepasaron los límites establecidos por la Resolución 1973. Cabe realzar que el Consejo de Seguridad autorizó un ataque militar únicamente con el fin de proteger a los civiles y para imponer una zona de exclusión aérea⁵, pero no para derrocar al régimen de Gadafi. Sólo poco después del inicio del bombardeo, tanto el gobierno francés como británico y estadounidense declararon públicamente que la intervención no terminaría sin el derrocamiento de Gadafi. En este contexto tenemos que tener en cuenta que la realización de un propósito principal legítimo no se puede considerar ilícito por el mero hecho de que sus protagonistas aspiran a un objetivo secundario (supuestamente legal también). Pero naturalmente, este objetivo secundario no autorizado no debe perseguirse mediante el empleo independiente de la violencia. No obstante, es lo que sucedió en Libia desde el principio, como lo demuestra el bombardeo dirigido contra numerosos objetivos de carácter civil a los que se atribuyó importancia funcional y/o estratégica en relación con la caída de Gadafi, como por ejemplo el edificio de una emisora de televisión, instituciones de infraestructuras civiles y la casa residencial de uno de los hijos de Gadafi. Además, cabe mencionar que tanto la OTAN como los revolucionarios rechazaron de manera intransigente varias ofertas de alto el fuego por parte de Gadafi y cualquier esfuerzo diplomático por intermediarios externos, como por ejemplo del antiguo presidente venezolano Hugo Chávez. A lo largo de esta tesis, se comprobará que en el marco del mandato de proteger a los civiles libios, en particular de la pérdida de sus vidas, la OTAN habría estado obligada

⁵ ONU, Consejo de Seguridad, “Resolución 1973 (2011)”, S/RES/1973 (2011), 17.03.2011, párr. 4, 17.

incondicionalmente a aprovechar este tipo de oportunidades de armisticio. El uso exclusivo de la fuerza no era compatible con la Resolución 1973. Tal es particularmente el caso de los bombardeos continuos durante varias semanas después de que la victoria militar de los rebeldes ya había sido conseguida. Por lo tanto, es de suponer que este “procedimiento” les costaba a miles de libios la vida cuya protección oficialmente era la misión de la OTAN.

Especialmente en lo que respecta al criterio de la adecuación de la intervención, el balance de Libia tras la intervención militar demuestra ser catastrófico en todo sentido: entre 25.000 y 50.000 muertos, un país totalmente destruido, una sociedad completamente dividida, una guerra civil continua, y la deslegitimación persistente de la norma internacional emergente de la *Responsibility to Protect* por su abuso masivo. El hecho de que Gadafi ciertamente era un déspota responsable de numerosos crímenes graves a lo largo de su régimen dictatorial, no cambia esta consecuencia.

En este contexto, una vez más cabe recurrir al fracaso considerable del Consejo de Seguridad. La autorización por la Resolución 1973 de adoptar “todas las medidas necesarias para proteger a los civiles”, incluida la fuerza militar, permitió dos líneas de acción extraordinariamente indeterminadas. Su aplicación en cuanto a la forma y el alcance del uso de la fuerza dependió exclusivamente de la arbitrariedad subjetiva de las potencias que intervinieron. Por lo tanto, y como se intentará demostrar detalladamente en lo sucesivo, el Consejo prácticamente dejó cualquier control en manos de los intervinientes y su posible autoempoderamiento en cuanto al empleo de la violencia. No limitó el marco temporal de la intervención y tampoco sometió su realización a una supervisión independiente. Además, tres de las potencias intervinientes tienen poder de veto, por lo que tras la autorización de la guerra por el Consejo de Seguridad cualquier influencia adicional en su desarrollo prácticamente estaba descartada. Más bien se puede resumir que el Consejo declaró a un Estado miembro de las Naciones Unidas como “forajido” y lo expuso al uso de la fuerza por cualquier otro Estado dispuesto a intervenir, mediante el empleo de cualquier forma de violencia que consideraba oportuno.

Como se presentará en detalle, en 1969 el coronel Gadafi se convirtió en el líder de una de las naciones más pobres de África; no obstante, cuando fue asesinado, Gadafi había convertido a Libia en el país más rico del continente. Libia tenía el PIB per cápita más alto, la mayor esperanza de vida, la menor tasa de mortalidad infantil en toda África, y había menos personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza que en los Países Bajos (Cramer, 04.05.2011). Pero desde la intervención por la OTAN en 2011, Libia se ha convertido en un Estado fallido con su economía y producción petrolera en ruinas.

La caída del régimen de Gadafi ha causado los peores escenarios posibles: la anarquía predomina a nivel nacional, el sur del país se ha convertido en un refugio para terroristas amenazando

también la seguridad territorial de Egipto, Túnez y Argelia; casi todo el personal extranjero, incluido de las embajadas y hospitales, abandonó el país; y la costa norte es un núcleo del tráfico ilícito de migrantes. Todo esto ocurre en un contexto de violencia generalizada, asesinatos y tortura lo que completan la imagen de un Estado destrozado totalmente.

Tal como será discutido en la presente tesis, quizás el ‘mayor’ crimen que cometió Gadafi, por lo menos a los ojos de la OTAN, fue su pretensión de poner los intereses nacionales por encima del capital extranjero, así como sus esfuerzos intensos hacia la fuerte institucionalización de los Estados Unidos de África. De hecho, en agosto de 2011, el antiguo presidente estadounidense Obama confiscó unos USD 30 de billones del Banco Central de Libia que Gadafi había planificado utilizar para el fomento del Banco Central de África y el establecimiento del denominado dinar de oro, una moneda pan-africana (Curtin, 27.07.2016). Se puede suponer que en 2011, el objetivo de Occidente claramente no era ayudar al pueblo libio, que ya tenía el nivel de vida más alto en toda África, sino derrocar a Gadafi, instalar un régimen títere en el país, y asumir el control sobre los recursos naturales de Libia. Está fuera de duda que Gadafi era un líder despótico que a lo largo de los cuarenta y dos años de su régimen estableció un sistema totalitario y discriminatorio que solamente apoyó a lealistas. Pero no obstante, hay que reconocer que Gadafi logró promover la economía libia al haber nacionalizado la producción petrolera y sostenido programas progresivos de bienestar social para el pueblo. Bajo su régimen, Libia gozó de atención médica, educación y electricidad gratuitas, así como de préstamos sin intereses. Hoy en día, ‘gracias a’ la intervención de la OTAN, el sector de la salud está al borde del colapso, lo que se debe sobre todo a la situación precaria de seguridad y luchas continuas en diferentes regiones. Numerosas instituciones de la educación superior han cerrado sus puertas varias veces por tiempo indefinido, entre ellas la Universidad de Bengasi, la Universidad de Azzawia, la Universidad de Sirte y la Universidad de Trípoli⁶. No obstante, la OTAN denominó la misión como “una de las más exitosas operaciones en la historia de la Alianza”⁷.

Tanto Afganistán como Irak, Libia y Siria han sido atacados por los EE.UU. y sus aliados. En este contexto, cabe mencionar que estos países tenían algo muy importante en común: todos tenían gobiernos soberanos nacionalistas seculares con lazos establecidos desde hacía mucho tiempo con la antigua Unión Soviética. Con el fin de proteger sus economías contra actividades depredadoras por parte de Occidente, estaban necesariamente controladas por el Estado. Pero tales sistemas no corresponden con las ideas occidentales de un denominado mercado abierto y las políticas de libre comercio. Se puede concluir que las intervenciones del Oeste en estos casos concretos no han causado más que fracasos de impacto indescriptible.

⁶ Libyan Organization Of Policies & Strategies, *The Reality of Higher Education in Libya*, May 2016, p. 16.

⁷ Deutsche Welle, “La OTAN sale de Libia: ¿misión cumplida?”, 31.10.2011.

Enfrentado a las consecuencias devastadoras de la intromisión violenta internacional en los asuntos internos de Libia, hoy en día, la polarización en el país nunca ha sido más intensa que desde el estallido de los disturbios en 2011. La Revolución del 17 de febrero no sólo llevó a la caída del antiguo régimen, sino también a la división de la sociedad. La primera escisión que se produjo gravemente por los levantamientos fue entre los simpatizantes del régimen de Gadafi y los revolucionarios que lideraron la rebelión contra Gadafi. Las prisiones secretas y la tortura contra partidarios del régimen se han convertido en uno de los atributos más destacados de la Libia actual. La posterior fragmentación de los revolucionarios ha conllevado un efecto de impacto particular. Los revolucionarios que prevalecieron sobre Gadafi se han dividido en cientos de milicias independientes repartidas por todo el país, con cada una de ellas intentando dominar su propio territorio y entrando rápidamente en conflicto entre sí. En mayo de 2014, las luchas alcanzaron niveles sin precedentes, cuando el general retirado Jalifa Haftar formó una coalición y lanzó la campaña militar *Operation Dignity* para eliminar a los islamistas de la escena política de Libia. Los revolucionarios a su vez formaron una alianza en contra, llamada *Libya Dawn* o *Fajr Libya*, con el fin de derrotar a Haftar y sus aliados. Este enfrentamiento sucesivamente exacerbó la división estructural del país que culminó en la formación de dos parlamentos: por un lado el Congreso General de la Nación (CGN; en inglés: *General National Congress*; GNC), seguido por el *New General National Congress* (NGNC; el ‘nuevo parlamento de Libia’, autoproclamado por ex políticos del GNC) en el oeste del país que apoya a *Libya Dawn*, y por otro lado la Cámara de Representantes (en inglés: *House of Representatives*; HoR), que apoya a Haftar y su *Operation Dignity*. A consecuencia, también se formaron dos gobiernos, uno respaldando *Libya Dawn* y otro respaldando *Operation Dignity*. El levantamiento también ha causado escisiones entre ciudades y tribus que en su momento apoyaban o se oponían a la revolución; hoy en día, algunas tribus apoyan a Haftar, mientras que otras respaldan partidos y milicias islamistas. La división estructural también se revela significativamente en el discurso nacional: por la revolución libia se califica a ciudades y tribus enteras como *azlam* (“secuaces”, es decir, partidarios del régimen) y los demás como *thuwar* (“victoriosos”, es decir, revolucionarios en contra de Gadafi). Por supuesto, a los *azlam* se asocia con la vergüenza y desgracia, mientras que los “victoriosos” son considerados honorables (cf. Sharquieh 2013: 18).

Sólo en diciembre de 2015, y tras la mediación por la ONU, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo sobre un *Government of National Accord* (GNA), es decir, un gobierno de unidad bajo el primer ministro Fayez al-Serraj. El acuerdo de paz, denominado *Libyan Political Agreement* (LPA), fue firmado en Skhirat, Marruecos. El LPA otorga poder ejecutivo al GNA, mientras que la HoR sigue manteniendo la autoridad legislativa, a consecuencia de las elecciones en junio de 2014. El *Agreement* fue respaldado unánimemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas que acogió con satisfacción la formación del nuevo gobierno y reconoció al GNA como único gobierno legítimo de Libia. No obstante, el Consejo de Favez al-Serraj no cuenta con amplio apoyo y su zona de influencia apenas va más allá del territorio de Trípoli.

Estos acontecimientos caóticos hacen evidente que el proceso de transición que sigue al cambio de régimen es intrínsecamente complejo y puede influir el resurgimiento de problemas antiguos, a veces casi olvidados. Además, cambios apresurados en una sociedad que se ha estancado considerablemente durante décadas, debido a la falta de reformas sustanciales, a menudo generan nuevos retos y preocupaciones. Estos aspectos pueden ser muy polémicos, lo que intensifica la escisión de la sociedad en lugar de fomentar un sentido de unidad después de la caída de su régimen dictatorial. Este es particularmente el caso en Libia, donde el conflicto que derrocó a Gadafi causó al menos un millón de refugiados y desplazados internos, un número equivalente a una sexta parte de la población libia. Además, la guerra civil desde 2014 probablemente se ha convertido en el obstáculo más serio para una transición pacífica.

Pese a todo, la polarización tras el cambio violento del antiguo régimen no es una fatalidad ineluctable. Por lo tanto, se argumentará que con el fin de lograr una transición exitosa desde la agitación masiva en el marco de la Primavera Árabe a una paz y estabilidad sostenibles, Libia tendrá que comprometerse a una reconciliación nacional inclusiva e integral a fin de evitar el estallido de nuevos conflictos civiles y políticos, y recuperar la unidad nacional. Emprender un proceso de cambio sostenible ayudará a mantener unida a la sociedad y a enfocarse en la superación de los enormes desafíos causados por las transiciones políticas.

Como se intentará demostrar en el tercer tema principal de investigación en el marco de la tercera parte de esta tesis, la reconciliación nacional será el camino más importante para poder abordar adecuadamente los problemas y reclamaciones de las víctimas del conflicto y satisfacer sus necesidades. Un problema particularmente acuciante en el país es la necesidad de establecer el Estado de derecho, dado que la reconciliación nacional no podrá lograrse en un estado de caos. Como explicó el antiguo Ministro de Justicia del GNC, Salah al-Marghani, construir un Estado y establecer el Estado de derecho constituyen requisitos previos para un proceso de reconciliación nacional. El orden público garantiza la aplicación de los acuerdos alcanzados a través del diálogo y la reconciliación (Sharquieh 2013: 5).

En lo que concierne al deseo de la mayoría de los refugiados e IDP de retornar a sus hogares, el Estado tendrá que impedir represalias y asegurar su protección y seguridad. Sin la reconstrucción de un Estado unificado y operativo, este proceso de reconciliación, que también debe incluir el aspecto fundamental del reasentamiento, no puede avanzar.

Sin embargo, es evidente que en una sociedad tan profundamente escindida como Libia, una gran parte de las víctimas de los abusos y atrocidades rechaza la idea de la reconciliación, ya que sin autoridades e instituciones transparentes, muchos libios no confían en el tratamiento jurídico con el pasado y una rendición de cuentas por los crímenes del pasado de manera equitativa. Por consiguiente, es necesario que en una sociedad en transición desde una dictadura a una paz estable, un proceso de reconciliación nacional efectivo debe incluir un diálogo nacional entre las partes principales del conflicto, incluidas las víctimas, y revelar la verdad de lo que realmente sucedió en el pasado, tanto bajo el régimen de Gadafi como en el curso de la Revolución del 17 de febrero, la intervención militar por la OTAN y la guerra civil desde 2014. Otras medidas imprescindibles deben incluir reformas de las instituciones estatales, indemnizaciones para las víctimas y la responsabilización de los funcionarios del antiguo régimen por sus actos.

Sin duda, la reconciliación no logrará resarcir por completo las heridas profundas del pasado, pero puede prevenir que se conviertan en los factores determinantes en las relaciones de las diferentes facciones y del futuro del país. Si las partes beligerantes no se unen para abordar el pasado y colaborar activamente con el fin de construir una nueva Libia para sus ciudadanos, los levantamientos de la Primavera Árabe sólo reemplazarán a la dictadura derrocada por nuevos sistemas opresivos. En 2013, fue exactamente lo que surgió en el contexto libio: los revolucionarios que dominaron el Estado en aquel entonces excluyeron a todos los funcionarios del antiguo sistema a través de la adopción de la Ley de Aislamiento Político que impide a todas las personas que colaboraron con el régimen de Gadafi a ocupar un cargo gubernamental durante un periodo de diez años. Pero en cambio, hay que señalar que algunos grupos revolucionarios y milicias a su vez, han cometido atrocidades similares a las del antiguo régimen, que de acuerdo con ONGs de derechos humanos incluso pueden considerarse como crímenes de guerra. Por ende, un proceso de reconciliación nacional tendrá que abarcar estos y muchos otros asuntos complejos, aunque esta cuestión escapa al objeto de nuestra investigación.

Libia tiene que hacer frente a una amplia gama de desafíos, pero ante todo necesita desarrollar un fundamento inclusivo con el que todo el pueblo libio podrá identificarse. Como se tratará de demostrar en detalle, un proceso de reconciliación nacional integrador será la mejor manera para poder lograr este fin.

B. Estructura de la tesis y objetivos

La presente tesis doctoral está dividida en tres secciones principales de las que cada una trata temas de investigación con ejes temáticos distintos, aunque interrelacionados. La **parte I** ofrece una revisión concisa acerca de la situación actual de las IDP a nivel global y los retos a los que se está enfrentando la comunidad internacional con respecto al apoyo humanitario para este grupo de personas. Se hipotetiza que existen lagunas jurídicas en el derecho internacional en cuanto a la protección de las IDP: por un lado, se presentan los estatutos legales diferentes de los desplazados internos en comparación con los refugiados transfronterizos (capítulos 2), y por otro lado las debilidades más destacadas dentro de las Naciones Unidas, tanto en cuanto a las responsabilidades de sus órganos como en cuanto al contexto específico de una crisis humanitaria determinada (capítulos 3). A continuación serán presentados los agentes tradicionalmente más relevantes en el sistema de protección para las IDP y se ofrecerá una visión de conjunto sucinta del *Cluster Approach* y del *Global Protection Cluster*, un concepto fundamental en la provisión de la asistencia humanitaria internacional cuya aplicación en el contexto libio será tratada más profundamente en la parte III (capítulos 4). Asimismo, se llevará a cabo un análisis extenso sobre el desplazamiento interno en la agenda humanitaria, así como del significado de la soberanía estatal con respecto al suministro de ayuda en crisis humanitarias por parte de la comunidad internacional. También se hará una primera introducción al concepto de la *Responsibility to Protect* y la cuestión sobre los criterios fundamentales a los que se recurre para justificar legalmente una intervención humanitaria (capítulos 5 y 6). Debido a la falta de convenciones jurídicamente vinculantes en cuanto a la protección y seguridad de las IDP, es evidente la importancia de enfoques globales que abordan todo tipo de cuestiones relacionadas con el desplazamiento interno. A este respecto, será planteado el desarrollo y contenido de los *Guiding Principles on Internal Displacement*, que, basados en el análisis de una compilación de normas existentes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constituyen el documento más integral que establece un estándar mínimo para el trato de las IDP (capítulos 7). En el marco del análisis subsiguiente, se descubrirán numerosos campos que requieren de reformas para poder suministrar el apoyo humanitario a las IDP de forma eficaz y duradera. En este aspecto, también cabe mencionar el *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* que ofrece orientación y numerosas directrices para los agentes humanitarios en el lanzamiento de sus misiones y actividades, con el fin de poder garantizar medidas adecuadas de seguridad y protección *in situ* para los desplazados (capítulos 8). Asimismo, será mostrada la necesidad de reestructuraciones internas de las Naciones Unidas y diversas oportunidades de cambio desde un punto de vista antropológico organizacional (capítulos 9), seguido por un resumen conclusivo de los resultados (capítulo 10). El objetivo de este primer estudio es ofrecer

una perspectiva amplia a problemas presentes y futuros, y en consecuencia demostrar las oportunidades de cambio dentro del sistema de protección de las Naciones Unidas para poder mejorar de forma integral la respuesta al desplazamiento interno a nivel mundial.

Tras haber realizado un análisis teórico sobre la situación jurídica general de las IDP, los retos que conllevan las crisis humanitarias y la propuesta de posibles reformas dentro del sistema de protección, la **parte II** de la tesis se enfocará en el estudio científico de un caso concreto y en la cuestión sobre la legalidad y legitimidad de las intervenciones humanitarias a partir de los orígenes de la crisis humanitaria en Libia: mediante informes, estadísticas y literatura diversa al respecto, se llevará a cabo un análisis sobre las normas vigentes en las relaciones internacionales, el desarrollo de una obligación normativa internacional de protección e intervención humanitaria (*Responsibility to Protect*), los criterios de evaluación de una intervención humanitaria (*just cause*), la motivación tras una intervención, y el significado del concepto del neorrealismo a este respecto (capítulos 1). En un segundo paso se aclarará la condición peculiar de Libia en el contexto de la Primavera Árabe al proporcionar informaciones claves sobre sus particularidades nacionales y antecedentes históricos que contribuyeron significativamente a la adopción extraordinariamente rápida de las Resoluciones 1970 y 1973 (2011) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (capítulos 2). A continuación se evaluará la adecuación de la intervención en Libia y se analizarán los criterios pertinentes para determinar la legitimidad de la intervención (capítulos 3). Asimismo, será de interés fundamental aclarar el papel de las potencias principales de la intervención militar, la relevancia de intereses geoestratégicos, de la política económica, y posibles causas de la guerra más allá de los motivos oficiales que se originaban todavía en el régimen de Gadafi y sus esfuerzos independentistas del capitalismo occidental. En este contexto, también se analizará críticamente el papel de los grandes medios de comunicación en cuanto a la justificación ‘moral’ de la intervención en Libia, la motivación de los rebeldes y del Consejo Nacional de Transición, y el impacto en los fundamentos del derecho internacional que conlleva la ejecución extrajudicial de Gadafi y su aprobación generalizada por Occidente (capítulos 4, 5 y 6).

Con respecto a la intervención militar de la OTAN, resulta que no sólo causó la muerte de miles de civiles, sino también una crisis humanitaria y grave destrucción que han desembocado en la desestabilización de Libia hacia un estado de caos con una escalada de violencia sin precedentes, lo que también implica repercusiones negativas para los países vecinos y toda la comunidad internacional. Frente a la situación compleja de un Estado fallido encontrándose en una crisis humanitaria continua, el aspecto del apoyo humanitario por parte de la comunidad internacional es cada vez más importante. Será de interés fundamental comparar el sistema internacional de protección para las IDP investigado teóricamente en la primera parte de la tesis y examinar la

aplicación del apoyo humanitario en el caso real de Libia. En atención a ello, la **parte III** de la presente tesis se centrará en la presentación y el análisis integral respecto a la situación de las IDP y refugiados libios (capítulos 1), así como en los retos relacionados con su protección y las medidas de ayuda tomadas hasta el momento. En este sentido, constituye un tema central el significado de la justicia transicional y de la reconciliación nacional como parámetros de transición frente a una sociedad profundamente escindida, tal como demuestra el caso libio (capítulos 2). Con el fin de poder clasificar los acontecimientos bélicos y entender la crisis humanitaria en el marco de los primeros levantamientos y el estallido de la guerra civil en 2014, serán resumidos en orden cronológico los sucesos más destacados desde 2011 (capítulo 3), y explicados exhaustivamente los motivos de las facciones beligerantes más importantes, así como los retos políticos que conllevan las luchas continuas del poder frente a la crisis del desplazamiento interno y la anarquía en el país (capítulos 4). En este contexto será examinada detalladamente la situación del desplazamiento forzado de los tawerghanos, que, debido a su origen étnico subsahariano, su supuesta lealtad con Gadafi y acusaciones generalizadas de haber cometido crímenes de guerra contra la población civil de la ciudad de Misrata en 2011, sufren de manera particular bajo ataques arbitrarios, tortura, la negación de su personalidad jurídica, el no reconocimiento de su derecho a un juicio justo y de su derecho a viviendas. La destrucción total de su ciudad por milicias y rebeldes anti-Gadafi en el marco de los levantamientos armados en 2011, así como el desplazamiento continuo de esta minoría constituye un caso representativo para numerosos otros grupos étnicos excluidos de la sociedad, así como de la violencia arbitraria e impunidad que rigen el país desde la caída de Gadafi. Su marginación social y discriminación violenta no sólo asciende a un castigo colectivo legitimado por la postura pública, sino también a crímenes de guerra cometidos reiteradamente por milicias y otros grupos armados, lo que refleja la situación de emergencia de un sistema estatal paralizado a todos los niveles (capítulos 5). Ante la incapacidad de las autoridades libias de actuar y abordar sin ayuda exterior los problemas a los que se enfrenta el país y en particular los más necesitados, consecuentemente resulta fundamental analizar la aplicación de la ayuda humanitaria por las Naciones Unidas, ONGs, organismos internacionales, regionales y locales, y su coordinación con las autoridades nacionales. En este aspecto, serán abordados unos de los asuntos más destacados de preocupación, entre ellas algunas de las cuestiones más importantes relativas a las viviendas, tierras y propiedades, cuyo marco jurídico todavía se origina en el régimen de Gadafi. Su revisión histórica, así como su adaptación a las obligaciones de Libia del derecho internacional, a las normas internacionales de los derechos humanos, los *Guiding Principles on Internal Displacement* y los *Pinheiro Principles* serán factores claves hacia la implementación exitosa de un enfoque integral de desplazamiento y la elaboración de soluciones duraderas para las personas afectadas de desplazamiento y

expropiación en la historia reciente de Libia. La realización de reformas jurídicas con el apoyo internacional será imprescindible para poder abordar las incontables reclamaciones y demandas relativas a la restitución de bienes perdidos, y de esta manera asegurar el funcionamiento de un Estado de derecho, así como impulsar un desarrollo pacífico en el país y la formación de una sociedad unida (capítulos 6.1). Desde una perspectiva operativa, el concepto del *Global Protection Cluster* y su implementación en la crisis libia constituye otro tema central. Por lo tanto, será presentado el *Humanitarian Response Plan 2017* para Libia al aclarar sus prioridades esenciales y objetivos estratégicos. A continuación serán analizadas las actividades de las Naciones Unidas y sus asociados locales *in situ*, y señalados los diferentes ámbitos de intervención, así como alcances y límites de las numerosas misiones. En vista de la situación precaria particular de las personas desplazadas en el país y sus necesidades específicas, la cuestión sobre la falta de protección y seguridad física es de importancia primordial. Consecuentemente, se intentará demostrar que la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria internacional para Libia será indispensable (capítulos 6.2). La tesis concluirá con un resumen crítico de los principales resultados y perspectivas de futuro al respecto.

C. Justificación e interés del tema y otras cuestiones derivadas de la investigación

Partiendo de los enfoques anteriormente citados, se presentan los siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles de los órganos de las Naciones Unidas requieren una revisión de sus ámbitos de responsabilidad, y cómo se puede realizarla para poder ofrecerles a las IDP apoyo y protección suficientes frente al concepto de la soberanía estatal?
- ¿Cómo se constituyen los mandatos de los órganos de las Naciones Unidas, y de qué forma se podría ampliar el marco jurídico para poder garantizar una protección adecuada para los desplazados internos?
- Partiendo de la hipótesis de que generalmente tanto personas como Estados cumplen con normas en las tres condiciones de *coercion* (coerción), *consent* (consentimiento) y *self-interest* (interés propio), con respecto a la cuestión de la autoridad y la legitimidad del poder, estos aspectos son de impacto decisivo frente a los siguientes asuntos: ¿en qué circunstancias los actores se someten a las órdenes de los demás voluntariamente o mediante coerción?
- ¿En qué condiciones las órdenes son consideradas legítimas de forma inherente?
- ¿Cómo pueden los órganos de las Naciones Unidas apoyar a personas necesitadas de protección a través de intervenciones humanitarias, aunque, al estar sujetos a las decisiones

y el derecho de veto del Consejo de Seguridad carezcan del poder, la autoridad y la legitimidad para poder adoptar medidas necesarias?

- Si bien existe un marco jurídico considerable para la protección de las IDP, no obstante, en la práctica todavía no se ha logrado implementar un concepto de protección global. Por consiguiente, surgen las cuestiones ¿cuáles son las influencias externas que obligan a las organizaciones humanitarias a abordar cambios?
- ¿Qué efecto directo o indirecto tienen diferentes factores en sus actividades, su operatividad, eficacia y/o sus deficiencias?
- ¿De qué manera es posible impulsar reformas en las organizaciones humanitarias?
- En el marco de la intervención humanitaria de la comunidad internacional en Libia en 2011 han surgido numerosas dudas sobre las intenciones verdaderas de los Estados intervinientes. Por tanto, se plantean las siguientes preguntas: ¿violó el gobierno libio gravemente los derechos humanos e incluso planeó un genocidio, lo que habría justificado una intervención humanitaria?⁸
- ¿La intervención militar se llevó a cabo exclusivamente con el fin de proteger a la población civil, o de hecho existían otras intenciones vinculadas con intereses particulares estratégicos de los Estados intervinientes?
- Bajo “pretexto” de una intervención humanitaria ¿las Naciones Unidas, y sobre todo Occidente, aspiraban a imponer una victoria militar de los rebeldes con el fin de provocar un cambio de régimen?
- ¿Qué papel jugaron los intereses de los Estados intervinientes, principalmente de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos?
- Dado que Rusia y China posibilitaron la aprobación del mandato por su abstención en la votación en el Consejo de Seguridad, de igual manera se plantea la cuestión ¿en qué motivos se basó esta decisión?
- Frente al concepto de la Responsabilidad de Proteger surgen las siguientes cuestiones: ¿los Estados intervinientes se metieron en el conflicto libio a causa de su deber normativo para prevenir el sufrimiento humano?
- ¿Cumplieron con los requisitos previos indispensables para una intervención humanitaria, es decir, autoridad competente, causa justa, intención correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables?
- Desde un punto de vista neorrealista, la autonomía constituye un bien digno de protección para los Estados, dado que les proporciona una posición más poderosa dentro del sistema

⁸ De conformidad con la norma de la R2P, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe existir al menos una de las cuatro situaciones, o estar a punto de producirse, por lo que la comunidad internacional debe actuar de forma preventiva: el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.

internacional. Con el fin de poder mejorar o consolidar su posición de poder en el sistema internacional, ¿los Estados, sean unidades independientes o no, deben seguir estrategias defensivas u ofensivas?

- El Consejo de Seguridad autorizó a los Estados intervinientes a adoptar “todas las medidas necesarias” en cuanto a la aplicación de la fuerza militar. Este tenor conlleva una grave imprecisión de carácter confuso: ¿es el Consejo mismo el que determina lo que se considera “necesario”, o son las fuerzas armadas autorizadas a intervenir que tienen el poder decisorio?
- ¿Qué relevancia tenían los proyectos del *Great Man-Made-River* y del dinar de oro para el lanzamiento de la intervención militar dirigida por la OTAN?
- ¿Qué papel jugaron los grandes medios de comunicación en cuanto a la percepción pública y la justificación ‘moral’ de la intervención militar en Libia?
- Las políticas de Gadafi, caracterizadas por amplias redistribuciones y confiscaciones de propiedades, conllevaron cambios estructurales en la sociedad libia y continúan causando efecto hasta hoy día. Aunque las respectivas leyes de Gadafi, como la Ley No. 4 de 1978, han sido derogadas, sigue sin respuesta la cuestión ¿cómo deben los líderes de la nueva Libia abordar las consecuencias e impactos con el fin de poder restablecer el orden público y la paz social?
- La comunidad internacional se enfrenta al peligro de un caos destructivo originándose en el Magreb y la expansión del Estado Islámico. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer frente a esta amenaza aun sabiendo que Occidente, que conscientemente derrocó al régimen de Gadafi, ahora no es capaz de abordar los resultados y consecuencias desastrosos que ha conllevado su intervención?
- Ante las dimensiones extraordinariamente complejas de la crisis humanitaria en Libia son de importancia clave el apoyo y la asistencia internacionales, tanto en los ámbitos de desarrollo y de salud como a nivel político y jurídico. ¿En qué medida la comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, así como ONGs internacionales y regionales han podido suministrar la ayuda necesaria hasta la fecha? Y ¿cómo se ha aplicado el sistema de protección para los desplazados y el concepto del *Global Protection Cluster* en el país?

Son muchos los estudios que han abordado el tema del desplazamiento forzado y de los desafíos relacionados a los que se enfrenta la comunidad internacional. También son numerosos los estudios que plantean diferentes enfoques de cambios y reformas en cuanto al sistema internacional de protección para las IDP. Asimismo, las temáticas polémicas de la soberanía

estatal *versus* intervenciones humanitarias y una obligación moral de intervenir en situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos, así como la controversia sobre la implementación de la doctrina de la *Responsibility to Protect* han sido analizadas exhaustivamente. Sin embargo, existen muy pocos trabajos académicos que hayan investigado el vínculo entre los levantamientos armados en el marco de la Primavera Árabe y las crisis del desplazamiento forzado en los países afectados.

El entorno en el que se ha producido la crisis humanitaria en Libia puede describirse como una de las zonas más conflictivas y a la vez más ignoradas del mundo. Desde 2011, sin duda pertenece a los conflictos armados más graves y violentos de las últimas décadas, pero en relación con su impacto, en la percepción pública su alcance parece casi intrascendente. Las continuas tragedias ocurren de manera aislada del mundo exterior y de la preocupación internacional. El debate político y los llamamientos a respetar los derechos humanos se destinan principalmente a la situación dramática de los incontables refugiados transfronterizos en Libia, mayoritariamente de origen subsahariano, y a la contención del tráfico ilícito de migrantes por el Mediterráneo. Es la desesperanza de estos refugiados, sufriendo el infierno en Libia al estar expuestos a la arbitrariedad de milicias y traficantes de personas, que ha despertado el conocimiento público y nos obliga a actuar y tomar medidas. No obstante, la dimensión del sufrimiento de los propios desplazados libios todavía no ha alcanzado nuestra conciencia colectiva. Por lo tanto, prácticamente no existe ningún estudio detallado que se dedica de manera integral a la crisis humanitaria en Libia desde el punto de vista del desplazamiento interno desencadenado masivamente por una transición política precipitada tras la intervención militar por la OTAN en 2011, el derrocamiento y la ejecución extrajudicial de Gadafi, y el estallido de la guerra civil en 2014. Asimismo, la implementación del sistema de protección internacional para las personas desplazadas en este caso concreto constituye terreno casi desconocido.

En cuanto al estado de la cuestión, hay que señalar que no existen estudios académicos que combinen los siguientes aspectos interrelacionados:

- la ilegitimidad de la intervención militar con la crisis del desplazamiento forzado y en particular del desplazamiento interno,
- un análisis crítico del concepto de la R2P y de los crímenes de guerra cometidos desde 2011 por todas las partes beligerantes involucradas en el conflicto (la ONU, Occidente, rebeldes, milicias, etc.), así como
- un análisis exhaustivo de la transición política,
- la aplicación del sistema de protección para las personas desplazadas en el caso concreto de Libia desde el comienzo de la crisis humanitaria tras la Revolución del 17 de febrero, y

- los desafíos y responsabilidades, tanto de las autoridades gubernamentales libias como de la comunidad internacional, en cuanto a los procesos de pacificación, estabilización, reconciliación nacional y reintegración de las cientos de miles de víctimas del desplazamiento en la sociedad de la nueva Libia.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto demostrar la relevancia de todos estos asuntos sumamente complejos y llamar la atención sobre las circunstancias inhumanas y degradantes que imperan en Libia desde hace siete años. Que también las voces de las víctimas libias del desplazamiento forzoso sean escuchadas y sus necesidades tomadas en cuenta en el proceso futuro de paz.

D. Metodología

La presente tesis se basa principalmente en investigaciones secundarias, incluyendo una revisión completa de textos existentes sobre el desplazamiento interno, la protección internacional de las IDP, la soberanía estatal, la *Responsibility to Protect*, intervenciones humanitarias y militares, el cambio de régimen en Libia y la resolución de conflictos en Estados en transición política. La investigación se fundamenta en una amplia gama de material relevante, tanto documentos de fuente primaria (documentos jurídicos de la ONU, resoluciones del Consejo de Seguridad, documentos de cumbres mundiales; páginas web de organizaciones internacionales; jurisprudencia de la CPI, etc.) como literatura de fuente secundaria de expertos de diferentes ramas, ofreciendo enfoques diversos con respecto al desplazamiento forzado y apoyo humanitario a nivel mundial, y en particular en Libia, desde un punto de vista migratorio, geopolítico, militar, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este aspecto, la comparación y evaluación de los puntos de vista de diferentes investigadores de renombre mundial también es de importancia especial.

Dado que existe poca literatura académica sobre el tema del desplazamiento interno en Libia y la implementación del sistema de protección internacional para las personas desplazadas en este caso concreto, también se recurrió a numerosas fuentes periodísticas internacionales para obtener informaciones adicionales sobre los acontecimientos recientes sobre el terreno.

Con el fin de complementar la parte teórica de investigación, también se realizó un estudio cualitativo abarcando numerosas declaraciones y observaciones procedentes de una serie de entrevistas que se llevaron a cabo entre primavera y verano de 2016 con varios refugiados libios, en aquel entonces alojados en el *Patrick-Henry-Village*, un antiguo cuartel y base militar

estadounidense en Heidelberg, Alemania⁹. Las entrevistas se realizaron en un estilo semiestructurado y cada entrevista duró entre una y tres horas. Gracias al conocimiento del idioma inglés relativamente bueno de todos los participantes, las entrevistas fueron realizadas en inglés y el contenido posteriormente traducido al español por la autora. Con el fin de proteger la confidencialidad de los refugiados, todo tipo de datos identificativos fue suprimido.

⁹ Véase parte III, capítulos 1 y siguientes.

I. La crisis mundial del desplazamiento forzado: sobre la necesidad de reformas del sistema de protección de las Naciones Unidas para personas desplazadas internamente

1. Introducción e hipótesis

Frente a un aumento constante del número de las personas desplazadas dentro de su propio país a nivel mundial, el fenómeno del desplazamiento interno se vuelve cada vez más importante para la comunidad internacional. Por lo tanto, un análisis integral sobre el sistema de protección de las Naciones Unidas para las IDP y el marco legal de la ayuda humanitaria en casos de desplazamiento interno presenta un tema relevante y central para esta tesis doctoral con enfoque en la investigación de conflictos y los estudios de paz.

Con un análisis de literatura diversa se identificarán las perspectivas más corrientes acerca de este tema y se compararán y discutirán los diferentes puntos de vista y propuestas de solución respecto a las oportunidades de cambio dentro de las Naciones Unidas. A este respecto, el objetivo será descubrir, cuáles de los órganos de la ONU, según la opinión de diferentes investigadores, requieren de una revisión de sus ámbitos de responsabilidad, y cómo se puede realizarla para poder ofrecerles a las IDP apoyo y protección suficientes frente al concepto de la soberanía estatal.

Partiendo de la hipótesis que existen lagunas jurídicas y zonas intermedias en el sistema de protección de las Naciones Unidas para las IDP y en el derecho internacional en cuanto a las intervenciones humanitarias, se indicarán las responsabilidades de los órganos relevantes de la ONU, cómo se constituyen sus mandatos y de qué forma se podría ampliar el marco jurídico con el fin de poder garantizar una protección adecuada para los desplazados internos. Para una realización práctica de las reformas, el aspecto de la antropología organizacional juega un papel fundamental.

Según el *Global Report on Internal Displacement* del IDMC (2017), se estima que a nivel internacional hay más de 40,3 millones de IDP dentro del propio territorio nacional como consecuencia de conflictos y violencia. Desde 2000, este número se ha duplicado y ha incrementado significativamente sobre todo a lo largo de los últimos cinco años. Actualmente, el número de IDP es casi el doble de los refugiados en el mundo. A pesar de su escala global, la crisis del desplazamiento interno constituye un tema relativamente desatendido, lo que se debe sobre todo al enfoque y la atención pública mundial en los refugiados y migrantes transfronterizos (*ibíd.*), así como en sus impactos dramáticos que conlleva:

Conflict, violence and disasters caused 31.1 million new internal displacements in 2016. This is the equivalent of one person every second having to leave everything behind because of violence, conflict and disasters. (IDMC 2017: 10)

De los 31,1 millones de desplazamientos internos recientes, unos 6,9 millones desplazados se deben directamente a conflictos y violencia. Como región más afectada, África subsahariana superó a Oriente Medio, con casi un millón de nuevos desplazamientos en la República Democrática del Congo como resultado de enfrentamientos violentos en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Kasai (*ibíd.*). Con números muy elevados de desplazamientos, Oriente Medio con Siria, Irak y Yemen sigue experimentando alrededor de dos millones de nuevos desplazamientos desde 2016.

Unos 24,2 millones de los desplazamientos en 2016 se deben a desastres, con Asia meridional y oriental siendo las regiones más afectadas. Mientras que en China, India y las Filipinas se registran los mayores números absolutos, son los pequeños Estados insulares los que sufren de forma desproporcionada en relación con su tamaño de población. En cuanto a los refugiados que regresan a sus países de origen, hay que considerar que fácilmente corren el riesgo de convertirse de nuevo en desplazados internos, si su regreso es prematuro, involuntario o no preparado, así como si se ven obligados a volver bajo condiciones de inseguridad continua y sustentos insuficientes. En 2016, esto fue el caso en Afganistán y Somalia (*ibíd.*). Cabe mencionar que seis de los diez países con la mayor cantidad de refugiados en 2015, tanto Afganistán como Colombia, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Siria, también se encontraron entre los diez Estados con los números más elevados de IDP a causa de conflictos¹⁰.

Los datos y análisis confiables son fundamentales para poder lograr un desarrollo sostenible a nivel regional y mundial, e implementar procesos relevantes de una política humanitaria adecuada. Los datos del IDMC sirven como referencia para evaluar y medir el progreso hacia estos objetivos, demandados también por el ex Secretario General de las Naciones Unidas “(to) reduce new and protracted internal displacement by 2030” por al menos 50% (*ibíd.* 69). Dado que el IDMC se enfrenta a problemas constantes en su intento de obtener una visión exacta, la referencia global actual no es completa. Esto se debe sobre todo a los datos incompletos al inicio de la recopilación, así como a la dinámica y la duración de los desplazamientos, dificultades al detectar movimientos repetidos, e informaciones desactualizadas sobre ciertos casos de IDP.

Cabe resumir que en un total de cuarenta y un países del mundo, tanto conflictos políticos y étnicos como catástrofes naturales llevan a un aumento constante del número de las IDP (*ibíd.*;

¹⁰ Con unos 7.246.000 de IDP (el 31 de diciembre de 2016), Colombia tiene el mayor número de desplazados internos a nivel mundial, seguido por Siria (6.326.000), Sudán (3.300.000), Irak (3.035.000), la República Democrática del Congo (2.230.000), Yemen (1.974.000), Nigeria (1.955.000), Sudán del Sur (1.854.000), Ucrania (1.653.000), Afganistán (1.553.000) y Somalia (1.107.000). Fuente: IDMC 2017, Table 1.

anexo 1): en la primera estadística del IDMC de 1998, se registraron casi 19,3 millones de IDP. Desde entonces el desarrollo está marcado por una tendencia constantemente creciente (*ibíd.*; anexo 2).

La ONG *Terre des Hommes* estima que alrededor de 70% de todas las IDP son mujeres y niños (Neumayer, 23.08.2017). De acuerdo con el ACNUR¹¹, a las IDP se define como sigue:

Internally displaced persons, or IDPs, are among the world's most vulnerable people. Unlike refugees, IDPs have not crossed an international border to find sanctuary but have remained inside their home countries. Even if they have fled for similar reasons as refugees (armed conflict, generalized violence, human rights violations), IDPs legally remain under the protection of their own government – even though that government might be the cause of their flight. As citizens, they retain all of their rights and protection under both human rights and international humanitarian law.

Dado que las IDP no cruzan ninguna frontera reconocida, por consiguiente no tienen ningún estatuto oficial como refugiados. Legalmente, las IDP se encuentran bajo la responsabilidad de su propio Estado y por tanto no reciben el mismo apoyo internacional como refugiados transfronterizos, aunque el mismo Estado evidentemente no cumpla con las responsabilidades de protección frente a sus ciudadanos, sea por razones económicas o intereses etnopolíticos. Por la crítica situación legal de los desplazados internos, éstos frecuentemente corren el riesgo de ser víctimas de violencia y de violaciones de los derechos humanos. La problemática surge de la fuerte tensión entre la soberanía estatal, o sea del principio de la no intervención en asuntos internos, y la obligación moral o legal de realizar intervenciones humanitarias en situaciones de emergencia o de graves violaciones de los derechos humanos.

No obstante, a lo largo de los últimos años se ha aumentado notablemente la conciencia de que dentro de un mundo tan globalizado, interrelacionado e interdependiente como lo tenemos hoy en día, acontecimientos estatales fácilmente pueden tener efectos graves también en otros países. Según Cohen y Deng (1998a)¹², tanto movimientos migratorios como de huida llevan a problemas políticos y económicos que pueden afectar Estados vecinos, pero también a toda la comunidad internacional (*cf.* 303). Asimismo, inestabilidad estatal muchas veces se extiende a grandes regiones, lo que requiere reacciones internacionales adecuadas, no sólo por razones humanitarias y de los derechos humanos, sino por el interés colectivo en estabilidad regional, paz global y seguridad (*ibíd.* 1). Por consiguiente, tanto por razones morales como simplemente pragmáticas, los efectos causados por el desplazamiento interno ya no pueden ser ignorados.

¹¹ UN, UNHCR, Syria, “Internally Displaced People”, 2001-2017.

¹² Pese a su edad, la obra de Cohen y Deng (1998a) sigue sirviendo como fundamento y referencia primordial en los estudios sobre el desplazamiento interno. Constituye la primera obra que se enfocó explícitamente en la situación precaria de las IDP a nivel global al haber identificado todas las deficiencias y zonas intermedias en el sistema de protección de las Naciones Unidas. Además, es la primera obra de expertos que incluye numerosas propuestas, oportunidades de cambio y de reformas que sucesivamente han sido retomadas por otros expertos e investigadores, por lo que el tema se ha convertido en un asunto urgente en la agenda humanitaria.

Con el fin de poder elaborar soluciones para la seguridad internacional y el cumplimiento de los derechos humanos, la discusión sobre la relevancia actual de la soberanía estatal y las posibilidades de intervenir por motivos humanitarios constituyen un tema fundamental de la presente tesis. El objetivo será descubrir cuáles de los órganos de la ONU deberían aspirar a cambios en ciertas áreas de su responsabilidad y cómo podrían ser realizados. Asimismo, se presentarán y analizarán instrumentos jurídicos pertinentes y se discutirán diferentes enfoques de solución.

Como consecuencia, y con el fin de mostrar las oportunidades de cambio dentro del sistema de protección de las Naciones Unidas, la literatura elegida debe ofrecer una idea general sobre diferentes opiniones acerca de esta temática, por lo que contiene tanto obras de investigadores antropológicos del ámbito migratorio internacional, como por ejemplo Roberta Cohen, Francis M. Deng y Susan F. Martin, como textos jurídicos de Catherine Phuong, Aidan Hehir y Verena Grubmüller, entre otros. Desde un punto de vista de la antropología organizacional en cuanto a las oportunidades de cambio en organizaciones, también son de importancia fundamental los planteamientos de Ben Ramalingam y Paul Clarke. En total, en esta primera parte de la tesis se complementarán posiciones diferentes del área de la antropología migratoria y organizacional, de relaciones internacionales, del derecho internacional y de los derechos humanos.

En el análisis siguiente, en primer lugar se presentará la situación legal actual de las IDP en comparación con los refugiados y se mostrarán las debilidades más destacables en el sistema de protección de las Naciones Unidas para las IDP. Después, el enfoque estará en los agentes relevantes dentro de la ONU respecto al fenómeno del desplazamiento interno y se detallarán los mandatos diferentes de los órganos y el desarrollo del denominado *Global Protection Cluster* y del *Cluster Approach*. A continuación serán presentados los puntos de vista concretos de los expertos mencionados con respecto a la temática de la soberanía estatal y la intervención humanitaria. Las propuestas de solución para ampliar el sistema de protección de las Naciones Unidas para las IDP serán analizadas críticamente, a lo cual no sólo se hará referencia a las posturas de dichos investigadores particulares, sino también a propuestas y directrices de órganos determinados de la ONU, como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a los *Guiding Principles on Internal Displacement*, que constituyen una base importante para posibles intervenciones.

En cuanto a las discutidas oportunidades de cambio y las propuestas concretas de solución, se examinarán las diferencias entre las posiciones y las posibles maneras de proceder. Posteriormente se llevará a cabo un análisis antropológico organizacional respecto a la realización concreta de cambios en organizaciones internacionales, y se terminará con la presentación de unas perspectivas a posibles desarrollos futuros.

2. El marco jurídico respecto a la protección de las personas desplazadas internamente (IDP por sus siglas en inglés)

Para poder analizar mejor los ámbitos de trabajo de los órganos de la ONU y proponer posibles cambios, en un primer paso es esencial aclarar la situación legal de las IDP en comparación con la de los refugiados reconocidos internacionalmente. Después se mostrarán las debilidades dentro del marco jurídico internacional. Al final, se presentarán diferentes opiniones originadas en la perspectiva antropológica migratoria sobre el sistema legal de protección.

2.1 La situación legal de los refugiados *versus* IDP: una comparación

Dependiente del destino de una huida, existen diferencias graves entre los estatutos jurídicos determinados en cuanto al alcance del apoyo internacional y la protección. Refugiados que cruzan fronteras estatales ya no son considerados asuntos internos, por lo que pueden obtener apoyo por parte de la comunidad internacional. Al contrario, las IDP se encuentran en su propio Estado, por lo que éste tiene la responsabilidad principal de ocuparse de su protección y asistencia, aunque él mismo sea responsable de la huida de las IDP (ACNUR, “IDPs: Questions and Answers”, 2007). Según Newman (2003), tanto para los refugiados como las IDP, las causas principales del desplazamiento son conflictos bélicos y catástrofes naturales, tales como terremotos, inundaciones, hambres o pobreza grave. Asimismo, persecuciones por razones religiosas, así como discriminación étnica o política pueden ser factores que llevan a su huida. Aunque las causas sean las mismas, en cuanto al trato de los dos grupos destacan diferencias graves (*cf.* 4). Con arreglo a la *Convention Relating to the Status of Refugees* de las Naciones Unidas de 1951 y el *Protocol* de 1967, a refugiados se les garantiza un estatuto especial. Por su mandato, el ACNUR asume la responsabilidad de su protección y apoyo. Con arreglo al artículo 1, A (2) de la convención, se define a “refugiados” como

(...) any person who (...) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

No obstante, y de acuerdo con Martin *et al.* (2005), en la práctica esta definición también incluye a personas que debido a conflictos armados, violencia general, agresiones extranjeras u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público se encuentran fuera de su país, y por tanto requieren de protección y asistencia internacional (*cf.* 5).

Mientras que el número de los refugiados estaba relativamente constante en los últimos años, el número de las IDP muestra un aumento continuo (IDMC 2017). En comparación con los refugiados, para las IDP no se aplica ninguna convención legalmente vinculante. El único documento de referencia relevante son los denominados *Guiding Principles on Internal Displacement* que serán estudiados más detalladamente en la parte I, capítulo 7 y la parte III, capítulo 6.1.3.2. Debido a la situación grave, el ACNUR ha ampliado su mandato también a las IDP: en 2011, estimó el número de las IDP en 26,4 millones, de los que 15,5 millones en veintiséis países recibieron apoyo por su parte (ACNUR, “IDPs – On the Run in Their Own Land”, 2011). Aunque el mandato original del ACNUR no cubre específicamente a las IDP, se puede justificar la ampliación del mismo debido a su experiencia y conocimientos profundos respecto al desplazamiento. Durante muchos años, el ACNUR ha ayudado a millones de IDP, recientemente sobre todo por el llamado *Global Protection Cluster*, por el que tiene el mandato principal en asegurar la protección de los refugiados, solicitantes de asilo, repatriados, personas apátridas e IDP, así como en garantizar su apoyo mediante los sectores de *Health, Protection, Shelter and NFI* al coordinar y gestionar los campamentos (véase parte III, cap. 6.2.6.13). Debido a que los campos de trabajo en cuanto a los refugiados y las IDP son interrelacionados, la ampliación del mandato se puede considerar lógica, necesaria e importante. No obstante, se plantea la cuestión a qué tipo de criterios se recurre para determinar a las IDP que reciben dicha ayuda.

Como mencionado anteriormente, aunque las necesidades sean muy similares, en cuanto al trato de los dos grupos por parte del Estado y de los órganos de las Naciones Unidas se notan diferencias notables: los refugiados son el primer grupo de personas que recibe alimentos y alojamiento en el Estado de acogida. Además, se aplican leyes y convenciones internacionales para protegerles de explotación, abusos y del regreso forzoso a sus países de origen. El ACNUR y otras organizaciones humanitarias ayudan a los refugiados a establecer una nueva vida en el país de acogida o, en caso de que se hayan mejorado las condiciones en su país de origen a través de convenios de paz o parecido, se les ayuda a organizar un regreso seguro (ACNUR, “IDPs – Questions and Answers”, 2007).

La situación de las IDP se distingue considerablemente, dado que frecuentemente se encuentran en situaciones de conflictos continuos, por lo que el acceso de organizaciones internacionales es dificultado o incluso limitado (*ibíd.*). Muchas veces, los Estados en cuestión se oponen a la intervención por organizaciones humanitarias, dado que tratan de evitar que se publique una participación posible por su parte a un conflicto bélico y/o expulsiones en masa. Según Cohen y Deng (1998a), algunos gobiernos interpretan la intromisión en asuntos internos como intentos de menoscabar su autoridad estatal (*cf.* 7). Posiblemente también contemplan a las IDP como enemigos públicos, aunque mantengan el control ultimativo sobre su destino (*cf.* ACNUR, “IDPs–

Questions and Answers”, 2007). Documentos jurídicos como los Convenios de Ginebra de 1951 muchas veces son demasiados generales y no aplicables para poder legitimar una intervención en contra de la soberanía estatal. Aparte de los *Guiding Principles on Internal Displacement* que no son vinculantes legalmente, hasta la fecha no existen específicos instrumentos legales internacionales para poder garantizar la protección de las IDP.

2.2 Lagunas jurídicas respecto de la situación actual

Según Martin *et al.* (2005), las leyes nacionales e internacionales para la protección de las IDP son completamente insuficientes (*cf.* 20). Además, consideran que enfoques nacionales y regionales como la Convención para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África de 2009 por parte de la Organización para la Unidad Africana (OUA) son las mejores maneras de ofrecer protección legal para la mayor parte de las IDP huyendo de conflictos y otras catástrofes graves. Según, sólo se puede garantizar una protección eficaz en la región de origen de los refugiados si la comunidad internacional establece marcos jurídicos uniformes para la protección de las IDP y si fomenta los *Guiding Principles on Internal Displacement* en todos los ámbitos de la sociedad. Sólo de esta manera se pueden lograr cambios dentro de los marcos jurídicos en los países con números elevados de IDP.

Cohen y Deng (1998a) también exponen diversas lagunas jurídicas al indicar sobre todo el acceso insuficiente a protección y apoyo durante situaciones extremas de expulsión, el incumplimiento con el derecho al regreso seguro y la reintegración, así como una falta de indemnización o compensación, respectivamente, en el caso de propiedades perdidas. Los autores señalan que “existing international law does not contain guarantees that explicitly mention internally displaced persons” (*cf.* 74). Dentro de las debilidades llamativas en cuanto al sistema jurídico destacan sobre todo conflictos armados en los que el derecho humanitario muchas veces no es aplicable y los derechos humanos son restringidos. De igual manera cabe realzar que reglamentaciones internacionales de los derechos humanos generalmente sólo vinculan a Estados, pero no a actores no estatales, como en el caso de grupos de rebeldes, aunque muchas IDP vivan bajo la autoridad de estos últimos. Asimismo, algunos Estados todavía no han firmado los convenios claves o Protocolos adicionales de las Convenciones de Ginebra para garantizar los derechos humanos, por lo que no están vinculados a ellos. En este contexto, también cabe mencionar que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) no es aplicable a las IDP, aunque su situación presenta rasgos parecidos (*ibíd.* 73-75).

Cohen y Deng (1998a) clasifican las lagunas jurídicas en cuatro categorías (*cf.* 122-123):

- con el concepto de *normative gaps* se denominan los ámbitos en los que el derecho internacional no ofrece ninguna protección para las necesidades legítimas de las IDP, como por ejemplo la ausencia del derecho a indemnización en caso de pérdida de sus bienes como consecuencia del desplazamiento por conflictos armados, tanto a nivel nacional como internacional.
- Con las *applicability gaps* se refiere a normativas jurídicas no aplicables en todas las circunstancias. Como ejemplo destacan las normas de los derechos humanos que exclusivamente vinculan a actores estatales, lo que puede causar situaciones de protección insuficientes para las IDP frente a agresiones por actores no estatales.
- El concepto de *consensus gaps* se refiere a situaciones en las que de hecho existe una normativa general, pero sin haber formulado o reconocido formalmente un derecho específico por el que se podría garantizar la realización de la normativa general en cuanto a las necesidades especiales de las IDP. En este contexto, destaca el acuerdo que ni los refugiados ni las personas en situaciones semejantes deben estar sujetas al regreso forzado a su país de origen en el que les esperarían tortura, la pena de muerte u otras violaciones graves de los derechos humanos. No obstante, dentro de sus propios países, muchas veces también hay zonas peligrosas en las que corren el riesgo de dichas violaciones. Pero en este caso, las normativas respectivas existentes no se aplican, dado que únicamente se refieren al retorno a través de fronteras internacionales. Consecuentemente, las IDP carecen de protección legal. Los autores resumen: “(...) a prohibition of inhuman return of internally displaced persons to dangerous areas within their own country needs to be articulated in order to ensure that such persons will get protection” (123).
- Por último, existen *ratification gaps* que determinan la situación de las IDP que viven en países que no han firmado documentos claves de los derechos humanos y/o los Protocolos adicionales de las Convenciones de Ginebra, y que por tanto no cumplen con la protección legal de las IDP.

Por consiguiente, la situación jurídica de las IDP es muy crítica y requiere urgentemente de reformas. Cabe discutir la necesidad de proponer nuevas leyes o de aclarar si es suficiente recurrir a la implementación de normativas ya existentes. Por un lado, a la creación de nuevas normas se opone el riesgo de menoscabar normas existentes y obstaculizar su realización. Asimismo, un estatuto jurídico especial de las IDP discriminaría a otros grupos marginales (*ibíd.* 75-76).

Por otro lado, se puede argumentar a favor del desarrollo de nuevas normas al considerar que éstas podrían fortalecer y consolidar conceptos de protección ya existentes al aclarar formulaciones confusas, y de esta manera superar las lagunas normativas (*ibíd.*).

Cohen y Deng concluyen que existen muchas normas aplicables, pero no todos los ámbitos esenciales están cubiertos por leyes existentes, por lo que no existe ninguna protección legal suficiente para las IDP (*cf.* 122). Además, no siempre se aplican normas existentes, dado que por parte de ciertos Estados o grupos rebeldes se presenta una aversión a cumplir con compromisos vinculantes. Como consecuencia, los autores apelan tanto a una revisión fundamental como a una ampliación de las normas legales, pero al mismo tiempo también demandan cambios jurídicos concretos: se manifiestan, entre otros, a favor del desarrollo de medidas concretas para (1) responder a las necesidades especiales de mujeres y discapacitados desplazados; (2) asegurar la protección suficiente para trabajadores de ONGs dentro del marco de acciones humanitarias de socorro; y (3) consolidar el derecho a la restitución de propiedades perdidas a causa del desplazamiento: “A body of principles that restates and reinforces the essential rights of internally displaced persons would provide authoritative guidance to and thus would facilitate the work of humanitarian organizations that undertake relief actions and perform other necessary services for these persons” (*ibíd.* 125).

Martin *et al.* (2005) también están a favor de una reforma del sistema jurídico internacional con el fin de poder incluir la protección para todo tipo de migrantes forzosos que necesitan apoyo internacional (*cf.* 3-4).

Por lo tanto, se puede resumir que en el marco de la literatura analizada para la presente tesis, el sistema jurídico de protección para las IDP es considerado como insuficiente.

3. Debilidades generales del sistema de protección

En otros ámbitos, también se revelan debilidades graves en el sistema de protección de las Naciones Unidas. Según Hehir (2010), en cuanto a las intervenciones humanitarias destacan fallos tan inherentes dentro del sistema que ratifica la opinión de que el sistema de la ONU para la preservación de la paz y seguridad internacionales ha fracasado. Asimismo opina que el Consejo de Seguridad como autoridad competente en cuanto a la toma de decisiones sobre la necesidad de intervenciones humanitarias no es fiable, sino que decide arbitrariamente dependiendo de la situación (*cf.* 101-102). Pero también de forma indirecta existen debilidades en el funcionamiento del sistema de protección: según Droege (2010), éstas se revelan a través de actores no estatales que no están vinculados ni sujetos al cumplimiento con los derechos humanos. Además, los Estados pueden firmar documentos fundamentales con reservas, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que consecuentemente socava sus principios. Por el distanciamiento estatal de ciertos artículos de la declaración surgen zonas intermedias que frecuentemente llevan a la socava de la base de una intervención. Aún encima, esta declaración no es jurídicamente vinculante, lo que contribuye aun más a dificultades legales en cuanto a la justificación de una intervención por la violación de los derechos humanos. Esta problemática ya se ha señalado en el capítulo 2.2 (*ratification gaps*). En los capítulos siguientes, se indicarán los diferentes tipos de debilidades que serán analizados en lo sucesivo.

3.1 Debilidades dentro de las Naciones Unidas

De acuerdo con Grubmüller (2007), existen debilidades llamativas en el proceso de determinación y la capacidad de decisión dentro de la ONU, dado que considera al Consejo de Seguridad un órgano subjetivo con miembros parciales (*cf.* 49). Aunque el Consejo constituye el único poder autorizado a decidir sobre la aplicación de medidas de fuerza, los cinco miembros permanentes, los Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, frecuentemente persiguen e imponen propios intereses políticos y económicos. Asimismo, critica la realización de las intervenciones que se efectúan demasiado tarde o con capacidades insuficientes, lo que se debe tanto a una falta de informaciones como a una falta de recursos humanos y económicos (*cf.* 50). Según Martin *et al.* (2005), otra debilidad constituyen los mandatos que muchas veces restringen la libertad de acción de los órganos de las Naciones Unidas:

Often, the only UN presence in a war-affected country is the humanitarian agencies, but their staff may not be consulted or participate in the peace negotiations even when they have a better sense than political figures as to the situation on the ground. (ibid. 25)

En cuanto al fenómeno de la migración forzada, constatan lagunas en las respuestas tanto internacionales como regionales y nacionales que llevan a una inconsecuencia grave en el apoyo a migrantes forzosos y su protección (*cf.* 4). Al igual que Grubmüller (2007), también critican una falta de recursos económicos derivada de un escaso apoyo financiero y de una distribución errónea de los medios de subvención disponibles (*ibíd.*). Basado en el planteamiento de estudios de casos en Burundi, Colombia, Timor Oriental, Georgia y Sri Lanka, Martin *et al.* muestran cómo la falta y el desequilibrio de recursos socavan los esfuerzos en la protección de migrantes forzosos. Frecuentemente destacan ciclos cortos de apoyo económico, así como una facilitación bilateral y no multilateral de los recursos financieros, e incluso preferencias de los prestatarios respecto a ciertos elementos del apoyo humanitario: “(...) short funding cycles, bilateral rather than multilateral funding, and donor preference for certain elements of humanitarian appeals” (*cf.* 21). Pero una participación igualitaria y cooperativa tanto de los donantes como de prestatarios constituiría una base y un aspecto fundamental para poder asegurar un apoyo humanitario justo y eficaz por parte de las Naciones Unidas.

En resumen, se nota un fuerte poder de decisión de la ONU y una aceptación forzada de los prestatarios, en lugar del derecho de participar de forma equiparada en la distribución de bienes y recursos. Por lo tanto, las debilidades dentro del sistema de las Naciones Unidas se revelan a través de una inconsecuencia en el proceso de determinación, la falta de neutralidad, el rechazo de participación de agentes involucrados *in situ*, la falta de recursos tanto respecto a los medios económicos como al personal y suministros de la ayuda humanitaria, así como a través de una distribución inadecuada de los recursos.

3.2 Debilidades dentro de las responsabilidades de los órganos de la ONU

Según Cohen y Deng (1998a), las debilidades de las Naciones Unidas se encuentran sobre todo en la coordinación insuficiente y la falta de responsabilidad institucional frente a las IDP, por lo que proponen una reforma de la coordinación hacia más eficacia de las capacidades institucionales y una mejor cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas (*cf.* 126-127). Martin *et al.* (2005) también afirman que el sistema institucional de apoyo y protección para migrantes forzosos presenta complicaciones enormes, dado que hay numerosos órganos tanto internacionales como nacionales y privados que juegan un papel fundamental en la distribución de alimentos, alojamiento, apoyo económico y otros servicios (*cf.* 20-21). Los órganos de la ONU se enfocan principalmente en emergencias humanitarias y en la denominada *crisis response*, es decir, la respuesta humanitaria a una crisis determinada, mientras que refugiados e IDP en situaciones conflictivas de larga duración muchas veces reciben menos atención, lo que también

se debe a las circunstancias difíciles de encontrar soluciones adecuadas de manera *ad hoc* (*ibíd.*). Además, critican la inconsecuencia en el trato de los migrantes forzosos y la desigualdad en cuanto a la distribución de recursos dependiente del lugar y de la situación de crisis, puesto que algunas emergencias humanitarias reciben más apoyo que otras (*ibíd.*). Otro aspecto problemático es la tendencia de categorizar estrictamente los diferentes grupos de migrantes forzosos y diseñar mandatos limitados, lo que obstaculiza la capacidad de las organizaciones humanitarias de ofrecer asistencia y protección adecuadas:

Agencies may too easily avoid responsibility by citing an institutional mandate to serve a specific population. Alternately, agencies interested in intervening on behalf of a particular group may be denied the opportunity because they have no explicit mandate to do so. (ibíd. 28)

Martin *et al.* (2005) también señalan el denominado *Consolidated Appeals Process* (CAP)¹³ que ayuda a identificar la gama de necesidades en cada crisis y que describe de manera simple las capacidades de cada agencia de las Naciones Unidas en las operaciones de socorro (*cf.* 22). Aunque el CAP debe facilitar el proceso de planificación y coordinación de apoyo, se puede criticar que en la práctica muchas veces no cumple suficientemente con tal función. En un principio, debería identificar las prioridades para la asistencia humanitaria y cuestiones de protección, y a continuación asignar las responsabilidades a las agencias de la ONU para responder a las necesidades (*ibíd.*): “Instead, the CAPs often seem to be agency wish lists, cut and pasted into a single document, but demonstrating relatively little prior consultation or joint assessment of needs and capacities” (*ibíd.*). Como mencionado anteriormente, las decisiones sobre las prioridades dentro del CAP frecuentemente son tomadas por los donantes (p. ej. la UE), por lo que no se puede garantizar que son adoptadas de forma neutral. No obstante, realza: “Were these decisions to be taken in consultation with other donors, and they resulted in a division of responsibility with all parts of the CAP funded by someone, this process could work” (*ibíd.*). Muchas veces, el apoyo no es consistente respecto a la fase de emergencia, lo que lleva a que muchos ámbitos revelan deficiencias: en este contexto, cabe señalar que una emergencia nueva difiere mucho de un conflicto prolongado con personas desplazadas ya durante varios años; y

¹³ Las crisis humanitarias con gran impacto requieren la ayuda y cooperación de muchas agencias. Para poder actuar con eficacia, la independencia de las agencias es fundamental. Sin embargo, también tienen que coordinar los diferentes esfuerzos para evitar lagunas, centrarse en las necesidades urgentes, abordar la crisis estratégicamente y trabajar en favor de una recuperación a largo plazo. Por lo tanto, un enfoque estratégico común es esencial para poder asegurar una respuesta eficaz basada en las capacidades de cada institución involucrada. El denominado Procedimiento de Llamamientos Unificados (CAP, según sus siglas en inglés) ayuda a lograr este fin al aplicarse siempre que una situación de emergencia dura más de tres a seis meses, o sea el periodo de un *Llamamiento de Urgencia*. Reúne a las diferentes organizaciones pertinentes para planificar, coordinar, ejecutar y controlar en conjunto su respuesta a los desastres naturales y emergencias complejas. También facilita recaudar fondos de manera cohesiva y no competitiva, lo que debe contribuir al suministro de apoyo a personas necesitadas de forma oportuna, predecible y responsable. El CAP se enfoca en la colaboración estrecha entre los donantes, las ONGs, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la OIM, los organismos de la ONU y los gobiernos anfitriones, y es coordinado y dirigido por la OCAH. Un llamamiento consolidado comprende un plan común de acción humanitaria y proyectos concretos. Por un lado, sirve como marco permanente de referencia y plan de trabajo detallado para una acción humanitaria sostenida de gran escala, por otro lado para salvar y proteger vidas de forma rápida y eficaz. Fuente: UNICEF, Octubre de 2005; UN CERF, 2017.

consecuentemente también difieren las necesidades. En crisis prolongadas existe un elevado riesgo de la denominada *donor fatigue* o “fatiga de los donantes”, aunque los refugiados e IDP sigan encontrándose en condiciones precarias. Otras deficiencias detectadas por Martin *et al.* (2005) se deben a la definición demasiado estricta de la ayuda de emergencia en muchas crisis humanitarias, revelándose a través de la escasa formación de los agentes y una implicación limitada de los desplazados en la toma de decisiones, como por ejemplo en materia de salud reproductiva, programas psicológicos y alojamiento a largo plazo (*ibíd.*). Asimismo, dentro del CAP no se considera ni la edad ni el sexo, lo que para la adaptación de las medidas de apoyo, asistencia y protección son aspectos fundamentales. Como último punto consta la necesidad de no sólo centrarse en el apoyo a los migrantes forzosos, sino también garantizar que éstos no se conviertan en una carga para otras poblaciones vulnerables (*ibíd.*).

Cabe resumir que no cada crisis humanitaria recibe el mismo grado de atención por parte de las Naciones Unidas, y en muchas situaciones el enfoque principal conscientemente está en actividades materiales. Asimismo, la responsabilidad a largo plazo por las IDP se deja en manos de organizaciones nacionales y privadas, dado que muchas veces los mandatos de los órganos de la ONU no prevén la prestación de ayuda duradera. En teoría, el enfoque en el apoyo económico no es nada improcedente, dado que en contraposición a críticas políticas, el fortalecimiento de las organizaciones locales, así como el establecimiento de instituciones educativas, etc. puede considerarse relativamente neutral. Pero como muestra la literatura citada, no existe ninguna distribución justa de esta ‘ayuda neutral’, por lo que se plantea la cuestión si las Naciones Unidas actúan de forma imparcial. Al parecer, la creación intencionada de responsabilidades materiales a corto plazo debe evitar diferencias políticas que evidentemente surgirían con mayor probabilidad, si se interviene en asuntos internos a largo plazo. No obstante, cabe señalar que la ayuda material conscientemente se aplica por las potencias mundiales para defender sus intereses económicos y políticos en la escena internacional.

3.3 Debilidades debido al contexto

Sin duda alguna, el ambiente en situaciones de crisis es muy peligroso, tanto para las IDP como para los trabajadores humanitarios (Martin *et al.* 2005: 23). Con el fin de protegerles de ofensivas violentas, es fundamental crear un ambiente seguro en el que se pueden realizar las operaciones humanitarias (*ibíd.* 25). Cohen y Deng (1998a) clasifican las diferentes situaciones de desplazamiento interno en dos categorías. Con el concepto de *relatively ‘simple’ situations* definen a situaciones que no implican asuntos de protección extensa con el desplazamiento siendo principalmente temporal y geográficamente limitado, como en el caso de desastres naturales (*cf.*

127). En tales situaciones tiene prioridad el suministro de ayuda material, como por ejemplo carpas, alimentos, agua y medicamentos básicos. Los gobiernos correspondientes por lo general autorizan tal apoyo externo, y la mayoría de los órganos de la ONU se ha especializado en este tipo de misiones. Con el concepto de *complex situations* se clasifican situaciones en las que una crisis política o un colapso estatal requieren una intervención tanto política como militar y humanitaria en defensa de los derechos humanos, con el fin de poder asegurar la protección y asistencia para las personas necesitadas (*ibíd.*). En tales casos, a la comunidad internacional muchas veces resulta muy difícil obtener acceso a las regiones en cuestión, debido a la actitud poca cooperadora por parte de los gobiernos y/o grupos rebeldes. También el CICR afirma la complejidad de este tipo de situación: “Persons affected by armed conflict and other situations of violence experience a wider variety of needs in the short, medium and long term”¹⁴. Como consecuencia, no sólo se requiere de apoyo material a corto plazo, sino sobre todo de medidas a largo plazo, como asistencia psicológica, educación, rehabilitación, (re)integración económica y social.

Otro aspecto frecuentemente discutido es la presencia de fuerzas armadas en zonas de crisis para fomentar el mantenimiento de la paz: por un lado, se argumenta que posiblemente no sólo podría limitar y resolver problemas destacados, como por ejemplo abusos sexuales que frecuentemente acontecen dentro de los campamentos bajo la supervisión de agencias de las Naciones Unidas, sino también facilitar el acceso difícil a bienes esenciales, como alimentos y servicios de salud, y regular el riesgo de tensiones entre las comunidades anfitrionas y los migrantes forzados (*ibíd.*). No obstante, por otro lado también existe crítica severa frente a la presencia de las tropas de los Cascos Azules. Según Skinner (2010), en numerosos casos su presencia en regiones en crisis ha llevado a un aumento alarmante de la prostitución, e incluso se ha registrado la involucración de los propios soldados en la esclavización de mujeres y niños (*cf.* 238). Como caso ejemplar cabe mencionar Haití, donde las Naciones Unidas tras décadas de dictadura y crisis políticas en 2004 desplegaron consecutivamente una misión de estabilización (MINUSTAH) mediante fuerzas multinacionales, con el fin de auxiliar al gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad. Pese a su misión de fomentar los desarrollos pacifistas, la MINUSTAH fue acusada numerosas veces por violaciones de los derechos humanos: destacan repetidos delitos de abuso sexual de haitianos, el vertido de materias fecales humanas en el río Artibonite en 2010 que causó una epidemia de cólera que sigue causando víctimas hasta la actualidad, y la realización de operaciones entre 2004 y 2011 “en algunos barrios de la capital haitiana, en los que se produjeron varios casos de violaciones (muertos, heridos, destrucción de bienes privados, malos tratos, etc.)

¹⁴ CICR, June 2010.

entre la población civil, aumentando los graves problemas que ya padece, atenazada por la miseria y el hambre”¹⁵.

Por lo tanto, ante estos acontecimientos, se puede resumir que la implicación de las fuerzas de la ONU también conlleva problemas y preocupaciones considerables con las tropas mismas, lo que revela deficiencias enormes, tanto en cuanto a la sensibilización del personal como en su formación general.

3.4 Resumen conclusivo de las debilidades generales

Según las observaciones de Martin *et al.* (2005), los órganos de la ONU no aspiran a soluciones duraderas en sus misiones humanitarias (*cf.* 24). Pero debido a la larga duración de la mayoría de las situaciones conflictivas, serían fundamentales enfoques de soluciones a largo plazo que también abarcan la resolución de problemas institucionales respecto a la cuestión de coordinación. Como ya hemos visto, muchas veces la única presencia por parte de las Naciones Unidas en Estados afectados por conflictos bélicos se puede lograr a través de las agencias humanitarias, pero su personal generalmente no participa o no es consultado con respecto a las negociaciones de paz, aunque sean los agentes que más conocimientos tengan acerca de la situación sobre el terreno (*cf.* 25). En lo que concierne a la consolidación de la paz, sin duda es un aspecto imprescindible que los acuerdos incluyan marcos realistas para abordar el desplazamiento e integrar conceptos para el retorno y la reintegración de los refugiados e IDP. No obstante, establecer una cooperación más estrecha entre las normativas políticas y humanitarias no está exenta de riesgos: “Humanitarian agencies are already vulnerable to attacks by military and political forces that doubt their impartiality or neutrality” (*ibíd.*). A veces estos ataques son violentos, lo que conlleva riesgos de seguridad para los involucrados. Incluso agencias cuyos mandatos les obligan a adoptar una postura neutral en su trato con todas las partes implicadas en un conflicto, como el CICR, han sido víctimas de ataques. En el caso de que los negociadores de paz son percibidos como más favorables frente a un grupo involucrado que a otro, las agencias humanitarias corren el riesgo, aunque injustamente, de ser percibidas como participantes en el proceso político y se les niega el acceso a la población civil indigente. Pese a esto, Martin *et al.* realzan: “(...) finding long-term solutions to the causes of humanitarian crisis may well require the risks” (*ibíd.*).

Para poder encontrar soluciones adecuadas duraderas al desplazamiento, en primer lugar se requieren soluciones al conflicto, a la represión, inestabilidad y otras causas de migración forzosa.

¹⁵ Crónica Popular, 05.03.2012.

Al mismo tiempo hay que estar consciente de que cambios políticos, incluida la resolución de un conflicto, no implican una solución automática al problema del desplazamiento. En las comunidades de acogida, los migrantes forzosos necesitan acceso a oportunidades económicas, alojamiento permanente y la recuperación o recompensación de sus bienes perdidos, así como una garantía de sus derechos legales, relacionados también con cuestiones de propiedad¹⁶. La transición de la fase de apoyo hacia la responsabilidad propia de los Estados en crisis también requiere un compromiso a largo plazo por la comunidad internacional y un fomento de la capacidad institucional, tanto en sectores privados como públicos a nivel local y nacional (*cf.* 26). Por ende, es esencial la colaboración entre organismos de apoyo, como el ACNUR y UNICEF, y de organismos de desarrollo como el Banco Mundial y el PNUD. Otro aspecto fundamental hacia el logro de soluciones duraderas es la integración de las personas desplazadas en los lugares de refugio, o la reintegración en las comunidades a las que retornan. La integración, en este sentido, implica que no haya diferencias significativas entre la población local y los migrantes forzosos en cuanto a sus derechos, su estatuto jurídico y el acceso a servicios esenciales y oportunidades económicas (*ibíd.*). Esto debería fomentarse mediante un mayor enfoque en la asistencia humanitaria. En el caso de reemigración, es imperativo establecer un fundamento sostenible para programas de reconstrucción y de desarrollo.

En general, en cuanto al apoyo a las IDP, no se trata de suministrar ayuda material como alimentos y carpas, sino de ofrecerles una posibilidad de restablecer su vida y luchar de forma autodeterminada por sus derechos. A este respecto, el aspecto anteriormente mencionado de la participación en cuanto a la elección y distribución del suministro de socorro constituye un asunto imprescindible. Por lo tanto, los órganos de la ONU tienen que reconocer estos aspectos, abogar por un lugar seguro de residencia de las IDP y por una coordinación mejor con las diferentes instituciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones.

Por último, cabe destacar que la neutralidad e imparcialidad dentro del sistema de protección de la ONU deben ser mejoradas con el fin de poder ofrecer apoyo justo y seguridad suficiente para las IDP. Las debilidades mencionadas tienen un impacto directo en la situación de los desplazados, por lo que todos los investigadores citados afirman la necesidad de cambios en el sistema de las Naciones Unidas. En el capítulo siguiente, se dará una visión general de los agentes relevantes y sus mandatos, y se discutirán las diferentes propuestas de revisión de sus responsabilidades.

¹⁶ Estos asuntos serán discutidos profundamente en la parte III, capítulo 6.

4. Los agentes más importantes en el sistema de protección

Debido a su situación difícil y la falta de apoyo, las IDP carecen de posibilidades para defender sus derechos, por lo que frecuentemente son abusados por grupos militares o políticos para fines estratégicos (Martin *et al.* 2005: 2-3): en muchas regiones sufren explotación laboral y/o reclutamiento forzado en operaciones militares. En este contexto, cabe mencionar el ejemplo de Afganistán y el reclutamiento forzado de hombres y niños por parte de los talibanes¹⁷. Consecuentemente, las IDP dependen significativamente del apoyo por parte de las organizaciones humanitarias. Sus tareas se caracterizan principalmente por el suministro de diferentes servicios: el abastecimiento de alimentos y agua potable, asistencia médica y apoyo psicológico, servicios sociales, alojamiento, y educación (*ibíd.* 95). No obstante, aunque muchas organizaciones, tanto órganos de la ONU como ONGs, están involucradas en el sistema de protección para las IDP, ninguna actúa sobre una base jurídica, dado que no disponen de ningún mandato específico para la protección de las IDP. Cohen y Deng (1998a: 8) resumen: “None of these organizations [ACNUR, PMA, UNICEF, PNUD, OMS, CDH, OIM] has a global mandate to protect and assist the internally displaced”.

En cuanto a los agentes humanitarios, para las IDP tradicionalmente las organizaciones más importantes de la ONU son el ACNUR, CDH, UNICEF, OACDH, ECHA, OCAH, PNUD, PMA y OMS. Dentro de las organizaciones no originadas en las Naciones Unidas destaca sobre todo el CICR y la OIM.

Como respuesta a la creciente preocupación internacional por el gran número de IDP en todo el mundo y su necesidad de protección y asistencia, en 1992, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que designara un Representante de las IDP (Resolución 1992/73): el denominado *Representative of the Secretary General on Internally Displaced Persons* (Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos). En 2010, el título del mandato fue renombrado a *Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons*, es decir, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos. Cabe destacar que constituye la única posición dentro del sistema de la ONU que, debido a su mandato, se ocupa explícitamente de las IDP (*ibíd.* 155).

En lo sucesivo serán presentados algunos mandatos de los órganos claves de las Naciones Unidas y se detallará el papel estatal en relación con la protección de las IDP. A continuación, se expondrá el desarrollo del llamado *Cluster Approach* de la ONU.

¹⁷ Amnesty International, 23.02.2012.

4.1 Los órganos responsables de las IDP y sus mandatos

4.1.1 El Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos / El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos

Como ya se ha señalado, el cargo del Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos fue introducido en 1992 por el antiguo Secretario General Boutros Boutros-Ghali en respuesta a la petición de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El primer Representante fue el sudanés del sur Francis Mading Deng, seguido por el suizo Walter Kälin en 2004. En 2010 fue elegido el zambiano Dr. Chaloka Beyani, y también se cambió el título a Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, debido a un mayor enfoque en los derechos humanos. No obstante, el mandato no ha sido afectado. En septiembre de 2016, Cecilia Jimenez-Damary de las Filipinas asumió el puesto. El Relator Especial está autorizado a promover la protección y el respeto de los derechos humanos de las IDP, fomentar el diálogo con los gobiernos y organizaciones intergubernamentales (como la OIM), regionales y no gubernamentales, así como con otros agentes relevantes, fortalecer la respuesta internacional al desplazamiento interno e integrar los derechos humanos de las IDP en todas las partes pertinentes del sistema de la ONU¹⁸. En la mayoría de los casos, los informes que publica se redactan después de haber viajado a determinados Estados afectados por el desplazamiento interno. Generalmente, contienen recomendaciones para los gobiernos y organizaciones internacionales para poder mejorar el trato de las IDP y para aumentar la conciencia sobre su situación (Cohen y Deng 1998a: 156). Durante su mandato, Francis M. Deng se abogó mucho por el desarrollo de un marco jurídico y realizó un análisis amplio sobre la situación de las IDP. Además, junto con un grupo de expertos jurídicos internacionales, redactó los denominados *Guiding Principles on Internal Displacement* (*ibíd.*; parte I, cap. 7 y parte III, cap. 6.1.3.2 de la presente tesis).

Aunque Deng consiguió muchas mejoras dentro del sistema de las Naciones Unidas, su trabajo fue limitado, como consecuencia de su carácter honorífico. Además, cabe señalar que el cargo del Representante o Relator Especial, respectivamente, no incluye ninguna autoridad de acción y sólo dispone de pocos asistentes y escasos recursos económicos y temporales (*ibíd.* 157). Otro reto presenta la necesidad de comunicar con los respectivos gobiernos de manera eficaz. Por un lado, es imprescindible discutir aspectos críticos, por otro lado, los gobiernos deberían aceptar y realizar las recomendaciones propuestas, lo que requiere de mucha sensibilidad y capacidad negociadora. Aunque el Relator Especial dispone de la autoridad oficial de negociar con los gobiernos, no tiene validez frente a actores no estatales, como por ejemplo grupos rebeldes, lo

¹⁸ UN, OHCHR, “Introduction to the mandate of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, Dr. Chaloka Beyani”, 2016.

que puede llevar a situaciones complejas muy desafiantes, dado que las IDP frecuentemente están a su merced y, por lo tanto, son particularmente vulnerables (*ibíd.*).

4.1.2 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Fundado en 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ACNUR es el órgano principal responsable de los refugiados a nivel global. La *refugee agency* se origina en la Segunda Guerra Mundial y el gran impacto que conllevó al causar el desplazamiento forzoso de millones de europeos. En 2016, de los aproximadamente 22,5 millones de refugiados en el mundo, unos 17,2 se encontraron bajo su mandato. Debido al creciente número de personas desplazadas dentro de sus propios países, el mandato del ACNUR ha sido extendido a las IDP: en 2013, se ocupó de aproximadamente 15,5 millones de un total de 28,8 millones de IDP a nivel mundial¹⁹. Los aumentos regionales más destacados en 2016 se produjeron en África y Oriente Medio con unos 30% y 26% de todas las personas desplazadas, respectivamente. Entre 2011 y 2013, el número de IDP en estas regiones se incrementó por un 40% (UNHCR, 2016/2017).

Aunque el mandato del ACNUR no prevé el apoyo a las IDP, regularmente ha sido encargado con su protección por parte de los Secretarios Generales de la ONU. Como ya se ha dicho, al no cruzar ninguna frontera internacional, no están protegidas por convenciones internacionales correspondientes a los refugiados (*ibíd.*). No obstante, el ACNUR destaca: “Like refugees, they were forcibly displaced by conflict, generalized violence and human rights violations” (*ibíd.*). Por lo tanto, muchas veces las misiones humanitarias están vinculadas y coordinadas conjuntamente. Esto se aplica sobre todo en el retorno al país de origen, cuando tanto los refugiados como IDP vuelven a las mismas regiones, enfrentándose a problemas similares. El ACNUR ofrece a las IDP tanto protección como asistencia y apoyo en la reintegración (Cohen y Deng, 1998a: 129). A lo largo de los años, y debido a la creciente necesidad de ampliar sus actividades, el ACNUR ha aumentado el número de sus oficinas y operaciones. Sin embargo, la agencia ha tenido que recortar su personal para poder asignar más recursos a operaciones de campo. En el ámbito financiero, el ACNUR ha obtenido cada vez más por donantes generosos del sector público y privado. El presupuesto anual es de un récord de USD 7,7 mil millones²⁰: alrededor de 87% derivan de gobiernos nacionales y de la UE, un 3% de otras organizaciones intergubernamentales y otro 9% del sector privado, incluyendo fundaciones, corporaciones y el público (*ibíd.*). El presupuesto anual incluye programas anuales, o sea el apoyo a operaciones regulares continuas, y

¹⁹ Debido a la falta de datos fiables en el momento de redactar la presente tesis (estado: 11/2017), no se conoce el número de IDP que se encuentra bajo el mandato de protección del ACNUR.

²⁰ En 1950 fue de USD 300.000; en 2012 de USD 4,3 mil millones.

programas complementarios para cubrir emergencias, como por ejemplo la crisis en Siria. No obstante, el ACNUR no puede ocuparse de todas las IDP, dado que esta tarea excedería su presupuesto. Otra dificultad destacable surge al proteger y asistir a personas en situaciones de conflictos internos y al mismo tiempo intentar garantizar la seguridad del propio personal. En este contexto, Cohen y Deng (1998a: 130) mencionan un reparo que se debe a dicha protección y el derecho a asilo: “Other concerns relate (...) to the tensions that arise between protecting people in their countries of origin and simultaneously defending their right to leave their country and seek asylum from persecution”.

4.1.3 El Comité Internacional de la Cruz Roja

El CICR es la institución que más apoyo puede ofrecer a las IDP y que mejor puede aplicar su mandato a la situación de las mismas (Cohen y Deng 1998a: 131). El CICR es una organización independiente que no pertenece a las Naciones Unidas. Por lo tanto, también en situaciones políticamente difíciles, tendencialmente tiene mejores posibilidades de localizar y alcanzar a grupos de personas a los que gobiernos y/o grupos rebeldes no autorizarían el acceso para agentes de la ONU, debido a su neutralidad dudosa (*ibíd.*). El CICR se describe como sigue:

Desde su fundación en 1863, el objetivo único del CICR ha sido prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos y enfrentamientos armados. Lo hace mediante la realización directa de actividades en todo el mundo, así como mediante el fomento del desarrollo del derecho internacional humanitario (DIH) y la promoción del respeto de esta rama del derecho por parte de los Gobiernos y de los portadores de armas. (CICR, 29.10.2010)

El origen del CICR reside en el suizo Henry Dunant, que a base de sus experiencias en la batalla de Solferino²¹ abogó por un tratamiento mejor de los soldados heridos en los campos de batalla. Después de haber reunido a representantes del gobierno suizo con el fin de establecer sociedades nacionales de socorro auxiliadas por los servicios sanitarios de los ejércitos, en 1864, el Comité logró persuadir a otros gobiernos nacionales a aprobar el primer Convenio de Ginebra:

*Por ese tratado los ejércitos tenían la obligación de prestar asistencia a los soldados heridos, independientemente del bando al que pertenecían, y se introdujo un emblema uniforme para los servicios sanitarios: una cruz roja sobre fondo blanco (*ibíd.*)*

Desde 1945, y sobre todo tras los impactos devastadores de la Segunda Guerra Mundial, el CICR ha instado a los gobiernos nacionales a fomentar y respetar el derecho internacional. Por la

²¹ La batalla de Solferino fue una batalla decisiva en la Guerra de Cerdeña, también llamada la Segunda Guerra de Independencia italiana, entre el Imperio austríaco y el Reino de Cerdeña junto con su aliado Francia bajo Napoleón III. Con la derrota de los austríacos en Solferino el 24 de junio de 1859, se sentó la base de la unificación de Italia. Después de esta batalla, el suizo Henry Dunant, testigo del sufrimiento y la violencia durante la guerra, publicó su libro *Recuerdo de Solferino* en el que lanzó “un llamamiento para mejorar la asistencia a los soldados heridos en tiempo de guerra”, lo que llevó a la fundación de un Comité que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 29.10.2010).

iniciativa del CICR en 1949, la comunidad internacional acordó la revisión de los tres Convenios de Ginebra existentes que cubren los heridos y enfermos en el campo de batalla, las víctimas de la guerra en el mar, y los prisioneros de guerra, así como la adición de un cuarto convenio para proteger a los civiles que viven bajo el control del enemigo. Los convenios cubren los principales ámbitos de acción del CICR en situaciones de conflicto armado. En 1977, se adoptaron dos Protocolos adicionales: el primero se aplica a los conflictos armados internacionales, el segundo a los nacionales. Los protocolos también establecen normas relativas a la conducción de las hostilidades (*ibíd.*). En cuanto a la financiación, cabe destacar que el CICR “se financia mediante las contribuciones voluntarias de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, es decir de los Gobiernos, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de organizaciones supranacionales (como la UE), y de fuentes públicas y privadas” (*ibíd.*). Aunque el mandato del CICR prevé neutralidad, en muchas situaciones tiene que colaborar con organizaciones de las Naciones Unidas, como el ACNUR, aunque conlleva dificultades: debido a intereses propios y prejuicios, muchas de las intervenciones de la ONU no son consideradas neutrales (Cohen y Deng 1998a: 132). El trabajo del CICR se basa principalmente en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales; no obstante, dado que algunos Estados no los han firmado²², frecuentemente prohíben el acceso a su territorio, tanto frente a los órganos de las Naciones Unidas como al CICR (*ibíd.*).

4.1.4 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

La relación entre UNICEF y las IDP se origina en el apoyo a mujeres y niños en los ámbitos de asistencia sanitaria, alimentación, suministro de agua y educación, de los que se ocupa UNICEF como organización de desarrollo (Cohen y Deng 1998a: 136). Inicialmente, la organización se negó a encargarse de las IDP, dado que su misión tradicionalmente se enfoca en el fortalecimiento de las sociedades en su conjunto y el fomento de capacidades locales. No obstante, debido a la creciente necesidad de intervenir en situaciones de urgencias graves, UNICEF adaptó ciertos ámbitos de acción y por parte del ACNUR recibió la responsabilidad por menores de edad no acompañados dentro de sus países de origen (*ibíd.* 138). La institución considera a *internally displaced children* el grupo de niños menos protegido, por lo que se aboga por sus derechos y su apoyo sostenible.

Pero cabe señalar que UNICEF ya ha estado confrontado con numerosas críticas dirigidas a sus misiones: dado que el mandato de UNICEF sólo se aplica de manera muy limitada a la situación

²² Entre los países que no han firmado ninguno de los Protocolos adicionales destacan Somalia, Eritrea, India, Pakistán, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia e Irán. (ICRC, “Treaties and States parties to such Treaties”, 2016).

de las IDP, se ha reprochado que no se ocupa suficientemente de las cuestiones de protección y de los derechos humanos (*ibíd.*). Desde el punto de vista de Cohen y Deng, una mayor implicación en el apoyo a las IDP posiblemente requiere una modificación del mandato, es decir, desde una organización de desarrollo hacia el fomento y la defensa de los derechos humanos. De cualquier forma, es inevitable que la organización se comprometa a ciertas responsabilidades relacionadas con las IDP, sobre todo con niños desplazados en situaciones de “acute risk” (*ibíd.* 139).

Aunque existen numerosas otras instituciones relevantes respecto a las IDP, en este capítulo no se las puede presentar a todas en detalle. No obstante, serán analizadas profundamente en la parte III, capítulos 6.2 en el marco del análisis sobre el suministro del apoyo humanitario y la implementación del *Global Protection Cluster* en la crisis libia. Junto con el *Cluster Approach*, éste será presentado en el subcapítulo siguiente, seguido por una breve descripción del papel del Estado, dado que será de importancia significativa respecto a la discusión posterior sobre la soberanía estatal.

4.2 El *Cluster Approach* y el *Global Protection Cluster*

En situaciones de emergencia, el aspecto de una coordinación eficaz es imprescindible. Una buena coordinación significa menos lagunas e interferencias en la asistencia prestada por organizaciones humanitarias. Los fundamentos del sistema actual de coordinación humanitaria internacional fueron establecidos por la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1991 al haber implementado el denominado *Collaborative Approach*. En teoría, los actores involucrados debían colaborar de forma coordinada para proteger a las IDP; no obstante, en la práctica muchas veces ninguna de las organizaciones asumía la responsabilidad por determinados sectores (Cohen 2006). En 2005, tras numerosas críticas, se realizó una reforma considerable de la coordinación humanitaria, conocida como *Humanitarian Reform Agenda* o Agenda de Reforma Humanitaria, por la que se introdujo una serie de nuevos elementos basados en cuatro pilares:

- (1) mejorar el liderazgo humanitario (a través de un sistema de coordinadores humanitarios);
- (2) una mejor coordinación de la acción humanitaria (a través del *Cluster Approach*);
- (3) promover un financiamiento más rápido, equitativo y predecible (a través de una financiación humanitaria mejorada como el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF)²³;

²³ El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) es un fondo humanitario establecido por la Asamblea General en 2006 para habilitar la asistencia humanitaria de manera rápida y efectiva a los afectados por desastres naturales y conflictos armados. El fondo se repone anualmente a través de contribuciones de los gobiernos y el sector privado, y constituye un grupo de fondos de reserva para apoyar la acción humanitaria. (OCAH, junio 2010).

(4) asociaciones más eficaces entre todos los agentes humanitarios (a través de los *Principles of Partnership*²⁴ implementados en 2007) (cf. HRP 2009: 9).

En cuanto al *Cluster Approach*, la definición es como sigue:

The Cluster Approach was established to address gaps in humanitarian response and to improve the predictability, accountability, and effectiveness of relief efforts through a more coordinated humanitarian relief response. (IASC 2006: 1)

Por lo tanto, con tal coordinación, es decir el “enfoque por grupos temáticos”, la meta no sólo implica la mejora de la previsibilidad, responsabilidad y colaboración, sino también la garantía de un enfoque coherente y complementario para identificar maneras de cooperación entre los agentes humanitarios activos en una determinada crisis y para obtener mejores resultados colectivos²⁵. Con el *Collaborative Approach*, la coordinación le incumbe al *Emergency Relief Coordinator* (ERC), es decir, el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, y a los coordinadores humanitarios en el país afectado. El concepto de *clusters* implica un grupo de organizaciones uniéndose en torno a un ámbito común de la ayuda humanitaria, por ejemplo protección, alimentos, salud, educación, etc., y *approach* implica que las organizaciones, tanto de la ONU como ONGs y otras, colaboran en un espíritu de inclusión (cf. Shepherd-Barron 2009: 6). Los *clusters* son designados por el *Inter-Agency Standing Committee* (IASC), o sea el Comité Permanente entre Organismos, y tienen responsabilidades claras de coordinación. Están establecidos en todo el mundo y de manera ‘*ad hoc*’ durante tiempos de emergencia a nivel estatal y originalmente han sido distribuidos como sigue:

- Salud – OMS
- Seguridad alimentaria – PMA y FAO
- Telecomunicaciones de emergencia – PMA
- Educación – UNICEF y *Save the Children*
- Recuperación temprana – PNUD
- Coordinación y gestión de campamentos – OIM y ACNUR
- Agua, saneamiento e higiene (WASH) – UNICEF
- Refugio – FICR y ACNUR
- Protección – ACNUR
- Nutrición – UNICEF
- Logística – PMA

²⁴ Los *Principles of Partnership* fueron implementados en 2007 por la *Global Humanitarian Platform* que reúne a organizaciones de dentro y fuera de las Naciones Unidas en condiciones de igualdad. Los principios acordados son igualdad y respeto mutuo de todos los actores, transparencia a través del diálogo, un enfoque centrado en resultados, responsabilidad (realizar las actividades de forma adecuada y competente al prevenir abusos), y complementación (fomentar la integración de organizaciones locales y de esta manera superar barreras lingüísticas y culturales). Cf. CMWG, August 2008.

²⁵ Cf. Humanitarian Response, 2005.

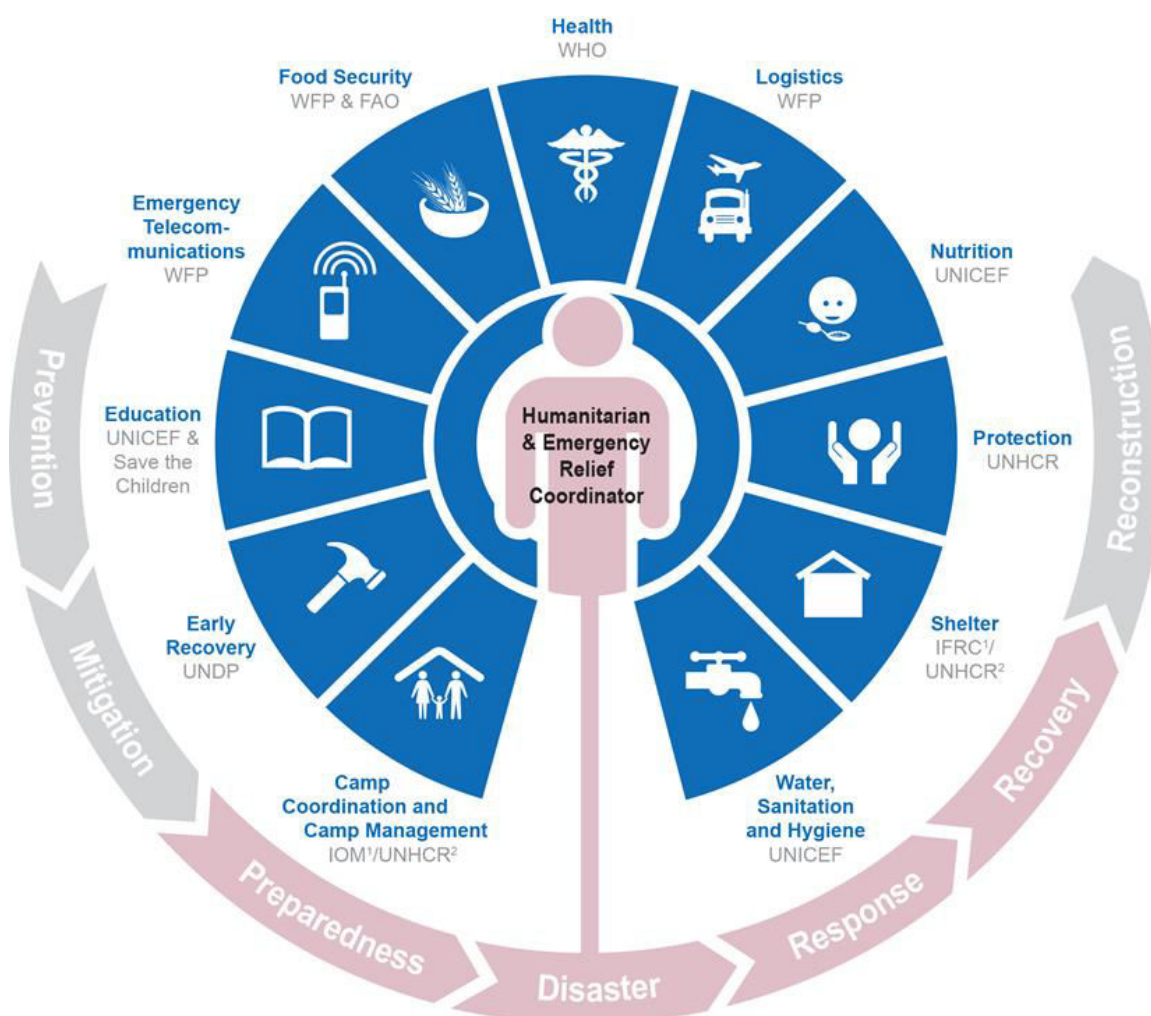


Gráfico 1: El Cluster Approach. Las organizaciones involucradas y sus responsabilidades (Humanitarian Response, 2005).

No obstante, cabe mencionar que el concepto del *Cluster Approach* ha sido ampliado constantemente, por lo que en el caso de Libia las responsabilidades de los diferentes sectores han sido redistribuidos a una red más versátil de agentes humanitarios (véase parte III, cap. 6.2). Los *clusters* globales se ocupan, entre otros, de la formación, el apoyo operativo y herramientas y tienen dos objetivos principales: (1) proporcionar apoyo sistemático, oportuno y previsible a los *clusters* a nivel estatal; y (2) asegurar un liderazgo predecible y responsable (Steets *et al.* 2010: 24).

El establecimiento de los *clusters* a nivel estatal durante situaciones de emergencias tiene como objetivo garantizar una respuesta más coherente y eficaz a través de la movilización de actores humanitarios que responden de manera estratégica en todos los ámbitos y con un organismo designado como líder en cada uno de los sectores (IASC 2006: 13).

En la actualidad, el *Cluster Approach* está implementado en veintisiete Estados experimentando situaciones de emergencia humanitaria²⁶.

²⁶ *Clusters* están implementados formalmente en 27 de los 29 Estados con Coordinadores Humanitarios. Éstos son designados por el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas en nombre del Secretario General, cuando ocurre una emergencia compleja o cuando una situación humanitaria empeora (GILLMANN 2010: 330). Desde agosto de 2012, ha habido grupos activos en Afganistán, Burundi, la República

Sus responsabilidades en cuanto a la coordinación humanitaria se pueden resumir como sigue:

- **aumento de la transparencia y la asunción de responsabilidad:** una mayor transparencia en la asignación de recursos, el liderazgo conjunto y el desempeño operativo lleva a una mayor asunción de responsabilidad;
- **mejora de la previsibilidad:** las responsabilidades sectoriales y temáticas son bien definidas, y se han establecido mecanismos formales para estructurar mejor aquellas áreas que todavía requieren mejoras tanto a nivel nacional como internacional;
- **colaboración con autoridades nacionales y locales:** tener un solo responsable como punto de referencia dentro del sistema humanitario internacional acelera la resolución de problemas, y permite un mayor acceso de la comunidad no gubernamental al gobierno en cuestión y a instancias decisorias de las Naciones Unidas;
- **inclusión de las comunidades afectadas:** servicios, recursos e instrumentos desarrollados a través del *Cluster Approach* aseguran que aquellos que saben de las soluciones más apropiadas a sus problemas sean involucrados en la elaboración de la respuesta. Asimismo, ofrece la posibilidad a los afectados por la crisis acceder directamente al gobierno nacional y/o las instancias decisorias;
- **compromiso más efectivo:** es imprescindible que los *clusters*, tanto individuales como colectivos, se unan y colaboren con el fin de poder abogar firmemente por asuntos de interés común, y de este modo apoyar a minorías afectadas que normalmente no recibirían ninguna o no mucha atención;
- **planificación estratégica y operacional conjunta:** el proceso formal de coordinación dentro de y entre los *clusters* tiene como objetivo mejorar su eficiencia (*cf.* Humanitarian Response, 2005).

En resumen, los *clusters* reúnen a asociados de los respectivos sectores que disponen de la experiencia, los recursos, el acceso y las capacidades más requeridos en una crisis determinada. Son fundamentales para el *Cluster Approach* adoptado por el Comité Permanente entre Organismos (IASC) a operar en crisis humanitarias frecuentemente no relacionadas con desplazamiento transfronterizo.

En lo que concierne al *Global Protection Cluster* (GPC), es el instrumento que coordina y proporciona asesoramiento sobre políticas a nivel mundial entre los organismos, así como orientación respecto a la aplicación del *Cluster Approach* sobre el terreno. Asimismo, apoya

respuestas de protección en acciones humanitarias y establece normas y políticas relacionadas con protección en emergencias humanitarias complejas y desastres naturales, en particular con respecto a la protección de las IDP. El ACNUR es la *Global Cluster Lead Agency for Protection*. Por tanto, tiene la responsabilidad primordial de dirigir y coordinar a otros organismos de la ONU, de organizaciones intergubernamentales y ONGs participantes en el GPC. Aparte, el ACNUR co-lidera el *Global Cluster for Shelter*, o sea el Grupo Temático sobre Refugios, y el Grupo Temático de Coordinación y Gestión de Campamentos (*Global Cluster for Camp Coordination and Camp Management*; CCCM). Sus prioridades consisten en asegurar el liderazgo, la coordinación, promoción y ejecución operacionales eficaces a nivel nacional e influir en el desarrollo de una política mundial de protección en la acción humanitaria, incluida la protección de las IDP (cf. UNHCR 2017).

Como muestra el siguiente gráfico, en el marco de la coordinación humanitaria está involucrado un gran número de agentes:

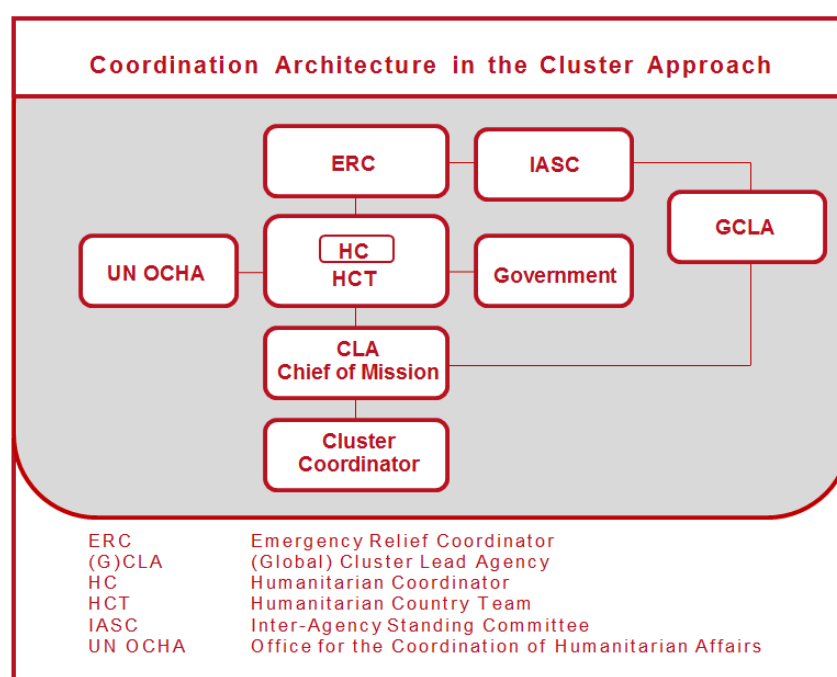


Gráfico 2: La estructura de coordinación en el Cluster Approach (Humanitarian Response, 2005).

El **Coordinador del Socorro de Emergencia** (*Emergency Relief Coordinator*; **ERC**) es el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y dirige el IASC que coordina el apoyo humanitario de organizaciones de las Naciones Unidas y no-Naciones Unidas. El ERC es responsable de la supervisión de todas las emergencias que requieren asistencia humanitaria de la ONU. En un país afectado por un desastre o conflicto, el ERC puede nombrar un Coordinador de Asuntos Humanitarios (HC). Al proponer el HC, el ERC garantiza la aprobación por parte del IASC con el fin de activar los *clusters* y sus responsabilidades.

El Comité Permanente entre Organismos (*Inter-Agency Standing Committee; IASC*) es un foro único interinstitucional para la coordinación, el desarrollo de políticas y la toma de decisiones en el que participan los principales colaboradores humanitarios de las Naciones Unidas y no pertenecientes a las Naciones Unidas. Bajo el liderazgo del ERC, el IASC desarrolla políticas humanitarias, acuerda una clara división de responsabilidades para los diversos aspectos de la asistencia humanitaria, identifica y resuelve lagunas en la respuesta humanitaria y aboga por la aplicación efectiva de los principios humanitarios.

La **OCAH (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; OCHA*)** colabora estrechamente con las agencias de *clusters* globales y las ONGs para desarrollar políticas adecuadas, coordinar las cuestiones entre los *clusters*, divulgar orientación operacional y organizar el apoyo sobre el terreno. A este nivel, la OCAH ayuda a asegurar que el sistema humanitario funcione eficientemente y apoya el liderazgo del HC. Asimismo, proporciona directrices, consejo y apoyo al HC y al *Humanitarian Country Team*, y facilita la coordinación entre los diferentes grupos. También ayuda a asegurar la coordinación entre los *clusters* en todas las fases de la respuesta humanitaria, incluyendo evaluaciones de necesidades, planificación conjunta y seguimiento.

El Coordinador de Asuntos Humanitarios (*Humanitarian Coordinator; HC*) es responsable de evaluar si una respuesta internacional a una crisis determinada está justificada o no, y en caso necesario, de asegurar que los esfuerzos de la respuesta humanitaria estén bien organizados. El HC es responsable ante el ERC. El HC dirige al *Humanitarian Country Team* en las decisiones sobre las soluciones de coordinación más apropiadas para su país, teniendo en cuenta la situación local, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la cuestión sobre qué tipos de *cluster* deben establecerse y bajo la supervisión de cuáles organizaciones deben operar.

El Equipo de Asistencia Humanitaria en el País (*Humanitarian Country Team; HCT*) es un foro estratégico, operativo decisorio y supervisor establecido y dirigido por el HC. Incluye representantes de las Naciones Unidas, la OIM, ONGs internacionales, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las organizaciones que también son designadas de *clusters* deben representar tanto a estos últimos como a sus propias organizaciones. El HCT es responsable de acordar temas y cuestiones estratégicos comunes relacionados con la acción humanitaria.

De conformidad con la antes mencionada Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1991, el Estado afectado, es decir, los actores gubernamentales y nacionales,

mantienen el papel primordial en la iniciación, organización, coordinación y ejecución de la asistencia humanitaria en su territorio.

Los organismos principales encargados de los grupos temáticos, los denominados *Global Cluster Lead Agencies*, proporcionan las siguientes formas de apoyo para consolidar la respuesta sobre el terreno:

- capacidad técnica
- expertos capacitados para dirigir la coordinación de los *clusters* sobre el terreno
- un aumento de almacenes de las ayudas humanitarias
- instrumentos técnicos estandarizados, también para la gestión de la información
- un acuerdo sobre métodos y formatos comunes para la evaluación de las necesidades, el seguimiento y la evaluación comparativa
- prácticas mejores a través de lecciones aprendidas por pruebas en el terreno

La designada **Agencia Líder del Sector (*Cluster Lead Agency*)** dirige y gestiona el respectivo *cluster*; cuando sea posible, en coordinación con los organismos gubernamentales y ONGs. A escala nacional, los jefes de las Agencias Líderes son responsables ante el HC de

- asegurar que se establezcan y apoyen adecuadamente mecanismos de coordinación
- servir como primer punto de contacto para el gobierno y el HC, y de
- actuar como proveedor en última instancia en su respectivo sector.

Los **Coordinadores de Cluster** son responsables de asegurar que los desafíos y cuestiones específicos de un *cluster*, que no pueden resolverse dentro del mismo, sean planteados y debidamente discutidos en el HCT, así como que las decisiones estratégicas resultantes sean compartidas y puestas en práctica a nivel operacional.

Los **Miembros del Cluster** deben respetar y adherirse a los compromisos mínimos que establecen las metas a las que todas las organizaciones locales, nacionales y/o internacionales se comprometen a contribuir. Estos incluyen

- un compromiso común con los principios humanitarios y los principios de colaboración²⁷
- un compromiso con la protección general en la ejecución de los programas
- una disposición para participar en acciones que mejoren específicamente la asunción de responsabilidad frente a las poblaciones afectadas

²⁷ Toda acción humanitaria está sujeta a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Estos principios, derivados del derecho internacional humanitario, han sido retomados por las Naciones Unidas en las Resoluciones 46/182 y 58/114 de la Asamblea General. Además, su reconocimiento y relevancia a nivel mundial son realizados en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, ONGs, y la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (UN, UNHCR, “Humanitarian principles”, 2017).

- entender las obligaciones y responsabilidades asociadas con la pertenencia a un grupo de *cluster* y comprometerse a participar de manera consistente en el trabajo colectivo del *cluster*, así como en el plan y las actividades del mismo
- un compromiso para asegurar el uso óptimo de los recursos y compartir informaciones relevantes sobre los recursos organizativos
- la voluntad de asumir responsabilidades de liderazgo cuando sea necesario y si la capacidad y los mandatos lo permiten
- contribuir al desarrollo y la difusión de los conceptos y contenidos relativos a los *clusters* para fomentar su promoción frente a colaboradores potenciales, y
- asegurarse de que los *clusters* proporcionen traducciones e interpretaciones para que todos los asociados tengan la posibilidad de entender los contenidos de las misiones y participar activamente²⁸.

4.2.1 Críticas y debilidades

Desde su primera aplicación en 2005 después del terremoto en Cachemira con más de 87.000 víctimas, se han llevado a cabo dos evaluaciones principales del *Cluster Approach*: una en 2007 enfocándose en la implementación, y otra en 2010 centrándose en los resultados del primero tras haber mejorado la asistencia humanitaria (UNHCR 2013).

De acuerdo con un estudio que analizó en total unos dieciocho evaluaciones con especial referencia a la más global e integral de 2010, destaca que respecto a su eficacia global, el *Cluster Approach* está considerado un mecanismo útil de coordinación. Pero aunque se ha establecido bien como concepto, todavía se registran deficiencias en los ámbitos de liderazgo predecible, la asunción de responsabilidad y en la colaboración, lo que en las intervenciones frecuentemente ha conllevado una consideración limitada y parcial de la situación global. En este contexto, cabe mencionar que en lugar de apoyo jurídico y del fomento de medidas para generar educación e ingresos, generalmente sólo han sido realizadas soluciones a corto plazo, como el suministro de bienes y servicios básicos, lo que a largo plazo fácilmente puede empeorar la situación de las IDP, debido al desarrollo de dependencias (Humphries 2013). Una de las numerosas razones es la falta de experiencia de muchos coordinadores de los *clusters*, así como poca formación en cuanto a la coordinación (*cf.* Steets *et al.* 2010: 9). Asimismo, se registra una falta de capacidad en cuanto al número de personal experimentado. En cuanto a la colaboración entre los agentes humanitarios involucrados destaca que las ONGs frecuentemente consideran las intervenciones

²⁸ Humanitarian Response, 2005a.

demasiado dominadas por los órganos de la ONU, sintiéndose como agentes subordinados y apenas consultados en la planificación de las misiones y en la toma de decisiones (*cf.* HRP 2009: 23; Steets *et al.* 2010: 43). De acuerdo con un trabajador de una ONG en el Chad, el *Cluster Approach* es “nothing more than a way for the UN to control us” (IRIN 2008a; Humphries 2013). Un ejemplo en este contexto constituye la crisis de Darfur en 2005, en la que la respuesta humanitaria realizada mediante el *Cluster Approach* resultó en una intervención muy criticada y percibida como inadecuada. Aunque se haya aumentado la eficacia de la acción humanitaria a través del “enfoque por grupos”, sin embargo, hasta la fecha hay numerosos problemas no resueltos. Un análisis específico sobre la intervención en Darfur y las dos evaluaciones globales de 2007 y 2010 revelaron que todavía destacan lagunas significantes en el intercambio de información, la coordinación interinstitucional, el liderazgo estratégico, así como en numerosas cuestiones intersectoriales respecto de los medios de subsistencia y de protección. Otro ejemplo es la intervención después del terremoto en Haití en 2010 en la que los actores nacionales se vieron marginados por los agentes internacionales. ONGs haitianas frecuentemente fueron relegadas al papel de asociados en la ejecución, excluidas por completo de los *clusters* y de los mecanismos de coordinación, por lo que se les disminuyó su capacidad de colaborar y contribuir como actores equiparados en la misión (*cf.* Steets *et al.*, 2010: 44; Humphries 2013).

En lo que concierne a las reuniones de coordinación de los *clusters*, destaca que en la mayoría de los casos no se celebran en el idioma local, y por lo general solamente tienen lugar en ciudades grandes donde las Naciones Unidas tienen establecidas sus sedes locales o regionales. Para ONGs locales, estas circunstancias gravemente obstaculizan su participación y colaboración activa en las intervenciones (*cf.* Humphries 2013).

Como mencionado anteriormente, una de las razones principales por el establecimiento del *Cluster Approach* era la responsabilidad y transparencia insuficiente en el apoyo humanitario. Con dichos conceptos, se trata del uso responsable de poder y la garantía de la realización eficaz de los programas al satisfacer las necesidades de los afectados en una crisis determinada y al reducir la posibilidad de cometer fallos (*cf.* HAP 2012; Humphries 2013). La falta de coordinación que se revela en los ejemplos antes citados también se manifiesta por la falta registrada en cuanto a la participación de la población destinataria en el suministro de bienes y servicios básicos:

Clusters are often criticized for overlooking the needs and demands of those whom they intend to serve which can have severe implications for strategy development. Numerous evaluations found no evidence or examples of clusters promoting participatory approaches or found that evaluations of such work did not focus on their impact on target population. (Homes 2010; Steets et al. 2010: 59; HRP 2009: 25)

Esto significa que por falta de acuerdos anticipados entre la ONU y ONGs locales, los suministros de los bienes no siempre coinciden con las necesidades verdaderas de la población afectada por una crisis. Según Gillmann (2010), estos resultados refuerzan la importancia y urgencia de tener que seguir mejorando la respuesta de socorro en el sistema humanitario internacional (*cf.* 63). Pero aunque esté criticado por muchos motivos, en la actualidad el *Cluster Approach* constituye la estructura más adecuada para la coordinación del apoyo humanitario (Humphries 2013).

No obstante, destacan lagunas graves respecto al liderazgo predecible, la coordinación, deficiencias en la formación y una falta de experiencia por parte de los coordinadores de los *clusters*. Otras deficiencias conciernen el ámbito de la colaboración al haber revelado faltas por parte de los órganos de la ONU en cuanto a la integración de otras ONGs (locales, regionales y/o nacionales) en las operaciones. Otro problema es la distribución de las responsabilidades: de acuerdo con el concepto original del *Cluster Approach*, el ámbito de acción principal del ACNUR, por ejemplo, se enfoca en servicios de protección, es decir la construcción de refugios y la coordinación y gestión de campamentos. Pero pese a los cambios en el sistema, siguen siendo sobre todo las ONGs y no los órganos de las Naciones Unidas que se centran en la búsqueda por soluciones duraderas. Por lo tanto, Cohen (2006) considera el *Cluster Approach* como insuficiente. Se pronuncia a favor de un procedimiento global: “What is needed is a comprehensive approach that integrates protection with assistance and includes steps to defend the physical safety and rights of IDPs” (107). Sólo dos agencias internacionales, el CICR y el ACNUR, disponen de estas capacidades y experiencias para poder ocuparse de una amplia gama de actividades de protección de las IDP. No obstante, también estas dos organizaciones tienen sus límites: el CICR no suele involucrarse completamente en situaciones de violencia debajo del umbral de un conflicto armado, y por lo general se retira del terreno en cuestión cuando el conflicto haya terminado; y la implicación del ACNUR con las IDP está limitada por su mandato relacionado con los refugiados. Pero dado que el ACNUR se ha comprometido a asumir un papel de liderazgo en la protección de las IDP, sería imprescindible ampliar sus alianzas con otras agencias. Sobre todo la OACDH y UNICEF, que por gran parte se han ausentado del ámbito de protección, deberían desempeñar un papel más activo (*ibíd.*).

Para resumir, por lo general es indispensable que todos los órganos involucrados revisen e incorporen los principios fundamentales del *Cluster Approach*. Sólo de esta manera se pueden mejorar profundamente las intervenciones humanitarias realizadas en el marco de este sistema. Con el fin de complementar la discusión teórica en el caso libio, en la parte III, capítulos 6.2, será analizada la operatividad general del GPC, así como en qué medida cumple con las normas

oficiales discutidas en el presente capítulo. De esta manera será posible evaluar su aplicación en el caso real de Libia.

4.3 La responsabilidad del Estado

De acuerdo con el *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* (2007)²⁹, los Estados soberanos tienen la responsabilidad de garantizar que frente a cada persona en su territorio y bajo su jurisdicción, se cumpla con los derechos humanos de forma integral y equiparada. Dicha obligación se extiende a todos los actores estatales, incluidos militares, policía y todas las autoridades públicas, ya sea a nivel nacional, regional o local (*ibíd.* 24). Esto se determina a través de tres dimensiones de responsabilidad, divididas en la *duty to respect*, *duty to protect* y la *duty to fulfill*:

- el Estado está obligado a garantizar que todos los agentes estatales actúen de acuerdo con los derechos humanos; debe tomar las medidas necesarias para prevenir y/o terminar cualquier tipo de violación de los derechos humanos por terceras partes
- debe investigar, perseguir y castigar todo tipo de violaciones de derechos y asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos adecuados bajo el derecho interno, y
- debe tomar las medidas necesarias para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción tengan la posibilidad de ejercer sus derechos (*ibíd.*).

Aunque muchos Estados carecen de los recursos necesarios para poner en práctica los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos, la situación del presupuesto nacional nunca debería utilizarse como excusa para no poder lanzar intervenciones humanitarias con el fin de impedir una situación crítica respecto a los derechos humanos. Por lo tanto, el *Handbook* determina que las autoridades nacionales deben garantizar como mínimo el acceso constante a los derechos esenciales con el fin de poder asegurar su supervivencia, es decir, alimentos, agua, refugio básico, servicio médico y sanitario esencial. Asimismo, las autoridades deben recurrir a la asistencia internacional cuando los recursos estatales no sean suficientes (*ibíd.*).

En el caso de que un Estado se niegue enérgicamente a colaborar con los órganos de la ONU, como primera medida debe aplicarse el diálogo diplomático. Si fracasa, la comunidad internacional debe recurrir a la presencia humanitaria internacional, así como a presión política

²⁹ El *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* de 2007 es un manual elaborado conjuntamente por el personal de más de 30 organizaciones relacionadas y no relacionadas con la ONU y ONGs con el fin de garantizar, entre otros, que los trabajadores humanitarios estén familiarizados con los conceptos principales y estándares legales internacionales que constituyen el marco del trabajo de protección. Asimismo, tiene el fin de mejorar la comprensión frente a los riesgos de protección que surgen de las diversas procedencias de las IDP, prevenir y responder a tales riesgos, así como promover una respuesta de protección consistente y bien coordinada en las diferentes operaciones. Cf. UNHCR 2007.

mediante sanciones, etc. Como último medio existen medidas de intervención militar, aunque, dentro de lo posible, deberían ser evitadas (*ibíd.*).

En teoría, y de acuerdo con el *Guiding Principle 3*, para la protección de sus ciudadanos, incluidas las IDP y todas las personas que se encuentren en su territorio, el Estado es el único responsable: “The Guiding Principles on Internal Displacement emphasize that the primary responsibility for protecting and assisting IDPs lies with national governments” (*Handbook*, 2007: 67). Pero cabe destacar que cuando el Estado en cuestión no sea capaz o no quiera ocuparse de dichas personas, el *Handbook* manifiesta que la tarea de los actores internacionales no debe implicar la asunción de la responsabilidad estatal, sino el apoyo al Estado a cumplir con sus deberes. La protección de las IDP y todas las demás personas en un territorio estatal determinado es una responsabilidad nacional, por lo que los agentes internacionales principalmente deben enfocarse en el fomento de una sociedad civil fuerte y activa, capaz de constituir un control y una oposición estables frente al poder gubernamental. El *Handbook* propone, por lo tanto, unas “capacity-building activities” en doce pasos, entre las que destaca el aumento de la conciencia nacional sobre el problema de desplazamiento, la recogida de datos sobre el número y la condición de las IDP, la creación de un marco legal que confirme los derechos de las IDP, el desarrollo de una política nacional respecto a las IDP, la garantía que las IDP puedan participar en la toma de decisiones, y la cooperación con la comunidad internacional cuando la capacidad nacional sea insuficiente (*ibíd.* 409-412).

Al mismo tiempo cabe señalar que otro aspecto importante establecido en el *Handbook* es la obligación de los agentes humanitarios a respetar y promover los derechos de cada individuo. Como consecuencia, la cooperación con las comunidades es crucial para poder garantizar el respeto de los derechos de todos sus miembros. Dado que muchas violaciones de los derechos humanos se cometen dentro de la comunidad, sólo a través del trabajo conjunto se puede lograr la protección de los afectados (*ibíd.* 15).

No obstante, en algunos casos la responsabilidad y obligación de los agentes humanitarios ya se ha descontrolado y las organizaciones internacionales (voluntaria o involuntariamente) se han hecho cargo de tareas no correspondientes a sus ámbitos de responsabilidad. En este contexto, cabe mencionar a residentes de Burundi en un campamento de refugiados en Tanzania y su perspectiva con respecto al trabajo del ACNUR:

[There are] changes in the social structure, such as old men marrying young girls and old women marrying young boys, people generally marrying too young, infidelity, polygamy and prostitution. All these indicators of social disintegration relate to gender relations. Many of them also relate to age. Other changes in relationships between age groups are also often mentioned, for example that the youth no longer respect the elders or that parents no longer bring up their children properly.

In Bible men and women are equal and also with UNHCR laws. But it is not good. A man has to give some orders in his house - and when woman is equal to the man that means woman also has to give orders in the house; some orders to the man. In Burundi it is forbidden woman to give orders to the man (Village leader, February 2, 1998).

There is a change. People are not taking care of their own life. They are just living like babies in UNHCR's arms (Man, 27 years old). Turner (1999)

Aunque en el *Handbook* se argumenta que ninguna cultura es estática y por lo tanto los agentes humanitarios deben promover sobre todo los derechos de las mujeres y niños y contribuir a un cambio cultural, tal transformación de una sociedad debería efectuarse a través de la comprensión y convicción propia de los miembros en cuestión. Sólo de esta manera los cambios pueden manifestarse e incorporarse en las posturas y conductas de las personas, una vez que se acabe la crisis y los agentes humanitarios internacionales ya no estén presentes.

Por parte de la comunidad internacional este problema fue reconocido, lo que contribuyó a la introducción del *Cluster Approach* con el fin de aclarar de forma más evidente las responsabilidades particulares de las organizaciones. Al mismo tiempo destaca el ya mencionado fomento de la asunción de las responsabilidades por parte de los Estados. Pero muchos expertos en este campo, entre ellos Cohen y Deng (1998a), han criticado que los Estados frecuentemente utilizan el principio de la soberanía estatal como pretexto para mantener a distancia la comunidad internacional de sus asuntos internos (*cf.* 2).

Por lo tanto, en el siguiente capítulo se enfocará más detalladamente en las funciones y debilidades de la soberanía estatal, y se explicará la actitud de la comunidad internacional frente a este concepto.

5. La soberanía estatal

La soberanía en democracias modernas significa que el poder estatal dispone de todos los derechos de soberanía y que está tanto legitimado como limitado por la soberanía popular (este concepto constituye la soberanía interna). En el derecho internacional, la soberanía estatal implica la independencia de cualquier dominación extranjera y la igualdad de todos los Estados sin tener en cuenta sus fortalezas o debilidades económicas, militares, etc. (soberanía externa)³⁰. La soberanía “permite la protección jurídica de los Estados pequeños de la acción directa o indirecta de los Estados más poderosos” (Burgerman 2003: 89). Asimismo, al tener en cuenta esta definición, los Estados tienen un estatuto autónomo. No obstante, esta definición clásica de la soberanía está cuestionada por diversas razones: un aspecto es la establecida entrega de responsabilidades a organizaciones supranacionales como la UE, así como ciertas obligaciones de los Estados frente a la comunidad internacional. El concepto de la *Responsibility to Protect* tiene como objeto adaptar la definición de la soberanía a nuevos retos. En el subcapítulo siguiente se dará una introducción breve a este principio que será analizado y discutido más profundamente en la parte II, capítulos 1.1.2.1, 3.1.1, 3.3.4 y 5.2 en el marco de su aplicación en Libia en 2011.

5.1 La *Responsibility to Protect*: una introducción a la doctrina

De acuerdo con la *Responsibility to Protect*, la soberanía ya no es considerada como un privilegio de los Estados, sino más bien como una obligación de proteger a los propios ciudadanos. Al reconocer la falta de respuestas adecuadas frente a los crímenes más atroces a lo largo de nuestra historia, este concepto fue presentado por primera vez en 2001 en un informe de una comisión internacional establecida por el gobierno de Canadá³¹. Tres años más tarde y en el marco de un *High-Level Panel* convocado por Kofi Annan, fue aclamado expresamente en el informe *A more Secure World*. Finalmente, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en 2005, los líderes mundiales se comprometieron a proteger a las poblaciones víctimas de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad³². Este compromiso, llamado *Responsibility to Protect*, establece que:

- (1) el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de la humanidad y la limpieza étnica
- (2) la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de dicha responsabilidad

³⁰ Cf. BPB Bundeszentrale für politische Bildung, “Souveränität”.

³¹ International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, 2001.

³² 2005 World Summit Outcome, *High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibilities*, 2004, §§ 199-203; UN General Assembly, Resolution 60/1, 2005, §§ 138-140.

(3) la comunidad internacional debe recurrir a las medidas adecuadas, tanto diplomáticas y humanitarias como otros medios pacíficos, para proteger a las personas de estos crímenes. Si un Estado no protege a su población, o de hecho es el perpetrador de los crímenes, la comunidad internacional debe estar dispuesta a tomar medidas más duras, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través de la autorización por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas³³.

Esta obligación aceptada por todos los Estados miembros cuestiona de manera significativa el concepto original de la soberanía. Cabe destacar que ya en los años ‘90 surgieron críticas severas a la soberanía estatal por parte de los defensores de las intervenciones humanitarias (cf. Hehir 2010: 56). La *Responsibility to Protect*, por lo tanto, contiene un aspecto dual: por un lado la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos, y por otro lado la responsabilidad de la comunidad internacional frente a los mismos en el caso de que el Estado viole su obligación de protegerlos (*ibíd.* 105).

También el *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* considera la “responsabilidad nacional” como concepto crucial en la respuesta al desplazamiento interno y como principio de acción fundamental para la comunidad internacional, dado que este concepto constituye una parte esencial de la soberanía de cada Estado:

National responsibility is a core concept of any response to internal displacement. It is a fundamental operating principle of the international community and is routinely emphasized by governments themselves, as a function of their sovereignty. (UNHCR 2008: 9)

Asimismo, el concepto de la *Human Security* es fundamental en este contexto, dado que, en contraposición a los conceptos tradicionales de la seguridad, establece que la seguridad de los individuos y comunidades está por encima de la soberanía estatal (Hehir 2010: 110). Este concepto político reúne tanto aspectos de los derechos humanos y del mantenimiento de la paz como de la prevención de conflictos. En resumen, todos estos desarrollos y enfoques indican una ruptura con el concepto tradicional de la soberanía.

5.2 La actitud de la comunidad internacional frente a la soberanía estatal

Hoy en día los Estados ya no pueden ser considerados como ‘entidades supremas ingobernables’, lo que también implica que en teoría no pueden tratar a sus ciudadanos como quieran (cf. Hehir 2010: 124-125). Pero en la práctica sigue siendo difícil intervenir, sobre todo si

³³ ICRTOP, “An Introduction to the Responsibility to Protect”.

un Estado no ha firmado documentos claves y jurídicamente vinculantes como por ejemplo la Convención de Ginebra y/o sus Protocolos adicionales. No obstante, el concepto de la no intervención en asuntos internos pierde su prioridad cuando ciertas acciones de un Estado amenacen la seguridad de otros Estados o de la comunidad internacional entera (*cf. Martin et al. 2005: 10*). Asimismo, las Naciones Unidas tomaron la decisión que violaciones graves de los derechos humanos requieren por principio de una intervención internacional (*ibíd.*). Por lo tanto, y basado en esta conformidad, se acordaron cinco principios:

- (1) la dignidad del ser humano constituye un valor fundamental que cada Estado debe proteger [...].
- (2) es necesario aspirar a la realización de los derechos fundamentales de los pueblos y grupos de personas [...].
- (3) la discriminación racial está condenada universalmente [...].
- (4) violaciones a gran escala se condenan universalmente [...].
- (5) la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir cuando se produzcan violaciones a gran escala (*cf. Hehir 2010: 125*).

Consecuentemente, se puede deducir que para la comunidad internacional la soberanía estatal ya no constituye un principio inviolable, y defensores de esta postura señalan que la soberanía absoluta tiene que ser reemplazada por el concepto de la “sovereignty as responsibility” (Cohen 2004: 2), lo que implica que los Estados deben comprobar su estatuto como entidades independientes y autónomas mediante sus acciones:

Basically, it stipulates that states, as a measure of their sovereignty, have the fundamental responsibility to provide life-supporting protection and assistance for their citizens. If they are unable to do so, they are expected to request and accept outside offers of aid. (ibíd.)

No obstante, Cohen también subraya que si un Estado rechaza o deliberadamente obstaculiza el acceso a su territorio y pone en peligro a sus ciudadanos, la comunidad internacional tiene el derecho e incluso la responsabilidad de afirmar su preocupación:

International involvement in such cases can range from diplomatic dialogue to negotiation of access, to establishing international humanitarian presence, to political pressure, to sanctions or, as a last resort, and in exceptional cases, to military intervention. (ibíd.)

En este sentido, la protección de la soberanía de los Estados miembros de la ONU, conforme con el derecho internacional, se ve desfasada por la práctica de la intromisión.

No obstante, cabe destacar que la importancia de la soberanía estatal en el siglo XXI todavía está garantizada, dado que en la política internacional sigue protegiendo sobre todo a los Estados pequeños y más débiles de intromisiones externas (Grubmüller 2007: 72). Pero como se ha

mencionado anteriormente, la soberanía de los Estados está vinculada a una responsabilidad de protección frente a sus ciudadanos y depende fundamentalmente del respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, el concepto de la soberanía urgentemente requiere de una nueva definición (*ibíd.*).

En los siguientes capítulos nos centraremos en el ámbito de la intervención humanitaria y su relación con la temática de la soberanía. Debido a esta última, la intervención humanitaria es frecuentemente objeto de fuertes críticas, dado que presenta una intromisión masiva en los asuntos internos, por lo que significativamente socava la soberanía estatal.

6. La intervención humanitaria: una visión general

En este capítulo, en primer lugar será presentado el desplazamiento interno como asunto en la agenda humanitaria y se detallarán los diferentes factores que han contribuido al reconocimiento de la importancia del mismo por parte de la comunidad internacional. A continuación, se definirá el concepto de la ‘intervención humanitaria’ y se darán unas informaciones esenciales que también servirán como base de la discusión sobre las debilidades y reparos frente a la intervención humanitaria. Como último punto se presentará el concepto de la obligación de intervenir que concierne sobre todo a los órganos de la ONU y el fundamento jurídico sobre el que éstos y otros agentes pueden actuar.

6.1 El desplazamiento interno en la agenda humanitaria

Desde los años ‘80, el fenómeno del desplazamiento interno constituye un tema muy importante en la agenda humanitaria (Cohen y Deng 1998a: 3). Como factores claves que han contribuido al reconocimiento de la importancia del asunto en la comunidad internacional cabe citar varios: un aspecto es el aumento enorme del número total de las IDP a lo largo de las últimas décadas, por lo que el desplazamiento ya no puede ser ignorado (*ibíd.*). Otra razón son los cambios en los medios de comunicación a lo largo de las últimas décadas, por los que ha sido posible publicar cada vez más sobre las crisis migratorias en el mundo. Con el alcance global del internet, los medios de comunicación se pueden dedicar cada vez más a temáticas sobre las que en el pasado no se podía reportar mucho, debido a escasas informaciones o un acceso difícil a ciertos Estados, como por ejemplo durante la Guerra Fría. Con el paso del tiempo y con más informaciones disponibles sobre guerras civiles y disturbios, etc. causando desplazamientos internos, la comunidad internacional es consciente de que en muchos casos la ayuda humanitaria es imprescindible (*ibíd.* 4). Consecuentemente, se ha aumentado la aceptación de la idea que los asuntos internos de un Estado pueden o incluso deben tratarse de forma legítima por la comunidad internacional, conllevando en casos excepcionales también una intervención sin el consentimiento del gobierno en cuestión (*ibíd.*). Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que en sociedades afectadas por conflictos bélicos, la consecución de una paz sostenible depende en parte también del reasentamiento exitoso de los desplazados (*ibíd.* 5). Pero cabe destacar que algunos Estados consideran parte de sus propios ciudadanos como ‘enemigos’, dado que se asocian a un grupo insurgente, a tendencias políticas o ideológicas oponentes, o de manera más general, porque pertenecen a un grupo social, étnico, religioso o cultural juzgado como inferior, amenazante o simplemente ‘diferente’ (*cf.* 6). En tales casos es de importancia especial que la comunidad

internacional asuma más responsabilidad activa y que negocie, apoye y supervise la reintegración de los desplazados.

Todos estos factores han contribuido al reconocimiento de la comunidad internacional que el desplazamiento interno tiene efectos de gran impacto en la paz internacional, por lo que el respeto de los derechos humanos es de importancia clave. Como consecuencia, para las Naciones Unidas el desplazamiento interno se ha convertido en un asunto urgente en la agenda humanitaria.

6.2 El concepto de la intervención humanitaria

Con el concepto de la intervención humanitaria se entiende la justificación de una intromisión en asuntos internos de un Estado en su territorio nacional con el fin de prevenir o terminar violaciones graves de los derechos humanos, como por ejemplo crímenes de lesa humanidad o genocidio. Cuando el Estado afectado no esté capacitado o dispuesto a ofrecer la protección necesaria a sus ciudadanos, tal intervención humanitaria no constituye ninguna infracción contra el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano (Laubach 1999: 276). Una intervención con el fin de asegurar la protección de personas amenazadas contiene unos elementos claves: la toma de medidas preventivas y pacíficas; la condición previa de un mandato de las Naciones Unidas; la aplicación de medidas coercitivas militares (intervención militar); medidas coercitivas no militares y medidas coercitivas posteriores, como por ejemplo sanciones (Grubmüller 2007: 39). Una intervención humanitaria, por lo tanto, no siempre implica una intervención militar. También la presión política o procesos ante el Tribunal Internacional de Justicia pueden considerarse como ‘intervenciones’. No obstante, es de importancia central la cuestión de quién decide si en una situación particular es adecuado realizar una intervención externa (Hehir 2010: 128). Actualmente, este poder de decisión está en manos del Consejo de Seguridad, dado que es el órgano con la reivindicación mayor de autoridad internacional (*ibíd.*). Pero como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 3, la credibilidad de sus decisiones frecuentemente ha sido expuesta a críticas. Muchas ONGs humanitarias y activistas denuncian contradicciones y la arbitrariedad del mismo llevando a controversias sobre ciertas posturas, por lo que muchos agentes humanitarios argumentan que no se puede invocar al Consejo de Seguridad para actuar adecuada y eficazmente cuando sea necesario (*ibíd.* 3).

Por consiguiente, la cuestión de la autoridad en cuanto a la toma de decisiones puede correr el riesgo de un abuso de poder, lo que significa ‘una espada de doble filo’ (Laubach 1999: 277). Al analizar la legitimidad, autoridad y el poder del Consejo de Seguridad, se puede concluir que pese a la crítica justificada, es imprescindible encontrar medidas que habiliten al Consejo de Seguridad para realizar intervenciones humanitarias de forma eficaz (Hehir 2010: 3): de hecho,

frecuentemente los proyectos de intervención fracasan debido a la falta de una base jurídica. La intervención humanitaria no está establecida como medio de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que no es conforme con el concepto de la soberanía estatal. La admisibilidad de las intervenciones humanitarias en el derecho internacional constituye un asunto controvertido en la literatura analizada en el marco de la presente tesis. Por consiguiente, en el siguiente subcapítulo se presentarán las diferentes debilidades y reparos a dicho concepto.

6.3 Debilidades y reparos frente al concepto de la intervención humanitaria

Con el fin de tener una perspectiva general del concepto, cabe realzar que una intervención humanitaria puede ser realizada por un Estado individual (unilateral), un grupo de Estados (multilateral) o *autorizada por* una organización internacional competente (colectivo) como la ONU (*cf.* Zimmermann 2014). Pueden destacarse, por un lado, notables debilidades en cuanto a la realización de intervenciones humanitarias en el proceso decisorio de las Naciones Unidas, y por otro lado en la función del Consejo de Seguridad (Grubmüller 2007: 49; Rudolf 2013). Como se ha señalado anteriormente, Grubmüller no lo considera un órgano objetivo, por lo que critica su autoridad exclusiva en cuanto a la toma de decisiones sobre la aplicación de medidas coercitivas. Hehir (2010) comparte este punto de vista al mencionar los prejuicios percibidos sobre el Consejo de Seguridad: sufre de una mala reputación internacional debido a su naturaleza poca representativa por solamente cinco miembros permanentes³⁴ y el grado en el que los mismos regularmente han dado primacía a consideraciones políticas más que a jurídicas (*ibíd.* 135). Como reparos al concepto de la intervención, sobre todo militar, destaca la contraproductividad y los peligros de la misma: Boispéan (2011) señala mediante el ejemplo de la guerra en Libia de 2011 que la decisión de la ONU de intervenir conllevó la aceptación de la muerte de personas civiles como ‘daños colaterales’ en el marco de la operación. En partes de la población libia este factor contribuyó a un fomento del poder y de la legitimidad de Muamar el Gadafi, dado que la muerte de personas civiles causada por la comunidad internacional llevó a la sensación de una amenaza provocada por las ofensivas desde el extranjero. Por lo tanto, Boispéan subraya que una revolución y una democracia no se pueden implementar desde fuera, sobre todo no mediante el uso de la fuerza. Aunque el apoyo diplomático hacia una democratización tiene gran importancia, la ‘importación’ de la misma no se puede realizar desde Occidente. Únicamente la población del

³⁴ El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes y diez temporales. Los cinco permanentes presentan las potencias victoriosas tras la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Todos los miembros del Consejo disponen de un voto; la toma de decisiones generalmente se realiza a través del voto afirmativo de como mínimo nueve miembros. Pero destaca que sólo los cinco miembros permanentes disponen del derecho de veto, aplicado ya numerosas veces por intereses propios geoestratégicos, económicos y/o políticos, lo que provoca críticas diversas (como ejemplo reciente cabe mencionar el veto de China y Rusia frente a una intervención humanitaria en Siria). *Cf.* Handelsblatt, 21.07.2012.

Estado en cuestión puede implementarla para que se establezca de forma legítima y duradera (*ibíd.*). Siendo de importancia histórica, la intervención militar en Libia autorizada por la Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad será discutida profundamente en la parte II de la presente tesis. Aunque el Consejo de Seguridad ya había autorizado el uso de medidas coercitivas a efectos de proteger a personas civiles, en Libia fue la primera vez que autorizó el uso de la fuerza a fines de la protección humana en contra de la voluntad del gobierno en funciones de un Estado operativo. Además, el lenguaje poco restrictivo de la resolución dejó cierto margen para una acción militar prolongada que resultó en el derrocamiento del régimen de Gadafi. En este contexto, la R2P fue puesta en práctica por primera vez, por lo que su aplicación y su efecto serán analizados detalladamente en la parte II, capítulos 2.1, 3.1.1, 3.3.4 y 5.2.

Al igual que Boispéan, Grubmüller (2007) también critica la eficacia insuficiente de las intervenciones al referirse a las capacidades sobreestimadas de las tropas de las Naciones Unidas que en ciertas operaciones incluso pueden causar un recrudecimiento de la guerra (*cf.* 52)³⁵. Otros reparos a las medidas de intervenciones humanitarias son el peligro de abuso del poder que ya ha sido mencionado varias veces: por un lado, la pretensión de realizar intereses propios, una selección de los conflictos en los que se interviene motivada por dichos intereses, la hegemonía de Occidente (o sea intervenciones como expresión de la relación de fuerzas políticas internacionales, sobre todo por parte de los EE.UU. y/o miembros de las tropas de las Naciones Unidas), y por otro lado, la problemática de la soberanía que lleva a una actitud anti invasora (*ibíd.* 53). Según Hehir (2010), hay varias respuestas a intervenciones humanitarias como acciones ‘ilegales’, es decir, no consolidadas legalmente: sería posible establecer una base legal para intervenciones que corresponde con responsabilidades éticas (*cf.* 102). Otra posibilidad sería una evaluación de acuerdo con factores morales en vez de jurídicos, aunque sea un procedimiento crítico; o se enfoca en la separación entre la legalidad y la legitimidad (*ibíd.*). Argumenta que la legitimidad constituye un concepto muy discutido pero ‘subdesarrollado’, y sostiene que por lo general tanto personas como Estados cumplen con normas con tres condiciones: *coercion* (coerción), *consent* (consentimiento) y *self-interest* (interés propio) (*ibíd.* 128). Con respecto a la cuestión del poder, estos aspectos son fundamentales, dado que resulta de impacto decisivo frente a las siguientes dos relaciones: (1) ¿en qué circunstancias los actores se someten a las órdenes de los demás voluntariamente o mediante coerción?; (2) ¿en qué condiciones las órdenes son consideradas legítimas de forma inherente? (*ibíd.* 130). Desde un punto de vista jurídico, el derecho de veto de

³⁵ En este contexto cabe mencionar la situación en Afganistán y el denominado fenómeno *Green on Blue* (de acuerdo con el código de colores con azul representando a las fuerzas estadounidenses, verde a los aliados y rojo a enemigos): ya desde 2008, y sobre todo a partir de la retirada continua de las tropas internacionales desde 2011 hasta el final de la misión en 2015, destacó el bombardeo selectivo de soldados de la ISAF por soldados y policías afganos aliados. En 2012, un 15% de los muertos de soldados de la ISAF se debió a *Green on Blue*. Por lo tanto, una de las misiones principales de la intervención, o sea formar a los aliados afganos y aliarse sobre una base de confianza, no cumplió con la pacificación aspirada y la operación se enfrentó a problemáticas de impactos difícilmente controlables. *Cf.* FORTIN, J., 2013.

los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad legitima la toma de decisiones a favor o en contra de una intervención, aunque dicho derecho es dominado por intereses propios de los cinco Estados. Este hecho, por tanto, impide casi por completo un procedimiento moralmente legítimo.

Asimismo, es de gran importancia la cuestión sobre la autoridad: aunque la autoridad implique poder, el poder no implica autoridad (*ibíd.* 132). Cuando nos sometemos a una ley porque creemos que las instituciones gubernamentales y jurídicas son legítimas, se puede concluir que éstas disponen de autoridad. Pero cuando solamente nos sometemos a una ley porque estamos obligados a someternos, entonces las instituciones de hecho son poderosas, pero no obstante carecen de autoridad (*ibíd.*). Una definición reconocida de ‘autoridad’ que abarca esta explicación es la siguiente: “(...) a relation among actors within a hierarchy in which one group is recognized as having both the right and the competence to make binding decisions for the rest of the community (...)” (Cronin y Hurd 2008: 5, *cit. en* Hehir 2010: 132). En este contexto, la cuestión fundamental es ¿cómo pueden los órganos de la ONU apoyar a personas necesitadas de protección a través de intervenciones humanitarias, aunque, al estar sujetos a las decisiones y el derecho de veto del Consejo de Seguridad carezcan del poder, de la autoridad y la legitimidad para poder adoptar medidas necesarias?

Por consiguiente, la realización de una intervención humanitaria presenta debilidades graves relacionadas con el sistema, por las que está obstaculizada la intervención legítima en situaciones críticas. Por este motivo, en los últimos años frecuentemente se ha discutido la introducción de una obligación de intervenir con el fin de contrarrestar las decisiones arbitrarias del Consejo de Seguridad.

6.4 El concepto de la obligación de intervenir

La obligación de intervenir se fundamenta en la paz mundial como objetivo central de la ONU que debe protegerse mediante una garantía de seguridad colectiva. Sin embargo, solamente puede lograrse si los órganos de las Naciones Unidas disponen de la competencia de adoptar medidas necesarias con el fin de enfrentar amenazas globales a la paz. Por consiguiente, y dado que la defensa de la paz mundial constituye una de las responsabilidades principales del Consejo de Seguridad, resulta consecuente un derecho de intervenir en el caso de que la paz global esté puesta en peligro por violaciones masivas de los derechos humanos. Aunque en casos de genocidio u otras violaciones graves sea imprescindible una intervención obligatoria por razones morales, todavía no existe ningún fundamento jurídico para una obligación de intervenir. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por las Naciones Unidas en

1948 no afronta la cuestión sobre cómo debe llevarse a cabo una intervención, por ejemplo en el caso de genocidio en un Estado determinado, sino en primer lugar hace hincapié en el castigo de los perpetradores del genocidio. También la aplicación del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas³⁶ implica dificultades, dado que el Consejo de Seguridad debe haber confirmado la existencia de una amenaza a la paz antes de poder intervenir. Pero dado que hasta la fecha no existen ningunos criterios objetivos para poder determinar la existencia de tales amenazas, en cada caso el nivel de amenaza depende de la interpretación del Consejo de Seguridad (Tomuschat 1995). Algunos expertos consideran una obligación de intervenir vinculada a la existencia de criterios objetivos como base de un procedimiento uniforme y no arbitrario (Grubmüller 2007: 77). Respecto a la legitimidad, se requiere de los conceptos de la *Responsibility to Protect* y la *Human Security*, ambos ya brevemente discutidos en el capítulo 5.1. Asimismo, para poder garantizar la eficacia de las intervenciones, es indispensable llevar a cabo reformas respecto a la planificación, la realización y los procesos decisorios (*ibíd.*). La prevención de crisis se considera principalmente una tarea de los Estados soberanos y de sus instituciones. Los fundamentos de una prevención eficiente constituyen sobre todo el trato justo y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, la previsibilidad de las medidas estatales, una buena gobernanza, la protección de los derechos humanos, el fomento del desarrollo social y una distribución justa de los recursos (*ibíd.* 83).

No obstante, la comunidad internacional tiene un papel esencial en cuanto al apoyo a una convivencia pacífica; por ejemplo a través de medidas para la cooperación al desarrollo y un fomento activo de los derechos humanos (*ibíd.*). Muchos disturbios violentos ya son reconocibles en un estado temprano, por lo que un sistema de alerta precoz dentro de la comunidad internacional puede contribuir a la prevención de escaladas de violencia y de intervenciones. Pero cabe señalar que en la mayoría de los casos no se realiza ninguna intervención directa. Como razones claves destacan la falta de coordinación entre los sistemas existentes de alerta precoz, análisis deficientes de datos y/o una aplicación inadecuada de los datos en medidas políticas, así como retrasos en la toma de decisiones por intereses divergentes (*ibíd.*). Respecto a la prevención de crisis, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, dado que pueden llamar la atención a gran escala mediante informaciones inmediatas y reportajes explicativos, por lo que pueden sacar a la luz deficiencias, determinar a los responsables con poder decisorio e instarles a la acción (*ibíd.* 85).

³⁶ El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, titulado “Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión”, contiene los artículos 39 a 51. En estos 13 artículos, las Naciones Unidas reglamentan el procedimiento con sanciones o medidas coercitivas económicas y militares contra Estados por parte de la comunidad internacional. Fuente: ONU, “Carta de las Naciones Unidas. Capítulo VII: Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión”.

Pero asimismo hay que criticar que en realidad no funcionan eficazmente ni los sistemas de prevención, ni de alerta precoz, ni intervenciones adecuadas en situaciones de crisis. Frecuentemente tarda demasiado tiempo hasta que se lleven a cabo intervenciones. Un caso que puede servir de ejemplo fue la no intervención de la comunidad internacional en Ruanda durante el genocidio en 1994³⁷.

En cuanto a posibles medidas para afrontar los problemas citados de manera eficaz, Grubmüller establece tres diferentes categorías:

- (1) medidas militares (p.ej. a través de embargos de armas respecto a la venta de equipo militar y/o la terminación de cooperaciones militares, así como de programas de entrenamiento militar)
- (2) medidas económicas (p. ej. sanciones financieras, pero al tener en cuenta los impactos que conllevarían en la población civil, zonas de exclusión aérea, restricciones de los vuelos y de viajes)
- (3) medidas políticas/diplomáticas (sanciones y restricciones simbólicas, como p.ej. la suspensión de Estados miembros de instituciones internacionales o regionales y/o el rechazo de adhesión, respectivamente) (*ibíd.* 86). Intervenciones militares deberían constituir el último recurso y solamente realizarse cuando se haya recurrido a todas las medidas pacíficas.

Hehir (2010) también analiza la cuestión si las intervenciones humanitarias constituyen un derecho o una obligación de la comunidad internacional (*cf.* 134). Supone que la identificación de derechos, sin la determinación paralela de obligaciones, posibilita una selectividad que lleva a inestabilidad (*ibíd.*). Desde su punto de vista, en el caso de sufrimiento humano, la comunidad internacional no sólo tiene el derecho, sino la obligación de actuar. Consecuentemente, las relaciones internacionales no se fundamentan en derechos establecidos, sino en obligaciones morales.

Antes de que los órganos de la ONU tengan la posibilidad de esforzarse adecuadamente por una protección amplia de las IDP, es de importancia fundamental establecer bases jurídicas que faciliten la intervención en asuntos internos. Con el fin de poder garantizar la toma de medidas convenientes para fomentar la seguridad internacional, Grubmüller (2007) también explica la necesidad de reformas tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como en la política exterior de los Estados miembros (*ibíd.* 93). El Consejo de Seguridad con sus cinco miembros permanentes

³⁷ De acuerdo con el diplomático neozelandés Colin Keating que presidió el Consejo de Seguridad cuando estalló el conflicto en Ruanda en abril de 1994, el Consejo “se negó a reconocer que se estaba perpetrando un genocidio por parte de extremistas hutu contra la minoría tutsi y no cumplió con su deber de reforzar la misión de paz de la ONU para proteger al mayor número posible de civiles”. Meses antes del estallido de las matanzas, el entonces comandante de la misión de la ONU en el país, el general canadiense Romeo Dallaire, advirtió con insistencia a los principales responsables de las Naciones Unidas; no obstante, la comunidad internacional se negó a tomar medidas de respuesta precozmente hasta que fue demasiado tarde para impedir el genocidio. En un período de sólo tres meses, entre 500.000 y un millón de personas fueron asesinadas por milicias y civiles (Notihoy, 16.04.2014).

que disponen de un derecho de veto inviolable ya no es pertinente frente a las situaciones actuales como instrumento establecido dentro de la institución (*ibíd.*). Una reforma del Consejo de Seguridad hacia más firmeza, estabilidad, transparencia y seguridad de los procesos sería deseable para poder lograr una toma de decisiones más previsible (*ibíd.* 98). Otro problema presentan los Estados más pequeños y del sur representados en minoría en el Consejo. Asimismo, no se han realizado cambios en cuanto a las relaciones de poder a nivel mundial, dado que conllevaría cambios en la composición de los representantes en el Consejo (*ibíd.*). Por ende, Grubmüller también propone una modificación e incluso la eliminación del derecho de veto, dado que el bloqueo por veto en muchas situaciones causa la incapacidad del Consejo de Seguridad de actuar. En el siguiente capítulo nos enfocaremos en el desarrollo de los *Guiding Principles on Internal Displacement* que constituyen uno de los pocos documentos esenciales con respecto al apoyo institucional a las IDP. En el marco del estudio del caso concreto de Libia y la situación de los desplazados en el país, en la parte III, capítulo 6.1.3.2 será llevado a cabo un análisis profundo de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, de los *Guiding Principles on Internal Displacement* y de los *Pinheiro Principles* a las IDP.

7. Los *Guiding Principles on Internal Displacement*: un enfoque global para hacer frente al desplazamiento interno

Debido al número creciente de las IDP a nivel mundial a lo largo de las últimas décadas, en 1998 se elaboraron y presentaron los denominados *Guiding Principles on Internal Displacement* (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; véase anexo 3) a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (desde 2006: el Consejo de Derechos Humanos; CDH) con el fin de establecer un fundamento jurídico para la protección de las IDP. Aunque solamente se trata de una declaración y no de una convención jurídicamente vinculante para los Estados miembros, los *Guiding Principles* establecen un estándar mínimo para el trato de las IDP y son aplicados cada vez más tanto por Estados como instituciones (Phuong 2004: 56).

7.1 El contenido de los *Guiding Principles on Internal Displacement*

Basados en el análisis de una compilación de normas existentes de los derechos humanos³⁸ y del derecho internacional humanitario³⁹, los *Guiding Principles* abarcan en total unos treinta puntos que proporcionan a gobiernos y organizaciones humanitarias una orientación en cuanto a su modo de proceder respecto a las IDP, así como un compendio de los derechos internacionales aplicables. No sólo hacen gran énfasis en la protección de los derechos humanos, sino también en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Phuong 2004: 119). Asimismo, ofrecen una definición de las IDP y determinan las responsabilidades de los Estados. No sólo se enfocan en situaciones de conflictos armados, sino tratan de proveer una guía aplicable en todo momento.

El documento cubre una amplia gama de derechos que corresponden a las necesidades de las IDP y ofrecen protección durante situaciones de desplazamiento interno. Mientras que la primera parte da un resumen de los principios generales, tales como la protección del derecho a asilo, la responsabilidad primaria de los Estados en ofrecer protección para los desplazados en su territorio y el principio de la no discriminación, la segunda parte enfatiza la protección contra los

³⁸ Los instrumentos principales a los que se recurre en la protección de las IDP son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (aprobada en 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Cf. PHUONG 2004: 42.

³⁹ Dado que los conflictos armados constituyen la causa principal del desplazamiento forzoso, incluyendo desplazamiento interno, el derecho internacional humanitario juega un papel crucial en cuanto a la protección de las IDP. Contiene reglas que regulan los medios y métodos de la guerra. Las disposiciones principales del derecho internacional humanitario se encuentran en las cuatro Convenciones de Ginebra (1949) y sus dos Protocolos adicionales (1977). El contenido de las convenciones y protocolos es el siguiente: I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña; II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; III Convenio de Ginebra relativo al Trato debido a los Prisioneros de Guerra; IV Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra; Protocolo I relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales; Protocolo II relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados no Internacionales. Cf. PHUONG 2004: 44-49.

desplazamientos (Principios 5 a 9). Cabe realzar que por primera vez en un documento de la ONU se formuló explícitamente un derecho general a la protección contra desplazamientos arbitrarios (Principio 6). La siguiente parte contiene principios relativos a la protección durante situaciones de desplazamiento (Principios 10 a 23). Incluyen una amplia gama de derechos humanos, tales como la educación e identificación personal. El documento también aborda la cuestión del apoyo humanitario (Principios 24 a 27) y los problemas relacionados con el retorno seguro, el reasentamiento y la reintegración (Principios 28 a 30) (*ibíd.* 56; UNHCR, September 2007: 13). En general, el enfoque se centra en la protección de grupos determinados, en particular mujeres y niños, dado que representan la gran mayoría de las IDP.

Cabe destacar que en cierto sentido los *Guiding Principles* constituyen una innovación, dado que incorporan elementos claves, tanto del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos y del derecho de los refugiados⁴⁰, por lo que demuestran el alto grado de complementariedad entre estos tres instrumentos jurídicos (*ibíd.* 57).

7.2 El desarrollo histórico de los *Guiding Principles*

En 1993, el primer Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos, Francis M. Deng (véase parte I, cap. 4.1.1) comenzó a realizar un primer estudio sobre los estándares internacionales aplicables a las IDP, lo que constituye el fundamento para la elaboración de los *Guiding Principles* (*cf.* Phuong 2004: 54). Mediante otros estudios que siguieron, se reveló que aunque el marco legal existente cubre una amplia gama de las necesidades de protección de las IDP, existen zonas intermedias y deficiencias notables.

Alentado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General, así como en colaboración con un equipo de expertos jurídicos internacionales bajo la dirección de Walter Kälin, Deng desarrolló los *Guiding Principles on Internal Displacement*, presentados por primera vez en 1998 ante la Comisión de Derechos Humanos (*ibíd.*). La Comisión reconoció los *Guiding Principles* como herramienta significativa sobre el terreno, y hoy en día un número cada vez mayor de Estados, órganos de la ONU, organizaciones regionales y ONGs los aplican como normativa en sus operaciones (*ibíd.* 55).

⁴⁰ El derecho internacional de los refugiados es un conjunto de reglas y procedimientos que, en primer lugar, tiene como objetivo proteger a los solicitantes de asilo por motivos de persecución, y en segundo lugar proteger a las personas reconocidas como refugiados bajo los instrumentos pertinentes. Aunque su marco legal proporcione un conjunto distinto de garantías frente a estos grupos específicos, es inevitable que la protección legal coincide en cierta medida con el derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario. Las principales fuentes de derecho de los refugiados se basa en tratados; en particular la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de 1951), su Protocolo de 1967 y el derecho internacional consuetudinario. Este último se aplica a todos los Estados, tanto si son partes en tratados pertinentes o no. Instrumentos regionales representan un conjunto adicional de protección, en particular la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana (para África) y, aunque de manera formal no está jurídicamente vinculante, la Declaración de Cartagena de 1984 (para América Latina). Fuente: Université de Genève, Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, “Rule of Law in Armed Conflicts Project. International Refugee Law”, 2016.

7.3 Conclusiones, preocupaciones y debilidades

Con respecto a la elaboración de los *Guiding Principles*, los actores principales fueron el Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos, su equipo, el CICR y unas ONGs. Los únicos Estados activos en el proceso fueron Austria y Noruega al haber patrocinado varias reuniones de los expertos jurídicos. En la Comisión de Derechos Humanos nunca hubo ningún debate específico sobre los Principios; solamente tomó nota de ellos en una resolución y los adoptó sin voto. Por lo tanto, y por falta de discusiones anticipadas, sobre todo los países en desarrollo o confrontados con situaciones de desplazamiento interno como India, Siria y Egipto han rechazado reconocer y aplicar los Principios Rectores (Phuong 2004: 71-72).

En este contexto, se puede criticar que aunque los *Guiding Principles* tratan la mayoría de los aspectos relacionados con el desplazamiento interno, algunas cuestiones son discutidas demasiado brevemente u omitidas por completo. Muchas veces, son las minorías las que son las primeras víctimas de persecución, y por tanto también del desplazamiento forzoso. No obstante, solamente en una ocasión, en el Principio 9, las minorías son mencionadas junto con pueblos indígenas, pastores y campesinos “que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma” (OCAH 1998, Principio 9; Phuong 2004: 65). En el Principio 6.2 que prohíbe la “limpieza étnica”, el aspecto de la etnia, religión o raza también es retomado indirectamente, pero Phuong sostiene la necesidad de incluir medidas más fuertes y específicas: “Only full respect for minority rights can guarantee protection against displacement” (*ibíd.*). Pero la debilidad más significativa de los *Guiding Principles* será que no es ningún instrumento jurídicamente vinculante. Tanto los Estados como otros actores, e incluso organizaciones internacionales no están obligados legalmente a respetarlos y tampoco es posible hacerles responsables en el caso de violarlos (*ibíd.* 66). Por un lado existe el peligro evidente de convertirse en ‘letra muerta’, dado que no existe ningún mecanismo por el que se garantiza su implementación adecuada. Por otro lado, cabe contraponer que si los principios fueran un instrumento vinculante, probablemente no serían tan integral e inclusivo, lo que constituye una ventaja. Por ende, Phuong resume: “(...) although the Guiding Principles are not a legally binding instrument, they contain rules that form part of treaty law and (...) are therefore legally binding” (*ibíd.*).

En 2008, es decir diez años después de la introducción de los *Guiding Principles*, se realizó un análisis sobre los cambios avanzados a lo largo de este período. Concluye que a lo largo de los años han surgido numerosos progresos, aunque todavía existen debilidades notables. En el marco de conflictos armados, un problema principal constituyen las partes beligerantes y su incumplimiento con las normas globales para la protección de la población civil (Droege 2008: 9). No obstante, cabe mencionar que la conciencia de las autoridades estatales frente al fenómeno del desplazamiento forzoso es cada vez mayor, por lo que el problema y los impactos que conlleva ya

no son negados (*ibíd.*). Tanto en las políticas nacionales como en los acuerdos de paz, el desplazamiento interno se toma en consideración cada vez más.

Sin embargo, los treinta Principios Rectores todavía no constituyen un instrumento suficiente, sino más bien una base para el desarrollo de un documento jurídicamente vinculante (*ibíd.* Cohen y Deng 1998a: 8). Para la competencia necesaria de los órganos de las Naciones Unidas de lanzar intervenciones beneficiosas para las poblaciones destinatarias, una convención jurídicamente vinculante significaría un progreso importante.

Por lo tanto, en el siguiente capítulo, serán expuestos varios enfoques de solución de diferentes expertos en el campo que en el marco de análisis extensos de documentos jurídicos pertinentes también presentan diversas propuestas de mejora del sistema de protección para las IDP.

8. Enfoques de solución y propuestas de mejora del sistema de protección para las IDP

Después de un análisis amplio de los diferentes aspectos relevantes e interrelacionados respecto a la temática del desplazamiento interno, en este capítulo se discutirán varios enfoques concretos de solución de diferentes investigadores, con el fin de demostrar cómo se podría mejorar el concepto de protección de las Naciones Unidas para las IDP.

En primer lugar, se analizarán las ventajas y desventajas de la creación de nuevas leyes. Después será presentada la posibilidad de crear un órgano nuevo de la ONU responsable exclusivamente de las IDP, lo que se contrapondrá a las ventajas e inconvenientes de ampliar las responsabilidades de un órgano de las Naciones Unidas existente. En esta comparación también se revelará cuál de los órganos de la ONU sería más apropiado para la asunción de la responsabilidad por las IDP. El refuerzo de los recursos financieros también presenta un aspecto central, así como la demanda de ampliar e intensificar las medidas de seguridad y protección para las IDP y las organizaciones humanitarias. A continuación también será presentado el denominado *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* que contiene instrucciones concretas para el trabajo con las IDP, los Estados y las organizaciones. Como último punto en este capítulo se expondrán posibles soluciones duraderas para impedir situaciones futuras de desplazamiento interno.

8.1 La creación de nuevas leyes

Tanto Cohen y Deng (1998a: 75) como Martin *et al.* (2005: 3) se pronuncian a favor de una reforma del sistema jurídico internacional. Cohen y Deng (1998a) también mencionan unas razones que abogan en contra de una reforma de la legislación; no obstante, comparadas con las ventajas, carecen de importancia. Entre ellas destaca el desarrollo de nuevas leyes que podría obstaculizar la realización de normas ya existentes o incluso las socavaría. Además, un marco normativo exclusivamente para las IDP podría discriminar a otros grupos de personas (*ibíd.*). Al contrario, como aspectos positivos de un marco normativo específico cabe señalar el fortalecimiento y la consolidación de conceptos de protección existentes, por lo que debilidades y zonas intermedias en el contexto jurídico podrían abordarse de forma mejor (*ibíd.*). Otros grupos de personas como los refugiados, minorías e indígenas también disponen de convenciones o declaraciones especiales, por lo que se puede excluir que un estatuto privilegiado de las IDP discriminaría a los demás.

En lo que concierne a una reforma institucional, cabe realzar tres opciones:

- (1) la creación de un órgano nuevo de la ONU exclusivamente responsable de las IDP
- (2) la asignación de la responsabilidad por las IDP a un órgano existente de la ONU

(3) el fortalecimiento de convenios colaborativos entre las organizaciones cuyos mandatos y actividades están relacionados con el desplazamiento interno (*ibíd.* 168-172).

8.2 La creación de un órgano nuevo de la ONU

Martin *et al.* (2005) se pronuncian firmemente a favor de la creación de un nuevo órgano de las Naciones Unidas, más precisamente de un *UN High Commissioner for Forced Migrants* que debería asumir la responsabilidad tanto de refugiados como de IDP y ocuparse de la mejora de los mecanismos de coordinación dentro de las Naciones Unidas, así como entre la ONU y otros agentes (*cf.* 3; 81). Cohen y Deng (1998a) consideran esta propuesta de manera más ambivalente: sostienen que un nuevo órgano posiblemente no recibiría mucho apoyo dentro de las Naciones Unidas, por lo que también la movilización de recursos financieros resultaría muy problemático (*ibíd.* 9). Otra crítica constituye el hecho de que los ámbitos de acción se interferirían con los de otros órganos de la ONU (*ibíd.* 169). Consecuentemente, podría causar una debilitación en los campos de acción, las capacidades y los recursos. Asimismo, resultaría muy difícil integrar los gastos de una nueva institución en el presupuesto de las Naciones Unidas.

En lo que concierne a los Estados afectados por crisis de desplazamiento, cabe señalar que la creación de una nueva institución podría llevar a una actitud de transferir sus problemas a la nueva autoridad competente en lugar de asumir la responsabilidad. Por otra parte, algunos gobiernos podrían considerar una nueva institución como intromisión en sus asuntos internos, lo que a su vez está vinculado al problema de la soberanía estatal (véase parte I, cap. 5). Además, un órgano nuevo sería dependiente de la autorización por las autoridades gubernamentales de los Estados interesados a acceder a su territorio, mientras que una organización existente y establecida en el terreno sólo tendría que ampliar sus actividades (*ibíd.*). El riesgo de rechazo es relativamente alto, dado que las situaciones de desplazamiento interno constituyen un ámbito de acción bastante crítico, debido a la problemática de la soberanía estatal.

Aunque haya numerosos reparos frente a la creación de un nuevo órgano de la ONU, cabe destacar que uno de los aspectos más persuasivos sería la posibilidad de que tanto autoridades gubernamentales como los mismos desplazados podrían acudir a una instancia central equipada con las capacidades necesarias de actuar (*ibíd.*). No obstante, teniendo en cuenta el análisis de las ventajas e inconvenientes, se puede concluir que debido a los numerosos argumentos en contra, la propuesta de crear un nuevo órgano responsable exclusivamente de las IDP (todavía) no encontraría ningún apoyo firme en la comunidad internacional, a causa de la falta de recursos y de la voluntad política: “Neither the political will nor the resources exist to support a new agency” (*ibíd.*). Phuong (2004) comparte este punto de vista por las mismas razones y destaca: “[...] the

creation of a new agency for the internally displaced [...] is now seen as being neither feasible nor desirable.” (85). Además subraya que ninguna organización a solas es capacitada para ocuparse de las necesidades de las IDP y para actuar adecuadamente (*ibíd.* 87).

8.3 La ampliación del mandato de un órgano existente de la ONU

Tanto Cohen y Deng (1998a: 9) como Phuong (2004: 85-86) apoyan la ampliación del mandato de una organización de las Naciones Unidas existente, dado que algunas de ellas ya disponen de conocimientos especializados por el trabajo con las IDP. Phuong señala: “A review of the capacities of the various agencies demonstrates that they have already developed some expertise in the field of internal displacement and, consequently, there is no need for the creation of a new agency” (86).

Por ende, en este subcapítulo, se entresacarán dos órganos fundamentales en el ámbito del apoyo humanitario para las IDP y se analizarán las ventajas e inconvenientes de una ampliación de sus mandatos correspondientes.

8.3.1 El mandato del ACNUR

Al tener gran experiencia y conocimientos especializados en el trabajo con refugiados e IDP, Cohen y Deng (1998a) consideran la ampliación del mandato del ACNUR como mejor opción, dado que tanto a nivel operacional como jurídico constituye la organización mejor equipada de las Naciones Unidas para este tipo de misión (170). La situación de los refugiados, es decir, el grupo destinatario original de la organización, revela muchos rasgos similares como las IDP, por lo que en varias ocasiones el ACNUR ya se ha ocupado de ellas (*ibíd.*). Mediante la adopción de la responsabilidad por las IDP consolidada con el mandato, también se podrían solucionar injusticias regionales existentes respecto al trato de refugiados e IDP.

Un argumento en contra de la ampliación del mandato del ACNUR sería la dificultad enorme de asumir la responsabilidad por un número tan grande de IDP a nivel mundial, lo que muy probablemente pueda sobrepasar las capacidades y recursos de una sola organización. Phuong también comparte esta opinión y resume: “[...] no agency can cover the needs of the internally displaced on its own” (2004: 87). El ACNUR mismo exige un enfoque integral adaptado a la ONU y otras organizaciones humanitarias, como por ejemplo el CICR (*cf.* Cohen y Deng 1998a: 170). Como reparos del ACNUR frente a la asunción de la responsabilidad completa por las IDP destaca

que probablemente el carácter de la organización cambiaría fundamentalmente, lo que también implicaría una sobrecarga para su personal y sus recursos (*ibíd.*).

Pese a la competencia que habilita al ACNUR de ocuparse de las IDP, es evidente que el organismo no debería ser el único responsable. Cohen y Deng (1998a) recomiendan aprovechar más eficazmente de los mandatos y capacidades existentes de otros órganos al realizar un esfuerzo de colaboración bajo el *Emergency Relief Coordinator* (ERC)⁴¹, o sea el Coordinador del Socorro de Emergencia, en las sedes y bajo los coordinadores humanitarios sobre el terreno (*ibíd.* 9). Por lo tanto, surge la cuestión si un cambio del mandato es realmente necesario, dado que en la actualidad el ACNUR ya se ocupa de una gran parte de las IDP. Si se aspira a un cambio del mandato, o bien se deberían facilitar recursos adecuados, tanto financieros como humanos, o redistribuir ciertos ámbitos de trabajo a otros órganos de las Naciones Unidas y/o organizaciones humanitarias regionales hacia una asignación optimizada de las responsabilidades.

8.3.2 El mandato de UNICEF

Otra organización que podría asumir más responsabilidad por las IDP es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Con más de 70% de las IDP siendo mujeres y niños y con UNICEF siendo el órgano que dispone del mandato que les cubre específicamente, sería una opción lógica encomendarle la responsabilidad principal por los desplazados internos (Phuong 2004: 99, 142; Cohen y Deng 1998a: 171). Su misión se fundamenta en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) y respecto a las IDP incluye, entre otras cosas, la intervención directa con gobiernos y la elaboración de informes periódicos sobre situaciones de desplazamiento interno. UNICEF originalmente es un organismo de desarrollo, pero involucrado cada vez más en la ayuda de emergencia que actualmente representa una cuarta parte de sus actividades, incluyendo sobre todo la provisión de asistencia médica esencial, el suministro de instalaciones sanitarias, agua, alimentos y programas de educación básica (Phuong, *op. cit.*). La organización opera de manera descentralizada, por lo que tiene la posibilidad de actuar rápidamente en el caso de emergencias. Además, UNICEF es considerado como un órgano neutral que goza de mucha popularidad internacional. Consecuentemente, para autoridades

⁴¹ El puesto del *Emergency Relief Coordinator* (ERC) fue creado en 1992 con el fin de mejorar y fortalecer la coordinación de la asistencia humanitaria. El ERC preside el *Inter-Agency Standing Committee* (IASC, Comité Permanente entre Organismos) y es el director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) que sirve como Secretaría del IASC. En las reuniones del IASC también se encuentran representantes de la OIM, del CICR y de ONGs, entre otros. Con el fin de poder garantizar una respuesta coherente e integral de la ONU, se toman decisiones comunes. Son tomadas por los propios directores de las agencias, lo que constituye la ventaja principal de este mecanismo. No obstante, cabe destacar que el ERC no dispone de ninguna autoridad sobre los demás directores, por lo que no tiene la capacidad de dirigir ninguna operación de manera autónoma. Además, algunas agencias de las Naciones Unidas son reacias a aceptar su autoridad. Cf. PHUONG 2004: 103-104.

gubernamentales y grupos rebeldes resulta más difícil prohibir su acceso al terreno en cuestión e impedir sus actividades (Cohen y Deng, *op. cit.*).

No obstante, aunque UNICEF se encarga de numerosas actividades de emergencia y representa una de las organizaciones más activas en el ámbito del desplazamiento interno, no aspira a un cambio de su mandato y en consecuencia tampoco puede asumir la responsabilidad general por todas las IDP (*ibíd.*). Phuong concluye: “[UNICEF] clearly does not have the mandate to assume overall responsibility for all internally displaced persons, but only for internally displaced women and children” (*op. cit.* 100). Cabe resumir que UNICEF tiene las capacidades para cumplir con la función de apoyo al ACNUR, pero no para operar como organización que asume la responsabilidad completa por todas las IDP. Las responsabilidades que tendría que cumplir ya no estarían relacionadas con su mandato original.

8.3.3 Resumen conclusivo

En teoría y debido a su mandato original, el ACNUR representaría el órgano más adecuado de la ONU para extender su ámbito de competencia y asumir la responsabilidad por las IDP; no obstante, habría que facilitar recursos adecuados y consolidar acuerdos colaborativos entre los órganos de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias involucradas. Actualmente, hay numerosos órganos que se ocupan de las necesidades de las IDP y que desarrollan nuevos enfoques con el fin de aumentar la protección, la asistencia y el apoyo de reintegración. Consecuentemente, fortalecer y coordinar mejor estos esfuerzos puede presentar un aspecto fundamental para poder lograr mejoras sustanciales (Cohen y Deng 1998a: 172). Ya en 1997, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó dicha opción en su programa de reforma cuando nombró al ERC el coordinador de las cuestiones relacionadas con las IDP y el responsable por las mismas en cuanto a su protección y asistencia (*ibíd.*).

Tanto Phuong (2004) como Cohen y Deng (1998a) proponen medidas específicas para poder mejorar el sistema que en parte ya se han establecido: en primer lugar destaca la necesidad de asignar la responsabilidad principal a una “lead agency”, o sea una agencia principal en cada situación de emergencia grave (Phuong 2004: 106; Cohen y Deng 1998a: 172). Esta propuesta se debe a la creciente conciencia de emergencias específicas y al apoyo que muchas veces está movilizado por un organismo principal. El análisis de diferentes estudios de casos concretos revela que este enfoque ha dado buenos resultados: en casos en los que un solo órgano asumió la responsabilidad principal, como en la antigua Yugoslavia o Tayikistán, los agentes humanitarios prestaron más atención a las necesidades de las IDP y colaboraron más estrechamente con otras organizaciones involucradas para aprovechar de sus conocimientos especializados. En el caso de

Tayikistán y la guerra civil que tuvo lugar entre 1992 hasta 1997, el ACNUR tenía la función de “lead agency” para las IDP y refugiados y compartió sus responsabilidades con el CICR, UNICEF y el PMA. Al haber superado la situación de emergencia, la responsabilidad se pasó al PNUD e instituciones financieras internacionales que se ocuparon de la reintegración de las IDP y del apoyo al desarrollo (*cf.* Cohen y Deng 1998a: 172; 1998b: 330; Phuong 2004: 132). Al contrario, en casos en los que ningún organismo estuvo designado específicamente, como en Liberia y Ruanda, las IDP no recibieron ninguna atención adecuada y la situación de emergencia perduró por un periodo mucho más prolongado (*cf.* Cohen y Deng 1998a: 172).

No obstante, cabe señalar que la responsabilidad no necesariamente tiene que ser asumida por una organización de la ONU, sino también por otras organizaciones humanitarias cuyas misiones han revelado buenos resultados: en 1995, la OIM estuvo en función de “lead agency” en cuanto a la asistencia para las IDP en Somalia, y el CICR en Chechenia en cooperación estrecha con el ACNUR. Estos estudios de casos concretos deberían inspirar a las Naciones Unidas en colaborar aun más con otras organizaciones.

Otro enfoque de mejora del sistema presentaría el fortalecimiento de la coordinación por el ERC al asumir más responsabilidad con el fin de impulsar el cumplimiento con las necesidades de las IDP, sobre todo en los ámbitos de protección, asistencia, reintegración y desarrollo (*ibíd.* 174). Es fundamental coordinar las necesidades de las IDP mediante la distribución de tareas a diferentes órganos de la ONU para poder garantizar que no se produzcan lagunas en los diversos ámbitos de responsabilidad. Bajo la supervisión del ERC, los órganos particulares deberían fomentar sus capacidades y desarrollar áreas concretas de especialización. Como caso ejemplar cabe mencionar el Memorándum de Entendimiento firmado por el ACNUR y UNICEF en 1996 que indica la intención de emprender una línea de acción común por la cual UNICEF asume la responsabilidad por la protección, la asistencia y la supervisión de niños sin compañía en sus países de origen (*ibíd.*; Phuong 2004: 107). A este respecto deberían existir más acuerdos de este tipo con el fin de poder definir claramente las responsabilidades distintas y hacer más previsibles las respuestas. Asimismo, cuando las organizaciones mismas determinen sus campos de especialización, podrían contribuir a facilitar las tareas del ERC (Cohen y Deng 1998a: 174). En cuanto a otros aspectos esenciales para mejorar el sistema, tanto Cohen y Deng (1998a: 175) como Phuong (2004: 104-105) mencionan el desarrollo de estrategias y guías con respecto al desplazamiento interno, el fortalecimiento de la posición del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y una integración mejor de la ayuda humanitaria y de programas de desarrollo.

Para resumir, cabe señalar que la asignación de un puesto directivo a un órgano específico de las Naciones Unidas, como el ACNUR, junto con el fortalecimiento de los mecanismos colaborativos

presentaría la posibilidad óptima hacia una mejora sostenible del sistema de protección de las IDP. No obstante, en el siguiente subcapítulo será analizada la problemática financiera.

8.4 El aumento de los recursos financieros

Martin *et al.* (2005: 4) se manifiestan a favor de un aumento y una distribución optimizada de los recursos financieros. También Cohen y Deng (1998a: 175) sugieren que sobre todo el ERC debería abogar por la prestación de donaciones mayores, sobre todo en situaciones de emergencias que no se encuentran en el centro de atención pública. Hasta la fecha, sigue siendo un problema de gran impacto que las crisis y catástrofes destacadas por organizaciones humanitarias y los medios de comunicación reciben contribuciones mayores, mientras que las respuestas a las crisis no consideradas de forma excesiva siguen operando bajo condiciones infrafinanciadas. Por consiguiente, es imprescindible que en la distribución de los recursos económicos se encuentren maneras adecuadas para repartir las donaciones de forma equilibrada y justa (*ibíd.*).

Además, debería ser parte de las responsabilidades del ERC y del IASC evitar que organizaciones humanitarias sean objeto de abuso en nombre de actos políticos, dado que los países donantes frecuentemente en primer lugar persiguen sus propios intereses al apoyar y financiar misiones humanitarias en países afectados por crisis. Asimismo, la lucha contra los orígenes de los conflictos debería ser de interés primordial en lugar de buscar por soluciones de los síntomas a corto plazo (*ibíd.*). En la agenda del IASC, la promoción del sector de protección en los programas de asistencia para las personas desplazadas constituye un aspecto central, dado que la asistencia exclusiva no necesariamente implica un sistema eficaz de protección (Phuong 2004: 121).

Asimismo, instituciones internacionales financieras y de desarrollo juegan un papel fundamental en la prevención de conflictos a través de programas específicos para luchar en contra de desigualdades económicas. El establecimiento de un “Fondo Global de Reconstrucción” sería un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones antes citadas, así como de organizaciones políticas, humanitarias, de derechos humanos y del mantenimiento de la paz (Cohen y Deng 1998a: 12 y 303). Este fondo podría administrarse por el Banco Mundial y beneficiar de las experiencias obtenidas por fondos fiduciarios para la reconstrucción ya establecidos para Gaza y Bosnia en los años ‘90:

The creation of such a trust fund would not only provide reliable financing for transitional activities but also contribute to donor coordination, reduce duplication and make it easier for new postconflict governments, which currently must attempt to understand all the varied rules and procedures of multiple donors. (ibíd. 303)

En este contexto cabe mencionar que, mientras tanto, en varios ámbitos ya se han establecido *trust funds* que apoyan a iniciativas humanitarias en todo el mundo: un ejemplo representativo es el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) instaurado por la Resolución 50/166 de la Asamblea General en 1996 y administrado por ONU Mujeres. Colabora con gobiernos, ONGs y equipos de las Naciones Unidas en numerosos países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, ampliar el acceso de las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a servicios jurídicos, psicosociales y médicos, y reforzar la implementación de leyes, políticas y planes de acción para impedir la violencia basada en el género. Hasta la fecha, “el Fondo Fiduciario de la ONU ha otorgado USD 129 millones a 463 iniciativas en 139 países y territorios” y “es uno de los principales mecanismos globales de concesión de fondos exclusivamente dedicado a abordar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas” (ONU Mujeres 2017a). Asimismo, tras el llamamiento de Cohen y Deng, se han creado diversos *multidonor trust funds* con el fin de poder prestar mejor asistencia de desarrollo y cubrir lagunas en el ámbito de la ayuda humanitaria. Los donantes han explorado una amplia gama de posibilidades, incluidas los fondos fiduciarios de donantes múltiples, para que la ayuda sirva mejor los intereses de sus destinatarios, especialmente en tiempos de conflicto y desastres.

Entre los mayores *multidonor trust funds* a nivel mundial destaca el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán administrado por el Banco Mundial: fue iniciado en 2003 mediante alianzas con Japón, el Reino Unido, Suecia, Noruega e Italia y la condonación de las deudas de Afganistán. Hoy en día, cuenta con unos treinta donantes y apoya a trece proyectos. Tiene como objetivo promover el desarrollo del país y hacerle elegible para la asistencia de desarrollo a largo plazo, así como dirigir los esfuerzos inmediatos de reconstrucción. En la actualidad, el fondo financia por un lado los salarios de los funcionarios públicos, incluidos profesores, trabajadores sanitarios y personal civil, y por otro lado las iniciativas de desarrollo rural, infraestructura y el desarrollo de capacidades. La mayor parte de la cartera de inversiones del Fondo, que asciende a unos USD 2,3 mil millones, fluye en la agricultura y el desarrollo rural. Siendo los sectores prioritarios, reciben el 44% de la asignación total (Balmes, 08.02.2011)

En un mundo cada vez más globalizado, también los ámbitos financieros de la comunidad internacional son tan interrelacionados que situaciones de emergencia en otros Estados ya no pueden pasarse por alto. Conllevan graves efectos en la economía mundial, por lo que el apoyo financiero en el marco de alianzas es indispensable.

8.5 La ampliación de las medidas de seguridad y protección

Como ya se ha señalado en el subcapítulo 3.2, la ampliación de las medidas de seguridad y protección con el fin de mejorar el sistema de protección de las IDP es de importancia fundamental. El riesgo de ataques violentos contra organizaciones humanitarias operando en regiones críticas conlleva menoscabos graves en el proceso del apoyo humanitario. Por consiguiente, el despliegue de fuerzas policiales internacionales para proteger las misiones constituye un aspecto clave (Martin *et al.* 2005: 4). Asimismo, la seguridad de las IDP, tanto en sus refugios a corto y largo plazo como en el momento de regreso a sus regiones de origen, tiene que ser garantizada. Cohen y Deng (1998a) se pronuncian a favor de un amplio concepto de protección que no sólo debe incluir el suministro de alimentos, medicamentos básicos y alojamiento, sino también medidas que garanticen la seguridad física de los necesitados (*cf.* 10). Consecuentemente, es imprescindible adaptar y mejorar la formación y concienciación de las fuerzas de las Naciones Unidas, así como de la policía y el militar nacionales para evitar que se aprovechen de la situación precaria de las IDP. Además, mencionan la necesidad de fomentar acciones razonables con el fin de garantizar que los agentes implicados dispongan del mandato, personal y de los recursos para poder actuar adecuadamente (*ibíd.*). A este respecto, las intervenciones militares sólo son consideradas como último recurso, pero no para poder resolver las causas de un conflicto. Por tanto, la mediación y gestión pacífica mediante diálogos y negociaciones es esencial (*ibíd.*).

8.5.1 El refuerzo de las capacidades locales

Para lograr un refuerzo de las capacidades locales, es imprescindible la colaboración. Como se ha señalado en el subcapítulo 4.2.1, por parte de las Naciones Unidas los actores locales frecuentemente no son involucrados activamente, aunque juegan un papel significativo sobre el terreno, ante todo en los ámbitos de reconstrucción (Cohen y Deng 1998a: 11, 205). Mazur (2004) se pronuncia a favor de la involucración de la población civil: solamente con la participación activa de la sociedad civil es posible fomentar una paz duradera (*cf.* 55). La implicación de las víctimas en los ámbitos como la reintegración y reconstrucción son aspectos significantes con respecto al éxito de los enfoques de soluciones a largo plazo. También en cuanto a la seguridad de las IDP es de gran importancia lanzar actividades que promueven el restablecimiento de vínculos comunitarios y que estimulan la integración de las IDP en su entorno social, lo que contribuye significativamente a la seguridad de los desplazados: “Conflict prevention, conflict resolution, and the facilitation of reconciliation all fall within the scope of such activities” (Cohen y Deng 1998a:

205). Numerosas ONGs internacionales ya han adoptado medidas de protección para las IDP con el fin de comprometer tanto a la comunidad local como a los gobiernos en cuestión. Incluyen la promoción de las relaciones sociales entre los diferentes grupos culturales, étnicos y religiosos, la facilitación de la resolución de conflictos y reconciliación, y el apoyo a ONGs locales en la ampliación de su asistencia y protección de las IDP. Asimismo, instan a los gobiernos a respetar los derechos de las IDP, y en el caso de que existan leyes nacionales pertinentes, abogan por su cumplimiento para aumentar la protección de este grupo de personas (*ibíd.* 205-206).

A pesar de todo, es evidente que las causas del desplazamiento tienen que combatirse por parte del Estado, por un lado mediante la terminación de un conflicto armado a través de acuerdos de paz a largo plazo, por otro lado mediante enfoques de solución al promover la colaboración entre las autoridades gubernamentales y la población civil afectada, y de esta forma fomentar sus iniciativas propias.

8.5.2 El restablecimiento de la vida cotidiana de las víctimas

En lo que concierne a los programas humanitarios que fomentan el regreso y reasentamiento de las IDP, es imperativo que no sólo se ocupen de la reconstrucción de las viviendas dañadas y de la infraestructura como servicio de transporte a las regiones de origen, sino que también consideren aspectos relativos a la protección (Phuong 2004: 141). El aspecto de un retorno voluntario es esencial. Además, cabe mencionar que si el desplazamiento se origina en un conflicto étnico, el regreso de las IDP puede estar violentamente opuesto por comunidades vecinas y se requiere de la presencia y de actividades de protección internacionales para prevenir el recrudecimiento del conflicto. Phuong (2004) apoya la realización de “assessment visits”, es decir, visitas de inspección y evaluación facilitadas por ONGs, por las que las IDP mismas tienen la posibilidad de evaluar las condiciones en sus regiones de origen y decidir de manera independiente si (ya) quieren regresar (*ibíd.*). En este contexto, cabe mencionar la organización de líneas especiales de autobuses iniciada por el ACNUR en Bosnia y Herzegovina y Sri Lanka por las que las IDP tuvieron la oportunidad de visitar sus regiones y observar personalmente la situación *in situ*. Tales medidas forman parte del fomento de la confianza y pueden contribuir significativamente a disminuir posibles aversiones de las IDP frente a un retorno definitivo a sus hogares.

Las medidas de protección tienen que dirigirse tanto contra ataques como contra todas formas de discriminación. Evidentemente, las IDP no desean regresar si su reasentamiento es obstaculizado por su exclusión arbitraria del mercado laboral y del acceso a servicios públicos, como en el caso de Bosnia y Herzegovina. Otro aspecto que frecuentemente diferencia las IDP de otras víctimas de conflictos armados constituye el problema de la restitución de tierras y derechos de propiedad

(véase parte III, cap. 6.1). No pueden regresar si sus hogares están destruidas, saqueadas y/o ocupadas por terceras personas, por lo que es de importancia clave facilitarles asistencia internacional con el fin de lograr la recuperación de sus propiedades o la prestación de indemnizaciones. Esto implica la necesidad de acceso a asesoramiento jurídico y, en caso necesario, asistencia a las autoridades al elaborar leyes relacionadas con cuestiones de propiedad (*ibíd.* 142).

Desde un punto de vista psicosocial, cabe señalar otro aspecto significativo: la superación de las experiencias de las IDP con el fin de poder recuperar su vida cotidiana. Veena Das *et al.* (2001) consideran la superación como proceso ineludible, pero destacan que frecuentemente las autoridades estatales en cuestión intentan reprimir los acontecimientos al no abordarlos en la historiografía (*cf.* 10). En tal situación, las organizaciones internacionales deberían abogar por el fomento de los procesos de superación, analizar las diferentes perspectivas e influir críticamente en versiones unilaterales de forma constructiva. Constituye una necesidad clave ofrecerles a los supervivientes de un conflicto la posibilidad de formar parte de los acontecimientos a través de sus relatos y reconocer sus experiencias e injusticias sufridas como tales (*ibíd.* 23). Solamente al reflexionar la historia y al superar el pasado, una sociedad escindida puede lograr superar sus impactos y crear un futuro mejor. Por lo general, en lo que concierne a la asistencia a las IDP, este enfoque no ha sido considerado suficientemente, o incluso ha sido omitido por completo, pese a la conciencia de que los procesos sociales de transformación son vinculados indisolublemente con la capacidad de reflexión. Por ende, es de importancia vital tratar más profundamente con estos enfoques para poder situar las expectativas y necesidades de las IDP en un contexto adecuado.

8.5.3 Resumen conclusivo

El análisis de la literatura seleccionada revela que sobre todo las medidas relacionadas con la protección y rehabilitación de las IDP muchas veces no se realizan de manera apropiada. Tanto la importancia de la seguridad física de las IDP como de los agentes de organizaciones humanitarias, así como la involucración de las víctimas en la reintegración y reconstrucción son aspectos subestimados en la planificación de las intervenciones humanitarias.

Sin embargo, cada uno de ellos constituye una necesidad esencial en el sistema de protección para las IDP. Consecuentemente, la ampliación de las medidas de protección y seguridad es imprescindible para poder mejorar el sistema de manera sostenible. En este contexto, también conviene mencionar el denominado *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* que ofrece instrucciones claves para las organizaciones que asisten a las IDP. Por este motivo, en el siguiente capítulo se presentarán y analizarán unos de sus contenidos claves.

8.6 El *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*

El *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* es el resultado de cooperación y esfuerzos conjuntos del personal de más de treinta organizaciones internacionales, mayoritariamente miembros del *Global Protection Cluster* (véase parte I, cap. 4.2; parte III, cap. 6.2) que resultó en una primera versión provisional en 2007. A lo largo de 2008, el *Handbook* fue aplicado en el terreno en más de quince países con la participación y colaboración del personal de una amplia variedad de equipos de la ONU, así como de ONGs y organizaciones intergubernamentales. En un total de 545 páginas, el manual ofrece orientación operacional e indica herramientas para apoyar efectivamente a las respuestas de protección en situaciones de desplazamiento interno (cf. UNHCR, 2008: 1-2). La eficacia del *Handbook* se define sobre todo a través de la frecuencia con la que se aplica por el personal correspondiente. Tiene por objeto servir como guía operativa y proponer instrucciones concretas de acción para asegurar la protección de las IDP. Además, debe garantizar que los agentes humanitarios estén familiarizados con los conceptos fundamentales y los principios y normas jurídicos internacionales que establecen el marco de trabajo estratégico en el sector de protección. Asimismo, con respecto a la realización concreta, se intenta mejorar la concienciación frente a las dificultades y peligros a los que se enfrentan las IDP (*ibíd.* 9). En este contexto también se hace hincapié especial en las diferentes categorías de IDP, es decir, mujeres, niños, ancianos y discapacitados y sus necesidades particulares que conllevan, respectivamente. Otra tarea fundamental constituye el fomento continuo y coordinado de las respuestas a dichas necesidades por parte del personal humanitario en las diferentes operaciones.

Cabe destacar que el *Handbook* es una herramienta muy bien estructurada. Aparte de listas que determinan numerosas medidas jurídicas nacionales e internacionales y un glosario universal, contiene casi cualquier información relevante respecto a las IDP dividida en siete secciones:

- Parte I: detalla los fundamentos de la protección para las IDP. En esta parte se establecen los conceptos básicos, enfoques y principios humanitarios relacionados con el sector de protección, y se ofrece una idea general sobre el marco jurídico e institucional en cuanto a la protección de las IDP.
- Parte II: describe las capacidades tanto profesionales como interpersonales requeridas para el trabajo de protección.
- Parte III: se centra en el establecimiento de respuestas adecuadas de protección; proporciona una guía sobre cómo debe ser evaluada y analizada una situación de crisis; desarrolla estrategias de protección para las respuestas humanitarias y trata la cuestión sobre cómo supervisar y evaluar los programas de protección.

- Parte IV: proporciona orientación sobre la manera de prevenir, mitigar y responder a riesgos específicos de protección y violaciones de derechos a los que las IDP se ven enfrentadas frecuentemente; sugiere acciones de apoyo para las IDP con el fin de hacer valer sus derechos y para que el Estado en cuestión cumpla con su responsabilidad de proteger.
- Parte V: brinda informaciones detalladas acerca de las actividades claves de protección que contribuyen a una respuesta de protección eficaz al identificar tanto los retos operativos que pueden surgir como los principios que deben guiar la acción.
- Parte VI: se enfoca en soluciones duraderas y la importancia de disponer de enfoques orientados en soluciones. Se basa por gran parte en el *Framework for Durable Solutions* (Marco de Soluciones Duraderas) desarrollado por el denominado *Brookings-Bern Project on Internal Displacement* con el apoyo del Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de las IDP (desde 2010: Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos).
- Parte VII: ofrece sugerencias prácticas para la aplicación del marco de trabajo estratégico en las operaciones sobre el terreno (*ibíd.* 3).

En el siguiente subcapítulo el enfoque estará en las propuestas de soluciones duraderas recomendadas tanto por el *Handbook* como por diversos expertos en este campo.

8.7 La elaboración de soluciones duraderas

En lo que concierne a la estructura del *Handbook*, cabe mencionar que contiene un capítulo entero sobre posibles soluciones duraderas. Para poder asegurar la eficacia de las propuestas de solución, el *Handbook* realza la importancia de garantizar los derechos humanos de las IDP: “Achieving a durable solution to internal displacement implies that all displaced persons are able to enjoy the full spectrum of human rights, and, as a result, are able to rebuild their lives” (UNHCR 2008, Part VI, 449). El objetivo más importante en cuanto a las soluciones duraderas se basa, por tanto, en la oportunidad de las IDP de poder restablecer sus vidas normales de forma independiente (véase también parte I, cap. 8.5.2).

Para poder encontrar y promover soluciones duraderas para las IDP, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos previos. Entre ellos destacan la seguridad a largo plazo, la libertad de circulación, un nivel de vida adecuado incluyendo el acceso mínimo a alimentos seguros y agua potable, alojamiento digno, servicios médicos esenciales, educación básica, el acceso a empleo para ganarse el sustento, así como el acceso a mecanismos efectivos por los que las IDP tengan la posibilidad legal de recuperar sus viviendas, tierras y propiedades dañadas, saqueadas u ocupadas,

o demandar reparaciones (*ibíd.* 451). En algunos contextos, será necesario que las IDP también se beneficien de los factores siguientes: el acceso a, y en caso de pérdida, la sustitución de documentos personales, títulos de propiedad, etc.; la reunificación voluntaria con miembros de la familia separados durante el desplazamiento; la participación en los asuntos públicos en todos los niveles sobre una base equitativa como la población residente; y recursos eficaces para aclarar agresiones y violaciones de derechos relacionadas con el desplazamiento, incluyendo el acceso a procesos judiciales gratuitos cuando sea posible, así como a indemnizaciones, informaciones y debates abiertos sobre las causas de las violaciones (*ibíd.*; véase parte III, cap. 6.1).

Según el *Handbook*, teóricamente hay tres opciones para las IDP: el regreso seguro al lugar de origen; el asentamiento local sostenible en los lugares donde las IDP se han refugiado; o el asentamiento sostenible en otras zonas del país (*ibíd.*). En este contexto, conviene destacar la importancia esencial de los *Guiding Principles on Internal Displacement* para el *Handbook* y la responsabilidad clave de las autoridades competentes en cuanto a las soluciones duraderas:

Competent authorities have the primary duty and responsibility to establish conditions, as well as provide the means, to allow internally displaced persons to return voluntarily, in safety and with dignity, to their homes or places of habitual residence, or to resettle voluntarily in another part of the country. Such authorities shall endeavour to facilitate the reintegration of returned or resettled internally displaced persons. (Principle 28; 452)

Para poder asegurar la realización de soluciones duraderas, existen tres formas interrelacionadas de proceder: “solution-based approach” (el enfoque basado en soluciones); “rights-based approach” (el enfoque basado en los derechos) y “coherent approach” (el enfoque coherente) (*ibíd.* 454-456).

Con respecto al *solution-based approach*, es esencial que tanto un análisis de las causas del desplazamiento como, en la medida de lo posible, los deseos y expectativas de las IDP en cuanto a las modalidades de soluciones duraderas estén incluidos en las primeras fases de evaluación de las necesidades, y que aspectos de protección, asistencia y programas de desarrollo sean adaptados adecuadamente. La adopción de un enfoque de recuperación temprana y la intervención de actores de desarrollo (en el mejor de los casos las autoridades nacionales) en las primeras fases de desplazamiento también son de importancia clave. En los casos en los que las IDP aspiran a una repatriación voluntaria, los esfuerzos para promover su reintegración deben ser coherentes con los programas de soluciones duraderas, evitando en todo caso la discriminación entre los diferentes grupos de personas involucrados.

En un entorno de posconflicto, es de importancia vital garantizar la coherencia entre los esfuerzos de los programas para la rehabilitación y el desarrollo, del desarme, de la desmovilización y la reintegración de antiguos combatientes en la sociedad, del fortalecimiento del Estado de derecho y del desarrollo institucional. Sin embargo, los procesos de transición raramente son lineales.

Muchas veces la violencia persiste en ciertas regiones, o países enteros recaen en antiguos conflictos causando desplazamientos reiterados. Por consiguiente, es evidente la necesidad de planes de emergencia y enfoques humanitarios aplicables de manera *ad hoc* en situaciones de crisis graves (*ibíd.* 454).

En cuanto al *rights-based approach*, las soluciones duraderas implican sobre todo el restablecimiento de los derechos de las IDP. Por lo tanto, es inevitable que cualquier esfuerzo hacia soluciones duraderas adopte un enfoque basado en los derechos. Esto significa que todas las intervenciones para promover soluciones duraderas deben diseñarse activamente con el fin de fomentar los derechos humanos y sus normas (por ejemplo al asegurar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales como la salud, educación y vivienda), y los programas de soluciones duraderas deben contribuir al desarrollo de la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones. La adopción de un enfoque basado en los derechos constituye una responsabilidad de todos los agentes humanitarios y de desarrollo (*ibíd.*).

En lo concerniente al *coherent approach*, los esfuerzos hacia soluciones duraderas naturalmente implican una cantidad y diversidad extensas de actores, incluyendo autoridades nacionales, la sociedad civil, organizaciones internacionales y las IDP mismas. Como se ha señalado anteriormente, la realización de un nivel adecuado de coherencia es esencial para encontrar soluciones duraderas, ya que acciones inconexas y unilaterales no conllevarán el efecto deseado. En este contexto, también es fundamental tener en cuenta que no debería haber ninguna distinción rígida entre iniciativas de ayuda humanitaria a corto plazo y de desarrollo a largo plazo.

En última instancia, el éxito de las soluciones duraderas para las IDP por gran parte depende de estructuras de amplio alcance, al igual que los procesos de paz y los programas de rehabilitación y de desarrollo son vitales para la sociedad entera de un Estado afectado. Determinar cómo participar en todos estos procesos frecuentemente plantea un dilema para los agentes humanitarios. Por lo general, los procesos de alcance global gozan de un estatus de prioridad política y disponen de mayores recursos financieros, por lo que a largo plazo tienen un potencial mayor de éxito que las intervenciones dirigidas exclusivamente a las IDP. Al mismo tiempo, la capacidad de los agentes humanitarios de responder eficazmente a las necesidades de las IDP puede ser limitada, dado que sobre todo la necesidad de los enfoques jurídicos en los procesos relacionados con las IDP frecuentemente exceden los recursos materiales y temporales disponibles. No obstante, es esencial que las necesidades particulares de las IDP y los principales obstáculos no sean omitidos, sino incorporados debidamente en los procesos de soluciones duraderas. La adopción de un enfoque de recuperación temprana y la involucración y participación temprana de los actores del sector de desarrollo en los esfuerzos para ayudar y proteger a las IDP son aspectos fundamentales para poder lograr este fin (*ibíd.* 455).

En el marco de las soluciones duraderas y con el fin de prevenir el estallido de nuevos conflictos, es considerado esencial la reintegración de las IDP en la sociedad después del final de un conflicto, el apoyo a la auto-ayuda y la creación de capacidades, así como gobiernos nacionales estables y legítimos (Martin *et al.* 2005: 248-252). Para poder fomentar estos aspectos, es fundamental la mejora de la coordinación entre las instituciones humanitarias y políticas, de desarrollo y del mantenimiento de la paz al tener como meta común la resolución de las causas de los conflictos (*ibíd.* 4). Asimismo, los enfoques de soluciones duraderas tienen que considerar los intereses relacionados a las tierras y propiedades, así como desigualdades económicas, dado que muchas veces estos factores constituyen el origen de un conflicto (Cohen y Deng 1998a: 12). Igualmente, la reconstrucción de la infraestructura y la realización de inversiones son elementos centrales que por un lado contribuyen a la estabilización política, económica y social, y por otro lado facilitan la reintegración de personas desplazadas en la sociedad (*ibíd.*).

Estrategias eficaces a nivel nacional en cuanto a la “gestión” del desplazamiento interno deben involucrar una amplia gama de actores, es decir, representantes de las poblaciones desplazadas, representantes de sus comunidades vecinas, las autoridades bajo las que residen y los grupos locales que apoyan a las IDP (*ibíd.* 239). Por tanto, se requiere un enfoque global para poder abarcar todos los aspectos (inter)relacionados. Generalmente, los enfoques estratégicos principalmente se centran en el ámbito del *emergency relief*, o sea el socorro de emergencia. No obstante, es ineludible enfocarse de igual manera en los ámbitos de la prevención, la protección y en medidas políticas y económicas con efectos duraderos (*ibíd.* 240). Pero cabe mencionar que el ámbito menos desarrollado constituyen las estrategias de prevención. Será imprescindible fomentar el establecimiento de un sistema de alerta rápida, un sistema amplio de información sobre el desplazamiento interno, el fortalecimiento de instituciones nacionales, la sociedad civil y ONGs, respectivamente, y el desarrollo de capacidades regionales e internacionales para prevenir e impedir conflictos futuros (*ibíd.* 241-254).

En el ámbito de protección también será fundamental consolidar los *Guiding Principles on Internal Displacement*, establecer un sistema de protección basado en las necesidades particulares de las comunidades afectadas, fortalecer mecanismos nacionales de protección y realizar acuerdos internacionales, con el fin de intensificar las medidas de protección, la compatibilidad del concepto de protección con las operaciones de asistencia y de desarrollo, y para promover estrategias de protección específicas para mujeres y niños (*ibíd.* 256-279).

En el ámbito de las soluciones políticas y económicas habrá que integrar medidas que no sólo contribuyan a la resolución de los conflictos, sino que también fomenten el regreso voluntario y la reintegración de las IDP en la sociedad al facilitarles seguridad y protección durante y después del retorno. El establecimiento de estrategias para poder manejar el desplazamiento causado por

conflictos armados es otro punto central, lo que tendrá que abarcar la prevención de conflictos futuros, programas orientados en el desarrollo durante el conflicto y la reconstrucción posconflicto (*ibíd.* 284-303).

En resumen, cabe señalar que se requiere de un enfoque global que aborde todos los diferentes problemas conllevados por el desplazamiento forzoso. En 2007, se desarrolló un marco de soluciones duraderas para las IDP, llamado el *Framework for Durable Solutions for Internally Displaced Persons* (*cf.* UNHCR, 2008: 458). Tiene como fin aclarar los criterios y definiciones de las soluciones duraderas propuestas y señalar cómo pueden realizarse concretamente. A base del *Framework* y del *Handbook* se pueden poner en práctica numerosas instrucciones hacia soluciones duraderas. No obstante, muchas veces su realización fracasa en la práctica debido a la falta de una coordinación interna bien estructurada de los órganos de la ONU. Por lo tanto, en el siguiente capítulo nos ocuparemos brevemente de algunos aspectos relacionados con la antropología organizacional por los que se mostrarán las oportunidades de cambio relativas a los problemas de coordinación e información dentro del sistema de protección de las Naciones Unidas.

9. Oportunidades de cambio en organizaciones desde un punto de vista antropológico organizacional

En este capítulo el enfoque estará en los conocimientos y constataciones de Paul Clarke y Ben Ramalingam expuestos en su texto “Organisational Change in the Humanitarian Sector” (2008). Es de significado particular, dado que discute las tensiones entre los cambios de organizaciones en cuanto a sus ámbitos de trabajo y la realización sostenible de reformas, lo que influye significativamente en la capacidad de actuar de los órganos de la ONU. Por lo tanto, es necesario analizar el funcionamiento de las organizaciones, tratar de aclarar por qué muchas veces los cambios formales no se pueden realizar en la práctica, y cómo esta problemática podría evitarse. Una mayor eficacia en las acciones internas de las organizaciones lógicamente tiene efectos positivos en su trabajo. Como se ha señalado anteriormente, de hecho existe un marco jurídico considerable para la protección de las IDP; no obstante, en la práctica todavía no se ha logrado implementar un concepto de protección global. Por consiguiente, en los próximos subcapítulos se investigarán las cuestiones ¿cuáles son las influencias externas que obligan a las organizaciones humanitarias a abordar cambios?; ¿qué efecto directo o indirecto tienen diferentes factores en sus actividades, su operatividad, eficacia y/o sus deficiencias?; y por último, ¿de qué manera es posible impulsar reformas en las organizaciones?

9.1 Influencias externas y constataciones claves

Las organizaciones humanitarias se enfrentan cada vez más a situaciones graves de emergencias a nivel mundial. Consecuentemente, las circunstancias dadas conllevan la necesidad de una dotación financiera aumentada y una ampliación de las organizaciones, incluyendo del personal existente (Clarke y Ramalingam 2008: 26). En respuesta a los requisitos modificados, muchas organizaciones ya han comenzado a integrar nuevos enfoques de otros sectores, a contratar especialistas técnicos de diferentes ámbitos, y han invertido cantidades significantes de tiempo y dinero en una amplia gama de programas para mejorar la calidad y los mecanismos de coordinación entre las diferentes agencias (*inter-agency coordination mechanisms*). Al mismo tiempo, los donantes asumen mayores compromisos, dado que constituye una parte esencial de la agenda política de algunos gobiernos de Occidente redefinir ciertos enfoques frente al hemisferio sur: el trabajo humanitario está incorporado en las ‘3 Ds’, es decir Defensa, Desarrollo y Diplomacia. Esta “politicisation of humanitarianism” (entre otros ejemplificado con la descripción de la intervención de la OTAN en Kosovo como ‘guerra humanitaria’, *ibíd.* 27) conlleva que emergencias en regiones de importancia geopolítica reciben mayores cantidades de fondos, lo que influye masivamente en la neutralidad y proporcionalidad del apoyo humanitario:

implica un riesgo elevado para los trabajadores humanitarios en sus misiones, dado que por la presunta falta de neutralidad fácilmente se convierten en víctimas de grupos armados o de fuerzas militares. Por lo tanto, es imperativo que las organizaciones humanitarias cambien sus prácticas e intensifiquen la seguridad de su personal y de los beneficiarios (*ibíd.*).

En lo que concierne a los cambios, se especifican cuatro constataciones claves (*ibíd.* 29-30):

- (1) las organizaciones humanitarias, por su naturaleza, son organismos dinámicos que se encuentran en una fase de adaptación continua influida por la necesidad de encontrar el equilibrio entre tendencias globales y presiones locales.
- (2) Generalmente, los cambios dentro de las organizaciones se llevan a cabo durante largos periodos de tiempo, por lo que frecuentemente no son considerados y/o reconocidos por el público. No obstante, cabe señalar que en muchos casos se trata de reformas profundas y amplias con efectos significantes respecto a las autodefiniciones de las organizaciones y su modo de actuar.
- (3) Las organizaciones humanitarias disponen de unas oportunidades de cambio fundamentales que, pese a todo, pueden variar de una organización a otra. Estas oportunidades abarcan la respuesta a presiones externas mediante la ampliación de las estructuras organizacionales: son cada vez más diversas y complejas, contratan cada vez más a especialistas técnicos, se vinculan más con los medios de comunicación, se dedican a “inter-agency initiatives” con el fin de mejorar la calidad de su trabajo y aumentan la colaboración con otras agencias (*ibíd.* 29).
- (4) Los cambios realizados por las organizaciones humanitarias también afectan y transforman el contexto humanitario. El cambio y las reformas dentro del sector humanitario constituyen un proceso de evolución continua en el que interactúan numerosos elementos diferentes (*ibíd.* 30).

Basado en estas constataciones, se puede concluir que muchas organizaciones se enfrentan a la necesidad de nuevos procesos de formación con respecto a sus reacciones adecuadas frente a condiciones externas y al requisito de adaptarse continuamente a nuevas realidades. Ante la necesidad de identificar cómo responder a las circunstancias externas, decidir lo que debe hacerse de manera diferente, y poner en práctica los cambios necesarios, muchas de las organizaciones humanitarias han institucionalizado cada vez más mecanismos para facilitar reformas. Estos incluyen (pero no están limitadas a) evaluaciones, sistemas de gestión del aprendizaje y conocimiento, el desarrollo de políticas, formación y actividades de comunicación interna. En muchos casos, las organizaciones han establecido departamentos específicos para llevar a cabo estas actividades (*ibíd.* 30). No obstante, cabe señalar que aunque se hayan identificado

numerosos ámbitos problemáticos, en la práctica no todos los cambios aspirados pueden hacerse realidad.

Como ha sido señalado anteriormente, se debe por gran parte al hecho de que organizaciones, sobre todo organizaciones humanitarias, no cumplen con las condiciones de una máquina; una metáfora que erróneamente contribuyó a una percepción muy simplificada de la naturaleza de una organización, en cierto sentido útil pero no muy realista, como demuestra la cita de Morgan (2006):

Mechanistic approaches to organizations work well under conditions where machines work well: where there is a straightforward task to perform; when the environment is stable...; when one wishes to produce the same product time and time again, and when the human machine parts are compliant and behave as they have been designed to do. (cit. en Clarke y Ramalingam 2008: 34)

9.2 Conceptos erróneos de las organizaciones

La realización deficiente de reformas resulta de la concepción errónea anteriormente citada que se tiene frecuentemente de las organizaciones. La comparación metafórica con ‘máquinas’ y la idea de “input” y “output” en la práctica no corresponde con su funcionamiento y modo de trabajar (*ibíd.* 33). Es un concepto equivocado pensar que cualquier tipo de informaciones fácilmente fluye por toda la organización y es utilizado ‘racionalmente’, o suponer que políticas automáticamente conllevan un cambio de actitud en la forma de trabajo del personal de una organización, simplemente al refundir las directrices e instrucciones organizativas. Pero dado que las organizaciones se constituyen por grupos de personas, evidentemente son mucho más complejas, dinámicas e imprevisibles que cualquier máquina (*ibíd.* 34).

En organizaciones internacionales, la implementación de unos cuatro enfoques principales para incorporar cambios sosteniblemente, es decir, mediante (1) el aprendizaje y la formación, (2) conocimientos y evaluaciones, (3) el desarrollo y la implementación de políticas; y (4) la capacitación, se ha basado en la suposición de que organizaciones humanitarias operan como entidades racionales que pueden caracterizarse como la suma de sus partes, “and which can be acted upon successfully by the provision of tools, techniques and codes” (*ibíd.*). Teóricamente, se supone “if enough people know how to do things differently, then changes will occur” (*ibíd.*). Ante estas percepciones inadecuadas, Clarke y Ramalingam proponen tres metáforas diferentes que describen mejor el funcionamiento complejo de las organizaciones:

- (1) organizaciones como comunidades con culturas distintas, cada una con sus propios valores y convicciones;

- (2) organizaciones como mentes, o sea cada una como entidad inteligente y reflexiva, capaz de reaccionar, responder y aprender frente a circunstancias cambiantes;
- (3) organizaciones como sistemas complejos adaptables a cambios imprevisibles, dinámicos y fuera de su alcance y control (*ibíd.* 35).

No obstante, estas tres metáforas propuestas tampoco son aplicables en su totalidad, debido a su naturaleza subjetiva y unilateral. Aun así pueden contribuir a una comprensión mejor de los procedimientos diversos dentro de las organizaciones (*ibíd.* 40).

En organizaciones tan complejas como las humanitarias, muchas veces existen viejos patrones de conducta que tienen que ser superados y redefinidos para poder posibilitar cambios sustanciales (*ibíd.*). El problema clave constituye el intento de las organizaciones de implementar nuevas realidades al estilo antiguo: “[...] significant change may not possible, because the organisation ends up trying to do new things in old ways” (*ibíd.*).

9.3 Repensando el cambio organizacional

Según Clarke y Ramalingam (2008), nuevas metáforas pueden ayudar a encontrar enfoques más eficaces con el fin de identificar cambios posibles en las organizaciones. Por lo tanto, también discuten la cuestión de cómo transformar estas ideas en acciones e identifican diferentes planteamientos: para una realización exitosa, las actividades de cambio no sólo deberían centrarse en los aspectos formales y visibles de una organización como directrices y reglas, sino dirigirse a los valores y convicciones de las personas en la organización. Sólo de esta manera su respuesta a los cambios será favorable (*ibíd.* 41). Será importante aclarar cómo los cambios se vinculan a la cultura, misión y el significado de la organización, lo que se puede lograr a través de la idea de “creating a vision”. Asimismo, mediante un “business case”, habrá que identificar quiénes dentro de la organización creen que se requieren cambios y por qué, y discutir los impactos si no serán realizados (*ibíd.* 42). A este respecto también se deben abarcar las necesidades emocionales y racionales de las personas. En la práctica, esto significa que tanto individuos como ciertos grupos dentro de una organización pueden oponerse a los cambios; sobre todo si consideran que los cambios aspirados no corresponden con la cultura y misión de la organización. Con el fin de excluir tales problemas, se debería tener en cuenta un periodo adecuado para que el personal pueda discutir los cambios y los efectos de reformas (*ibíd.*).

Otro aspecto importante que debería tenerse en cuenta concierne a los efectos contextuales: cambios nunca pueden considerarse de forma aislada en un solo ámbito determinado, dado que, debido a la naturaleza dinámica de una organización, siempre influyen en otras partes de la misma. Por ende, se propone la creación de un “internal communications mechanism” como

plataforma para facilitar la publicación de éxitos y fallos y para poder discutir los procesos de cambio. Tal mecanismo y los nuevos contextos que conlleva requieren de líderes y responsables capaces de fomentar reformas y establecer una base legítima para el desarrollo de nuevas ideas y patrones (*ibíd.*).

Para concluir, cabe señalar que cambios y reformas conciernen tanto los componentes informales como formales de una organización. Con respecto a la parte informal, Clarke y Ramalingam proponen el establecimiento de una dirección clara para el proceso de cambio, el aumento de la participación organizacional en todas las fases del proceso y la mejora de la comunicación interna entre los diferentes equipos de la organización (*ibíd.* 43). Estos enfoques tendrán impactos significantes sobre la gestión de la organización y la cuestión de cómo se percibe y utiliza el poder dentro de la misma: puede impulsar procesos, pero no debería determinar su resultado. En este contexto destacan: “The implication of this is that many organisations may need to make significant changes before they are able to change” (*ibíd.*). Las organizaciones están expuestas a influencias externas de forma continua. Al reflexionarlas y permitir el surgimiento de discusiones y un intercambio ilimitado, se puede promover la realización de los cambios aspirados. Asimismo, constataciones claves sobre el funcionamiento de organizaciones y la revelación de conceptos erróneos pueden crear una base para poder fomentar una concienciación mejor frente a las prácticas organizacionales a nivel interno.

10. Reflexiones finales y conclusiones

El análisis de la bibliografía elegida muestra que el sistema de protección de las Naciones Unidas para las IDP tiene debilidades graves y lagunas jurídicas de gran impacto, por lo que urgentemente requiere de reformas. Las debilidades en la distribución de las tareas, en la comunicación interna y en los ámbitos oficiales de responsabilidades de los diferentes órganos tienen un efecto negativo sobre las necesidades de protección de las IDP. Aunque en la práctica los agentes relevantes hayan establecido mecanismos de colaboración, no obstante existen problemas notables en el ámbito de la coordinación de la ayuda humanitaria. Pese al establecimiento del *Cluster Approach* y del *Global Protection Cluster*, sólo se han notado mejoras formales, pero sin impactos considerables en la práctica. En consecuencia, es absolutamente necesario revisar los mandatos de los órganos respectivos de las Naciones Unidas. El papel del Estado se puede considerar crítico, dado que ante el concepto de la soberanía estatal tiene más derechos que obligaciones frente a sus ciudadanos. Problemas estatales, como por ejemplo corrupción o la falta de integridad política, socavan la eficacia de cualquier medida. Desde este punto de vista en particular, la soberanía estatal constituye un concepto ‘anticuado’, puesto que ante violaciones masivas de los derechos humanos, flujos de refugiados (tanto internos como transfronterizos) y los efectos peligrosos que conllevan también sobre los Estados vecinos y/o la comunidad internacional entera, la soberanía estatal puede obstaculizar la provisión de la ayuda humanitaria en situaciones de emergencias masivas. Consecuentemente, los conceptos de la *Responsibility to Protect* (R2P) y de la *Human Security* deberían ampliarse e incorporarse en la legislación internacional.

Aunque constituye una medida de último recurso, existen situaciones en las que intervenciones humanitarias son inevitables: si la paz mundial es amenazada, el Consejo de Seguridad tiene que reaccionar. No obstante, en el pasado el Consejo se ha visto enfrentado a numerosas críticas, debido a percibidos prejuicios y arbitrariedad en la toma de decisiones a favor o en contra de intervenciones humanitarias en determinados países. Para poder establecer un sistema de protección adecuado y uniforme para las IDP, las decisiones del Consejo de Seguridad deben ser más previsibles e imparciales. Asimismo, los cinco miembros permanentes con derecho de veto deberían renunciar a cierto poder en la política y economía global, dado que las decisiones tomadas por el Consejo tradicionalmente reflejan los intereses de estas potencias mundiales. Por lo tanto, el derecho de veto ya no es conforme a las realidades actuales, dado que posibilita a los miembros permanentes bloquear intervenciones humanitarias importantes.

En el caso de violaciones graves de los derechos humanos y otras situaciones alarmantes, una obligación de intervenir de acuerdo con los conceptos de la *Responsibility to Protect* y la *Human*

Security sería de importancia esencial para poder lograr más uniformidad en la toma de decisiones.

Los *Guiding Principles on Internal Displacement* constituyen un fundamento jurídico significativo en cuanto al trato de las IDP; no obstante, su fomento mejor y posiblemente el desarrollo de convenciones legalmente vinculantes presentarían pasos importantes para la ampliación y consolidación del sistema de protección de las IDP.

Se han discutido diferentes enfoques de solución cuya combinación conllevaría una mejora considerable en el sistema de protección de la ONU para las IDP. La reforma de leyes existentes junto con la creación de nuevas leyes constituiría el desarrollo de un marco normativo necesario para poder adoptar medidas sostenibles y superar las deficiencias y zonas intermedias presentes. Asimismo, sería imprescindible una reforma institucional, aunque la constitución de un nuevo órgano de las Naciones Unidas hasta la fecha no se puede considerar realista. La asignación de la responsabilidad principal a un órgano determinado de la ONU sería un paso importante para la mejora del sistema de protección, dado que de esta manera se podría reaccionar con mayor rapidez al desplazamiento interno. En este contexto, en muchos casos el ACNUR constituiría el órgano más adecuado, dado que podría redistribuir la responsabilidad a otros organismos de las Naciones Unidas, así como involucrar ONGs internacionales, nacionales, regionales y locales sobre el terreno. Por consiguiente, también una aplicación y realización optimizada del *Cluster Approach* y una coordinación mejor de las operaciones son urgentemente necesarias.

El aumento de recursos financieros y la ampliación de las medidas de seguridad y protección, tanto para las IDP como para los trabajadores de organizaciones humanitarias, presentan otros aspectos fundamentales en el proceso del mejoramiento del sistema de protección. El *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* ofrece instrucciones y directrices importantes, y por tanto debería ser aplicado más frecuentemente sobre el terreno y establecerse más firmemente en las operaciones humanitarias.

El factor de la participación de las IDP mismas también merece más consideración y debería aplicarse mejor en la práctica. Asimismo, el fomento de medidas ‘postoperativas’ es de importancia vital, como por ejemplo el apoyo en el restablecimiento de la vida diaria, medidas respecto al “capacity-building” en la sociedad que incluyen por ejemplo la concienciación nacional sobre el problema del desplazamiento, la creación de un marco legal nacional para afirmar los derechos de las IDP, así como el desarrollo de una política nacional especial para satisfacer las necesidades de los desplazados.

Para resumir, cabe destacar que en lugar de tomar medidas de acuerdo con el “emergency relief”, es decir, el socorro de emergencia que se centra sobre todo en combatir los síntomas de una crisis, es imprescindible aspirar a soluciones a largo plazo con un enfoque especial en el mantenimiento

de la paz y la resolución de las causas de los conflictos. En consecuencia, la protección, medidas de prevención y soluciones políticas y económicas deben constituir metas esenciales. El marco para posibles soluciones debería ser extendido y fomentado para poder realizar enfoques de solución tanto duraderos como funcionales.

Desde el punto de vista antropológico organizacional, se propone que la realización de reformas dentro de los órganos de la ONU debería optimizarse urgentemente con el fin de poder garantizar éxitos prácticos. Los cambios necesarios no se pueden inducir exclusivamente a través de reformas y directrices, sino tienen que consolidarse en las mentes de las personas involucradas y ser aceptados por ellas. Consecuentemente, es indispensable prestar más atención a los recursos humanos de los órganos de las Naciones Unidas, dado que a fin de cuentas son las personas que son responsables de la implementación y realización práctica de las reformas.

Dado que la situación de las IDP se agrava cada vez más a nivel mundial, los cambios propuestos en esta primera parte de la tesis hacia el mejoramiento del sistema internacional de protección son inevitables para poder oponerse a los acontecimientos actuales de forma adecuada y eficaz:

- (1) en interés de la comunidad internacional, la estabilidad de los Estados particulares tiene que ser garantizada, ya que con una interdependencia creciente y relaciones económicas y políticas estrechamente vinculadas, ya no se pueden excluir impactos graves transfronterizos causados por desastres y crisis bélicas. Conflictos latentes conllevan efectos tanto regionales como internacionales y ya no pueden ser ignorados.
- (2) El cumplimiento con los derechos humanos es exigido cada vez más por parte de actores relevantes internacionales, así como por las Naciones Unidas. Por tanto, y en oposición a la soberanía estatal, la importancia de la intervención humanitaria (primordialmente no militar) en situaciones críticas se está aumentando.
- (3) Por consiguiente, el significado de investigaciones sobre esta temática se incrementará, e institutos de investigación como el *Internal Displacement Monitoring Centre* tendrán un papel fundamental en este contexto.
- (4) Con respecto a la no intervención en situaciones críticas, cabe destacar que en la era digital y de internet con acceso constante a cualquier acontecimiento global, las justificaciones tanto racionales como emocionales serán cada vez más importantes y analizadas críticamente por el público en todo el mundo. El afecto creciente entre las personas a nivel mundial conllevará una responsabilidad aumentada en la comunidad internacional que también tendrá que reflejarse en las actitudes, la toma de decisiones y en las acciones de nuestras autoridades gubernamentales.

II. La intervención militar en Libia en 2011: ¿una obligación normativa para proteger a la población civil o intereses políticos de poder?

1. Información de contexto e interrogantes claves

Tras la intervención humanitaria de la comunidad internacional en Libia, llevada a cabo a partir de la primavera de 2011, han surgido numerosas dudas sobre las intenciones verdaderas de los Estados intervinientes; por un lado debido a la rapidez con la que fue realizada, por otro lado por las numerosas inconsistencias a lo largo de la intervención. Por tanto, se plantean diversas preguntas al respecto. Para poder aclarar estas dudas principales, en un primer paso se analizarán las siguientes cuestiones: ¿violó el gobierno libio gravemente los derechos humanos e incluso planeó un genocidio, lo que habría justificado una intervención humanitaria? ¿La intervención militar se llevó a cabo exclusivamente con el fin de proteger a la población civil, o de hecho existían otras intenciones vinculadas con intereses particulares estratégicos de los Estados intervinientes? Bajo “pretexto” de una intervención humanitaria ¿las Naciones Unidas, y sobre todo Occidente, aspiraban a imponer una victoria militar de los rebeldes con el fin de provocar un cambio de régimen? Y ¿qué papel jugaron los intereses de los Estados intervinientes, principalmente de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos?

En contraste con los movimientos revolucionarios relativamente pacíficos en Egipto y Túnez que plantearon unas reivindicaciones más centradas en la consecución de una mayor democracia y libertad, las manifestaciones en Libia cayeron en muy poco tiempo en una escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad libias y de los manifestantes. Solamente tardó once días, contados a partir de la fecha de las primeras manifestaciones en Libia con unos pocos cientos de participantes, hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara medidas de sanción en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas contra los miembros del gobierno libio. Y diecinueve días más tarde, también se impusieron amplias medidas militares con el fin de “proteger a la población civil” (*cf.* Sensini 2012: 78) con Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos llevando a cabo los primeros ataques aéreos. Pero no sólo es notable la rapidez con la que el Consejo de Seguridad llegó a un consenso (*cf.* Thakur 2011: 12-13), sino también el hecho de que ya cinco días después del establecimiento de un “gobierno libio rebelde”, Francia lo reconoció como representante oficial del Estado. Por tanto, una solución diplomática del conflicto prácticamente fue excluida.

El apoyo militar a los rebeldes ya antes de la legitimación de la intervención da la impresión de un cambio de régimen inducido por terceras partes. Con su Resolución 1973 aprobada el 17 de marzo de 2011, oficialmente a causa de los “crímenes contra la humanidad” cometidos por el gobierno libio, el Consejo de Seguridad se remitió por primera vez al concepto de la *Responsibility to Protect* (véase parte I, cap. 5.1) para justificar las medidas militares, es decir, invocó el supuesto no cumplimiento con el deber del gobierno libio de proteger a su población civil (*cf.* Benner, 01.03.2012). Consecuentemente, y para complementar el capítulo 5.1, integraré la *Responsibility to Protect* en la teoría normativa de los sistemas de las relaciones internacionales con el fin de poder ofrecer una visión de conjunto global del concepto y de su aplicación en la práctica.

Para la discusión posterior sobre el papel de los intereses propios de los Estados intervinientes se planteará un enfoque de la teoría neorrealista. Pero hay que señalar que el neorrealismo no constituye una teoría homogénea, sino que implica diferentes maneras de pensar (*cf.* Hyde-Price 2006: 218), por lo que en el marco de esta tesis, sólo se considerarán los contenidos pertinentes para el análisis siguiente.

Mediante los criterios de selección de la R2P, en la parte analítica se investigará la cuestión si los Estados intervinientes se metieron en el conflicto libio a causa de su deber normativo de prevenir el sufrimiento humano y si cumplieron con los requisitos previos indispensables para una intervención humanitaria⁴². En este contexto, también conviene comprobar la gravedad de las violaciones de los derechos humanos a nivel nacional e indagar la adecuación y la legitimidad de la intervención militar.

A causa de la discrepancia resultado por un lado de los objetivos oficiales y por otro lado de las acciones reales de algunos Estados intervinientes, en un último paso de este capítulo se analizarán los posibles intereses propios de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto. Francia, el Reino Unido y los EE.UU. fueron los Estados que más abogaron por la realización de una intervención militar, por lo que es fundamental investigar sobre los beneficios que éstos esperaban de la intromisión. Dado que Rusia y China posibilitaron el mandato del Consejo de Seguridad por su abstención, de igual manera se plantea la cuestión en qué motivos se basó esta decisión.

⁴² Autoridad competente, causa justa, intención correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables.

1.1 Los instrumentos de un análisis teórico: las normas en las relaciones internacionales

Según Brunnée y Toope (2010: 86), el establecimiento de las normas sólo es posible “when societies generate shared understandings of the need for norms, and deeper shared understandings of the need for specific norms to guide behaviour”. Las normas generalmente no están destinadas a definir resultados concretos, sino más bien a determinar ciertos actos posibles. Como consecuencia, en diferentes situaciones se especifica cuál de las actitudes se considera más apropiada (March y Olsen 2006: 694) para poder reducir el riesgo de incertidumbre. Pero, ¿de qué manera se desarrollan las normas? Hay varias maneras, a veces contrarias, respecto a la forma por la que se pueden establecer. Por un lado, pueden ser el resultado tras nuevas experiencias, desarrolladas a lo largo de un determinado periodo de tiempo hasta el establecimiento de su codificación; por otro lado, pueden ser normas ya existentes, aunque no muy efectivas que requieren de modificaciones hacia más eficacia (*ibíd.* 694-697).

Fundamentalmente, estos procesos se deben a la trayectoria dependiente, así como a la trayectoria divergente (*ibíd.* 698). Según Finnemore y Sikkink (1998), el primero es un atributo importante del derecho internacional, en el que las nuevas normas deben integrarse sin contradicción en el marco jurídico internacional ya existente (*cf.* 909). Al contrario, la trayectoria divergente a veces surte efecto en fases de choques exógenos y endógenos: frecuentemente son guerras o conflictos bélicos los que dan el impulso de reconsiderar las normas (legales internacionales) existentes, especialmente aquellas que se asocian con la “parte perdedora”, y buscar por alternativas (*ibíd.*). Pero también los levantamientos nacionales que cuestionan la legitimidad de la élite política respectiva (lo que al mismo tiempo conlleva impactos negativos a su estatus dentro del sistema internacional), pueden contribuir a la aceptación de nuevas normas (“legítimas”) del derecho internacional por parte de los Estados afectados que de esta forma intentan recuperar mayor legitimidad nacional e internacional (*ibíd.* 905).

1.1.1 La actuación gubernamental por medio de las normas internacionales

Para poder hacer accesible las normas necesarias para el análisis, se puede recurrir a una categorización casi dicotómica, o sea *regulativa* y *constitutiva* (*cf.* Finnemore y Sikkink 1998: 890). Sin embargo, es más conveniente no someter a las normas mismas a esta clasificación, sino a los efectos que las normas pueden causar.

Las normas pertenecientes a la categoría de los *efectos regulativos* tienen un efecto restrictivo sobre los actores o prohíben ciertas acciones por completo, mientras que las normas con *efectos constitutivos* especifican el tipo de actitud que al final es primordialmente el factor que posibilita

la realización de las acciones (*cf.* Tannenwald 2007: 44). Pero ¿por qué los Estados deberían someterse a las normas internacionales? Por lo general, se aplica la regla que se acatan a las normas, ya que las consideran “legítimas”. Si aún encima están incluidas en las instituciones pertinentes o en las normas existentes, éstas pueden proporcionar argumentos legítimos adicionales, debido a sus condiciones específicas, por lo que repercuten en la actitud de los Estados. Pero aun cuando las normas no estén institucionalizadas, pueden establecerse, por ejemplo, mediante el “apoyo” de las grandes potencias (*cf.* Klotz 1995: 23). Por otra parte, cabe destacar que los miembros de una comunidad (como p.ej. de las Naciones Unidas) normalmente actúan de conformidad con la comunidad y no exclusivamente con sus propios intereses, lo que se debe a dicha pertenencia (*cf.* March y Olsen 2006: 690-692).

No obstante, sería erróneo excluir completamente los intereses propios de los Estados en el análisis sobre la eficacia de las normas internacionales. Los Estados no sólo se comprometen a las normas internacionales o al derecho internacional debido a su legitimidad, sino también porque estas normas reflejan sus propios intereses; al fin y al cabo, son los Estados los que han creado las normas. En contraste al neorrealismo, que será analizado más detalladamente en el capítulo 1.2 de esta parte II, la supervivencia de los Estados no depende de su posición de poder relativa en el sistema internacional, sino del éxito por el que son capaces de mantener e imponer las normas del derecho internacional (*cf.* Kocs 1994: 540-542; Klotz 1995: 16). El establecimiento y el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional, tales como el principio de la soberanía (art. 2 (1) de la Carta de las Naciones Unidas), la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (art. 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas) y la prohibición de la intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (art. 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas), por tanto son de interés vital de cada uno. Debido a su orientación pacífica, conviene señalar que en el sistema internacional, las normas jurídicas internacionales tienen un efecto inhibitorio con respecto a la guerra. Sólo los Estados que infrinjan dichas normas deben temer sanciones (militares)⁴³ por otros Estados (*cf.* Kocs 1994: 542-548). Del mismo modo que las normas pueden ser caracterizadas por el interés propio de los Estados, las normas también pueden afectar a los intereses de éstos últimos y cambiarlos, respectivamente (*cf.* Klotz 1995: 26; Tannenwald 2007: 25). Dado que las normas forman la base según la cual se evalúa la actitud, por consiguiente son cruciales para determinar el momento en el que surgirá una cooperación o un conflicto (*cf.* Klotz 1995: 31). Debidamente, en la literatura especializada se supone cada vez más que en los ámbitos relevantes para la seguridad, las normas son de importancia fundamental

⁴³ Pero cabe señalar que dado que son los Estados mismos los que deciden sobre acciones (militares) a causa de las violaciones internacionales de las normas, de hecho tales violaciones solamente se sancionan de forma muy selectiva.

(cf. Tannenwald 2007: 4-5). Especialmente las normas con *efectos constitutivos* pueden contribuir a posibles cambios en la actitud y en los intereses de los actores estatales (cf. Klotz 1995 : 26). De este modo, la aplicación global de los derechos humanos tiene cada vez más importancia normativa con respecto a los intereses de los Estados, aunque puedan colisionar con otras normas establecidas, tales como la prohibición de la intervención y el principio de la soberanía (*ibíd.* 17). El fin del orden bipolar en el mundo después de la Guerra Fría se convirtió en el origen de nuevas amenazas de la seguridad para los Estados. El recurso a las normas relacionadas con los derechos humanos ha conllevado nuevos conceptos estratégicos de seguridad con el fin de contrarrestar las amenazas modernas:

These new 'comprehensive' concepts of security have presented human rights policies as integral to attacking the roots of international instability, stemming migration flows, tempering antiwestern nationalism and reducing regional fragmentation. (Youngs 2004: 421).

Por lo general, para que los actores estatales puedan hacer frente a los nuevos retos de seguridad, estar dispuestos a aprender de catástrofes pasadas es una condición necesaria para abordar sosteniblemente la cuestión si estos nuevos desafíos pueden superarse mediante las normas existentes o si se requieren alternativas (cf. March y Olsen 2006: 700). Esto lleva al concepto de la *Responsibility to Protect*, ya mencionado en la parte I, capítulo 5.1, al tener en cuenta sobre todo el aspecto de la soberanía estatal y las responsabilidades vinculadas. Como señalado anteriormente, el concepto de la R2P interpreta la norma internacionalmente reconocida de la soberanía estatal de una manera completamente nueva, con el fin de que también en los conflictos internos la comunidad internacional tenga la posibilidad de influir eficazmente.

1.1.2 El desarrollo de una obligación normativa internacional de protección: una visión general

Alrededor del cambio de milenio, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dio el impulso para el desarrollo de un concepto alternativo de la soberanía. Ante la Asamblea General de la ONU lanzó la cuestión de qué manera se podrían prevenir y evitar los crímenes contra los derechos humanos a nivel nacional, como por ejemplo en Ruanda en 1994 o en Srebrenica (Bosnia y Herzegovina) en 1995, pese a la norma jurídica internacional del principio de soberanía que prohíbe una injerencia en los asuntos internos de un Estado. En consecuencia, por iniciativa del gobierno de Canadá, en septiembre de 2000 se estableció la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE; o ICISS según sus siglas en inglés) que debía ocuparse de la cuestión sobre la exigibilidad de los derechos humanos fundamentales en el ámbito nacional (cf. ICISS 2001: VII; Wenzel 2010: 7). El concepto de una

obligación de protección⁴⁴, o sea la *Responsibility to Protect*, presentado por la comisión en diciembre de 2001, interpreta y define la soberanía estatal de forma totalmente nueva: esta norma ya no debe existir únicamente para proteger a los Estados de intromisiones (militares) por otros Estados, sino se la considera un deber de los Estados mismos de proteger a sus ciudadanos y garantizar su bienestar físico. Si un Estado no cumple con esta obligación, como muestran los ejemplos extremos de Ruanda y Bosnia y Herzegovina, entonces la obligación de protección estará en manos de la comunidad internacional que consecuentemente tiene que tomar medidas adecuadas (ICISS 2001: VIII). Desde este punto de vista de la CIISE, se deduce que la norma de la soberanía ya no debe incluir meramente *efectos regulativos* (o sea prohibir las intervenciones en asuntos nacionales), sino también *efectos constitutivos*, y, por lo tanto pautas de conducta para la comunidad internacional en el caso de crisis humanitarias nacionales.

En 2004, las Naciones Unidas publicaron el denominado informe del *High-Level Panel on Threats, Challenges and Change*⁴⁵ que debía evaluar las instituciones existentes de la ONU respecto a su idoneidad de responder adecuadamente a los retos de seguridad de hoy en día (ONU 2004: VII). Este informe confirmó que la R2P constituye una norma a base del derecho internacional, y al mismo tiempo emitió directrices al Consejo de Seguridad según las cuales ya no debe decidir si *puede* intervenir, sino si *debiera* intervenir (*ibíd.* 66, énfasis de la autora; *cf.* Wenzel 2010: 15). Estas directrices son casi idénticas a las de la CIISE (ONU 2004: 67; ICISS 2001: 32-37)⁴⁶.

Un año más tarde, durante la Cumbre Mundial de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas formalmente aceptó el concepto de la *Responsibility to Protect* en los párrafos 138 y 139 del documento final (Bellamy 2009: 66), y por ende lo convirtió en una norma internacional aprobada por la membresía completa de la ONU (*ibíd.* 95). Pero cabe destacar que la Asamblea General ligeramente restringe los requisitos de la CIISE, aunque en cambio crea una mayor claridad jurídica (Pattison 2010: 14). De este modo, los resultados para la autorización de una intervención militar se definen más específicamente a “genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” (Asamblea General 2005: 30; *cf.* Wenzel 2010: 72). Medio año más tarde, y tras negociaciones intensas, el Consejo de Seguridad ratificó el concepto de la R2P por unanimidad (Bellamy 2009: 133). Pero en la respectiva Resolución 1674 de 2006⁴⁷, remite únicamente a los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005⁴⁸:

⁴⁴ Según la Comisión, los ataques terroristas contra el *World Trade Center* en los EE.UU. el 9 de septiembre de 2001 no tenían ninguna influencia en el desarrollo del concepto de la obligación estatal de protección, puesto que el terrorismo no entra en el ámbito de competencia de este concepto (ICISS, 2001: VII).

⁴⁵ UN, “UN High-Level Panel on Threats, Challenges and Change Report, ‘A More Secure World, Our Shared Responsibility’”, 2004.

⁴⁶ En el informe del *High-Level Panel* se presenta otra razón justificando una intervención: las “violaciones graves del derecho internacional humanitario” (ONU 2004: 67).

⁴⁷ ONU, Consejo de Seguridad, Resolución 1674 (2006), 28.04.2006, §4.

⁴⁸ ONU, Asamblea General, “60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, 24.10.2005.

Reafirma las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 respecto de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. (Resolución 1674 (2006), §4)

Consecuentemente, no se lo ha apropiado a la R2P (Wenzel 2010: 43). Aunque este procedimiento del Consejo de Seguridad y la práctica de los Estados⁴⁹ muestra que hasta el momento con la R2P no se trata de ninguna norma *establecida* del derecho internacional humanitario (Wenzel 2010: 44), sin embargo se la puede considerar como una norma del derecho internacional humanitario *en proceso de desarrollo* (*ibíd.* 15). El consenso de la Asamblea General en este sentido muestra que la comunidad internacional tiene determinadas expectativas con respecto a las acciones del Consejo de Seguridad, tan pronto como se cometan violaciones masivas de los derechos humanos a nivel nacional.

1.1.2.1 Proteger al intervenir: la controversia de la *Responsibility to Protect* (R2P por sus siglas en inglés)

En el contexto mundial posterior a la Guerra Fría, una creciente conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos ha captado la atención de la comunidad internacional como nunca antes, y el tema de la intervención con fines de protección humana se ha convertido en un motivo serio de controversia. En consecuencia, la intervención humanitaria ha experimentado una transformación significativa. Hasta la fecha, se han hecho numerosas demandas de intervenciones humanitarias de las que algunas han sido atendidas y otras no. Pero frente a las crisis bélicas de los años '90 como en Irak, Ruanda, Somalia, Bosnia y Kósovo, la importancia de acciones colectivas oportunas se hizo cada vez más evidente. Como se ha descrito anteriormente, en respuesta a tales situaciones, la *International Commission on Intervention and State Sovereignty* implementó por primera vez la expresión “responsabilidad de proteger” tras haber atendido a la pregunta siguiente del entonces Secretario General Kofi Annan que planteó en su Informe de 2000 sobre el Milenio:

*Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Rwanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?*⁵⁰

El concepto de la R2P es el resultado de varios años de negociaciones diplomáticas sobre

⁴⁹ Según Haid (2011b), el establecimiento de una norma como norma consuetudinaria internacional requiere una práctica estatal y convicción jurídica uniformes. Esta condición no se cumple con el nuevo concepto normativo de la R2P (*cf.* 21).

⁵⁰ ANNAN, Kofi, *cit. en* UN, “Programa de divulgación sobre el Genocidio en Rwanda y las Naciones Unidas”, Marzo 2014.

cómo y bajo qué circunstancias la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir en otro Estado para proteger a los ciudadanos afectados por una crisis. En los últimos años, esto ha provocado una polémica considerable. Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior y en la parte I, capítulos 5, la doctrina de la R2P tiende a alterar la relación entre la soberanía estatal y la responsabilidad de los Estados frente a sus ciudadanos, así como las obligaciones de la comunidad internacional. Pero desde su aprobación en 2005 por la Asamblea General ha sido muy cuestionada y criticada, sobre todo debido a la preocupación de una actitud imperialista por Occidente, temores de una extensión de las intervenciones militares, así como de una dependencia de la voluntad política de los Estados más poderosos (Chesterman 2011: 134). En lo que concierne a la crisis libia, a continuación será examinado el papel del principio de la R2P en consideración de los desafíos actuales. En particular, será aplicado el concepto de la R2P al caso concreto de Libia y la intervención militar en 2011. Las preocupaciones existentes sobre el uso de la fuerza en Libia, fundamentado en la Resolución 1973, han llevado a una percepción negativa de la doctrina de la *Responsibility to Protect* que desde entonces ha causado reservas que impiden su aplicación en crisis humanitarias actuales, como la guerra civil en Siria, lo que en consecuencia significativamente afecta el futuro de la R2P.

1.1.2.2 Antecedentes y criterios de aplicación: del concepto a la doctrina

Tras haber sido testigos de crisis humanitarias extremadamente violentas como las de Ruanda y Kósovo, la reputación y credibilidad de la ONU y del Consejo de Seguridad fueron cuestionadas gravemente por la comunidad internacional. Como consecuencia, para Kofi Annan el restablecimiento de la credibilidad de la ONU constituyó una misión prioritaria. En 2000, instó a la comunidad internacional a elaborar un nuevo enfoque de la intervención humanitaria (*cf.* UN, Marzo 2014). Esto impulsó un debate sobre el uso de la fuerza en defensa de los derechos humanos protegidos por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario. Muchos Estados miembros adoptaron una actitud crítica frente al riesgo de abuso del derecho de intervenir. Por otro lado, Annan insistió en que la soberanía estatal no debía ser considerada como un escudo protector para un determinado Estado cuando se cometan violaciones graves de los derechos humanos en su territorio. Por lo tanto, el “derecho de intervención” debe considerarse como una “responsabilidad de proteger” (*ibíd.*). En marzo de 2000, Annan seriamente amonestó a la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio al haber afirmado:

La intervención humanitaria es una cuestión delicada, plagada de dificultades políticas y sin soluciones fáciles. Pero sin duda no hay ningún principio jurídico – ni siquiera la soberanía – que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. En los lugares en que se cometen esos crímenes y se han agotado los intentos por ponerles fin por medios pacíficos, el Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de la comunidad internacional. El hecho de que no podamos proteger a los seres humanos en todas partes no justifica que no hagamos nada cuando podemos hacerlo. La intervención armada debe seguir siendo siempre el último recurso, pero ante los asesinatos en masa es una opción que no se puede desechar. (ONU, A/54/2000, 38)*

Con el establecimiento de la mencionada CIISE en 2000, se intentó abordar todos los aspectos del debate sobre la soberanía estatal y los principios de intervención, lo que resultó en un informe integral de la Comisión llamado “The Responsibility to Protect”⁵¹. La Comisión hizo hincapié en la “soberanía como responsabilidad” y simplemente afirmó que la soberanía estatal implica responsabilidad; y la responsabilidad central en cuanto a la protección de sus ciudadanos recae de por sí sobre los Estados. No obstante, si un Estado no cumple con sus obligaciones, la comunidad internacional debe asumir la responsabilidad (ICISS 2001: 10). De hecho, la CIISE propuso una doble responsabilidad de los Estados, tanto interna como externa. La responsabilidad primaria del Estado consiste en proteger la vida y seguridad de los ciudadanos, así como promover un bienestar general que refuerce la sensación de seguridad dentro de la comunidad política. A este nuevo concepto de soberanía también corresponde un nuevo concepto de seguridad en conformidad con la nueva agenda global de desarrollo por la que el individuo ha sido puesto en el centro de las preocupaciones internacionales (Thakur 2011: 116). Al mismo tiempo, la Comisión enfatizó que los Estados en su conjunto tienen una responsabilidad externa a través de las Naciones Unidas. La CIISE determinó tres situaciones en las cuales se aplica la responsabilidad externa de los Estados:

- cuando un Estado determinado claramente no quiere o no puede cumplir con su responsabilidad de proteger, o
- cuando un Estado mismo es el autor de crímenes o atrocidades, o
- cuando personas que viven fuera de un Estado determinado estén directamente amenazadas por los acontecimientos que se producen allí (ICISS 2001: 17).

Es importante destacar que la Comisión hizo hincapié en la importancia del aspecto preventivo como elemento más esencial de la doctrina de la R2P. Además, según el informe, la intervención militar por motivos de protección humana solamente debe considerarse en circunstancias excepcionales. “Para que esté justificada ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable” del siguiente tipo:

⁵¹ ICISS, *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, 2001.

A. grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o
B. ‘depuración étnica’ a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación. (CIISE, Informe, 2002: xvi)

Además, la R2P abarca tres elementos claves que la Comisión determinó como la Responsabilidad de Prevenir, la Responsabilidad de Reaccionar y la Responsabilidad de Reconstruir (*ibíd.* 14; véase parte II, cap. 1.1.2.5 y 1.1.2.6). En lo que concierne a la legitimidad de la intervención, la CIISE desarrolló seis requisitos básicos que se aplican tanto al Consejo de Seguridad como a los Estados miembros de la ONU, es decir: autoridad competente, causa justa, intención correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables (*ibíd.* 29). Con el fin de abordar la legalidad de una intervención militar, la Comisión señaló cuatro de los requisitos como criterios precautorios:

A. Intención correcta: El fin primordial de la intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos, debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. La mejor forma de cumplir con el principio de intención correcta es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas y de la opinión pública regional.
B. Último recurso: La intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado fruto.
C. Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido.
D. Posibilidades razonables: Debe haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción. (ibíd. xvi)

Al tener en cuenta todas estas condiciones junto con el criterio mínimo de *just cause*, la CIISE estima que en el momento de adoptar decisiones políticas “se podrá delimitar estrictamente el uso coercitivo de la fuerza militar” (*ibíd.* 33).

Con respecto a la autoridad competente, la Comisión declaró claramente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano adecuado para autorizar una intervención militar con fines de protección humana (*ibíd.* xvi). Pero sin embargo, cabe realzar que en caso de que el Consejo de Seguridad no actúa, el informe no excluye la posibilidad de intervenir por parte de la Asamblea General, organizaciones regionales o mediante coaliciones de Estados para proteger a los ciudadanos. El informe de la CIISE fue acogido con agrado por la mayoría de los Estados miembros, dado que evitó pronunciarse de forma definitiva con respecto al tema de la legalidad y legitimidad de intervenciones no autorizadas.

Con el propósito de seguir fomentando el principio de la R2P, en 2004, el ex Secretario General Kofi Annan estableció el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el

Cambio para responder a los desafíos recientes (ONU, A/59/565, 2004). El mandato del Grupo abarcó el análisis de las amenazas actuales y futuras a la paz y la seguridad, y lanzar recomendaciones y medidas prácticas al respecto. El informe que publicó en diciembre de 2004, titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, adoptó un enfoque de seguridad humana e hizo una serie de recomendaciones sobre una amplia gama de cuestiones. Con respecto a la R2P, el informe considera la doctrina como un método adecuado para fortalecer el sistema de seguridad colectiva. Aunque el Grupo identificó un deber particular de cada Estado de proteger a sus ciudadanos, meramente afirmó la “obligación de proteger” que tienen *todos* los Estados cuando se trata de seres humanos que sufren una catástrofe que se puede evitar, ya se trate de homicidios o violaciones en masa, de la depuración étnica mediante el terror y la expulsión por la fuerza, de matarlos deliberadamente de hambre o de exponerlos a enfermedades” (*ibíd.* párr. 201).

Pero conviene señalar que por parte de expertos se ha notado que la mención de la responsabilidad de “todos los Estados” da mucho espacio para una interpretación amplia: por un lado, puede interpretarse como un simple recordatorio de la aplicabilidad *erga omnes* de las obligaciones internacionales, por ejemplo en casos de genocidio, tortura y violaciones graves de los Convenios de Ginebra que suscitan la Responsabilidad de Proteger. No obstante, por otro lado, el informe también permite una interpretación más general que respalda un concepto más amplio de responsabilidad bajo el cual la responsabilidad del Estado en cuestión pasa a cualquier otro Estado por si el primero no pudiera o no quisiera actuar (Stahn 2007: 105).

Además, y al igual que la CIISE, el informe recurre a los cuatro criterios precautorios anteriormente citados para legitimar el uso de la fuerza, o sea intención correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables. Pero adicionalmente, en cuanto a la cuestión de la autoridad competente, consta claramente que “la tarea no consiste en encontrar una alternativa al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad, sino en que funcione mejor que hasta ahora” (*ibíd.* 59).

En su informe de 2005, Annan reiteró la importancia de la R2P al exhortar la comunidad internacional a adoptar el principio de la Responsabilidad de Proteger como base de la acción colectiva contra el genocidio, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, reconociendo que la responsabilidad primaria recae ante todo en cada Estado individual, pero también que, si las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a proteger a sus ciudadanos, la responsabilidad se traslada a la comunidad internacional, y que como último recurso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la autoridad de tomar medidas coercitivas de conformidad con la Carta (UN News Centre, 21.03.2005; ONU, A/59/2005, 2005).

Además, Annan hizo hincapié especial en la necesidad de poner en práctica el principio de la R2P mediante vías pacíficas. Por ende, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger se ha convertido en una responsabilidad de utilizar, entre otros, métodos diplomáticos y humanitarios para ayudar a proteger los derechos humanos y el bienestar de las poblaciones civiles (*ibíd.*).

Es importante realzar que, de acuerdo con la CIISE y el Grupo de Alto Nivel, la intervención humanitaria fue interpretada como una medida de *ultima ratio* que, de ser adoptada, debería ser puesta en práctica exclusivamente por el Consejo de Seguridad. Por otra parte, el informe también se refirió a los cinco criterios precautorios de legitimidad para el uso de la fuerza, mencionados en el informe de la CIISE. Por lo tanto, en comparación con la Comisión y el Grupo de Alto Nivel, no hay ninguna distinción sustancial con respecto a la intervención humanitaria.

En la Cumbre Mundial de 2005, más de 150 Estados se reunieron para conmemorar el sexagésimo aniversario de la ONU. Debido al esfuerzo del ex Secretario General Annan y los defensores de la R2P, la doctrina se convirtió en un tema de gran importancia y las negociaciones finalmente resultaron en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (ONU, A/RES/60/1, 2005). Mientras que algunos Estados argumentaron que el asunto es demasiado ambiguo con un alto potencial de abuso, otros cuestionaron la legalidad de la R2P (*cf.* Cooper *et al.* 2009: 184-187). La Cumbre adoptó por unanimidad los párrafos 138, 139 y 140 del principio de la R2P. Posteriormente, el documento final de la Cumbre fue adoptado como resolución de la Asamblea General. En este contexto, cabe mencionar que los tres párrafos se encuentran en la sección IV sobre los Derechos Humanos e Imperio de la Ley, y no en la sección III sobre Paz y Seguridad Colectiva (ONU, A/RES/60/1, 2005). En cuanto al contenido, merecen ser citados los tres párrafos completos:

Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad

138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.

139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la

depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.

140. Apoyamos plenamente la misión del Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio. (ibíd.)

Aunque los tres párrafos no imponen ninguna obligación legal⁵² (Van den Rul, 16.06.2016), la mención de la doctrina R2P en el documento final fue un avance decisivo en el derecho internacional. Notablemente, además de los tres párrafos citados, algunos otros compromisos muestran la misma vinculación con el principio de la R2P. Por ejemplo, el párrafo 133 declara

(...) salvaguardar el principio de protección de los refugiados y a asumir nuestra responsabilidad de resolver su grave situación, incluso apoyando iniciativas destinadas a eliminar las causas de los desplazamientos de refugiados, lograr el regreso seguro y sostenible de esas poblaciones, encontrar soluciones duraderas para quienes lleven mucho tiempo refugiados y evitar que el desplazamiento de los refugiados se convierta en fuente de tensión entre Estados. (ONU, A/RES/60/1, 2005)

Contrario al informe de la CIISE, los principios de la R2P que los Estados miembros acordaron respaldar tienen un alcance restringido limitándose a la aplicación de la R2P a cuatro delitos particulares: el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Se puede suponer que la razón de esta limitación es reducir el potencial de abuso del derecho a lanzar intervenciones humanitarias. Además, el Documento final de 2005 no hace ninguna referencia a los organismos regionales, y el párrafo 139 insiste en el papel clave del Consejo de Seguridad: el uso de la fuerza solamente puede aplicarse si lo autoriza el Consejo, y si otros medios pacíficos y diplomáticos propuestos en los Capítulos VI y VIII de la Carta de las Naciones Unidas resultan ineficaces (Bellamy 2013: 11). Además, algunos expertos argumentan que en el concepto de la R2P de 2005 hay menos énfasis en la Responsabilidad de Reconstruir que en la Responsabilidad de Prevención. Asimismo, la R2P de 2005 no respalda la aplicación de los criterios precautorios de la CIISE para el uso de la fuerza, sino al contrario, deja espacio para responder meramente caso por caso (ONU, A/RES/60/1, 2005, párr. 139).

También el ex Secretario General Ban Ki-moon hizo esfuerzos significativos para promover el principio de la R2P y publicó dos informes importantes al respecto: en 2009, el informe sobre

⁵² El Documento Final de la Cumbre fue respaldado por la Asamblea General mediante una resolución que no tiene carácter vinculante. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General son consideradas una contribución valiosa a la evolución del derecho internacional.

cómo Hacer Efectiva la Responsabilidad de Proteger, y en 2010 el informe sobre la Alerta Temprana y Evaluación y la Responsabilidad de Proteger (UN, Marzo 2014). El informe de 2009 hizo una contribución valiosa para convertir la R2P en un concepto implementable sin abandonar el concepto de la R2P de 2005, pero con el fin de encontrar formas adecuadas para implementar las decisiones tomadas en la Cumbre Mundial de manera coherente.

En su informe, el Secretario General esbozó una estrategia de tres pilares de la siguiente manera:

1. *El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y de la incitación a cometerlos;*
2. *Corresponde a la comunidad internacional alentar a los Estados a que cumplan esta responsabilidad y prestarles asistencia al respecto;*
3. *La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para proteger a la población contra esos crímenes. Si es evidente que un Estado no está protegiendo a su población, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para proteger a esa población de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. (ibíd.)*

Los tres pilares cambiaron el enfoque de la doctrina a diferentes prioridades (ONU, A/64/864, 2010). Notablemente, la intervención militar no juega un papel crucial. El concepto de la R2P de la CIISE con respecto a la Responsabilidad de Prevenir se ve reflejado en los dos primeros pilares, con el Estado y la comunidad internacional siendo las autoridades competentes para cumplir la Responsabilidad de Prevenir. La Responsabilidad de Reconstruir, a su vez, pierde su importancia, pero está abarcada en el segundo pilar y en el debate sobre la consolidación de la paz. La Responsabilidad de Reaccionar forma parte del tercer pilar, aunque hay un énfasis concreto en medidas particulares en vez del uso de la fuerza (Bellamy 2015: 45-49). La estrategia de los tres pilares se puede resumir como sigue:

Pilar 1: la responsabilidad de proteger que incumbe al Estado

Este pilar refleja la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad; tal como se estableció claramente en el párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Esta obligación del Estado es la responsabilidad más esencial originándose en la soberanía estatal.

Pilar 2: asistencia internacional y formación de capacidad

En conformidad con los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, el segundo pilar del informe de 2009 considera el compromiso de la comunidad internacional a ayudar y capacitar a los Estados individuales a cumplir con sus obligaciones vinculadas a la R2P mediante la adopción de medidas como otorgar asistencia para el desarrollo, apoyar reformas de los sectores de seguridad de los Estados y crear capacidades de mediación y resolución de conflictos (ONU, A/63/677, 2009, párr. 11).

Pilar 3: respuesta oportuna y decisiva

El tercer pilar, acorde con el párrafo 139, implica una respuesta oportuna y colectiva de la comunidad internacional. Se refiere al Capítulo VI (medidas pacíficas) y VII (el uso coercitivo de la fuerza) y se aplica cuando un Estado claramente ni ofrece protección ni cumple con sus obligaciones en caso de atrocidades masivas (*ibíd.*).

En el próximo subcapítulo, y en línea con la parte I, capítulos 6 de la presente tesis, volveremos una vez más al tema de la intervención humanitaria y su vínculo con el principio de la soberanía, así como al principio de no intervención y la prohibición del uso de la fuerza. A continuación, examinaremos la legalidad de la intervención humanitaria al compararla con el concepto de la R2P. Finalmente, será discutida la condición jurídica de la R2P.

1.1.2.3 De la intervencion humanitaria a la R2P

Desde finales de la Guerra Fría, la intervención humanitaria constituye un asunto sumamente controvertido en la literatura especializada de las relaciones internacionales y del derecho internacional (véase parte I, cap. 6.3). La polémica ocurre cuando la intervención humanitaria contraviene a los principios de la soberanía, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza: la Carta de las Naciones Unidas contiene artículos sobre el principio de la igualdad soberana de los Estados, como el artículo 2 (1), así como el artículo 2 (4) sobre la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial y/o la independencia política de cualquier Estado. La noción de la soberanía está relacionada con el principio de no intervención consagrado en el artículo 2 (7) y determina claramente la prohibición de intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (ONU, Carta de las Naciones Unidas, 1945, cap. I).

La importancia creciente de la intervención humanitaria para algunas grandes potencias y en la agenda política de organizaciones intergubernamentales, como la ONU y la UE, se origina en una conciencia cada vez mayor de los derechos humanos y las responsabilidades que conllevan. Cabe destacar que sobre todo la década de los '90 está caracterizada por varias intervenciones humanitarias, llevadas a cabo tanto con y sin el consentimiento de las Naciones Unidas, lo que ha contribuido a una concepción muy controvertida: sea la falta de acción en Ruanda en 1994, la intervención militar no autorizada en Kosovo en 1999 y en el Irak en 2003, la respuesta retrasada en Darfur en 2005, o el uso desorganizado de la fuerza en Bosnia en 1995, es evidente que existe una diferencia significativa en cuanto a la moralidad, la eficacia y las consecuencias de la

intervención humanitaria. La complejidad del asunto se ve reflejada en la observación de Winfield (1922: 130):

The subject of intervention is one of the vaguest branches of international law. We are told that intervention is a right; that it is a crime; that it is the rule; that it is the exception; that it is never permissible at all. [It may leave] the impression that intervention may be anything from a speech of Lord Palmerston's in the House of Commons to the partition of Poland.

En lo que concierne a la definición de la misma, hay una serie de concepciones tanto clásicas como modernas. De acuerdo con Roberts (2000: 5),

'Humanitarian intervention', in its classical sense, may be defined as coercive action by one or more states involving the use of armed force in another state without the consent of its authorities, and with the purpose of preventing widespread suffering or death among the inhabitants.

En comparación, en un informe encargado por el gobierno danés de enero de 1999, la definición de la intervención humanitaria contiene unos aspectos adicionales en cuanto a la cuestión de la autoridad competente:

[Humanitarian intervention is defined as] coercive action by states involving the use of armed force in another state without the consent of its government, with or without authorisation from the United Nations Security Council, for the purpose of preventing or putting to a halt gross and massive violations of human rights or international humanitarian law. (Danish Institute of International Affairs 1999: 11, cit. en Roberts 2000: 5)

De acuerdo con una definición más reciente de la *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* de mayo de 2011, la intervención humanitaria puede definirse como sigue:

Humanitarian intervention can be loosely defined as a threat or use of armed force against another State that is motivated by humanitarian considerations. This broad definition is not technical and does not imply any distinct legal justification for the forcible action. (...) Humanitarian intervention in [its] narrower sense can be defined as the use of force to protect people in another State from gross and systematic human rights violations committed against them, or more generally to avert a humanitarian catastrophe, when the target State is unwilling or unable to act. (Lowe y Tzanakopoulos 2011)

Algunos puntos como el uso de la fuerza, la falta de autorización por parte del Estado en cuestión, así como la protección de sus ciudadanos de violaciones graves de los derechos humanos son comunes entre la mayoría de las definiciones. Además, destaca que tanto la definición clásica como la moderna distinguen entre la intervención humanitaria y otros tipos de agresión militar a causa de su propósito. Asimismo, hay que diferenciar entre la intervención humanitaria y la ayuda humanitaria, aunque estos términos a veces son utilizados indistintamente. A diferencia de la primera (IEP 2017), esta última no está reñida con el principio de la soberanía estatal y requiere el permiso del Estado en cuestión.

A los efectos de la presente tesis, la intervención humanitaria se define de la siguiente manera: medidas coercitivas mediante el uso de la fuerza armada por uno o varios Estados para impedir o poner fin a violaciones graves de los derechos humanos a favor de personas distintas de sus propios ciudadanos, sin el consentimiento del gobierno en cuestión y con o sin la autorización por la ONU.

1.1.2.4 El principio de la soberanía estatal *versus* la R2P

Antes del surgimiento de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, la legalidad de la acción internacional contra graves violaciones de los derechos humanos siempre ha constituido un tema muy polémico. Como se ha señalado anteriormente, existen controversias considerables entre la soberanía estatal y los derechos humanos (Bellamy 2009: 9-10). Tal como demuestra el informe de la CIISE, “las intervenciones militares externas con fines de protección humana han suscitado polémica cuando han tenido lugar – en Somalia, Bosnia y Kósovo – como cuando no, por ejemplo en Rwanda” (CIISE, *Informe*, 2002: xi). Desde un punto de vista favorable al concepto de la soberanía, se puede afirmar que los acontecimientos nacionales no deberían afectar a la comunidad internacional. De hecho, el concepto de la intervención humanitaria se enfrenta a un dilema en cuanto a la cuestión sobre qué hacer cuando la comunidad internacional se ve atrapada entre requisitos del derecho internacional y principios morales.

En lo que concierne al principio de la soberanía, cabe realzar que las únicas restricciones a las que se enfrentan los Estados son aquellos límites determinados por el derecho internacional a los que se han comprometido. El principio de la soberanía, basado en la igualdad y la independencia, se origina en el Tratado de Westfalia de 1648: de conformidad con su noción de la soberanía nacional, legalmente ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de los demás Estados (Dembinsky y Reinold 2011: 3). Este acuerdo está consagrado tanto en el derecho internacional consuetudinario como en la Carta de las Naciones Unidas (Kunig, abril 2008) y sigue siendo un componente esencial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En línea con el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933,

El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:

I. Población permanente.

II. Territorio determinado.

III. Gobierno.

IV. Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.

Aunque en varias resoluciones el Consejo de Seguridad ha reafirmado su compromiso con dichos criterios, no obstante, la soberanía estatal no es ilimitada. El derecho internacional impone límites considerables a la soberanía. En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas destaca en el capítulo VII que la soberanía no es ningún obstáculo para las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En segundo lugar, la soberanía estatal también está restringida por obligaciones consuetudinarias o impuestas por tratados de conformidad con el derecho internacional: en particular, existen obligaciones cada vez mayores, tanto en las áreas del derecho de los derechos humanos como en el derecho internacional humanitario, que imponen deberes serios para proteger a las personas y los bienes (Ryan 1997: 76-77). En tercer lugar, numerosos agentes no estatales como ONGs, particularmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental internacional, han mostrado tendencias de restringir la soberanía estatal (*cf.* Ivanova, 06.10.2014). Además, muchos estudiosos han argumentado que la soberanía no debería abusarse como *carte blanche* contra la intervención en casos de graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, un erudito autor escribió:

*[T]here is a substantial body of opinion and practice in support of the view that there are limits to that discretion and that when a State renders itself guilty of cruelties against and persecution of its nationals in such a way as to deny their fundamental human rights and to shock the conscience of mankind, intervention in the interest of humanity is legally permissible.*⁵³

Cabe concluir que la soberanía ya no es considerada un poder absoluto, sino al contrario, implica que las autoridades estatales son responsables de garantizar y proteger la seguridad de sus ciudadanos y promover su bienestar. Asimismo, como mencionado anteriormente, son responsables ante sus ciudadanos a nivel interno y ante la comunidad internacional a nivel externo a través de la ONU y al tener que rendir cuentas de sus actos. Consecuentemente, la soberanía estatal debe ejercerse de conformidad con el derecho internacional, y al interpretarla como responsabilidad implica que el Estado debe abogar por proteger y defender los derechos humanos de su población.

1.1.2.5 El principio de no intervención y de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza

Desde una perspectiva conceptual, el principio de la no injerencia protege el derecho de un Estado soberano a ejercer jurisdicción dentro de su territorio, lo que en un sentido amplio implica tener la autoridad de gobernar sobre las personas y los bienes a nivel nacional. Por lo tanto, como

⁵³ OPPENHEIM, Lassa F.L., *International Law*, por Jennings, Robert; Watts, Arthur (eds.), 9th ed., Longman, Londres, 1996, p. 442.

parte del derecho internacional consuetudinario, el principio está bien establecido en el derecho internacional contemporáneo. De acuerdo con este principio facultado por el derecho internacional, ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro Estado soberano. Aunque en la Carta de las Naciones Unidas no está determinado explícitamente como una norma que rige las relaciones entre los Estados miembros, está incorporado en el artículo 2 (Kinacioğlu 2005: 16). Aparte de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de no intervención también se reafirmó en varios tratados, como la Acta Constitutiva de la Unión Africana (Kioko 2003: 819) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, la CIJ destacó la importancia del principio de la no injerencia y la soberanía territorial en diversos casos como de Corfú de 1949, la República Democrática del Congo contra Uganda de 2005 y de Nicaragua de 1986 al realzar que el principio prohíbe a todos los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otros Estados (Wood 2017). Además del artículo 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General confirmó el principio de no injerencia en su Resolución 2131 del 21 de diciembre de 1965 al determinar:

1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas. (cit.en McWhinney 2011: 3)

De conformidad con esta cláusula, se subraya tanto la importancia de la soberanía estatal como del principio de no intervención, y se enfatiza la importancia de estos dos principios a nivel de las relaciones interestatales. Además, hay múltiples ejemplos de resoluciones, como la Resolución 688 del 5 de abril de 1991 sobre Irak⁵⁴ o la Resolución 1079 del 15 de noviembre de 1996 sobre la situación en la República de Croacia⁵⁵, que son referencias directas del Consejo de Seguridad y en las que reafirmó lo dispuesto en el artículo 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas.

En lo que respecta a la prohibición del uso de la fuerza, cabe destacar que presenta la manifestación más importante del principio de no intervención establecida en el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas (véase parte II, cap. 3.3.3). Esta disposición prohíbe explícitamente la guerra y todas las formas de agresión. Casi en los mismos términos, la Asamblea General reafirmó esta prohibición en su Resolución 2625 de 1970 conteniendo la Declaración Relativa a los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de

⁵⁴ ONU, Consejo de Seguridad, Resolución 688 (1991), S/RES/688.

⁵⁵ ONU, Consejo de Seguridad, Resolución 1079 (1996), S/RES/1079.

Amistad y la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas⁵⁶. También la anteriormente citada Resolución 2131 de 1965 ya subrayó:

2. Todos los Estados deberán (...) abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado. (ONU, A/RES/2131 (XX), 1965)

Debido al principio jurídico *erga omnes* (respecto de todos o frente a todos, en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato) y *ius cogens* (normas que no permiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido), es decir, el principio de la aplicabilidad de la norma “a todos” y la inalterabilidad de su contenido, la disposición rige tanto para Estados miembros como no miembros (Bassiouni 1996: 72). Además, el artículo 2 (6) de la Carta de las Naciones Unidas exige:

La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Hay que señalar que el artículo 2 (4) no prohíbe por completo el uso de la fuerza, sino reconoce excepciones en situaciones definidas. Por ejemplo, en caso de legítima defensa (cap. VII, art. 51) y medidas contra Estados enemigos (cap. VIII, art. 53) sí es posible recurrir a medidas coercitivas. Por consiguiente, por un lado se puede argumentar que la intervención humanitaria se contradice con la prohibición del uso de la fuerza según el artículo 2 (4) de la Carta. Por otro lado, hay numerosos estudiosos que no están de acuerdo con tal perspectiva restrictiva. Reisman (1973) argumenta:

[Article 2(4)] should be interpreted in accordance with its plain language, so as to prohibit the threat or use of force only when directed at the territorial integrity or political independence of a State. (cit. en Gözen Ercan 2016: 42)

Por lo tanto, desde este punto de vista, la intervención humanitaria podría ser considerada legal, porque no pretende desafiar ni el *statu quo* territorial, ni la independencia política de un Estado.

Pero en este contexto, cabe mencionar el Caso del Canal de Corfú de 1949 en el que el Reino Unido recurrió exactamente a esta interpretación para justificar una acción de la Marina de Guerra británica en aguas albanesas. No obstante, la CIJ rechazó el argumento al haber aclarado que la acción de la Marina de Guerra británica constituía una violación de la soberanía albanesa⁵⁷.

⁵⁶ ONU, Asamblea General, Resolución 2625 (XXV), 1970.

⁵⁷ El caso del Canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania) se origina en incidentes ocurridos en octubre de 1946 en el Estrecho de Corfú: se trata de tres sucesos distintos involucrando a barcos de la Marina de Guerra británica que se consideraron como una

Con referencia a Reisman, se puede concluir que el artículo 2 (4) de la Carta ‘en palabras sencillas’ simplemente debería interpretarse como una garantía más específica de protección (sobre todo para Estados pequeños) de intromisiones por Estados más poderosos, sea por motivos políticos, económicos o geoestratégicos.

Como se ha señalado en la parte I, capítulo 5.1 de la presente tesis, la interpretación de la soberanía estatal como una obligación ordenada y ya no como un derecho legítimo implica que los agentes estatales (1) son responsables de proteger a sus poblaciones; (2) tienen esta responsabilidad tanto frente a su población como frente a la comunidad internacional; y (3) deben rendir cuentas de sus acciones (ICISS 2001: 13). En consecuencia, exclusivamente los Estados que respetan los derechos humanos fundamentales en su territorio nacional y que, por tanto, cumplen con su obligación de protección, pueden gozar de la soberanía estatal como un derecho absoluto (Bellamy 2009: 19; Wenzel 2010: 76). Si un Estado no cumple con su responsabilidad primaria, la comunidad internacional necesita intervenir en los asuntos internos del Estado en cuestión, debido a su obligación secundaria de proteger (incluyendo de forma militar). Resulta, por consiguiente, una obligación normativa de intervención en todos los asuntos en los que sea oportuno:

Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect. (ICISS 2001: XI, Basic Principle 1B)

Como destaca Bellamy (2009), los derechos humanos fundamentales y la soberanía estatal son las dos caras de la misma moneda que ya no se interfieren en su ejecución (*cf.* 33).

El concepto de la R2P se divide en un modelo de tres niveles, el cual determina para la comunidad internacional unas reglas apropiadas en cuanto al procedimiento con conflictos nacionales. El primer nivel, denominado “the single most important dimension of the *Responsibility to Protect*” (ICISS 2001: XI – “Core Principles, (4) Priorities, A”), es la *Responsibility to Prevent*. A través de medidas preventivas, tales como “support for local initiatives to advance good governance, human rights, or the rule of law; or good offices missions, mediation efforts and other efforts to promote dialogue or reconciliation” (*ibíd.* 19), se aspira a mitigar el potencial para los conflictos. Una vez estando agotadas todas las medidas disponibles de prevención sin haber logrado los efectos esperados, se recurre a las reglas del

de los primeros presagios de la Guerra Fría. Con respecto al primer incidente, los barcos británicos fueron atacados desde fortificaciones albanesas. El segundo incidente se produjo cuando los buques británicos chocaron con minas, y el tercer incidente involucró una operación para eliminar las minas en el Estrecho en aguas albanesas. Esto llevó a una queja formal de Albania ante las Naciones Unidas, seguida por una demanda contra Albania a la CIJ por parte del Reino Unido. Asimismo, los sucesos rompieron las relaciones diplomáticas con Albania que no se reanudaron hasta 1991. (Maher, Laurence W., 2005; CIJ, *Caso del Canal de Corfú (Reino Unido contra Albania)*, sentencia de fondo, 09.04.1949, CIJ Rec. 1948.

segundo nivel: debido a la *Responsibility to React*, la comunidad internacional toma medidas intervencionistas (p. ej. sanciones económicas y/o acciones militares) para resolver el conflicto:

When preventive measures fail to resolve or contain the situation and when a state is unable or unwilling to redress the situation, then interventionary measures by other members of the broader community of states may be required. These coercive measures may include political, economic or judicial measures, and in extreme cases – but only extreme cases – they may also include military action. (ibíd. 29).

Después de una intervención militar sigue como último nivel la *Responsibility to Rebuild* que obliga a la comunidad internacional a (re)construir las instituciones estatales, así como la infraestructura destruida, y que le encomienda impulsar la consolidación de la paz y un desarrollo sostenible (ibíd. 39).

Con el fin de poder encontrar respuestas adecuadas a mis interrogantes, a continuación nos ocuparemos detalladamente de un análisis teórico del segundo nivel de la R2P, es decir, la *Responsibility to React*, así como de sus criterios de evaluación con respecto a la competencia y legitimidad de una intervención. En un segundo paso, dicho fundamento teórico será aplicado en la parte subsiguiente sobre la intervención militar de la comunidad internacional en el conflicto libio⁵⁸.

1.1.2.6 La obligación normativa de una intervención humanitaria

Como descrito anteriormente, con la *Responsibility to React* se trata del segundo nivel dentro del marco de la R2P que permite la toma de medidas intervencionistas para la resolución de conflictos nacionales, o que como consecuencia lógica las prescribe en caso de que las medidas preventivas resulten ineficaces. Pero cabe destacar que una intervención militar solamente debe llevarse a cabo en “casos extremos” y como “último recurso”; es decir, todas las posibles sanciones diplomáticas, políticas, económicas y no militares tienen que ser agotadas (cf. ICISS 2001: 29-31). No obstante, si un conflicto ya está avanzado hasta tal punto que el orden estatal haya colapsado y/o la población civil tenga que temer “masacres, genocidio o la limpieza étnica a gran escala” (ibíd. 31), la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir militarmente en el conflicto (Wenzel 2010: 13); siempre si se puede verificar la base de legitimidad de una intervención militar de acuerdo con los seis criterios de la Comisión antes citados (el criterio estrictamente necesario *just cause*, y los ‘judiciales’ *right intention* y *last*

⁵⁸ No se discutirán los otros dos niveles de la *Responsibility to Prevent* y la *Responsibility to Rebuild*, dado que (en esta tesis) tiene prioridad analizar la propia intervención y la motivación tras su realización, por lo que sólo el análisis de la *Responsibility to React* tiene relevancia para la respuesta a la cuestión inicial.

resort para determinar la adecuación, así como *right authority, proportional means* y *reasonable prospect*) (ICISS 2001: 32). A continuación se analizará más profundamente cada criterio, respectivamente. Mediante estos criterios, para el análisis empírico posterior será esencial investigar si en Libia se llevó a cabo una intervención humanitaria conforme a las normas de la R2P, o si se trató de una obligación normativa de la comunidad internacional.

1.1.2.7 Los criterios de evaluación de una intervención humanitaria

El criterio de *just cause* es de importancia fundamental para la toma de decisiones sobre medidas necesarias en el marco de la resolución de conflictos, ya que se considera la condición imprescindible respecto a la realización de una intervención. Dicho con otras palabras, implica los resultados por los que se autorizan los medios militares. Por ello, la Comisión decidió determinar atrocidades extremas siendo de consenso general que rigen la actuación de la comunidad mundial (Bellamy 2009: 54): “large scale loss of life” y “large scale ‘ethnic cleansing’” (ICISS 2001: 32). Pero no sólo el acontecimiento de uno de estos dos delitos conlleva la autorización de una intervención militar; la mera tendencia cuando sean “imminently likely to occur” puede desencadenarla (*ibíd.*). Una cuantificación del tenor “gran escala” deliberadamente no se introduce (*ibíd.* 33). Los criterios de intervención son demasiado imprecisos y no crean una mayor seguridad jurídica; no obstante, posibilitan su aplicación a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, lo que se debe a su formulación general (*cf.* Wenzel 2001: 51-54). Sigue siendo crucial que una intervención militar siempre debe perseguir una intención humanitaria (*ibíd.* 11), y que exclusivamente debe llevarse a cabo en el caso de violaciones flagrantes de los derechos humanos, que al mismo tiempo amenazan el bien común de la comunidad internacional (*ibíd.* 51). Pero hay que señalar que no existe ninguna “causa justa” si en un conflicto nacional se trata de casos de discriminación racial sistemática, el encarcelamiento sistemático o de otra represión frente a opositores políticos, o si a una población, después de haber demandado claramente un régimen democrático, se la niega sus derechos democráticos a través de un golpe militar (*cf.* ICISS 2001: 34). Pero, ¿cómo se debe comprobar la presencia actual o inminente de uno de estos dos hechos?

Even where consensus has been reached on the types of situations which might warrant a military intervention, it will still be necessary in each case to determine whether events on the ground do in fact meet the criteria presented – actual or threatened large scale loss of human life or ethnic cleansing. In many cases, competing “facts” and versions of events will be produced – often for the specific purpose of leading or misleading external opinion. Obtaining fair and accurate information is difficult but essential. (ICISS 2001: 34)

Aun cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté de acuerdo en que un

determinado conflicto nacional podría llevar a la necesidad de una acción militar, ésta, no obstante, debe fundamentarse en hechos, dado que cualquier otro procedimiento podría ser interpretado como un abuso de la R2P. En el sistema de la ONU, es por ejemplo la ACNUDH la que representa una instancia legítima con capacidad de poder recoger informaciones objetivas acerca de la situación sobre el terreno.

Una denominada *fact-finding mission*, convocada por el Consejo de Seguridad o el Secretario General de las Naciones Unidas, por tanto puede proporcionar claridad (ICISS 2001: 34). Con el fin de comprobar la adecuación y legitimidad de una intervención militar inminente, se requiere, además de la “causa justa”, del cumplimiento de los siguientes cinco criterios anteriormente citados:

(1) *right intention*: una intervención militar debe realizarse exclusivamente con la intención de evitar o terminar con el “sufrimiento humano” (ICISS 2001: 35). Una “intención correcta” no está dada si la intervención tiene los siguientes objetivos:

(...) the alteration of borders or the advancement of a particular combatant group's claim to selfdetermination (...). Overthrow of regimes is not, as such, a legitimate objective, although disabling that regime's capacity to harm its own people may be essential to discharging the mandate of protection – and what is necessary to achieve that disabling will vary from case to case. (ibíd.)

Una intervención con el fin de provocar un cambio de régimen, como en el caso de Libia, por tanto no está autorizada (*cf.* Wenzel 2010: 13). Para darle a la intención de la intervención una mayor legitimidad, la Comisión propone conseguir el apoyo de otros países en la región afectada, y ejecutar el mandato del Consejo de Seguridad de forma multilateral (*ibíd.* 36). Pero cabe realzar que ni siquiera la Comisión considera los motivos de una intervención totalmente altruistas, y, por consiguiente, habla de “motivos mixtos” que en la mayoría de los casos determinan las causas de una intervención (*ibíd.*).

(2) *last resort*: como ya se ha explicado anteriormente, una intervención militar sólo debe ser el ‘eslabón final’ en todo el proceso de resolución de conflictos. Cualquier medida diplomática y no militar tiene que ser agotada, siempre que las circunstancias temporales lo permitan (ICISS 2001: 36). Si con la crisis nacional se trata de un conflicto entre el gobierno y un grupo de rebeldes, se debe animarles a ambas partes a negociar. Además, se debería acordar un alto el fuego y desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz: “Ceasefires, followed, if necessary, by the deployment of international peacekeepers and observers are always a better option, if possible, than coercive military responses” (ICISS 2001: 36).

(3) *right authority*: la Comisión concluye que únicamente las Naciones Unidas disponen de la autoridad y legitimidad para decidir sobre una intervención militar. Una intervención unilateral sería ilegítima, debido a posibles intereses propios por parte de los Estados intervinientes (ICISS

2001: 47-48). Dado que sólo el Consejo de Seguridad, como órgano ejecutivo de la ONU, puede tomar decisiones vinculantes para todos los miembros, únicamente sus quince miembros tienen el derecho de decidir de forma legítima sobre las intervenciones militares. Pero en ausencia de tropas propias de las Naciones Unidas, son, al fin y al cabo, los Estados mismos los que tienen que llevar a cabo una acción militar en nombre de la ONU. No obstante, un mandato precedente del Consejo de Seguridad constituye un requisito imprescindible (*ibíd.* 49-50) y debe dirigirse al siguiente principio: “(...) the operation must be based on a precisely defined political objective expressed in a clear and unambiguous mandate, with matching resources and rules of engagement” (*ibíd.* 67). Por otra parte, la Comisión exige de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto que no apliquen su poder si obstruyera la aprobación de resoluciones que autorizan una intervención militar con fines de protección humana, y si sus propios intereses vitales no están afectados (*cf.* ICISS 2001: 51):

The Permanent Five members of the Security Council should agree not to apply their veto power, in matters where their vital state interests are not involved, to obstruct the passage of resolutions authorizing military intervention for human protection purposes for which there is otherwise majority support. (ICISS 2001: XIII, Right Authority 3D).

(4) *proportional means*: una intervención militar siempre debe ser proporcional, y por lo tanto debería ser reducida a un mínimo en cuanto a su dimensión, duración e intensidad, así como al impacto en el sistema político del Estado en cuestión. Por otra parte, las medidas deben ser compatibles con el derecho internacional humanitario (ICISS 2001: 37).

(5) *reasonable prospect*: la Comisión también estipula que una intervención violenta solamente resulta justificada si existen perspectivas convenientes respecto a su éxito. Dado que una intervención militar siempre debe comprometerse a la protección del bienestar físico de la población afectada, tiene que haber cierta probabilidad que esta intención pueda cumplirse. Consecuentemente, no se justifica una intervención si la protección real no puede alcanzarse, o si las consecuencias después de emprenderla probablemente sean peores que en el caso de no actuar en absoluto (*cf.* ICISS 2001: 37).

En lo que concierne a la intervención militar en Libia en 2011, en especial con respecto a la aplicación de la doctrina de la *Responsibility to Protect*, será llevado a cabo un análisis exhaustivo en los capítulos 2.1, 3.1.1, 3.3.4 y 5.2 de la presente parte II. En este marco también será de importancia fundamental examinar la legalidad general de la intervención humanitaria al compararla con la condición jurídica de la R2P (véase parte II, cap. 3.3), así como discutir las perspectivas futuras de la R2P tras su aplicación polémica en el contexto libio (véase parte II, cap. 5.2).

1.2 El concepto del neorrealismo

El neorrealismo se entiende como un elemento de contraste significativo en relación a la concepción teórica anterior. Dado que en el sistema internacional no hay ninguna instancia que puede regular la conducta de los Estados o imponer por la fuerza las normas del derecho internacional humanitario (cf. Schimmelfennig 2010: 69), siempre existe el riesgo del no cumplimiento con dichas norma, por lo que sólo el poder militar realmente puede ofrecer protección ante la agresión de otros Estados (cf. Kocs 1994: 542). Las normas internacionales no tienen efecto vinculante para los Estados, aunque sean “legítimas”. En última instancia, siempre son los Estados mismos los que deciden sobre la guerra y la paz al considerar cálculos estratégicos de poder (ibíd. 547). Por ende, desde un punto de vista neorrealista, las normas no tienen ninguna capacidad explicativa (Klotz 1995: 13). A diferencia de la teoría del sistema internacional regulado de forma normativa que tiende a evitar las guerras, los neorrealistas, debido a su perspectiva, llegan a la conclusión de que es la estructura básica del sistema internacional que provoca las guerras, o que por lo menos las hace muy probables (ibíd. 548). El fundador de la escuela de pensamiento neorrealista, Kenneth Waltz, caracteriza al sistema internacional como ‘una composición de una estructura y de unidades de interacción’ (cf. 2010: 79). Semejante a la teoría del sistema normativo según el cual las normas limitan o controlan la actuación del gobierno, Waltz considera la estructura del sistema internacional como la causa de las acciones gubernamentales (ibíd. 69; cf. Kocs 1994: 540). Según el neorrealismo, los Estados (*units* o unidades) son los principales actores determinantes, aunque también existen otros actores a nivel internacional (cf. Vogt 1999: 46). La estructura del sistema no es independiente de sus unidades; ambas interactúan y se influyen recíprocamente (cf. Waltz 1986: 338). No obstante, para el presente análisis es imprescindible examinar la estructura y los actores de manera separada (cf. Vogt 1999: 43).

1.2.1 La estructura del sistema internacional

La estructura del sistema internacional se divide en los tres siguientes puntos: (1) *ordering principle*, (2) *character of the units*, y (3) *distribution of capabilities*.

Estos tres principios estructurales dictan cómo los Estados dentro del sistema internacional están interrelacionados, o en qué orden se basa este sistema (cf. Vogt 1999: 44). En conjunto, proporcionan información sobre la cuestión si se trata de un sistema unipolar, bipolar o multipolar (cf. Schörnig 2003: 70). A continuación, serán examinados los elementos estructurales de forma individual y detallada:

(1) *ordering principles*: según Waltz (2010), el sistema internacional está marcado por la característica de la anarquía; no hay ninguna autoridad central, y, por lo menos formalmente, cada Estado es igual (cf. 88). Sin ningún poder coercitivo superior, los Estados se encuentran en un ‘estado de guerra’ permanente. Sin embargo, esto no necesariamente significa que constantemente existan guerras, pero que sí pueden estallar en cualquier momento (cf. 102). Partiendo de esta suposición, se puede deducir que los propios Estados tienen que mantener y cuidar de la seguridad y del orden internacional. Por consiguiente, primariamente deben aspirar a asegurar su propia supervivencia. Solamente cuando la supervivencia de un Estado esté asegurada, éste puede dedicarse a otros objetivos y, por ejemplo, construir una política doméstica sostenible (cf. Schimmelfennig 2010: 69). Los Estados interactúan en este ‘sistema de auto-ayuda’, lo que en última instancia demuestra cuál conducta resulta ser la más prometedora para la propia existencia. Por tanto, la adaptación correspondiente a las condiciones estructurales es esencial para la supervivencia de una ‘unidad’ (cf. Waltz 2010: 91-92). Sólo los Estados que permanecen dentro de este “corredor estrecho de acción” pueden gozar de una seguridad mayor (cf. Vogt 1999: 45). Como resultado, la estructura “forma” la actuación gubernamental, pero no la determina (cf. Waltz 1986: 343).

(2) *character of units*: los Estados, es decir, las unidades del sistema internacional, son autónomos y soberanos y todos tienen la misma función (cf. Waltz 2010: 93); no existe ninguna división del trabajo entre ellos (cf. Schimmelfennig 2010: 69). No obstante, destacan diferencias en su dimensión geográfica, su prosperidad y su potencia (cf. Waltz 2010: 96). Para poder garantizar su sobrevivencia, requieren de medios militares, políticos y económicos. Cada uno de estos tres factores tiene importancia para los otros dos, respectivamente: “The distinction frequently drawn between matters of high and low politics is misplaced. States use economic means for military and political ends; and military and political means for the achievement of economic interests” (ibíd. 94). Dado que los Estados están sujetos al mismo sistema, en ciertas situaciones se comportan de manera similar (cf. Schörning 2003: 68). Además, se cree que los Estados operan como actores racionales y metódicos. Tienen una orden consistente de preferencias y diseñan estrategias adecuadas para lograr sus objetivos. Los costos y beneficios de una acción tienen que mantenerse en una relación positiva, dado que, en caso contrario, no la llevarán a cabo (cf. Grieco 1997: 165). Pero siendo actores racionales, no aspirarán al poder de forma agresiva, porque podría poner en peligro su propia seguridad (cf. Hyde-Price 2006: 221). Más bien, la opción preferida es adoptar una postura defensiva (cf. Grieco 1997: 167). Sin embargo, existen buenas razones por las que en algunas situaciones los Estados actúan de manera ofensiva, incluso aspirando a la hegemonía, si las circunstancias correspondientes lo permiten: como señala Mearsheimer (2010: 78), “overwhelming power is the best way to ensure one’s own

survival”.

(3) *distribution of capabilities*: aunque todos los Estados sean iguales (con respecto a la función con la que deben cumplir); sus capacidades (*capabilities*) y/o su poder aun así pueden diferir mucho (cf. Vogt 1999: 46). Al final son las capacidades que determinan la posición de los Estados en el sistema; o sea si son poderosos o débiles (cf. Waltz 2010: 97). No importan las diferencias en sus sistemas estatales o en sus ideologías fundamentales, y, consecuentemente, tampoco si están gobernados democrática o autoritariamente. Exclusivamente las capacidades de las que disponen son importantes en el ejercicio de su función (*ibíd.* 99).

Las relaciones entre los Estados no pueden facilitarnos informaciones acerca de la estructura del sistema, pero no obstante son útiles para la determinación de su posición de poder dentro del sistema (cf. Waltz 2010: 98). Si cambian las capacidades de las unidades del sistema, por consiguiente también se transforma el sistema mismo, lo que a su vez influye en la actitud de los Estados (*ibíd.* 97). Pero cabe destacar que este punto puede ser considerado una debilidad lógica de la teoría, dado que se mezclan el nivel del sistema con el nivel de los actores. No obstante, para Waltz esto no constituye ningún problema (Vogt 1999: 46): aunque las capacidades son atributos de las unidades, la distribución de las capacidades sobre las unidades no es ningún atributo especial (cf. Waltz 2010: 98).

1.2.2 La aspiración al poder de los Estados como un imperativo

La estructura del sistema internacional de acuerdo con el concepto neorrealista, como anteriormente descrita, tiene un impacto específico sobre la conducta de los Estados dentro de este sistema. El orden anárquico lleva a la incertidumbre entre los Estados; ninguno puede estar seguro respecto a las intenciones de los demás, por lo que en todo momento debe estar dispuesto y preparado a la guerra (cf. Schörning 2003: 61). En consecuencia, prioritariamente los Estados mismos tienen que desarrollar capacidades y estrategias para su defensa (cf. Waltz 2000: 9). Pero, ¿qué estrategia de supervivencia es la más prometedora? Por parte de los partidarios del neorrealismo existen diferentes puntos de vista al respecto, por lo que a continuación se abordarán los más importantes de forma detallada.

Por lo general, para todos los Estados vale el principio ‘si quieres sobrevivir, compensa los desequilibrios de poder’ (cf. Schörning 2003: 70). Por ende, la estructura del sistema internacional conlleva la existencia de una fuerte competencia respecto a la seguridad y la maximización del poder (cf. Ruffa 2011: 567). Los Estados no sólo necesitan compensar los desequilibrios desfavorables, sino también extender lo máximo posible su poderío en el sistema (cf. Grieco 1997: 167). Esto lleva a una práctica decisiva: los Estados nunca pueden estar satisfechos con un

poder absoluto determinado, o disponer de ciertos recursos absolutos. Siempre tienen que comparar sus capacidades con otros Estados y estar adaptados a tener, defender o adquirir más recursos y mejores capacidades que los demás (*cf.* Schimmelfennig 2010: 71). En consecuencia, los Estados deben preocuparse exclusivamente de sus capacidades relativas en el sistema global (*cf.* Grieco 1997: 167). Sin embargo, esto crea un problema trascendental: puesto que un Estado siempre aspira a conseguir “más” que los otros, la cooperación entre ellos a nivel internacional se ve dificultada considerablemente (*ibíd.* 175), aunque no es imposible (Hyde-Price 2006: 221). Si para un Estado resulta seguro que mediante la cooperación con otro puede sacar beneficios absolutos, aunque en términos relativos sólo sean pocos, entonces no se comprometerá (*cf.* Schimmelfennig 2010: 72). Si, aun así los Estados establecen cooperaciones, éstas siempre presentan un carácter inestable. Cada cooperante deberá tener en cuenta que los otros tal vez no se atiendan a los acuerdos, dado que su incumplimiento posiblemente ofrece beneficios aún mejores (*ibíd.* 73; Schörnig 2003: 73). Debido a las características estructurales del sistema internacional, los Estados como actores egoístas se encuentran en una situación conflictiva: el engaño, o *cheating* según Waltz (1979), presenta la estrategia dominante, por la que al final todos los asociados se encuentran en una posición peor que si hubieran cooperado (*ibíd.* 109).

Las cooperaciones también pueden crear dependencias, que a su vez plantean riesgos para los Estados. Puesto que estiman su independencia en el sistema internacional y dado que aspiran a defender y mantenerla, o bien se esfuerzan por disponer libremente de los bienes de los que son dependientes, o tratan de liberarse de esta dependencia (*cf.* Grieco 1997: 168). Dado que esta última opción generalmente resulta imposible, o sólo se puede realizar con gran dificultad, los Estados tienden a una conducta imperialista con el fin de maximizar su dominancia e influencia (*cf.* Waltz 2010: 106, 155). En este contexto, los “recursos estratégicos” (p. ej. petróleo y metales) son de importancia esencial, sobre todo para aquellos que los poseen: por un lado fortalecen la propia posición de poder en el sistema, por otro lado proporcionan protección de extorsión por otros Estados, debido a dependencias unilaterales. Incluso si por su propio esfuerzo la explotación de los recursos nacionales de un Estado económicamente no resulta rentable (lo que implica que una cooperación comercial podría conllevar un efecto positivo en las finanzas estatales), aun así el Estado en cuestión se aferraría a la producción propia, lo que se debe a razones estratégicas (*cf.* Schimmelfennig 2010: 72-73; Vogt 1999: 48). En muchos sentidos, para los Estados la autonomía constituye un bien digno de protección, dado que les proporciona una posición más poderosa dentro del sistema internacional (*cf.* Waltz 2000: 15). No obstante, dependencias fuertes (recíprocas) pueden conllevar intentos de extorsión (*cf.* Mearsheimer 2001: 13) o, a lo mejor, incluso pueden desencadenar un conflicto bélico (*cf.* Waltz 2010: 138).

En este contexto surge la cuestión ¿cuáles de las posibles estrategias deben seguir los Estados,

sean unidades independientes o no, para que logren mejorar o consolidar su posición de poder en el sistema internacional? Fundamentalmente se distingue entre estrategias defensivas y ofensivas (cf. Hyde-Price 2006: 219), que al mismo tiempo forman dos corrientes diferentes dentro de la escuela de pensamiento neorrealista (cf. Schimmelfennig 2010: 71).

1.2.2.1 Estrategias defensivas

Debido a las condiciones estructurales dadas, los Estados deben como mínimo aspirar a su propia preservación y, como máximo, intentar lograr el dominio universal (cf. Waltz 2010: 118). Con el fin de garantizar su supervivencia y extender su poder, disponen de dos posibilidades: o bien fortalecer sus propias capacidades a nivel interno, por ejemplo a través de una mejora de las estrategias económicas, militares y/o políticas, o al tratar de establecer alianzas a nivel externo con otros Estados; de este modo y mediante una potencia unida, pueden conseguir protección de la aspiración al poder de una potencia superior, o relativizar el potencial de otras alianzas (*ibíd.*). En consecuencia, siempre tratarán de “nivelar” los desequilibrios de poder en el sistema internacional, es decir, unirse a la parte más débil hasta que la distribución del poder esté en equilibrio (cf. Vogt 1999: 50). En cambio, si por motivos estratégicos se aliaran con una potencia fuerte, estarían totalmente indefensos frente a ella y no podrían beneficiar de ninguna ganancia de seguridad (cf. Mearsheimer 2010: 83). Por tanto, una medida denominada *policy of equilibrium* es lo que constituye el corredor de acción gubernamental a nivel internacional: con respecto a su esfuerzo principal de supervivencia, esta política dicta al Estado establecer coaliciones formales o informales como compensación frente a alianzas y/o Estados más poderosos (cf. Grieco 1997: 170). La protección de la propia supervivencia mediante la protección de las capacidades y recursos existentes, por ende, constituye la motivación tras la estrategia defensiva de un ‘equilibrio del poder’ (cf. Schweller 1994: 74).

Los Estados que adoptan una postura defensiva, prioritariamente orientada hacia una preservación de sus bienes disponibles, se clasifican como ‘Estados del *statu quo*’. La primera prioridad supone la maximización de la seguridad en el sentido de consideraciones estratégicas defensivas, a diferencia de una maximización del armamento con el fin de fortalecer la propia posición de poder mediante el uso de la fuerza (cf. Vogt 1999: 60-61). La suposición en la que se basan las estrategias defensivas y la preservación general del estatus se deriva de una interpretación según la cual la estructura del sistema internacional solamente ofrece pocos incentivos para una actitud imperialista: sería contraria a la responsabilidad principal del Estado de su supervivencia (cf. Mearsheimer 2001: 21). No obstante, diferentes estudios han demostrado que la adopción de *balancing* como la estrategia dominante en el sistema internacional apenas se sostiene

empíricamente (*cf.* Vogt 1999: 55-57). Esto, a su vez, llevó a nuevos enfoques y a la hipótesis de que la estructura del sistema induce a los Estados adoptar una actitud que implica una maximización ofensiva de su poder.

1.2.2.2 Estrategias ofensivas

Algunos neorrealistas ofensivos sostienen que los Estados continuamente deben o, por razones estructurales, tienen que buscar por oportunidades de aumentar su poder. La aspiración constante a la ganancia de potencia debería orientarse a la consecución de un estatus hegemónico, ya que solamente éste puede garantizar su supervivencia estatal (*cf.* Mearsheimer 2010: 81). Los Estados ofensivos, por lo tanto, no están interesados en el mantenimiento del *statu quo*, sino en el aumento continuo de medios de poder adicionales. Consecuentemente, son denominados ‘Estados revisionistas’ (*cf.* Schweller 1994: 87). Incluso si a largo plazo la consecución de dichos medios conlleva desventajas, aún predomina el aumento del poder a corto plazo (*cf.* Brooks 1997: 450). En este contexto, un análisis racional de costos y beneficios presenta la base de las acciones estatales en el sistema internacional (*cf.* Mearsheimer 2001: 21). Del mismo modo, no sólo son los aspectos de seguridad, sino también los incentivos económicos y/o motivos ideológicos los que pueden jugar un papel importante para la justificación del estallido de un conflicto bélico. Pero tal conducta requiere una consideración crítica de la propia posición en el sistema internacional para no ponerla en peligro (*cf.* Mearsheimer 2010: 83-84). Por consiguiente, mediante una conducta estratégicamente ofensiva, la protección de la propia supervivencia no lleva a un equilibrio defensivo de las constelaciones de poder existentes, sino a una conducta conquistadora agresiva entre los Estados (*cf.* Mearsheimer 2001: 21). Pero en tal caso, el problema de la inseguridad empeora: ningún Estado puede estar seguro de las intenciones de los demás y tampoco del momento en el que éstos podrían utilizar sus capacidades ofensivas en su contra. Las intenciones de los Estados rápidamente pueden caer del extremo de la ‘amistad’ a ‘enemistad’ (*ibíd.* 31), por lo que existe un alto riesgo de tomar decisiones cuyo efecto positivo puede cambiar en cualquier momento (*ibíd.* 80).

Consecuentemente, se plantea la cuestión, ¿cuáles son las estrategias que los Estados ofensivos deben seguir para maximizar su poder? Esto termina en una postura exactamente opuesta comparada con los Estados defensivos: no se trata de unirse a la alianza más débil, sino a la más fuerte (*cf.* Vogt 1999: 54). Por tanto, no perseguirán ninguna estrategia de *balancing*, o sea de equilibrio, sino de *bandwagoning*, es decir, de simpatizante o imitación, con el fin de obtener beneficios adicionales a través de una alianza superior (en términos relativos). Mientras que la estrategia de equilibrio se aplica por los Estados que se sienten amenazados, y que por tanto

aspiran a proteger su integridad, en la estrategia del denominado *bandwagoning* tal requisito es eludible (cf. Schweller 1994: 74): ya basta la motivación de tener beneficios que pueden mejorar la propia posición en el sistema (*ibíd.* 73, 99). Además, los gastos que conlleva esta estrategia pueden resultar menor que en el caso del *balancing* (*ibíd.* 93; cf. Vogt 1999: 63). Las grandes potencias también están interesados en tener un entorno regional en el que prevalece la estabilidad. Siendo una gran potencia con recursos de poder importantes, están en condiciones de aplicar *milieu shaping*, es decir, influir activamente en su entorno de acuerdo con sus intereses (cf. Hyde-Price 2006: 222-227). De esta manera, también tienen la capacidad de suprimir las tentaciones de hegemonía de otros Estados y perseguir sus propias ambiciones hegemónicas (cf. Mearsheimer 2001: 140-141).

1.2.3 El aspecto de la motivación tras una intervención

Como hemos analizado anteriormente (véase parte I, cap. 5), las normas como el principio de la soberanía estatal no pueden impedir que un Estado intervenga militarmente en otro (cf. Waltz 2000: 27). Una intervención militar puede, por ejemplo, resultar de una supuesta amenaza directa o indirecta de un Estado. Cuando un Estado adopta una actitud agresiva frente a otro, se trata de una amenaza directa para este último. Indirectamente, una amenaza puede producirse si estalla un conflicto intra- o interestatal en el entorno regional del Estado en cuestión (cf. Eralp 2004: 27). Sobre todo los Estados gobernados de forma despótica pueden constituir un peligro latente para la seguridad regional, no únicamente debido a conflictos fronterizos (cf. Vilmer 2007: 213). Pero cabe destacar que si un Estado no se enfrenta a una amenaza concreta, su corredor de acción se aumenta y los motivos tras una intervención varían, respectivamente (cf. Waltz 2000: 29). Básicamente, se puede constatar que los Estados como actores racionales sólo intervendrán en otro Estado si la acción militar beneficia sus intereses (cf. Vilmer 2007: 208). Si de esta manera pueden reducir ciertas dependencias o ganar recursos militares, políticos y/o económicos, un Estado revisionista puede mejorar su posición de poder ofensivamente en el sistema internacional mediante una intervención. Por consiguiente, recibe *additional means*⁵⁹ (cf. Gehring y Oberthür 2009: 140-141), es decir, recursos de poder adicionales que en conjunto determinan su posición de poder en relación con los demás Estados. Según el concepto neorrealista, una

⁵⁹ En su artículo, Gehring y Oberthür (2009) se refieren a la interacción entre las instituciones internacionales y denominan con el término *additional means* la obtención de instrumentos adicionales de gestión. Si interactúan dos instituciones con los mismos objetivos, pueden llegar a acuerdos por los que una institución tendrá el permiso de disponer de los instrumentos de gestión de la otra. Una institución que se beneficia directamente y mediante los *additional means* puede implementar proyectos adicionales concretos. Ambos se benefician indirectamente a causa de sus objetivos globales que tienen en común. Aplicado a la lógica del neorrealismo, esto significa que para garantizar su supervivencia, de forma directa un Estado ofensivo puede obtener medios adicionales de poder al llevar a cabo una intervención violenta; o indirectamente puede ampliar su área hegemónica. Pero dado que en el neorrealismo la aspiración a una mayor seguridad presenta un “juego de suma cero”, un Estado solamente podrá beneficiarse en la medida en la que su ‘adversario’ pierde (cf. KOCs 1994: 547).

intervención militar con el único fin de defender o imponer los derechos humanos apenas corresponde con la imagen de un Estado egoísta actuando racionalmente, dado que tal operación ‘altruista’ asocia gastos y no proporciona ningún beneficio adicional (*cf.* Mearsheimer 2001: 47). El análisis posterior de la presente tesis dará información sobre la cuestión si los cinco poderes de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contaban con recursos adicionales, y en qué forma se determinaban.

Otro motivo de intervención puede resultar de una revolución en un determinado Estado. Las revoluciones nacionales conllevan incertidumbres adicionales en el sistema internacional, dado que, a causa de falta de experiencias suficientes, las intenciones de un nuevo gobierno difícilmente pueden estimarse (*cf.* Walt 1992: 341). Además, las revoluciones muy conflictivas pueden debilitar a un Estado internamente, lo que significa que se ofrece a los demás una buena oportunidad para aumentar su propio poder a través de una intervención. Al mismo tiempo pueden realizar sus propias intenciones hegemónicas ofensivas y militares (*ibíd.* 331).

Como hemos visto en el subcapítulo anterior, también las razones ideológicas pueden constituir un motivo fundamental para una intervención por parte de los Estados que actúan de forma ofensiva. De este modo, sobre todo los Estados gobernados no democráticamente representan una amenaza inminente. En un principio, la forma de gobierno no es de importancia en el neorrealismo; a menos que tenga impactos en el potencial amenazante de un Estado contra otro. Debidamente, existe la posibilidad de una democratización de forma militar a través de un Estado gobernado democráticamente con el fin de reducir una amenaza latente (*cf.* Waltz 2000: 11). Sin embargo, en primer lugar son las medidas disuasorias que deberían presentar el medio más rentable (*cf.* Waltz 2009: 33).

Tras la discusión teórica sobre los instrumentos, normas y conceptos relacionados con el sistema internacional y las intervenciones humanitarias, en lo sucesivo nos enfocaremos en el estudio científico de un caso concreto, así como en la cuestión sobre la legalidad y legitimidad de las intervenciones humanitarias. En el marco del estudio de caso, y partiendo del contexto histórico, se analizarán los orígenes de la crisis humanitaria en Libia, el régimen de Gadafi, las normas vigentes en las relaciones internacionales, el desarrollo de una obligación normativa internacional de protección e intervención humanitaria, los criterios de evaluación de una intervención humanitaria (*just cause*), y la motivación verdadera de los poderes intervinientes. En un tercer paso, será evaluada la adecuación de la intervención en Libia y se explicarán los criterios para determinar la legitimidad de la misma. Asimismo, será de interés fundamental examinar el papel de los medios de comunicación en la guerra libia, lo que será concluido con reflexiones finales al respecto.

2. Libia en el contexto de la Primavera Árabe

Ante los levantamientos en Egipto y Túnez en 2010 y 2011 que terminaron en la caída de sus presidentes Hosni Mubarak y Zine El Abidine Ben-Ali, en cuanto a los disturbios en Libia también se planteó la pregunta fundamental si Gadafi dispusiera de suficiente apoyo a nivel nacional para evitar un cambio violento de régimen, o si las fuerzas extranjeras lograrían provocar su derrocamiento. A este respecto, es imprescindible evaluar las Resoluciones 1970 y 1973 (2011) cuyo contenido no sólo conlleva una diferencia significativa de actitud comparada con la postura moderada de Occidente frente a Egipto y Túnez, sino que también constituye la clave para el abuso del mandato y la espiral de violencia en el conflicto libio.

2.1 Las Resoluciones 1970 y 1973 de la ONU contra Libia y su impacto en el derecho internacional

Tras haberse tranquilizado la situación en Túnez y Egipto, todos los medios de comunicación importantes centraron su atención en “la grave y sistemática violación de los derechos humanos” (Resolución 1970 aprobada el 26 de febrero de 2011 por el Consejo de Seguridad) y los “crímenes de lesa humanidad” (Resolución 1973 del 17 de marzo de 2011)⁶⁰ que Gadafi supuestamente había cometido contra su propio pueblo.

La Resolución 1973 careció de cualquier base jurídica y violó de forma evidente la Carta de las Naciones Unidas (cf. Henken 2011). La “misión” de los Estados miembros del Consejo de Seguridad estuvo vinculada a la zona de exclusión aérea e implicó la aplicación de cualquier medida necesaria (a excepción de la ocupación militar) “para proteger a los civiles (...) que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia” (§ 4, S/RES/1973 2011). Asimismo, se estableció una prohibición de vuelos y un embargo naval para impedir el suministro de armas (*ibíd.* § 17 y 13).

Pero cabe destacar que se trató de medidas completamente ilegítimas: de acuerdo con el § 2, apartado 4 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 se determina:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Aparte de constatar que las Naciones Unidas exclusivamente tienen el derecho de intervenir

⁶⁰ La Resolución 1973 (2011) fue aprobada por mayoría de votos. Se abstuvieron Alemania, India y Brasil, así como China y Rusia, dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

en conflictos transfronterizos y no en conflictos nacionales, en el Capítulo VII de la Carta, denominado “Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz y Actos de Agresión”, se definen las estrategias posibles de la comunidad internacional mediante sanciones o medidas coercitivas económicas y militares (cf. Carta de las Naciones Unidas, Cap. VII). En el § 2 apartado 7 se aclara:

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

Consecuentemente, y con respecto a las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad, también cabe citar el § 25:

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.

En el § 51 del Capítulo VII, también se determina la situación excepcional en la que se considera el derecho de aplicar la violencia:

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Mienbro de las Naciones Unidas(...).

En caso necesario, y de acuerdo con el § 42 (Cap. VII), el Consejo de Seguridad tiene el derecho de intervenir, si las medidas coercitivas no violentas (cf. § 41) no son suficientes frente a amenazas inminentes para la comunidad internacional:

(...) el Consejo de Seguridad (...) podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Con la Resolución 1970, aprobada por unanimidad, el Consejo se refirió explícitamente al Capítulo VII de la Carta limitándose a medidas políticas coercitivas de acuerdo con el § 41: ordenó un embargo extenso de armas a Libia y una prohibición de viajar frente a determinadas personas del equipo directivo de Gadafi listados en el anexo I. Además, ordenó la congelación de valores de ciertas personas listadas en el anexo II (cf. Paech 2013: 66).

También la Resolución 1973 fue acordada con arreglo al Capítulo VII. No obstante, habría requerido de evidencia en cuanto a una amenaza a la paz según el § 39:

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

La ‘paz’ en el sentido del § 39 quiere decir la paz internacional. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad habría tenido que verificar una amenaza transfronteriza para los Estados vecinos por la rebelión en Libia, pero no era el caso (*cf.* Paech 2013: 68). Con respecto a la Resolución 1973, el Consejo de Seguridad simplemente constató “que la situación imperante en la Jamahiriya Árabe Libia sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales” (S/RES/1973, 2011). Pero en ningún momento el levantamiento libio puso en peligro a Túnez, Argelia u otro Estado en la región. Asimismo, si se analiza la situación más detenidamente, se observa que las condiciones previas del § 42 no se aplicaron a ninguna de las dos resoluciones, dado que, para el empleo de la violencia, ante todo se habría requerido el fracaso de “medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada” determinadas en el § 41. Resulta muy difícil entender, cómo el Consejo de Seguridad podía tomar tal decisión radical bajo condiciones que desde un principio, y de acuerdo con la cobertura informativa de los medios de comunicación, eran muy difíciles de comprender. Por lo menos habría sido indispensable investigar exhaustivamente la situación sobre el terreno. Pero ni el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad consideraron mandar una comisión de investigación a Libia (*cf.* Sensini 2012: 76).

Si el derecho internacional exclusivamente autoriza el empleo de la violencia bajo circunstancias sumamente limitadas, entonces existen aún menos ocasiones en las que entidades no estatales tengan el derecho de aplicar la violencia armada. Tal ocasión constituiría, por ejemplo, el ejercicio del derecho de autodeterminación frente a una potencia ocupante extranjera: esta condición habría podido autorizar a los afganos o iraquíes a recurrir al empleo de la fuerza contra un ejército de ocupación, pero no a un grupo de revolucionarios libios en el marco de una rebelión armada contra el gobierno legítimo del propio país.

Este tipo de doble estándar en cuanto a la aplicación de los criterios de evaluación al respecto da cada vez más la impresión de que las resoluciones aprobadas representan un ejemplo de una política que socava los fundamentos del derecho internacional. En el pacto de París de 1928 (también conocido como pacto Briand-Kellogg)⁶¹, así como en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, los Estados acordaron la no utilización de la fuerza como objetivo común de su política exterior. Pero sobre todo en las últimas dos décadas, algunas potencias occidentales han incumplido repetidamente estos acuerdos, sobre todo frente a su inclinación de iniciar guerras, particularmente contra países musulmanes. Esta práctica ha demostrado que el quebrantamiento del derecho internacional ineluctablemente forma parte de su política exterior.

⁶¹ El pacto de París es un tratado internacional firmado el 27 de agosto de 1928. Iniciado por Aristide Briand, el ministro francés de Asuntos Exteriores y Frank B. Kellogg, el Secretario de Estado de los EE.UU., los quince Estados que firmaron el contrato se comprometieron a no recurrir a la guerra como medida para resolver las controversias internacionales. El tratado es considerado el precedente inmediato del § 2, apartado 4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se determina con carácter general la prohibición del uso de la fuerza (DiPúblico, “Tratado de renuncia a la guerra – pacto Briand-Kellogg (1928)”).

2.2 Informaciones claves sobre Libia y el papel de los recursos petrolíferos

Al tener en cuenta la Resolución 1973 aprobada el 17 de marzo de 2011 y la postura agresiva de Occidente con respecto a los disturbios en Libia, no es sorprendente que un día más tarde, Bob Stewart, el ex comandante británico de la ONU en Bosnia entre 1992 y 1993, exigió que se tomaran medidas militares con el fin de derrocar a Gadafi. Considerando la formulación abierta de la resolución que meramente indica “to take all necessary measures” para proteger a la población civil, Stewart se pronunció en favor del armamento de los rebeldes libios, pese al embargo de armas que prohibió el suministro a Libia:

I am in favor of arming the rebels, but I would call them revolutionaries or maybe freedom fighters. Arm them, train them, and let them do the job. We want people's lives to be saved. We are not here for oil, we are not going for oil, it's pretty altruistic. It [Libya] wasn't even our colony. (BBC News, 18.03.2011)

Teniendo en cuenta las miles de muertes que causó la intromisión militar, así como los incontables denominados “freedom fighters” que en gran parte resultaban ser salafistas y militantes de grupos islamistas⁶² que han convertido al sur del país en un paraíso para terroristas, cabe realzar que los supuestos motivos altruistas con el fin de salvar vidas claramente pueden ponerse en duda.

A lo largo de las últimas décadas, y comparado con la situación general en África y la región del Oriente Próximo, Libia había alcanzado un alto nivel de prestaciones sociales, un sistema educativo avanzado y un sistema de asistencia sanitaria que se podía considerar moderno y accesible para la gran mayoría de los ciudadanos. Bajo estas condiciones, la población del país aumentó de 1,9 millones de habitantes en 1969, o sea el momento de la subida al poder por Gadafi, a unos 6,2 millones en 2011⁶³; es decir, se había más que triplicado. Aproximadamente el 90% de la población vive en ciudades, incluyendo dos millones en la capital Trípoli, y un millón en Bengasi. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), considerado también por la ONU como un criterio del nivel de desarrollo de un país, muestra el bienestar alcanzado de la población, la esperanza de vida, la alfabetización de la población, educación, salud y el ingreso per cápita: con un índice de 0,756 en 2010, Libia perteneció al grupo con un alto nivel de desarrollo (el número 53 a nivel mundial), por delante del país comunitario Bulgaria (58), Rusia (65), Brasil (73) y China (89), y en relación con toda África y todos los países árabes en la región mediterránea presentó el nivel más elevado⁶⁴. Estos datos demuestran una mejora evidente a lo largo de las

⁶² CHENGU, Garikai, “Libya: From Africa's Richest State under Gaddafi, to Failed State After NATO Intervention”, 19.10.2014.

⁶³ CountryMeters, “Libya historical population (1951-2016)”.

⁶⁴ UNDP, *Human Development Report 2010*, Nueva York, 2010, p. 152.

últimas décadas. En los años del régimen de Gadafi, Libia se había convertido desde uno de los países más pobres del mundo al más rico de África.

No obstante, también llegaron a Libia las protestas masivas exigiendo que Gadafi debía dimitir. Los motivos son múltiples: con unos 5,8 mil millones de toneladas de petróleo, Libia se encuentra en el noveno lugar de los países que disponen de los mayores recursos petrolíferos del mundo⁶⁵. Tiene altos ingresos por la producción de petróleo y gas, y en 2013 aproximadamente 70% del producto interior bruto y 99% de las exportaciones resultaron de este área; todos los demás sectores de la economía desempeñan un papel subordinado (*cf.* Auswärtiges Amt, abril 2016). Básicamente no existe ninguna industria nacional; y debido a la dramática disminución de los precios del mercado mundial de petróleo, los programas de desarrollo iniciados en el pasado con el fin de promover la industrialización fueron suspendidos (*ibíd.*). Por lo tanto, durante cuatro décadas, Libia podía caracterizarse como un país con ingresos muy elevados por las exportaciones de petróleo, pero al mismo tiempo con tasas muy altas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Aproximadamente el 28% de la población tiene entre 15 y 24 años de edad, con unos 30% sin empleo (*cf.* Crome 2011b: 31). Pero pese al apoyo financiero del gobierno comparativamente alto, no sólo se encontraban sin empleo, sino también sin perspectivas. A este respecto, no se diferencian mucho de los jóvenes en Túnez y Egipto.

Algunas razones claramente se deben al sistema político rígido establecido durante décadas: cuando Mubarak llegó al poder en Egipto, Gadafi ya gobernaba desde hacía doce años; cuando Ben Ali asumió el poder en Túnez, ya hacía dieciocho años; y en 2011, esto ya había sucedido hacía veinticuatro años. Los que vitorearon al joven coronel Gadafi después de la caída del rey Idris en 1969, hoy día se encuentran en la edad de jubilación. El sistema político doméstico que había establecido a lo largo de los años era autoritario, con la oposición suprimida rígidamente y los medios de comunicación controlados por el gobierno (*cf.* Demny 2013: 47-50). Una y otra vez había ataques o intentos de golpe de Estado y rebeliones por oficiales que en su momento incluso fueron compañeros de Gadafi, así como sublevaciones por estudiantes, islamistas fundamentalistas, incluidos los Hermanos Musulmanes, y por grupos tribales, pero todos fueron derrotados sin excepción. Por otra parte, cabe mencionar que un régimen autocrático también puede causar revueltas, si revela rasgos paternalistas. Como ya señaló Immanuel Kant:

Un gobierno paternalista (imperium paternale) en el que los súbditos – como niños menores de edad, incapaces de distinguir lo que les es verdaderamente beneficioso o perjudicial – se ven obligados a comportarse de manera meramente pasiva, aguardando sin más del juicio del jefe del Estado cómo deban ser felices y esperando simplemente de su bondad que éste también quiera que lo sean, un gobierno así es el mayor despotismo imaginable. (Kant 1793)

⁶⁵ Wirtschaftswoche, “Die größten Ölreserven der Welt”, 30.04.2014.

Es precisamente el sistema de una ‘tutela benévola’ en el que nunca se considera la emancipación del pueblo.

En el caso de Gadafi, parece que esto se reforzó cada vez más por su conducta errática en numerosas ocasiones, así como cambios repentinos en su toma de decisiones políticas. De igual manera, y desde un punto de vista sociológico cultural, a lo largo de las décadas de su régimen, se podía observar la disparidad evidente entre la presentación autopropagandística de Gadafi (primero como líder revolucionario en uniforme militar, después como arcaico hijo del desierto con traje beduina en una carpa), y el estilo moderno de vida urbana de la mayoría de la población joven. Detrás de la fachada de una modernización integral seguían las estructuras tribales tradicionales fomentadas por el enfoque político de Gadafi en el desarrollo nacional. Esto constituyó otro aspecto clave del descontento que alimentó las protestas contra Gadafi. Una parte considerable de los fondos estatales en Libia se concedían a través de las estructuras tribales todavía dominantes, beneficiando de esta manera sobre todo a clanes vinculados a la tribu de Gadafi (*cf.* Crome 2011b: 32). Al parecer, la mayor parte del dinero se distribuía a simpatizantes leales en el oeste del país y en la capital, Trípoli, donde Gadafi más gozaba del apoyo de la población civil. Una menor parte de los fondos se invertía en el este del país y en la ciudad de Bengasi, es decir, el centro de los insurgentes en el marco de la Revolución del 17 de febrero. Las decisiones sobre el uso de los fondos fueron tomadas personalmente por Gadafi (*ibíd.*). De esta manera, estableció un sistema de dependencias personales en el que los líderes tribales dependían de él, y ellos a su vez transferían la dependencia jerárquicamente dentro de sus clanes. Como consecuencia, la rebelión contra Gadafi se puede considerar una revuelta de la región desfavorecida del país contra la favorecida, así como en contra del grupo de personas que establecieron el sistema y lo abusaron.

Aparentemente, las cuentas del presupuesto oficial del Estado no estaban separadas claramente de las cuentas personales de Gadafi. De acuerdo con informes de opositores libios de marzo de 2011, los activos de la familia Gadafi se elevaban a aproximadamente EUR 57 a 107 mil millones. Debido a la no separación de las cuentas públicas y privadas, se desconoce el valor exacto. Basado en una comparación de los gastos del Estado libio con los ingresos procedentes del negocio con petróleo y gas, Tim Niblock, un experto británico en Oriente Medio y reportero del *The Guardian*, registró lagunas en los balances que ascendieron a varios miles de millones de dólares. Niblock asumió que las sumas no gastadas por el Estado llenaron los bolsillos de la familia Gadafi que a su vez redistribuyó cantidades considerables a terceras partes para garantizar su lealtad⁶⁶.

También es muy probable que a través de dichas cuentas se llevaba a cabo gran parte de las

⁶⁶ TAZ, “Von Coca-Cola bis Juventus Turin”, 09.03.2011.

actividades internacionales del gobierno libio con el fin de influir en Oriente Medio y África, en el tráfico de armas, y para apoyar a diversas fuerzas políticas en otros países árabes. Durante décadas, el sistema político y administrativo de Libia ha sido considerado corrupto; según *Transparency International*, ocupa el 161º lugar a nivel mundial⁶⁷.

Pero es de suponer que si a Gadafi solamente le hubiera interesado la riqueza personal, nunca habría existido la clasificación de Libia del Índice de desarrollo humano (IDH). Parece que más bien pertenecía a aquel tipo de soberano que se consideraba a sí mismo un elegido del destino, de la historia o de Dios que debía cumplir una misión especial⁶⁸. No obstante, tanto Ben Ali, como Mubarak y Gadafi constituían una prueba viva de que los patrones culturales según los cuales actuaban y siguen actuando los autócratas no monárquicos en Oriente Medio, se definen a través del establecimiento de reinos y emiratos.

Al tener en cuenta la situación social y política de Libia a nivel nacional, se puede comprender por qué, al igual que en los demás países árabes, se produjeron tantas manifestaciones masivas con el fin de derrocar sus regímenes totalitarios. En Túnez y Egipto, un criterio clave para la denominada “revolución pacífica” era el ejército que, desde la descolonización final de los dos Estados en los años ‘50, se ha convertido en un elemento relativamente autónomo en la política doméstica⁶⁹ y que, por el motivo que sea, no estaba dispuesto a disparar contra los manifestantes. Al contrario, en Libia, Gadafi seguía poseyendo el poder sobre partes cruciales del ejército, especialmente sobre la fuerza aérea y unidades de tanques, incluso aún en el momento en el que ciertos sectores de las fuerzas armadas ya le habían negado su lealtad (*cf.* Haddadt 2011: 2). Aunque diversas fuentes constataron que los manifestantes en Libia se habían apoderado de las armas almacenadas en cuarteles militares y de la policía (véase también parte II, cap. 3.1.1), fue Gadafi en función de autócrata el que apeló a la parte leal militar para sofocar ofensivamente los levantamientos. Como consecuencia, surge la pregunta de qué modo se habría podido contrarrestar esta dinámica. El supuesto objetivo de terminar las matanzas mediante una guerra que finalmente causará miles de muertos más sin duda presenta una lógica absurda de las partes intervinientes.

No obstante, retrospectivamente parece que fue el colapso rápido de las estructuras militares en Libia el que provocó que también en los demás levantamientos árabes, como en el Yemen, Jordania, Bahréin y Siria, los regímenes trataron y siguen tratando de impedir las manifestaciones al recurrir a la violencia masiva con el fin de prevenir revoluciones más incisivas⁷⁰.

⁶⁷ Transparency International, “Corruption by Country”, 2015. De los 168 países analizados, Dinamarca ocupa el primer lugar a nivel mundial, Alemania el 10º, y España el 36º lugar.

⁶⁸ Süddeutsche Zeitung, “Gaddafis Gedankenwelt – Warum raubt ihr mir meine Ruhe?”, 22.03.2011.

⁶⁹ WEIPERT-FENNER, Irene, “Die Generäle und die Demokratie: Zur Rolle der Armee in Ägypten und Tunesien”, 12.07.2013.

⁷⁰ LOTZE, Walter, “We do indeed reap what we sow”, 2011.

Aparentemente, con respecto al modo de proceder para mantener el poder, no hay diferencia ninguna entre un autócrata que llegó al poder mediante el apoyo militar y un golpe de Estado, y las monarquías hereditarias.

2.3 Antecedentes históricos

Históricamente, la costa mediterránea de Libia es una de las regiones culturales más antiguas del mundo. Los libios en esta región vivían en estrecha cercanía al Antiguo Egipto y durante cierto tiempo incluso pertenecían al reino de los faraones (*cf.* Willeitner 2011: 11-12). Luego llegaron los griegos y los fenicios, más tarde reinaban los cartagineses, seguidos por los romanos, y tras la caída del Imperio Romano de Occidente llegaron los vándalos germánicos. Posteriormente, reinaban Bizancio, los árabes y, finalmente, el Imperio Otomano. No obstante, y pese a las influencias variadas, siempre existían dos regiones principales en la costa mediterránea con un desarrollo parcialmente independiente: la Cirenaica con la ciudad de Bengasi como el centro del este, y Tripolitania con la capital Trípoli en el oeste.

Después de la guerra italo-turca (1911-1912), y con el consentimiento de los demás poderes imperialistas de aquella época, Italia se estableció como potencia colonial en Libia (*cf.* Sensini 2012: 10-13). Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1943, se desataron batallas en el desierto entre las tropas alemanas y británicas. Bajo la egida de la ONU, Libia logró la independencia en 1951, y Sidi Mohammad Idris al-Mahdi al-Senussi, conocido como rey Idris I, el emir de la Orden Sanusi⁷¹, se convirtió en jefe de Estado (*ibíd.* 16). Posteriormente, las tensiones sociales internas en el país se intensificaban cada vez más, sobre todo tras el incremento notable de la producción petrolífera en la década de los años '50. Además, numerosos jóvenes oficiales de las fuerzas armadas libias estaban insatisfechos con la postura reservada del gobierno frente a la guerra de Suez en 1956 y la guerra árabe-israelí de 1967, en la que Egipto, y por lo tanto el presidente Nasser y su ideología popular del panarabismo⁷², habían sufrido una derrota. El 1 de septiembre de 1969, el rey fue derrocado y el poder asumido por el “Consejo de Comando Revolucionario” cuyo presidente fue Muamar el Gadafi. Habiendo sido de origen tripolitano, Gadafi trasladó el centro político y económico a la región occidental. Al principio, el país fue proclamado “República Árabe Libia” (1969-1977). La orientación política se fundamentó en una interpretación secular del islam, en gran parte caracterizada por la igualdad de las mujeres, la

⁷¹ La Orden Sanusi es una hermandad islámica de la Cirenaica, nacida en Arabia Saudita con rasgos misioneros y militares, que ya en la lucha anticolonial contra Italia había jugado un papel importante.

⁷² El panarabismo es una ideología política perteneciente al ámbito del nacionalismo árabe que propone que todos los pueblos árabes, tanto de Asia como de África, conforman una única nación y que deben, por tanto, aspirar a su unidad política. A mediados de los años '60, y con el egipcio Gamal Abdel Nasser como líder, el nacionalismo árabe se convirtió en un planteamiento político apoyado por la gran mayoría de los países del Magreb y de Oriente Próximo.

lucha contra la discriminación étnica, la educación y el acceso a la atención médica para todos. Gadafi basó las reformas en su “Libro Verde” escrito entre 1975 y 1981 con el que reclamaba proporcionar una interpretación independiente del Corán y que debía representar la “tercera teoría universal”, junto con el capitalismo y el socialismo (cf. Moniz Bandeira 2016: 233). De esta manera, Gadafi llevó a cabo una reforma constitucional: en 1977 renombró el Estado como “Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista” (que comunmente se traduce como “Estado de las masas”), y en 1986 cambió el nombre del país una vez más en “Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista”⁷³. El poder debía constituirse en un sistema soviético organizado desde abajo hacia arriba (cf. Sensini 2012: 53). Pero cabe destacar que en comparación con Egipto que cuenta con una tradición estatal de miles de años, y con Túnez cuya tradición soberana se ha establecido a través de varios siglos y que dispone de un aparato del Estado relativamente moderno, así como de un parlamento, partidos políticos y una sociedad civil con tradición y experiencia política, Libia no dispone de ninguno de estos rasgos. En 1979, Gadafi oficialmente dimitió de todos los altos cargos oficiales y a partir de entonces únicamente mantuvo el título del “líder de la revolución”; no obstante, seguía siendo la autoridad decisoria final *de facto* (cf. Demny 2013: 47-48).

Con respecto a los objetivos y contenidos políticos, la revolución de 1969 se basó en el Egipto de Gamal Abdel Nasser. Ya en su juventud, Gadafi estaba entusiasmado con las ideas panárabes y socialistas del presidente egipcio. El derrocamiento del rey Idris I se llevó a cabo por el “Movimiento de Oficiales Libres”, con su nombre claramente refiriéndose a Nasser y el derrocamiento del rey egipcio en el año 1952. La idea de una unión panárabe, realizada durante poco tiempo mediante la “República Árabe Unida” entre Egipto y Siria a finales de 1950 hasta principios de 1960, y reintentada en los años siguientes en diversas constelaciones incluyendo el Yemen y Sudán, significativamente alentaba las ambiciones políticas de Gadafi⁷⁴. Comparado con Egipto, Siria e Irak, Libia nunca había sido muy influyente en el mundo árabe, por lo que los esfuerzos de Gadafi para contribuir significativamente a una unidad árabe más amplia y asumir un papel protagonista no se tomaban en serio. Asimismo, dentro de la Liga Árabe tenía una posición marginal (cf. Crome 2011: 39). Debido a su origen de la región de Sirte de una tribu relativamente insignificante y sin poder político, su fondo revolucionario y su política de transformación social hicieron desconfiar a los monarcas “legítimos” del mundo árabe, especialmente a los regímenes conservadores de la región del Golfo (cf. Bedszent 2011: 17). Además, los líderes de Egipto, Siria, Irak, Argelia y otros países árabes republicanos no lo

⁷³ Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Libia_bajo_el_r%C3%A9gimen_de_Muamar_el_Gadafi, última vista: 09/2016.

⁷⁴ BPB, “Panarabismus”, 2008.

consideraron como el “defensor oficial de la causa árabe”, y su política nacionalista y retórica frecuentemente provocativa y anti-estadounidense aumentaron la desconfianza.

Cabe resumir que por un lado, en los países árabes no existía ninguna solidaridad política evidente con el régimen de Gadafi; por otro lado, con la decisión de la Liga Árabe sobre el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia, algunos Estados árabes proporcionaron el pretexto bajo el que las potencias occidentales pudieron comenzar la guerra en la que algunos de los Estados del Golfo reaccionarios incluso participaron militarmente.

3. La intervención humanitaria en Libia: ¿una obligación normativa para la protección de la población civil?

3.1 *Sine qua non*: la causa justa

La causa justa (*just cause*) es el criterio estrictamente necesario para la determinación de los requisitos de una intervención humanitaria. Como *threshold criteria*, es decir, el “criterio de umbral” (ICISS 2001: 32), está relacionado con el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas: define que es el Consejo de Seguridad el que determina las condiciones indispensables para poder derogar la prohibición del uso de la fuerza en el caso de conflictos interestatales (e intraestatales)⁷⁵. Con el fin de poder intervenir militarmente en tales conflictos, conforme con la norma de la R2P, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe existir al menos una de las cuatro situaciones o estar a punto de producirse, por lo que la comunidad internacional debe actuar de forma preventiva: el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. A continuación, será examinada la cuestión en qué medida se aplicaba este criterio necesario para la realización de la intervención.

3.1.1 La situación en Libia y la *Responsibility to Protect*

Antes del estallido de violencia en Libia a principios de 2011, el Consejo de Derechos Humanos describió la situación como “normal state of peace” (2011: 29). El 15 de febrero comenzaron las primeras protestas en el este de Libia y en la ciudad de Bengasi, con un número de más de 300 manifestantes protestando contra la detención de un abogado. Éste había luchado por los supervivientes de una masacre de prisioneros (*cf.* Henken 2011): las matanzas se cometieron en junio de 1996 por hombres uniformados en la cárcel de alta seguridad de Abu Salim cerca de Trípoli al haber fusilado unos 1.270 presos políticos principalmente de Bengasi; una atrocidad que hasta hoy día no ha sido investigada (*cf.* Human Rights Watch 2012; Amnistía Internacional 2014). Por este hecho, el 17 de febrero fue proclamado en todo el país el “Día de la Ira”, lo que llevó a manifestaciones considerables con unos 1.500 participantes contra el gobierno

⁷⁵ **Artículo 39:** El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas sean tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 41: El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Artículo 42: Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas (ONU, “Carta de las Naciones Unidas. Capítulo VII: Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión”, 26.06.1945; véase parte I, capítulo 6.4 de la presente tesis).

libio (*ibíd.*). Estas protestas terminaron en el empleo masivo de la violencia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad libias como por los manifestantes.

Durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los manifestantes prendieron fuego a coches, cuarteles militares y de la policía, lo que provocó heridos en ambas partes⁷⁶. Cabe destacar que en Libia los manifestantes se apoderaron de las armas almacenadas en dichos cuarteles, lo que contrasta significativamente con las protestas en Egipto y Túnez, en su mayoría de carácter pacífico (*cf.* Sensini 2012: 123-124). Consecuentemente, debido al ambiente cada vez más violento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar directamente contra los manifestantes y causaron numerosos muertos (*cf.* Consejo de Derechos Humanos 2011: 4). Pero también los manifestantes no se arredraron ante el empleo de la violencia y mataron a soldados y presuntos mercenarios. Sobre todo los africanos de los países subsaharianos fueron acusados por los rebeldes de servir como mercenarios leales al gobierno, y en numerosos casos fueron fusilados o ahorcados⁷⁷. En comparación con las dinámicas revolucionarias en Túnez y Egipto, la violencia en Libia se intensificó rápidamente y escaló de forma masiva⁷⁸ (*cf.* O'Connell 2011: 15). A más tardar a partir del 20 de febrero ya no era posible hablar de ataques de las fuerzas de seguridad libias contra los “civiles”, ya que éstos se habían organizado y armado. En un muy breve periodo de tiempo, distintos grupos con intereses diferentes luchaban contra el gobierno libio (*cf.* Haid 2011b: 18; Henken 2011). Entre el 20 y 22 de febrero, algunos miembros del gobierno libio desertaron, entre ellos el ministro de Justicia, Mustafa Abdel al-Jalil, y el 23 de febrero fundaron un gobierno interino de oposición en la ciudad de Bengasi ya ocupada por los rebeldes, y empezaron a establecer contactos con otros Estados con el fin de conseguir apoyo a sus propios objetivos (*cf.* Sensini 2012: 115-116; Pradetto 2011: 54-55). Mientras tanto, primeros informes revelaron que Gadafi usaba la fuerza aérea libia contra los rebeldes y civiles: tal como informó la BBC, “witnesses say warplanes have fired on protesters”⁷⁹ (*cf.* Mutz 2011: 53). La preocupación internacional respecto a los acontecimientos en Libia se aumentó cuando Gadafi dio un discurso televisivo en el cual convocó al pueblo libio a una defensa armada, refiriéndose a los

⁷⁶ BLACK, Ian, “Libya cracks down on protesters after violent clashes in Benghazi”, 17.02.2011.

⁷⁷ En el marco de las protestas y rebeliones en Libia a partir de febrero de 2011, cabe destacar que el conflicto considerablemente agravó tensiones étnicas ya existentes: en numerosas regiones del país se reveló una incitación racista por parte de las fuerzas rebeldes, llevando al linchamiento de libios de origen africano subsahariano; tanto militares como civiles: “(...) evidence of the massacres of black people, which include the lynchings and murder of black soldiers of the Libyan army, guest workers from other African countries and dark-skinned Libyan civilians (...)”. *Cf.* Human Rights Investigations, “Libyan rebel ethnic cleansing and lynching of black people”, 07.02.2011.

⁷⁸ Al Jazeera, “Libya protests spread and intensify”, 21.02.2011.

⁷⁹ Estas presunciones, que incluso llevaron a la suposición de un genocidio “de su propio pueblo” planeado por parte de Gadafi, constituyeron la “justificación” clave para la aprobación extraordinariamente rápida de la Resolución 1970 (26.02.2011), debido a las “evidentes violaciones de los derechos humanos”, y de la Resolución 1973 (17.03.2011) debido a “los crímenes de lesa humanidad”. Ambas resoluciones otorgaron a la comunidad internacional la legitimación y obligación a llevar a cabo una intervención humanitaria. *Cf.* SENSINI 2012: 75.

Cabe destacar de forma anticipada que la imputación del genocidio carece de cualquier confirmación; estas declaraciones tanto por los medios de comunicación occidentales como orientales son manifiestamente erróneas: “(...) on March 1, in a Pentagon press conference, when asked: “Do you see any evidence that he [Gaddafi] actually has fired on his own people from the air? There were reports of it, but do you have independent confirmation? If so, to what extent?” U.S. Secretary of Defense Robert Gates replied, “We’ve seen the press reports, but we have no confirmation of that”. *Cf.* FORTE, Maximilian, “The Top Ten Myths in the War Against Libya”, 31.08.2011.

rebeldes como “ratas”⁸⁰, así como “cucarachas”; un término utilizado durante el genocidio en Ruanda en 1994 en contra de la población tutsi.

Otro desencadenante para los acontecimientos subsiguientes, incluyendo la aprobación de las Resoluciones 1970 y 1973 y la intervención militar que comenzó el 19 de marzo de 2011, se origina sobre todo en las noticias publicadas el 17 de febrero por el canal de televisión *Al Arabiya*: informó sobre “una masacre con 10.000 muertos y como mínimo 50.000 heridos en Libia”. De acuerdo con *Al Arabiya*, este hecho se debió a ataques aéreos por Gadafi contra Trípoli y Bengasi y el descubrimiento de “fosas comunes”⁸¹. Estas informaciones de gran impacto fueron suministradas por Sayyid al-Shanuka que reportó desde París, oficialmente como miembro de la CPI (Sensini 2012: 122). La noticia rápidamente circuló por todo el mundo y justificó la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero cabe señalar que en ningún momento circuló el mentís cuando la CPI declaró: “The ICC wishes to clarify that this person is neither a staff member nor a counsel currently practicing before it, and by no means can he speak on behalf of the Court. Any declaration he made is given solely in his personal capacity”⁸².

Como reacción directa a la noticia errónea, y pese al mentís, el 22 de febrero la pertenencia de Libia en la Liga de Estados Árabes (LEA) fue suspendida⁸³. El mismo día, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó una declaración de prensa, en la que sus miembros exigieron del gobierno libio cumplir con su responsabilidad de proteger a su población⁸⁴. El 23 de febrero, la Unión Africana (UA) publicó un comunicado, por el que instó al gobierno libio “to ensure the protection and security of its citizens and also to ensure the delivery and provision of humanitarian assistance to the injured and other persons in need”⁸⁵. Sin embargo, la UA consideró las demandas de los manifestantes por la implementación de reformas como legítimas y se pronunció a favor de su cumplimiento (*ibíd.*). Dos días después, Ban Ki-moon, el Secretario General de la ONU de aquel entonces, habló sobre la situación en Libia ante el Consejo de Seguridad. Marcó las 1.000 muertes como consecuencia de las luchas y se remitió a las declaraciones por parte de organizaciones de derechos humanos y relatos de testigos⁸⁶. Ya el 26 de febrero, es decir, sólo once días después del comienzo de las primeras manifestaciones, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1970 (2011) en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, considerando “that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against

⁸⁰ CBS News, “Qaddafi calls rebels ‘rats’, says West wants oil”, 15.03.2011.

⁸¹ Tras investigaciones intensas, las imágenes de las “fosas comunes” se originaron en el cementerio Sidi Hamed, donde justo en enero de 2011 tuvieron lugar traslados, una práctica común cada diez a veinte años en la tradición cristiana, judía y musulmana con el fin de dar espacio a nuevos entierros. Cf. SENSINI 2012: 123.

⁸² ICC, “Clarification on media information regarding the ICC position on the Libyan situation” (ICC-CPI—20110224-MA88), 24.02.2011.

⁸³ Reuters, “Arab League suspends Libya delegation – TV”, 22.02.2011.

⁸⁴ United Nations, “Security Council Press Statement on Libya”, 22.02.2011.

⁸⁵ African Union, “Communique of the 261st Meeting of the Peace and Security Council. PSC/PR/COMM(CCLXI)”, 23.02.2011.

⁸⁶ United Nations, “Ban calls on Security Council to consider immediate steps to stop killings in Libya”, 25.02.2016.

humanity” (cf. UN, Security Council, “Resolution 1970 (2011)”, 26.02.2011). Con el fin de detener el empleo de la violencia, en un primer paso se implementaron sanciones no militares contra Libia, incluyendo un embargo total de armas, la prohibición de viajar, entre otros dirigida a toda la familia Gadafi, y la congelación de las cuentas bancarias de los partidarios gubernamentales de alto rango. Al mismo tiempo, recordó al gobierno libio de su “responsabilidad de proteger a su población” (*ibíd.*).

Cuando el 1 de marzo se suspendió la membresía de Libia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un paso único hasta entonces, Susan Rice, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas señaló: “cuando la única forma que tiene un líder de aferrarse al poder es la violación manifiesta y sistemática de los derechos humanos de su propio pueblo, entonces es cuando ha perdido toda legitimidad de poder. Debe dimitir y debe dimitir ya”⁸⁷. El 5 de marzo, se estableció el “Consejo Nacional de Transición” (*National Transitional Council*, o NTC), en aquel momento el gobierno libio oficial de oposición⁸⁸. Sólo cinco días después, Francia reconoció el consejo rebelde como representación oficial del Estado de Libia y envió un embajador⁸⁹. Con el gobierno real de Libia, el contacto ya había sido suspendido antes⁹⁰ (Pradetto 2011: 56). El 8 de marzo, el Secretario General de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) exigió del Consejo de Seguridad de la ONU cumplir con su “deber” y establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia “para proteger a los civiles”⁹¹. El mismo día, Mahmud Jibril, el presidente del NTC, dio un discurso en el Parlamento Europeo y pidió, entre otros, por apoyo militar y económico para la oposición política (cf. Bundestag 2011: 5). Sólo cuatro días más tarde, el 12 de marzo, la LEA también instó al Consejo de Seguridad a “asumir sus responsabilidades” y establecer una zona de exclusión aérea. Asimismo, la LEA anunció que el gobierno libio había perdido toda legitimidad, debido al uso de la violencia contra la población civil⁹².

El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad aprobó otra resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas por la que finalmente legitimó la intervención militar en Libia: de conformidad con la Resolución 1973 (2011), la comunidad internacional recibió el derecho “to take all necessary measures (...) to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack”⁹³, y se estableció una zona de exclusión aérea sobre Libia. Asimismo, se extendieron las medidas existentes de la Resolución 1970 (2011) precedente. Las medidas se justificaron por el hecho de que los ataques sistemáticos tenidos lugar en Libia contra la población civil podían ascender a crímenes de lesa humanidad, y que la situación en el país seguía constituyendo una

⁸⁷ KAUFMAN, Stephen, “Voto unánime en la ONU para suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos”, 01.03.2011.

⁸⁸ TNC, “Founding Statement of the Interim Transnational National Council (TNC)”, 05.03.2011.

⁸⁹ COWELL, Alan; ERLANGER, Steven, “France Becomes First Country to Recognize Libyan Rebels”, 10.03.2011.

⁹⁰ Zeit Online, “Frankreich bricht diplomatische Beziehungen zu Libyen ab”, 26.02.2011.

⁹¹ PUTZ, Ulrike, “Streit über Flugverbotszone: Araber bitten Westen um Hilfe gegen Gaddafi”, 09.03.2011.

⁹² Al Jazeera, “Arab States seek Libya no-fly zone”, 12.03.2011.

⁹³ UN, “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions”, 17.03.2011.

amenaza a la paz y seguridad internacionales (*ibíd.*). Además, el Consejo de Seguridad advirtió expresamente que el gobierno libio debía asumir su responsabilidad de proteger: “*Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population and reaffirming that parties to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians*” (*ibíd.*).

3.1.2 Las pruebas necesarias para evaluar la situación

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas legitimó la intervención, entre otros, por la suposición de que el régimen de Gadafi había cometido “crímenes de lesa humanidad”, una condición que consecuentemente implica la concepción de la *Responsibility to Protect*⁹⁴. La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados señaló que, incluso si se hubiera alcanzado un consenso respecto a los diferentes tipos de situaciones que pueden justificar una intervención militar, entonces en cada caso todavía habría sido necesario determinar si los acontecimientos sobre el terreno de hecho cumplían con los criterios presentados (*cf.* 2001: 34). Como consecuencia, pese a un consenso de la comunidad internacional resulta imprescindible comprobar previamente la conveniencia de una intervención militar mediante los hechos *in situ*. Como mencionado en el subcapítulo anterior, el discurso televisivo de Gadafi y las informaciones (falsas) de Sayyid al-Shanuka sobre una masacre con 10.000 muertos en Libia debido a ataques aéreos, así como la noticia sobre el descubrimiento de fosas comunes contribuyeron gravemente a la suposición de la comunidad internacional de que el gobierno libio recurría sistemática y masivamente al empleo de la fuerza contra la población civil, o incluso llevaba a cabo un genocidio al movilizar mercenarios de otros países africanos; esta imagen también dominaba en los medios de comunicación⁹⁵. Incluso Barack Obama, el presidente de los EE.UU. de aquel entonces, y Hillary Clinton, su Secretaria de Estado, legitimaron la intervención con la supuesta intención de prevenir un genocidio⁹⁶. Pero ¿en qué se basaban estas acusaciones? Al-Shanuka no podía proporcionar ninguna evidencia con el fin de comprobar sus declaraciones, y la ICC subrayó la falta de credibilidad mediante su mentís.

En el marco de la evaluación de los riesgos de un genocidio o del empleo masivo de fuerza, ninguna de las instituciones globales veía un peligro inminente por parte de Libia (*cf.* Bellamy y Williams 2011: 838). Las suposiciones de que Gadafi realizaba un genocidio contrastan extremadamente con las estimaciones realizadas por instituciones como el Consejo de Derechos

⁹⁴ ICRTOP, “Impact of Action in Libya on the Responsibility to Protect”, May 2011.

⁹⁵ EurActiv, “EU prepares for worst after Gaddafi ‘genocide’ threats”, 23.02.2011; Islamweb, “Gaddafi committing genocide”, 22.02.2011; MEIKLE, James; BLACK, Ian, “Muammar Gaddafi says he will die a martyr rather than quit”, 22.02.2011; McClatchyDC, “Gadhafi accused of genocide against his own people”, 21.02.2011.

⁹⁶ HARRIS, Paul, “Barack Obama defends US military intervention in Libya”, 29.03.2011.

Humanos de las Naciones Unidas: de acuerdo con Sensini (2012), en el momento en que publicó material gráfico diverso sobre la situación en Libia, no existían ni imágenes ni material de vídeo para comprobar dichas masacres. Tanto el Pentágono, como la UE y la OTAN tenían acceso a las mismas tecnologías de satélites y servicio secreto para poder examinar la veracidad de las supuestas agresiones (*cf.* 127). Pero el hecho de que no existían publicaciones pertinentes en ningún momento comprueba que todos los involucrados deberían haber sabido que la divulgación de estas informaciones principalmente servía como medio de propaganda (*ibíd.*).

En su toma de posición frente al Consejo de Seguridad el 25 de febrero respecto a las informaciones sobre fusilamientos de manifestantes y la movilización de mercenarios, Ban Ki-moon comentó: “We do not have conclusive proof, but the reports appear to be credible and consistent”⁹⁷. Pero cabe señalar que incluso él no podía remitir a ninguna investigación por una institución independiente. En efecto, el 10 de marzo nombró a un Enviado Especial con la misión de viajar a Libia e investigar sobre la situación *in situ*⁹⁸, pero las Naciones Unidas no esperaban a la publicación de su informe. Manjeev Singh Puri, el embajador de la India en la ONU, criticó esta actitud de forma vehemente en su declaración relativa a la votación de la Resolución 1973 (2011):

*No obstante, todavía no hemos podido contar con un informe suyo, ni siquiera un informe de la Secretaría sobre sus apreciaciones. El informe nos hubiera proporcionado un análisis objetivo de la situación sobre el terreno. La Unión Africana también está enviando a un grupo de alto nivel a Libia para desplegar esfuerzos serios destinados a lograr el fin pacífico de la crisis. Debemos recalcar la importancia de los esfuerzos políticos, en particular los del Enviado Especial del Secretario General, por abordar la situación.*⁹⁹ (habla original en inglés – N. de la R.)

Asimismo, hasta junio de 2011 ni siquiera era posible comprobar la movilización de mercenarios reclutados para la represión violenta de las protestas (*cf.* Consejo de Derechos Humanos 2011: 6, 67-68). Pero no obstante existen suposiciones de diferentes fuentes de que conscientemente se habían divulgado rumores sobre mercenarios y un posible genocidio con el fin de ganar más respaldo a la oposición¹⁰⁰. La demanda continua de una zona de exclusión aérea sobre Libia para proteger a la población civil debería considerarse aun más crítico: ni la Secretaría General de las Naciones Unidas, ni el Pentágono en Washington, ni embajadas occidentales en Trípoli, ni el gobierno alemán, entre otros, podían confirmar los informes sobre acciones de la fuerza aérea libia contra los manifestantes (*cf.* Mutz 2011: 53; Deutscher Bundestag 2011: 3). Consecuentemente, y de acuerdo con la información disponible, la sospecha

⁹⁷ UN, “Statement. Secretary-General’s remarks to Security Council Meeting on Peace and Security in Africa”, 25.02.2011.

⁹⁸ ONU, Consejo de Seguridad, “Carta de fecha 10 de marzo de 2011 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General”, S/2011/126, 11.03.2011.

⁹⁹ Red Voltaire, “Resolución 1973 aprobada por el Consejo de Seguridad”, 17.03.2011.

¹⁰⁰ Peds Ansichten, “Libyen und die Lüge vom Volksaufstand”, 27.12.2015.

de que Gadafi planeaba un genocidio, por tanto, parece poco probable (*cf.* Henken 2011). Asimismo, cabe destacar que una división normativa y moral de los partidos conflictivos en Libia en “buenos y dignos de apoyo” (los manifestantes) y “malos e ilícitos” (Gadafi y sus seguidores) es, por tanto, inapropiada. Por el contrario, una clasificación del conflicto libio como una guerra civil “clásica” resultaría más lógica¹⁰¹, por lo que a los rebeldes y sus líderes, respectivamente, “se les llamaría clásicamente golpistas” (*cf.* Pradetto 2011: 54-55). De acuerdo con Wagner (2011: 7), los rebeldes armados, a diferencia de los civiles y manifestantes desarmados, pueden ser combatidos en cierta medida por parte de un Estado autónomo con el fin de conservar el orden estatal.

Según el Consejo de Derechos Humanos (2011), el gobierno de Libia declaró que durante la manifestación del 15 de febrero, las fuerzas de seguridad no debían utilizar munición real para defenderse; no obstante, como resultado de los ataques armados contra agentes de policía y varios cuarteles, de hecho recurrían a otros medios “posiblemente desproporcionados”, como por ejemplo armas de fuego (35-40).

Tras investigaciones más profundas por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se hizo evidente que tanto las fuerzas de seguridad del gobierno libio como la oposición armada aplicaban violencia durante los combates en tal medida que se puede clasificar como “crímenes de guerra” (*ibíd.* 7). Asimismo, cabe realzar que a diferencia de los rebeldes, las fuerzas de seguridad libias recurrían a la violencia de tal intensidad que la comisión de investigación determinó los hechos como “crímenes de lesa humanidad” (*ibíd.*). Pero el motivo por el que no se realizó ninguna clasificación correspondiente con respecto a los rebeldes armados a causa de su actitud racista frente a los africanos subsaharianos, aún queda sin respuesta. Ya a partir de mediados de febrero se llevaron a cabo desplazamientos masivos y numerosos homicidios (*cf.* Consejo de Derechos Humanos 2011: 6, 69) que indican que existían intenciones de una limpieza étnica.

La comisión de investigación concluye que “torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment was committed by both the Government and the opposition forces in violation of obligations under international human rights and humanitarian law (*cf.* Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/17/44, 2011: 47). Pero cabe resumir que si las fuerzas de seguridad del gobierno libio realmente atacaban a los civiles intencionadamente durante los combates contra los rebeldes, ni siquiera la comisión ha logrado comprobarlo (*cf.* Consejo de Derechos Humanos 2011: 5).

¹⁰¹ Zeit Online, “Flug und Trug”, 22.03.2011.

3.2 La adecuación de la intervención

Mediante las medidas establecidas en la Resolución 1973 (2011), el Consejo de Seguridad estaba decidido “to ensure the protection of civilians and civilian populated areas” (*ibíd.*). De acuerdo con esta declaración, persiguió objetivos estrictamente humanitarios. Por un lado, la intervención fue exigida directamente por las partes involucradas¹⁰², por otro lado existió un apoyo firme regional por la LEA, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) con respecto a una intervención en general, así como el establecimiento de una zona de exclusión aérea en particular (*cf.* Bellamy y Williams 2011: 839, 846). También la UA consideraba la situación en Libia como una amenaza grave a la paz y la seguridad, no sólo en el país, sino también para la región en su conjunto¹⁰³. De igual manera, señaló su preocupación con respecto a “the safety and dignity of Libyans and of the migrant workers, notably the African ones, living in Libya” (*ibíd.*).

Sin embargo, destaca una discrepancia entre los fines especificados y legítimos por la Resolución 1973 (2011) y las intenciones efectivas de algunos Estados, por las que se pueden identificar dos problemáticas: las demandas parcialmente directas por el derrocamiento de Gadafi y el apoyo a los rebeldes. Algunos Estados, incluyendo los EE.UU. y el Reino Unido, aspiraban a un cambio de régimen¹⁰⁴, un fin claramente contrario a los términos establecidos en la resolución. No obstante, ya habían expresado este objetivo antes de la votación sobre la resolución. El reconocimiento del NTC por Francia como el representante oficial de Libia sólo cinco días después de su establecimiento sugiere que el gobierno francés ya no le dio a Gadafi posibilidad alguna de “supervivencia política”. Al mismo tiempo, este paso unilateral, por lo general tomado exclusivamente si se supone una estabilidad suficiente del nuevo régimen, intensificó el conflicto cada vez más (*cf.* Pradetto de 2011: 56). Este procedimiento desencadenó la segunda problemática, es decir, el apoyo militar a los rebeldes por parte de Francia, los EE.UU. y Gran Bretaña ya antes de haber llegado a un consenso sobre la intervención (*cf.* Henken 2011). Cabe destacar que el apoyo tan firme a grupos de rebeldes en contraste con el apoyo denegado a un gobierno legítimo todavía en funciones no corresponde con las normas modernas del derecho internacional (*cf.* Schindler 1985: 1052). Pero la entrada en vigor de la Resolución 1973 (2011) extendió esta norma del derecho internacional de tal manera que todas las medidas intervencionistas tenían que estar conforme con el embargo obligatorio de armas contra Libia determinado en la Resolución 1970 (2011) (*cf.* Mutz 2011: 54; Nachtwei 2011: 3; Pradetto 2011: 58). Debidamente, es cuestionable si la intromisión (militar) era compatible con el objetivo de

¹⁰² DAVIS, Ian, “Libya: NATO must stick to R2P script”, 31.03.2011.

¹⁰³ African Union, “Communiqué of the 265th Meeting of the Peace and Security Council of the African Union, 10 March 2011. PSC/PR/Comm.2(CCLXV)”.

¹⁰⁴ KRIEGER, Helmut, “Der ‘humanitäre’ Regimewechsel in Libyen”, 15.05.2011.

proteger a los civiles. Pero el suministro de armas a los rebeldes, pese a la petición de un alto el fuego inmediato de conformidad con la Resolución 1973 (2011), reduce tal objetivo altruista al absurdo¹⁰⁵. Frente a los ataques aéreos continuos y el apoyo a los rebeldes, incluso después de haber establecido una zona de exclusión aérea, surgieron más dudas con respecto a las intenciones humanitarias de ciertos Estados¹⁰⁶: *de jure*, una intención correcta estaba dada a través de la Resolución 1970, pero *de facto* las intenciones de algunos Estados eran contrarias a las normas de la CIISE.

Con el fin de mitigar el conflicto en Libia, se llevaron a cabo diversas medidas tanto diplomáticas como no militares. Con la Resolución 1970 (2011) se exigió el cese inmediato de los actos de violencia¹⁰⁷, subrayado por sanciones no militares en virtud del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas contra los miembros del gobierno de Libia. No obstante, la situación del conflicto se agravó aun más y a los agentes humanitarios se les negó el acceso a las zonas afectadas por el conflicto. Al parecer, en una llamada telefónica personal, Ban Ki-moon instó sin éxito a Gadafi a que cediera¹⁰⁸. Mientras tanto, diversas organizaciones regionales, como la UA y la OCI, aumentaron la presión diplomática sobre el régimen libio. Además, en la LEA y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la pertenencia de Libia fue suspendida. Como mencionado anteriormente, el día 10 de marzo, tanto la UA¹⁰⁹ como la ONU¹¹⁰ convocaron comisiones de investigación que debían analizar la situación sobre el terreno, pero el Consejo de Seguridad no esperaba a la publicación de sus respectivos informes. En este contexto, cabe señalar que las Naciones Unidas sólo dieron muy poco tiempo para la aplicación de medidas diplomáticas y no militares.

Cuando Hugo Chávez, el antiguo presidente de Venezuela, propuso el plan de crear una “comisión de paz” independiente junto con miembros de América Latina, Europa y de países árabes para enviarla a Libia con el fin de iniciar negociaciones entre Gadafi y los rebeldes, estos últimos expresaron su rechazo categórico¹¹¹. Incluso los presidentes de los EE.UU., Francia y Gran Bretaña, Obama, Sarkozy y Cameron, dieron a entender rápidamente que las negociaciones no constituían ninguna opción deseada, sino que solamente mediante un cambio de régimen se pudiera garantizar la protección de la población civil¹¹². Pero conviene resaltar que en tal situación de conflicto, con un gobierno legítimo y grupos de rebeldes encontrándose en un conflicto violento, según la CIISE, las negociaciones y el establecimiento de una misión de paz

¹⁰⁵ AG Friedensforschung, “Streit um Waffen für Rebellen”, 31.03.2011.; FRAU, Dr. Robert, “Legale Waffenlieferungen sind nicht unmöglich”, 01.04.2011.

¹⁰⁶ VON PAX, Wilhelm, “Dokumente freigeben – Der wahre Grund für den Libyen-Krieg der NATO”, 11.01.2016.

¹⁰⁷ ONU, Consejo de Seguridad, “Resolución 1970 (2011), S/RES/1979 (2011), 26.02.2011.

¹⁰⁸ Frankfurter Rundschau, “Gaddafi verliert immer mehr an Rückhalt”, 23.02.2011.

¹⁰⁹ Véase nota a pie de página no. 99.

¹¹⁰ Véase nota a pie de página no. 98.

¹¹¹ CHULOV, Martin, “Libyan rebels reject Hugo Chávez mediation offer”, 03.03.2011.

¹¹² SMITH, Lewis, “Obama, Cameron and Sarkozy state their commitment to regime change”, 15.04.2011.

generalmente son medidas preferibles en comparación con la realización de una intervención militar (cf. ICISS 2001: 36-37). En lo que concierne a Gadafi, es importante subrayar que apoyó la propuesta respecto a una comisión de paz y ofreció a los rebeldes armados una ruta de escape segura a Egipto¹¹³. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 19 de marzo, Libia aceptó un alto el fuego y el despliegue de una fuerza de control correspondiente¹¹⁴:

With reference to Security Council Resolution 1973 (2011) of 17 March 2011, which stipulates an immediate ceasefire, the Libyan Authorities affirm their commitment to an immediate ceasefire in accordance with the statement dated 18 March 2011 made by the Secretary of the General People's Committee for Foreign Liaison and International Cooperation. Libya, being keen to comply with the ceasefire, is fully prepared for the deployment of international monitors to oversee it. (Security Council, S/2011/160)

Sin embargo, la comunidad internacional supuso que la diplomacia a solas no impediera las matanzas en masa¹¹⁵. Resumiéndolo con las palabras del ex presidente estadounidense Obama, el 28 de marzo de 2011, tras los primeros ataques militares en el marco de la intervención humanitaria: “We have intervened to stop a massacre”¹¹⁶. Pero ni las circunstancias apuntaban hacia una masacre, ni se habían agotado todos los recursos no militares (cf. Cámara Baja del Parlamento alemán 2011: 1). En este sentido, cabe destacar que ya tres semanas después de la adopción de la primera resolución, la intervención militar se puede considerar precipitada y no conforme con el requisito del “último recurso”.

3.3 La cuestión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la intervención

La intervención de la OTAN en la guerra civil de Libia obtuvo el consentimiento casi unánime, sobre todo por el debate público de los medios de comunicación y la política exterior de Occidente. También la abstención de Alemania en el proceso de votación en el Consejo de Seguridad sobre la Resolución 1973 no puede considerarse como indicio de rechazo. Pocos días después de la votación, la canciller alemana, Angela Merkel, aclaró que Alemania no había adoptado una posición neutral en el asunto: respaldó la intervención militar, pero sin considerar la participación activa¹¹⁷.

Por tanto, y con el fin de entender mejor los motivos de esta y otras posturas políticas, a continuación se examinará la legitimidad de la intervención militar, así como del empleo de la fuerza por parte de los Estados intervinientes, a base de diferentes criterios jurídicos.

¹¹³ FORTE, Maximilian, “The Top Ten Myths in the War Against Libya”, 31.08.2011.

¹¹⁴ UN, Security Council, “S/2011/160”, 20.03.2011.

¹¹⁵ SCHLÄGER, Philipp, “Obamas Lügen. Neun Tage nach Beginn des Krieges gegen Libyen versucht der US-Präsident, die Angriffe zu rechtfertigen”, 30.03.2011.

¹¹⁶ The White House, Office of the Press Secretary, 28.03.2011.

¹¹⁷ Handelsblatt, “Merkel sagt Nein zum Einsatz in Libyen”, 19.03.2011.

3.3.1 La base jurídica formal para la intervención

Como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores, los Estados intervinientes fundamentaron su intromisión en la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad del 17 de marzo de 2011. En el párrafo 4, la parte operativa autorizó a cada Estado miembro de la ONU y cada organización regional de Estados a “adoptar todas las medidas necesarias (...) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque” (SR/RES/1973 (2011)). En este contexto, y como base jurídica, el Consejo recurrió al Capítulo VII (art. 42) de la Carta de las Naciones Unidas: antes de la realización de la intervención y conforme con el artículo 39 de la Carta¹¹⁸, la resolución declaró la situación en Libia como amenaza a la paz y la seguridad internacionales. También manifestó implícitamente que la imposición de medidas moderadas en lugar de una intervención militar, tal como determina el artículo 41 de la Carta¹¹⁹, no parecía o que no resultaba suficiente. Esta condición, que presenta un criterio indispensable, se exige explícitamente en el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Libia, se remitió a este requisito en la Resolución 1973: “the situation in [Libya] *continues* to constitute a threat (...)”. Aunque formulado de manera relativamente imprecisa, cabe señalar que no constituye ningún fallo formal por parte del Consejo de Seguridad. Con el fin de evaluar la legitimidad de la intervención, resulta indispensable tener en cuenta dos cuestiones esenciales: (1) En el marco de la intervención militar y el uso de la fuerza, ¿se atuvieron los Estados intervinientes a los límites impuestos por la Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? (2) ¿Estuvo la resolución conforme con el derecho internacional humanitario? Es decir, ¿se mantuvo el Consejo de Seguridad dentro de los límites legales establecidos por sus funciones de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas? Ambas cuestiones serán analizadas a continuación.

3.3.2 El uso de la fuerza por parte de los poderes intervinientes

Conviene destacar que las partes intervinientes infringieron muy rápidamente los límites determinados y autorizados por la Resolución 1973. Aunque esto no era el caso en cuanto a las medidas militares aplicadas¹²⁰, aun así en relación a los propósitos perseguidos.

¹¹⁸ El artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas manifiesta: “El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales” (Carta de las Naciones Unidas, 24.10.1945, Capítulo VII).

¹¹⁹ “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aérea’s, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas” (Carta de las Naciones Unidas, 24.10.1945, Capítulo VII, art. 41).

¹²⁰ No obstante, se puede criticar claramente la imprecisión de los bombardeos desde grandes alturas, y la aceptación de las numerosas víctimas “colaterales”. Véase entre otros: FETOURI, M. “Libya’s forgotten war victims”, 04.02.2014.

Consecuentemente, y con respecto a la primera cuestión, la respuesta claramente es negativa (cf. Henken 2011). Conforme al acuerdo del Consejo de Seguridad, la intervención únicamente tenía el fin de proteger a los civiles y de establecer una zona de exclusión aérea (cf. Resolución 1973, párr. 4 y 8), y no para derrocar al régimen libio de Muamar el Gadafi. Pero ya pocos días después del inicio del bombardeo, los miembros de los gobiernos estadounidense, francés y británico públicamente aclararon en un artículo de prensa en el periódico de prestigio *The New York Times* que la intervención no terminaría sin el derrocamiento de Gadafi:

*There is a pathway to peace that promises new hope for the people of Libya — a future without Qaddafi that preserves Libya's integrity and sovereignty, and restores her economy and the prosperity and security of her people. (...) However, so long as Qaddafi is in power, NATO must maintain its operations so that civilians remain protected and the pressure on the regime builds. Then a genuine transition from dictatorship to an inclusive constitutional process can really begin, led by a new generation of leaders. In order for that transition to succeed, Qaddafi must go and go for good.*¹²¹

Por consiguiente, a la operación se puede considerar como un programa militar en nombre del *regime change*: si las mayores potencias militares a nivel mundial entran en guerra contra el régimen de un país militarmente débil como Libia, entonces habría significado un desastre político vergonzoso para las partes intervinientes si hubieran dejado al dictador Gadafi permanecer en el poder. Pero cabe resaltar una vez más que conforme con la Resolución 1973, el uso de la fuerza exclusivamente era autorizado para proteger a los civiles y no para provocar un cambio de régimen.

En este contexto, es fundamental tener en cuenta diferentes consideraciones con las que la autorización del Consejo de Seguridad de hecho podía extenderse con el fin de derrocar a Gadafi, sin violarla en cuanto a su propósito y su letra. Se podría decir que cada ataque destinado y oportuno para la protección de los civiles era, por tanto, legítimo; también en el caso de que promoviera la caída del régimen libio, lo que probablemente constituyera el motivo principal de los agresores. Un fin no autorizado (aunque no sea ilegal) como consecuencia del objetivo principal, no automáticamente hace que su realización sea ilícita¹²². De todas formas, tal consecuencia no habría debido perseguirse a través del empleo de violencia. No obstante, es lo que sucedió en Libia desde un principio. Según las declaraciones de la OTAN y del ex Secretario General, Anders Fogh Rasmussen, los bombardeos aéreos contra objetivos civiles en los alrededores de las residencias de Gadafi siempre eran legítimos, dado que se trataba de “centros de control del militar”¹²³.

Pero frente a tal justificación surgen dudas, dado que también fueron bombardeados la casa del

¹²¹ OBAMA, B.; CAMERON, D.; SARKOZY, N., “Libya's Pathway to Peace”, 14.04.2011.

¹²² MERKEL, Reinhard, “Die NATO-Intervention gegen das Gaddafi-Regime war illegitim”, 11.07.2012.

¹²³ Basler Zeitung, “Nato-Generalsekretär ruft zum finalen Schlag gegen Ghadhafi auf”, 06.06.2011.

hijo de Gadafi, donde en aquel momento se encontraron tres de sus nietos, el edificio de un canal televisivo, así como otras instituciones de la infraestructura civil: supuestamente constituían amenazas para la población civil y por consiguiente blancos legítimos (*cf.* Barber 2011). Al parecer, se sospechó que Gadafi estaba en la casa de su hijo, por lo que fue atacada. En todo caso, aun asumiendo que el propósito de la intervención hubiera abarcado el asesinato selectivo de Gadafi, es cuestionable si la muerte “colateral” de cuatro personas civiles, entre ellas tres niños pequeños, es “aceptable”.

Asimismo, hay que añadir que las partes intervinientes no sólo acabaron con el objetivo legalizado de proteger a los civiles al haber perseguido primariamente el fin no autorizado del “cambio de régimen”, sino lo sacrificaron por completo. Esto se reveló de forma evidente por el rechazo de las negociaciones ofrecidas por la UA con las que Gadafi mismo estaba de acuerdo, siempre que no hubieran incluido su renuncia incondicional al poder (*cf.* Frefel 2011)¹²⁴.

El 11 de abril de 2011, en la ciudad portuaria libia de Bengasi, la Unión Africana negoció con los rebeldes sobre un plan de paz supuestamente aceptado por Muamar el Gadafi. Dos días antes, el ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en función del jefe de la delegación de la UA, informó después de primeras negociaciones en Trípoli que el gobierno libio aceptaba el plan de la UA con el fin de resolver el conflicto. El plan incluyó un alto el fuego, el diálogo entre el gobierno y los rebeldes y la prestación de ayuda humanitaria. El periodo de transición debía ir acompañada de reformas políticas. Según, también debían considerarse las “aspiraciones del pueblo libio a la democracia, justicia, paz y seguridad y al desarrollo económico y social” (*ibíd.*). Pero Ramtan Lamamra, el Comisionado de Paz y Seguridad de la UA, no quería facilitar detalles sobre la cuestión respecto a la renuncia de Gadafi. No obstante, confirmó que había conversaciones con Gadafi al respecto. De acuerdo con Zuma, la UA solicitó el fin de los ataques por parte de la OTAN para posibilitar un armisticio (*ibíd.*).

Sin embargo, cabe señalar que la disposición de Gadafi frente a un alto el fuego seguramente no se habría podido concebir como expresión de su moralidad “regenerada”. En el contexto del mandato único de la Resolución 1973 de proteger a los civiles libios, en particular contra la pérdida de sus vidas, la OTAN estaba obligada a aprovechar cualquier oportunidad para lograr un armisticio; pero no lo hizo. Al contrario, las partes intervinientes apoyaban firmemente a los rebeldes y rechazaban cualquier intento de celebrar un acuerdo negociado, por lo que seguían con los bombardeos (*cf.* Leukefeld 2011). No era conforme con la Resolución 1973, al igual que los bombardeos continuos, pese a la victoria militar de los rebeldes el 24 de agosto de 2011 tras haber conquistado Trípoli¹²⁵, y el reconocimiento del Consejo Nacional como el nuevo gobierno en

¹²⁴ Spiegel Online Politik, “Aufstand in Libyen: Rebellen lehnen AU-Friedensplan ab”, 11.04.2011.

¹²⁵ WEAVER, M.; OWEN, P.; BATTY, D., “Libya: the fall of Tripoli – Wednesday 24 August 2011”, 24.08.2011.

Bengasi por parte de un número de Estados cada vez mayor¹²⁶. Es presumible que la extensión del uso de la fuerza, incluso después del derrocamiento de Gadafi, conllevara la muerte de miles de personas civiles cuya protección oficialmente era la responsabilidad de la OTAN.

Ciertamente, con un armisticio seguido por negociaciones prolongadas sobre el futuro de Libia, Gadafi habría permanecido, por lo menos inicialmente, en el poder. Por supuesto, la perduración de un régimen despota sin duda no es nada satisfactorio. Sin embargo, la protección de la población civil libia de tal régimen no justifica un conflicto bélico presentado como legítimo. Al contrario, cabe destacar que las medidas de “protección” causaban la muerte de miles de personas más, contrario al propósito autorizado de la intervención. Consecuentemente, en el sentido estricto del término, la OTAN llevó a cabo una misión ilegal. La autorización de aplicar la violencia constituye una autorización especial, por lo que debe interpretarse de forma estricta conforme a un principio jurídico metódico y universal. Desde un punto de vista jurídico, cabe realzar que la aplicación de la violencia es ilegal, ilegítima y condenable si debe servir un objetivo político no autorizado (aunque sea un fin deseable) subsumido en un concepto de “protección” no claramente definido, y si quebranta todos los límites legales al abusar de las medidas autorizadas de violencia, lo que finalmente causa la muerte de miles de personas que supuestamente debían haber sido “protegidas”.

Pero en este contexto es fundamental analizar más detalladamente el contexto de la Resolución 1973, dado que está vinculado con su abuso. Por tanto, en el siguiente subcapítulo se examinarán el papel del Consejo de Seguridad, y las dificultades que conllevaba la intervención humanitaria en Libia.

3.3.3 Sobre el papel del Consejo de Seguridad y la cuestión sobre la legitimidad de la Resolución 1973

La cuestión sobre los límites legales del Consejo de Seguridad con respecto a la autorización de la fuerza militar contra un Estado determinado no es fácil de responder. No es suficiente recurrir únicamente al contenido de los artículos 39 a 42 de la Carta de las Naciones Unidas, sus límites lingüísticos, posibles objeciones por parte de los Estados miembros de la ONU, o a otras fuentes jurídicas pertinentes. Es decir, no se puede responder a una cuestión tan compleja exclusivamente sobre la base de la dogmática y la metodología del derecho internacional. La explicación está en la normativa de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados, establecida en el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas:

¹²⁶ JOHNSON, D., “Beratung über Libyen-Krieg. Rebellen als Regierung anerkannt”, en TAZ, 15.07.2011.

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

En cambio, los artículos 39 y 42 representan una excepción a esta norma, es decir, proporcionan una justificación para la infracción de la prohibición. El artículo 2, párrafo 4 no sólo es una norma entre muchas otras del derecho internacional. La prohibición de la violencia estipulada en este artículo es el requisito previo, o la condición necesaria, para un orden mundial basado en el derecho y no sólo para la garantía de un equilibrio entre las fuerzas durante cierto tiempo (cf. Rawls 2002: 45). El concepto y el principio básico del derecho se determina analíticamente por su contradicción con el uso de violencia. Como explica Kant (1797)¹²⁷, la razón por la que es un deber categórico “salir del estado natural” y coexistir en un “estado de derecho” con los demás “puede deducirse analíticamente de la noción del *derecho* en las relaciones exteriores por oposición a la violencia (*violencia*)”. Resumido en una frase, la resolución de conflictos de forma jurídica y de forma violenta lógicamente se excluyen mutuamente. Por lo tanto, todo derecho comienza por principio y de hecho con la prohibición del empleo de violencia. Por supuesto, hay excepciones; pero deben concebirse como normas del derecho, y por tanto constituir una garantía de las propias normas.

Estas relaciones son de carácter conceptual, por lo que para el orden entre los Estados se aplican de la misma forma. En cuanto al aspecto jurídico, solamente pueden aplicarse si las normas pertinentes reconocen una prohibición del uso de la fuerza como el fundamento constitucional, y si las excepciones a la prohibición a su vez están vinculadas al requisito de cumplir la prohibición en cuestión. Cabe resumir que de hecho no puede existir un derecho que sirva como *carte blanche* con el fin de provocar una guerra conforme con el derecho, dado que los contenidos implicados se excluyen conceptualmente¹²⁸.

Con respecto al orden internacional, hay que estar consciente de que no constituye un ‘poder superior’, sino se establece a través de la actitud de las entidades jurídicas particulares; ya sea a través de contratos y acuerdos, o por la práctica considerada común entre los Estados. Consecuentemente, a diferencia del derecho nacional y las diversas facultades coercitivas a las que puede recurrir un Estado frente a sus ciudadanos, en el derecho internacional no existe ninguna autoridad superior. Al igual que entre las entidades individuales *en* el Estado, las autorizaciones legítimas a emplear la violencia *entre* los Estados exclusivamente pueden justificarse a través de las normas que rigen el derecho de urgencia (cf. Hippler 2003). Con este criterio se señalan los límites legales de forma conceptual. Por lo tanto, al determinar los límites a

¹²⁷ KANT, Immanuel, *Principios metafísicos del derecho*, 1797, trad. LIZARRAGA, G., Madrid, 1873, p. 160.

¹²⁸ KANT, Immanuel, “Gesammelte Schriften, Band 8, Abhandlungen nach 1781”, 1912, p. 357.

los que está supeditado el Consejo de Seguridad de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, este criterio siempre tiene validez, sea respetado por los actores involucrados o no (*ibíd.*). Pero pese a su validez oficial, no ha demostrado su eficacia en la práctica, como muestra el caso de Libia: el Consejo de Seguridad aprobó las Resoluciones 1970 y 1973 en virtud del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, y numerosos Estados miembros de la ONU respaldaron el lanzamiento de una intervención militar.

Durante las últimas dos décadas, el Consejo de Seguridad ha ampliado sus responsabilidades y sus competencias con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo con respecto al ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos (Walling Booth 2013: 2). Este desarrollo se origina en la guerra contra el Irak en 1991 que causó una crisis humanitaria con millones de chiítas y kurdos desplazados. Habiendo sido una crisis humanitaria desencadenada por un conflicto interestatal entre el Irak y Kuwait, por primera vez tras la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad consideró la relación entre los derechos humanos y la seguridad internacional. Como consecuencia, se han establecido normas nuevas que desde entonces definen, entre otros, la violación de los derechos humanos a nivel doméstico como amenaza a la paz y la seguridad internacionales, debido a sus efectos transfronterizos (*ibíd.* 5). Con el mantenimiento de la seguridad internacional siendo uno de los aspectos más fundamentales dentro de la concepción de la comunidad internacional, tales extensiones normativas por parte del Consejo de Seguridad, como institución supranacional legitimada, se aceptan por la mayoría de los Estados¹²⁹. Pero es particularmente la asunción de responsabilidades junto con el lanzamiento de intervenciones militares lo que conlleva el riesgo de extender la autorización de aplicar la violencia sin criterios claramente definidos anteriormente. La Resolución 1973 es un ejemplo evidente de tal desarrollo erróneo (*cf.* Rotter 2011), lo que será investigado a continuación con más detalle. Anteriormente, cabe hacer referencia una vez más al concepto de la *Responsibility to Protect* ya discutido en varias ocasiones en el marco de esta tesis, dado que implica otro aspecto importante para el presente análisis.

3.3.4 El papel de la *Responsibility to Protect* en la intervención humanitaria en Libia

Con respecto a la Resolución 1973, cabe destacar que se basa únicamente en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pero no en una norma más reciente, o sea en la *Responsibility to Protect* (R2P), que a lo largo de la última década reemplaza cada vez más el

¹²⁹ LOWE, V.; ROBERTS, A.; WELSH, J.; ZAUM, D., 2008: 518.

concepto clásico de la intervención humanitaria. Adoptada en la Cumbre Mundial de la ONU en 2005, en la que los líderes mundiales se comprometieron a proteger a las víctimas de crímenes de guerra, genocidio, la limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, el concepto se presentó por primera vez en la Resolución 1674 (2006) sobre la protección de los civiles en los conflictos armados¹³⁰.

También en la Resolución 1973 (2011) sobre Libia el Consejo mencionó la R2P, aunque sólo de forma marginal. Consecuentemente, en primer lugar, mediante dicha resolución no se promovió el concepto nuevo, sino se aplicó el concepto establecido ya por mucho tiempo. Como mencionado en el subcapítulo 3.3.1 de esta parte II, antes de la intervención, y conforme con el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, la situación en Libia fue definida como amenaza a la paz mundial y la seguridad internacionales. De acuerdo con el artículo 42 de la Carta, por lo tanto, se autorizó el uso de la fuerza como medida para mantener o restablecerlas. Dicho con otras palabras, la presente definición de graves violaciones de los derechos humanos a nivel interno como amenaza para la seguridad a nivel externo corresponde con la ya consolidada práctica del Consejo de Seguridad. Pero en este contexto, es importante señalar que debido al tenor literal del artículo 39 (véase nota a pie de página no. 75) su aplicación conlleva una “utilización excesiva” o incluso la superación de sus límites (cf. Paech 2012; Winkler 2011). Su validez jurídica internacional no sólo se basa en la interpretación del Consejo de Seguridad, sino se deriva del reconocimiento posterior por la comunidad internacional. Al contrario, la denominación *Responsibility to Protect* implica una base legal más plausible que la mera afirmación de que atrocidades a nivel nacional conllevan amenazas a la paz a nivel internacional, sin mencionar explícitamente la protección de las personas civiles afectadas por una crisis humanitaria.

La R2P determina dos aspectos claves: (1) que no sólo se trata de un derecho, sino también de un deber o una obligación positiva de la comunidad internacional de facilitar ayuda; y (2) que esta ayuda se debe considerar de manera secundaria, es decir, tras la aplicación de medidas supuestamente tomadas por el propio Estado en crisis. Asimismo, el concepto define que cuando se produzcan crímenes graves o sistemáticos dentro de un territorio nacional, es el Estado mismo que debe adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos:

La obligación de prevenir y detener el genocidio y las atrocidades en masa incumbe ante todo al Estado, pero cabe a la comunidad internacional desempeñar un papel que no puede verse coartado en nombre de la soberanía. La soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población. (ONU, Oficina del asesor especial sobre la prevención del genocidio, 2014)

¹³⁰ ONU, Consejo de Seguridad, S/RES/1674, 28.04.2006.

De momento, el concepto de la R2P todavía no constituye una norma vigente del derecho internacional, sino es un principio en desarrollo. Como señala Swinnen (2014): “La R2P es un concepto que esta volviéndose probablemente cada vez más importante en la teoría de las Relaciones Internacionales pero dista mucho aun de tener una importancia jurídica y práctica.” Cabe destacar que probablemente tampoco en el futuro podrá reemplazar el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas que hasta hoy día sirve como base internacional en cuanto a la autorización del uso de la fuerza, dado que “la intervención humanitaria solo considera la intervención militar, mientras que la R2P considera sobre todo las medidas preventivas” (*ibíd.*). Son, por tanto, dos nociones distintas, aunque vinculadas entre sí. No obstante, a la R2P se podría considerar una ganancia en cuanto a la transparencia, si el Consejo de Seguridad la integrara como un criterio explícito en su tenor en cuanto a la amenaza a la paz de acuerdo con el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas: expresaría claramente que junto con las ‘formas clásicas’ de amenazas existe otro tipo que puede poner en peligro la seguridad internacional, es decir, la destrucción generalizada y sistemática de la seguridad interna de un Estado por sí mismo. Consecuentemente, sería imprescindible repensar la doctrina del derecho internacional y aclarar la cuestión en qué sentido la violación de la paz interna también constituiría una violación externa.

En este contexto es importante mencionar a Johan Galtung (*1930), el politólogo de origen noruego que más ha contribuido a la conceptualización de la paz. Con su dedicación al desarrollo y aporte a la “paz verdadera”, es considerado uno de los politólogos más importantes a nivel global, por lo que también recibió el Premio Nobel Alternativo en 1987. Con respecto al razonamiento anteriormente mencionado, cabe señalar su concepto de la “paz negativa” y la “paz positiva”: en sentido contrario de la concepción “negativa”, o sea “la ausencia de la guerra y de violencia directa”, lo que significa la mera evitación de conflictos armados, la noción de la “paz positiva” implica “un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Se persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y, por tanto, el cambio radical de la sociedad”, lo que supone también el respeto de los derechos humanos fundamentales dentro del Estado¹³¹. Pero esto no determina el razonamiento; sólo indica el estado de cosas que requiere del razonamiento. Por el contrario, debe tenerse en cuenta que una amenaza interna a la paz exclusivamente puede ser considerada una amenaza internacional en sentido del artículo 39 y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas, si de hecho presenta una amenaza exterior. No basta si la noción de la paz conceptualmente se extiende a la paz interna: cabe resaltar que, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, esta noción se limita expresamente a las amenazas exteriores.

¹³¹ Yo Político, “La Paz Positiva y Paz Negativa”, 28.10.2008.

Sin embargo, el razonamiento que implica la paz interna sí es posible (aunque falte en la doctrina común del derecho internacional): el Estado está legitimado de utilizar medidas coercitivas, si garantiza a sus ciudadanos las condiciones básicas de la paz a nivel nacional, la seguridad de la vida, la integridad física y la libertad elemental. Si no cumple con garantizar estas condiciones, o, en el peor caso, las destruye de forma sistemática, no sólo viola los derechos mínimos indispensables de sus propios ciudadanos, sino también una norma básica universal que a nivel mundial sirve para cualquier otro Estado como fundamento, o sea, la condición normativa de la relación constitutiva de todos los Estados frente a todos sus ciudadanos. Dicho con otras palabras, se trata de una norma básica del orden mundial constituida por los Estados.

Si un Estado, aunque lejano, sistemáticamente persigue a un grupo de personas de su población, les tortura y/o les asesina, entonces este Estado viola una norma que no sólo garantiza a sus propios ciudadanos el derecho fundamental a la seguridad, sino que también se aplica a los demás Estados de la comunidad internacional y a sus poblaciones. Si a tal violación masiva de la norma no se desencadenara una respuesta adecuada a nivel mundial, entonces la actitud pasiva podría constituir el inicio de la erosión de su validez normativa. Consecuentemente, tal erosión pondría en peligro la seguridad de todas las personas en relación con sus Estados, y, por lo tanto amenazaría a los Estados mismos y su propia constitución legítima. Por ende, frente a los crímenes internacionales graves en *un* Estado, toda la comunidad internacional es responsable normativamente. Este es el significado profundo de un famoso comentario de Kant (1795)¹³² en su obra *La Paz Perpetua* que conviene citar en este contexto:

La comunidad - más o menos estrecha - que ha ido estableciéndose entre todos los pueblos de la tierra ha llegado ya hasta el punto de que una violación del derecho, cometida en un sitio, repercute en todos los demás; de aquí se infiere que la idea de un derecho de ciudadanía mundial no es una fantasía jurídica, sino un complemento necesario del código no escrito del derecho político y de gentes, quede ese modo se eleva a la categoría de derecho público de la Humanidad y favorece la paz perpetua, siendo la condición necesaria para que pueda abrigarse la esperanza de una continua aproximación al estado pacífico.

De este modo, y desde un punto de vista de la filosofía del derecho, se nombran las condiciones esenciales para el derecho internacional en cuanto a la guerra y la paz. Es evidente que aparte de su función legitimadora también constituyen criterios delimitadores para la aplicación de la violencia interestatal. Y ya que estas funciones pertenecen a los elementos conceptuales fundamentales de cada relación jurídica, también son vinculantes en el marco de la evaluación de las decisiones del Consejo de Seguridad en virtud del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas.

¹³² KANT, Immanuel, *La Paz Perpetua. Ensayo filosófico*, 1795, trad. RIVERA PASTOR, Francisco, Madrid, 1919.

3.3.5 Los conceptos de la legítima defensa y del estado de emergencia en las Leyes de la Guerra para legitimar el uso de la fuerza en el derecho internacional

El uso de la fuerza militar, con el fin de ayudar a los ciudadanos amenazados de un determinado Estado, requiere de una justificación que está relacionada con dos aspectos fundamentales: (1) la soberanía estatal (la autonomía) del Estado atacado; y (2) las personas amenazadas por el uso de la fuerza de los intervinientes. Tanto en la discusión política como en el derecho internacional, generalmente sólo se considera el primer aspecto; en muchos casos incluso la referencia se deriva exclusivamente de una autorización por una resolución del Consejo de Seguridad, lo que consecuentemente conlleva que la cuestión sobre la legitimidad queda “resuelta” (cf. Henken 2011).

Pero teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, tal “confianza” en el Consejo de Seguridad es crítica. También el Consejo de Seguridad puede actuar legalmente incorrecto, y de este modo exceder los límites especificados de su competencia legítima (*ibíd.*). Por consiguiente, una intervención que se basa en una resolución “incorrecta” es, por tanto, ilegítima. Aunque, en un sentido formal, puede definirse como “legal”, no automáticamente significa que se trata de una intervención legítima.

Al examinar más detalladamente los dos aspectos relativos a la necesidad de la legitimación, o sea, el aspecto de la soberanía y la protección de las personas amenazadas, es imprescindible considerar dos principios fundamentalmente diferentes: la legítima defensa y la emergencia (agresiva). Si se aplica la fuerza militar al recurrir a la *Responsibility to Protect* (que está integrada en el art. 39 de la Carta de las Naciones Unidas) con el fin de ayudar a personas amenazadas, entonces se reclama la legítima defensa como justificación (ayuda de emergencia). Como consecuencia, y aunque el derecho a la soberanía del Estado atacado se oponga a tal ayuda de emergencia, sin embargo es posible que tenga que tolerarla (cf. Meggle 2000).

Pero cabe destacar que en el marco de los conflictos armados “modernos”, la ayuda de emergencia (o legítima defensa) notablemente se aplica a cuenta de terceras partes que ni siquiera están involucradas activamente en el conflicto, es decir, la población civil. Con respecto al sufrimiento y la gran cantidad de víctimas que conlleva dicha “ayuda”, sólo entran en consideración los principios de la emergencia agresiva (cf. Dörr 2004). A continuación, ambos principios serán analizados detalladamente:

La legítima defensa: a este respecto, hay que partir del concepto de la soberanía que desde un punto de vista jurídico significa ‘autodeterminación’. Por un lado comprende un derecho potestativo y por otro lado un derecho de defensa contra intervenciones externas, por ejemplo de carácter colonialista (*ibíd.*). Estos constituyen principios fundamentales para cada Estado y cada

nación. Especialmente como derecho de defensa la soberanía determina la “capacidad legal” de un Estado, y, por lo tanto, una condición de su relación jurídica que tiene con otros Estados; o sea, la condición de su igualdad como entidades jurídicas. La soberanía estatal se deriva de una legitimación permanente y suficiente del Estado por sus ciudadanos. Sólo un Estado que en este sentido es considerado legítimo, puede consolidar su soberanía de forma razonada y defenderla frente a otros Estados (*ibíd.*). Cabe resaltar que de hecho hay que distinguir entre la legitimidad “externa” de un Estado (frente a otros Estados), y la legitimidad “interna” (frente a sus propios ciudadanos). Esta última exige muchos más requisitos que la primera (Marcowitz 2001: 153). En breve, la legitimidad interna incluso puede estar totalmente ausente sin afectar a la legitimidad externa. Un ejemplo importante presenta el sistema estatal de la antigua República Democrática Alemana (RDA) poco antes de su caída: no se puede negar el hecho de que el poder del Estado a nivel interno ya revelaba un carácter totalmente deslegitimado. Millones de personas lo evidenciaron a través de sus “Manifestaciones de los Lunes”¹³³. Pero de igual manera es evidente que la legitimidad externa de la RDA y su reivindicación de soberanía frente a otros Estados no se veían afectadas. Si bien revelaba paralelas con la situación de Libia antes de los disturbios, no obstante, casi se puede excluir que el Consejo de Seguridad habría decretado una intervención militar en la RDA con el fin de apoyar a sus ciudadanos en su lucha contra la dictadura comunista.

Solamente cuando un Estado haya perdido su legitimidad externa, también pierde el derecho por el que los Estados respetan su soberanía (*cf.* Marcowitz 2001: 154). Solamente un Estado que se enfrenta a tal situación ya no dispondrá de la autonomía suficiente para poder oponerse a una intervención por terceras partes llevada a cabo en nombre de la *Responsibility to Protect*. Por el contrario, cualquier otro Estado que “sólo” haya perdido su legitimidad interna, sí todavía tendrá la capacidad de oponerse exitosamente (*ibíd.*). Este límite también debería considerar el Consejo de Seguridad en la aprobación de sus resoluciones en virtud del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas. En tal sentido, un Estado sólo se convierte ilegítimo si su régimen interno ya no garantiza las condiciones básicas de la paz interna previamente descritas; es decir, un nivel suficiente de seguridad e integridad física, libertades elementales y la garantía del derecho a una

¹³³ Las Manifestaciones de los Lunes en 1989 pueden ser consideradas el comienzo de la caída de la RDA. Con el fin de combatir las estructuras de poder establecidas por el Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA; o SED según sus siglas en alemán) desde 1989, se lanzaron manifestaciones cada vez más masivas por toda la sociedad. Con las palabras “Nosotros somos el pueblo”, la gente se manifestó contra los funcionarios comunistas y en favor de la libertad, sobre todo en cuanto a la libertad de expresión y la libertad de circulación. Después de sus comienzos en la ciudad de Leipzig, las protestas de los lunes se volvieron cada vez más fuertes, y se extendieron también a otras ciudades en la RDA, revelando que miles de personas querían salir del sistema de la RDA. Fueron manifestaciones decisivas que surgieron desde dentro del Estado con el fin de cambiar el sistema establecido. Cabe destacar que sólo dos días antes del 9 de octubre, la RDA todavía había celebrado el 40º aniversario de la creación del Estado con un desfile militar, lo que se puede considerar un indicio evidente de que el gobierno había fracasado totalmente con estimar el impacto de las protestas y las exigencias de llevar a cabo reformas. Consecuentemente, para la libertad alemana de 1989, el 9 de octubre con más de 70.000 manifestantes presenta un hito histórico: tras cuatro semanas continuas de protestas pacíficas, cayó el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Como resume Kudascheff (2014), este acontecimiento demuestra que los alemanes “se unieron y se sublevaron contra el comunismo, contra la dictadura, contra los partidos únicos y contra el predominio de Moscú”, lo que a largo plazo conllevó la escisión de Europa (*cf.* KUDASCHEFF, Alexander, 2014).

patria frente a sus propios ciudadanos. Dicho con otras palabras, cuando un Estado se haya convertido en *hostis populi* dentro de su propio territorio nacional, entonces se convierte por principio en el blanco legítimo de medidas de coerción militar con el fin de impedir la amenaza que conlleva tal situación.

Para concretizar estos criterios de límite de una intervención humanitaria, es importante mencionar que el informe “*The Responsibility to Protect*” del año 2001 nombra en el subcapítulo “*Extreme Cases Only*”¹³⁴ la perpetración sistemática y masiva de los cuatro graves crímenes fundamentales, es decir, el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad; tal como también están fijados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en sus artículos 5-8¹³⁵. Asimismo, en el informe del ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, y de la Asamblea General sobre el *World Summit Outcome* de 2005, se adoptó esta base¹³⁶. Desde entonces, estos cuatro criterios esencialmente han sido respetados en los debates internacionales sobre la R2P, lo que generalmente es un aspecto positivo. No obstante, desde un punto de vista más abstracto, podría surgir la cuestión por qué sólo estos cuatro criterios deberían marcar el momento en el que un determinado Estado haya superado el “umbral” por el que pierde su legitimidad externa y se convierte en el blanco potencial de una intervención militar. Por un lado, estos crímenes contra el derecho internacional designan al umbral de forma inteligible, por otro lado, los criterios para la toma de decisiones de tanto impacto, como sobre entrar en guerra o no, tienen que ser suficientemente pragmáticos y razonables, es decir, precisos, reconocidos y digno de consenso. Es lo que es el caso con los elementos constitutivos en los artículos 6 a 8 del Estatuto de la CPI. Por lo menos se diferencian en mayor medida en comparación con el tenor bastante impreciso del Consejo de Seguridad en lo que respecta a la definición de una “amenaza a la seguridad internacional”¹³⁷.

El caso de la emergencia (agresiva): cuando un Estado se haya convertido en una entidad ilegítima de conformidad con el derecho internacional, los demás Estados ya no son obligados a respetar su soberanía; la represión violenta contra los miembros y cooperadores del régimen ilegítimo presenta entonces una medida acorde con el derecho a ayuda de emergencia para apoyar a la población afectada (Scheffler 2006: 80-81). No obstante, lo que sigue vigente son las obligaciones legales y éticas frente a los demás miembros de la población afectada, incluyendo los que rechazan una intervención violenta, por las razones que sean (sea debido al temor justificado por sus vidas y la seguridad de sus familias, o por la mera tolerancia de un régimen

¹³⁴ ICISS, “The Decision to Intervene. Extreme Cases Only”, diciembre de 2001, p. 31.

¹³⁵ CPI, *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, Parte II “De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable”, art. 5-8, 2002, pp. 4-5.

¹³⁶ ONU, Asamblea General, “Resolución 60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, A/Res/60/1, §§ 138-140, pp. 33-34, 24.10.2005.

¹³⁷ Véase p.ej. las resoluciones S/RES/2254 (2015), S/RES/2253 (2015) y S/RES/2249 (2015) llamadas “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas”.

despótico, dado que no están expuestos a ningún peligro personal) (*ibíd.*). En contra de su voluntad se convierten en víctimas directas a causa de la “ayuda violenta” por terceras partes a los demás miembros de la población. El principio que legitima que también personas que no apoyan una intervención tienen que “pagar el precio” de la misma se origina en el concepto del denominado principio justificativo de la emergencia (agresiva).

Pero cabe destacar que en comparación con los criterios comunes de la emergencia en el contexto de la legislación nacional, el derecho internacional humanitario difiere significativamente, sobre todo en cuanto a la evaluación de los asesinatos selectivos llevados a cabo en el marco de un conflicto militar: la matanza de terceras personas no involucradas (víctimas “colaterales”) básicamente se considera justificable en conformidad con el criterio de legitimación de la “necesidad militar”, determinado por la Asamblea General de la ONU en un estudio sobre ejecuciones en el conflicto israelí-palestino. Especifica que “any collateral harm to civilians must meet the IHL requirement of proportionality” (Asamblea General, A/HRC/14/24/Add.6, p. 7). En cualquier caso, según los Convenios de Ginebra y su Protocolo adicional nº 1, en el derecho internacional son imprescindibles los criterios de evaluación de cada caso concreto. Abarcan los “criterios de umbral” o “criterios límites” (*threshold criteria*)¹³⁸, también relevantes en la discusión sobre la R2P: aparte de los requisitos de una justificación objetiva (de la emergencia), adicionalmente son fundamentales las condiciones de la legitimidad para el uso de fuerza por parte de los intervinientes con el fin de mitigar una situación de crisis. Cabe resaltar que también en una situación de legítima defensa o de emergencia (agresiva) en el sentido del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas (o la R2P, respectivamente) evidentemente no puede autorizarse toda forma de violencia. El *High Level Panel* encomendado en 2004 por Kofi Annan formuló estos *threshold criteria* de forma inteligible. Por tanto, el uso de la fuerza militar exclusivamente se legitima en casos particulares como sigue¹³⁹:

- a) *Gravedad de la amenaza*. La amenaza de daño a la seguridad del Estado o del ser humano, ¿es de índole tal y es suficientemente clara y grave como para justificar a primera vista el uso de la fuerza militar? En el caso de las amenazas internas, reales o que se consideren inminentes, ¿entrañan genocidio u otras matanzas en gran escala, actos de depuración étnica o infracciones graves del derecho internacional humanitario? (*seriousness of threat*)
- b) *Propósito correcto*. ¿Queda de manifiesto que el objetivo primordial de la acción militar que se propone consiste en poner fin a la amenaza o evitarla, cualesquiera que sean los demás motivos o propósitos que estén en juego? (*proper purpose*)
- c) *Último recurso*. ¿Se han considerado todas las demás opciones no militares para hacer frente a la amenaza y hay fundamentos razonables para creer que no arrojarán resultados? (*last resort*)

¹³⁸ ICISS, *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, cap. 4, 2001: 32.

¹³⁹ ONU, “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”, A/59/565f, p. 64.

- d) *Proporcionalidad de los medios*. La escala, la duración y la intensidad de la acción militar que se propone ¿constituyen el mínimo necesario para hacer frente a la amenaza? (*proportional means*)
- e) *Balance de las consecuencias*. ¿Hay posibilidades razonables de que la acción militar logre hacer desaparecer la amenaza sin que sus consecuencias sean peores que las de no hacer nada? (*reasonable balance of consequences*)

Estos *threshold criteria* corresponden a principios generales: determinan de forma apropiada el carácter excepcional de las autorizaciones en cuanto al empleo de violencia en el marco del derecho internacional. No obstante (o quizás precisamente por ello), en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, varios Estados, entre ellos los EE.UU., no estuvieron dispuestos a aceptar una limitación de su poder tan estrecha respecto a la toma de decisiones a la hora de entrar en guerra (*cf.* Bellamy 2006: 143-169).

No obstante, no cambia el hecho de que estos criterios concretan el contenido mínimo de los principios generales de la legítima defensa y del estado de emergencia en cuanto a su aplicación a casos individuales, por lo que, acorde con el concepto jurídico pertinente, se fundamentan en lo que Kant definió como la “oposición de la violencia (*violentia*)” (*cf.* Kant 1797: 460). Consecuentemente, estos criterios al menos deberían fomentar el compromiso del Consejo de Seguridad con respecto a la aprobación de resoluciones relacionadas con los artículos 39 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, y debido a su función como órgano político, tal actitud ideal no corresponde con la realidad. Aun así, debería considerarse un deber ético e intelectual realzar estos postulados, pese a su ‘inutilidad’ previsible en el ámbito político.

3.3.6 Los *threshold criteria* y su aplicación a la situación en Libia antes de la intervención

Al aplicar estos cinco criterios antedichos a la situación en Libia antes del inicio de la intervención militar, parece que sólo se cumplió con el segundo, es decir, el *proper purpose* para prevenir crímenes graves de lesa humanidad, tal como consta la Resolución 1973 (2011). Constituyó el argumento clave para las partes intervinientes para justificar su intromisión. El hecho de que paralelamente persiguieron el fin no autorizado del cambio de régimen (*cf.* Obama *et al.* 2011; Bittner *et al.* 2011; Henken 2011), no altera en nada la legitimidad del propósito originalmente autorizado.

Sin embargo, es fundamental examinar si los crímenes de lesa humanidad temidos por la comunidad internacional realmente fueron inminentes con una probabilidad razonable. Pero resumido en pocas palabras: el cumplimiento con el primer criterio del *serious threat* no se ha podido confirmar (*cf.* Wagner 2013: 116; Henken 2011). El temor de las partes intervinientes se debía a la conquista inminente de Bengasi sitiada por las tropas de Gadafi el 12 de marzo de 2011

(cf. El País, 22.08.2011). Pero en este contexto, y con Bengasi habiendo sido una de las bastiones más importantes para los rebeldes y manifestantes en contra del régimen, es imprescindible analizar lo que Gadafi realmente anunció poco antes del ataque contra la ciudad: caracterizaba a los manifestantes como “ratas y mercenarios” y les acusó de consumir “drogas alucinógenas”. Según, también recurrió a artículos de la Constitución libia y les amenazó con la pena de muerte por su actitud, lo que subrayó con las palabras “todos los delitos que han cometido son punibles con la ejecución”. Asimismo, anunció que erradicara a los rebeldes armados de Bengasi “calle por calle” y “casa por casa” (cf. La Prensa, 24.10.2011; Europa Press, 22.02.2011). No obstante, aclaró que “se haría el uso de la fuerza acorde con la legislación libia y el derecho internacional” (*ibíd.*).

Como consecuencia, hay que considerar dos reparos que se establecieron en el pensamiento occidental en aquel entonces: en primer lugar, la sospecha de que a Gadafi, supuestamente responsable por la muerte de numerosas personas (cf. Henken 2011), no se le podía confiar, pese a tal manifestación. Y en segundo lugar, incluso si se le creyera, el tenor de erradicar a los rebeldes podía considerarse como indicio cínico de considerar la posibilidad de cometer crímenes contra el derecho internacional, o más precisamente “crímenes de guerra” conforme al artículo 8, apartado 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la primera objeción, y con el fin de poder evaluar la situación de forma racional, es fundamental tener en cuenta el aspecto clave, o sea los intereses de Gadafi en el momento de haber estado cercado por las fuerzas militares de las potencias mundiales. Su objetivo primordial presentó la represión de una rebelión armada: a este respecto, cabe subrayar que la comunidad internacional no tiene derecho a recurrir a la fuerza militar con el fin de impedir la toma de medidas pertinentes por parte del Estado soberano afectado por la crisis, si goza como mínimo de legitimidad externa, como anteriormente explicado. En el caso de Libia antes de la escalada de violencia, esta condición se cumplía sin duda alguna. La suposición hipotética de que Gadafi hubiera sido capaz de provocar un acto de venganza contra la OTAN, aun sabiendo de su poder militar mucho más inferior, evidentemente habría conllevado su autodestrucción, por lo que habría requerido una dimensión de locura que ni siquiera se podía atribuir a un excéntrico excepcional como Gadafi. Además, es fundamental vincular esta consideración con el tercero de los *threshold criteria*, o sea el *último recurso* al recurrir a la medida más “suave”.

En consideración de los intereses de Gadafi, habría parecido muy prometedor amenazarle con una intervención inmediata y masiva, si se hubieran constatado tendencias evidentes de crímenes contra el derecho internacional cometidos por sus tropas después de la toma de Bengasi (cf.

Merkel 2012). Pero no se demostraba si en las ciudades controladas varias veces tanto por las tropas gubernamentales como por los rebeldes a lo largo del conflicto, se cometieran masacres de venganza por parte de los soldados de Gadafi. En lugar de la intervención militar de Occidente ciertamente habría sido posible recurrir a medidas más suaves para proteger a la población civil de Bengasi (cf. Henken 2011), y de este modo evitar la muerte de entre 25.000 y 50.000 personas causada por la guerra civil que estalló posteriormente (Europa Press 2013; Bittner 2011). Además, provocó el desplazamiento forzado de unos 550.000 libios a nivel nacional y alrededor de 660.000 refugiados transfronterizos (IDMC ‘Global Overview 2014’). Tanto desde un punto de vista ético como jurídico, la experiencia ha demostrado que la intervención definitivamente no constituyó la alternativa más conveniente.

Con respecto a la segunda objeción, cabe realzar que a un grupo de rebeldes armados generalmente no se les considera como personas civiles, incluso si pocas horas antes del brote de luchas armadas esta denominación todavía hubiera sido aplicable (cf. Russia Today, 19.04.2011). No obstante, por razones éticas evidentes, no deben ser tratados “sin piedad” o asesinados arbitrariamente. Pero como se ha señalado anteriormente, aquí también habría sido mucho más conveniente esperar y tratar de prevenir las posibles matanzas de rebeldes indefensos mediante la amenaza grave de intervención por parte de Occidente, en lugar de actuar de forma precipitada. Teniendo en cuenta la muerte de decenas de miles de personas inocentes y la destrucción de ciudades e infraestructura a gran escala, la intervención militar nunca debería haber sido lanzada de manera tan desconsiderada, sin haber agotado todo tipo de medidas más suaves. Por supuesto, tras la represión (previsible) de la rebelión, la comunidad internacional habría tenido que aceptar que Gadafi hubiera permanecido en el poder. Pero independientemente de sus posibilidades de éxito al respecto, en ningún momento había derecho a provocar una guerra con el fin de impedir este resultado.

Y finalmente, si se considera el último de los *threshold criteria*, es decir, la evaluación de las consecuencias previsibles de una acción militar comparadas con las de no actuar, se revela un balance desolador: el 31 de agosto de 2011, numerosos periódicos publicaron un comunicado oficial por parte de los rebeldes libios, según el cual la guerra había causado la muerte de como mínimo 50.000 personas (cf. El Universal, 31.08.2011; La Nación, 31.08.2011; Spiegel Online, 31.08.2011). Unas semanas más tarde, este número fue corregido a 30.000 (cf. The Guardian, 26.10.2011) y posteriormente una vez más a 25.000:

In August rebel leaders put the death toll at 50,000. (...) On 8 September, Naji Barakat, the Health Minister of the National Transitional Council, stated that the death toll amounted to 30,000, with half thought to be Gaddafi fighters. (...) These figures have not been independently verified, and the NTC caused controversy by reducing the number of people killed to 25,000 within a month. (cf. IB Times, 26 de octubre de 2011).

A pesar de los motivos tras esta corrección llamativa del número de las víctimas, cabe destacar que incluso si el número más bajo fuera exacto, el resultado es desastroso. No sirve distinguir entre los muertos como soldados, rebeldes armados o personas civiles, igual que no sirve distinguir entre los diferentes responsables, o sea la OTAN, los rebeldes y las tropas de Gadafi que causaron la muerte de tantas personas. Independientemente de la cuestión relativa al origen de las víctimas, a cuáles de los diferentes grupos involucrados pertenecían, o quién les asesinó, no cabe duda alguna sobre el hecho de que la gran mayoría de estas víctimas no habría perdido la vida, si Occidente no hubiera intervenido militarmente en el país. Esta suposición se debe a la circunstancia de que en el momento de la primera intromisión por parte de Francia y Gran Bretaña en los asuntos libios, los soldados de Gadafi se encontraban a punto de detener la rebelión, es decir, estaban a punto de reprimir los graves disturbios y actos de violencia en Libia (*cf.* Kuperman 2013).

Todas las víctimas causadas por el impedimento militar de dicha represión, por tanto pueden inculparse (aunque por supuesto no exclusivamente) a los Estados intervinientes. Como consecuencia, cabe realzar que si no hubieran llevado a cabo la intervención militar, habrían tenido que tolerar la permanencia del régimen de Gadafi, por lo menos en aquel entonces. Tal como se indicó anteriormente, evidentemente no le hubiera gustado a Occidente, pero no es justificable provocar una guerra y decenas de miles de muertos, solamente con el fin de evitar tal resultado “desagradable”.

También con respecto al segundo objetivo de la intervención, o sea del *regime change*, la situación no es nada mejor: desde la caída de Gadafi, las circunstancias en Libia son muy inestables y se han empeorado de forma amenazadora. No parece probable que se mejoren en un futuro cercano. Marcos Peckel, un columnista, analista y asesor colombiano sobre temas internacionales y Oriente Medio para diversos medios y organismos en Colombia y el exterior, resumió en 2016:

Libia ya no existe... no hay autoridad central, no hay gobierno, no hay nada que parezca que Libia sea un Estado. Libia en estos cinco años dejó de existir como Estado. (...) Es obvio (que) buena parte de la responsabilidad es de la OTAN. (La coalición) llevó el mandato (del Consejo de Seguridad de la ONU) mucho más allá de lo que decía la resolución (1973).

Además, en este contexto opinó que “si nos ponemos a pensar cuándo estaba Libia mejor, si antes o después (de Gadafi), desde el punto de vista del Estado estaba mucho mejor antes” (Sputnik News, 15.02.2016). Teniendo en cuenta la situación política actual de este país norteafricano, no hay dudas en cuanto a la veracidad de esta declaración. Francisco Peregil, un corresponsal de El País en el Magreb, escribió:

Libia cuenta desde esta semana con tres Gobiernos incompatibles entre sí. Uno tiene su base en Trípoli y está formado por un grupo de partidos en su mayor parte islamistas que acaban de aprobar una ley con la que se propinará 80 latigazos a quienes consuman alcohol. El otro se encuentra exiliado en la ciudad libia de Tobruk y gozaba hasta ahora del reconocimiento de la comunidad internacional. Y el tercero en discordia es el que la ONU ha impulsado sin conseguir la aprobación ni de Trípoli ni de Tobruk. (El País, Internacional, 16.03.2016)

Aunque este último gobierno, denominado “unidad nacional” cuenta con el apoyo de la ONU y de las principales potencias de Occidente, no tiene amplio poder sobre el terreno libio, y está considerado por los demás gobiernos “un Gobierno marioneta de los poderes coloniales” (*ibíd.*). No obstante, la ONU exige que tenga su sede en Trípoli, lo que consecuentemente conlleva más discordia con respecto a la misión de establecer un gobierno estable bajo condiciones de seguridad. Existe motivo para temer que Libia seguirá siendo otro Estado en la cadena de casos fallidos debido a un cambio de régimen “democrático” forzado de forma violenta desde el exterior.

A lo largo de las últimas décadas, se ha demostrado numerosas veces el grave riesgo que conlleva un cambio de régimen provocado desde el extranjero: ni en Afganistán en 2001 al eliminar a Mullah Omar, ni en Irak en 2003 al derrocar a Sadam Husein la intromisión militar ha llevado al desarrollo de una democratización nacional, sino al estallido de una guerra civil duradera, además acompañada por el terrorismo organizado (*cf.* Downes 2010: 3-4). Durante los últimos años, tal “iraquización” en el desarrollo de Libia parece haberse logrado exitosamente, tanto al considerar el aspecto político como jurídico y sobre todo humano, dado que desde 2011 el país se encuentra en una crisis humanitaria continua sin precedentes. En una resolución sobre la situación en Libia por parte del Parlamento Europeo, se destacó:

La intervención de la OTAN, incluido el despliegue en Libia del ejército francés y del SAS (Special Air Service) del Reino Unido en 2011, ha provocado la muerte de civiles inocentes, una crisis humanitaria y una grave destrucción, que han desembocado en la total desestabilización del Estado libio; que la escalada de violencia ha conducido a Libia a un estado de caos y de guerra total con repercusiones negativas para los países vecinos. (2016/2537(RSP), A, 01.02.2016)

Teniendo en cuenta esta declaración, es imprescindible volver una vez más a la cuestión sobre la ilegitimidad de la Resolución 1973, lo que por tanto será resumido en el subcapítulo siguiente.

3.3.7 Resumen: la ilegitimidad de la Resolución 1973

Todos los acontecimientos descritos en los subcapítulos anteriores eran, o por lo menos deberían haber sido previsibles antes de la adopción de la Resolución 1973 (2011).

Consecuentemente, esta condición la convierte en una resolución gravemente errónea e ilegítima (*cf.* Henken 2011). Pero cabe destacar que el hecho de que el Consejo de Seguridad se mantuvo dentro del marco formal de su responsabilidad, no es relevante al respecto (*ibíd.*). Si bien es cierto que con una mayoría de dos tercios en la Asamblea General sí es posible teóricamente solicitar un dictamen correspondiente de la Corte Internacional de Justicia conforme con el artículo 96, apartado 1 de la Carta de las Naciones Unidas¹⁴⁰, esto lamentablemente no constituye una opción realista, dada la dificultad de ponerla en práctica frente a los intereses políticos divergentes de los Estados miembros.

Pero esto no quiere decir que tales decisiones del Consejo de Seguridad siempre son aceptadas por expertos en derecho internacional. A lo largo de su historia, ha habido casos en los que el Consejo de Seguridad estaba bloqueado por el veto, debido a motivos políticos de sus miembros permanentes, y como consecuencia no era capaz de autorizar intervenciones urgentemente necesarias para evitar catástrofes humanitarias, como por ejemplo un genocidio. Por ende, en el derecho internacional es indispensable distinguir entre la cuestión relativa a la legalidad y a la legitimidad¹⁴¹. Del mismo modo, es fundamental considerar los casos contrarios, o sea, si el Consejo autoriza guerras no legitimadas de acuerdo con los principios fundamentales del derecho internacional.

3.3.7.1 La Resolución 1973 y la violación del principio de la *Collective Security*

Incluso aquellos que rechacen el resultado de las consideraciones anteriores, deberían ser escépticos frente a otro aspecto destacado de la Resolución 1973: la renuncia total del Consejo a cualquier influencia con respecto al control sobre la naturaleza, la dimensión y la duración de la intervención militar. Esto implica el principio de la *Collective Security* según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Por buenas razones, los autores de este concepto han otorgado la responsabilidad exclusiva por la realización de guerras legítimas al Consejo de Seguridad. El Consejo, por tanto, de cierta forma asume la tarea de un ‘fiduciario’ en nombre de toda la comunidad internacional. Este es el fundamento en el que se basa toda la estructura del derecho internacional con respecto a la guerra y la paz. Significa mucho más que el simple acuerdo de los signatarios de un tratado multilateral, y más que el aseguramiento eficiente de las condiciones

¹⁴⁰ “La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión Jurídica” (Carta de las Naciones Unidas, cap. XIV, art. 96, apartado 1).

¹⁴¹ El ejemplo más grave demostrando tal fracaso presenta la pasividad del Consejo de Seguridad y la falta de una resolución de acuerdo con el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas en el caso del genocidio en Ruanda en 1994, pese a haber estado informado sobre los acontecimientos numerosas veces antes de la perpetración de los crímenes. En este caso, el Consejo no sólo debería haber autorizado una intervención, sino estuvo obligado a lanzarla (véase también art. 1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: “Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar”).

jurídicas respecto a la violencia militar (*cf.* Franck 2010: 541s.). Constituye sobre todo un principio legitimador. Salvo la inmediata defensa propia de un Estado atacado (art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas), la idea básica es que solamente la comunidad internacional en su conjunto, y el Consejo de Seguridad como ejecutivo fiduciario, debe tener la autoridad de aplicar la fuerza militar interestatal. Un Estado que amenaza la paz infringe el principio fundamental de todo derecho en el contexto global, o sea, la prohibición de aplicar la violencia. Como consecuencia, amenaza a *todos* los Estados normativamente, dado que sacude el fundamento normativo en el que se basa la existencia de cada uno de ellos garantizada jurídicamente. Es un asunto que afecta a todos, por lo que tienen el derecho de prevenir o impedir tal violencia ilegítima mediante la aplicación de contraviolencia legítima.

En un sentido análogo, y como señalado anteriormente, también la amenaza a la paz a nivel nacional puede convertirse en una infracción que afecta a la comunidad de Estados, del mismo modo convirtiéndose en un asunto de todos, sobre todo si un Estado determinado infringe la norma fundamental de toda existencia estatal legítima al no cumplir con la protección de sus propios ciudadanos. Esta concepción constituye el principio de la *Responsibility to Protect*. Como resume Peral: “R2P concerns (...) the actual protection of victims” (2011: 2). Por eso, y de conformidad con este concepto, la comunidad internacional protege no sólo a las personas afectadas y amenazadas en otro Estado, sino también a sí mismo; es decir, el fundamento normativo de su constitución legal en forma de un conjunto de Estados.

De esta manera, se revela todo el significado atribuido al principio de la *Collective Security*, junto con la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Seguridad con respecto a la autorización de la fuerza militar legítima. Consecuentemente, en este contexto, se examina una vez más la Resolución 1973. Como mencionado anteriormente, el Consejo de Seguridad autorizó a los Estados intervinientes a adoptar “todas las medidas necesarias” en cuanto a la aplicación de la fuerza militar. Este tenor conlleva una grave imprecisión de carácter confuso: ¿es el Consejo mismo el que determina lo que se considera “necesario”, o son las fuerzas armadas autorizadas a intervenir que tienen el poder decisorio?

En el contexto del derecho internacional, al parecer la comunidad internacional se ha acostumbrado a esta imprecisión: desde que el Consejo de Seguridad introdujo la expresión “todas las medidas necesarias” por primera vez en 1990 en su Resolución 678 para autorizar la intervención militar contra el Irak, se ha convertido en una fórmula establecida (*cf.* Blokker 2000: 543s.)¹⁴². También determinó claramente el propósito por el que autorizó la aplicación de todas

¹⁴² En su artículo científico “Is the Authorizaton Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorize the Use of Force by ‘Coalitions of the Able and Willing’”, Niels Blokker (2000) examina la cuestión, si es parte del poder del Consejo de Seguridad de adoptar resoluciones que autorizan a los Estados miembros a aplicar la fuerza. Desde el fin de la Guerra Fría, esta cuestión ha cobrado cada vez más relevancia, dado que tales resoluciones de autorización se han convertido en el instrumento primordial por el que el Consejo de Seguridad ha actuado en situaciones en las que el uso de la fuerza militar ha sido considerado necesario. De acuerdo con la conclusión provisional de Blokker,

medidas pertinentes: la liberación de Kuwait ocupado por Saddam Husein (*cf.* S/RES/678, 1990). Asimismo, ha sido posible concretar los objetivos de la mayoría de las demás resoluciones en las que recurrió a dicha expresión (*cf.* Blokker 2000). Pero esto no significa que todos los Estados han estado o están de acuerdo con la práctica del Consejo de Seguridad de transferir su responsabilidad a alianzas de Estados como en el caso de Irak. En una toma de posición sobre la Resolución 875 (Haití) de 1994, en la que también aparece la expresión “all necessary means”, México criticó la formulación y su efecto al declarar:

*[A] kind of carte blanche has been awarded to an undefined multinational force to act when it deems to be appropriate. This seems to us an extremely dangerous practice in the field of international relations.*¹⁴³

Mediante numerosas otras críticas por parte de la comunidad internacional, se ha expresado una preocupación significativa sobre la práctica del Consejo de Seguridad. Como destaca Blokker (2000: 555): “It is suprising how often these resolutions were criticized precisely for the reason that the Council does not control the operations it authorizes”.

Aparte de la *carte blanche* en cuanto al empleo de violencia determinado en la Resolución 1973, también hay que considerar el objetivo por el que se había autorizado el uso de la fuerza: la “protección de la población civil”. De este modo, aparte de la imprecisión absoluta respecto a las medidas autorizadas, destaca una vaguedad enorme con relación al propósito autorizado. En el caso de Libia, la responsabilidad de determinar en qué medida el uso de violencia se consideraba “necesario” y qué tipo de medidas debían servir para “proteger a los civiles”, estuvo solamente en manos de los intervinientes, lo que llevó al abuso de la resolución. Este abuso se manifestó claramente a través de la violación del principio fundamental de la *Collective Security* por el Consejo de Seguridad. Aunque sí disponga de cierta flexibilidad con respecto a su definición de una amenaza a la paz, no debería renunciar nunca a su máxima autoridad en cuanto al empleo de violencia legitimada, es decir, una medida coercitiva excepcional que precisamente por su carácter controvertido exclusivamente debe autorizarse por el Consejo en función de fiduciario. Esta problemática también se revela en la norma sobre la legítima defensa del derecho internacional, o sea el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Incluso el Estado que se defiende contra un ataque armado tiene este “derecho inmanente” solamente con reservas, “hasta

se trata de un poder implícito del Consejo de adoptar tales resoluciones. Sin embargo, también argumenta que tanto el sistema como los principios de la Carta de las Naciones Unidas rechazan otorgar autoridad de tipo *carte blanche*, y favorecen autorizaciones que respetan la autoridad y responsabilidad del Consejo de Seguridad dentro del sistema de las Naciones Unidas en el marco de la *Collective Security*. Asimismo, examina los diferentes puntos de vista de los Estados miembros y la práctica del Consejo de Seguridad: por lo general, los Estados miembros consideran aceptable el modelo de las resoluciones de autorización como tales. En este contexto, Blokker presenta una lista de los ejemplos más importantes (que en el año 2000 ya abarcó 25 casos) de resoluciones de autorización aprobadas por el Consejo de Seguridad que autorizaron el uso de la fuerza militar a causa de una amplia gama de propósitos; entre ellos la liberación de un país de ocupación extranjera (Kuwait), el restablecimiento de la paz y la seguridad internas (Timor Oriental), y el restablecimiento del poder de las autoridades legítimas (Haití). Cabe realzar que la mayoría de estas resoluciones de autorización tienen en común que fueron adoptadas sin el consentimiento de los Estados en cuestión, y casi todas se refirieron explícitamente al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (pp. 541, 543ss.).

¹⁴³ *Cit. en* BLOKKER 2000: 558.

tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales” (*ibíd.* 13). Si tal caso genuino de violencia individual legítima de un Estado particular debe subordinarse al régimen de la *Collective Security* por el Consejo de Seguridad, entonces, y como consecuencia lógica, también está prohibido el caso contrario, es decir, la cesión de la autoridad sobre el empleo de violencia colectiva a cualquier Estado particular que se autoproclama dispuesto a dirigir una intervención militar. Es obvio lo que esto significa: el Consejo, grosso modo, tiene la obligación de mantener el poder y el control sobre una guerra autorizada; al menos para definir los límites materiales y temporales del uso de la fuerza y para asegurarse de su influencia potencial. Dispone de muchas opciones al respecto. La más importante es la limitación temporal del empleo de violencia. Ésta tiene importancia especial cuando uno de los intervinientes es un miembro permanente del Consejo de Seguridad: en el caso de intervenciones autorizadas por tiempo indefinido tiene el poder de impedir cualquier influencia posterior por parte del Consejo, debido a su derecho de veto (*cf.* Blokker 2000: 541).

En el caso de la resolución (indefinida) de Libia, fueron tres potencias con poder de veto (Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos) que jugaron un papel fundamental en la autorización de la *carte blanche* por sí mismas (*cf.* Ramezani 2011). Ni siquiera pudieron infringir el principio de la *Collective Security*, dado que a todos los efectos y propósitos lo tenían descartado. Además, el Consejo habría podido disponer de medidas adicionales, por ejemplo la supervisión del uso de la fuerza sobre el terreno, o habría podido establecer una exclusión especificada de ciertas medidas de violencia y objetivos perseguidos. Pero en la resolución de Libia, el Consejo no recurrió a ninguna de las opciones posibles. Con respecto al abuso inmediato de su contenido, la Resolución 1973 puede considerarse un ejemplo clásico de una decisión equivocada y gravemente negligente (*cf.* Kuperman 2015). El Consejo no actuaba contra un Estado canalla en el marco de una coerción colectiva conforme con el derecho internacional. Más bien declaró a un miembro de la ONU como ‘forajido’ a nivel global, y lo dejó abandonado frente al empleo de violencia completamente descontrolado por parte de todos los Estados involucrados con el fin de alcanzar un objetivo no autorizado. En este sentido, y desde un punto de vista jurídico, el Consejo no cumplió con su responsabilidad y competencia legítima. Aunque este ‘procedimiento’ se haya establecido como una condición común, no debe significar que la ciencia del derecho internacional tenga que aceptarlo acríticamente.

3.3.8 Perspectivas de futuro

Cabe destacar que el desarrollo del concepto de la *Responsibility to Protect* es uno de los mejores avances en la historia reciente del derecho internacional. Pero el hecho de que el derecho

mismo requiere de protección de posibles abusos ha sido demostrado a través de la intervención en Libia. En todo caso, la Resolución 1973 no ha consolidado una norma reciente con el fin de establecer una obligación universal de ayudar e intervenir en el caso de crímenes graves contra el derecho internacional, sino la ha dañado considerablemente. Debido a su contenido poco definido, la R2P es “ideal” para abusarla y realizar cualquier tipo de misión “humanitaria”. Como ejemplo cabe recurrir a Birmania en la primavera de 2008 tras el ciclón devastador “Nargis”: al haberse referido a la R2P, Francia aspiró a una intervención militar en Birmania, con el fin de forzar el abastecimiento de la población civil, sin el consentimiento del gobierno nacional. Puede que realmente se tratara de motivos honestos y altruistas. Pero sólo pocos meses más tarde, Rusia invocó su “responsabilidad de proteger” para justificar su intromisión violenta en Abjasia (cf. Evans 2009). En el caso de Libia, fue entonces la OTAN que obtuvo la autorización de “proteger”; con el fin de llevar a cabo un cambio de régimen.

A este respecto se plantea la cuestión ¿cuántas de las innumerables crisis humanitarias en el mundo todavía servirán como pretexto para que ciertos Estados puedan legitimar sus fines estratégicos ilegales y movilizar sus arsenales militares, simplemente al recurrir a la Responsabilidad de Proteger?

Para la mayoría de los Estados, el concepto de la R2P probablemente conlleva dudas, lo que acompañará e irritará el desarrollo de la norma durante mucho tiempo. En lo que concierne al Consejo de Seguridad, ha demostrado una vez más su incapacidad como fiduciario de la *Collective Security*, lo que no será ignorado por los agentes futuros en la política global. La satisfacción general sobre la caída de Gadafi no es nada proporcional a las consecuencias que la guerra ha conllevado hasta hoy día, sobre todo al considerar la cantidad de vidas perdidas y los daños ocasionados. Ya se ha revelado que el juicio de la historia sobre la intervención militar en Libia y la guerra civil en su mayoría ya no es coherente con la opinión expresada en la cobertura informativa justo durante y después de la intervención.

Pero aparte de la discusión sobre la legitimidad de la intervención, también es fundamental examinar otro aspecto relacionado con su realización, o sea los motivos verdaderos en el contexto del poder político. Esta cuestión se plantea sobre todo al considerar el papel de las tres potencias principales, los EE.UU., Francia y Gran Bretaña, que impulsaron la intervención militar y la caída de Gadafi de forma significativa. Por tanto, es esencial analizar tanto su motivación como sus intereses, y discutir los posibles beneficios con los que estos agentes principales podían contar. De igual manera, y para poder presentar una visión de conjunto más integral, también se discutirán el papel y los motivos de las potencias defensivas caracterizadas por su actitud pasiva y/o abstinentes. Todos estos aspectos serán investigados en lo sucesivo.

4. ¿La intervención humanitaria en Libia en beneficio de intereses políticos de poder?

4.1 Las potencias principales de la intervención militar y el impacto del petróleo

Los tres Estados que dirigieron y ejecutaron la intervención, Francia, Gran Bretaña y los EE.UU., históricamente tenían experiencias muy heterogéneas con Gadafi: mientras que en la década de los años '70 y a principios de los '80 Francia todavía tenía relaciones comerciales sumamente lucrativas con Libia, sobre todo en el ámbito militar a través de la exportación de armas por un valor de aproximadamente USD 3,3 mil millones (*cf.* Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 397), las relaciones entre los EE.UU. y Gadafi ya habían tocado fondo. Debido a la nacionalización de las compañías petroleras estadounidenses, la amenaza de países pro-americanos en Oriente Medio por Gadafi, su *balancing* con la Unión Soviética contra los Estados Unidos y su supuesto apoyo al terrorismo internacional llevaron a Libia al cuarto lugar de los “enemigos de los Estados Unidos” en 1977. Un año más tarde, Libia se vio enfrentado a primeras sanciones unilaterales, que luego fueron extendidas (*cf.* El Economista, 05.09.2008). El clima político llegó a su punto más bajo cuando en 1986 los EE.UU. bombardearon Libia tras una serie de ataques terroristas libios contra soldados estadounidenses (*cf.* Sensini 2012: 66s.). A mediados de los años '80, también se empeoraron las relaciones con Francia. Las razones se debían al conflicto sobre el futuro del Chad, la voladura de un avión francés de pasajeros sobre el Níger en 1989 atribuida a terroristas libios y la falta de cooperación de Gadafi en cuanto a la resolución del caso (*cf.* Joffe 2001: 83-85). Asimismo, el Reino Unido sufrió un atentado terrorista que supuestamente también se debió a la iniciativa libia: en 1988, el avión de pasajeros estadounidense PanAm 103 explotó sobre Lockerbie, Escocia, aunque se supone que el ataque se dirigió a los EE.UU. (*cf.* Sommer 2013: 199)¹⁴⁴. En consecuencia, entre 1992 y 1993 se impusieron sanciones por parte de las Naciones Unidas y la UE¹⁴⁵, seguido por el aislamiento internacional (*ibíd.*).

Debido a sus intereses económicos, sobre todo Francia y Gran Bretaña trataron intensamente poner fin a la crisis con Libia y las sanciones. Finalmente, Libia extraditó los terroristas y pagó indemnizaciones a las familias de las víctimas de los ataques aéreos, por lo que en 1999 se

¹⁴⁴ De acuerdo con los servicios secretos occidentales, el coronel Gadafi fue el responsable de muchos de los actos más impactantes del terrorismo en la década de los '80, incluyendo también los bombardeos del vuelo PanAm 103 sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, en el que murieron 270 personas. Asimismo, el gobierno de Reagan acusó a Libia de haber ordenado el atentado a una discoteca alemana en Berlín en 1986. Pero dado que hasta hoy día carece de evidencia clara, también hay que considerar la presunción de que el atentado de Lockerbie podría haber constituido la venganza por el derrumbe de un avión de pasajeros iraní provocado por un buque de guerra de los EE.UU. en 1988 con un total de 290 muertes. Aunque esto evidentemente no relativizaría el crimen, revelaría claramente la espiral y la agudización de la violencia que se genera en respuesta a crímenes anteriores. Por otra parte, se demuestra una vez más el fenómeno de cómo el concepto de lo que consideramos ‘enemigo’ puede intensificarse a través de una transmisión selectiva de información: la dimensión de nuestra desinformación se puede estimar por el hecho de los 290 iraníes derribados, un atentado que generalmente desconocemos en Occidente, y, al contrario, en qué dimensión estamos conscientes de las 270 víctimas de Lockerbie (*cf.* DAHN 2011: 39). Pocos días después del ataque a la discoteca en Berlín “La Belle”, en el que también murieron dos soldados estadounidenses, la fuerza aérea de los EE.UU. bombardeó Trípoli y Bengasi, causando alrededor de 60 muertos. Cabe destacar que tanto esta manera de proceder de los EE.UU. como las víctimas apenas han sido considerados en Occidente (*ibíd.*).

¹⁴⁵ ONU, Consejo de Seguridad, Resolución S/RES/748 del 31.03.1992; Resolución S/RES/883 del 11.11.1993; Consejo de la Unión Europea, Reglamento 3275/93 del 29.11.1993.

reforzaron las relaciones diplomáticas otra vez (cf. Wulf 2013: 241). Tras el levantamiento de las sanciones de la ONU y la UE en 2003 y 2004 (cf. Martínez 2005), a principios de 2005, Francia empezó a establecer una alianza estratégica con Libia y entabló negociaciones sobre la venta de armas para modernizar la fuerza aérea del país (cf. Wulf 2013: 241). En los años siguientes, los dos Estados negociaron sobre contratos por un valor de miles de millones de euro, con Francia vendiendo principalmente sus tecnologías y Libia suministrando petróleo (*ibíd.*). No obstante, las promesas de Libia con respecto a la compra de equipo militar a menudo no se cumplieron, lo que conllevó el descontento de Francia (cf. Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 398). Frente a la inclusión en la “Unión por el Mediterráneo”¹⁴⁶, Gadafi continuamente rechazó la posibilidad al haber argumentado que significara un retorno al imperialismo (cf. Waterfield 2008). Igualmente resultó difícil la cooperación con Libia en relación con la contención de la inmigración ilegal a Europa, lo que sobre todo para Francia y Gran Bretaña era de interés fundamental (cf. Wulf 2013: 244). También entre Libia y los Estados Unidos las relaciones se mejoraron de forma continua después del fin de milenio; al fin y al cabo, Gadafi estaba consciente de que solamente podía mantener su autoridad a través de la cooperación internacional (cf. Gebauer 2012). Después de los ataques terroristas contra los EE.UU. el 9 de septiembre de 2001, Gadafi fue uno de los primeros jefes de Estado que condenó los atentados y aseguró su apoyo en la “guerra contra el terror”; particularmente porque también para Libia los terroristas de carácter fundamentalista presentaban una amenaza grave. Tras haber renegado del apoyo al terrorismo internacional (aunque sea por motivos oportunistas), y tras haber renunciado a los planes de un programa de armas (nucleares) en 2003, tres años más tarde, el país finalmente fue retirado de la lista de los Estados canallas (*ibíd.*).

Con respecto a los Estados Unidos, cabe realzar que cooperaron intensamente con Libia y sus servicios secretos, con el fin de luchar contra el terrorismo internacional. Según informes detallados de la ONG *Human Rights Watch*, existió una cooperación estrecha entre la *Central Intelligence Agency* (CIA) estadounidense, la *Military Intelligence, Section 6* (MI6) británica y el régimen de Gadafi: en contrapartida por informaciones secretas, los servicios de inteligencia repetidas veces extraditaron a oponentes de la dictadura libia. La tortura de los prisioneros, entre otras en la prisión temida Abu Salim (véase parte I, cap. 3.1.1), fue tolerada conscientemente por Occidente (*ibíd.*). Al mismo tiempo, también se intensificó la colaboración en el ámbito militar, y tras el levantamiento del embargo comercial por parte de los EE.UU., las compañías petroleras

¹⁴⁶ La Unión por el Mediterráneo es una organización intergubernamental reuniendo a un total de 43 países: 28 Estados miembros de la UE y 15 países del sur y del este del Mediterráneo. Fundada en 2008, durante la Cumbre de París por el Mediterráneo, la UPM tiene como objetivo principal mejorar la integración regional mediterránea, tanto norte-sur como sur-sur, apoyar el desarrollo socio-económico de los Estados miembros y garantizar la estabilidad regional. En este contexto, Francia se convirtió en el precursor de una política controlada del Mediterráneo, sobre todo con el fin de mantener su acceso a las materias primas y los mercados, así como para controlar los flujos de refugiados desde África (cf. CROME 2011b: 7).

estadounidenses obtuvieron numerosas concesiones para la extracción de petróleo (Sensini 2012: 66). Por los mismos motivos, también el Reino Unido hizo esfuerzos intensos para mejorar las relaciones con Libia, y en 1999 envió a un embajador al país. En 2004 y 2007, el primer ministro británico de aquel entonces, Tony Blair, visitó Libia con la intención de cerrar contratos lucrativos, tanto en el ámbito petrolero como armamentista (*cf.* Wulf 2013: 248-249). Asimismo, acordó una cooperación estrecha en el ámbito de la política migratoria, así como en la lucha contra el terrorismo, el comercio general de mercancías, y en el desarrollo de estructuras de un Estado de derecho (Blitz 2008: 107).

Pero con respecto a la extracción de petróleo y gas natural, el Reino Unido, a diferencia de muchos otros países, casi no obtuvo concesiones de Libia: la compañía de energía *British Petroleum* (BP) ya no disponía de ninguna licencia de explotación desde la década de los '80. Pero esta situación cambió durante la visita de Blair en 2007, con BP recibiendo una concesión sobre más de USD 900 millones¹⁴⁷. Sin embargo, es de suponer que la concesión sólo se hizo cumplir tras intentos de chantaje frente a Gadafi mediante un acuerdo bilateral sobre el intercambio de prisioneros, lo que también incluyó la extradición de Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi, un terrorista libio que supuestamente fue uno de los responsables principales del bombardeo del avión de pasajeros estadounidense PanAm 103. El único condenado tras el atentado de Lockerbie en 1988 fue excarcelado por el gobierno escocés en 2009, oficialmente por motivos humanitarios (padecía un cáncer terminal de próstata y su expectativa de vida en aquel entonces apenas se extendió a unos meses)¹⁴⁸. No obstante, se supone que los motivos verdaderos se debían más bien a intereses geoestratégicos, políticos y económicos.

4.1.1 El papel de Francia

Al inicio, y al menos oficialmente, Francia estuvo en contra de la intervención militar en Libia¹⁴⁹. Pero el reconocimiento del NTC como representante legítimo del Estado ya el 10 de marzo, muestra que consideraba claramente un futuro de Libia sin Gadafi. Cuando la LEA exigió una zona de exclusión aérea el 12 de marzo, para Francia había eliminado el último obstáculo hacia una intervención militar (*cf.* Eriksson 2015: 231). Entretanto, fuerzas armadas libias habían reconquistado numerosas de las ciudades ocupadas por los rebeldes, y el 17 de marzo avanzaron hacia Bengasi. Cabe destacar que la toma de esta ciudad rebelde por las tropas de Gadafi habría conllevado consecuencias tan extensas, tanto para el desarrollo de la guerra como particularmente

¹⁴⁷ The Telegraph, "Blair, Gaddafi and the BP oil deal", 30.07.2007.

¹⁴⁸ El Mundo, "El terrorista de Lockerbie, entre abrazos del hijo de Gadafi y confeti", 21.08.2009.

¹⁴⁹ Neue Zürcher Zeitung, "Ghadhafis Truppen im Gegenangriff", 01.03.2011.

para Francia, que desde el punto de vista francés y su objetivo de “mantener su poder en la región mediterránea” (Sarkozy 2008), no habrían sido tolerables (cf. Cremer 2013: 137). En consecuencia, Francia asumió un papel de líder con el fin oficial de “proteger a la población civil” (cf. Blázquez 2015). Por ende, no quería esperar a la publicación de informes por parte de las comisiones investigadoras en Libia (véase parte II, cap. 3.1.2), sino insistió en el otorgamiento de un mandato legitimador lo más rápido posible por el Consejo de Seguridad.

En este contexto, cabe citar la toma de postura de algunos de los diplomados presentes en la reunión no. 6498 del Consejo de Seguridad acerca de la situación en Libia el 17 de marzo de 2011 (S/PV.6498): por un lado, Francia vehementemente aprobó la intervención militar al recurrir una vez más al tenor no muy específico “to take all measures necessary (...) to protect civilians” y dejó claro que “France solemnly calls on all members of the Security Council to support this initiative and to adopt the draft resolution”. Por otro lado, difieren claramente los comentarios de los Estados que se abstuvieron en la votación en favor o en contra de una intervención militar, precisamente por falta de informes independientes sobre la crítica situación en Libia. Entre ellos conviene mencionar al diplomado ruso, Vitaly Churkin, que justificó su abstención como sigue:

The Russian Federation abstained in the voting on the draft resolution on Libya on the basis of a number of considerations of principle. Our position regarding the clear unacceptability of the use of force against the civilian population of Libya remains unchanged. Any attacks against civilians and other violations of international humanitarian law and human rights must immediately and unconditionally cease. [...] Unfortunately, work on that document was not in keeping with standard practice in the Security Council. In essence, a whole range of questions raised by Russia and other members of the Council remained unanswered. Those questions were concrete and legitimate and touched on how the no-fly zone would be enforced, what the rules of engagement would be and what limits on the use of force there would be. [...] However, the passion of some Council members for methods involving force prevailed. This is most unfortunate and regrettable. (ibíd. 8)

De forma parecida, el diplomado chino, Li Baodong, explicó su abstención:

[...] In the Security Council's consultations on resolution 1973 (2011), we and other Council members asked specific questions. However, regrettably, many of those questions failed to be clarified or answered. China has serious difficulty with parts of the resolution. [...]. (ibíd. 10)

Pero con un total de diez votos en favor de la misión, cero en contra y cinco abstenciones, al final fue aprobada la Resolución 1973 (2011). Sólo dos días después, el 19 de marzo, Francia, con el apoyo del Reino Unido y los EE.UU., lanzó ofensivas aéreas contra las tropas libias, impidiendo de esta forma su avance hacia Bengasi (cf. Henken 2011).

Desde finales de la Guerra Fría y la retirada militar de los EE.UU. de Europa, Francia firmemente ha aspirado a convertir la UE en un actor potente y confiable en el ámbito de la política de seguridad; no obstante, carece de capacidades militares suficientes, así como de una voluntad política común (cf. Cremer 2013: 137-140). En consecuencia, Francia abandonó en parte sus

planes de una Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD) completamente independiente, y ha centrado sus esfuerzos en la OTAN otra vez. De esta manera, Francia ha logrado reforzar su potencia militar y política dentro de la Alianza y desarrollar nuevas estrategias para una mejor cooperación con respecto a la PCSD. Mientras que para la intervención militar en Libia en gran medida se recurría a los recursos estadounidenses dentro de la OTAN, Francia podía influir significativamente en la orientación estratégica sobre todo al principio de la operación¹⁵⁰. Además, la intervención no sólo ha tenido un impacto considerable en cuanto a la posición de poder de Francia dentro de Europa, sino también a nivel internacional. La “revolución árabe” hallaba a Europa desprevenida. Pero el compromiso de Francia ayudó a recuperar el control en la región y seguir con la política hegemonal de Occidente en Oriente Medio (cf. Crome 2011b: 27). Si Gadafi hubiera vencido, no sólo habría reforzado su poder, sino también habría revelado una vez más las debilidades de Europa de garantizar seguridad y estabilidad en su propio entorno geográfico (*ibíd.*). Sobre todo frente a Alemania, el “gran peso” económico en Europa con poder político correspondiente (cf. Cremer 2013: 139), Francia demostró que debido a las deficiencias europeas en una política exterior y de seguridad común, sin sus esfuerzos particulares el viejo continente no puede entenderse como gran potencia en la escena mundial (*ibíd.*).

En resumen, la intervención ofensiva no sólo ha satisfecho los intereses franceses, sino también proporcionó *additional means*: los esfuerzos de Gadafi hacia el poder hegemonal se convirtieron en historia, y por tanto ya no presentaron ninguna amenaza para los intereses de Francia (Crome 2011b: 81-84). Sus capacidades militares han demostrado que con Francia se trata de una potencia ofensiva que se debe tomar en serio. Consecuentemente, para Europa esto significa que es muy probable que sobre todo con respecto al desarrollo de una política exterior y de seguridad común, el poder de Francia se aumente. Aunque no todos los aspectos pertinentes puedan analizarse profundamente en el marco de la presente tesis, cabe señalar que a largo plazo la ofensiva militar le facilitará ganancias económicas: como informó el periódico *Liberation* en 2012, Francia y el NTC llegaron a un acuerdo según el cual Francia debía recibir el 35% del petróleo libio, a causa de su apoyo al gobierno ínterin¹⁵¹. De este modo, la intervención ha conllevado diversos efectos secundarios a la vez, a los que el gobierno de Sarkozy había aspirado.

¹⁵⁰ WATT, N.; HOPKINS, N.; TRAYNOR, I., “Nato to take control in Libya after US, UK and France reach agreement”, 22.03.2011.

¹⁵¹ DE FILIPPIS, V., “Pétrole: L'accord secret entre le CNT et la France”, 01.09.2011.

4.1.2 El papel del Reino Unido

Al igual que Francia, también el Reino Unido apoyó firmemente la realización de la intervención, aunque de forma menos intensa. Sin embargo, hay muchos indicios de que la intromisión era de gran utilidad para los intereses de la política energética de Londres (cf. Gibbs: 2011). De acuerdo con el *Energy Mix Fact Sheet* publicado por la Comisión Europea en 2007, en el Reino Unido la demanda de petróleo y gas fue satisfecha hasta un 73% en el año 2004¹⁵², con una demanda creciente de gas. Pero en este contexto, hay que mencionar también que la producción británica de gas y petróleo ya alcanzó su máximo en 1999, y que ha bajado desde entonces debido a sus reservas descendentes en el Mar del Norte¹⁵³ (cf. Wicks 2009: 11). En consecuencia, la dependencia de las importaciones de otros países ha aumentado cada vez más; pero generalmente, las condiciones políticas prevalecientes en los países proveedores no se pueden considerar ni liberales ni democráticas, lo que para el Reino Unido evidentemente conlleva riesgos (*ibíd.* 60, 84-85). No obstante, la seguridad energética es de interés vital, si bien se ve amenazada por intentos de extorsión estatales, guerras o “grandes agitaciones políticas” (cf. Cabinet Office 2010: 27):

Our aim is to deter direct threats, including through our membership of NATO and, ultimately, our independent nuclear deterrent. But that does not mean that we would not have to become engaged in an international military crisis overseas if we judged that it constituted a threat to our national interests. (ibíd. 30).

Consecuentemente, es lógico que Gran Bretaña no excluye el uso de la fuerza militar para proteger sus intereses estratégicos en ultramar. Los derechos de prospección petrolífera obtenidos en 2007 (y desde mediados de 2010 aprovechados por BP), presentan, según los datos de BP, una de las mayores concesiones otorgadas por Gadafi a lo largo de todo su régimen (cf. McElroy e Irvine 2011), por lo que el Reino Unido aspiraba a una buena cooperación y más oportunidades de prospección. Pero el estallido repentino del conflicto en Libia y el pronóstico del hijo de Gadafi, Saif al-Islam, de que en el marco de una guerra civil, el país se enfrentaría a un caos total, implicando también la pérdida de la seguridad, la escisión estructural por grupos islamistas incontrolados y el colapso de la economía, dado que el petróleo “cesaría de fluir”¹⁵⁴, conllevó una incertidumbre extrema en Londres respecto a su seguridad energética. La importancia de los suministros continuos de petróleo y gas no sólo se pueden observar por las pérdidas financieras enormes en el caso de una suspensión de suministros (cf. Wicks 2009: 8-9), sino también por la influencia del Reino Unido

¹⁵² Comisión Europea, “United Kingdom – Energy Mix Fact Sheet”, 2007.

¹⁵³ WILLIAMS, S., “North Sea Oil Production Continues to Slide”, 23.02.2015.

¹⁵⁴ FETOURI, Mustafa, “Five years on, predictions by Gadhafi’s son come true”, 28.02.2016.

sobre la guerra civil en Nigeria a finales de los años '60: en el marco del conflicto de Biafra entre 1967 y 1970, Gran Bretaña insistió firmemente en el establecimiento de *One Nigeria*. Oficialmente, el interés principal de Londres era la prevención de la escisión del país por conflictos étnicos entre las diferentes tribus nigerianas, pero el motivo verdadero es más complejo. Se supone que los intereses petroleros británicos jugaban un papel mucho más importante en relación con su actitud frente a la guerra: Gran Bretaña quería proteger sus inversiones de *Shell* y *BP* que había efectuado en Nigeria. Asimismo, era de importancia fundamental mitigar el impacto conllevado por las carencias en el mercado petrolero doméstico, que se notaban gravemente debido a la Guerra de los Seis Días en junio de 1967 de Israel contra Egipto, Jordania y Siria. Teniendo en cuenta este contexto, el apoyo británico a una solución de “un Nigeria” constituyó la manera más prometedora para seguir asegurando el control sobre la producción del petróleo nigeriano y garantizar un suministro estable (*cf.* Uche 2008: 111). Debido a las nuevas amenazas que han surgido para el Reino Unido desde finales de la Guerra Fría, las estrategias ofensivas para proteger los intereses propios son cada vez más importantes (*cf.* Wicks 2009: 15). Por lo tanto, en 2010 acordó una cooperación con Francia con el fin de unir las capacidades militares de ambos países (*cf.* Prime Minister's Office 2010). Por consiguiente, la intervención militar en Libia dirigida por Francia ofreció al Reino Unido sobre todo la posibilidad de obtener *additional means* económicos (*cf.* Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 390).

4.1.3 El papel de los Estados Unidos

Según Waltz (2009: 33), desde finales de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, ya no hay ningún país en la escena global que representa una amenaza significativa para la seguridad de los EE.UU. Siendo una “superpotencia”, puede influir debidamente en el sistema internacional y, por tanto, también tiene el máximo interés en preservarlo en su forma actual. En este contexto, el enfoque geoestratégico de los EE.UU. se ha trasladado a Asia (*cf.* Piris 2012). África del Norte generalmente carece de importancia estratégica, lo que también se refleja en los intereses limitados de los EE.UU. en la región, principalmente vinculados con su agenda de Oriente Medio e Israel (*cf.* Chomsky 2010). Aunque era posible cooperar estrechamente con Libia en la lucha contra el terrorismo internacional, la actitud extremadamente hostil de Gadafi frente a Israel enturbiaron las relaciones de manera considerable (*cf.* Ruf 2013: 164).

Al contrario, una visión del mundo más secular y liberal democrático, tal como el NTC anunciaba y como los medios de comunicación hacían parecer al principio, encaja mejor con la ideología de

los EE.UU.¹⁵⁵. Esto también se refleja, entre otros, en su Estrategia de Seguridad Nacional en la que exponen claramente que la promoción de la democracia y de los derechos humanos en otros países es de interés fundamental:

The United States supports the expansion of democracy and human rights abroad because governments that respect these values are more just, peaceful, and legitimate. We also do so because their success abroad fosters an environment that supports America's national interests. (Casa Blanca 2010: 37)

Pero en este contexto, cabe realzar que el conflicto bélico en Libia puso en peligro las revoluciones democráticas en los países árabes, lo que consecuentemente también conllevó peligros para los intereses de seguridad nacional de los EE.UU.:

(...) the Libyan government's actions posed a significant threat to regional peace and security. (...) thereby destabilizing the peace and security of the region. (...) the growing instability in Libya could ignite wider instability in the Middle East, with dangerous consequences to the national security interests of the United States. (Casa Blanca 2011: 3)

A lo largo de los últimos años, los EE.UU. continuamente han estado intentando convertir la OTAN en una *values-based organization*, para poder imponer mejor los propios valores a nivel mundial, junto con el apoyo de sus aliados,. En 2006, George W. Bush declaró:

NATO [is] a values-based organization that is capable of dealing with the true threats of the 21st century. (...) The real challenge of the future is to help people of moderation and young democracies succeed in the face of threats and attacks by radicals and extremists who do not share our ideology, [and who] have kind of a dark vision of the world. (IIP Digital, 27.10.2006)

También Jaap de Hoop Scheffer, el Secretario General de la OTAN de 2004 a 2009, confirmó: “NATO is delivering security in the 21st century. And that means defending values not only in Europe, but far away from NATO's traditional area” (*ibíd.*)

Con este conocimiento fundamental también es evidente, por qué ni Francia, ni Gran Bretaña obtuvieron el papel de liderazgo en la intervención militar en Libia, sino la OTAN: de lo contrario, habría significado una pérdida de poder de los EE.UU. a nivel internacional.

Debido a diversos intereses comunes, es de importancia clave para los Estados Unidos tener aliados europeos fuertes (Casa Blanca 2010: 41-42); pero exclusivamente bajo la condición de que la autonomía estadounidense no esté amenazada, y que se mantenga cierto control sobre los aliados. Desde un punto de vista más universal, cabe señalar que este patrón también se aplica a las potencias occidentales frente a Oriente Medio: la intervención en Libia sirvió como oportunidad ideal para recuperar la dominancia histórica que Europa tenía sobre el mundo árabe desde hace siglos (*cf.* Wagner 2013: 123). No sólo es una cuestión geopolítica, sino también

¹⁵⁵ SAJOO, Amyn B., “A win for ‘secularists’ in Libya? It’s not what you think”, 19.07.2012.

mental: si ya está perdiendo cada vez más la sensación de superioridad frente a China e India, por lo menos quiere seguir mantenerla “delante de la propia puerta” (*ibíd.*). De todas formas, en el caso de Libia, la intervención fue dirigida por la OTAN y de esta forma realizada con gran influencia estadounidense. No obstante, hay que estar consciente de que los EE.UU. se entendieron como patrocinadores de la operación, dado que en su mayoría las acciones militares fueron emprendidas por Francia y el Reino Unido (Casa Blanca 2011: 9). De este modo, los Estados Unidos pudieron participar de manera relativamente “rentable”, y dejar la imposición de los valores comunes en manos de sus aliados. Además, la participación en la intervención no amenazaba la propia posición de poder en el sistema internacional, dado que no tenían que facilitar los recursos que habían puestos a disposición para las misiones militares en Irak y Afganistán (*ibíd.* 21).

Asimismo, Francia y Gran Bretaña, los países militarmente más poderosos durante la intervención, indirectamente proporcionaron a los EE.UU. medios militares adicionales. Ya por mucho tiempo los EE.UU. habían exigido un *burden sharing* en el marco del denominado *Transatlantic New Deal*¹⁵⁶:

A creative European burdensharing initiative can renew the transatlantic relationship. This would help to ensure that the United States remains fully engaged as an internationalist power. The biggest challenge for the EU and its member states is not to critique or point out what the United States could do differently, but to focus on facing up to their own responsibilities. Europe could not compete with the US as a military superpower (...). But it can play a leadership role in other aspects of international security (including some aspects of military operations) where it is more heavily engaged (...). (Chalmers 2001: 6-7)

Tal como este enunciado señala, en resumen, se espera una asunción de responsabilidad militar mayor por parte de los europeos para proteger los intereses comunes, lo que a cambio les proporciona el derecho de desempeñar un papel más destacado y sustancial en la toma de decisiones globales. Cabe realzar que al mismo tiempo se ha fortalecido el papel de la OTAN en Europa y de este modo también de los EE.UU., lo que consecuentemente conlleva *additional means* políticos y un papel indispensable para sus aliados europeos (Casa Blanca 2011: 13).

Con el fin de complementar el análisis sobre el papel de los Estados decisivamente involucrados en la intervención en Libia, a continuación también serán examinados los motivos de dos potencias defensivas, China y Rusia, que pese a su estado como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad no hicieron uso de su derecho de veto, sino se abstuvieron del voto, lo que consecuentemente allanó el camino para la intervención militar en Libia.

¹⁵⁶ CHALMERS, Malcolm, “A Transatlantic New Deal. What Europe should pay to promote US engagement”, 2001.

4.2 Las potencias defensivas de la intervención militar

Según la estadística de SIPRI (2016) sobre los cincuenta importadores más importantes de armas entre 1969 y 1989, Libia se encontró en el quinto lugar a nivel mundial¹⁵⁷. Sobre todo para Rusia las ventas resultaban muy beneficiosas, con un valor aproximado de las exportaciones de USD 23,5 mil millones (*ibíd.*). Mientras que después de la Guerra Fría Rusia se retiraba de la región mediterránea como consecuencia de sus propios problemas internos, en los últimos años ha comenzado un acercamiento intensificado a Argelia, Libia y Siria, sobre todo en el ámbito militar (*cf.* Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 392-393). Aunque no sea muy evidente a primera vista, el mediterráneo tiene un significado estratégico muy importante para Rusia. Desde principios de 2000, el comercio entre Libia y Rusia ha abarcado sobre todo armas, petróleo y gas (*cf.* Wulf 2013: 242). No obstante, y pese al fuerte compromiso de Rusia, las relaciones políticas y económicas con Libia se mantuvieron en un nivel muy bajo (*cf.* Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 399)¹⁵⁸, y numerosos proyectos a menudo no han sido realizados tras la fase de planificación. Generalmente, para la política exterior rusa en la región, Libia meramente se encontraba en tercer lugar tras Argelia y Siria¹⁵⁹.

Con China, la situación es similar, dado que el enfoque geoestratégico de Pekín está en Asia; no obstante, las relaciones económicas son de importancia esencial, sobre todo las inversiones en proyectos de infraestructura en países en desarrollo (*cf.* Kan 2012). Hasta principios de 2002, ningún presidente chino jamás había viajado a Libia. Esto cambió con la visita de Jiang Zemin y su objetivo de acordar contratos económicos lucrativos con Gadafi. El mismo año, la *Chinese National Petroleum Corporation* (CNPC) anunció un contrato de USD 230 millones para construir un gas- y oleoducto en Libia con una longitud de 500 kilómetros (*cf.* Ziegler 2007 :187). En los años siguientes, las relaciones y negocios se han reforzado continuamente. China recibió principalmente petróleo de Libia; en 2010, por ejemplo, consumió el 11% de todas las exportaciones petrolíferas libias. Además, ha tenido intereses significantes en el ámbito industrial, desde proyectos ferroviarios y la venta de automóviles, hasta inversiones en el sector de telecomunicación. Antes del estallido de la guerra, China tenía contratos importantes de un valor de aproximadamente USD 20 mil millones, y unos 36.000 ciudadanos chinos empleados en Libia (*cf.* Sotloff 2012; Kan 2012). Pero durante los levantamientos en 2011, fueron atacados y saqueados varios empresas y empleados chinos, por lo que China ordenó evacuaciones a gran escala, y se enfrentó a graves pérdidas económicas (*ibíd.*). Cabe resumir que comparado con los Estados que reconocieron al gobierno ínterin prácticamente de inmediato, con su decisión de no

¹⁵⁷ En comparación, en el mismo periodo, India ocupaba el primer lugar, la Unión Soviética el 12º, Alemania Occidental el 13º, España el 17º, los EE.UU. el 22º, el Reino Unido el 30º, y Francia sólo se encontraba en el 63º lugar (SIPRI, Arms Transfers Database, 2016).

¹⁵⁸ Según SIPRI, entre 2000 y 2010, Libia adquirió armas por valor de USD 53 mil millones.

¹⁵⁹ KLEIN, Margarete, "Russia and the Arab Spring", 2012, p. 2.

haber interpuesto su veto a la intervención militar y al no haber apoyado a los rebeldes y el NTC, el papel económico de China en el país norteafricano se ve afectado significativamente, y desde entonces, las relaciones políticas se han empeorado de manera considerable.

4.2.1 El papel de Rusia

Rusia, por lo menos formalmente, sostiene el principio de la no intromisión en asuntos nacionales de otros Estados; no obstante, durante los levantamientos en Libia asumió una postura defensiva, y no intentó torpedear los esfuerzos de los Estados occidentales. Entre Rusia y algunos países europeos evidentemente existen ciertas rivalidades en cuanto a la explotación de las reservas de petróleo y gas de Libia, así como en términos de la venta de armas. Pero al mismo tiempo también hay relaciones cooperativas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo (cf. Lutterbeck y Engelbrecht 2009: 387). La solicitud de Libia en 2008 de una base naval rusa en Bengasi por fines de seguridad nacional y como medio de *balancing* frente a las amenazas occidentales, no han llevado a la toma de medidas concretas por parte de Rusia (*ibíd.* 394). Generalmente, la política exterior rusa se ha transformado de una actitud de confrontación durante la Guerra Fría a una política de interés nacional pragmática que considera tener relaciones estables con Europa, los EE.UU. y Asia (cf. Schulze 2011). Una de las razones por las que Rusia revela reservas en las relaciones internacionales también se debe al hecho de que hoy en día dispone de capacidades mucho menores para poder influir significativamente en la distribución del poder a nivel internacional: consecuentemente, a Rusia se puede clasificar como un Estado con interés de mantener su *statu quo* en un “sistema de multipolaridad equilibrado” (cf. Hyde-Price 2006: 230). Pero cabe destacar que, de acuerdo con el neorrealismo, los Estados de *statu quo* siguen estrategias de *balancing* por su propia seguridad y para preservar el orden establecido. Después del fin de la Guerra Fría, y debido a la situación geopolítica alterada, analistas de Moscú volvieron a recurrir a una lema que se atribuye al zar Alejandro III: “Rusia sólo tiene dos aliados, su ejército y su flota” (cf. Crome 2011a: 40). Dicho con otras palabras, en su política internacional, Rusia exclusivamente puede confiar en sus propias fuerzas; todas las alianzas y relaciones únicamente surten efecto, si ciertas constelaciones de intereses comunes de los Estados aliados lo permiten. La Unión Soviética socialista no sólo había perdido el conflicto este-oeste como sistema político, sino también había agotado las fuerzas y los recursos de Rusia, que en su forma de la URSS entre 1945 y 1989 como “segunda superpotencia” había experimentado la cima del poder en toda su historia (*ibíd.*). La desintegración de la Unión Soviética significó una debilitación tan enorme para Rusia que continúa causando efecto hasta hoy día.

Mientras que China como potencia emergente considera fortalecer su influencia al participar en los desarrollos de la economía global y evitar confrontaciones militares directas con los EE.UU., Rusia se encuentra en la situación de una superpotencia descendente que todavía no ha terminado por completo los procesos de reorganización estatal y su adaptación a las condiciones alteradas. Consecuentemente, en la política mundial a nivel de la política imperialista, tampoco dispone de las capacidades para poder enfrentarse a los EE.UU. en igualdad de condiciones (*ibíd.*).

Pero la línea política de reservas frente a los EE.UU., que se atribuye principalmente al ex presidente ruso, Dimitri Medvédev, también se debe a consideraciones económicas: después de la caída de Gadafi, Rusia ha aspirado a continuar con las buenas relaciones económicas que había establecido con Libia a lo largo de los años: en 2011, la empresa rusa de gas natural, *Gazprom*, contó con una participación en el mercado de gas libia de alrededor de 300 mil millones de metros cúbicos, y en campos petrolíferos de 110 millones de toneladas; la compañía ferroviaria rusa RZD debía construir una línea de ferrocarril de Sirte a Bengasi con finalización en 2013 y el negocio ascendió a un volumen de USD 2,2 mil millones (aunque debido al estallido de la guerra, las construcciones se suspendieron). Asimismo, la empresa militar de defensa, *Rosoboronexport*, cerró un trato con Libia en 2010 sobre el suministro de armas con un valor de USD 1,8 mil millones y contó con tratos adicionales de USD 4 mil millones (*ibíd.*; Schmidt 2011: 4-5).

Pero cabe realzar que la actitud generalmente hostil de los países de Oriente Medio frente a Gadafi, entre ellos también Arabia Saudita en función de un mercado importante de armas (*cf.* Ruf 2013: 171), no se podía ignorar por Rusia. Asimismo, las relaciones estables con Francia, el defensor principal de la intervención, así como con los Estados Unidos habrán tenido su efecto en la toma de decisiones de Moscú (*ibíd.*). Aunque a Rusia seguramente le hubiera gustado tomar decisiones de forma autónoma como en la época soviética, sabe que debido a sus capacidades limitadas requiere alianzas estratégicas y económicas (*ibíd.*). Por otra parte, la actitud de Rusia frente a la prohibición general de la intervención se relativizaba, lo que también se debe a sus intereses. Por lo tanto, desde el año 2000 bloquea cada vez menos intervenciones humanitarias (*cf.* Schmidt 2011: 3-4); recurrir a las fuerzas armadas para imponer intereses económicos y políticos se considera justificado, como también revela la intervención rusa en Ucrania y la anexión de la península Crimea en 2014¹⁶⁰. Ginsburg (2013) explica la abstención de Rusia en el caso de Libia como sigue:

The decision was influenced by the fact that Russia valued its relations with the major European powers (such as France, who supported the resolution) over its limited interests in Libya and did not want to be seen as Qaddafi's defender.

¹⁶⁰ AHMED, S.; BOTELHO, G.; MCLAUGHLIN, E. C., "20 claves para entender los intereses de Rusia en Ucrania", 04.03.2014.

De este modo, la postura ponderadora de Rusia en este conflicto muestra un proceso de determinación claramente racional, en el que tenía que desistir de sus intereses económicos y políticos en Libia a favor de intereses vinculados con los países árabes y europeos (*cf.* Schmidt 2011: 6). La abstención en el Consejo de Seguridad y la estrategia del *bandwagoning*, por ende no puede atribuirse principalmente al mero hecho de querer ganar *additional means*, sino más bien al objetivo de no perder instrumentos de poder en el ámbito político y económico internacional (*cf.* Ginsburg 2013).

4.2.2 El papel de China

China generalmente sigue el principio de la no intervención aun más que Rusia y en lo que concierne a África, principalmente tiene intereses económicos (*cf.* Pigato y Tang 2015: 1-2). Por tanto, al igual que muchos otros países, al principio China estaba en contra de una intervención en Libia y también se manifestaba con gran reserva frente al reconocimiento del gobierno de los rebeldes que había recibido el apoyo y reconocimiento de numerosas potencias occidentales en un muy breve periodo de tiempo (*cf.* Sotloff 2012). Pero cabe destacar que la política exterior de la República Popular tiene un carácter multilateral considerable, por lo que considera a las Naciones Unidas, y en especial al Consejo de Seguridad, como autoridades importantes para poder imponer sus propios intereses (Deng 2011: 89-90). Generalmente, China no tiene intenciones hegemónicas evidentes; más bien aspira a una satisfacción pragmática de sus intereses económicos (*cf.* Sotloff 2012). No obstante, Beijing ha reconocido que resulta más provechoso, si en los países de interés prevalece cierto nivel de estabilidad y eficacia política. En contraste con la estrategia de Occidente de influir mediante el *Good Governance* marcado significativamente por valores (p.ej. transparencia, participación y el Estado de derecho con el poder del Estado subordinado al orden jurídico vigente), China sigue el concepto del *Effective Governance* orientado a objetivos concretos, por lo que da mayor importancia a buenas condiciones de inversión (*cf.* Zhang 2011: 176). En consecuencia, los levantamientos violentos en Libia desbarataron los objetivos chinos de estabilidad y seguridad (*cf.* Kan 2012), de modo que, pese al apoyo a Gadafi durante varias décadas, no se opuso a la intervención, dado que habría estorbado los intereses económicos predominantes de la República Popular (*cf.* Hook y Dyer 2011). Por otra parte, hay que subrayar que para China las buenas relaciones con los países árabes son de gran importancia; pero ¿qué relación existe entre este aspecto y la abstención en el proceso de votación en el Consejo de Seguridad? Posteriormente, Beijing justificó su actitud al declarar: China “had serious difficulty with parts of resolution 1973 (2011)” (UN, “16. The situation in Libya”, 2011, p. 84). Sin embargo, al parecer, estas dificultades no habían resultado de la intención de impedir una

intervención militar en todo caso. De hecho, esto era la postura de la LEA y de la UA en cuanto a la cuestión sobre cómo se debía resolver el problema libio. Originalmente, antes del 17 de marzo de 2011, la posición de China (al igual que la de Rusia) indicó que no era dispuesta a aprobar la resolución presentada por los EE.UU., Gran Bretaña y Francia. Pero la situación cambió cuando se hizo pública la decisión de la LEA; es decir, cuando Arabia Saudita y los demás regímenes reaccionarios feudales en la Liga Árabe habían impuesto la aprobación de una zona de exclusión aérea. Tras el comienzo de la operación militar por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, Beijing lamentó los acontecimientos, e instó a buscar una solución pacífica a la crisis libia a través del diálogo (*cf.* Crome 2011a: 38).

Generalmente, la resolución de los conflictos internacionales por medios pacíficos a través de negociaciones, presenta un principio fundamental de la política exterior de China en el siglo XXI; no obstante, en el caso de Libia, no siguió esta máxima. Posiblemente, las razones se deben a la estrategia de la República Popular que tiene un objetivo principal: el “gran renacimiento de la nación china” (Xi Jinping, 17.03.2016)¹⁶¹, es decir, convertirse en un país fuerte y próspero, y en “el primero entre iguales” (*cf.* Crome 2011a: 38). Pero la política internacional de China se orienta en las relaciones de poder existentes. Siendo una parte integrante del sistema capitalista mundial, China está interesada en su aprovechamiento óptimo y no en su superación. Las reformas de la economía y política en el orden mundial deben servir los intereses de China, favorecer su propio desarrollo y el potencial de desarrollo de los países del sur. En este sentido, China sigue una política pragmática y reservada con rasgos nacionalistas implicando la prevención de inminentes situaciones de conflicto junto con otras grandes potencias, sobre todo los EE.UU., mientras que no afecten la propia soberanía e integridad territorial de China. Una política de “la paz, el desarrollo y la cooperación” (*ibíd.* 39) debe promover una constelación beneficiosa para todos, en la que China, en favor de su propio desarrollo, pueda sacar provecho de los desarrollos en el mundo, y, por el contrario, el mundo pueda beneficiar del desarrollo de China. En el marco de la política exterior, cabe mencionar que China tradicionalmente se ha opuesto a las guerras llevadas a cabo por Washington. Por lo general, aboga por una resolución pacífica de los conflictos y por el derecho de los pueblos a elegir libremente su orden social y camino de desarrollo. En cuanto al trato de los problemas internacionales, la igualdad de todos los países y pueblos, especialmente de los países en desarrollo, siempre ha constituido una de las exigencias principales de Beijing (*cf.* Zhang 1997: 28). También es incuestionable que las políticas económicas y comerciales de China aspiran a que los países en desarrollo logren librarse del Banco Mundial y del Fondo Internacional Monetario, y que tengan la posibilidad de crear una base para su desarrollo independiente (*cf.* Crome 2011a: 39).

¹⁶¹ Terra, “Nuevo presidente chino quiere ‘un gran renacimiento de la nación’”, 17.03.2013.

Con respecto a su propia posición de poder, China sostiene poder mejorarla mediante una actitud defensiva en las instituciones multilaterales; pero esta actitud conlleva el disgusto de la política exterior de los Estados Unidos que revela un enfoque bilateral con énfasis en su seguridad nacional (*cf.* Choi 2012). En relación con la estrategia de China, cabe realzar que para el reforzamiento de un orden mundial multipolar, como aspirado por China, son inevitables ciertos compromisos dirigidos por intereses impuestos radicalmente a través de intervenciones a nivel nacional y violaciones de los derechos humanos; en este contexto también conviene señalar que China siempre se ha opuesto vehementemente a la idea de que los derechos humanos tengan precedencia sobre la soberanía estatal (*cf.* Lu 2001: 74).

Pero a principios de marzo de 2011, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea publicó un análisis según el cual, pese a su bloqueo en el Consejo de Seguridad, China apoyaba el concepto de una intervención militar a través de una “coalición de la voluntad”¹⁶². Teniendo en cuenta la condena universal de Gadafi (*cf.* Henken 2011) y la posibilidad de una intervención sin la legitimación de China, como ya sucedió en el caso de Kósovo en 1999¹⁶³, el margen de maniobra estaba limitado. Por lo tanto, hay que considerar que en el caso de China, al igual que con Rusia, existió el peligro real de perder recursos políticos y económicos. Además, aunque China fomente un orden mundial multipolar, no quisiera provocar una confrontación directa con los EE.UU., mientras que no estén afectados propios intereses fundamentales (*cf.* Deng 2011: 86-88). Consecuentemente, Beijing dio preferencia a la estrategia del *bandwagoning*, dado que conllevó una influencia positiva con respecto a la legitimidad internacional del gobierno chino.

¹⁶² Con la expresión “coalición de la voluntad” (*coalition of the willing*), desde los años ‘90 se denomina a grupos de diferentes naciones que actúan militarmente y de forma colectiva fuera de la jurisdicción de los mandatos de las Naciones Unidas. La expresión está relacionada particularmente a los Estados que apoyaron a la intervención militar de los EE.UU. en Irak en 2003 (Encyclopedia.com, URL: <http://www.encyclopedia.com/doc/1O214-coalitionofthewilling.html>, última vista: 08/2016).

¹⁶³ Véase ROBERTS, Adam, “NATO’s ‘Humanitarian War’ over Kosovo”, en *The International Institute for Strategic Studies, Survival*, 41 (3), 1999, pp. 102-123.

5. Reflexiones finales desde una perspectiva crítica

Un paso importante hacia la adopción de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la guerra que comenzó el 19 de marzo de 2011 con la denominada *Operation Odyssey Dawn* fue la exclusión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 1 de marzo. Como mencionado en el capítulo 3.1.1, el supuesto miembro de la CPI, Sayyid al-Shanuka, informó desde París sobre el descubrimiento de “fosas comunes”. Aunque la CPI no pudo confirmar estas informaciones y claramente declaró que al-Shanuka no era ningún miembro de la Corte, la afirmación sostenida sobre las fosas seguía difundiéndose. De igual manera, es decir, sin revisión de los datos y sin evidencia, el 17 de febrero *Al-Arabiya* había reportado sobre una masacre con 10.000 muertos. El diario alemán *Frankfurter Allgemeine Zeitung* escribió el 21 de febrero que de acuerdo con relatos de testigos oculares, durante una marcha fúnebre en Bengasi, opositores del gobierno habían sido tiroteados con ametralladoras. Según informes de la oposición, en un plazo de dos días fueron asesinadas como mínimo 200 personas; y la ONG de derechos humanos *Human Rights Watch* comunicó en Londres que sabía de como mínimo 230 muertes¹⁶⁴. Pero cabe mencionar que ni las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, ni algún gremio de la ONU podían comprobar las alegaciones en las que se fundamentó la autorización para iniciar la guerra (cf. Sommer 2013: 205). Destaca una grave deficiencia con respecto a la prueba verificable de las fuentes. ¿Quién fue la oposición? Y ¿de dónde HRW tuvo el número de muertes que publicó desde Londres?

El vicario apostólico en Trípoli, Giovanni Martelli, informó que pese a unos conflictos no se habían cometido masacres de civiles, y que por tanto no pudo confirmar las causas que presuntamente habían provocado la revolución que desencadenó la intervención militar (cf. Sensini 2012: 6). Consecuentemente, en reiteradas ocasiones exigió que la OTAN suspendiera sus bombardeos.

Ni el Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York, ni el Pentágono en Washington, ni las embajadas occidentales en Trípoli estaban en condiciones de confirmar las noticias aterradoras, tales como las supuestas atrocidades que el gobierno libio había cometido contra su población, incluyendo los ataques aéreos y “las supuestas violaciones con viagra que fueron inventadas” (cf. CIAR y AMC, 28.07.2011). También en el caso de esta guerra consta que todo comenzó con una mentira (cf. Meyssan 2011).

El Grupo de Contacto para Libia, fundado el 29 de marzo de 2011, fomentó el conflicto armado al haber reconocido el ‘Consejo de Transición’ como ‘legítimo representante de Libia’ pocos meses más tarde, el 15 de julio¹⁶⁵. El concepto del ‘Grupo de Contacto para Libia’, a la vista del

¹⁶⁴ RÖSSLER, Hans-Christian, “Das Regime kämpft ums Ganze”, 21.02.2011.

¹⁶⁵ Noticias Terra, “París: grupo de contacto reconocerá autoridad de consejo de transición libio”, 15.07.2011.

mismo neutral, *de facto* abarcó los países que apoyaban la guerra *contra* Libia. Al parecer, un papel fundamental en el desarrollo de los disturbios jugaba el Frente Nacional para la Salvación Libia (FNSL) que políticamente se convertiría en la institución más importante para la futura Libia¹⁶⁶.

Oficialmente, la guerra libia comenzó el 19 de marzo de 2011, es decir, dos días después de la aprobación de la Resolución 1973. Pero la preparación directa a la guerra aparentemente había empezado mucho antes. El 20 de marzo, el periódico británico *Sunday Mirror* informó: “Hundreds of British SAS soldiers have been operating with rebel groups inside Libya for three weeks”¹⁶⁷, y el filósofo italiano Domenico Losurdo escribió el 18 de junio que pequeños grupos de la CIA habían sido enviados a terreno libio por el gobierno estadounidense ya antes del comienzo de las hostilidades el 19 de marzo, con el fin de equipar los rebeldes y corromper las tropas de Gadafi (*cf.* Losurdo, 18.06.2011). Es de suponer que la OTAN apoyaba a los rebeldes con agentes secretos, unidades especiales, consejeros militares y suministros de armas (*cf.* Wagner 2013: 115; Mellenthin 2011), y esto ya mucho tiempo antes de la aprobación de la Resolución 1973. Asimismo, cabe destacar que algunos miembros del Consejo Nacional de Transición tenían contacto con la CIA y el servicio secreto británico M16 desde hacía muchos años (*ibíd.*). Consecuentemente, múltiples indicios apuntan a que la rebelión “espontánea” estaba planeada con mucha antelación, y que varias fuerzas extranjeras empeñaban un papel significativo al respecto.

5.1 El papel de los medios de comunicación

Si grupos de milicias y rebeldes solicitan apoyo militar de una potencia extranjera (como en el caso de Libia y Siria), es de suponer que tienen un interés fundamental en que la situación *in situ* aparezca dramática y devastadora lo máximo posible. Esto se puede lograr a través de una presentación exagerada o incluso inventada de los acontecimientos reales. Otra posibilidad es el empleo masivo de violencia y la acusación subsiguiente de determinados miembros del gobierno. En el caso de Libia, existen indicios de ambas estrategias: parece que era necesario “provocar” el

¹⁶⁶ El Frente Nacional para la Salvación Libia (FNSL) era uno de los movimientos opositores más importantes contra el régimen del coronel Gadafi. Se fundó el 7 de octubre de 1981 en Jartum, Sudán, en el marco de una conferencia de prensa. Su primer líder fue Mohamed Yousef al-Magariaf, embajador de Libia en la India. Su objetivo principal fue la implementación de amplias reformas liberales, tales como elecciones democráticas, libertad de prensa y la separación de poderes. En el marco de una campaña de oposición armada contra el gobierno de Gadafi, el Frente intentaba numerosas veces realizar golpes de Estado; pero nunca tenían éxito. Consecuentemente, el grupo abandonó las acciones armadas y promovió estrategias pacíficas para posibilitar reformas. Asimismo, se unió con otros seis grupos opositores para formar la denominada Conferencia Nacional de la Oposición Libia. Con la caída de Gadafi tras la guerra en 2011, la meta principal del FNSL fue cumplida, y el grupo fue disuelto y convertido en el Partido del Frente Nacional. En las primeras elecciones del Congreso General de la Nación (GNC) en 2012, ganó tres escaños, y el fundador del FNSL, al-Magariaf, fue elegido presidente del GNC y jefe de Estado efectivo de la República Libia (agosto de 2012 – mayo de 2013). Con respecto a sus relaciones a nivel internacional, de acuerdo con diferentes fuentes, desde los años ‘80, el FNSL había recibido apoyo financiero y logístico por parte de los EE.UU. a través de la CIA, y por Arabia Saudita. Fuente: METZ, Helen Chapin, 1987; Wikipedia, “Frente Nacional para la Salvación Libia”, URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_para_la_Salvaci%C3%B3n_Libia, última vista: 09/2016.

¹⁶⁷ Sunday Mirror, “Crack SAS troops hunt Gaddafi weapons inside Libya”, 20.03.2011.

“catástrofe humanitario” mediante palabras, con el fin de poder justificar una guerra fuera del propio territorio nacional en alianza con las supuestas víctimas. A continuación, se exponen algunos ejemplos que subrayan esta suposición: “Las fuerzas de Gadafi causan un genocidio entre los manifestantes” (El Mundo, 22.02.2011). “Los aviones militares están atacando ahora a los civiles, a los manifestantes en Trípoli. Los civiles están aterrorizados” (*ibíd.*). “Es una masacre” (*ibíd.*). “Gaddafi forces using civilians as human shields, says France” (The Guardian, 06.04.2011). “Gaddafi ordered mass rape as a weapon” (The Telegraph, 09.06.2011). *The Guardian* informó: “Murder and torture carried out by both sides of uprising against Libyan regime”. Y añade: “[the] opposition abuses, though on a smaller scale than those of the regime, are said to have been often ruthless and deadly”. Pero al mismo tiempo señala “no independent or credible investigations are known to have been carried out by the NTC [opposition National Transitional Council], nor effective measures taken to hold to account those responsible for these abuses” (12.09.2011).

Esta forma de información por los medios de comunicación occidentales se puede encontrar en casi cualquier dimensión: Gadafi es el único malhechor, y aún encima extraordinariamente cruel; ordena la matanza de civiles; bien es verdad que también los rebeldes cometen crímenes, pero al parecer, aunque se carece de pruebas, a menor escala que las tropas de Gadafi. No se informaba casi nada sobre los rebeldes que provocaron un levantamiento armado, y que en tal caso, usualmente cualquier gobierno afectado procede contra los disturbios, también al recurrir a la fuerza (militar). Un caso ejemplar es la situación en Turquía después del intento de golpe de Estado fracasado en 2016: como respuesta, el presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó una campaña represiva que no sólo ha conllevado un gran número de detenciones y suspensiones, sino que también ha desencadenado el empleo masivo de violencia, incluyendo homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos (*cf.* Amnistía Internacional, 18.07.2016). Pero excepto a unas críticas y medidas de presión política sobre los procedimientos nacionales del gobierno, es evidente que Turquía no tendrá que contar con consecuencias amenazantes para su integridad y soberanía estatal, debido al papel fundamental que el país desempeña geoestratégicamente como aliado de la UE, particularmente en la cuestión de la contención del flujo de refugiados hacia el oeste de Europa.

También con respecto a la información sobre las violaciones masivas como arma de guerra por parte de las fuerzas de Gadafi se revela una problemática considerable. Según *The Guardian*, *Reuters*, *The Daily Mail*, *The Sun*, El País¹⁶⁸ y otros medios de comunicación, Susan Rice, la ex

¹⁶⁸ The Guardian, “Gaddafi ‘supplies troops with Viagra to encourage mass rape’, claims diplomat”, 29.04.2011; Reuters, “U.S. envoy: Gaddafi troops raping, issued Viagra”, 29.04.2011; The Daily Mail, “Gaddafi soldiers given ‘Viagra’ and ordered to rape hundreds of women, says UN”,

Embajadora de los EE.UU. ante la ONU, acusó a Gadafi en abril de 2011 de haber distribuido medicamentos para la potencia entre sus soldados, con el fin de inducirles a atacar mujeres y cometer violaciones colectivas. Además, difundió que Gadafi recurriera a mercenarios extranjeros y helicópteros para luchar en contra de los manifestantes civiles. Lo que al principio sólo fue una alegación de los EE.UU., poco después se convirtió en realidad: con respecto a las violaciones, Luis Moreno Ocampo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de aquel entonces, hizo público que se dispusiera de informaciones indicando que “Gadafi mismo las autorizó para castigar a la población” (El País, 10.06.2011); además aseguró “tener pruebas” (*ibíd.*). Consecuentemente, se difundieron artículos que no dejaron lugar a dudas [resaltos por la autora de la presente tesis]: “The International Criminal Court’s chief prosecutor *has said* that Libyan leader Muammer Gaddafi *ordered mass rapes and bought containers of sex drugs* for troops to attack women” (The Telegraph, 09.06.2011). Una imagen de una supuesta víctima fue añadida. Siempre de nuevo es asombroso que los medios de comunicación retoman alegaciones particulares y las difunden de forma imprudente. Las mentiras difundidas por el gobierno estadounidense para justificar la guerra de Irak en 2003 aparentemente no nos han enseñado nada. En numerosas guerras, las violaciones colectivas se han convertido en un aspecto de estrategias bélicas brutales. Sin duda alguna, forman parte de los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, es importante tratar este tipo de alegaciones de manera muy cuidadosa. El 16 de mayo de 2011, Moreno Ocampo acusó a Gadafi y su hijo Saif al-Islam al respecto, y a finales de junio, la Corte Penal Internacional promulgó una orden de detención, entre otros por crímenes de lesa humanidad, aunque la base para comprobarlos pareció muy escasa¹⁶⁹. Frente a preguntas sobre evidencias de las alegaciones, Moreno Ocampo no aportó claridad; asimismo, la mayor parte del escrito de acusación no es accesible para el público; las fuentes unilaterales que sirvieron de base provienen, por lo que se puede acceder, de la CIA, de *Fox-News* y de la Liga Libia por los Derechos Humanos, que, de acuerdo con Sliman Bouchuiguir, el antiguo Secretario General de la Liga, tenía vínculos estrechos con el gobierno íterin, debido a varios miembros afiliados a ambas instituciones (p.ej. el Ministro de los Medios, el Ministro de Educación y el Ministro de Petróleo y de las Finanzas). Por razones obvias, el gobierno transitorio aprovechó de las alegaciones contra Gadafi con el fin de tomar el poder en Libia. Aunque Bouchuiguir difundió las alegaciones, ante la pregunta de si dispusiera de informaciones para comprobar las supuestas matanzas de más de 6.000 personas civiles y más de 700 violaciones, tuvo que admitir que “no hay evidencia” y que “no hay documentos” (*cf.* nota a pie de página no. 169). Al haber basado la intervención militar en meras alegaciones, los principios fundamentales del derecho internacional fueron eludidos con

09.06.2011; The Sun, “Gaddafi gives troops Viagra for mass rapes”, 09.06.2011; El País, “Gadafi alienta la violación como arma de guerra”, 10.06.2011.

¹⁶⁹ Chaïne de The Humanitarian War, “Humanitarian War in Libya: There is no evidence!”, 28.11.2011.

el fin de establecer un gobierno ilegítimo en Libia y destruir la estructura política, económica, cultural y social del país.

Con respecto al escrito de acusación y la orden de detención de Gadafi, cabe realzar que la resolución del conflicto de forma pacífica y diplomática se había dificultado, o incluso imposibilitado. Existía una sola toma de posición unilateral en contra de Gadafi, lo que en consecuencia significaba en favor de los rebeldes. Frente a estos acontecimientos, y con retrospectiva a numerosas guerras pasadas, Tom Carter, un periodista de *Transcend Media Service – Solutions-Oriented Peace Journalism*, escribió:

If the principles of Nuremberg were applied today with any consistency, it would be necessary to arrest more or less all the top figures in the American government over the recent period. Barack Obama, Hilary Clinton, George Bush, Dick Cheney, (...), and John Kerry should all be in the dock – right where Goering and company sat – along with hundreds of other current and former civilian, military, and intelligence officials.

The indictment would necessarily be thousands of pages long, listing international conspiracies, war crimes, and crimes against humanity in Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, Pakistan, Yemen, Somalia, Guantanamo Bay, and elsewhere, including at secret “black sites” around the world. The CIA, NSA, and other US intelligence agencies would properly be designated as criminal organizations. (Transcend Media Service, 20.07.2015)

En el contexto de la información por los medios de comunicación, también la manera de informar de *Al Jazeera* es polémica. A lo largo de muchos años, este canal árabe ha sido una fuente fundamental de información, no sólo en los países árabes, sino también en Occidente (p.ej. en la guerra de Irak a partir de 2003). Pero desde el comienzo de los levantamientos árabes, parece que ha dejado de lado su obligación periodística de diligencia, y se entiende principalmente como portavoz del emir de Qatar. En este contexto, cabe mencionar Aktham Suliman, un ex corresponsal de *Al Jazeera* en Berlín, que en 2012 denunció que informar sobre guerras y conflictos en países aliados del emirato resultaba imposible, debido a una política manipuladora con el fin de silenciar voces críticas (cf. Sáenz de Ugarte, 31.12.2012):

Te das cuenta en los casos de gobiernos que están enfrentados a los gobernantes de Qatar. Por ejemplo, Libia, Siria y Yemen. Otros países como Jordania y Bahrein pasan por fenómenos similares: rebeliones y protestas contra las clases dirigentes. Pero se informa mucho menos sobre ellos. Te das cuenta cómo eso se corresponde con la política exterior de Qatar. Es un asunto muy serio, porque en Al Jazeera estábamos orgullosos de decir: Qatar nos financia, pero el Estado no interfiere en nuestro trabajo. Ahora de repente nos encontramos en una situación en la que nuestra cobertura está alineada completamente con la política exterior de Qatar. (ibíd.)

Como consecuencia, Suliman renunció a su puesto como corresponsal. De acuerdo con sus críticas, también en otros artículos reiteradas veces ha sido discutido y cuestionado el rol periodístico de *Al Jazeera*, el papel político que desempeña y la influencia del emir en la información sobre las guerras en el mundo árabe (ibíd.). Pruebas para confirmar las acusaciones

incluyen, entre otras, la toma de una posición unilateral, también frente a rebeliones violentas en países árabes, una falta de crítica sobre Qatar y la represión del levantamiento en Bahrein por la policía y la fuerza militar saudí y bahreí¹⁷⁰. Es de suponer que tras la presentación alterada de información por *Al Jazeera*, la política exterior de Qatar estará en favor de los sunitas y en contra de los chiítas (Bahrein, por ejemplo, tiene una casa real sunita, pero la mayoría de la población es de origen chiíta), al igual que la dependencia de la emisora del emir. Hay numerosos otros ejemplos que muestran una información unilateral, aunque también cabe mencionar que de vez en cuando se publican informes y comentarios más diferenciados. No obstante, en el caso de Libia, incluso cuando se publicaron reportajes y artículos que planteaban interrogantes o se basaban en meras suposiciones, *Al Jazeera* mantuvo su mensaje principal (es decir, ‘guerra contra el propio pueblo’, ‘violaciones masivas’, ‘matanzas de civiles’...). Además, incluso cuando explícitamente tenía que revocar informes publicados, generalmente los declaró como erróneos mediante una mera noticia marginal, y es dudoso si de esta manera la información original perdió su vigencia. En resumen, el mensaje dominante por parte de los medios de comunicación occidentales fue: Gadafi es el único responsable, Gadafi tiene que abdicar. El mensaje fundamental tanto político como psicológico respecto a la información sobre Libia da como resultado: *Gadafi asesina, la OTAN salva*, o: Gadafi es *el maligno*, nosotros somos *los buenos*. De cierta forma, se puede constatar que por lo general los acontecimientos comunicados son privados de su complejidad y reducidos a un esquema simplificado del estilo ‘amigo-enemigo’. Consecuentemente, la indignación justificada sobre la guerra libia poco a poco se ha podido transformar en una indignación ególatra sobre el enemigo.

5.2 Reflexiones sobre la intervención humanitaria y la R2P

Por parte de numerosos políticos y medios de comunicación occidentales, se creó la impresión de que “la comunidad internacional” celebraría de forma unánime la guerra contra Libia. Pero de hecho, China y Rusia se habían abstenido de la votación en el Consejo de Seguridad y posteriormente se arrepentieron de no haber puesto su veto (cf. Becker 2013: 149). Asimismo, por parte de muchos países africanos y sudamericanos se habían levantado voces críticas. Ya a finales de febrero de 2011, el presidente venezolano de aquel entonces, Hugo Chávez, hizo un llamamiento a los jefes de Estado del mundo en favor de una resolución pacífica

¹⁷⁰ GRITSCH, Kurt, “Ein politischer Machtfaktor”, 12.03.2013.

Mientras que el Consejo de Seguridad consideraba la situación intolerable en Libia, la represión violenta de las manifestaciones en Behrein por el militar saudí y bahreí no causó ninguna reacción significativa por parte del Consejo y de la UE. El caso presenta una doble moral. En comparación con Libia, los intereses de Occidente en Arabia Saudita y en los Estados del Golfo son muy diferentes. Sobre todo Bahrein es de importancia fundamental para los EE.UU.: con el cuartel general de la 5ª flota estadounidense estacionada allí con 2.100 soldados, el país representa la base militar principal de los EE.UU. en Oriente Medio, y debido a su riqueza petrolera y su casa real que apoya a los intereses estadounidenses, Arabia Saudita es el estrecho colaborador de los EE.UU. en la región (cf. PAECH 2013: 71; SENSINI 2012: 79).

del conflicto al haber propuesto la creación de una comisión de paz para Libia y de una Comisión de Buena Voluntad por la que hubiera sido posible actuar como mediador entre la oposición y el gobierno libio con el fin de prevenir la escalada del conflicto. Advirtió que el objetivo de la intervención militar aspirado por los EE.UU. “es dividir los países en pedazos. Es una vieja estrategia”. En un discurso el 1 de marzo de 2011¹⁷¹, Chávez se pronunció claramente a favor de una solución diplomática:

Ojalá que no se imponga la política de los cañones, de los tambores de la guerra. (...) Ojalá que logremos de articular una comisión que vaya a Libia a conversar con el gobierno, y a conversar con los líderes de la oposición, que hasta ahora no son conocidos públicamente. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad ante el mundo. (...) Nosotros no nos metemos en la situación interna. Abogamos por una salida pacífica. La cultura de la paz es nuestra panderá, no la cultura de la guerra, ni de la violencia, ni de la invasión. Abogamos por la paz.

En este contexto, cabe destacar que Gadafi había aceptado la propuesta de Venezuela de conformar una comisión de paz para Libia¹⁷², pero el intento de lograr una resolución diplomática del conflicto fue ignorado por completo por las potencias mundiales (cf. Ruf 2013: 114). Desde el comienzo de los disturbios, la OTAN apoyaba a los rebeldes, por un lado con su fuerza aérea, por otro lado con unidades especiales de tierra (entre otros: agentes secretos, consejeros militares, así como suministros de armas a través de terceros países para fortalecer las tropas de los partidos aliados en conflicto) (ibíd. 129). De acuerdo con diferentes fuentes, tanto tropas de elite británicas como francesas, jordanas y de Qatar estaban luchando en terreno libio¹⁷³. Además, parece que Francia, Gran Bretaña, Italia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos habían armado a los rebeldes, lo que por China y Rusia fue interpretado como quebrantamiento del embargo de armas y como violación de la Resolución 1973. Ya a principios de marzo, el ex presidente de los EE.UU., Obama, había autorizado a la CIA para apoyar a los rebeldes¹⁷⁴. La manera en la que la OTAN había realizado la Resolución 1973, principalmente justificada por la Responsabilidad de Proteger, de hecho alimentó la guerra civil. El supuesto objetivo de proteger a la población civil ya se había logrado a finales de marzo¹⁷⁵. La zona de exclusión aérea estaba establecida; consecuentemente, la OTAN habría tenido que fomentar intentos de mediación y negociación. Pero por el contrario, la OTAN intensificó la guerra e incluso se convirtió en la fuerza aérea de los rebeldes; o al revés, los rebeldes se convirtieron en las unidades de tierra de la OTAN: la Alianza intervino numerosas veces de manera selectiva, siempre que los rebeldes necesitaban su apoyo. El periódico *The New York Times* escribió el 7 de junio de 2011 que había una escalada

¹⁷¹ Vídeo: “Chávez: Rechazó injerencia de EEUU y la amenaza de invasión militar en Libia”, 01.03.2011, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Bn6RzGV5b1Y>, última vista: 09/2016.

¹⁷² AVN, “Gaddafi acepta propuesta de Venezuela de conformar comisión de paz para Libia”, 03.03.2011.

¹⁷³ STARR, Barbara, “Foreign forces in Libya helping rebel forces advance”, 24.08.2011.

¹⁷⁴ RISEN, James, et. al., “U.S.-Approved Arms for Libya Rebels Fell Into Jihadis’ Hands”, 05.12.2012.

¹⁷⁵ FAZ, “Washington plant Waffenlieferungen”, 30.03.2011.

repentina de los ataques aéreos por la OTAN con el fin de conquistar a Trípoli¹⁷⁶. Asimismo, y de acuerdo con el periódico británico *The Telegraph*, la ofensiva contra Trípoli por parte de los rebeldes había sido planeada por oficiales del servicio secreto británico MI6, y coordinado por las fuerzas aéreas de la OTAN¹⁷⁷.

La OTAN también abusó de la Resolución 1973, que oficialmente determinó “una cesación del fuego inmediata”, al haber suministrado armas a los rebeldes. Ya a principios de marzo de 2011, numerosos principales dirigentes políticos de Occidente habían exigido la renuncia de Gadafi, por lo que claramente desacataron la resolución de la ONU. Esta tendencia se demostró una vez más a través de la declaración común de los presidentes estadounidense y francés, Obama y Sarkozy, y del premier británico Cameron, del 14 de abril de 2011, y su publicación en varios periódicos líderes internacionales. En la declaración explícitamente exigieron el derrocamiento de Gadafi (“Colonel Gaddafi must go, and go for good”), y sostuvieron que por la guerra “tens of thousands of lives have been protected”¹⁷⁸ (véase parte II, cap. 3.2).

También la divulgación selectiva de las supuestas violaciones colectivas como estrategia bélica de Gadafi para intimidar a la población civil, así como de la presunta distribución de viagra entre sus soldados (véase parte II, cap. 5) sirvió para justificar la intromisión de la OTAN en Libia. Pero como ya se ha mencionado en el subcapítulo anterior, hasta la fecha las acusaciones carecen de evidencia: ya en junio de 2011, organizaciones de derechos humanos expresaron dudas en cuanto a las alegaciones contra Gadafi, los mercenarios extranjeros y la utilización de helicópteros para combatir los oponentes de su régimen. De acuerdo con investigaciones de Amnistía Internacional, no se han encontrado pruebas de estas violaciones de los derechos humanos (*cf.* Cockburn, 24.06.2011). Pero de hecho se han encontrado indicios de que los rebeldes en Bengasi deliberadamente presentaron declaraciones falsas al respecto. Consecuentemente, los resultados de Amnistía Internacional y *Human Rights Watch* son contrarios a las observaciones de Luis Moreno Ocampo que, pese a la falta de pruebas, llevaron a una orden de detención contra Gadafi y su hijo por crímenes de lesa humanidad. Donatella Rovera, la denominada *Senior Crisis Response Adviser* de AI que estuvo en Libia durante tres meses después de los primeros levantamientos, constató: “we have not found any evidence or a single victim of rape or a doctor who knew about somebody being raped”. También Liesel Gerntholtz, la jefa del departamento de los derechos de la mujer en *Human Rights Watch* confirmó que “we have not been able to find evidence” (*ibíd.*).

Al parecer, la evidencia más contundente con respecto a las violaciones colectivas procedió de

¹⁷⁶ BURNS, John F., “Qaddafi Compound Is Pounded in Day Raid”, 07.06.2011.

¹⁷⁷ RAYMENT, Sean, “How the special forces helped bring Gaddafi to his knees”, 28.08.2016.

¹⁷⁸ BBC, “Libya letter by Obama, Cameron and Sarkozy: Full text”, 15.04.2011.

Dr. Seham Sergewa, una psicóloga libia que supuestamente distribuyó unos 70.000 cuestionarios en áreas controladas por los rebeldes y en zonas fronterizas con Túnez. Declaró que más de 60.000 fueron devueltos; según, unas 259 mujeres declararon que habían sido violadas, de las cuales la Dr. Sergewa entrevistó unas 140 víctimas. A petición de Diana Eltahawy, la especialista de Amnistía Internacional sobre Libia, si fuera posible ver a cualquiera de estas mujeres, la Dr. Sergewa respondió que “she had lost contact with them” , por lo que resultó imposible proporcionar pruebas documentales (*ibíd.*).

Con relación a las acusaciones de que se había distribuido viagra a las tropas de Gadafi, Donatella Rovera realzó que por primera vez las alegaciones habían aparecido en marzo de 2011 tras la destrucción de tanques de guerra por la OTAN cerca de Bengasi. Al parecer, en entrevistas con periodistas extranjeros en la ciudad, los rebeldes mostraron paquetes de viagra y alegaron que provenían de los tanques quemados, aunque no está claro por qué los paquetes no eran carbonizados (*ibíd.*).

De la misma manera, en repetidas ocasiones los rebeldes sostuvieron que Gadafi recurría a mercenarios de África central para combatirlos. Pero las investigaciones de AI no han podido confirmar las acusaciones. De acuerdo con Donatella Rovera, las supuestas tropas de mercenarios no existían:

Those shown to journalists as foreign mercenaries were later quietly released. Most were sub-Saharan migrants working in Libya without documents. (...) The politicians kept talking about mercenaries, which inflamed public opinion and the myth has continued because they were released without publicity. (ibíd.)

Como se ha mencionado anteriormente, la intervención de la OTAN comenzó el 19 de marzo por ataques aéreos, supuestamente con el fin de proteger a la población civil de Bengasi de una masacre por las tropas de Gadafi. Frente a las amenazas de venganza de Gadafi, no hay duda de que los civiles temían por su vida. Durante los primeros días del levantamiento en el este del país, las fuerzas de seguridad de Gadafi dispararon y mataron a manifestantes y personas que asistieron a funerales, pero no hay ninguna prueba en cuanto a matanzas de civiles a una escala como en Siria o Yemen (*ibíd.*).

Con respecto a Europa, conviene señalar que la Comisión de la UE entró en contacto con los rebeldes en muy poco tiempo, con el fin de asegurarse de su cooperación en la contención de los flujos masivos de refugiados desde la costa libia. A finales de junio de 2011, Italia celebró un acuerdo con el Consejo Nacional de Transición sobre la expulsión de inmigrantes “ilegales” desde Italia a Libia. La ONG Medicos Sin Fronteras se mostró consternada frente a este acuerdo,

especialmente porque (hasta la fecha) la guerra sigue perdurando¹⁷⁹.

De acuerdo con la OTAN, aproximadamente unos 1.800 objetivos fueron destruidos o deteriorados, entre ellos 100 órganos de accionamiento, más de 700 almacenes de armas y 500 tanques, vehículos blindados y lanzacohetes múltiples¹⁸⁰. En un total, a finales de agosto, la OTAN tenía llevado a cabo 19.877 ataques aéreos, de los cuales 7.505 eran operaciones en el campo de batalla, lo que equivale a unas cincuenta por día¹⁸¹. Oficialmente, la guerra terminó el 23 de octubre de 2011.

Esta manera de proceder, que no estaba autorizada por la Resolución 1973, constituye un quebrantamiento del derecho internacional, y las consecuencias ascienden a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (*cf.* Paech 2013: 77). Comparado con la publicación detallada de los ataques aéreos y operaciones militares, apenas se ha indicado la dimensión de la infraestructura destruida, el número de los muertos, heridos y traumatizados, la miseria de los cientos de miles de refugiados y desplazados internos, y los efectos que tienen las tierras intoxicadas por munición de uranio para la población civil y el suministro de agua¹⁸².

Durante las ofensivas aéreas por la OTAN, en reiteradas ocasiones fueron asesinados numerosos civiles; según un informe llamado “Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya” de *Human Rights Watch*, se investigaron ocho ataques aéreos de la OTAN en Libia que causaron la muerte de setenta y dos personas civiles, entre ellos veinte mujeres y veinticuatro niños (*cf.* HRW, 14.05.2012). Pero al igual que en las guerras anteriores, la OTAN habló de “objetivos legítimos”, y de víctimas civiles como asunto “no comprobado” o “no confirmado”. Kristale Younes, la denominada *Director of Field Operations for Civic*, examinó varios sitios donde se llevaron a cabo ofensivas por la OTAN e informó sobre sus resultados. Aunque constató que “there may have been a weapons system failure which may have caused a number of civilian casualties”, concluyó que “We have no confirmed reports of civilian casualties” (*cf.* Hart 2011). Pero cabe destacar que las razones aducidas por tal conclusión son más que dudosas: con respecto a la confirmación de los muertos causados por sus ofensivas militares, la Alianza había creado su propia definición; es decir, solamente una muerte que la OTAN misma investiga y comprueba es considerada como “confirmada”. Pero dado que la Alianza se negó a investigar las acusaciones, su recuento de víctimas, por definición, es cero:

The reason (...) was that the alliance had created its own definition for “confirmed”: Only a death that NATO itself investigated and corroborated could be called confirmed. But because the

¹⁷⁹ Die Entwickler, “Ärzte ohne Grenzen verurteilt Initiative zur Abschiebung von Bootsflüchtlingen nach Libyen”, 24.06.2011.

¹⁸⁰ FAZ, “Nato: UN sollen Libyen-Truppe vorbereiten”, 09.06.2011.

¹⁸¹ Reuters, “Factbox: Latest developments in the Libyan conflict”, 22.08.2011.

¹⁸² AHMED, Nafeez M., “How NATO Deliberately Destroyed Libya’s Water Infrastructure”, 29.05.2015; MOUNTAIN, Thomas C., “NATO Poisons Libya With Depleted Uranium”, 14.05.2011.

alliance declined to investigate allegations, its casualty tally by definition could not budge – from zero. (ibid.)

Acorde con diferentes fuentes, entre el 24 de febrero y el 12 de octubre de 2011, se notificaron un total de 14.572 a 18.873 muertes, de las cuales algunas no han sido comprobadas independientemente. Como mínimo 5.637 a 7.046 personas civiles fueron asesinadas hasta el 23 de octubre del mismo año, pero esta cifra podría ser mucho más alta. Poco antes del final de la guerra, la oposición declaró que el número de fallecidos ascendía a 25.000¹⁸³, y a unas 4.000 de personas se consideraba desaparecidas¹⁸⁴. Basado en cifras que todavía requieren de pruebas, en enero de 2013, el nuevo gobierno de Libia estimó que en realidad el número de muertos es mucho menor que las estimaciones anteriores: de los muertos, unos 4.700 eran rebeldes, un número similar a los soldados asesinados de Gadafi, y un número indefinido eran civiles. Alrededor de 2.100 rebeldes y soldados habían desaparecido¹⁸⁵. De acuerdo con el *Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED), un proyecto que ha compilado una base de datos sobre violencia política en países en desarrollo desde 1997 hasta el presente, informó sobre 6.109 muertos entre el 15 de febrero y el 23 de octubre de 2011, de los cuales 1.319 habían muerto antes de la intervención de la OTAN¹⁸⁶.

A finales de abril de 2011, sólo dos meses después de los comienzos de las luchas, la administración de Obama, al igual que el NTC, estimó que hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas¹⁸⁷; según *The New York Times*, el número incluso ascendió a 50.000¹⁸⁸. El *African Journal of Emergency Medicine* estimó en 2015 que el número total de muertes asciende a 21.490 (cf. AfJem, vol. 5 no. 3, p. 101). Pero en cambio, el *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP) de la Universidad de Uppsala en Suecia que se dedica a la colección de datos sobre violencia organizada, informó que en las luchas de 2011, unas 328 personas fueron asesinadas por las fuerzas de Gadafi y unas 1.602 por las fuerzas del NTC¹⁸⁹. Esta diferencia considerable en las cifras muestra la situación desafiante de encontrar datos fiables sobre las víctimas de la guerra. Cuáles de los datos se pueden considerar realistas y comprobados, y cuáles debían favorecer intereses meramente propagandísticos, de hecho no se ha podido aclarar.

La guerra de la OTAN se justificó por la *Responsibility to Protect* (“We must not tolerate this regime using military force against its own people” (Cameron, 28.02.2011)), pero los motivos verdaderos son otros (cf. Henken 2011; Wagner 2013: 117-121): la influencia sobre los

¹⁸³ MULHOLLAND, Rory; DESHMUKH, Jay, “Residents flee Gaddafi hometown”, 03.10.2011.

¹⁸⁴ Global Security, “Libya Civil War (2011)”, octubre de 2011.

¹⁸⁵ BLACK, Ian, “Libyan revolution casualties lower than expected, says new government”, 08.01.2013.

¹⁸⁶ ACLED, “ACLED Version 5 (1997-2014)”, 2014.

¹⁸⁷ CBS News, “U.S.: Libya death toll as high as 30,000”, 27.04.2011.

¹⁸⁸ NORDLAND, Rod, “Libya Counts More Martyrs Than Bodies”, 16.09.2011.

¹⁸⁹ UCDP, “Libya: Government”, 2016.

rebeldes árabes; establecer un gobierno pro-occidental y neoliberal; constituir bases militares; hacer retroceder la influencia de otras potencias en África (sobre todo de China); y mantener el acceso a los pozos de petróleo y gas natural.

Mientras que después de la guerra la influencia occidental sobre la producción de petróleo y gas de Libia fue “legitimada”, o mejor dicho, “reconocida” por los medios de comunicación y numerosos artículos científicos, y considerada un motivo fundamental para la intervención de la OTAN, hasta hoy día apenas se habla sobre dos razones adicionales, que de ninguna forma son menos importantes: el acceso a un depósito subterráneo gigantesco de agua dulce, y la prevención del proyecto de Gadafi de introducir una moneda única africana, el dinar de oro.

5.3 Las causas de la guerra libia más allá de los motivos oficiales

5.3.1 El proyecto del *Great-Man-Made-River*

El denominado *Great-Man-Made-River Project* de Gadafi, el proyecto acuífero más grande del mundo, debía transformar Libia y otros países africanos en un jardín fértil al proporcionar agua potable a todas las zonas pobladas a través de una red de tuberías subterráneas. De este modo, tenía planeado combatir la sequía que sufre la región, por lo que Gadafi llamaba el proyecto “la Octava Maravilla del Mundo”. Pero en 2011, las fuerzas aéreas de la OTAN destruyeron varias partes importantes del proyecto gigantesco y paralizaron todo el suministro de agua de Libia. Desde entonces, el país entero depende de una sola fuente de agua. Hoy en día, Libia se enfrenta a una catástrofe humanitaria sin precedentes (*cf.* Bürgender 2016).

Gadafi aspiraba a establecer un suministro de agua autárquico en Libia y, consecuentemente, una producción autosuficiente de alimentos. En 1953, la búsqueda de petróleo en los vastos desiertos del sur del Sahara llevó al descubrimiento de enormes recursos hídricos de 4.500 a 20.000 kilómetros cúbicos. La mayor parte del agua se había acumulado en un lapso de tiempo de 14.000 a 38.000 años (*ibíd.*). Después de intensos combates entre Gadafi y Sidi Mohammad Idris al-Mahdi al-Senussi, el rey de Libia de aquel entonces, en 1969, Gadafi y su ejército asumieron el poder.

Teniendo en cuenta los ingresos enormes del petróleo y las inversiones inmensas que Gadafi llevaba a cabo a través de diversos proyectos con el fin de promover, entre otros, la infraestructura, educación y el servicio médico (*cf.* Crome 2011a: 14), se puede decir que en aquel entonces quizás era la figura más importante en el norte de África, ya que justo después de haber llegado al poder, su nuevo gobierno nacionalizó las compañías de petróleo y comenzó a

invertir los ingresos del petróleo para crear cientos de pozos perforados (Destino Infinito, 18.07.2015). Debido a las vastas inversiones, Libia se puso a la cabeza del continente africano. En 1983, se establecieron las bases para el Gran Río Artificial, y un año más tarde comenzaron las obras. Se estima que la cantidad de agua le habría proporcionado a Libia agua potable durante un periodo de hasta 250 años (Bürgender 2016).

En el sur de Libia, existen cuatro grandes depósitos de agua (las cuencas de Kufra, Sirte, Murzuk y Hamada), en los que se encuentran aproximadamente 35.000 kilómetros cúbicos de agua (Hiscock 2005: 280); correspondiente a la dimensión de Alemania con una profundidad de 100 metros. Con una escasez de agua potable en numerosas regiones del mundo, es de suponer que para los globalistas¹⁹⁰ con intenciones de monopolizar el negocio global del agua, estas reservas casi inagotables siempre han sido de sumo interés. Comparado con la producción costosa de petróleo, un metro cúbico de agua ultrapura se puede extraer a un costo de sólo 35 centavos. Suponiendo un precio de venta de sólo dos euro por metro cúbico, el valor de estos depósitos de máxima calidad se estima a EUR 58 billones (!) (cf. Politaia 2011).

Con este proyecto, Libia realmente habría causado una “revolución verde” (*ibíd.*), y habría podido asumir el control del suministro de alimentos en África. Sobre todo, habría conllevado la liberación e independización de Libia y del norte de África de la influencia del FMI, y, consecuentemente, una posible autosuficiencia económica. Dado que las inmensas reservas de agua fósil subterránea se extienden desde las zonas libias hasta Egipto, Sudán y Chad, el proyecto habría podido proporcionar a la agricultura africana un empuje histórico. Tras su finalización, el agua para riego del Gran Río Artificial habría permitido el cultivo de 155.000 hectáreas de las tierras libias (Water Technology 2012). Pero en este contexto, cabe mencionar que sin la implicación del Banco Mundial en absoluto, es evidente que puede resultar peligroso realizar un proyecto que dispone del potencial de convertir todo el norte de África en un “jardín floreciente”. Esto es contrario al objetivo (inoficial) de las grandes potencias mundiales de desestabilizar la región con el fin de poder imponer su influencia, tanto política, económica y geopolíticamente¹⁹¹. La primera de las cinco fases de construcción comenzó a finales de 1991. En el marco de la mayor obra de ingeniería civil del mundo, Gadafi proféticamente había anunciado: “After this achievement, American threats against Libya will double. The United States will make excuses, but the real reason is to stop this achievement, to keep the people of Libya oppressed” (*cit. en* Friday, 17.07.2015). En la primera fase, diariamente más de un millón de metros cúbicos de agua

¹⁹⁰ De acuerdo con una definición reciente, a “globalistas” se define como sigue: “The Globalists are a conglomerate of individuals, interest groups and large corporations who actively seek to eliminate all countries to create a global border-less society so that they can centralize, reduce and standardize all economies, production and the processing of natural resources so that they can directly control, manipulate and influence the decisions we make to ensure they maintain their power, control, wealth and historical influence” (PUHANIC, Andrew, “The Globalists”, 02.04.2012).

¹⁹¹ LAURENS, Henry, “Cómo se repartió Oriente Medio (1916-1920)”, 2003; La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar, “Entre el Viejo Tiempo y el Nuevo Milenio”, 2016.

potable eran bombeados desde Sirte a Bengasi a través de tubos de 1.000 kilómetros de largo. Con la segunda fase se proporcionaba un millón de metros cúbicos de agua por día a la franja costera del país y a la capital, Trípoli. Y en la tercera fase se suministraba a Tobruk y otras ciudades cercanas de la costa con un nuevo sistema de suministro subterráneo de agua. La red de los tubos de hormigón, cada uno con cuatro metros de diámetro, transportaba el agua a lo largo de 3.500 kilómetros, respectivamente (cf. Bürgender 2016).

El *Great-Man-Made-River Project* fue reconocido a nivel internacional, y en 1999, la ONU honró a Libia con el Premio Internacional del Agua¹⁹². Esto no sólo incentivaba la realización de amplios estudios científicos, sino también la colaboración con numerosos expertos extranjeros. En 2008, la obra entró en el Libro Guinness de los Récords como el mayor proyecto de riego del mundo. Tras treinta años de planificación y construcción, finalmente, el 1 de septiembre de 2010, la primera etapa importante del proyecto fue puesta en marcha; es decir, sólo cinco meses antes del comienzo de los disturbios, y antes de que el proyecto literalmente hubiera podido “dar fruto” (ibíd.).

En el momento en que la OTAN comenzó el bombardeo de Libia, la mayoría de los trabajadores extranjeros abandonaron el país. En julio de 2011, aviones de combate bombardearon la tubería de suministro de agua cerca de Brega; asimismo, destruyeron una fábrica que producía los tubos necesarios para los trabajos de reparación. Según, se sospechó “una instalación de almacenamiento militar” y que “distintos cohetes fueron lanzados desde allí” (cit. en Destino Infinito 2015). En el bombardeo de la fábrica, al menos cinco empleados fueron asesinados, y se destruyó una base esencial para la agricultura libia (cf. Bürgender 2016). Además, el bombardeo de las tuberías “dejó sin agua al 70% de la población” (Destino Infinito 2015). Al haber atacado las tuberías, la OTAN destruyó infraestructura esencial y el suministro de agua de Libia, lo que significa una violación grave del derecho internacional. Por lo tanto, y de acuerdo con la definición correspondiente, el bombardeo constituyó un crimen de guerra¹⁹³. Ya en abril de 2011, el gobierno de Gadafi advirtió que los ataques aéreos del proyecto *Great-Man-Made-River* pudieran provocar una catástrofe humanitaria (cf. The Guardian, 18.04.2011), y en agosto, también UNICEF informó que “the conflict had put the *Great Man Made River Authority*, the primary distributor of potable water in Libya, at risk of failing to meet the country’s water

¹⁹² UN, UNESCO, 157 EX/44, 01.10.1999.

¹⁹³ De acuerdo con el Estatuto de la CPI, art. 8 (2) (a) (iv), se define como crímenes de guerra “la destrucción y la aprobación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente”. De igual manera, se trata de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949: CG I, art. 50; CG II, art. 51; CG IV, art. 147. Asimismo, de acuerdo con el Estatuto de la CPI, art. 8 (2) (b) (i), es un crimen de guerra “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”. Como define también el art. 52 (1) del Protocolo I, adicional de los Convenios de Ginebra, “los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias” (CICR, “Crímenes de Guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su base en el Derecho Internacional Humanitario, octubre 2008).

needs” (Ahmed 2015, véase nota a pie de página no. 182). Si el proyecto fallara, todo el país se enfrentaría a una situación de emergencia humanitaria masiva (*ibíd.*).

Las dos últimas fases del proyecto debían completarse en los próximos veinte años, pero debido a la guerra agresiva “humanitaria” de la OTAN, se hallaban en gran peligro. Más del 60% de la población del país, tanto en cuanto al consumo privado como comercial, dependía del abastecimiento de agua del proyecto *Great Man-Made-River*. Tras el bombardeo de la OTAN, el 50% de la población libia repentinamente ya no tenía acceso a agua corriente (*cf.* Bürgender 2016). Numerosos medios de comunicación occidentales atribuyeron el estado de emergencia a Gadafi: un ejemplo llamativo es la información por la *Süddeutsche Zeitung*, el periódico alemán de orientación liberal-centrista con mayor número de lectores a nivel nacional, según la cual Gadafi persiguió una “estrategia diabólica” al intentar “cerrar el suministro de agua para Trípoli”¹⁹⁴. Es sorprendente que el papel evidente de la OTAN en los bombardeos ni siquiera se mencionara.

Como se ha señalado anteriormente, hoy en día, toda Libia depende de una sola fuente de agua (*cf.* Bürgender 2016). El proyecto sigue siendo paralizado inmensamente, y la crisis del agua continúa amenazando el Estado entero.

Cuando las potencias occidentales llegaron a Libia bajo el pretexto oficial de ayudar al país, los EE.UU. y sus aliados europeos tuvieron la oportunidad de reabrir bases militares de gran importancia geoestratégica que Gadafi había cerrado en los años ‘70. Se encuentran en el cruce del Mediterráneo, África y Oriente Medio (*ibíd.*). De acuerdo con algunos observadores, es de suponer que el proyecto acuífero de Gadafi constituyó el motivo verdadero para la intervención de 2011. Otra posible razón fue el proyecto de Gadafi de establecer una moneda panafricana de oro. En cualquier caso, es evidente que la OTAN no destruyó el país por mera caridad y la seria preocupación por la población civil libia.

5.3.2 El proyecto del dinar de oro

¿Qué fue el motivo verdadero de la OTAN para lanzar una intervención militar tan feroz en Libia? Aparte del proyecto acuífero gigantesco de Gadafi que habría permitido una independización significativa para Libia y otros países en la región, hay otro proyecto que, al parecer, no gozaba de mucha aceptación por las grandes potencias mundiales. Gracias a los correos electrónicos de la secretaria de Estado de aquel entonces, Hillary Clinton (2009-2013), publicados en año nuevo y a principios de enero de 2016 por el Ministerio de Asuntos Exteriores

¹⁹⁴ AVENARIUS, Tomas, “Gaddafis teuflische Wasser-Strategie”, 02.09.2011.

de los EE.UU. (cf. Hoff 2016), existen pruebas de que la intervención también se llevó a cabo para evitar la creación de una moneda fuerte e independiente en África que habría liberado el continente de la servidumbre económica bajo el dólar estadounidense, el FMI y el franco CFA (oficialmente: Franco de la comunidad financiera africana), una moneda común de catorce Estados africanos, principalmente antiguas colonias francesas. La emancipación de estas condiciones habría significado un paso fundamental hacia la soberanía económica del continente africano, y de este modo habría permitido dejar atrás la explotación (pos)colonial.

De acuerdo con numerosas fuentes, el gobierno de Gadafi disponía de 143 toneladas de oro y una cantidad similar de plata (cf. Newman 2011; Hoff 2016; Brown 2016; Lehner 2016). Confirman que Gadafi tenía la intención de utilizar el oro para establecer una moneda panafricana fundamentada en el dinar libio, lo que habría proporcionado al África francófona una alternativa al CFA (*ibíd.*). Dr. James B. Thring, el fundador del grupo de presión *Ministry of Peace* que, entre otras, lanza campañas contra belicismo sionista¹⁹⁵, comentó en una entrevista del canal televisivo ruso RT (RT News, 05.05.2011)¹⁹⁶:

It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, in 1986 and 2000, organized by Gaddafi. Everybody was interested, most countries in Africa were keen.

Pocos meses antes de la intervención militar, Gadafi invitó a las naciones africanas y musulmanas a unirse para establecer la nueva moneda que pudiera competir con el dólar y el euro. Aspiraba a vender petróleo y otros productos en todo el mundo exclusivamente mediante dinares de oro. Evidentemente, con la realización de un proyecto tan importante, se modificaría por completo el equilibrio económico del mundo: la riqueza de un país principalmente dependería de la cantidad de oro de que dispone y no de la cantidad de dólares con la que comercia (*ibíd.*). Cabe destacar que en comparación con la cantidad de oro que tenía Libia, el Reino Unido de hecho dispone del doble, pero al mismo tiempo tiene una población diez veces mayor (The World Bank, 2015)¹⁹⁷.

Consecuentemente, en este contexto y al tener en cuenta que el precio del petróleo está vinculado al dólar, surgió la cuestión, de qué cantidad de oro dispone el Banco de la Reserva Federal de los EE.UU. para sostener el dólar estadounidense. Asimismo se planteó la pregunta, si en algún momento la Reserva Federal ha participado en acuerdos de canjes de oro (*gold swap*). Confrontado con dichas cuestiones por el congresista republicano Ron Paul en un *Meeting of the*

¹⁹⁵ Rehmat's World, "UK author: Israel is an 'illegal state'", 08.06.2014.

¹⁹⁶ Video: RT News, "Gaddafi's Gold Dinar Currency Prompted NATO Invasion of Libya", 05.05.2011, subido el 08.09.2011, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mm2teVDX8-c>, última vista: 10/2016.

¹⁹⁷ Libia tiene alrededor de 6,2 millones (2015) de habitantes, el Reino Unido unos 65,1 millones (2015).

House Financial Services Subcommittee on Domestic Monetary Policy el 6 de junio de 2011, Scott Alvarez, el Consejero general de la Reserva Federal, reveló: “The Federal Reserve does not own any gold at all. We have not owned gold since 1934, so we have not engaged in any gold swap”¹⁹⁸ (IWB, 04.06.2011).

Al igual que en la mayoría de los países desarrollados, tanto el Reino Unido como los EE.UU. no disponen de suficiente oro en relación con el número de sus habitantes para, hipotéticamente, poder seguir asegurando su competitividad internacional. Pero esto no es el caso en países como Libia y muchos de los países del Golfo. A los países en África y Oriente Medio ricos en petróleo, el dinar de oro les habría dado poder para independizarse de sus clientes con demandas energéticas enormes al aclarar: “Sorry, the price has gone up, and we want gold” (*cit. en* RT News, 05.05.2011). Algunos dicen que los EE.UU. y sus aliados de la OTAN literalmente no podrían pagar el precio si esto ocurriera.

Considerando estas circunstancias, y de acuerdo con la presunción de Anthony Wile, el fundador y editor jefe de la página web política *Daily Bell*, es de suponer que si Gadafi realmente tenía la intención de revaluar el petróleo libio o cualquier otro producto que el país vendiera en el mercado mundial, un paso tan radical como la implementación del dinar de oro como nueva moneda, en ningún momento sería bien acogido por las élites de poder responsables del control de los bancos centrales del mundo. Poner en peligro la influencia consolidada de las élites sin duda alguna puede provocar el derrocamiento de gobiernos que de todos modos gozan de pocas simpatías en Occidente, como en el caso de Gadafi. Sobre todo con respecto a la justificación de una intervención militar surgió la necesidad de encontrar más razones por las que un estallido de guerra y la participación de Occidente serían respaldados por la opinión pública¹⁹⁹.

En este contexto, los mencionados correos electrónicos de Hillary Clinton revelan informaciones que indican objetivos estratégicos de las potencias mundiales mucho más allá de los motivos humanitarios oficialmente alegados con el fin de justificar la intervención militar en Libia. Como principal defensor de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad sobre la implementación de una zona de exclusión aérea en Libia, Francia afirmó que se preocupaba principalmente por la protección de los civiles libios (véase parte II, cap. 4.1.1). Pero teniendo en cuenta la situación

¹⁹⁸ La Reserva Federal de los EE.UU. no posee oro. El *Gold Reserve Act* de 1934 determinó que el Sistema de la Reserva Federal debía transferir todo su oro al Departamento del Tesoro. A cambio, el Secretario del Tesoro emitió certificados de oro para la Reserva Federal por la cantidad de oro transferido al precio estatuario aplicable en aquel entonces para el oro estando en poder del Departamento del Tesoro. Los certificados de oro son expedidos en dólares estadounidenses, y su valor se basa en el precio estatuario del oro en el momento de la emisión de los mismos (desde 1973, constantemente alrededor de USD 42,2 por onza fina). En ningún momento la Reserva Federal tiene el derecho de canjear los certificados por oro. Aunque la Reserva Federal no posee oro, el Banco de la Reserva Federal en Nueva York actúa como custodio del oro poseído por titulares de cuentas como el gobierno de EE.UU., gobiernos extranjeros, otros bancos centrales y organizaciones internacionales oficiales. Unos 5% del oro que se encuentra en poder del Dep. del Tesoro (aprox. USD 600 millones en valor contable) se mantienen en custodia para éste último por los Bancos de la Reserva Federal como agentes fiscales de los EE.UU. La gran mayoría de este oro se encuentra en la bóveda del Banco de la Reserva Federal en Nueva York, y una muy pequeña parte se guarda en otros bancos de la Reserva Federal. Los 95% restantes (USD 10,4 mil millones en valor contable) se mantienen en custodia para el Dep. de Tesoro por la Fábrica de Moneda de los EE.UU. (*US Mint*) (*Cf.* Board of Governors of the Federal Reserve System, “Does the Federal Reserve own or hold gold?”, 03.12.2014).

¹⁹⁹ WILE, Anthony, “Gaddafi Planned Gold Dinar, Now Under Attack”, 05.05.2011.

actual en Libia, claramente se habría debido cuestionar la autenticidad de tal preocupación. Al parecer, uno de los motivos verdaderos y más importantes por los que las grandes potencias occidentales intervinieron y derrocaron a Gadafi era su mencionado proyecto de establecer el dinar de oro (cf. Newman 2011).

En uno de los aproximadamente 3.000 correos electrónicos de Clinton, se reveló que la misión de la OTAN de provocar la caída de Gadafi por un lado tenía por objeto impedir la realización de una reforma monetaria y la implementación de una moneda panafricana basada en el oro, y por otro lado para asegurar el acceso a las reservas petrolíferas de Libia (*ibíd.*; Swanson 2011; Brown 2016).

El correo electrónico en cuestión fue enviado a Clinton el 2 de abril de 2011 por Sidney Blumenthal, uno de sus asesores de confianza, con el asunto “France's client/Q's gold” (“El cliente de Francia/el oro de Gadafi”). Escribe, entre otros:

El gobierno de Gadafi guarda 143 toneladas de oro y una cantidad similar de plata... Este oro fue acumulado con anterioridad a la rebelión en curso y pensaba utilizarse para establecer una moneda panafricana basada en el dinar libio. El plan tenía como objetivo proporcionar a los países africanos francófonos una alternativa al franco CFA.

En un “comentario de fuente”, Blumenthal añade:

Según algunos expertos, estas cantidades de oro y plata están valoradas en más de 7.000 millones de dólares. Agentes de inteligencia franceses descubrieron este plan poco después de que se iniciara el actual levantamiento, y ese fue uno de los factores que influyeron la decisión del presidente francés Nicolás Sarkozy de involucrar a Francia en el ataque a Libia. Según estos expertos, los planes de Sarkozy estaban motivados por el deseo de:

- 1) Conseguir una cuota mayor de la producción petrolera libia.*
- 2) Aumentar la influencia francesa en el norte de África.*
- 3) Mejorar la situación política interna en Francia.*
- 4) Proporcionar al ejército francés la oportunidad de reafirmar su posición en el mundo.*
- 5) Abordar las preocupaciones de sus asesores sobre los planes de Gadafi de suplantar a Francia como potencia dominante en el África francófona. (cit. en Brown 2016).*

Se puede observar claramente que los supuestos motivos humanitarios ni siquiera son mencionados; los objetivos verdaderos son dinero, petróleo y el poder hegemónico.

Además, el periodista de investigación Robert Parry reveló más detalles perturbadores de los correos. Entre ellos destacan la aceptación de crímenes de guerra cometidos por los rebeldes, la presencia de asesores estadounidenses de operaciones especiales en Libia casi desde el comienzo de los disturbios, y la existencia de grupos de *Al Qaeda* dentro del NTC apoyados por los EE.UU. y las demás potencias occidentales. Con respecto a la propaganda que justificaba la intervención militar, ya se hizo evidente que careció de fundamento absoluto, dado que se basó en meros rumores. De acuerdo con Parry, posiblemente pueden atribuirse a Blumenthal mismo. En dichos rumores destaca tanto la afirmación de las violaciones colectivas por orden de Gadafi como la

distribución de viagra a sus soldados (véase parte II, cap. 5), una incriminación afirmada por Susan Rice, la ex embajadora de los EE.UU. ante las Naciones Unidas. Retóricamente, Parry plantea la cuestión:

So do you think it would be easier for the Obama administration to rally American support behind this 'regime change' by explaining how the French wanted to steal Libya's wealth and maintain French neocolonial influence over Africa - or would Americans respond better to propaganda themes about Gaddafi passing out Viagra to his troops so they could rape more women while his snipers targeted innocent children? Bingo! (cit. en Brown 2016)

En resumen, una vez que el servicio secreto francés descubrió los planes de Gadafi de establecer el dinar de oro, París consecuentemente decidió iniciar la campaña contra su régimen. Después de todo, las grandes potencias disponían de buenas razones y numerosos motivos por los que tenían que actuar.

Pero en este contexto también cabe mencionar que ya el día 25 de febrero de 2011, en una llamada telefónica Gadafi predijo frente a Blair que su caída pudiera llevar al agravamiento del extremismo islámico en Occidente²⁰⁰; una advertencia que cayó en saco roto. La influencia de las potencias occidentales no debía disminuir de ningún modo. Es de suponer que la guerra justificada con la *Responsibility to Protect* no sólo causó la destrucción completa del Estado libio junto con su infraestructura y economía, sino también la muerte y el desplazamiento forzado de miles de personas civiles aceptados tácitamente como “daños colaterales”, así como un futuro políticamente totalmente incierto. ¿Pero qué significado tienen las vidas de personas en un país lejano, si su sacrificio promete un beneficio económico y hegemónico para algunos políticos y élites en Europa y los EE.UU.? De cualquier forma, conviene subrayar que la influencia precoz en los partidos conflictivos mediante negociaciones diplomáticas hacia una resolución pacífica del conflicto habría impedido considerablemente el sufrimiento humano y los efectos desastrosos, tanto en Libia como en los países vecinos directamente afectados por el hundimiento de las estructuras estatales de la Gran Jamahiriya Árabe.

En el contexto de la demonización de Gadafi por parte de la política y de los medios de comunicación a nivel internacional, también surge la pregunta central ¿quiénes son los rebeldes en Libia? Una táctica de guerra común constituye la presentación positiva de los adversarios del propio enemigo al seguir el principio “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Pero aparte del hecho de que lucharon contra el gobierno de Gadafi, parece que en el caso de los rebeldes libios ha resultado muy difícil encontrar aspectos positivos notables. Por tanto, cabe preguntarse ¿quién recibió apoyo en esta guerra y por qué?

²⁰⁰ MENDICK, Robert, “Colonel Gaddafi warned Tony Blair of Islamist attacks on Europe, phone conversations reveal”, 07.01.2016.

5.4 Reflexiones sobre los rebeldes libios y el NTC

Como se ha mencionado anteriormente, la rebelión en Libia comenzó a mediados de febrero de 2011, y a diferencia de Túnez, rápidamente se convirtió en un levantamiento armado (véase parte II, cap. 2). En muy poco tiempo, unos rebeldes proclamaron el Consejo Nacional de Transición (NTC), a su vez fueron rápidamente reconocidos por los Estados occidentales como legítima representación de Libia; por parte del gobierno francés ya el día 10 de marzo de 2011. Hasta finales de la guerra seguía sin respuesta la cuestión sobre los objetivos políticos perseguidos por los rebeldes. Según el político de exterior del Partido de la Unión Demócratacristiana de Alemania (CDU), Joachim Hörster, el único objetivo en común de la OTAN y de los rebeldes fue la eliminación de Gadafi, pero sigue incierto si posteriormente se hubieran podido establecer estructuras democráticas en el país (*cf.* Deutschlandfunk, 22.08.2011). También argumentó que hubiera sido imprescindible ser más cauteloso con respecto al reconocimiento del NTC, un procedimiento precipitado al considerar la ignorancia de Occidente frente a los miembros del Consejo Nacional de Transición, tanto con respecto al origen de sus miembros como a sus intenciones y motivos políticos. Sostuvo que incluía personas “con las que normalmente no se quiere tener nada que ver” (*ibíd.*). Asimismo, cabe destacar que el Consejo careció de toda legitimidad democrática. Al Consejo pertenecieron, entre otros, políticos exiliados que frecuentemente habían estado en estrecho contacto con Washington, Londres y París (*cf.* Henken 2011), defensores de los derechos humanos, y ex miembros del gobierno que bajo Gadafi habían estado involucrados en medidas represivas.

Con respecto a los actos de violencia, hay numerosos indicios de crímenes cometidos por los rebeldes. Uno de los ejemplos más destacados es la matanza y el desplazamiento de los 42.000 habitantes de la ciudad de Tawergha a mediados de agosto de 2011 (*cf.* Human Rights Investigations, 26.09.2011; Sharquieh 2013: 20), principalmente descendientes de esclavos e inmigrantes negros y tuareg que pertenecen a una parte de la población que más apoyaba a Gadafi²⁰¹. Amnistía Internacional informó sobre milicianos armados que cometieron amplias violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra. Asimismo, menciona que migrantes y refugiados negroafricanos sirvieron de blanco, habitantes de ciudades enteras fueron desplazados de forma violenta, y el Consejo de Transición no tomó medidas para evitar los crímenes o para castigar a los responsables²⁰². La ONG *Human Rights Watch* exigió de los rebeldes y del NTC: “[They] should stop the arbitrary arrests and abuse of African migrant

²⁰¹ El apoyo de la población negra libia a Gadafi se debía sobre todo a su ideología política caracterizada por un nacionalismo islámico panárabe (*cf.* BEDSZENT 2011:16-17). Con respecto a los tuareg, cabe mencionar que desde la descolonización viven repartidos en cinco Estados diferentes (Libia, Argelia, Malí, Níger y Burkina Faso). Gadafi aspiraba al establecimiento de una unión sahariana transfronteriza, lo que conllevaba el apoyo de los tuareg y les motivaba a emigrar a Libia donde gozaban de más reconocimiento social y económico que en los demás países (*cf.* KOHL 2011: 72-78).

²⁰² Amnesty International, “Libyen”, 31.12.2014.

workers and black Libyans assumed to be mercenaries. They should release those detained as mercenaries solely due to their dark skin color” (HRW, 04.09.2011). Decenas o hasta cientos de personas fueron linchados por la población autóctona, pero no existen datos fiables (cf. Sahara Reporters, 28.02.2011; Human Rights Investigations, 07.07.2011; The Guardian, 30.08.2011). En la prisión militar de Misrata con más de 1.000 presos, los prisioneros fueron torturados sistemáticamente por los rebeldes, por lo que la organización médica y humanitaria Médicos Sin Fronteras en protesta paraba el trabajo²⁰³. El periódico británico online *The Independent* resumió un informe de la ONU que incluyó datos sobre detenciones ilegales, tortura y asesinatos por linchamiento²⁰⁴. Amnistía Internacional en Alemania criticó que el NTC no estaba en condiciones de controlar a los rebeldes y tampoco de impedir que las violaciones de los derechos humanos cometidas por el antiguo régimen fueran investigadas inmediatamente²⁰⁵.

Todo esto documenta una vez más las desavenencias graves y dramáticas en la parte beligerante que originalmente luchó contra Gadafi. El canal televisivo suizo *Schweizer Fernsehen* (17.02.2012) realzó que desde la caída de Gadafi, el NTC no lograba garantizar la ley y el orden en Libia; por no hablar del impacto que tiene el estallido de la guerra civil desde 2014 y la expansión sucesiva de terroristas del Estado Islámico en la Libia actual caracterizada por anarquía y una crisis humanitaria de impacto imprevisible²⁰⁶. Hasta la fecha, muchos revolucionarios siguen estando convencidos de una continuación de la Revolución del 17 de febrero, por lo que se niegan a disponer las armas. Aunque sea bienintencionado, su rechazo frente al desarme no contribuye a salvaguardar la revolución y sus logros, sino perjudica la transición de Libia a un Estado estable y seguro. Por eso, y con el fin de establecer una justicia de transición y la paz civil (véase parte III, cap. 2 y 4), no hay alternativa al desarme de los cientos de milicias y grupos armados e incorporarles a la estructura oficial de Estado. Dicho con las palabras del político tunecino Said Ferjani, los revolucionarios de Libia son legítimos, pero carecen de legitimidad (*cit. en Fraihat 2016: 29*).

En resumen, conviene señalar que al considerar las escasas informaciones sobre los rebeldes respaldados por la OTAN a las que se podía recurrir y confiar en 2011, resulta cada vez más problemática la justificación de la guerra por el concepto de la Responsabilidad de Proteger.

²⁰³ Channel4, “MSF suspends work in Misrata amid torture claims”, 26.01.2012.

²⁰⁴ The Independent, “Leaked UN report reveals torture, lynchings and abuse in post-Gaddafi Libya”, 24.11.2011.

²⁰⁵ Amnesty International, “Nordafrika und Mittlerer Osten: Gefahr von Gewalt und Unterdrückung auch 2012”, 10.01.2012.

²⁰⁶ Politische Bildung, “Libyen. Ein Land zwischen Bürgerkrieg und Neuanfang”, 2016.

5.5 El impacto de la muerte de Gadafi en los fundamentos del derecho internacional

Aunque se hayan publicado numerosos artículos de prensa a nivel internacional, no existen informaciones fiables sobre la muerte de Gadafi el día 20 de octubre de 2011. Los artículos coinciden en que el convoy de vehículos en el que se encontraba Gadafi fue tiroteado por tropas de la OTAN; Gadafi fue capturado y murió poco después (*cf.* The Telegraph, 20.10.2011; El Mundo, 21.10.2011). De acuerdo con un informe de un médico que examinó el cadáver, Gadafi murió de un balazo en la cabeza, lo que indica un asesinato o una ejecución (extralegal).

Todavía en aquellos años, en nuestro entorno cultural la ejecución de personas es un asunto que provocaba un rechazo generalizado. Nos sentíamos superiores frente a países como Arabia Saudita, Irán o Bangladesh donde supuestamente ‘una vida humana no vale nada’. Hicimos orgullosamente énfasis en que nuestra cultura cristiana-occidental nos distingue claramente de la barbarie en otras regiones del mundo.

El 20 de octubre de 2011, Muamar el Gadafi fue asesinado en Sirte por las tropas del gobierno de transición²⁰⁷ (*cf.* Die Presse, 05.02.2016). Grabaciones borrosas de cámaras de teléfonos móviles muestran los últimos momentos de vida del hombre que poco antes todavía era bienvenido por todas las grandes potencias a nivel mundial (*cf.* Henken 2011). Quien vio las imágenes en las que Gadafi fue arrastrado por las calles de Sirte por una multitud vociferante de rebeldes armados, medio desnudo, bañado en sangre y casi desmayado, y a pesar de todo se alegra de la victoria de la “libertad”, de los “derechos humanos” y de la “democracia”, aparentemente no ha reflexionado de verdad sobre los acontecimientos. De acuerdo con numerosas fuentes²⁰⁸, en la noche del 19 de octubre, Gadafi hizo una llamada con un teléfono por satélite desde su escondrijo. La llamada fue interceptada por los servicios secretos y el teléfono localizado. Posteriormente, los datos fueron transmitidos a una unidad de los rebeldes en Misrata con el fin de facilitarles la detección de Gadafi en Sirte. La OTAN confirmó que la operación fue observada desde el aire por las unidades occidentales. Al día siguiente por la mañana, desde el escondite detectado se puso en marcha un convoy de varias docenas de vehículos militares, que por un lado fue atacado por aviones de combate franceses, y por otro lado por rebeldes. Según la OTAN, once vehículos fueron tiroteados. En aquel momento, aproximadamente unos veinte vehículos se separaron del convoy y se dirigieron hacia el sur. Este convoy, a su vez, fue atacado desde el aire por los aliados de la OTAN y detenido. En las proximidades inmediatas, Gadafi fue encontrado en una tubería de aguas residuales por los rebeldes, y finalmente asesinado. En su comunicado, la OTAN realzó que en el momento del ataque aéreo no sabía que Gadafi se encontraba en el convoy.

²⁰⁷ FARMER, Ben, “Col Gaddafi killed: no mercy for a merciless tyrant”, 20.10.2011.

²⁰⁸ MCELROY, Damien, “Colonel Gaddafi died after being stabbed with bayonet, says report”, 17.10.2012; BBC Mundo, “La muerte de Gadafi minuto a minuto”, 20.10.2011; El País, “Libia acelera la transición tras la muerte de Gadafi”, 20.10.2011.

Como es sabido, la guerra en Libia y en particular el papel de las unidades occidentales, se fundamenta en la Resolución 1973 de la ONU del 17 de marzo de 2011. Tal como se ha indicado en los capítulos anteriores, la resolución consta de tres puntos principales: exigió “una cesación del fuego inmediata en Libia”, abogó por “la necesidad de intensificar los esfuerzos por encontrar una solución a la crisis que responda a las demandas legítimas del pueblo libio”, y autorizó a las unidades occidentales a imponer “una zona de prohibición de vuelos”, así como a adoptar “todas las medidas necesarias (...) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque”. Pero todavía en marzo de 2011, se levantaron voces que criticaron la intervención militar contra Gadafi y la condenaron como ilegítima (*cf.* Merkel, 22.03.2011), dado que una intromisión militar en Libia no estaba cubierta por el derecho internacional. La dimensión de la Resolución 1973, así como los objetivos vinculados exceden y abusan del derecho (*ibíd.*). Pero no sólo exceden los límites de las normas positivas, lo que sucede a menudo en el derecho internacional y que también forma parte de su desarrollo, sino exceden los límites de sus fundamentos: los principios en los que se fundamenta todo derecho entre los Estados.

Por ende, si aparte de la intromisión muy polémica en el conflicto libio la OTAN estaba involucrada activamente en la muerte de Gadafi (en lugar de haber tomado las medidas necesarias para llevarle ante la justicia), entonces esto no sólo perjudica la credibilidad de la OTAN, sino también la buena reputación de los bienes jurídicos internacionales de las Naciones Unidas. La OTAN niega haber sabido que Gadafi se encontraba en el convoy atacado por las tropas aliadas (*cf.* Die Presse, 05.02.2016). Pero la suposición de que los servicios secretos debían haber informado a los rebeldes en Misrata, pero no a la OTAN parece inverosímil.

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Gobierno español, justificó la muerte de Osama Bin Laden a principios de mayo de 2011 con las palabras “es bastante entendible que las circunstancias hayan dado lugar al resultado de la operación”²⁰⁹, y la canciller alemana Angela Merkel expresó su alegría al haber denominado los acontecimientos un “éxito de las fuerzas de paz”²¹⁰, sus declaraciones, al igual que las de numerosos otros líderes occidentales, representaron un cambio cultural. A más tardar a partir de aquel momento es socialmente aceptable aprobar la ejecución de una persona, si existen argumentos pragmáticos en favor de una matanza determinada.

Teniendo en cuenta la vida de Gadafi, su estilo de gobernar sin duda alguna constituyó una dictadura represiva. Es comprensible que para muchas personas la muerte de un autócrata conlleva la sensación de alivio, y para sus adversarios incluso alegría y júbilo. No obstante, las siguientes reacciones occidentales parecen bastante alarmantes y objetables: cuando Hillary

²⁰⁹ El País, “Zapatero justifica la muerte de Bin Laden”, 04.05.2011.

²¹⁰ RP Online, “Bundesregierung: Erfolg für die “Kräfte des Friedens”, 02.05.2011.

Clinton, la secretaria de Estado en aquel tiempo, supo de la muerte de Gadafi durante una entrevista con CBS (20.10.2011), se echó a reír y bromeó: “We came, we saw, he died”²¹¹. El diario alemán *Die Welt* (29.10.2011) tituló “Gadafi tuvo la muerte que mereció”²¹² y argumentó que existían suficientes razones políticas para justificar la ejecución pública del rey de los reyes. La tiranía de Gadafi era absolutista, monárquica y personal. Mientras que vivía el tirano, podía reinar y aterrorizar (*ibíd.*). Aunque haya bastantes motivos desde la perspectiva del pueblo libio en favor de la ejecución de Gadafi, la justificación del linchamiento por parte de los medios de comunicación occidentales revela un sentido jurídico destacado. En el susodicho artículo no se reflexionó en absoluto sobre la posible ejecución extrajudicial o un asesinato de Gadafi. Es, por lo tanto, un ejemplo de la rapidez con la que los valores fundamentales como el Estado de derecho y los derechos humanos (entre otros: el derecho fundamental a la vida y a un juicio justo) pueden sacrificarse.

En este contexto, también conviene mencionar el comentario crítico del activista político Jon E. Illescas Martínez (21.10.2011). Con referencia irónica al comentario de Ronald Reagan de 1986 al haberse referido a Gadafi como “el perro loco de Oriente Medio”, Illescas Martínez escribe:

El día 20 de octubre de 2011 ha muerto un perro de origen libio llamado Gadafi. (...) el perro Gadafi se encontraba escondido en su ciudad natal de Sirte tras unas tuberías (...). Agraciadamente, los rebeldes de la perrera libia le dieron caza (...). Y luego una vez muerto, para rematar la faena, le hicieron fotos con sus cámaras digitales, como aquellos pescadores que se retratan con el gran atún que acaban de capturar o los cazadores que lo hacen con un ágil ciervo. Pero Gadafi no era ni atún ni ciervo, era un perro y fue cazado como tal. ¿O no? Llegados a este punto nos resulta sorprendente que las asociaciones en defensa de los animales no se hayan pronunciado en contra de esta caza de perros tornada en brutal espectáculo. (...) Tampoco lo han hecho, por supuesto, la mayoría de las más reconocidas ONG y asociaciones en defensa de los derechos humanos, por aquello de que hasta hace bien poco el perro Gadafi era, en realidad, un ser humano. (...) Es curioso que sus antiguos “amigos”, como Aznar, el Rey de España, Zapatero, Berlusconi o Sarkozy le dieran la espalda y olvidaran su condición humana a una velocidad tan sorprendente. (...) Pero la muerte del ser humano Gadafi, su retransmisión, filmación y reproducción en alta definición en todos los medios de comunicación del “veo-sistema-mundo” conforman un espectáculo de muerte bochornoso, asqueroso y repugnante. La imagen del cuerpo de Gadafi destartado, acribillado y surcado por ríos de sangre es un puñetazo en toda la cara para cualquier persona de este mundo que quiera seguir siendo persona, y no perro. (...) Por muy hijo de su madre que fuera Gadafi nada justifica esta muerte y su posterior recreación infame. Hay que ser muy perro para alegrarse de algo así, hay que ser muy fascista para pensar que esto es una buena noticia para nadie. Hace falta estar absolutamente dislocado, disociado y enloquecido para siquiera imaginar que será un avance para esta comunidad fragmentada en mil pedazos llamada género humano. Gadafi debió de ser juzgado por un tribunal independiente, que lo condenara por sus numerosos y presuntos crímenes. Un tribunal repleto de seres humanos que hicieran prevalecer una justicia universal y democrática (...).

Es nuestra supuesta supremacía, basada en los conceptos de la libertad, los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, que consideramos como la justificación de

²¹¹ CBS News, “Clinton on Qaddafi: “We came, we saw, he died”, 20.10.2011.

²¹² SEBAG MONTEFIORE, Simon, “Ende eines Diktators. Muammar al-Gaddafi bekam den Tod, den er verdiente”, 29.10.2011.

nuestra intervención agresiva en los sistemas de otros países. Damos por buena la intromisión agresiva en sistemas de los cuales creemos que violan nuestros valores. Los exportamos al infringir nosotros mismos los conceptos de la libertad, los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en territorio extranjero. Aceptamos que, gracias a la participación de la OTAN, nuestros aliados y el uso de nuestros sistemas de armas y tecnologías militares se mueran personas inocentes todos los días. Creemos que la intervención en Libia estaba justificada, porque queremos considerar a Gadafi un despótico criminal y a los rebeldes como defensores de la democracia. Entretanto, esta imagen polémica se ha arraigado tan profundamente en nuestro pensamiento que ya no causó escándalo cuando los partidarios del gobierno de transición, en parte equipados con ametralladoras modernas del fabricante alemán de armas *Heckler y Koch*, fueron descritos como rebeldes desarmados, o cuando hospitales, escuelas y viviendas privadas fueron bombardeados, y los hijos y nietos de Gadafi asesinados. Hacemos caso omiso del hecho de que muchos miembros del gobierno de transición eran exministros y altos funcionarios públicos de Gadafi, que a su debido tiempo simplemente pasaron a las filas enemigas del antiguo régimen. A pesar de que recelamos de sistemas judiciales basados en la *Sharia* al considerarlos una grave amenaza a nuestra libertad, tomamos con calma la intención del Consejo Nacional de Transición de reconstruir la futura Libia exactamente sobre este fundamento jurídico²¹³. Mientras que la aceptación de un sistema que menosprecia los derechos humanos pueda asociarse con beneficios económicos y/o estratégicos, y mientras que podamos vender nuestras armas y satisfacer nuestra codicia de materias primas, deliberadamente no haremos caso de las violaciones y crímenes de guerra, de regímenes totalitarios y de asesinatos, tortura y persecución. De este modo, durante décadas suministrabamos armas a Gadafi, ya que en contrapartida nos abastecía con petróleo y mantenía alejados los refugiados de Europa. De la misma manera suministramos tanques a Arabia Saudita y Turquía, y apoyamos (in)oficialmente a dictadores en todo el mundo. Si existen alegaciones contra una persona, sea un déspota, un terrorista o un delincuente, si existen indicios comprobables de infracciones legales y pruebas de crímenes de lesa humanidad, entonces tenemos que llevar al sospechoso a juicio para investigar los acontecimientos y evaluar objetivamente las pruebas. Asimismo, el acusado debe tener la oportunidad de defenderse. Si en el marco de la causa contra el acusado se comprueba su culpa, debe cumplir una condena adecuada. Si es juzgado inocente, debe ser liberado y rehabilitado. Y si durante el proceso resulta que hay cómplices, consecuentemente también deben ser llevados ante los tribunales. Pero si fracasamos con este procedimiento, entonces no somos mejores que los que acusamos de atrocidades y que en nuestra percepción fácilmente son vinculados con la denominada “eje del mal”.

²¹³ El Periódico, “El Consejo Nacional de Transición tendrá la ‘sharia’ como base del derecho”, 23.10.2011.

En lo que concierne a Libia, habría sido deseable si el pueblo libio no sólo hubiera logrado liberarse de un régimen autocrático, sino si también hubiera tenido la oportunidad de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo; en beneficio de su población y de conformidad con los artículos idénticos 1 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclamados por las Naciones Unidas en 1966 y entrados en vigor en 1976:

1(1). Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Pero a causa de las explicaciones anteriores, es dudoso si la medida elegida de provocar una guerra (civil) puede considerarse adecuada para realizar o poner en práctica este derecho.

6. Resumen conclusivo

En resumen, es cierto que el gobierno libio no tenía planeado ningún genocidio, pero de acuerdo con la Comisión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas aun así cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, también los rebeldes libios recurrieron considerablemente a la fuerza, a su vez clasificado como crímenes de guerra. Además, estos últimos revelaron grandes tendencias xenófobas, lo que conllevó la tortura y el asesinato de africanos de la región subsahariana. Por consiguiente, un conflicto étnico no fue fomentado por Gadafi (como afirmaron ciertos exmiembros del gobierno libio y el expresidente estadounidense Obama), sino, si es que es cierto, fue provocado por parte de los rebeldes.

Dado que el conflicto en Libia se puede definir como guerra civil “clásica”, la CIISE afirmó que una misión de paz para poner fin al conflicto habría sido la medida más adecuada. Pero cabe destacar que esta opción era descartada desde el principio, sobre todo por Francia, los EE.UU. y el Reino Unido. Aunque la intervención humanitaria *de jure* fue legitimada por la Resolución 1973 (2011) de la ONU con la intención de proteger a la población civil, *de facto* los tres Estados aspiraron a un cambio de régimen no legitimado y de principio contrario al derecho internacional. El espíritu bélico y el rechazo de cualquier intento de encontrar una solución diplomática por parte de los rebeldes y sus líderes políticos es lo que verdaderamente posibilitó la realización de un cambio de régimen violento. Consecuentemente, también se puede hablar de un golpe de Estado respaldado militarmente desde el exterior. Incluso es posible que la intromisión militar de Francia, el Reino Unido y los EE.UU. ha causado una prolongación e intensificación de la guerra civil: en este contexto, hay que señalar que la venta de armas a los rebeldes contrasta notablemente con la exigencia de un alto el fuego y la protección de los civiles. Las proclamadas intenciones humanitarias de los principales actores occidentales apenas se pueden reconocer. Más bien abusaron de la norma reciente de la *Responsibility to Protect* con el fin de satisfacer sus propios intereses nacionales.

Sobre todo Francia podía contar con un aumento de poder en numerosos ámbitos: a París la intervención proporcionó un fortalecimiento tanto militar como político, así como beneficios económicos a causa de su apoyo a los rebeldes. Siendo una potencia ofensiva con pretensiones hegemónicas, Gadafi siempre constituyó un peligro indirecto para Francia, debido sobre todo a la falta de control; un problema que pudo superar exitosamente ‘gracias a’ la intervención.

El interés del Reino Unido en la intervención se puede explicar especialmente por su creciente demanda de petróleo y gas. Dada la disminución de su producción nacional, la seguridad energética es de importancia fundamental para Londres. Por ende, el apoyo a una intervención militar con el fin de garantizar los suministros futuros de energía fue una decisión ofensiva racional. Sin la cobertura continua de la propia demanda de energía son inminentes graves

pérdidas económicas, que a su vez pueden influir negativamente en el estatus del país dentro del sistema internacional.

En lo que concierne a los EE.UU. como última “superpotencia” restante, sus intenciones se fundamentan en dos factores explicables como sigue: en la política exterior estadounidense, el concepto de valores desempeña una función primordial; sobre todo cuando otros intereses vitales no están afectados. Al parecer, la intervención en Libia debía servir la promoción de la democracia y la libertad en el país. Como bien demuestra la historia, la consecución de estos objetivos generalmente mejora la posición y la posible influencia de los Estados Unidos como principal figura estructural en el sistema internacional. Además, la intervención ha fortalecido la capacidad militar de los aliados europeos, lo que al mismo tiempo es de gran interés para los EE.UU., dado que les posibilita un mayor enfoque geoestratégico en Asia.

Rusia y China, que no participaron activamente en la intervención, aunque la consintieron por su abstención, no podían contar directamente con beneficios adicionales. Debido a las demandas del derrocamiento de Gadafi por parte de Francia, Gran Bretaña y los EE.UU., en sus estrategias tanto Rusia como China debían haber considerado la posibilidad de un cambio de régimen, aunque no legitimado. Pero a pesar de ello, como señalado anteriormente, no podían contar con beneficios adicionales. Al contrario, para China y Rusia el objetivo principal era prevenir la pérdida de recursos políticos y económicos existentes. Al tener en cuenta el concepto del neorrealismo (véase parte II, cap. 1.2), con la postura defensiva de estos dos Estados más bien se habría esperado una estrategia de *balancing* (véase parte II, cap. 1.2.2.1 y 1.2.2.2). Sin embargo, los estudios empíricos muestran que también los Estados defensivos pueden unirse a una alianza más fuerte, sin perseguir instrumentos de poder adicionales.

La investigación realizada en esta segunda parte de la tesis demuestra que la intervención humanitaria en Libia no fue llevada a cabo por motivos altruistas, o al menos motivos mixtos. En resumen, los intereses propios de los Estados intervinientes no sólo fueron decisivos para la autorización de la intervención militar, sino la justificaron.

6.1 El éxito está en el ojo de quien lo contempla

Tras la finalización de la misión, el Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, proclamó orgullosamente que fue “una de las más exitosas operaciones en la historia de la Alianza”²¹⁴. Si el indicador del éxito es la medida en la que se logró imponer los intereses occidentales, entonces la euforia del Secretario General es comprensible: el desagradable Gadafi

²¹⁴ Deutsche Welle, “La OTAN sale de Libia: ¿misión cumplida?”, 31.10.2011.

fue eliminado, el acceso a los yacimientos petrolíferos pareció garantizado, y la dinámica revolucionaria en el mundo árabe fue ralentizada al menos parcialmente. Más ambivalente es el resultado en cuanto a la cuestión si se ha logrado implementar un sistema de intervención nuevo y sólido. Teniendo en cuenta el análisis anterior, parece bastante dudoso. De todas formas, solamente personas como el Secretario General de la OTAN, para las que el “éxito” de una intromisión meramente depende de la medida en la que se logró la imposición de los propios intereses económicos y estratégicos, son capaces de hacer un balance positivo con respecto a esta (u otras) intervenciones. El propósito oficial, la “protección de la población civil”, parece una farsa al considerar los hasta aproximadamente 50.000 muertos.

Asimismo, cabe mencionar que debido al trato distinto de Libia *versus* Siria, los autócratas en el mundo se habrán dado cuenta que aparentemente están muy bien protegidos cuanto mejor es su relación con ciertas potencias de las Naciones Unidas con poder de veto, tales como Rusia y China. Y que el desarme y los acuerdos con países como los EE.UU. o Francia no son ninguna garantía frente al riesgo de ofensivas militares.

Ante las dimensiones extraordinariamente complejas de la crisis humanitaria en Libia, es fundamental el apoyo y la asistencia internacionales, tanto en los ámbitos de desarrollo y de salud como política y jurídicamente. Por consiguiente, es de interés esencial analizar en qué medida la comunidad internacional, y en particular la ONU, así como ONGs internacionales y regionales han podido suministrar la ayuda necesaria hasta la fecha, y cómo ha sido aplicado el sistema de protección para los desplazados en el país.

III. Las IDP en Libia, migrantes capturados en crisis: la comunidad internacional frente al reto de encontrar respuestas humanitarias y soluciones duraderas

1. Informaciones generales sobre la crisis libia del desplazamiento

Tras los levantamientos en Túnez y Egipto, también en Libia las protestas contra el gobierno se agravaron rápidamente llevando a un conflicto armado que no sólo puso fin a los cuarenta y dos años del régimen de Gadafi, sino que también causó el desplazamiento inmenso de cientos de miles de personas. En general, se estima que a nivel nacional al menos 500.000 personas fueron desplazadas en 2011 (IDMC, 31.12.2013), resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de Gadafi y la oposición, y del bombardeo dirigido por la OTAN. Aunque la mayoría de las personas desplazadas podían regresar a sus lugares de origen poco después de que el conflicto se disminuyera, se estima que 154.000 de las IDP seguían siendo desplazadas a finales de 2011²¹⁵.

Por causa de la inestabilidad estatal y numerosos conflictos continuos en el país, en 2015 el IDMC informó del desplazamiento interno de otras 100.000 personas a lo largo del país²¹⁶. Hasta mayo de 2011, alrededor de 686.000 libios habían huido a países vecinos, sobre todo a Túnez y Egipto²¹⁷. Asimismo, cabe mencionar el gran número de extranjeros que inmigraron a Libia a lo largo de las últimas décadas. Debido a la economía próspera durante el régimen de Gadafi, el *Migration Policy Centre* informó que, según diversas estadísticas de las autoridades libias, antes de la crisis de 2011, alrededor de 600.000 trabajadores extranjeros regulares vivían en Libia, además de entre 750.000 y 1,2 millones irregulares. Por lo tanto, la OIM estimó que el número total de extranjeros antes de la crisis había ascendido a unos 2,5 millones, incluyendo aproximadamente un millón de egipcios, 80.000 paquistanís, 63.000 bangladeshís, 59.000 sudaneses, 26.000 filipinos, 10.500 vietnamitas, y un gran número de africanos subsaharianos, principalmente del Níger, Chad, Malí, Nigeria y Ghana (cf. MPC 2013: 2). De acuerdo con la estimación de la OIM, unos 768.372 inmigrantes huyeron de la violencia en Libia durante el conflicto de 2011 (*ibíd.*).

Debido a sus estructuras estatales complejas y un desequilibrio histórico con respecto a la representación política y económica de los numerosos grupos étnicos y tribus residentes en el país, los libios no están ajenos al fenómeno del desplazamiento y la expropiación. Pero la escala de la crisis del desplazamiento causado por la revolución en 2011 constituye una crisis

²¹⁵ IDMC, *Global Overview 2011. People Internally Displaced by Conflict and Violence*, Ginebra, 2011, p. 77.

²¹⁶ IDMC, *Global Report on Internal Displacement*, 2016, Ginebra, p. 97.

²¹⁷ Christian Science Monitor, "686,000 Libya refugees flee to Egypt, Tunisia", 05.05.2011.

humanitaria sin precedentes, como los números antes citados también revelan. Numerosas situaciones complejas de desplazamiento perduran todavía, mientras que nuevas crisis de migración forzada han surgido. La escalada de numerosos conflictos violentos entre 2011 hasta la actualidad han causado otro flujo de refugiados y desplazados internos sin precedentes (cf. IDMC 2016). Tras el comienzo de la guerra civil a partir de mayo de 2014 que surgió como consecuencia del empoderamiento de diversas milicias rivales a nivel nacional tras la caída de Gadafi que rechazaron reconocer el NTC y que están controlando vastas partes del país, se estima que alrededor de 400.000 personas se encuentran desplazadas internamente (véase anexo 4, IDMC, *Internal Displacement in Libya*. March 2015). De igual manera, cada vez más libios y trabajadores migrantes huyeron del país al exilio, donde ya se encontraban miles de refugiados desde 2011, frecuentemente en condiciones precarias sin ningún estatus formal (cf. Karasapan 2016). En su mayoría, los libios no han intentado huir por barco a Europa a través del Mediterráneo. No obstante, los traficantes de personas han aprovechado enormemente del caos en Libia al contrabandear un número de solicitantes de asilo e migrantes cada vez mayor a Europa a través de barcas repletas e inseguras, lo que ya ha causado miles de muertos. Principalmente de origen sirio y africano subsahariano, la ruta más establecida para estos refugiados sigue siendo a través del Estado libio²¹⁸.

Aunque haya una diversidad significativa entre los expulsados en cuanto a sus orígenes y causas que llevan a su migración, sobre todo las autoridades libias han supuesto que en particular las personas desplazadas desde hacía mucho tiempo habían sido beneficiarios o por lo menos simpatizantes del régimen de Gadafi²¹⁹. Considerando el gran número de cientos de miles de desplazados de Libia, se puede constatar que la mayoría no eran cómplices de los abusos contra los derechos humanos; sin embargo, estos exiliados temen ser repatriados a la fuerza a Libia, donde, en ausencia de seguridad, un Estado de derecho y un sistema jurídico transparente en la fase de transición, se ven enfrentados al peligro de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. El desplazamiento continuo de ciudadanos libios dentro y fuera de su país conlleva problemas significantes, tanto en el ámbito político como económico, humanitario y de los derechos humanos, lo que no sólo tiene un impacto fundamental en el destino de los desplazados mismos, sino también en el Estado libio, las sociedades de los países vecinos y en la comunidad internacional.

Por consiguiente, el objetivo de esta tercera parte de la presente tesis será analizar los dimensiones e impactos complejos de la situación del desplazamiento libio. Mientras que la

²¹⁸ Véase entre otros: The Independent, “Babies among more than 200 refugees drowned boat disaster in the Mediterranean Sea”, 03.11.2016; NYT, “Three Days, 700 Deaths on Mediterranean as Migrant Crisis Flares”, 29.05.2016.

²¹⁹ MANDRAUD, Isabelle, “Kadhafi est toujours là pour les Libyens de Tunis”, en Le Monde, Tunis, 13.05.2014.

resolución de esta crisis humanitaria depende por gran parte de negociaciones exitosas para poner fin a la guerra civil, esta tesis debe proporcionar un posible fundamento por el cual se podrían identificar estrategias constructivas que a su vez deberían impulsar la mejora de la asistencia humanitaria actual, y de esta manera aportar una contribución útil con respecto a posibles soluciones duraderas para los libios desplazados, tanto a nivel nacional como internacional. Ambos grupos, es decir, los desplazados internos y los refugiados transfronterizos libios, así como los refugiados de terceros países que quedan varados en Libia, tenían que abandonar sus hogares y afrontar desafíos muy similares debido a guerras u otras situaciones de emergencia, por lo que urgentemente requieren de ayuda internacional. Por lo tanto, el siguiente análisis no sólo abarcará la situación de los desplazados internos, sino también de los libios que tenían que huir de sus hogares y exiliarse a países vecinos, así como los refugiados extranjeros encontrándose en territorio libio.

Aunque hay poblaciones considerables de exiliados libios en varios Estados, el mayor número de los desplazados se ha refugiado en Túnez. Más de seis años después del colapso del régimen de Gadafi, estas situaciones de desplazamiento continuo son ante todo un símbolo de la incapacidad estatal de establecer seguridad y estabilidad política en la Libia postrevolucionaria. Asimismo, hasta hoy día ha fracasado instaurar un sistema de justicia transicional e imparcial capaz de abordar los reclamos todavía pendientes, y, a largo plazo, conseguir la reconciliación en la sociedad, es decir, entre los individuos afectados, los diferentes grupos tribales y el Estado. El esfuerzo a encontrar soluciones duraderas para mejorar las condiciones de los libios desplazados presenta un aspecto fundamental con respecto a los derechos humanos. Además, es un factor clave para la seguridad regional y nacional del Estado, dado que en situaciones de desplazamiento duradero puede conllevar el desarrollo de una población marginada excluida de la oportunidad de participar en procesos pacíficos que fomenten la reconciliación.

Aparte del establecimiento de la seguridad en el país y la consolidación de la justicia debilitada, es fundamental tener en cuenta que la resolución de la crisis de desplazamiento de Libia requerirá el involucramiento activo de los libios desplazados en procesos restablecidos de justicia y reconciliación. Será de importancia primordial que estos procesos se centren particularmente en la responsabilidad individual y no comunitaria de las atrocidades, sobre todo porque la gran mayoría de las IDP y refugiados no participaban activamente en las violaciones de los derechos humanos. Consecuentemente, será imprescindible encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas por las violaciones pasadas, y, al mismo tiempo, la prevención del establecimiento posible de la “justicia del vencedor”²²⁰. Esto requerirá que la justicia transicional y los esfuerzos

²²⁰ “La expresión “justicia del vencedor” se aplica a una situación en la que la parte que realiza la “justicia” aplica normas distintas para juzgar lo que es bueno o malo para sus propias fuerzas y para las del (ex) enemigo. Se defiende generalmente que la diferencia entre las reglas supone

de reconciliación aborden los crímenes cometidos no sólo durante el régimen de Gadafi, sino también durante la revolución y la guerra civil que la ha seguido. Los desafíos relacionados son múltiples: el derrumbamiento y la fragmentación del Estado libio en el contexto de la guerra civil, la falta de capacidad estatal para instaurar el orden público, y el marco jurídico de Libia conteniendo leyes que inmunizan contra enjuiciamientos de los que hayan cometido crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos en caso de que fueran “necesarios” durante la Revolución del 17 de febrero. Como consta Kersten (2016):

In the months following the end of the Libyan civil war, the NTC passed a blanket amnesty (Law 38) while the General National Congress (GNC), elected in July 2012, passed the Political Isolation Law. These policies emerged from a context in which the former Libyan opposition forces ensured, through coercion, not only that they would escape investigation or prosecution but would be protected from prosecution. Both fit within the post-conflict narrative, accented by ICC inaction to investigate or prosecute rebel crimes, that Libya must marginalize, isolate, punish and also purge individuals associated with the Gaddafi regime whilst shielding militias from accountability. (cap. 7, III (i))

Tanto en Libia como en los países vecinos afectados por revoluciones y los cambios violentos de régimen en el marco de la Primavera Árabe, se requieren marcos políticos consolidados y apoyo internacional para poder lograr su implementación efectiva y asegurar respuestas concretas al desplazamiento interno y transfronterizo. Hasta que se establezcan las condiciones de seguridad en Libia, será indispensable un mayor compromiso y apoyo internacionales con el fin de asegurar que los países vecinos de Libia mantengan abiertas sus fronteras para poder seguir ofreciendo refugio para los desplazados necesitados.

Debido al impacto enorme que ha conllevado la revolución libia con respecto a la crisis del desplazamiento en el país, este capítulo comenzará con un breve resumen de los acontecimientos más destacados al exponer los factores claves que permitieron la contención relativamente rápida del conflicto inicial. Asimismo, serán explicados los aspectos que, a causa del estallido de la guerra civil en 2014, aumentaron el desplazamiento de cientos de miles de personas que ya habían perdidos sus hogares durante los levantamientos de 2011. Por consiguiente, también se investigarán los motivos y razones del desplazamiento que han surgido con el estallido de la guerra civil. En el marco del estudio de este caso concreto, también será llevado a cabo un análisis detallado de las dimensiones tanto políticas como socioeconómicas y humanitarias que ha conllevado la crisis de desplazamiento interno y transfronterizo de Libia, dado que una parte considerable de la población afectada se está enfrentando a situaciones de desplazamiento de larga duración. Como ha sido estudiado exhaustivamente y de forma global en la primera parte de

la presente tesis, se discutirán los obstáculos a soluciones duraderas para los libios desplazados y se compararán las problemáticas y conclusiones determinadas en la parte I. Asimismo, se analizarán las perspectivas para poder abordar estos obstáculos. A este respecto, será imprescindible tener en cuenta el vínculo entre la justicia transicional y los procesos de reconciliación en cuanto a la resolución de la crisis del desplazamiento interno.

Esta discusión se basará en la conciencia que sin un aumento considerable, tanto en cuanto a la seguridad como la estabilidad en Libia, no será posible resolver la crisis humanitaria del desplazamiento. Por lo tanto, y al tener en cuenta las conclusiones tomadas en el resumen de la parte I, esta tercera parte terminará con recomendaciones para los diferentes actores involucrados. Al igual que los capítulos anteriores, los siguientes se fundamentarán en un análisis extenso de documentos pertinentes, sobre todo del ámbito jurídico, político y migratorio. Asimismo, y con el fin de complementar la parte teórica de investigación, serán incluidas numerosas declaraciones y observaciones procedentes de una serie de entrevistas que se llevaron a cabo entre primavera y verano de 2016 con varios refugiados libios, en aquel entonces alojados en el *Patrick-Henry-Village*, un antiguo cuartel y base militar estadounidense en Heidelberg, Alemania. Debido al flujo enorme de refugiados llegados a Alemania sobre todo a partir de mediados de 2015²²¹, fue convertido en un centro provisional de alojamiento para más de 3.000 solicitantes de asilo (a 20 de mayo de 2016²²²). Entre los entrevistados se encontraron personas con historias y motivos de huida muy distintos, dependientes por gran parte de su grado de implicación en el antiguo régimen o su relación con Gadafi. Gracias al conocimiento del idioma inglés relativamente bueno de todos los participantes, las entrevistas fueron realizadas en inglés y el contenido posteriormente traducido al español por la autora. Con el fin de proteger la confidencialidad de los refugiados, todo tipo de datos identificativos fue suprimido.

1.1 Dos conceptos, dos realidades jurídicas: IDP *versus* refugiados

De acuerdo con lo que ya hemos visto en la parte I, capítulos 1 y 7 de la presente tesis, de acuerdo con los *Guiding Principles on Internal Displacement* de 1998, el término “IDP” se utiliza para denominar a

(...) las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han

²²¹ Hasta finales del año 2015, más de 900.000 refugiados llegaron a Alemania. En comparación, hasta diciembre de 2016 se registraron 280.000 refugiados (LPB Landeszentrale für politische Bildung Ba-Wü, “Flüchtlinge in Deutschland”, 2017).

²²² RNF, “Heidelberg: Noch mehr Flüchtlinge auf dem Patrick-Henry-Village”, 20.05.2016.

cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (OCHA, E/CN.4/1998/53/Add.2, Introducción, 2.)

Con respecto a la denominación “refugiado”, la definición se distingue. En virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se entiende por refugiado a toda persona que

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. (art. 1, A.2; véase parte I, cap. 2.1)

La Convención de la Organización para la Unidad Africana por la que se regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África, aprobada en 1969, amplió esta definición al incluir

a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad. (art. 1.2)

No obstante, ambas convenciones tienen en común ciertas cláusulas de exclusión que indican que las personas que cometieron

un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada; que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. (Convención de 1951, art. 1, F. a-c; Convención de 1969, art. 1.5)

En lo que concierne a los exiliados libios, sobre todo en Túnez, la gran mayoría que ha buscado refugio en este país vecino no se ha registrado formalmente como solicitantes de asilo y no ha obtenido el estatus oficial de refugiados. Esto se debe sobre todo al hecho de que no necesitan ningún visado para entrar a este país vecino, y a un acuerdo de 1973 que regula que los libios por principio tienen el permiso de trabajar, establecer negocios y moverse libremente dentro de Túnez (*cf.* Karasapan 2015).

En consecuencia, y con el fin de evitar confusiones, en los siguientes capítulos generalmente se utilizará el término “desplazados” y “exiliados” para referirse a los libios que, por diversas razones, han abandonado su país y no pueden regresar, pero que al mismo tiempo no necesariamente han buscado o obtenido el reconocimiento como refugiados. De cualquier modo, si los libios que buscan refugio en los Estados vecinos son reconocidos o no como refugiados,

tienen el derecho definido a no ser repatriados a su país de origen si están expuestos a peligros graves como la tortura. Este derecho está establecido en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada y ratificada por la Asamblea General en diciembre de 1984 y entrada en vigor el 26 de junio de 1987²²³. En este contexto, cabe mencionar que los Estados principales que acogieron la mayor parte de los desplazados libios, incluyendo Egipto y Túnez, firmaron la Convención, por lo que la no devolución de individuos a países donde estarían expuestos a peligros masivos generalmente se considera una norma consuetudinaria del derecho internacional.

Como señalado en la primera parte de la tesis, las situaciones de desplazamiento sólo pueden resolverse de forma persistente si se logran soluciones duraderas, tanto para las IDP como para los refugiados. Como el denominado *Inter-Agency Standing Committee* (Comité Permanente entre Organismos) determina en su “Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos”, las IDP tienen el derecho a una solución duradera del desplazamiento. Esto se habrá conseguido

(...) cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección específicas vinculadas con su situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa condición. (A/HRC/13/21/Add.4, p. 2)

Las soluciones duraderas para las IDP incluyen, como indicado también en la parte I, el retorno voluntario y “la reintegración sostenible en el lugar de origen”, “la integración local sostenible en las zonas en que se hayan refugiado los desplazados internos”, o “la integración sostenible en cualquier otra parte del país (asentamiento en otra parte del país)” (*ibíd.*). Para los refugiados se aplica un conjunto similar de soluciones, por lo que también deben tener la posibilidad de repatriarse voluntariamente a su país de origen, integrarse localmente en su país de asilo o reasentarse en un tercer país.

Siendo ciudadanos con derecho a la libre circulación dentro de su propio país, en principio las IDP pueden elegir libremente entre las tres soluciones duraderas al desplazamiento, aunque en la práctica a menudo es difícil de realizar. En cambio, los refugiados tienen el derecho de regresar a su país de origen, pero generalmente no tienen el derecho legal explícito a la integración local o al reasentamiento en un tercer país (*cf.* International Justice Resource Center, 2017).

²²³ Artículo 3: 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos (*cf.* ONU, Oficina del Alto Comisionado, Asamblea General, 10.12.1984).

2. El significado de la justicia transicional y de la reconciliación nacional en el contexto de la crisis libia

2.1 El concepto de la justicia transicional y su aplicación en Libia desde 2011

Mientras que las definiciones jurídicas y operacionales determinan respuestas a los flujos de refugiados e IDP, la terminología a la que se recurre con respecto a los procesos de la justicia transicional y de la reconciliación se distingue bastante y parece más ambigua. Por lo general, la justicia transicional puede entenderse como sigue:

The term ‘transitional justice’ ‘comprises the full range of processes and mechanism associated with a society’s attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses’²²⁴. These processes enable societies to repudiate those abuses and achieve reconciliation by ending impunity and ensuring accountability. In the last two decades, transitional justice measures – criminal justice, truth seeking mechanism, reparations, and institutional reforms – have become essential to peace-building after conflict, figuring prominently in democratic transitions in Latin America and post-apartheid South Africa. (Wierda 2015: 153-154)

El concepto de la justicia transicional abarca un conjunto de medidas que pueden implementarse para indemnizar los legados de violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas durante conflictos armados y bajo regímenes autoritarios (*cf.* Duthie 2011: 243). En este contexto, la “indemnización” significa, en primer lugar, fortalecer las normas de los derechos humanos que fueron violados sistemáticamente. Con las diferentes medidas, que en conjunto constituyen un enfoque integral de la justicia transicional, se intenta aportar al reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, fomentar la confianza cívica y promover las posibilidades de paz, reconciliación y democracia. Incluyen, entre otras, el enjuiciamiento penal de los responsables de las violaciones; programas de reparaciones que proporcionan a las víctimas diferentes beneficios materiales y simbólicos, incluyendo compensaciones y disculpas oficiales; programas de restitución por los que se procura devolver o proporcionar viviendas, tierras y propiedades confiscadas; iniciativas de búsqueda y reivindicación de la verdad que investigan e informan sobre los abusos pasados; y una reforma del sistema de seguridad que preste atención especial a cuestiones de justicia con el fin de transformar la conformidad pasiva del militar, la policía y el sistema legal en una responsabilidad activa de las violaciones pasadas (*ibíd.*).

Por consiguiente, en el caso de Libia una reforma del sistema de seguridad deberá incluir también un proceso de cambio del personal, es decir, destituir a los implicados cómplices en los abusos del pasado de los cargos oficiales de poder. Pero frente al estallido de la guerra civil y la fragmentación del gobierno libio, la mayoría de los procesos de la justicia transicional iniciados como resultado de la revolución de 2011 se han estancado. De todos modos, en lo que concierne a

²²⁴ United Nations Secretary-General, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies”, S/2004/616, 23.08.2004, párr. 8. *Apud.*; WIERDA, Marieke, “Confronting Qadhafi’s Legacy. Transitional Justice in Libya”, en COLE, P.; MCQUINN, B. (ed.), *The Libyan Revolution and its Aftermath*, Hurst & Company, Londres, 2015, pp. 153-154.

la destitución de ejecutivos en el ámbito político, la ‘versión libia’ de este proceso, denominada “aislamiento político” (*al-azl-al-siyasi*), se estableció entre 2012 y 2013. Durante la revolución de 2011, el NTC propuso un proceso relativamente modesto que debía excluir solamente a aquellos que, según las palabras de Mustafa Abd al-Jalil²²⁵, tenían “blood on their hands” (*cit. en Wierda 2015: 160*). Pero en verano de 2012, el NTC estableció la denominada *High Commission on Integrity and Patriotism (Integrity Commission)*. Durante el periodo de transición, su ámbito de responsabilidad incluía el Congreso General de la Nación (GNC)²²⁶, así como funcionarios gubernamentales, diplomáticos y miembros de otras instituciones, incluido el sector de la seguridad, pero no judicial. Cabe mencionar que en el marco de la transición, la comisión excluyó, entre otros, a todos los miembros tuareg elegidos para el GNC, lo que demuestra que los intentos de realizar una reforma institucional revelaron cada vez más características de luchas por el poder político en el país, en lugar de abordar los crímenes del pasado.

Teniendo en cuenta este contexto transicional complejo, el principal desafío de Libia ha sido la imposibilidad de encargarse de todos los detenidos o supuestamente involucrados en crímenes pasados, ya que esto implicaría miles de juicios para los cuales el Ministerio de Justicia hasta la fecha no dispone ni de suficiente personal ni de la capacidad (*ibíd.* 165). Al redactar estas líneas, aún no es capacitado para cumplir con las expectativas, y, consecuentemente, conlleva tanto descontento entre los grupos revolucionarios frente a los fiscales que intentaron liberar a numerosos detenidos como frustración entre la sociedad que espera, aunque poco realista, que todos los “criminales” sean juzgados. Pero como Wierda (2015) destaca, ajustar los juicios a los estándares internacionales requiere fundamentalmente de tiempo y de recursos. Como punto de referencia y con el fin de aclarar el dilema presente, conviene mencionar la Cámara para Crímenes de Guerra de Bosnia, un tribunal nacional con asistencia internacional que en unos aproximadamente ochenta juicios de 2004 a 2012 condenó alrededor de 110 personas (*ibíd.*). Asimismo, cabe señalar que los procesos de justicia transicional no necesariamente conllevan la reconciliación. No obstante, muchos afectados y sobrevivientes de un conflicto violento insisten en que la reconciliación no es posible en ausencia de procesos integrales dedicados a la búsqueda de la verdad con respecto a las atrocidades y la responsabilización por los crímenes.

Los procesos de justicia transicional intentan mejorar estos aspectos de diferentes maneras. En el caso de Libia, la guerra civil ha provocado incontables injusticias adicionales que obstaculizan

²²⁵ Mustafa Abd al-Jalil es un político libio que fue el primer presidente del NTC desde el 5 de marzo de 2011 hasta su disolución el 8 de agosto de 2012. Hasta la entrega del poder al Consejo General de la Nación (GNC) fue jefe de Estado *de facto* de Libia. Anteriormente, es decir, durante la Jamahiriya Árabe Libia, fue Ministro de Justicia bajo el régimen de Gaddafi (Islamopedia online, “Mustapha Abd al-Jalil”, 2016).

²²⁶ Tras la disolución del Consejo Nacional de Transición en agosto de 2012, el órgano que asumió el poder después de la caída del régimen de Gaddafi en el marco de la revolución de 2011, “la dirección de la nueva Libia pasó al Congreso General Nacional encabezado por Muhammad al-Megarif, al que puede considerarse el primer jefe del Estado, aunque sin la condición de un presidente de república, con la legitimidad estrictamente democrática en la historia del país”. Las responsabilidades del Congreso General de la Nación se extendieron hasta la aprobación de un parlamento elegido definitivo, o sea la Cámara de Representantes de Libia (Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), “Quién es quién en el conflicto de Libia”, 2015).

aun más las perspectivas de reconciliación. Debido a su dimensión emocional que abarca, la reconciliación no es ningún ‘concepto’ con definición explícita, ya que su significado no sólo difiere entre diferentes individuos y comunidades, sino también se determina por diversas experiencias, historias y compromisos culturales y morales. A pesar de ello, se puede realzar que la reconciliación generalmente se entiende como un proceso que implica la (re)construcción de relaciones de confianza y solidaridad (*cf.* Quinn 2009: 5). Este proceso puede desplegarse en diferentes niveles, desde el ámbito interpersonal y comunitario, hasta el nivel nacional e internacional (*ibíd.*).

2.2 La reconciliación nacional como parámetro de transición frente a una sociedad escindida

El proceso de transición que sigue el cambio de régimen es intrínsecamente complejo y puede provocar el resurgimiento de problemas pasados, a veces casi olvidados. Además, cambios rápidos y precipitados pueden crear preocupaciones adicionales, sobre todo en el caso de que una sociedad se haya estancado durante muchas décadas debido a una falta de reformas políticas profundas. Ambas cuestiones pueden resultar muy polémicas y llevar a la escisión de la sociedad afectada, aunque se haya esperado mantener un sentido de unidad tras la caída del dictador. Al contrario, la unidad nacional puede reemplazarse por la polarización cuando un régimen, que solía restringir gravemente cualquier tipo de disenso, ya no esté en el poder.

No obstante, hay que destacar que la polarización como consecuencia de un cambio de régimen no es inevitable. Es de suponer que las sociedades árabes podrán transitar exitosamente de los disturbios de la Primavera Árabe a una paz y estabilidad sostenibles, si logran comprometerse a una reconciliación nacional de forma inclusiva e integral. Ésta también debe incluir las cuestiones que dividen al Estado afectado en la actualidad. Por lo tanto, aparte de la búsqueda de la verdad, las reparaciones y la responsabilidad, el concepto de la reconciliación nacional trata asuntos actuales como el reasentamiento de los refugiados e IDP, el diálogo nacional, el desarme, la reintegración de excombatientes y la reforma institucional que en su conjunto son aspectos esenciales para que una sociedad sea capaz de recuperarse de sus heridas, de reconciliarse y seguir adelante (Asamblea General de la ONU, A/HRC/13/21/Add.4). Mediante la reconciliación nacional, estas sociedades pueden prevenir conflictos civiles y mantener o recuperar la unidad nacional. Comprender tal proceso puede ayudar a mantener las sociedades unidas y enfocadas en superar los desafíos enormes que causan las transiciones políticas (*cf.* Wierda 2015: 159-163). Pero con respecto al proceso de transición en los países árabes y al tener en cuenta los acontecimientos históricos en la región, es evidente que el nivel de polarización es enorme:

generalmente, en la época postcolonial los pueblos árabes carecían de experiencia en cuanto a la elaboración de contratos sociales, dado que justo después de haber ganado la independencia, llegaron al poder gobernantes autoritarios. Enfrentados por primera vez a cuestiones fundamentales sobre sus Estados, estos pueblos tienen problemas enormes con la falta de un concepto claro en cuanto a los fines verdaderos de sus levantamientos. Como dice Fraihat (2016: 3), “people are not certain whether they want Western-style democracy, something akin to Turkey’s Islamic model, their own version of democracy, or perhaps no democracy at all”. Aparte de las cuestiones conflictivas sobre la naturaleza futura de sus Estados, los levantamientos mismos presentan acontecimientos muy tumultuosos que a su vez provocan el surgimiento de más cuestiones y problemas que contribuyen a altos niveles de polarización. Con respecto a Libia, cabe realzar que el conflicto que llevó a la caída de Gadafi causó el desplazamiento de unos 700.000 a un millón de refugiados e IDP (OIM, DTM Round 3, March-April 2016, p. 2), un número que equivale a una sexta parte de la población libia (*ibíd.*). Además, el estallido de la guerra civil en 2014 probablemente se ha convertido en el impedimento más grave para una transición pacífica en el país.

En Libia, la polarización nunca ha sido más intensa que desde el comienzo de los disturbios en 2011. El levantamiento no sólo llevó a la caída del antiguo régimen, sino también ha quebrantado la sociedad. La primera escisión destacada por los levantamientos se produjo entre los partidarios del régimen de Gadafi y los revolucionarios que lideraron la rebelión en su contra. En este contexto, cabe mencionar que las prisiones secretas y la tortura contra simpatizantes e involucrados del régimen se han convertido en una de las características más chocantes de la Libia actual (Human Rights Council, A/HRC/19/68, 08.03.2012). La fragmentación posterior de los mismos revolucionarios ha conllevado un efecto destructivo particular. Los revolucionarios que prevalecieron sobre Gadafi se han dividido en cientos de milicias independientes repartidas por todo el país con cada una de ellas intentando dominar su propio territorio y entrando rápidamente en conflicto entre sí. En mayo de 2014, las luchas alcanzaron niveles sin precedentes, cuando el general retirado Jalifa Haftar formó una coalición y lanzó una campaña militar, llamada *Operation Dignity*, para eliminar a los islamistas de la escena política de Libia. Los revolucionarios a su vez formaron una alianza en contra, llamada *Libya Dawn*, con el fin de derrotar a Haftar y sus aliados. Este enfrentamiento sucesivamente exacerbó la escisión estructural del país que culminó en la formación de dos parlamentos: por un lado el Congreso General de la Nación (CGN; en inglés: *General National Congress*; GNC) en el oeste del país con sede en Trípoli que apoya a *Libya Dawn*, y por otro lado la Cámara de Representantes (en inglés: *House of Representatives*; HoR), con sede en el este, en Tobruk, que apoya a Haftar y su

Operation Dignity. A consecuencia, también se formaron dos gobiernos, uno respaldando *Libya Dawn* y otro respaldando *Operation Dignity*²²⁷. El levantamiento también ha causado escisiones entre ciudades y tribus que en su momento apoyaban o se oponían a la revolución; hoy día, algunas tribus apoyan a Haftar, mientras que otras respaldan partidos y milicias islamistas. La escisión estructural también se revela significativamente en el discurso nacional. Por ejemplo, a causa de la revolución libia se califica a ciudades y tribus enteras como *azlam* (“secuaces”, es decir, partidarios del régimen) y los demás como *thuwar* (“victoriosos”, es decir, revolucionarios en contra de Gadafi). Por supuesto, a los *azlam* se asocia con la vergüenza y la desgracia, mientras que los “victoriosos” son considerados honorables (*ibíd.* 24).

Con una sociedad tan profundamente dividida y destrozada como en el caso de Libia, parece poco probable que una transición exitosa a un nuevo sistema de gobierno estable sea posible mientras que el estado de polarización prevalezca. Por lo tanto, la reconciliación nacional es el proceso primordial relativo a reclamos y reivindicaciones de los afectados del conflicto con el fin de poder establecer un nuevo contrato social (*ibíd.* 7). Entre los factores esenciales que definen si un proceso de reconciliación nacional resulta efectivo, destacan sobre todo:

- un diálogo nacional entre las partes interesadas primarias (*national dialogue*),
- la búsqueda de la verdad de lo que realmente ocurrió en el pasado (*truth-seeking process*),
- la prestación de reparaciones del daño causado a las víctimas durante el conflicto (*reparations*),
- exigir responsabilidades al régimen anterior por sus actos (*handling of former regime elements*), y
- reformar las instituciones estatales (*institutional reform*) (*cf.* Sharquieh 2013: 23-32; Fraihat 2016: 9-12).

Por supuesto, la reconciliación no logrará eliminar por completo los daños causados en el pasado, pero puede evitar que tales daños sean los factores determinantes del futuro de las respectivas partes y sus relaciones mutuas. Si no logran reunirse para abordar el pasado y colaborar con el fin de avanzar y construir un nuevo futuro para sus sociedades, las rebeliones de la Primavera Árabe en última instancia sustituirán a las dictaduras por nuevas formas de sistemas opresivos y excluyentes.

Al redactar estas líneas, o sea más de seis años después de los primeros levantamientos, es exactamente lo que surgió en el contexto libio: en mayo de 2013, los revolucionarios que dominaron el Estado en aquel entonces excluyeron a todos los funcionarios del antiguo sistema a

²²⁷ European Council on Foreign Relations, “A Quick Guide to Libya’s Main Players”, diciembre de 2016; BBC News, “Guide to key Libyan militias”, 11.01.2016.

través de la adopción de la denominada *Political Isolation Law* (PIL)²²⁸, la Ley de Aislamiento Político, que impide a todas las personas que colaboraron con el antiguo régimen a ocupar un cargo gubernamental durante un periodo de diez años. Pero, en cambio, cabe realzar que algunos grupos revolucionarios y milicias también han cometido atrocidades similares a las del régimen de Gadafi, especialmente la tortura a opositores en prisiones secretas, lo que incluso puede considerarse como crímenes de guerra (véase parte II, cap. 3.1.2; parte III, cap. 5.1.3). Este tipo de acontecimientos aumenta la polarización, lo que en Libia también se hace notar a través de la celebración de la fiesta política nacional principal: los libios que apoyaban a la revolución hoy día conmemoran su fecha de inicio, o sea el 17 de febrero; pero los leales del antiguo régimen de Gadafi, en la actualidad excluidos de la sociedad, todavía celebran el 1 de septiembre, o sea el aniversario del Golpe de Estado de 1969²²⁹. Por todo ello, un proceso global de reconciliación nacional sería la oportunidad mejor para abarcar y resolver estos y numerosos otros asuntos complejos.

Los países de la Primavera Árabe se enfrentan a una amplia gama de desafíos inmensos, pero en primer lugar será de importancia clave desarrollar principios nuevos de narrativas nacionales con los que sus poblaciones pueden relacionar e identificarse. Un proceso inclusivo de reconciliación nacional constituye la posibilidad más esperanzadora para poder lograr este fin.

²²⁸ Human Rights Watch, “Libya: Reject ‘Political Isolation Law’”, 04.05.2013; BBC News, “Libya revokes bill which banned Gaddafi-era from office”, 02.02.2015.

²²⁹ The Libya Observer, “Libya celebrates anniversary of February revolution”, 17.02.2016.

3. Cronología de los acontecimientos bélicos más importantes desde 2011

2011

Febrero – Tras rebeliones masivas en otros países árabes, sobre todo en Egipto y Túnez, las protestas violentas también estallan en Libia con el “Día de la Ira” el 17 de febrero, causando los primeros muertos. Numerosas unidades del ejército se pasan a las filas de los rebeldes. Desde Bengasi, los levantamientos se extienden a otras ciudades, lo que provoca enfrentamientos cada vez más violentos entre las fuerzas de seguridad y los rebeldes anti-Gadafi.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1970 el 26 de febrero, por la que se remite la situación en Libia a Luis Moreno Ocampo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en aquel entonces.

El 27 de febrero, fuerzas anti-Gadafi forman el Consejo Nacional de Transición (NTC) en la ciudad liberada de Bengasi y actúan como autoridad ínterin en las zonas ocupadas por los rebeldes.

Mientras tanto, la violencia provoca la huida de cientos de miles de libios y trabajadores extranjeros hacia Túnez y Egipto.

Marzo – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1973 el 17 de marzo autorizando un embargo de armas, la congelación de activos de autoridades libias, una zona de exclusión aérea sobre Libia y la demanda de una cesación del fuego inmediata. Asimismo, autoriza ataques aéreos para proteger a los civiles con la OTAN asumiendo el mando. De esta manera, la resolución establece la base jurídica para la intervención militar a partir del 19 de marzo, dirigida por la OTAN.

Abril – Tras ataques masivos contra numerosas ciudades por las fuerzas de Gadafi, libios de las montañas Nafusa se refugian en Túnez.

Junio – La Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra Gadafi y otros altos funcionarios del régimen.

Julio – El Grupo de Contacto Internacional para Libia reconoce formalmente al NTC como gobierno legítimo de Libia.

Agosto – Gadafi se esconde en su ciudad natal Sirte tras la conquista de Trípoli por los rebeldes. Los habitantes de Tawergha son desplazados masivamente. Junto con otros sesenta países, la UA reconoce al NTC como la nueva autoridad libia. El NTC expide una Declaración Constitucional estableciendo un plan de transición de Libia hacia una democracia constitucional.

Octubre – Sirte y otras ciudades y áreas todavía controladas por fuerzas pro-Gadafi son conquistadas por combatientes rebeldes. La muerte de Gadafi el 20 de octubre marca el fin de la revolución libia. Pocos días más tarde, el NTC declara Libia oficialmente como “liberada” y anuncia planes para celebrar elecciones en un plazo de ocho meses.

2012

Febrero – Fuerzas de Misrata cometen ataques mortíferos en el campamento de Janzour cerca de Trípoli albergando a IDP de Tawergha. Los libios celebran el primer aniversario de la revolución.

Marzo – Funcionarios del NTC en Bengasi lanzan una campaña con el fin de restablecer la autonomía de esta región oriental rica en petróleo, lo que aumenta aun más la tensión en las relaciones con el NTC central en Trípoli.

Julio – Se llevan a cabo las primeras elecciones democráticas en Libia. Un mes más tarde, el NTC es reemplazado por el Congreso General de la Nación encargado con la elaboración de una nueva constitución nacional.

Agosto – El NTC traspasa el poder al elegido GNC. Se considera la primera transición pacífica del poder desde el final de la monarquía libia en 1969.

Septiembre – Milicianos islamistas atacan el consulado de los EE.UU. en Bengasi y asesinan a cuatro estadounidenses, incluyendo el embajador.

Octubre – El GNC elige a Ali Zeidan, un antiguo abogado de derechos humanos en Ginebra y representante principal y liberal de la oposición durante la guerra libia de 2011, para el cargo de primer ministro.

2013

Mayo – El presidente del GNC, Mohamed Yousef al-Magariaf, declara su renuncia en cumplimiento con una nueva ley (*Political Isolation Law*) que prohíbe a los ex funcionarios de Gadafi ocupar cargos públicos.

Agosto – La milicia Guardia de las Instalaciones Petroleras bloquea las terminales de exportación de petróleo.

Octubre – El primer ministro libio, Ali Zeidan, es secuestrado por milicias y liberado pocas horas más tarde.

Noviembre – Los enfrentamientos armados se intensifican cada vez más, sobre todo en las ciudades libias, lo que induce la declaración de estado de alerta.

2014

Febrero – Jalifa Haftar, el teniente general de la LNA (*Libyan National Army*, un conglomerado de diferentes milicias anti islamistas), llama al derrocamiento del GNC.

Marzo – A Ali Zeidan se le retira el cargo de primer ministro del GNC tras haber perdido una moción de censura.

Mayo – El general Jalifa Haftar lanza la *Operation Dignity* en el este de Libia con el objetivo declarado de luchar contra el terrorismo y derrocar el parlamento. Se forma la coalición de *Libya Dawn* para oponerse contra Haftar y para respaldar al GNC.

Junio – Tras pocas semanas en el cargo, el primer ministro Ahmed Maiteg (GNC) renuncia después de que la corte suprema determinara su elección como inconstitucional.

Las elecciones del nuevo parlamento HoR llevadas a cabo en el mismo mes cuentan con una baja participación (18%) atribuida a los temores por la seguridad y boicoteos. Los partidos islamistas sufren una fuerte derrota. La coalición de *Libya Dawn* rechaza el reconocimiento del resultado de las elecciones. Luchas estallan entre las fuerzas leales a los dos gobiernos respectivos. A nivel internacional, la HoR es considerada el único gobierno legítimo de Libia. Su presidente es Aguilah Saleh Issa.

Julio – Debido al agravamiento de la situación de seguridad, la ONU retira su personal internacional restante en el país, las embajadas cierran y numerosos extranjeros son evacuados. Entre *Libya Dawn* y las Brigadas de Zintan²³⁰ se libra una batalla por el aeropuerto internacional de Trípoli que en gran parte resulta destruido. Las milicias salafistas libias, denominadas *Ansar al-Sharia* (Partidarios de la Sharia) se apoderan de la mayor parte de Bengasi.

Agosto – Debido a la escalada creciente de violencia, cientos de miles de libios son desplazados a nivel nacional y transfronterizo. La coalición de *Libya Dawn* conquista Trípoli y ex políticos del GNC se autoproclaman el nuevo parlamento de Libia (NGNC) al establecer un gobierno opositorista, denominado *National Salvation Government* (NSG) con Jalifa al-Ghawil como primer ministro. El NGNC no está reconocido a nivel internacional. La Cámara de Representantes (HoR) recién elegida es forzada a trasladarse a Tobruk en el este del país.

Octubre – Ban Ki-moon, el Secretario General de las Naciones Unidas de aquel entonces, visita a Libia con el fin de llamar al diálogo entre el nuevo parlamento, el gobierno en Tobruk y las milicias islámicas de la coalición *Libia Dawn* controlando Trípoli. Las Naciones Unidas hablan de unos 100.000 desplazados debido a los conflictos. La milicia extremista del EI toma el control del puerto de Derna en el este de Libia.

2015

Enero – Las negociaciones de paz en Ginebra (y otra vez en Gadamés en septiembre) patrocinadas por la ONU reúnen a miembros del NGNC asentado en Trípoli y de la HoR de

²³⁰ Las Brigadas de Zintan son unidades armadas financiadas por el gobierno ligado a la ciudad de Zintan y sus alrededores. Desempeñaron un papel significativo durante la revolución libia de 2011. Hoy en día están intensamente involucradas en la guerra civil desde 2014 al lado anti-islámico. Dentro del espectro político de Libia son consideradas moderadas y liberales. Aunque luchan de manera separada, son aliadas del Ejército de Libia comandado por Jalifa Haftar desde 2015. Las Brigadas de Zintan tienen un papel importante en el conflicto, sobre todo desde el estallido de las batallas contra *Libya Dawn* por el aeropuerto internacional de Trípoli, dado que fueron las responsables de su defensa (BBC News, "Guide to key Libyan militias", 11.01.2016).

Tobruk. Después de las negociaciones, las fuerzas de la alianza de milicias islamistas *Libya Dawn* y *Operation Dignity* (LNA y otros grupos seculares) declaran una cesación del fuego.

Febrero – Milicianos del EI decapitan a veintiún coptos egipcios en Sirte secuestrados a mediados de 2014. Un día después, Egipto bombardea posiciones del EI en Libia.

Marzo – La HoR nombra a Haftar comandante del LNA. La ofensiva del Ejército Libio con el fin de expulsar al EI de Derna y retomar la ciudad no tiene éxito. El EI coge el control total de la ciudad portuaria de Sirte, siendo de gran importancia geoestratégica.

Junio-Agosto – Impulsadas por la ONU, se lanzan negociaciones de paz en Marruecos entre las facciones beligerantes. Aunque se acuerda el establecimiento de un gobierno de unidad, el gobierno en Trípoli boicotea las negociaciones que terminan en Ginebra sin resultados definitivos.

Agosto – Fuerzas del EI cruelmente sofocan una rebelión en Sirte. El gobierno con sede en Tobruk ruega a la Liga Árabe lanzar ataques aéreos contra posiciones del EI en Libia, lo que la Liga autoriza.

Diciembre – En el marco de las negociaciones de paz y mediante la mediación de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre ambos gobiernos finalmente se ponen de acuerdo sobre el establecimiento de un gobierno de unidad (GNA), con el fin de promover una reconciliación estable y genuina. El tratado de paz, el *Libyan Political Agreement*²³¹, es firmado en Skhirat, Marruecos.

2016

Enero – Las Naciones Unidas anuncian un nuevo gobierno interino con sede en Túnez y a Fayez al-Serraj²³² como primer ministro del denominado *Presidential Council* (PC) del GNA, pero ni la HoR en Tobruk ni el NGNC en Trípoli aceptan reconocer su autoridad. El parlamento del GNA está dominado por Hermanos Musulmanes. Un grupo del EI ataca la terminal petrolífera en Ras Lanuf.

Febrero – El LNA expulsa militantes islamistas de Bengasi.

Marzo – El nuevo gobierno de unidad respaldado por la ONU llega a Trípoli en barco en la base naval Abu Sittah, debido al bloqueo del espacio aéreo por fuerzas opositoras. El GNA adquiere el control del edificio del parlamento; el autoproclamado primer ministro del NSG, Jalifa al-Ghawil, huye a Misrata.

²³¹ El *Libyan Political Agreement* otorgó el poder ejecutivo al GNA, mientras que la HoR sigue manteniendo la autoridad legislativa, a consecuencia de las elecciones en junio de 2014. El *Agreement* fue respaldado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que acogió la formación del PC con satisfacción reconociendo al GNA como único gobierno legítimo de Libia.

²³² Antes de su proclamación como primer ministro del GNA, Fayez al-Serraj fue un miembro de la HoR.

Abril – El personal de las Naciones Unidas regresa a Trípoli tras una ausencia de casi dos años. El LNA expulsa militantes islamistas de Derna. El NSG anuncia su cesión del poder.

Mayo – El GNA lidera una campaña militar con el fin de reconquistar Sirte estando ocupada por el EI desde hace más de un año.

Junio – Fuerzas armadas aliadas con el GNA anuncian la expulsión del EI de Sirte.

Agosto – Los EE.UU. lanzan ataques aéreos contra el EI en Libia apoyados por fuerzas y logística británicas. Fuerzas militares aliadas con el gobierno respaldado por las Naciones Unidas recobran el control sobre un centro de congresos que sirvió de base para el EI. Un coche bomba explota en Bengasi causando 22 muertos y 20 heridos. Pese al *Libyan Political Agreement*, la HoR vota contra la aprobación del GNA, y rescinde unilateralmente el *Libyan Political Agreement*. Consecuentemente, se convierte en gobierno opositor, por lo que ya no es considerado legítimo²³³.

Septiembre – Tras la petición formal del GNA por asistencia internacional, la OPAQ anuncia que el arsenal remanente de armas químicas potenciales en Libia es enviado al extranjero para su destrucción y para mantenerlo a salvo de los militantes. El LNA bajo el comandante Haftar lanza la operación *Swift Thunder* conquistando de la milicia *Petroleum Facilities Guard* (PFG), un grupo aliado con el GNA, los mayores terminales petrolíferos de Libia en Sidra, Brega y la refinería en Ras Lanuf.

Octubre – Con la economía libia estando al borde del colapso, en Londres se mantienen conversaciones sobre posibles reformas entre el primer ministro libio Fayez al-Serraj, John Kerry y Boris Johnson. Jalifa al-Ghawil declara que el NSG (NGNC) conquistaba Trípoli y retomaba el poder.

Noviembre – Pese al aumento de la producción de petróleo a unos 600.000 barriles por día, el gobierno de unidad se enfrenta a una devaluación monetaria forzada debido al colapso creciente de la economía nacional. Jalifa Haftar se encuentra con Serguéi Lavrov, el ministro ruso de asuntos exteriores, solicitando apoyo militar en su lucha contra militantes islámicos.

2017

Enero – La *Libyan National Oil Corporation* (NOC) exige de Occidente invertir en la industria petrolera libia con el fin de unificar el país.

²³³ Pese a su reconocimiento internacional como único gobierno legítimo de Libia desde enero de 2016, el GNA, con autoridad ejecutiva, no goza del reconocimiento completo por las Naciones Unidas, dado que carece de la legitimación por parte de la HoR todavía teniendo la autoridad legislativa y que por tanto sigue reconocida, aunque de forma limitada, por la ONU desde su elección en junio de 2014. El comandante Jalifa Haftar, que goza del apoyo de la HoR y que rechaza a al-Serraj vehementemente, gana cada vez más poder en el escenario político de Libia. Sin su cooperación, el GNA no conseguirá la legitimación completa. Pero sin la reconciliación estable entre los dos rivales, no será posible establecer un solo gobierno nacional de Libia. Por lo tanto, la UE en colaboración con la UNSMIL, la misión de apoyo de la ONU en Libia desde 2014, abogan por un papel negociador con Rusia como mediador y en conformidad con los EE.UU. (estado: febrero de 2017).

Febrero – Debido a los buenos contactos entre Haftar y Putin, Rosneft y la NOC firman un acuerdo petrolero de USD 2 a 4 mil millones de valor. Rusia aumenta su implicación en Libia con el fin de rehabilitar los yacimientos petrolíferos. Una reunión planeada por Egipto entre al-Serraj y Haftar en Cairo no tiene lugar, dado que Haftar rechaza poner sus fuerzas armadas bajo el control político por el GNA. La HoR ya no reconoce el GNA y demanda nuevas elecciones en 2018.

Marzo – En la lucha contra Haftar, una milicia islamista de Bengasi conquista el terminal petrolífero de Sidra y la refinería de Ras Lanuf, forzando los soldados del LNA a retirarse. Los acontecimientos conllevan el resurgimiento de la guerra civil en Libia. Poco después, Haftar reconquista los terminales. Frente a las nuevas escaladas bélicas, Martin Kobler, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Libia y jefe de la UNSMIL de aquel entonces (2015-2017), constata una falta de voluntad política para aclarar la cuestión del poder.

Abril – La OIM señala un aumento dramático del tráfico de personas en Libia y el establecimiento de “mercados de esclavos”, sobre todo de refugiados del oeste de África. Con el fin de asegurar y controlar la frontera sur de Libia de más de 5.000 kilómetros contra traficantes de personas y refugiados, Italia y sesenta caudillos de tribus libias (entre ellas tuareg y tubu) firman un tratado de paz en Roma. Ante nuevos agravamientos de las luchas, Fayeze al-Serraj apela a las Naciones Unidas, la UE, la Liga Árabe y otras organizaciones internacionales a que intervengan militarmente. Debido al poder precario de al-Serraj en el país, una intervención sólo sería posible con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mayo – Tras luchas intensas, el LNA libera el puerto de Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia, de combatientes de *Al Qaeda*. El bombardeo aéreo y ejecuciones por combatientes del GNA contra la base aérea cerca de Brak-al-Shati en el sur de Libia causa la muerte de como mínimo 141 soldados del LNA y civiles obstaculizando cada vez más una reconciliación nacional, pese a la condena firme del acontecimiento por al-Serraj.

Junio – La milicia islamista *Ansar al-Sharia* anuncia su disolución inmediata, debido al sufrimiento de graves pérdidas en sus centros de influencia Bengasi, Derna y Sirte. No obstante, numerosos combatientes se han pasado al EI. Tras cinco años de encarcelamiento por las Brigadas de Zintan, Saif al-Islam Gadafi goza de una amnistía general aprobada en mayo por la HoR. Justamente el líder de las Brigadas de Zintan, el coronel Ajmi Al-Atiri, hace constar que frente al caos político creciente en Libia, Saif al-Islam podría ser el candidato más adecuado para lograr la reunificación nacional. Tribus sobre todo del sur y oeste celebran la propuesta. Pese a su liberación, siguen pendientes las investigaciones de la CPI que demanda su extradición.

Frente a un peligro creciente para su seguridad nacional, Egipto interviene militarmente y lanza ataques aéreos contra terroristas en Libia, conforme con el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Julio – El EI recupera fuerzas en los desiertos del sur de Libia y se moviliza de nuevo. Tras la mediación de las Naciones Unidas y del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, Faye al-Serraj y Jalifa Haftar se encuentran en París acordando un plan de diez puntos con una tregua y nuevas elecciones. Según, el *Libyan Political Agreement* de diciembre de 2015 debe realizarse lo más rápido posible.

Agosto – En un encuentro entre Jalifa Haftar y Serguéi Lavrov en Moscú, Haftar reafirma su deseo de cooperar más estrechamente con Rusia. Los EE.UU., así como Gran Bretaña, Francia e Italia mandan entidades militares especiales a Libia, oficialmente para apoyar a la lucha contra el EI; no obstante, observadores suponen que el motivo principal es el apoyo al GNA (pese a cierto apoyo paralelo a Haftar) para restringir la influencia creciente de Rusia. De momento, Haftar parece ser el único candidato con perspectiva de ser aceptado suficientemente como nuevo presidente.

Septiembre – Un día antes de su viaje a Roma para reunirse con funcionarios italianos, Jalifa Haftar es acusado por expertos jurídicos del Pentágono y de la CPI de haber ordenado a soldados del LNA cometer crímenes de guerra al matar prisioneros indefensos. Amnistía Internacional y *Human Rights Watch* también condenaron los supuestos crímenes.

Octubre – El ex fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, es acusado de estar aliado con un empresario libio relacionado a Haftar y una de las milicias actualmente investigadas por la Corte. Ocampo niega los cargos pero una filtración de unos 40.000 correos electrónicos deja a su sucesor, Fatou Bensouda, frustrado por su actitud y por el daño causado a la credibilidad de la CPI.

2018

Enero – Dada la violación reiterada de los artículos del LPA, se supone que ha perdido su validez. La HoR debe emitir una ley electoral y un referéndum para la constitución. Las elecciones previstas para primavera de 2018 serán supervisadas por la Liga Árabe y la ONU con la participación del PC. Ante el caos continuo en el país, expertos aconsejan la adopción de la Constitución de 1953 como una solución temporal a la crisis para los próximos cinco años.

Febrero – El ministro libio del *Office of Displaced People's Affairs* anuncia que el retorno de los tawerghanos previsto para el 1 de febrero es aplazado hasta que el conflicto continuo con Misrata sea resuelto. Grupos armados leales con Haftar impiden el retorno de miles de IDP a sus hogares en Bengasi²³⁴.

²³⁴ Cf. Change the World. Model United Nations (CW MUN), "Conference Background Guide. Security Council B", 2016; BBC News, "Libya profile - Timeline", 21.11.2016; The Guardian, "Libya", 2011-2017; The Libya Observer, "News" 2011-2018.

4. Libia en el contexto de una crisis humanitaria

El régimen de Gadafi que duró cuarenta y dos años tiene rasgos muy ambivalentes. Cuando Gadafi asumió el poder tras un golpe de Estado contra el rey Idris I en 1969, la cuota del analfabetismo estaba situada en el 94%, mientras que en el momento de su caída en 2011, 88% de todos los libios sabían leer y escribir, y muchos jóvenes tenían la posibilidad de estudiar en universidades extranjeras (cf. Sensini 2011: 146). Hoy en día, la vida media es de setenta y cinco años, un récord comparado con una esperanza de vida de cuarenta años en algunos otros países del continente africano. Asimismo, por décadas las clases escolares, así como el servicio médico eran gratuitos; del mismo modo, el suministro de agua potable y las condiciones higiénicas se habían mejorados cada vez más (*ibíd.*). El sector petrolero nacionalizado promovió el desarrollo económico y social del país, y el uso de la base aérea *Wheelus* por los EE.UU. fue rescindido, dado que Gadafi la consideraba un vestigio del colonialismo. Por lo general, cabe destacar que estos desarrollos “socialistas”, orientados en el desarrollo nacional, conllevaron el apoyo de la Unión Soviética, mientras que Occidente luchaba en contra. En resumen, este último interpretaba los desarrollos como versión disfrazada del comunismo, mientras que la Unión Soviética los consideraba como un movimiento nacional de liberación, y por ende, a Libia como un aliado en la lucha contra “el imperialismo”.

De cualquier forma, no se puede negar que el régimen de Gadafi también se caracterizaba por numerosos abusos de los derechos humanos, manifestándose entre otros en la criminalización del disenso, juicios simulados, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y el tratamiento desigual de las diferentes tribus y grupos étnicos, lo que a lo largo de décadas fomentaba grave discordia entre la población libia. Sobre todo desde el estallido de la guerra civil en 2014, se ha revelado de forma extrema con el surgimiento de aproximadamente 2.000 milicias²³⁵, cada una de ellas luchando con diferentes aliados y por distintos motivos.

La erosión de la base social del régimen de Gadafi ya comenzó en el ciclo de la crisis económica en la década de los ‘80 y llevó a un agravamiento político de la situación en los años ‘90, cuando en el este del país se estableció una oposición islamista armada bajo la dirección del denominado Grupo de Lucha Islámica Libio (GLIL). Solamente mediante una represión total contra toda oposición y castigos colectivos contra la población civil, sobre todo en la Cirenaica donde más opositores de Gadafi había, creó una estabilización precaria de su régimen. Luego, el clan de los Gadafi trataba de sostener la base de su poder mediante dos factores interrelacionados: la sustitución de la antigua base social por la reactivación de las redes sociales tradicionalistas vinculada a la concesión de privilegios de poder, y la extensión de la capacidad de producción de

²³⁵ BBC News, “Guide to key Libyan militias”, 11.01.2016.

petróleo mediante inversores internacionales tras el levantamiento de las sanciones en 2003. De esta manera, y mediante una normalización de la política exterior, el régimen trataba de reglamentar un instrumento central de poder: la distribución de los ingresos por la exportación de petróleo posibilitada por los acuerdos con las compañías petroleras internacionales. Este proceso sólo privilegiaba una pequeña clase social, mientras que una gran parte de la población estaba excluida de estos ingresos, y por consiguiente se veía enfrentada a perspectivas de empleo muy limitadas y salarios estatales mínimos.

Oficialmente, el régimen de Gadafi se había comprometido con la redistribución de los recursos, incluyendo viviendas y tierras, con el fin de promover una mayor igualdad. Pero en la práctica recurría a políticas de restitución de tierras y propiedades para consolidar el poder personal.

En la denominada Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista recurría a su propia filosofía de gobernanza, la Tercera Teoría Universal, por la que se aseguraba que las instituciones estatales sólo sirvieran a su régimen. Asimismo, marginalizó al ejército nacional, y en cambio estableció fuerzas de seguridad completamente leales. Por lo general, aunque el Líder de la Revolución oficialmente no tenía ningún cargo del gobierno, ejerció el poder político absoluto, prohibió la formación de organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, y encarceló, exilió e incluso ejecutó numerosos líderes de la oposición sin juicio. Las políticas ambiguas y arbitrarias de Gadafi causaron un descontento cada vez mayor en la población libia, lo que en el contexto de la Primavera Árabe en 2011 conllevó protestas masivas que finalmente culminaron en el brote de una revolución sangrienta y la intervención militar por Occidente.

Con la muerte de Gadafi ocho meses después de las primeras protestas, el NTC declaró el colapso del antiguo régimen y la liberación del país. No obstante, los mayores desafíos todavía se tenían por delante. El derrocamiento del líder dejó un vacío de poder que desde entonces ha sido llenado, entre otros, por el gobierno de transición, revolucionarios, diversos partidos políticos, jefes tribales y ONGs, todos con diferentes motivos y objetivos, y sin ninguna experiencia en cuanto a una colaboración fructífera. Consecuentemente, la transición del país ha estado paralizada constantemente, dado que ni el NTC, ni el GNC, la HoR o el GNA han logrado imponer su autoridad de manera eficaz. Además, han sido bloqueados varias veces por rebeldes armados. Y aparte de tener dos gobiernos rivales desde agosto de 2014, ninguno ha logrado establecer un primer ministro con autoridad a nivel nacional. Sólo tres años tras la caída de Gadafi, las luchas entre los revolucionarios y diferentes milicias escalaron cada vez más y provocaron el estallido de la guerra civil en 2014 que desde entonces se ha extendido a vastas zonas del país.

Como se ha mencionado en la parte II, capítulos 5.4 y 6, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanzó investigaciones detalladas sobre violaciones contra civiles durante el

conflicto y se hizo evidente que tanto las fuerzas de seguridad del gobierno libio como los rebeldes habían cometido “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad”. Desde entonces, la comunidad internacional, particularmente la UE, ha realizado inversiones considerables en el proceso de transición motivadas sobre todo por intereses geopolíticos, con el fin de asegurar las fronteras y de este modo evitar que los flujos masivos de migrantes africanos llegaran a Europa. Por lo tanto, el compromiso internacional generalmente se puede considerar bastante moderado²³⁶.

Libia sigue enfrentándose a desafíos enormes, entre los que destacan sobre todo el establecimiento de seguridad y estabilidad, un gobierno nacional, así como el desarrollo de medidas y estrategias con las que puede tratar las injusticias cometidas, tanto bajo el régimen de Gadafi como durante el conflicto desde 2011. Pero frente a la falta de un gobierno unificador y apoyo internacional sostenible, Libia ha caído en inseguridad generalizada.

En el comienzo de la fase de transición de Libia y con la ayuda de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), el NTC tomó varias medidas iniciales para promover la reconciliación nacional. Entre ellas destacan propuestas para la justicia de transición²³⁷ por las que se estableció una comisión de investigación y reconciliación. En noviembre de 2011, el NTC también creó el Ministerio de Asuntos de la Familia, Mártires, Heridos y Desaparecidos²³⁸ que pronto obtuvo apoyo internacional, tanto profesional como financiero, para poder abordar el gran número de casos de personas desaparecidas en el país. En agosto de 2012, el GNC, el primer parlamento libio libremente elegido desde décadas, asumió el poder. A finales del mismo año, algunos de sus 200 miembros participaron en una conferencia sobre la búsqueda de la verdad y la reconciliación organizada por las Naciones Unidas y una comisión libia. Algunas de las recomendaciones propuestas fueron incorporadas en la nueva Ley de la Justicia de Transición²³⁹ aprobada en diciembre de 2013; sin embargo, a partir de mediados de abril de 2014, la ley todavía no se había consolidado²⁴⁰. En general, tanto el NTC como el GNC parecían estar más dedicados a proteger a los revolucionarios y castigar al antiguo régimen y sus partidarios, en vez de promover la reconciliación nacional. Con el estallido de la guerra civil en 2014 y el lanzamiento de las coaliciones de *Operation Dignity* y *Libya Dawn*, todo el proceso se ha quedado paralizado. Consecuentemente, Libia continúa sufriendo incontables desafíos antiguos y recientes que impiden que el gobierno tenga la capacidad de crear una unidad política y ejecutar la transición de una dictadura a la paz civil. En su historia, el país nunca ha sido escindido con tal impacto

²³⁶ BELL, Anthony, “A Surer Footing for a Light Footprint Strategy in Libya”, 26.02.2016.

²³⁷ ONU, “Misión del Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL)”, 2011.

²³⁸ El Universal, “Inclusión de exmiembros del régimen de Gadafi amenaza nuevo gobierno libio”, 16.02.2016.

²³⁹ ONU, Consejo de Derechos Humanos, 25º periodo de sesiones, A/HRC/25/42, “Prestación de asistencia técnica a Libia en la esfera de los derechos humanos”, 13.01.2014.

²⁴⁰ SALAH, Hanan, “Libya’s Justice Pandemonium”, 14.04.2014.

destrutivo como en la actualidad, más de siete años después del estallido de la revolución. La grave inestabilidad del país y la guerra civil que implican, entre otros, el surgimiento de la justicia del vencedor (véase parte III, cap. 1), la dificultad de lograr el desarme en el contexto de la guerra y la creciente crisis del desplazamiento forzado, han generado nuevos problemas y obstáculos que deben resolverse urgentemente para poder lograr una paz sostenible y duradera.

En la actualidad, el marco jurídico existente para la justicia de transición en Libia es, como señalado anteriormente, muy defectuoso. Pero esta circunstancia puede significar una oportunidad importante, también para la comunidad internacional, para reformar el sistema jurídico de Libia y para asegurar que el proceso sea justo y que responda de manera eficaz a los intereses de los diversos grupos en la sociedad, incluyendo sobre todo aquellos que se encuentran en situaciones de desplazamiento prolongado.

4.1 Las víctimas del desplazamiento forzado: hechos y cifras sobre los IDP y refugiados

Al igual que el desarme y la justicia del vencedor en el contexto de conflictos armados, también el fenómeno del desplazamiento, tanto a nivel nacional como transfronterizo, constituye un aspecto que paraliza substancialmente la reestructuración de un país en crisis. En el caso de Libia, la reconciliación nacional no se podrá lograr mientras que una gran parte de la población esté alojada en campamentos en condiciones precarias. Hay que entender que el desplazamiento forzado incluye tanto a las IDP como a los refugiados transfronterizos, dado que ambos grupos de personas tenían que huir de sus hogares por consecuencia de la violencia, sea durante la revolución de 2011 o durante los enfrentamientos que la seguían.

De acuerdo con estadísticas del ACNUR, a mediados de agosto de 2011 alrededor de un millón de personas habían huido de Libia a países vecinos. La OIM estima que casi 660.000 de los migrantes internacionales habían abandonado Libia debido al conflicto armado (OIM 2011, *cit. en* Bertelsmann Stiftung 2011). Alrededor de 54.000 personas de origen norteafricano se habían escapado a Italia y Malta, constituyendo los puntos de entrada más comunes a Europa. Más de 834.000 personas, principalmente de origen libio, habían huido a Túnez (ACNUR 2011, *cit. en* Bertelsmann Stiftung 2011).

Según el IDMC (2012), el número de IDP en 2011 alcanzó aproximadamente unos 550.000, debido a los levantamientos violentos durante la Primavera Árabe. En general, después de la revolución, muchos de estos refugiados e IDP podían regresar a sus hogares; no obstante, unas 154.000 personas todavía seguían siendo desplazadas a finales de 2011 (IDMC 2011: 77). Pero en 2014, el comienzo de la guerra civil de Libia provocó otro flujo de desplazamiento forzado: a principios de 2015, el ACNUR informó que en el oeste del país, al menos 269.000 personas

fueron desplazadas desde mediados de julio de 2014, con la mayoría de ellas habiendo buscado refugio en la capital de Trípoli. En el este, al menos 105.000 desplazados buscaron refugio en la ciudad de Bengasi, mientras que desde mediados de mayo de 2014 como mínimo 90.000 personas fueron desplazadas de la misma, asimismo de Derna y Tobruk. Debido al acceso limitado a la región, este número se puede considerar subestimado. En el sur de Libia, al menos 18.500 personas fueron desplazadas, lo que se debía sobre todo a combates recientes en esta zona a partir de enero de 2015. Alrededor de 4.800 IDP del sur, que desde los enfrentamientos en enero de 2014 no han podido regresar a sus hogares, corren el riesgo de un desplazamiento prolongado dada la situación de guerra continua. En general, a nivel nacional, como mínimo 56.500 IDP siguen desplazadas desde el comienzo del conflicto armado en 2011. En las regiones occidentales y orientales, la mayoría de ellas ha sido desplazada de nuevo desde mediados de mayo de 2014²⁴¹. De acuerdo con la Media Luna Roja Libia, a principios de 2016 hubo más de 500.000 IDP libias en estado urgente de apoyo humanitario (cf. Ben Ibrahim, 20.02.2016). Este número también fue publicado por el IDMC en su *2016 Global Report on Internal Displacement* (31.12.2015). Acorde con el IDMC, se estima que en 2016 hubo unos 304.000 IDP y 8.800 refugiados en el país. Asimismo, entre enero y junio de 2017 unas 34.000 más fueron desplazadas por la violencia y el conflicto.

Por lo general, cabe realzar que desde mediados de julio de 2014 ha resultado difícil obtener datos fiables y completos sobre el desplazamiento interno, ya que frente a la agravación de la situación de seguridad en Libia, la mayoría de las organizaciones internacionales retiró su personal del país. Como mencionado en el capítulo anterior, el personal de la ONU, por ejemplo, no volvió hasta abril de 2016. Frente a un caos político nacional y tres gobiernos rivales, también la operatividad de las autoridades locales libias está limitada, lo que también afecta significativamente al registro de datos sobre personas desplazadas aún encontrándose en estado de guerra. Asimismo, es posible que los datos incluyan grupos que se han enfrentado a desplazamientos múltiples, lo que podría haber conllevado su doble grabación. Por lo tanto, aunque son los únicos puntos de referencia existentes, las cifras no se pueden considerar como cien por cien fiables.

La revolución que duró desde febrero hasta octubre de 2011 no sólo conllevó la pérdida de la seguridad nacional, el colapso del orden público, incontables batallas y enfrentamientos callejeros, sino también un éxodo sin precedentes, tanto de ciudadanos libios como de trabajadores migratorios, solicitantes de asilo y refugiados transfronterizos que habían vivido en

²⁴¹ IDMC, “Libya IDP Figures Analysis”, 2015.

Libia durante mucho tiempo: de acuerdo con las Naciones Unidas, en total unas 1.002.982²⁴² personas habían huido a países vecinos, sobre todo a Túnez (288.000; situación en junio de 2011), Egipto (163.000; situación en junio de 2011)²⁴³, Argelia, Marruecos, Níger, Líbano y destinos más lejanos. Poco después, el ACNUR estimó que 834.000 personas habían escapado de Libia a Túnez, siendo la mayoría de origen libio (582.465)²⁴⁴. Pero con respecto a los datos oficiales disponibles de Túnez, cabe resaltar que, al parecer, de los cientos de miles de desplazados solamente de dos personas (!) se había registrado una solicitud formal del estatus de refugiado (*cf.* Khalil 2014). Este número sorprendente se debe por un lado a la cultura de generosidad y hospitalidad en la región que los tunecinos han revelado frente a los refugiados libios (*ibíd.*). En vez de solicitar formalmente el estatus de refugiado, la mayoría de los libios que huyeron del país entraron en los Estados vecinos como Túnez sin recorrer trámites oficiales, dado que los ciudadanos libios no requieren de visado. Asimismo, pueden beneficiar de una convención de 1973 por la que en principio tienen el permiso de trabajar en Túnez, establecer un negocio y moverse dentro del país con libertad relativa (*cf.* Karasapan 2015: 2). Junto con la disponibilidad de la población tunecina para ayudar a los desplazados, los libios no se enfrentaban a dificultades significativas tras haber cruzado la frontera. Habiendo sido uno de los países más desarrollados de África, otro aspecto que facilitó la acogida de los desplazados libios en Túnez se debe al hecho de que la mayoría disponía por lo menos de algunos recursos financieros con los que podían encontrar alojamiento en hoteles o viviendas alquiladas; asimismo, muchos encontraban refugio en familias de acogida y numerosos otros se alojaban en campamentos temporales establecidos en el sur de Túnez.

El retorno constituyó la solución predominante para la gran mayoría de refugiados que inicialmente buscaba refugio fuera del país. A mediados de agosto de 2011, según el ACNUR solamente 90.000 personas todavía se encontraban en Túnez (ACNUR 2011). Con respecto a estas personas cabe realzar que no han declarado su presencia en el país ni frente a las autoridades libias, ni tunecinas. Muchos de estos refugiados son lealistas de Gadafi, por lo que generalmente rechazan revelar su identidad. Frente a la falta de mecanismos establecidos de una justicia transicional, temen sobre todo asesinatos por venganza o la condena a muerte por el sistema judicial. Consecuentemente, prefieren permanecer en el anonimato en Túnez (*cf.* Khalil 2014). Con respecto a las miles de personas que volvieron a Libia tras la caída de Gadafi, aparentemente no se dispone de muchas informaciones detalladas en cuanto a los retornos, ya que por lo general fueron llevados a cabo por familias independientes con el amplio apoyo por terceras partes.

²⁴² ULACK, Chris, "The Arab Spring's looming refugee crisis", 23.06.2011.

²⁴³ COGHLAN, Jo, "Arab Spring Refugees: the Cost of War", 28.06.2011.

²⁴⁴ Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (autores, eds.), *Improving the Governance of International Migration: The Transatlantic Council on Migration*, Verlag Bertelsmann Stiftung, Bielefeld, 2011, p. 13.

Además de los que huyeron del país, cientos de miles fueron desplazados dentro de Libia. Como se ha indicado anteriormente, el ACNUR estima que hubo unas 550.000 IDP en el punto álgido de la crisis en 2011, con muchas familias sufriendo desplazamientos múltiples. Al igual que los refugiados transfronterizos, las IDP, más comunmente, se refugiaron con parientes, amigos y familias de acogida, en hoteles, edificios públicos, fábricas o sitios de construcción, principalmente en zonas urbanas del país (*cf.* IDMC, 07.11.2011). No obstante, también hubo reportes sobre IDP alojadas en campamentos improvisados en el desierto, sin ningún acceso a apoyo externo. Repetidamente, este ha sido el caso con familias de Ben Jawad y otras ciudades costeras al oeste de Ras Lanuf (*ibíd.*). Con los recursos financieros modestos de los que disponía gran parte de las IDP, muchas familias lograron superar la crisis inicial de su desplazamiento, regresar a sus hogares, e incluso repararlos dentro de relativamente poco tiempo, a menudo tan pronto como los combates se trasladaban a otras regiones. Al igual que los tunecinos, también los libios revelaban sus costumbres de hospitalidad al no solamente acoger a desplazados en sus casas, sino también al trabajar como voluntarios en ONGs activos en la región, hospitales y en la reconstrucción de edificios con el fin de responder a la crisis humanitaria.

No obstante, cabe destacar que en algunas regiones del país, la escasez de agua limpia, alimentos y suministros médicos ha perdurado, especialmente en las comunidades más pobres y recientemente afectadas por el conflicto, en las que generalmente la asistencia de emergencia no puede acceder fácilmente. Algunas zonas también han estado sin carburante necesario para restaurar el abastecimiento eléctrico, de agua y los servicios de saneamiento. Esto se ha mostrado significativamente en regiones consideradas como últimas bastiones del gobierno de Gadafi, por lo que son gravemente disputadas por lealistas, oponentes, milicias y fuerzas extranjeras. Con respecto a los migrantes extranjeros desplazados dentro de Libia, cabe mencionar que también se han enfrentado a dificultades enormes a la hora de acceder a alimentos, agua, alojamiento y atención médica (OIM, 01.09.2011, *cit. en* IDMC, 07.11.2011). Pero a pesar de la resolución bastante rápida de la mayoría de las situaciones iniciales del desplazamiento en Libia en 2011, desde el estallido de la guerra civil en 2014 siguen persistiendo la crisis de la migración forzada tanto a nivel nacional como transfronterizo acompañada de una violencia extrema que se intensifica cada vez más.

4.2 El impacto del estallido de la guerra civil libia en la crisis del desplazamiento forzado

4.2.1 Aclarando los frentes: el papel de las milicias y el surgimiento de la *Operation Dignity* y *Libya Dawn*

Considerando el periodo corto en el que se llevó a cabo el cambio de régimen y la caída de Gadafi, es evidente que el país se ha visto enfrentado a desafíos fundamentales enormes: como hemos visto antes, entre ellos destacan sobre todo la necesidad de establecer una nueva constitución, la implementación de una justicia transicional, y consecuentemente también una reforma institucional, así como el establecimiento de la paz al reintegrar los incontables revolucionarios y combatientes que luchaban en favor o en contra del régimen de Gadafi. Pero como mencionado en la parte III, capítulo 4, desde 2014 han surgido aproximadamente 2.000 milicias en Libia con cientos de miles de combatientes, cada una con aliados diferentes y con el control sobre diferentes partes del Estado. El gráfico abajo muestra las milicias más importantes y sus territorios de influencia en enero de 2017:

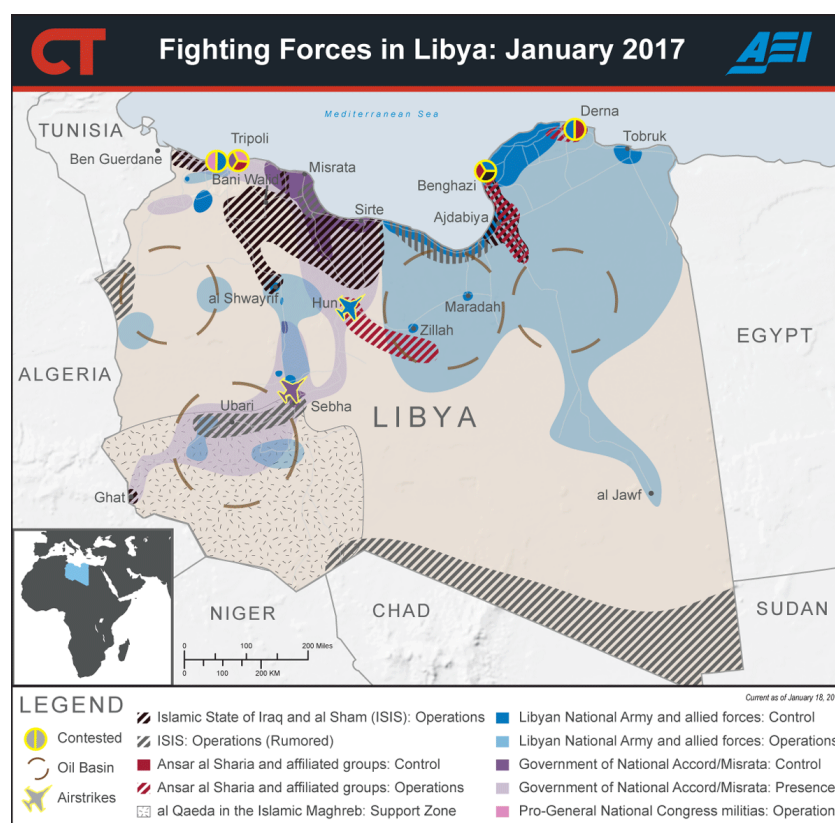


Gráfico 3: Las fuerzas combatientes en Libia: enero de 2017 (Estelle, Emily, 18.01.2017).

La prevalencia de las milicias en Libia ha agravado de forma enorme la situación de seguridad a nivel nacional. Además, ha socavado significativamente la autoridad del gobierno y empeorado la crisis del desplazamiento sin precedentes. A principios de los primeros levantamientos en febrero de 2011, la mayoría de los rebeldes luchó contra el régimen de Gadafi,

es decir, contra un enemigo común. Pero con la muerte de Gadafi, el nivel de polarización y desorientación política que ya existía antes aumentó de forma dramática, provocando la guerra civil y el colapso total de las estructuras estatales. Como ya ha sido descrito en la parte III, capítulo 2.2, por lo general, el proceso de transición en los países árabes está obstaculizado por la carencia de experiencia en establecer un concepto claro en cuanto a los objetivos de sus revoluciones, y por la cuestión no resuelta sobre la forma de gobierno que quieren establecer para el futuro de sus Estados.

Consecuentemente, la seguridad nacional ya no está garantizada. Ante un número incontable de milicias, motivos y fines, la lucha por el poder y los recursos naturales, es evidente que los frentes son muy dinámicos y las alianzas muchas veces de corta duración. Siendo un país muy rico en recursos, cabe realzar que económicamente los revolucionarios pueden beneficiarse más, si los mantienen bajo su propio control, en lugar de someterse a instituciones estatales. Como dice Fraihat: “No government job, including military posts, no matter the rank, can provide the income, power, prestige, and autonomy of being a militia commander” (2016: 30). Sobre todo para hombres jóvenes, las milicias ofrecen mucho más poder, prestigio y dinero que el Estado oficial puede proporcionar, por lo que volver a un trabajo común como antes de la guerra ya no parece atractivo (*ibíd.*). Como resultado, la posibilidad de desarmar y desarrollar un tratado de paz en un futuro cercano (todavía) no parece realista.

Como hemos resumido en la parte III, capítulo 2.2, en mayo de 2014 el general retirado Jalifa Haftar, que también luchó contra Gadafi en 2011, implementó la denominada *Operation Dignity*, una campaña secular y pro occidental que tiene como objeto eliminar a los islamistas y el terrorismo en Libia. Asimismo, ha luchado contra el GNC (y como consecuencia también contra el NGNC) y no reconoce el GNA, o sea el gobierno respaldado por la ONU. Haftar y su alianza reciben apoyo por la HoR con sede en Tobruk. Las fuerzas más importantes con las que está vinculado son el Ejército Libio (LNA) y el ejército tribal del tribu de los warshefana (en el interior del país cerca de Trípoli). Con el fin de combatir a los islamistas en el oeste de Libia, el general Haftar también logró formar una alianza con la poderosa milicia de la ciudad de Zintan. Las Brigadas de Zintan están más comprometidas con intereses tribales que ideológicos, pero tienen en común el rechazo del régimen de Gadafi y de sus lealistas (*cf.* Estelle 2017). Con su base en la zona oriental del país, la operación comenzó a atacar tanto a los Revolucionarios del 17 de Febrero que (también) lucharon contra Gadafi como a *Ansar al-Sharia*, una milicia salafista yihadista libia vinculada con *Al Qaeda* con base en Bengasi. Estos dos grupos se unieron con varios otros para resistir la campaña de Haftar y formaron una alianza en el este, llamada el Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Bengasi (SCBR, por sus siglas en inglés). Apoya al GNA con sede en Trípoli y se pronuncia claramente contra Occidente. Aparte de los

Revolucionarios de Bengasi, el brazo militar del *Shura Council*, la mencionada *February 17th Martyrs Brigade* y *Ansar al-Sharia*, también abarca la milicia *Libya Shield 1*. Como respuesta a las agresiones por Haftar que lanza ataques tanto en la zona oriental como occidental del país, surgió otra alianza en el oeste, llamada *Fajr Libya* o *Libya Dawn*. Incluye, entre otras, la poderosa milicia de Misrata, las facciones islamistas llamadas *Libya Shield Force*, *Petroleum Facilities Guard* (PFG) y *Libya Revolutionary Operation Room*, numerosas milicias más de otras ciudades y milicias tribales como de Zawilah, Sabrata y de las montañas de Nafusa (*ibíd.*; Fraihat 2016: 31). Aunque abarca principalmente fuerzas tribales y regionales, a *Libya Dawn* generalmente se percibe como fuerza islamista, dado que incluye a varios grupos con ideologías islamistas. La alianza puede considerarse relativamente pro occidental y apoya al gobierno autoproclamado pero no reconocido internacionalmente, NGNC, con su sede en Trípoli. *Libya Dawn* ha lanzado una lucha determinada contra Haftar y su *Operation Dignity* en el oeste del país, es decir, especialmente contra las Brigadas de Zintan siendo las más poderosas en la región. Como consecuencia, Libia se ve enfrentada a una guerra civil combatida sobre todo entre *Fajr Libya* y *Operation Dignity*, y de esta forma caracterizada por una lucha entre islamistas y no islamistas. El siguiente gráfico muestra las facciones beligerantes más importantes y sus tendencias políticas:

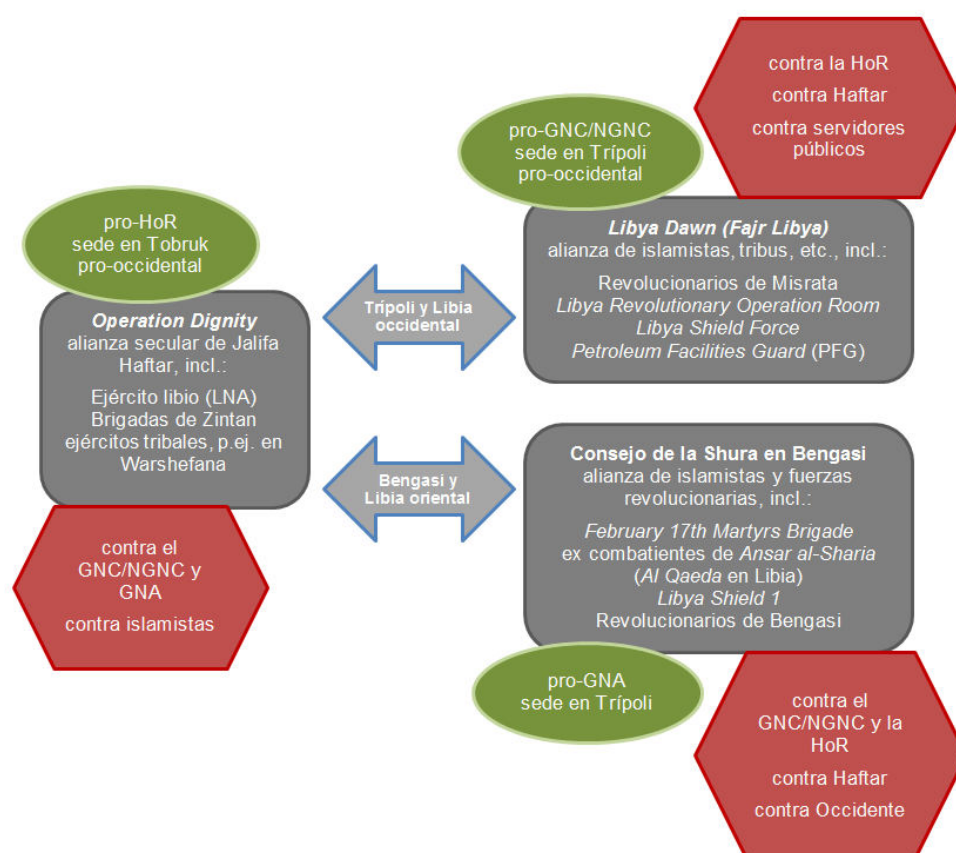


Gráfico 4: Las facciones beligerantes más importantes en la guerra civil libia (elaboración propia, diciembre de 2017).

En el contexto de las continuas luchas por el poder, lógicamente también a nivel político se revelan impactos enormes que serán discutidos más profundamente a continuación.

4.2.2 La guerra civil a nivel político: la transición del NTC al GNC

Tal como hemos visto en la parte II, capítulo 3.1.1, el Consejo Nacional de Transición (NTC) fue un gremio fundado por rebeldes sólo diez días tras el estallido de la revolución contra Gadafi, el 27 de febrero de 2011. Respaldo por la OTAN y con sede en Trípoli, a partir del 16 de septiembre de 2011 fue considerado internacionalmente como representante oficial de Libia, todavía antes de la muerte de Gadafi. Cabe señalar que ya en el transcurso de dos a tres semanas tras su fundación y autoproclamación como nuevo y legítimo gobierno libio, fue reconocido por numerosas potencias occidentales como negociador oficial (p.ej. por Francia, el primer país en reconocerlo, ya el 10 de marzo). El NTC gobernó el país por un periodo de diez meses después de la guerra hasta las primeras elecciones en julio de 2012.

La formación del NTC se anunció en Bengasi en febrero de 2011 con el fin de actuar como “the political face of the revolution” (IBP 2015: 23). El 5 de marzo de 2011, el Consejo se declaró como “the only legitimate body representing the people of Libya and the Libyan state” (Krieg 2017: 198). Poco después, el 23 de marzo, formó una junta ejecutiva, presidida por el primer ministro Mahmoud Jibril (2011) y el presidente Mustafa Abdul Jalil (2011-2012). En agosto de 2011, el NTC emitió una declaración constitucional en la que estableció un plan con respecto a la transición del país hacia una democracia constitucional con un gobierno elegido. Tras haber sido reconocido internacionalmente, el NTC ocupó el asiento del país en las Naciones Unidas. Basado en una solicitud de la Misión Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, en septiembre de 2011 la ONU formalmente reconoció el país como “Libia”. Tras las elecciones oficiales del 7 de julio de 2012, el 8 de agosto el NTC traspasó el poder al Congreso General de la Nación (GNC), con 200 miembros la autoridad legislativa suprema de Libia que gobernaría hasta el 4 de agosto de 2014. Es considerada “the first peaceful transition of power in Libya in modern history”,²⁴⁵, es decir, desde el fin de la monarquía del rey Idris I en 1969. Pese a vastas celebraciones del evento por la población libia, cabe destacar que el NTC no logró restablecer la seguridad nacional en el país; un aspecto que determinará el futuro de Libia de forma destructiva.

4.2.3 El GNC, el papel del general Jalifa Haftar y la HoR

Los desarrollos recientes en Libia, tanto políticos como bélicos, están vinculados de manera inseparable con Jalifa Haftar, un general retirado que a lo largo de las últimas décadas se había convertido de uno de los primeros partidarios de Gadafi a su mayor enemigo. Por lo tanto, y con el fin de poder comprender mejor los acontecimientos actuales en el país, es imprescindible

²⁴⁵ BBC News, “Libya’s NTC hands power to newly elected assembly”, 09.08.2012.

examinar más detalladamente su papel y sus motivos en el contexto de la guerra civil.

Haftar ha sido parte de la escena política libia desde hace más de cuatro décadas. Nació en 1943 en Ajadbiya, una ciudad en el este del país. En 1969, fue uno de los oficiales liderado por Gadafi que tomó el poder tras el derrocamiento del rey Idris. Más tarde, Haftar fue nombrado mariscal de campo y fue responsable de las fuerzas militares que en los años '80 lucharon en el conflicto entre Libia y el Chad. Cuando fueron derrotadas por las fuerzas chadianas apoyadas por Francia, en 1987, él y 300 de sus hombres fueron capturados como prisioneros de guerra (cf. BBC News, 15.09.2016). En lugar de iniciar negociaciones, Gadafi negó la presencia de tropas libias en el país, por lo que Haftar quedó encarcelado por cinco años. Tras su liberación, se desgajó de su patria y se exilió en Virginia, EE.UU., donde, debido a la proximidad de su domicilio con la central de la CIA, se supone que recibió amplio apoyo del servicio secreto. Tras una rebelión liderada por Haftar en 1996 que pronto fracasó, ya no regresó a Libia hasta 2011. Con el fin de apoyar la guerra civil contra Gadafi, a mediados de marzo de 2011, Haftar entró en su país natal a través de Egipto. El mismo mes, un portavoz militar anunció que Haftar había sido nombrado comandante del Ejército de Liberación Nacional Libio (ELNL)²⁴⁶, una afirmación que fue negada por el NTC. No obstante, en abril, Haftar tomó el tercer puesto más alto como comandante de fuerzas de tierra con el rango de teniente general (cf. Vogt, 19.05.2014).

Debido a su orientación secular, Haftar nunca reconoció el GNC respaldado sobre todo por milicias islamistas. En febrero de 2014, con el mandato del GNC todavía habiendo sido válido, Haftar llamó a derrocar el parlamento y se alió con milicias seculares, entre ellos también las anteriormente mencionadas Brigadas de Zintan, y cada vez más soldados desertados del Ejército Libio. La ofensiva militar con la que lanzaba ataques contra el GNC fue nombrada *Operation Dignity*. El 25 de junio de 2014, tuvieron lugar las segundas elecciones directas con la Cámara de Representantes (HoR) reemplazando al GNC. Hasta principios de 2016, la HoR (con 200 delegados independientes) se convertiría en el gobierno internacionalmente reconocido con sede en Trípoli, Aguilah Saleh Issa como presidente y Abdullah al-Thani como primer ministro. Pero por motivo de una participación electoral muy limitada de sólo 18%, el GNC no aceptó el resultado, lo que todavía el mismo mes llevó al resurgimiento del Congreso General de la Nación remanente (NGNC). Después de la rápida conquista de Trípoli por partidarios del NGNC, en septiembre se estableció el *National Salvation Government* (NSG) como gobierno opositor, con Nuri Busahmein como presidente y Jalifa al-Ghawil como primer ministro. Como

²⁴⁶ El Ejército de Liberación Nacional Libio (ELNL) fue una facción del Ejército Libio que tras numerosas desertiones de soldados en 2011 se tornó en contra de Gadafi. Tras continuas derrotas del Ejército Libio contra los rebeldes, éstos lograron conquistar Trípoli y derrocaron la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. Mediante el GNC formaron un nuevo gobierno y establecieron la República Libia. Con el decreciente apoyo a Gadafi y cada vez más desertores, se “restableció” el antiguo nombre del Ejército Libio (LNA). Sólo unos pocos soldados que seguían leales al régimen de Gadafi desertaron del nuevo ejército y continuaron a resistir. Tras la muerte de Gadafi, el Ejército Libio acabó con la resistencia. Hoy en día, el LNA es dirigido por el mariscal de campo Jalifa Haftar (VOGT, Ragnar, “Ein abtrünniger General mit CIA-Vergangenheit”, 19.05.2014).

consecuencia de las luchas, la HoR estuvo obligada a trasladar su sede a Tobruk en el este del país. Pese a su reclamo del poder, el parlamento del NGNC no goza de reconocimiento internacional. Pero dado que cuenta con el apoyo de numerosas milicias aliadas, la contracampaña *Fajr Libya* se puede considerar como oponente militarmente equivalente a la *Operation Dignity* de Haftar (cf. Krieg 2017: 199s.).

4.2.4 Un intento de reconciliación: el *Libyan Political Agreement* versus tres gobiernos paralelos

En el curso de las luchas continuas, en marzo de 2015, la HoR nombró a Haftar comandante de la LNA. Ya en enero, fuerzas de la *Operation Dignity* consintieron en un cese de fuego con *Libya Dawn*. Asimismo, la HoR asintió a un diálogo con el NGNC respaldado por *Fajr Libya*, pero numerosos miembros de ambas facciones no atendieron las negociaciones en Ginebra. Sólo en diciembre de 2015 y tras la mediación por la ONU, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo sobre un gobierno de unidad bajo el primer ministro Fayezi al-Serraj. El acuerdo de paz, denominado *Libyan Political Agreement* (LPA) fue firmado en Skhirat, Marruecos, “to promote a genuine and stable reconciliation” (UNSMIL, 17.12.2015). En enero de 2016, se estableció el denominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) respaldado por las Naciones Unidas y complementado con un Consejo Presidencial (PC). En el PC reside la soberanía estatal y mediante sus nueve miembros dirigidos por el primer ministro abarca la función de jefe de Estado, proponiendo también los miembros del gobierno (cf. Toaldo 2016: 2).

El LPA otorga poder ejecutivo al GNA, mientras que la autoridad legislativa sigue estando en manos de la HoR, a consecuencia de las elecciones en junio de 2014. El *Agreement* fue respaldado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU que acogió con satisfacción la formación del PC y reconoció al GNA como único gobierno legítimo de Libia (cf. UNSMIL, 17.12.2015).

Pero sobre todo el NGNC y diversos grupos armados se opusieron firmemente a la instalación del nuevo gobierno y bloquearon la ruta terrestre para evitar su acceso desde Túnez a Trípoli. Consecuentemente, al-Serraj y sus ministros fueron forzados a llegar a la capital por barco en la base naval Abu Sittah el 31 de marzo de 2016. Tras luchas intensas, lograron tomar el control de los despachos ministeriales, y Jalifa al-Ghawil se escapó a Misrata. Aunque el 5 de abril anunció que su NSG renunciara, poco después, en octubre del mismo año, rectificó al reclamar el poder de nuevo. Con respecto a Haftar, cabe destacar que debido al GNA siendo dominado por Hermanos Musulmanes, no lo reconoce y le niega su apoyo y colaboración. Pese a los acuerdos tomados en 2015, la HoR, como aliado de Haftar, tampoco aprueba el nuevo gobierno, por lo que también se ha convertido en gobierno opositor. Teniendo la función de jefe de Estado, el PC

oficialmente debería tomar el mando del LNA. Pero con Haftar siendo el comandante, hasta la fecha no ha logrado asumir esta responsabilidad.

Por ende, al momento de redactar estas líneas, existen tres gobiernos en Libia, de los que el GNA y NGNC tienen su sede en Trípoli, mientras que la HoR sigue gobernando desde Tobruk. Aunque el GNA respaldado por la ONU oficialmente es el único gobierno reconocido internacionalmente, no obstante se enfrenta a la problemática que incluso por las mismas Naciones Unidas solamente es semi reconocido: esto se debe a la circunstancia de que el parlamento de la HoR, tras su elección igualmente reconocida por las Naciones Unidas, (todavía) no ha otorgado su legitimación al GNA. Por lo tanto, y en contra de lo previsto, en la actualidad el PC es considerado el gobierno de transición oficial, dado que por él debería surgir el nuevo gobierno completamente legitimado. Aunque el PC está aliado con los Revolucionarios de Bengasi que a su vez, al igual que *Ansar al-Sharia* tienen vínculos con *Al Qaeda*, también puede contar con el apoyo por Occidente a través del gobierno de Italia, lo que, como era de esperar, ya ha causado controversias enormes (*cf.* Pany, 13.03.2017). Pero en Libia, el Consejo de Favez al-Serraj no cuenta con amplio apoyo y su zona de influencia apenas va más allá del territorio de Trípoli²⁴⁷. Desde 2016, tanto la HoR como el NGNC se han desintegrado en entidades determinadas por intereses de poder divergentes. Ambos cuentan con alianzas con diferentes milicias y tribus, caracterizadas por continuos cambios dinámicos (*ibíd.*). Mientras tanto, la HoR oficialmente disolvió unilateralmente el LPA, lo que conlleva también una negativa frente a futuras negociaciones. Por consiguiente, y pese a su autoridad legislativa, es proscrita a nivel internacional y considerada como gobierno opositorista.

4.2.5 Jalifa Haftar, las luchas continuas del poder y el significado del petróleo

Pese a los combates intensos en todos los frentes, la explotación petrolífera ha podido aumentar en los últimos meses, duplicándose a 700.000 barriles por día. Tácticamente prudente, Haftar no ha colocado todos los ingresos del negocio petrolero en su propia cuenta, sino que ha llegado a un “arreglo” con la NOC, la compañía petrolera nacional. Haftar cuenta con el respaldo de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, y cada vez más de Rusia. También recibe apoyo de Francia, pero hay que tener en cuenta que París no se compromete claramente con ninguna de las partes, por lo que tiene vínculos tanto con Haftar como con al-Serraj²⁴⁸. Gracias a sus buenas relaciones con el Kremlin y dado que ya ha logrado controlar la mayoría de los terminales de petróleo claves como Ras Lanuf, Brega y Sidra, en febrero de 2017, Haftar consiguió cerrar un

²⁴⁷ Deutsche Wirtschaftsnachrichten, “Libyen: Neuer Stellvertreter-Krieg um Öl und Pipelines”, 17.01.2017.

²⁴⁸ SCHMID, Ulrich, “Kampf um Öl und Macht. Ohne den Kreml-Freund Haftar läuft nichts in Libyen”, 07.03.2017.

acuerdo de subvención y exploración entre la NOC libia y la empresa petrolera gigantesca Rosneft de Rusia²⁴⁹. Es evidente que al-Serraj sabe del creciente poder del general. Pero pese al embargo de armas de la ONU que oficialmente sólo permite el suministro al GNA, y pese a que Rusia sostiene que no lo infringe, es muy probable que las fuerzas de Haftar cuenten con el apoyo militar ruso, lo que permite a Rusia extender su zona de influencia desde Siria al norte de África.

En este contexto, se plantea la cuestión, ¿a qué se debe la motivación de Rusia de incrementar su influencia en Libia?, y ¿por qué se ha aliado con Haftar? Las razones son varias y algunas incluso se originan en negocios establecidas todavía durante el régimen de Gadafi: principalmente, el general debe imponer los intereses económicos rusos en Libia. En los últimos años antes de su caída, Gadafi todavía había cerrado extensos contratos militares con Moscú. De acuerdo con la agencia gubernamental rusa responsable de la exportación de armas, Rusia perdió contratos por valor de como mínimo USD 4 mil millones tras la caída del dictador libio (*cf.* Hebel y Sydow, 20.03.2017). En 2010, un año antes del levantamiento contra Gadafi, Libia todavía era el segundo mayor comprador de las exportaciones rusas de armas. Al parecer, Haftar habrá prometido poner en vigor los contratos otra vez, por lo menos parcialmente, y adquirir armas de Rusia por un valor de casi USD 2 mil millones. El Kremlin niega tales negociaciones al advertir que debido al embargo de las Naciones Unidas, la exportación de armas a Libia sería ilegal. Haftar a su vez exige desde hace varios meses el levantamiento del embargo de armas. Como contrapartida podría pagar con las exportaciones de petróleo y gas. Al momento de redactar el presente capítulo, sus fuerzas controlan casi todos los principales sitios de explotación petrolera y los puertos en el este del país. Como anteriormente mencionado, sobre todo desde septiembre de 2016, la cantidad del petróleo producido ha aumentado de 300.000 a 700.000 barriles por día. Asimismo, el acuerdo entre la NOC y Rosneft ofrece a Rusia la oportunidad de restablecer las relaciones económicas que fueron interrumpidas por la caída de Gadafi (*ibíd.*).

Pero aparte de numerosos contratos en el sector militar, petrolífero y de gas, las relaciones también se extendían a la infraestructura. En este ámbito, hay otro proyecto importante que se tenía que suspender tras la muerte de Gadafi: en 2008, la empresa estatal de transporte ferroviario de Rusia, Ferrocarriles Rusos (RZhD), recibió un contrato del régimen de Gadafi para la construcción del trayecto Sirte-Bengasi a lo largo del Mediterráneo. La RZhD tenía planeado construir treinta cruces ferroviarios, veintitrés puentes de automóviles, cuatro grandes estaciones de tren y veinticuatro estaciones pequeñas. Se estima que el valor total de estos contratos asciende a USD 3,1 mil millones (*cf.* Samedova y Sosnytska, 31.08.2011). Cuando estallaron los levantamientos contra Gadafi, las obras ya estaban en pleno proceso. Con el fin de realizar el

²⁴⁹ WINTOUR, Patrick, "Russia increases involvement in Libya by signing oil deal", 21.02.2017.

proyecto, Rusia había invertido en la infraestructura, así como en la edificación de una fábrica de cemento y una planta de soldadura para la construcción de vías. La finalización de las obras fue prevista para 2013. Pero con el comienzo de la revolución, se pararon todas las obras. Por la influencia de Haftar en la política nacional, Rusia espera poder evitar pérdidas financieras adicionales y seguir con los diversos proyectos cuya realización todavía está pendiente. Militarmente, el Kremlin ya tiene estacionado mercenarios rusos en Libia. Según informaciones oficiales, se confirmó que son activos en el área de Bengasi con el fin de retirar minas de una refinería de petróleo y para proteger a los petroleros de los piratas (*cf.* Hebel y Sydow, 20.03.2017). Moscú niega la presencia de tropas regulares rusas para apoyar a Haftar. Asimismo, el ministerio de defensa desmintió el despliegue de unidades especiales rusas en una base militar de Egipto, cerca de la frontera con Libia.

Sea como sea, se puede suponer que Rusia está beneficiándose del vacío que Occidente ha dejado en Libia tras la intervención militar precipitada en 2011. Debido al poder creciente de Haftar, para Rusia, en consecuencia lógica, sólo entra en consideración el general como posible aliado para poder estabilizar el este de Libia y para poder poner en marcha sus diversas operaciones económicas.

En lo que concierne a Occidente, para el presidente de los EE.UU., Donald Trump, por lo menos parece que el país sólo juega un papel subordinado. Y la UE casi exclusivamente revela preocupaciones frente a Libia debido al flujo enorme de los miles de refugiados que atraviesan el Mediterráneo desde la costa de Libia hacia Europa. La canciller alemana, Angela Merkel, y los demás líderes europeos aparentemente apuestan por el GNA a que logre impedir que los barcos de los refugiados salgan del país. Pero como mencionado anteriormente, debido a su limitada zona de influencia, gran parte de la costa no es controlada por el gobierno, sino por Jalifa Haftar. Con su poder e influencia en el parlamento de la HoR en Tobruk cada vez mayor, para al-Serraj y el GNA sigue siendo el adversario principal. La legitimación de al-Serraj y el deseable establecimiento de un solo gobierno nacional, por ende, no se puede lograr sin la cooperación y el consentimiento del general. Pero un planeado encuentro en El Cairo negociado por Egipto para mediados de febrero de 2017, que también era en interés de la ONU y de la UE, casi fue cancelado en el último momento por Haftar, debido a su rechazo de subordinar su LNA al orden de al-Serraj. Un oficial del gobierno egipcio citado en un artículo de *Mada Masr* (25.02.2017), un periódico nacional independiente online, reveló:

Haftar initially attempted to avoid participating in the Cairo meeting altogether and then was slow to agree on a specific date. As late as one week before the meeting was to be held, Haftar had tried to back out, before submitting to Egyptian and Russian pressures and arriving in Cairo late on Monday February 13.

Pese al encuentro que por fin tuvo lugar, Haftar rechazó conversaciones directas con al-Serraj, por lo que sólo se llevaron a cabo negociaciones indirectas a través de oficiales egipcios. Pero al final del encuentro que duró dos días, las esperanzas de Egipto de una declaración trilateral se vieron defraudadas. Al-Serraj, Haftar y Saleh Issa solicitaron más tiempo para hablar con sus aliados dentro de Libia y se negaron a publicar una declaración conjunta que tal vez habría podido constituir una futura base para poder lograr la resolución de las luchas por el poder en las que Libia está hundida desde el surgimiento del vacío de poder tras el derrocamiento de Gadafi. Consecuentemente, las negociaciones en El Cairo no han llevado a ningún cambio tangible en las posiciones de los líderes libios (*ibíd.*).

4.2.6 La crisis del desplazamiento frente a las luchas de poder y un sistema jurídico paralizado: un asunto abandonado

Obviamente, tal estado de polarización no es favorable para el desarrollo de una estrategia integral de seguridad, el establecimiento de un sistema de justicia transicional, o cualquier otro esfuerzo que pueda mitigar o resolver el problema del desplazamiento.

La guerra civil en Libia ha tenido y sigue teniendo un serio impacto en la crisis humanitaria del país, particularmente en sus refugiados e IDP. De acuerdo con algunas estimaciones de la ONG *Libyabodycount*, en 2016 hubo aproximadamente 1.523 muertos por violencia, un número similar del año 2015 con 1.519 víctimas, pero menor comparado con los 2.825 muertos en 2014²⁵⁰. De las ciudades libias con los mayores números de muertos en 2016 destacan Sirte (693), Bengasi (307) y Trípoli (102). La cifra alarmante en Sirte se debe sobre todo a las batallas entre las fuerzas del GNA y extremistas del Estado Islámico que ha convertido la ciudad en una de las regiones más peligrosas del país.

Además de provocar la huida de cientos de miles de personas de sus hogares, la guerra ha empeorado el desplazamiento prolongado de los libios desplazados desde 2011. En cierto sentido, cabe señalar que el desafío principal de la era post-Gadafi, es decir, la reconstrucción de las estructuras estatales y la resolución de los diversos desafíos nacionales relacionados con el cambio de régimen implicando también la crisis del desplazamiento, ha pasado a intentos desesperados de contener la guerra civil, lo que no sólo ha llevado a la escisión de las estructuras de poder gubernamental, sino también de toda la sociedad. Evitar que la guerra escale cada vez más, se ha convertido en el asunto que más domina la realidad política en Libia, tanto en el GNA y la HoR como en la sociedad civil, las diferentes tribus y en la comunidad internacional.

²⁵⁰ ZAPTIA, Sami, “A total of 1,523 violent deaths were reported in Libya in 2016: Libyabodycount”, 05.01.2017.

Las personas desplazadas durante el levantamiento contra Gadafi no tienen mucha relevancia en la agenda nacional al tener en cuenta la miseria que ha conllevado la guerra civil, por lo que en el debate público se habla más de las víctimas desplazadas por la guerra desde 2014. La crisis de los recién desplazados también se ha convertido en una temática estratégica para las milicias. En este contexto, cabe mencionar las batallas entre las fuerzas de Haftar y del Consejo de la Shura en Bengasi y sus alrededores: tras intensas luchas en los primeros meses de 2017, tanto Amnistía Internacional como *Human Rights Watch* y las Naciones Unidas publicaron informes sobre graves violaciones de los derechos humanos, tales como ataques contra civiles, asesinatos en masa, también de mujeres y niños, y ejecuciones de hombres y supuestos combatientes, y denunciaron vehementemente la impunidad de los agresores, debido al estado de anarquía y la falta de un sistema jurídico eficaz (cf. El-Gamaty, 29.03.2017). Pero aparte de la conciencia sobre los crímenes de guerra cometidos en el país por todas facciones, incluso la comunidad internacional se enfoca más en los combates y las preocupaciones acerca de posibles efectos indirectos en los países vecinos que en el bienestar de los miles de desplazados en Libia.

Tras el estallido de la guerra civil, tanto Egipto como Túnez, Argelia y Chad emitieron alertas con respecto a la dinámica con la que expandieron grupos islamistas su influencia desde Libia hacia sus territorios nacionales. A este respecto, las autoridades tunecinas anunciaron que ya se han establecido vínculos estrechos entre el EI en el sur de Libia y la milicia tunecina *Jebel ech Chambi*. Y de acuerdo con informaciones de Egipto, se supone que grupos terroristas en el Sinaí han recibido formación militar y armas en Libia (cf. Jalloul 2015). A principios de enero de 2015, el ministro de defensa francés, Jean-Yves Le Drian, clasificó el fenómeno como “most dangerous”, dado que se dirige “against the international system and its values” (*ibidem*). Pero aunque es muy probable que los grupos terroristas aumenten su poder y sacudan gravemente la estabilidad ya deteriorada en la región del Magreb, la demanda de Le Drian y de Chad de intervenir militarmente en Libia ha sido ignorada por la comunidad internacional. Al parecer, se subestima que los grupos yihadistas disponen tanto de medios financieros debido al contrabando de petróleo como de armas modernas para movilizar combatientes jóvenes cada vez más, e incrementar su influencia desde el sur de Libia hacia los países vecinos. Por lo tanto, todo el norte de África, y en un segundo paso, toda la comunidad internacional se enfrenta al peligro de un caos destructivo originándose en el Magreb y la expansión del Estado Islámico.

Frente a un desarrollo tan alarmante, se plantea la cuestión ¿cómo podemos hacer frente a esta amenaza, aun sabiendo que Occidente que conscientemente derrocó al régimen de Gadafi, ahora no es capacitado para abordar los resultados y consecuencias desastrosos que ha conllevado su intervención?

4.2.6.1 El reto de encontrar posibles soluciones para abordar la anarquía

Bajo las circunstancias dadas, una solución política para la crisis libia no parece posible a nivel local. Esto se revela sobre todo a través de la dificultad enorme de establecer iniciativas de un diálogo político entre las diferentes partes beligerantes. En este contexto, cabe mencionar que de acuerdo con Jalloul (2015), tanto en Argelia como en Túnez una acción diplomática firme es casi ausente. Como realizado anteriormente, en el momento de redactar estas líneas, la guerra civil actual en Libia está en gran medida “equilibrada” entre los principales combatientes, por lo que una solución militar o una victoria decisiva en un futuro cercano son muy poco probables. Numerosos de los diversos grupos involucrados en la guerra gozan de un fuerte apoyo externo (como p.ej. *Ansar al-Sharia* por *Al Qaeda*), y ninguno de ellos parece dispuesto a conceder una derrota.

Aparte de la opción más favorable de lograr un acuerdo de paz negociado a través del diálogo patrocinado por la ONU al representar los intereses de todas las partes, no se debería prescindir de otras alternativas (aunque de momento sean hipotéticas) que en un primer paso por lo menos podrían ayudar a restringir el poder creciente de los extremistas en la región: una posibilidad sería que la comunidad internacional y en particular la Liga Árabe suministre apoyo operativo y militar a Egipto, Argelia y Túnez para aumentar el control sobre sus fronteras e impedir que los militantes extremistas se trasladen desde el sur de Libia a sus territorios. También podría resultar favorable formar una fuerza árabe-africana bajo el mando del LNA (cuyo objetivo proclamado es la lucha contra el terrorismo) para intervenir rápidamente en Libia en caso necesario. Asimismo, se debería lanzar una iniciativa política a nivel nacional que incluya a todas las partes en Libia. Su prioridad absoluta debería consistir en el restablecimiento de la estabilidad y seguridad en el país e implementar un nuevo sistema estatal. A largo plazo, la división del poder entre diferentes regiones y partidos sólo puede realizarse cuando se haya establecido una autoridad legítima capaz de garantizar la soberanía del Estado. Pero al tener en cuenta el gran número de personas desplazadas, sin duda alguna las medidas más prometedoras son sobre todo las conversaciones de paz y el diálogo nacional los que mejor pueden proporcionar una fórmula de compromiso para poner fin a la guerra civil de Libia. En estas negociaciones, las comunidades de desplazados, tanto de IDP como de refugiados transfronterizos, deberían estar suficientemente representadas y cualquier acuerdo futuro debería considerar su situación y sus necesidades particulares.

Una preocupación especialmente significativa exacerbada por la guerra civil es la falta de autoridades eficaces y accesibles para poder garantizar la rendición de cuentas por los abusos, incluyendo el desplazamiento forzado, cometidos durante la era de Gadafi, la revolución de 2011 y durante la guerra civil desde 2014. Es imprescindible que no sólo las autoridades a nivel local y nacional aborden los retos implicados con las reformas necesarias dentro de sus mecanismos y

procesos, sino que también a nivel regional e internacional apoyen las reestructuraciones para que el país pueda superar el sistema de impunidad que se ha impuesto en gran medida durante el régimen de Gadafi. De cualquier forma, frente a la extensión y gravedad de la violencia que caracteriza a Libia durante los últimos años, incluyendo graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, no se puede negar que será muy difícil implementar mecanismos sólidos por los que se pueda asegurar un tratamiento jurídico eficaz y persistente.

De acuerdo con la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, las Naciones Unidas y *Human Rights Watch*, el sistema jurídico de Libia se encuentra al borde del colapso (cf. Bassiouni 2013: 476; Consejo de Seguridad, SC/ 12377, 26.05.2016; HRW, 07.03.2014). Como señala Sarah Leah Whitson, la directora de HRW de Oriente Medio y del norte de África:

Libya has been sitting on the international community's back burner as the country has slipped into near chaos. Unless the international community focuses on the need for urgent assistance to the justice and security systems, Libya risks the collapse of its already weak state institutions and further deterioration of human rights in the country. (HRW, 07.03.2014)

Desde el año 2014, Libia se enfrenta a numerosos desafíos y no ha logrado imponer la ley y el orden. Pese al compromiso expreso del gobierno GNA de defender los derechos humanos y luchar en contra de los abusos, se han documentado docenas de asesinatos cometidos con impunidad de jueces, fiscales, activistas de los derechos humanos y miembros de las fuerzas de seguridad. *Human Rights Watch* también ha documentado secuestros, tortura y desplazamiento forzado. Consecuentemente, la seguridad se ha empeorado considerablemente en diversas regiones del país. Los abusos contra los derechos humanos como detenciones arbitrarias, homicidios ilegales, secuestros y tortura han alcanzado niveles alarmantes. En este contexto, conviene mencionar que las violaciones, cometidas en su mayoría por miembros de las incontables milicias, están completamente fuera de control, por lo que el trato de los casos particulares resulta casi imposible (*ibíd.*). Desde el final de los levantamientos de 2011, como mínimo siete jueces y fiscales fueron asesinados. A principios de 2014, Abdelaziz al-Hassadi, el primer fiscal libio tras la caída de Gadafi, murió violentamente en la ciudad de Derna. Como consecuencia, los tribunales en Derna pararon de trabajar, dado que la ciudad no estaba bajo control gubernamental durante muchos meses. Asimismo, los tribunales en Bengasi y Sebha suspendieron su trabajo tras el asesinato de otros jueces allí (cf. Salah, HRW, 14.04.2014). Ante estas circunstancias, es indispensable el apoyo internacional inmediato y duradero a la policía judicial responsable de proporcionar seguridad en los centros de detención, así como a los jueces, fiscales y testigos. Whitson realza: “If the Libyan government can’t exercise even these basic functions in significant parts of the country, then others will take ‘justice’ into their own hands.” (HRW, 07.03.2014).

En lo que concierne a la comunidad internacional, sería de importancia fundamental proporcionar personal formado y capacitado para revisar los expedientes de los detenidos con el fin de determinar las bases jurídicas en cuanto a su detención. Toda persona detenida sin ninguna base jurídica debería ser puesta en libertad de inmediato. Mediante estas revisiones se podrían prevenir futuras excusas con las que se justifican las continuas detenciones arbitrarias en el país. Decenas de miles de personas siguen desplazadas internamente en Libia, incluyendo más de 30.000 de Tawergha que huyeron de su ciudad ya en 2011 (Arab News, 27.04.2017). La naturaleza sistemática de este desplazamiento forzado, que por parte del Consejo de la Shura de Misrata también abarca el impedimento violento frente a los desplazados en cuanto a un regreso seguro a sus hogares, constituye un crimen de lesa humanidad. Los responsables, incluidos los cómplices del desplazamiento forzado y los comandantes de las fuerzas responsables y conscientes del crimen sin haberlo prevenido, también deberían ser considerados penalmente responsables de los actos con arreglo al derecho internacional. Los líderes y las milicias de Misrata (opositores del régimen de Gadafi) acusan a los tawerghanos (leales con Gadafi) de haber cometido graves crímenes contra los habitantes de Misrata durante los levantamientos de 2011, entre ellos tortura, asesinatos y abusos sexuales (*ibíd.*).

Debido al castigo colectivo que sufren los tawerghanos desde entonces, la comunidad internacional debería abordar el continuo desplazamiento forzado ilegal de los libios, incluida toda la población de la ciudad de Tawergha. Mediante sanciones debería ejercer presión sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad para influir positivamente en el proceso de rendición de cuentas. Asimismo, sería de importancia fundamental designar un mediador de reconocimiento internacional con el fin de instar a las milicias a poner fin al castigo colectivo de esta comunidad minoritaria y facilitar el regreso seguro de los desplazados de Tawergha a sus hogares.

Por lo general, con respecto al sistema de justicia en Libia, cabe destacar que los procesos dirigidos y mediados por líderes tribales en el marco de la *Sharia* tradicionalmente presentan un aspecto fundamental en cuanto a la forma en la que se abordan problemas jurídicos (*cf.* Scholz 2002: 7). Por lo tanto, y aunque no tenga mucha semejanza con nuestro entendimiento jurídico occidental, a largo plazo es imprescindible considerar que los líderes tribales deban contribuir significativamente al tratamiento de los crímenes cometidos, incluidos los que son relacionados con el desplazamiento forzado.

4.2.6.2 La Corte Penal Internacional en el caso de Libia: influencia limitada

Frente a un aumento constante de violaciones de los derechos humanos, la falta de un gobierno nacional potente, la creciente dominancia de milicias islamistas en numerosas regiones

del país y la anarquía que conlleva su influencia, la autoridad de los líderes tribales y su capacidad de mediar de manera eficaz y persistente en los mecanismos legales se ven socavadas gravemente, e impide que su papel tradicional pueda establecerse como alternativa a las instituciones estatales y procesos más formales que, como mencionado anteriormente, están en peligro de colapso total.

Con este dilema, o sea la capacidad insuficiente de tratar con problemas jurídicos mediante las instituciones responsables a nivel nacional, sería de importancia fundamental que las autoridades libias, incluyendo sobre todo el GNA y la HoR, reconozcan la necesidad urgente de cooperar firmemente con la CPI. La fuente de la jurisdicción en la que se basa la influencia de la CPI en Libia se debe a la Resolución 1970 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 26 de febrero de 2011. Bajo el Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la CPI, el Consejo de Seguridad puede remitirle al fiscal de la CPI una situación en cualquier país en virtud de su mandato basado en el Capítulo VII de la Carta, si determina que la situación en cuestión amenaza la paz y seguridad internacionales (*cf.* HRW, mayo de 2013). En lo que concierne a Libia, la Resolución 1970 otorgó autoridad continuada sobre los eventos en el país ocurridos desde el 15 de febrero de 2011. Debido a la resolución, es necesario que las autoridades libias cooperen con la Corte. Si no cooperan, la CPI tiene el derecho de emitir un dictamen al respecto. Con un caso llevado ante la CPI debido a una remisión por el Consejo de Seguridad, el dictamen se envía al Consejo para su seguimiento. A continuación, éste dispone de una variedad de opciones, incluyendo resoluciones, sanciones y declaraciones presidenciales (*ibíd.*).

No obstante, en la práctica también se han revelado debilidades graves por parte de la CPI: en 2011, tanto el hijo de Muamar el Gadafi, Saif al-Islam, como su cuñado y antiguo jefe del servicio secreto, Abdullah Senussi²⁵¹, fueron objeto de órdenes de detención emitidas por la CPI, un mandamiento con el que Libia al final no cumplió; pero la CPI no tuvo ni el poder ni la autoridad suficiente para imponerlo. Como realza McDermott (2015), en un momento en el que la Corte se encuentra bajo una presión creciente, el trato de Libia con figuras del antiguo régimen es un ejemplo llamativo de los desafíos a los que se está enfrentando la justicia internacional. También es una advertencia de la influencia limitada de la CPI en un momento en el que se requiere de su apoyo urgente. Algunos tribunales penales internacionales anteriores, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tenían primacía sobre los tribunales nacionales, lo que significa que podían exigir a los Estados que remitieran los casos a la CPI. Más tarde, estos tribunales comenzaron a remitir los

²⁵¹ Tanto Gadafi como Senussi fueron acusados de una amplia gama de crímenes cometidos durante los levantamientos en 2011. Entre ellos destacan matanzas en masa, tortura, violaciones y el apoyo a grupos armados leales con el antiguo régimen de Muamar el Gadafi. En el caso de condena, y de acuerdo con la jurisdicción libia, varios de los cargos conllevarían la pena de muerte (PFAFF, Isabel, "Gaddafis Machtzirkel vor Gericht", 19.09.2013).

casos a Estados nacionales, pero no hasta que fuera asegurado que el acusado no estuviera sujeto a la pena de muerte y que recibiera un juicio justo.

Esta manera de proceder ayudó a mejorar las normas y prácticas legales de los Estados. Ruanda, por ejemplo, abolió la pena de muerte e introdujo nuevas medidas de protección de testigos con el fin de facilitarle al tribunal internacional la transferencia de los casos al control nacional. Por el contrario, la CPI ejerce jurisdicción en virtud de un principio conocido como “complementariedad”, lo que significa que sólo puede litigar un caso en el que el Estado en cuestión (que tiene jurisdicción), no está dispuesto o no es capacitado para procesar. Como define el Estatuto de Roma de la CPI:

La Corte Penal Internacional no será un reemplazo sino un complemento para la jurisdicción nacional. Las cortes nacionales seguirán teniendo prioridad en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes en su jurisdicción. De conformidad con el principio de complementariedad, La Corte Penal Internacional actuará solo cuando las cortes nacionales sean incapaces de ejercer su jurisdicción o se muestren renuentes a hacerlo. Si una corte nacional está dispuesta a ejercer su jurisdicción y es capaz de hacerlo, La Corte Penal Internacional no puede intervenir y ningún ciudadano de ese Estado puede ser llevado ante ella, a no ser en los casos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. (DPI/2016 – Octubre de 1998, no. 13)

Este principio permitió al Estado libio impugnar la transferencia de los casos de Saif al-Islam Gadafi y Abdullah Senussi a la CPI, puesto que se expresó dispuesto y capacitado para juzgarlos en un tribunal nacional. Pero los acusados querían ser juzgados por la CPI para evitar la pena de muerte que la CPI no puede emitir, y argumentaron que no tendrían un juicio justo en Libia (*cf.* Spencer, 21.11.2011; Karnavas, 18.07.2016). En última instancia, la Corte determinó que el juicio contra Senussi podía tener lugar en Libia al rechazar el argumento de su equipo de defensa de que un Estado no podría ser considerado genuinamente “dispuesto” a llevar a cabo un proceso, si no respeta el derecho del acusado a un juicio justo. A pesar de estas preocupaciones, la Cámara de Apelaciones disipó las dudas efectivamente y explicó que la falta de acceso de Senussi a un abogado fuera “due primarily to the security situation in the country” (*cf.* McDermott 2015). En cambio, el caso contra Gadafi se consideró admisible ante la CPI, en gran medida debido a la incapacidad de Libia de juzgar al acusado, dado que las autoridades libias no podían asegurar la transferencia de Gadafi con el fin de comparecer en juicio. A pesar de la decisión de la CPI de que Gadafi debía ser juzgado en La Haya y no en Libia, el hecho de que nunca fue transferido para ser juzgado demuestra una de las mayores debilidades de la Corte: carece de un mecanismo independiente de aplicación para asegurar la transferencia de los acusados a su custodia (*ibíd.*). Este es el problema que ha ocurrido en el caso de Libia. En diciembre de 2014, la CPI constató que el país, que no forma parte del Estatuto de Roma de 1998, es decir, el tratado constitutivo de la CPI, no había cumplido con sus peticiones, por lo que

sometió el asunto al Consejo de Seguridad. En mayo de 2015, el Consejo, a su vez, exhortó a Libia a cooperar con la Corte, pero en términos vagos y sin mención explícita de la transferencia de Saif al-Islam Gadafi.

Tal como se ha señalado, frente a la inseguridad nacional creciente, la dominancia de las numerosas milicias (incluyendo las Brigadas de Zintan que habían retenido a Gadafi desde noviembre de 2011), la falta de recursos y el colapso del sistema jurídico nacional, la intromisión de la CPI en Libia se ve obstaculizada considerablemente. Pese a la Resolución 1970 que otorgó a la CPI la autorización de investigar y procesar también los crímenes más recientes, en realidad su poder e influencia son muy limitados. A pesar de los obstáculos actuales que impiden el funcionamiento regular de las entidades jurídicas, tanto a nivel local como nacional e internacional para defender la rendición de cuentas por las incontables violaciones, es importante considerar que actores de todas las partes involucradas en el conflicto libio han cometido crímenes graves, y que en virtud del derecho internacional no sólo funcionarios e instituciones estatales, sino también actores no estatales deberían ser responsabilizados por las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional, incluidos también los crímenes relacionados con el desplazamiento forzado.

Con respecto al desplazamiento, cabe destacar que la crisis inicial causada por los levantamientos en 2011 ha empeorado cada vez más desde el estallido de la guerra civil en 2014. Consecuentemente, la promoción de la rendición de cuentas frente a los desplazados durante la revolución y de soluciones duraderas ha sido socavada con gran impacto.

Como se revelará en los siguientes capítulos, la crisis perpetua, tanto del desplazamiento interno como transfronterizo, está vinculada profundamente con el fracaso de las autoridades libias de restablecer la seguridad nacional tras los disturbios de 2011, de establecer un sistema eficaz de justicia transicional, y de promover un proceso de reconciliación entre infractores y víctimas. Es imprescindible entender que son, en gran medida, las desavenencias, rivalidades y luchas entre (percibidos) lealistas del antiguo régimen, oponentes y nuevos actores reclamando el poder que pueden ser considerados los principales causantes del desplazamiento continuo en el país. No obstante, no se puede negar que también hay una amplia gama de elementos adicionales, entre ellos conflictos por razones étnicas, tribales, por tierras (numerosos con impacto histórico), que intensifican la crisis y evitan su resolución de manera duradera. Ante estos motivos diversos e históricos que han contribuido y siguen contribuyendo al agravamiento de la crisis libia del desplazamiento, la complejidad y la extensión del asunto se aumentan cada vez más, sobre todo desde la caída de Gadafi. Por lo tanto, la asunción de responsabilidad y el apoyo por parte de la comunidad internacional en cuanto a la contención de la crisis y la búsqueda por soluciones duraderas es esencial y urgentemente necesaria.

5. La crisis del desplazamiento interno tras la caída del régimen de Gadafi

Desde el cambio violento de régimen en octubre de 2011, Libia se ha convertido en un país caracterizado por desplazamientos forzados a nivel nacional que ha causado incontables víctimas en la población civil. En total, entre febrero hasta diciembre de 2011, se estima que a nivel nacional al menos 500.000 personas fueron desplazadas (IDMC, 31.12.2013), de las que la mayoría pudo regresar a sus hogares todavía el mismo año. No obstante, hasta diciembre de 2011, se estimó que como mínimo 154.000 personas seguían siendo desplazadas a nivel nacional (IDMC, Global Overview 2011; véase parte III, cap. 1 y 4.1). A finales de 2013, el número de IDP se disminuyó a 59.000 (IDMC, Global Overview 2014; IDMC, 31.12.2013). En contraste, y de acuerdo con la *Displacement Tracking Matrix* (DTM)²⁵² de la OIM, a finales de 2014, se identificaron y localizaron 348.372 IDP, de las que muchas todavía seguían siendo desplazadas desde la crisis en 2011²⁵³. Cabe mencionar que estos números divergentes se deben a la recogida complicada de datos en vista de la guerra civil y circunstancias de anarquía en numerosas regiones del país. Por lo general, dada la inseguridad general en toda Libia, el regreso de las IDP a sus hogares abandonados en la mayoría de los casos sigue siendo obstaculizado en un futuro cercano.

Como ya se ha mencionado en la parte III, capítulo 4.1, la Media Luna Roja Libia estimó que a principios de 2016, más de 500.000 IDP libias urgentemente necesitaron apoyo humanitario, un número también publicado en el *2016 Global Report on Internal Displacement* del IDMC (31.12.2015). Pero unos meses más tarde, en la *DTM Round 7* de la recopilación de datos realizada entre noviembre y diciembre de 2016, se identificaron en total 303.608 IDP. Se reveló que de ellas, un 13% tuvo que abandonar sus hogares en 2011, un 5% entre 2012 y 2014, y 82% fueron desplazadas entre 2014 y 2016. En *Round 8* del DTM realizado entre enero y febrero de 2017, se identificó un total de 294.436 IDP, de las que 26% fueron desplazadas entre 2011 y 2014, 42% en 2015, y 32% en 2016.

Con respecto a la división geográfica de las IDP, cabe señalar que el sur constantemente ha tenido la proporción más baja de personas desplazadas: en *Round 1* del DTM llevado a cabo en enero de 2016, el número ascendió a 32.555 y se disminuyó a unos 20.720 en *Round 7* (noviembre-diciembre de 2016). Estos números se deben a la cantidad menor de centros urbanos y políticos en esta región comparada con el este y oeste del país. El este ha acogido el mayor número de IDP y, demográficamente, ha tenido el mayor grado de fluctuación con un máximo de

²⁵² La DTM es un sistema para rastrear y monitorear el desplazamiento y la movilidad de poblaciones. Está diseñado para registrar, procesar y difundir sistemáticamente datos e informaciones con el fin de proporcionar un mejor conocimiento de los movimientos y las necesidades alternantes de las poblaciones desplazadas y los migrantes, ya sea *in situ* o en ruta (IOM, “DTM Displacement Tracking Matrix”, 2017).

²⁵³ IOM, “IOM Libya Brief”, October 2014.

227.250 alcanzado en *Round 3* (mayo de 2016), antes de bajar a 135.450 en *Round 7*. Este descenso se debía al gran número de desplazados internos de Bengasi que regresaron a sus hogares tras la expulsión de milicias islamistas de la ciudad por el LNA en febrero de 2016.

La población desplazada en el oeste ha permanecido relativamente estable durante la recopilación de datos en *Round 3* a *Round 7*, es decir, desde mayo hasta diciembre de 2016. El número más elevado se alcanzó en julio de 2016 con unos 180.673 IDP en la región. A finales del año, el número se había reducido a unas 147.438 víctimas (cf. OIM, DTM, 2016 In Review, pp. 24-25). En total, las mayores poblaciones de IDP en 2016 se encontraron en Bengasi, el distrito Al Wahat en la región de la Cirenaica en el noreste de Libia y Trípoli. Con más de 128.500 personas, la región de Bengasi acogió al mayor número de IDP entre mayo y junio de 2016. La región de Al Wahat acogió al segundo mayor número de IDP, con los desplazados internos residiendo principalmente en el área de la ciudad de Ajdabiya tras haber huido de los enfrentamientos armados en Bengasi. El aumento llamativo de los desplazados internos que huyeron a Misrata y Trípoli entre mayo y julio de 2016 puede atribuirse al desplazamiento de numerosas familias de Sirte durante este periodo. En el distrito de Al Jabal al Gharbi en el noroeste de Libia, cerca de la frontera con Túnez, el área de Zintan acogió el mayor número de IDP. Muchos desplazados residiendo allí fueron desplazados debido a la actitud opositora a Gadafi por parte de numerosos grupos armados de la región, y a causa de luchas intensas en las montañas de Nafusa que surgieron en el marco de la revolución en 2011 (*ibíd.* 25).

Como consecuencia de los acontecimientos, el aumento del número de desplazados ha conllevado un grave impacto en la situación general del desplazamiento que ya había comenzado en aquel entonces, dado que los recursos humanitarios han sido muy limitados desde principios de la crisis. Con el fin de poder responder a los flujos enormes de IDP de manera adecuada, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) lanzó un llamamiento en octubre de 2014 con el fin de recaudar USD 35 millones para financiar la asistencia humanitaria necesaria en Libia; pero de acuerdo con la ONU, prácticamente no había ninguna respuesta positiva de los donantes²⁵⁴. A lo largo de los últimos años de crisis continuas, la gran mayoría de las organizaciones internacionales y ONGs retiraba su personal de Libia, dejando la respuesta humanitaria en manos de un número limitado de ONGs locales y la Media Luna Roja Libia. No obstante, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas sobre la ayuda humanitaria en Libia, en verano de 2016 resultó que, pese a los numerosos impactos que tiene la guerra en la población civil, la economía y la política nacional, se ha logrado distribuir asistencia a cada provincia en Libia (cf. Zaptia, 02.09.2016), incluyendo también suministros de alimentos, fármacos y atención médica, productos no alimentarios, protección y servicios de enseñanza.

²⁵⁴ Panapress, "Libya: UN needs US\$35m for Libya's IDPs", 10.10.2014.

Según las Naciones Unidas, la respuesta al desplazamiento en Sirte se considera como prioridad, con miles de personas todavía dispersas debido a las operaciones militares continuas contra el EI. En el informe destaca que las Naciones Unidas formularon una vez más una petición por USD 165,6 millones para poder financiar proyectos humanitarios; pero solamente USD 48,3 millones fueron donados, lo que equivale a la financiación de unos 28% de los proyectos (*ibíd.*).

Muchas de las IDP que fueron desplazadas a causa de la violencia reciente, posiblemente puedan regresar a sus hogares en relativamente poco tiempo, una vez que se haya restablecido cierto grado de seguridad, como era el caso con muchas IDP que huyeron temporalmente durante la revolución. Pero en lo que concierne a las personas desplazadas por un período más largo, su desplazamiento a menudo se origina en motivos de venganza, ya que la expulsión ha sido utilizada para castigar a familias y comunidades enteras consideradas como leales al antiguo régimen de Gadafi (véase parte III, cap. 2.2). En otros casos, el desplazamiento ha sido causado o sostenido para obtener beneficios materiales al explotar la vulnerabilidad de los que se encontraban sin protección tras el derrocamiento de Gadafi. Uno de los numerosos ejemplos que revela las tensiones étnicas es el caso de varias tribus originadas en las montañas de Nafusa: en 2013, hubo luchas intensas entre combatientes de las tribus de qantar y mashashya por tierras y los recursos limitados de agua. De acuerdo con Mohamed Hussein, un residente qantar de la ciudad de Mizda, “Meshashya fired on the water pipes on purpose to vex our people and make them go away” (IRIN, 02.04.2013). Alrededor de 1.500 familias tuvieron que huir de sus hogares, de las que la mayoría siguen siendo desplazadas, debido a la actitud agresiva por parte de los qantar que se oponen vehementemente al regreso de los mashashya. Asimismo, siguen desplazados muchos tuareg que fueron expulsados de sus hogares en la ciudad de Gadamés en 2011. Al igual que entre los qantar y mashashya, su desplazamiento continuo se debe a motivos étnicos: con el fin de socavar sus reclamos, algunos que se oponen a su regreso han argumentado que los tuareg no son libios, sino malienses, por lo que no dispondrían de los mismos derechos como los ciudadanos libios.

Aunque cada uno de estos casos tenga rasgos muy complejos, la situación más delicada del desplazamiento interno probablemente presenta el caso de los tawerghanos. Siendo unas de las víctimas más afectadas de la revolución de 2011 y de la guerra civil, en los próximos capítulos se tratará profundamente este grupo de personas al analizar sobre todo sus condiciones de vida y cuestiones de protección a las que se enfrentan, así como los desafíos más destacados en la búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento y para encontrar la paz.

5.1 La situación del desplazamiento forzado de los tawerghanos

Las casi 300.000 IDP libias se enfrentan a innumerables desafíos, sobre todo debido a la violencia continua como causa principal de su huida y la precaria situación de seguridad en todo el país. Tanto la dinámica de la revolución de 2011 como de la guerra civil que la ha seguido ha conllevado graves enfrentamientos callejeros, el bombardeo y la destrucción no sólo de la infraestructura general, sino también de zonas residenciales enteras, por lo que la situación habitacional de los desplazados se está agravando cada vez más. Conviene mencionar que la destrucción de incontables zonas urbanas a nivel nacional y el desalojo causado por ello ha provocado que desde la caída de Gadafi los libios afrontan una crisis grave de vivienda con muchos viéndose obligados a alojarse en escuelas y otros edificios públicos, edificios inacabados y parques, frecuentemente con acceso mínimo a agua limpia (véase parte III, cap. 4.1).

Otro aspecto fatal es el acceso muy limitado a atención médica y asistencia competente cuya falta se nota cada vez más incluso en Trípoli: ante batallas constantes, más de treinta milicias e incontables cuadrillas de delincuentes en la capital, el suministro de fármacos y material sanitario proporcionado por organizaciones internacionales no llega a los hospitales, sino al mercado negro. Pero debido a la falta de dinero físico, para las clínicas resulta imposible financiar las mercancías urgentemente necesarias. Asimismo, el país entero carece de personal médico, dado que una gran parte del personal de origen extranjero abandonó sus puestos y huyó cuando la violencia escaló en 2011 (*cf.* Blaschke, 18.04.2017).

La experiencia del desplazamiento es particularmente trágica para las comunidades estigmatizadas como *azlam* (véase parte III, cap. 2.2). Numerosas comunidades percibidas como “leales” a Gadafi no sólo fueron expulsadas de sus hogares, sino han sufrido ataques sistemáticos que continúan hasta hoy día. Por ende, no sólo tienen el motivo de socavar la posibilidad del retorno a sus lugares de origen, sino también su integración en otras localidades (*cf.* UE 2013, BGUE-B2013-19.080101-C1-DEVCO). Este dilema se revela gravemente en el caso de los tawerghanos, un grupo de descendientes africanos subsaharianos que vivían principalmente en una ciudad denominada igual que su población, en el municipio de Misrata.

Como ya se ha descrito brevemente en la parte II, capítulo 5.4 y en la parte III, capítulo 4.2.6.1, siendo principalmente descendientes de esclavos e inmigrantes negros subsaharianos y tuareg, los tawerghanos fueron percibidos como beneficiarios de la generosidad del régimen de Gadafi: el coronel tenía la ideología política de un nacionalismo islámico panárabe y aspiraba al establecimiento de una unión sahariana transfronteriza, lo que tenía buena acogida sobre todo por los tuareg que desde la descolonización carecen de un Estado nacional, y por tanto viven

repartidos en cinco Estados diferentes (Burkina Faso, Níger, Malí, Argelia y Libia). La expectativa de obtener más reconocimiento social y económico les motivaba a emigrar a Libia, lo que también explica su lealtad con la política de Gadafi.

5.1.1 Antecedentes a la crisis humanitaria de los tawerghanos

En agosto de 2012, milicias de Misrata invadieron la ciudad de Tawergha. Sus habitantes, estimadamente unas 42.000 personas, fueron expulsadas de la ciudad debido a su percibida oposición a los levantamientos contra Gadafi en 2011, y la supuesta sospecha de que habían cometido crímenes graves contra la población de Misrata (*cf.* Sharquieh 2013: 20). Desde entonces, los tawerghanos han sido objeto de graves ataques de venganza, asesinatos, detenciones arbitrarias y tortura por parte de las milicias. Asimismo, regularmente ocurren ofensivas violentas en los campamentos de las IDP, incluyendo también secuestros arbitrarios²⁵⁵.

Comparado con otros grupos de IDP en Libia desplazados sobre todo entre 2011 y 2012²⁵⁶, los tawerghanos presentan el mayor número de desplazados internos en el país. Hasta hoy día, las milicias de Misrata y otras milicias de los alrededores siguen atacándolos de manera sistemática (*cf.* Arab News, 27.04.2017). La prevalencia de las IDP libias es un problema enorme en materia de los derechos humanos en el país, lo que surgió como consecuencia directa de los levantamientos en 2011. Consecuentemente, cabe mencionar que en el informe denominado Examen Periódico Universal presentado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el que la Jamahiriya Árabe Libia propuso ofrecer “una imagen global de los derechos humanos en el país, partiendo de su convicción de que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos constituyen una misma cosa, siendo elementos que se complementan mutuamente” (A/HRC/WG.6/9/LBY/1, p. 3), no se habían determinado ningunas recomendaciones específicas relacionadas con la necesidad de ofrecer protección a las IDP. Sin embargo, es importante realzar que Libia no ha logrado implementar ninguna de las recomendaciones esenciales que oficialmente respalda y que están vinculadas con la promoción de la protección de los derechos humanos. Por ende, tienen significado fundamental en cuanto a la situación actual de los desplazados internos. Estas recomendaciones no implementadas incluyen:

- la consolidación del Estado de derecho, dado que “el pueblo libio considera sagrada la vida humana, y la Jamahiriya Árabe Libia es un Estado que se rige por los principios del

²⁵⁵ Refugiado (1) de Tawergha; lealista con Gadafi (1), entrevista con la autora. Debido a denunciacines y amenazas peligrosas por parte de combatientes de milicias de Misrata, ambos entrevistados huyeron de Libia hacia Europa en verano de 2013.

²⁵⁶ La mayoría de las IDP desplazadas entre 2012 y 2014 originalmente viene de Al Kufrah y entre 2014 y 2016 de Bengasi y Sirte (*cf.* OIM, DTM, 2016 In Review, p. 27).

Estado de derecho, por lo que los ciudadanos de la Jamahiriya Árabe Libia gozan de una protección legal y judicial de su derecho a la vida” (*ibíd.* 23),

- la promoción del “diálogo entre los pueblos, de forma que se reafirme el derecho de los pueblos a sus opciones políticas, económicas, culturales y sociales, en vez de utilizarse la fuerza y las amenazas” (*ibíd.* 28),
- la promoción de las libertades fundamentales y el fomento de la protección nacional de los derechos humanos, aunque la Jamahiriya Árabe Libia “ha promulgado leyes que amparan y consagran la protección de dichos derechos y libertades, y que prohíben su menoscabo, limitación o restricción” (*ibíd.* 3),
- la adhesión a las convenciones internacionales de derechos humanos, dado que según el informe “las leyes libias no solo integran las disposiciones de los pactos y convenciones internacionales, sino que hacen de ellas una de sus fuentes principales de legislación, (...). Además, la Jamahiriya Árabe Libia se atiene al principio que otorga prioridad a la aplicación a los pactos y convenios internacionales de los que la Jamahiriya Árabe Libia es parte, ya que sus disposiciones tienen preponderancia sobre las que figuran en las leyes nacionales” (*ibíd.* 11).

En los últimos años, Libia no se ha ocupado mucho con cuestiones relacionadas a las IDP, y la única ley adoptada en relación con este grupo de personas es la Ley 29 aprobada por el GNC en 2013 relacionada con la justicia transicional. El artículo 5 de la Ley 29 denomina a los grupos que urgentemente requieren la aplicación de la justicia transicional en Libia, incluidos las IDP (GNC, *Law No. 29 on Transitional Justice*, 2013). Pero desde su adopción, el Estado libio no ha logrado tomar medidas efectivas para implementar la Ley 29, lo que también incluiría que aquellos que han cometido atrocidades y crímenes contra los tawerghanos deben rendir cuentas de sus actos.

Asimismo, en lo que concierne a la recomendación sobre la adhesión a las convenciones internacionales de derechos humanos, hay que mencionar que Libia todavía no ha adoptado medidas enérgicas para firmar convenios claves relacionados con la protección de las IDP, como por ejemplo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma de 1998), la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala de 2009), los *Guiding Principles on Internal Displacement* (OCAH 1998), y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (ACNUR 1951) y su Protocolo adicional (1967).

5.1.2 Ataques arbitrarios y condiciones de vida precarias

Tras su desplazamiento forzado, la mayoría de los tawerghanos buscaron refugio en cuatro campamentos principales en la región (Janzour, al-Fallah, Airport Road Camp y Sidi Sayeh; HRW, 19.11.2013), donde siguen viviendo en condiciones muy precarias y con acceso limitado a alimentos, asistencia médica y demás recursos. Otros se refugiaron en ciudades libias más lejanas o abandonaron el país (cf. Sharquieh 2013: 20). De acuerdo con *Human Rights Watch*, en lo que concierne a los crímenes de lesa humanidad cometidas en 2016, tanto milicias como autoridades de Misrata habían continuado oponerse agresivamente al regreso de los aproximadamente 40.000 habitantes de Tawergha a sus hogares, dados los supuestos delitos atribuidos a los tawerghanos contra combatientes que lucharon en contra de Gadafi durante la revolución de 2011. En un primer intento de resolver el conflicto continuo entre las dos ciudades enemistadas, representantes de Misrata y Tawergha firmaron un acuerdo de reconciliación que tiene por objeto garantizar el regreso de los tawerghanos desplazados, así como proporcionar indemnizaciones a ambas partes mediante la reconstrucción de la infraestructura destruida. Asimismo, a través del acuerdo se aspira a abordar la cuestión de la rendición de cuentas e investigar crímenes graves. No obstante, en el momento de redactar estas líneas, todavía no ha entrado en vigor (cf. HRW, *World Report 2017: Libya*, diciembre de 2017).

Los tawerghanos alojados en los campamentos regularmente se enfrentan a incursiones y ataques sistemáticos por parte de milicias²⁵⁷. Asimismo, HRW frecuentemente informa sobre secuestros, asesinatos, detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. A continuación serán indicados algunos de los numerosos asaltos acontecidos en los últimos años:

- en febrero de 2012, en el campamento de Janzour con más de 1.500 desplazados en los alrededores de Trípoli, se produjo un ataque por combatientes fuertemente armados con un resultado de entre seis y doce muertes, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Huda Bel-Eid, una víctima de origen tawerghano que fue tratada en el hospital de Trípoli tras el asalto, contó: “Men from Misrata came to the camp [in Janzour district] at 10 o'clock [Monday]. We knew they were from Misrata because it was written all over their cars” (cit. en RT News, 08.02.2012). Asimismo resultó que tras haber invadido el campamento, los combatientes lo bloquearon con el fin de impedir que cualquier tipo de ayuda llegara a los desplazados. Numerosos observadores destacaron que la agresión de las milicias se debía sobre todo a motivos racistas (*ibíd.*).
- En 2012, aproximadamente 1.200 tawerghanos fueron detenidos sin sentencia pronunciada en varios centros de detención en Misrata. En 2014, cuarenta y cuatro de

²⁵⁷ Refugiado (2) de Tawergha, entrevista con la autora. Tras el asesinato de varios miembros de su familia por parte de combatientes de milicias de Misrata, el entrevistado abandonó Libia y se huyó a Europa a través de Túnez en otoño de 2012.

ellos fueron liberados. Organizaciones locales de derechos humanos suponen que varios miles de tawerghanos están presos en todo el país sin justicia ni sentencia, expuestos a condiciones precarias, maltrato y tortura (Tawergha Foundation, 02.10.2014).

- En noviembre de 2013, varias milicias atacaron el campamento de al-Fallah con más de 1.200 residentes causando la muerte de un hombre y tres heridos (HRW, 19.11.2013).
- Debido a la creciente escalada de las luchas entre fuerzas de *Libya Dawn* y *Operation Dignity*, en agosto y septiembre de 2014, casi 1.000 familias tuvieron que abandonar varios campamentos en Trípoli, entre ellos también al-Fallah, debido a temores de ataques por milicias de Misrata (HRW, 08.09.2014).
- A finales de agosto de 2014, hombres afiliados con la milicia *Libya Shield Forces* (el Escudo de Libia) de la región occidental que forman parte de la alianza de *Libya Dawn* invadieron el campamento con armas pesadas abriendo fuego a los civiles, lo que provocó tres heridos (*ibíd.*).
- En enero de 2016, fuerzas desconocidas lanzaron como mínimo cuatro cohetes a dos campamentos de residentes tawerghanos en Bengasi, causando la muerte de tres personas y siete heridos, entre ellos dos niños. De acuerdo con HRW, aunque no se tratara de un objetivo militar, la ausencia de fuerzas militares para proteger a los desplazados demostraba una indiferencia total por las vidas de la población civil (HRW, 24.01.2016).

En este contexto, cabe resaltar que desde el estallido de la revolución en 2011, la guerra civil en 2014, la crisis del desplazamiento forzado que desencadenó, así como el colapso total de las estructuras de un Estado de derecho, Libia no ha logrado proteger a su población civil de los ataques violentos por las milicias y otros grupos armados. Como consecuencia, los responsables de los crímenes han podido gozar de impunidad total, y hasta la fecha tampoco se han realizado investigaciones jurídicas contra ellos.

En cuanto a la legislación nacional, los tawerghanos carecen de protección por parte del Estado. El artículo 17 de la Declaración Constitucional, aprobada el 3 de agosto de 2011 por el NTC, obliga al Estado a garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos:

The Transitional National Council shall be entrusted to guarantee the national unity, the safety of the national territory, to embody and circulate values and morals, to ensure the safety of citizens and expatriates, to ratify the international agreements and to establish the bases of the civil constitutional democratic state.

Sin embargo, los ataques arbitrarios contra los tawerghanos evidentemente amenazan su derecho a la vida. El artículo 5 de la Ley 29 de 2013 establece que el asunto de las IDP debe tratarse en el marco de la justicia transicional. Pero teniendo en cuenta las amenazas continuas a

las que se están enfrentando los tawerghanos y otras IDP, desde la adopción de la ley, todavía no se ha establecido una política nacional coherente para poder responder a dicha cuestión de manera eficaz.

5.1.3 La negación de la libertad de circulación y de residencia

Los tawerghanos han sido impedidos de regresar a su ciudad y sus hogares, ya que la amenaza y los ataques por parte de los grupos de milicias siguen prevalecientes. El hecho de que el Estado no es capaz de tomar medidas contra la violencia continua por las milicias infringe su obligación de acuerdo con el artículo 20 (1) y (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)²⁵⁸ en el que consta:

1. *Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.*
2. *Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.* (PIDCP de 1966, art. 20 (1) y (2))

En su informe de marzo de 2012, la Comisión Internacional de Investigación para Libia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó “que tanto el régimen de Muammar Al-Qadhafi como las fuerzas rebeldes cometieron crímenes de guerra durante el conflicto armado” en 2011 (Centro de Noticias ONU, 09.03.2012). Asimismo concluyó:

(...) the thuwar (anti-Qadhafi forces) committed serious violations, including war crimes and breaches of international human rights law, the latter continuing at the time of the present report. The Commission found these violations to include unlawful killing, arbitrary arrest, torture, enforced disappearance, indiscriminate attacks, and pillage. It found in particular that the thuwar are targeting the Tawergha and other communities. (A/HCR/19/68, 08.03.2012)

En este contexto también informó que la destrucción de la ciudad de Tawergha se había realizado con el fin de dejarla inhabitable para que el regreso de sus ciudadanos jamás fuera posible (*ibíd.*).

Pese a varios intentos de diferentes miembros de la comunidad de regresar a Tawergha²⁵⁹, al parecer el Estado todavía no ha facilitado o promovido este proceso al garantizarles el paso seguro. Como consecuencia, a los tawerghanos se les ha negado su derecho a la libre circulación,

²⁵⁸ La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) constituyen los tratados básicos de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Jurídicamente vinculantes, los pactos garantizan los derechos humanos fundamentales, también llamados derechos humanos de la primera generación: el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado, el derecho a la libertad personal y la seguridad, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el derecho a votar en forma individual, universal, directa y secreta. Además, garantizan la igualdad de hombres y mujeres y una prohibición general de la discriminación contra las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Tanto la DUDH como los dos pactos fueron ratificados por Libia.

²⁵⁹ Refugiado (2) de Tawergha, entrevista con la autora.

tal como lo define el artículo 12 (1) del PIDCP, del cual Libia forma parte:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. (PIDCP de 1966, art. 12 (1))

Las autoridades libias han fallado a favor de posibilitar la decisión del consejo de los líderes comunitarios de Tawergha de regresar a finales de junio de 2013 (*cf.* HRW, 27.06.2013), y garantizarles a los desplazados la seguridad a la que todas las IDP tienen derecho de conformidad con la Ley 29 de 2013 anteriormente mencionada: el primer ministro del GNC de aquel entonces, Ali Zeidan, emitió un llamamiento en el que solicitó que los líderes pospusieran su regreso y prometió que en el plazo de pocos días se tomaran las medidas necesarias para asegurar el regreso de todos los tawerghanos a sus hogares (*cf.* Mohamed, 25.06.2013). Pero hasta hoy día, el Estado no ha cumplido con sus promesas de acuerdo con esta declaración. Sólo en enero de 2015, se lanzaron negociaciones políticas facilitadas por la UNSMIL entre representantes de los municipios de Misrata y Tawergha, con el fin de llegar a un acuerdo con respecto al regreso seguro de los tawerghanos. Unos meses más tarde, en mayo de 2015, las dos partes acordaron en establecer un comité conjunto encargado con el desarrollo de un plan concreto para el retorno de las IDP (*cf.* UNSMIL, *Report on the Human Rights Situation in Libya*, 16.11.2015, p. 24). Pero al momento de redactar estas líneas, el comité todavía no ha logrado realizar ningún progreso al respecto²⁶⁰.

5.1.4 Tortura, detenciones arbitrarias y la negación del derecho a un juicio justo

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, las milicias han detenido arbitrariamente a cientos de IDP de Tawergha, incluidos mujeres y niños. En el *Human Rights and Democracy Report 2013* sobre Libia del FCO – UK Foreign & Commonwealth Office publicado el 10 de abril de 2014 y actualizado el 21 de enero de 2015, se habían documentado estimadamente unos 1.300 tawerghanos detenidos y torturados, de los que la mayoría fue masacrada como actos de venganza por su lealtad a Gadafi y los supuestos crímenes cometidos contra la población de Misrata. Poco después, y tras la destrucción total de la ciudad, Tawergha sufrió una limpieza étnica, lo que provocó la huida de toda su población (*cf.* Tawergha Foundation, 17.02.2014, p. 7). Mediante análisis por satélite entre el 28 de julio de 2011 y 18 de agosto de 2012, se identificaron un total de 1.690 zonas dañadas. La segunda y principal fase de destrucción se produjo entre el 24 de noviembre de 2011 y 25 de mayo de 2012 con un total de

²⁶⁰ NAJJAIR, Housam, “Tawergha IDPs not cleared to return home just yet”, 08.06.2017.

1.373 daños, lo que representa más del 81% de todos los daños detectados. Se supone que más del 92% de todos los daños identificados resultaron de ataques incendiarios y los demás probablemente fueron causados por una destrucción “controlada” con explosivos (4.9%), ataques aéreos (1.4%) y fuego de artillería directa o indirecta (*ibíd.* 12).

Con respecto a las incontables detenciones arbitrarias que en la mayoría de los casos ha conllevado y sigue conllevando tortura e incluso la matanza de IDP tawerghanas, el Fiscal de la CPI declaró en un informe del 14 de noviembre de 2013:

It is a matter of great concern that thousands of detainees remain in uncertain conditions in the country, with multiple and apparently well-founded allegations of torture and even killings in detention having been reported. [...] Torture and inhuman treatment of prisoners should have no place in the new Libya. (ICC Prosecutor Statement, 14.11.2013, cit. en Tawergha Foundation, 17.02.2014, p. 14)

Pese a las numerosas acusaciones fundadas desde agosto de 2011, la declaración oficial del Consejo Local de Misrata revela que se opone vehementemente a las inculpaciones en cuanto a las pésimas condiciones en las prisiones y la ausencia absoluta de justicia:

We have demanded from the government the need to equip a prison to hold defendants that meets international standards, and we have asked the government to prosecute defendants swiftly in fair trials [...].

There have been violations or irregularities, [against Tawerghans] these are no more than individual, and not systematic infractions. We have worked and are working to prevent this, and we are willing to prosecute any person proven to have committed violations, whatever his status or rank.

There are some brigades located outside the city of Misrata. These have been linked to the Misrata revolutionaries, but these brigades are not subject to the authority of the Misrata Local Council or its military council. (ibíd. 18)

No obstante, estas declaraciones contrastan gravemente con las observaciones de la ONG libia *Alrassed Alliby – Libyan Monitor Organization*: en una base de datos da acceso a cientos de casos particulares, incluyendo hombres, mujeres e incluso niños que murieron en las prisiones de las milicias de Misrata tras haber sido torturados cruelmente²⁶¹.

En este contexto, cabe mencionar el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT según sus siglas en inglés) adoptada en 1984, que declara:

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.

²⁶¹ Alrassed Alliby – Libyan Monitor Organization.

2. *En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.*

3. *No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.* (UNCAT de 1984, art. 2)

Asimismo, el artículo 7 de la PIDCP de 1966 determina:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Tanto la convención como el pacto fueron firmados y ratificados por Libia sin reservas, lo que consecuentemente obliga al Estado a garantizar que nadie sea maltratado o intimidado por cualquier motivo discriminatorio. No obstante, hay que realzar que Libia no ha cumplido con su obligación y responsabilidad de impedir las atrocidades que equivalen al castigo colectivo de los tawerghanos.

Tal como ha sido señalado, entre las víctimas de tortura también se encuentran mujeres, tanto de origen tawerghano como de otros grupos étnicos. En abril de 2013, el cuerpo de una mujer joven fue encontrada en el mar a unas veinte millas del puerto de Girgis en territorio tunecino con marcas de tortura, quemadura y una bala en la cabeza²⁶². Hasta hoy día, su caso no ha sido investigado.

Todavía el mismo mes, *Alrased Alliby* informó sobre la sede de la Guardia Nacional en Trípoli en la que más de sesenta niñas libias han sido detenidas sin acusaciones ni juicio. Las víctimas están sometidas a diferentes formas de tortura psicológica, abuso físico y sexual, trabajo forzado y quemaduras, y se les niega asistencia médica²⁶³.

Asimismo, incluso niños han sido víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones: en abril de 2013, *Alrased Alliby* informó sobre el caso de Mohammed Masood Algady que a la edad de dieciocho años fue detenido en octubre de 2012 y transferido a Misrata, donde junto con otros jóvenes fue torturado hasta la muerte. Sobre su caso jamás se ha llevado a cabo una investigación²⁶⁴.

Poco después, se publicó otro informe sobre Amr Altaworgy, un niño tawerghano de trece años detenido en una prisión en Misrata desde octubre de 2011. Sufrió de anemia aguda debido a mala alimentación y tortura, pero las milicias armadas le negaron tratamiento médico hasta que un abogado exigió su traslado a un hospital en Trípoli, donde, no obstante, murió poco después. En

²⁶² Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Girl’s body was found after Libyan between 17 to 20 miles from the port of Girgis”, última actualización: 2017.

²⁶³ Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Najat Mohammed Marghany”, última actualización: 2017.

²⁶⁴ Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Mohammed Masood Algady born in 1994”, 23.04.2013.

ningún momento los culpables han sido responsabilizados²⁶⁵.

Alarmanamente, la mayoría de los casos documentados de detenciones arbitrarias y tortura se han llevado a cabo en prisiones controladas por grupos de milicias afiliados al denominado Comité Supremo de Seguridad (SSC según sus siglas en inglés). El SSC es un órgano oficial de seguridad estatal establecido por el NTC en octubre de 2011 con el fin de proporcionar un nuevo aparato de seguridad tras los levantamientos de 2011, y de este modo facilitar el proceso de transición en la era post-Gadafi. Pero dado que el Consejo ha fracasado en establecer normas eficaces para desarmar a los grupos revolucionarios e integrarlos efectivamente en las fuerzas de seguridad del Estado, se han desarrollado diversas fuerzas “híbridas” para apoyar a la policía, entre ellas el SSC. No obstante, también surgieron grupos radicales, como las *Libya Shield Forces* que con sus tendencias islamistas posteriormente se unieron a la alianza *Libya Dawn* que no sólo apoya al NGNC, sino que también lucha en contra de las fuerzas del general Haftar, el personal policial y otras instituciones públicas.

El hecho de que tales entidades en cierto sentido están bajo la autoridad del Estado subraya que ha fallado en su responsabilidad de mantener un nivel mínimo respecto al Estado de derecho, al cumplimiento de los derechos humanos y a la protección de sus propios ciudadanos. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 29 de 2013, el Estado está obligado a revisar, acusar o liberar a todos los detenidos:

The ministries of Justice, Interior and Defence shall adopt all necessary measures to end the detention of those associated with the previous regime who are accused of crimes. Within 90 days of the promulgation of the law, they [should] be referred to the competent public prosecution or released. The previous period of detention is not to be considered illegal if there is sufficient evidence that they committed crimes according to the law. (Law No. 29 of 2013 on Transitional Justice, art. 26 – Ending Detention)

Al continuar deteniendo a miles de personas sin cargos y sin llevarles ante un juez en un tiempo razonable, el Estado también ha violado el artículo 9 del PIDCP que determina:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. [...]

²⁶⁵ Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Holocaust Misrata and Tawergha children”, 16.06.2013; “The death of the child Amr Altaworgy in prisons of Misrata”, 18.06.2013.

4. *Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.*

5. *Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.* (PIDCP de 1966, art. 9)

En este contexto, también es imprescindible mencionar la Ley 38 aprobada por el NTC en mayo de 2012, que concedió efectivamente la impunidad a las milicias, haciéndolas inmunes a las acusaciones de los crímenes de guerra cometidos en el marco de la revolución de 2011, incluidos los masacres masivos contra los tawerghanos e inmigrantes subsaharianos. Asimismo abarca una amnistía en cuanto a los crímenes continuos que se consideran “esenciales para la revolución” (Glazebrook, 16.11.2014). El artículo 4 declara:

There is no penalty for necessities of the 17 February Revolution in terms of military, security or civil acts carried out by revolutionaries to save or protect the revolution. (Law 38 of 2012 on Some Procedures Concerning the Transitional Phase, art. 4)

Como consecuencia del apoyo por las autoridades, que de esta manera legitimaron la violencia, esta ley dio *carte blanche* a las milicias para asesinar a sus adversarios, sean combatientes de otras facciones o personas civiles. También cabe mencionar que dos meses antes de la aprobación de la ley, en marzo de 2012, muchas de las milicias se habían incorporado a la mencionada fuerza de policía recién establecida por el NTC, el Comité Supremo de Seguridad, y un nuevo “ejército”, los *Libya Shield Forces*. Este paso no solamente las legitimó, sino también les facilitó el acceso a mayores recursos materiales y armas para continuar cometiendo crímenes y presionar las autoridades jurídicas del país, que en su mayoría han colapsado y son incapaces de actuar.

Es evidente que la Ley 38 ha establecido una impunidad total para los crímenes cometidos en nombre de la Revolución del 17 de febrero, por lo que consecuentemente conlleva un impacto destructivo en cuanto al restablecimiento del Estado de derecho en Libia. La Ley 38 claramente infringe el derecho internacional, ya que decretar una ley de amnistía es ilegal en lo que concierne a delitos graves, tales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Como anteriormente señalado, en su artículo 2, la UNCAT también determina que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar a todas las personas en su territorio responsables de tales actos violentos. Cabe realzar que el Estado tiene la responsabilidad de derogar la Ley 38, dado que Libia ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que exige en el artículo IV que los Estados Partes abolieran todas las prescripciones pertinentes en materia de enjuiciamiento de crímenes graves:

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos I [crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad]²⁶⁶ y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida.

5.1.5 El derecho a una vivienda y al reconocimiento de la personalidad jurídica

Con respecto al alojamiento de los miles de IDP en Libia, el Estado no ha logrado proporcionarles viviendas adecuadas. Los refugios en los campamentos de desplazados internos están en malas condiciones, sin protección suficiente contra el frío de los inviernos, sin calefacción y casi ningún mobiliario. Familias de diez o más personas comparten una habitación, en la que tienen que dormir, cocinar y comer. El sistema de suministro de agua frecuentemente no funciona y el acceso a agua potable no está garantizado²⁶⁷. Esto contraviene al artículo 11 (1) del PIDESC firmado y ratificado por Libia, que determina:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (PIDESC de 1966, art. 11 (1))

En el caso de Libia, el Estado no ha logrado cumplir con las condiciones de proporcionar viviendas adecuadas a las IDP. En 2013, el GNC ofreció construir 500 casas para alojar a los desplazados internos. Pero la ubicación propuesta se encontraba en Jufra, una región inhóspita en medio del desierto libio. Consecuentemente, el Consejo Local de Tawergha lo rechazó (cf. Zurutuza, 26.11.2013). Otros intentos, aunque sean poco decididos, no se han lanzado hasta el momento.

Pero aparte de proporcionarles a los desplazados viviendas adecuadas, el Estado también está obligado, conforme a la Ley 29 de 2013, a ofrecer reparaciones a sus ciudadanos gravemente afectados por el periodo de transición:

Seek reparation for the victims and those harmed by the events included in the concept of transitional justice according to this law and compensate them for the damages for which the state is responsible for compensating. (Law 29 of 2013 On Transitional Justice, art. 4 (8) – Objectives of the Law)

²⁶⁶ Nota de la autora.

²⁶⁷ Refugiados (1) y (3) de Tawergha, entrevista con la autora. Tras el asesinato de sus padres por combatientes de milicias de Misrata, el entrevistado Refugiado (3) huyó de Libia hacia Europa en verano de 2014. Entre 2012 y 2014 vivía en el campamento de IDP en Janzour.

Sin embargo, al momento de redactar este capítulo, el Estado no ha logrado construir viviendas adecuadas para las IDP, y tampoco ha proporcionado ninguna indemnización persistente a ninguna comunidad de desplazados internos en el país.

En lo que concierne a las personas desaparecidas desde la Revolución del 17 de febrero, cabe realzar que Libia revela números alarmantes. Desde 2011, en total más de 10.000 personas son consideradas como desaparecidas (*cf.* A/HRC/WG.6/22/LBY/3, p. 5). Con respecto a la adopción de leyes, el Estado libio ha aprobado leyes discriminatorias frente a estas víctimas de la transición: la Ley 1 de 2014, relacionada con las familias de los mártires y los desaparecidos en los levantamientos del 17 de febrero, únicamente define como “desaparecidos” a los que lucharon activamente contra Gadafi, e indirectamente “descalifica” a cualquier persona asociada con la administración del antiguo régimen (*ibíd.*). Como resultado, aunque en 2011 después de la expulsión de su ciudad se habían documentado miles de tawerghanos desaparecidos²⁶⁸, hasta hoy día no se dispone de ningún número exacto con el fin de poder registrar y encontrarlos. De acuerdo con estadísticas oficiales, hasta junio de 2013, unas 2.516 familias de personas desaparecidas se registraron en el Ministerio de Asuntos de la Familia, Mártires, Heridos y Desaparecidos. No obstante, solamente unas 500 familias han recibido apoyo financiero mensual. Los demás sólo recibieron subsidios por un mes, al parecer debido a su supuesta lealtad con el régimen de Gadafi. En lo concerniente a los tawerghanos, hasta enero de 2013, sólo noventa y tres miembros de familia de tawerghanos desaparecidos tenían la posibilidad de identificar sus parientes, pero dada la razón anteriormente mencionada, no reciben ni apoyo psicológico, ni financiero o jurídico (*cf.* Amnistía Internacional, “Barred from their homes”, 2013: 14). Este número tan bajo demuestra el grado de discriminación que prevalece en las autoridades libias. Tal ley obstaculiza masivamente la reconciliación nacional prevista por la Ley 29 de 2013. Asimismo, facilita la discriminación arbitraria en virtud de la ley, lo que claramente constituye una violación del artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 que también fue establecido de forma vinculante en el artículo 16 del PIDCP de 1966:

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. (DUDH de 1948, art. 6; PIDCP de 1966, art. 16)

²⁶⁸ DITZ, Jason, “Disappeared: Thousands of Libyan Blacks Turn Up Missing in Rebel Offensives”, 13.09.2011.

5.1.6 La cuestión del origen étnico en el conflicto libio en el caso de Misrata y Tawergha

Tras haber analizado detalladamente las circunstancias de los tawerghanos desde un punto de vista jurídico, por lo general, cabe resumir que la gran mayoría de la población de Misrata se opone enérgicamente al regreso de los tawerghanos. Después del asedio inicial y de los ataques intensos, las fuerzas de Misrata volvieron a Tawergha destruyendo aun más la infraestructura de la ciudad, con el fin de expropiar y expulsar a las IDP de manera definitiva y permanente. La expulsión intencionada de los tawerghanos y el rechazo de su derecho al regreso a sus hogares representan un castigo colectivo por delitos individuales cometidos por personas de origen tawerghano, y por lo tanto ha sido caracterizado por investigadores y grupos de derechos humanos, como *Human Rights Watch* y Amnistía Internacional, como crímenes de lesa humanidad²⁶⁹.

Después de la destrucción de su ciudad, numerosos tawerghanos, al igual que miles de otros libios, huyeron del país. No obstante, la mayoría sigue estando desplazada dentro de Libia, donde la vida está caracterizada por peligros y ataques constantes, a causa de su color de piel y su identidad. Estas circunstancias sugieren que tanto el origen étnico como la clase social son factores claves que agravan el conflicto significativamente²⁷⁰. En el caso de Tawergha, cabe mencionar a este respecto que en Libia los tawerghanos son considerados como antiguos esclavos de Misrata. Históricamente, Misrata ha sido un mercado fundamental y fuente muy importante de empleo para los tawerghanos y hasta la revolución de 2011, una gran parte de la población dependía económicamente de Misrata²⁷¹.

Tras su expulsión, las IDP tenían que refugiarse principalmente en campamentos mal atendidos con escasos servicios y dispersos por todo el país. Pero su castigo colectivo no se ha acabado con su desplazamiento forzado. Más bien, como descrito anteriormente, los campamentos han sido objeto de ataques, incluidos agresiones físicas, violencia sexual por motivos de género e incendios provocados. Muchos de estos ataques han sido lanzados por milicias que frecuentemente también arbitrariamente detienen, interrogan y torturan a hombres de origen tawerghano a los que atribuyen la participación en los ataques contra Misrata²⁷². Pero con respecto a las milicias atacando a los tawerghanos, muchas de las IDP creen que las agresiones no sólo son lanzadas por milicias de Misrata, sino también por grupos armados de otras regiones aliadas con estas últimas. De acuerdo con IDP que presenciaron asaltos por milicias, los combatientes llegaron con vehículos del gobierno, por lo que asumen que los ataques fueron lanzados con el apoyo y la complicidad estatal, protegidos y legitimados por el artículo 4 de la

²⁶⁹ Human Rights Investigations, “Barred from their Homes” briefing on Tawergha fails to address NATO and Amnesty complicity”, 26.10.2013.

²⁷⁰ Refugiado (2) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁷¹ Refugiado (3) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁷² Refugiados (1) y (2) de Tawergha, entrevista con la autora.

Ley 38. El riesgo de ataques continuos y de secuestros, incluso en campamentos de desplazados, ha reducido enormemente la libertad de movimiento de los afectados. Consecuentemente, por temores justificados ante la inseguridad constante, los tawerghanos no salen de los campamentos y pasan días monótonos sin tener acceso a ninguna actividad²⁷³. Los consejos locales de los tawerghanos han reivindicado que las autoridades, como el Ministerio de Defensa y la *Office of Displaced People's Affairs* en la Oficina del Primer Ministro (en aquel entonces del GNC, hoy en día del GNA) urgentemente proporcionen protección a los campamentos, pero muchas IDP señalan que se ha hecho caso omiso de las demandas²⁷⁴. En ausencia de la protección por parte del gobierno, las IDP se han organizado en turnos para vigilar los campamentos ellos mismos, pero las agresiones continuas por grupos armados demuestran la falta enorme de seguridad. Por consiguiente, estas circunstancias también afectan a otros grupos de desplazados, como de la región de Warshefana o las montañas de Nafusa en el oeste del país (cf. IDMC, “Libya IDP Figures Analysis”, 2015). En lo que concierne a las detenciones arbitrarias de una multitud de libios, es sobre todo la falta de conocimiento sobre el destino de los desaparecidos y encarcelados, y la conciencia de que muchos han sido torturados, lo que causa gran angustia. Sin embargo, es precisamente dicha situación de inseguridad la que dificulta a las familias de las personas desaparecidas y asesinadas plantear sus preocupaciones ante instituciones estatales, hacer valer su derecho a exigir justicia y demandar compensaciones por su sufrimiento. Por ende, la negación de reconocer el sufrimiento de las IDP por parte del Estado genera ciclos de violencia cada vez peores y obstaculiza fundamentalmente la resolución del conflicto armado en el país, el establecimiento y la consolidación de la paz, así como el proceso de reconciliación entre los numerosos grupos enemistados.

Aparte de la inseguridad física y el racismo a los que las IDP tawerghanas se enfrentan, el desplazamiento forzado también ha causado impactos socioeconómicos enormes. No sólo sufren de una falta de acceso a viviendas, empleos y la dificultad de mantener un nivel mínimo de subsistencia digna, sino también de una marginalización creciente que sus condiciones de vida conllevan²⁷⁵. Las IDP de Tawergha argumentan que, debido a la poderosa influencia de las autoridades de Misrata, se les niega apoyo y seguridad por parte del Estado por motivos de venganza y del castigo colectivo. Esta suposición coincide con la declaración de Suleiman Mohammed Al Fakih, el jefe del Consejo de la Shura de Misrata que claramente acusa a toda la población de Tawergha de haber cometido graves crímenes contra la población de Misrata:

²⁷³ Refugiado (1) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁷⁴ Refugiado (4) de Tawergha y activista de los derechos humanos, entrevista con la autora. Tras su huida de Tawergha en otoño de 2011, el entrevistado se refugió con su familia en el campamento de al-Fallah. Habiéndose abogado por los derechos de los tawerghanos como miembro del Consejo Local de Tawergha, se enfrentó a amenazas de muerte por combatientes de milicias. Con el apoyo financiero de familiares, conocidos y antiguos vecinos huyó de Libia hacia Europa a finales de 2014.

²⁷⁵ Refugiados (2) y (3) de Tawergha, entrevista con la autora.

Misrata blames all the people of Tawergha. They either carried out the crimes, helped or knew about it and didn't do anything. Even women and children took part. They tortured those in captivity. (cit. en Arab News, 27.04.2017)

Ante tales aversiones desde 2011, para los tawerghanos resulta muy difícil encontrar trabajo remunerado y acceder a centros de educación, lo que a largo plazo conlleva una marginalización cada vez mayor y su exclusión de la sociedad²⁷⁶.

De acuerdo con un estudio publicado por UNICEF a principios de 2016, otro aspecto alarmante es la situación de los niños desplazados: en total, unos 270.000 niños urgentemente requieren apoyo psicosocial. Con respecto a los niños tawerghanos, resulta que 65% de los 1.600 niños examinados en campamentos de IDP en Trípoli revelan síntomas moderados o graves de estrés postraumático. En este contexto también cabe resaltar el número elevado de reclutamientos de menores en fuerzas armadas, lo que presenta una preocupación clave de UNICEF, sobre todo a causa de la inactividad del Estado al no luchar activamente contra este fenómeno (cf. CESVI Libya, 29.02.2016).

En lo concerniente al proceso de reconciliación entre Misrata y Tawergha, miembros de Misrata del antiguo GNC indicaron que las negociaciones estuvieran en manos del gobierno y que miembros particulares no pudieran influir en el proceso. Pero la *Tawergha Foundation* reveló que representantes nacionales que abogaban por los derechos de los tawerghanos también se enfrentaban a amenazas y tortura (cf. Tawergha Foundation, 17.02.2014, p. 6). Como consecuencia, los esfuerzos de los tawerghanos a nivel político y jurídico generalmente han sido limitados por razones comprensibles. Esto también se revela en la Oficina de los Asuntos de las Personas Desplazadas, en la que los tawerghanos no se sienten representados, dada la falta de personal originario de su comunidad que serían los mejor capacitados para poder actuar en favor de los afectados y comprender sus temores y preocupaciones.

Cabe resumir que hasta hoy día, los esfuerzos lanzados por los gobiernos desde 2011 hacia soluciones para las IDP en el país, aunque sean solamente a corto plazo, no han tenido ningún efecto duradero en las condiciones de vida precarias de los desplazados. Aunque se tomen decisiones favorables a nivel jurídico para responder a los problemas relacionados con el desplazamiento, no se debería subestimar el poder que puede conllevar la postura negativa de oficiales políticos frente a las demandas de grupos étnicos marginados que no gozan de reconocimiento en la sociedad, como es el caso de los tawerghanos. No obstante, es de importancia fundamental que el poder legislativo (en el momento de redactar estas líneas todavía en manos de la HoR) debería abogar firmemente por el establecimiento de leyes nacionales que protejan los derechos de los desplazados. Sólo mediante el fomento del papel de la jurisdicción

²⁷⁶ Refugiados (1) y (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

será posible lograr una creciente aceptación en la población libia de medidas en favor de las IDP, tales como la construcción de viviendas, la (re)integración de grupos marginados en la sociedad, y la resolución de controversias por cuestiones relativas a la propiedad. No obstante, cabe realzar que esta expectativa se ha convertido en un proyecto especialmente complejo, debido a la escisión política y militar de Libia que ha convertido el país en un Estado fallido.

5.1.7 Resumen de los obstáculos a soluciones de la crisis humanitaria de los tawerghanos

Oficialmente, es la denominada Oficina de los Asuntos de las Personas Desplazadas encargada de la responsabilidad por las IDP en Libia. Pero debido al estado de guerra, los dos (o tres) gobiernos paralelos en el país, incontables grupos de rebeldes y milicias, la violencia creciente y una incapacidad generalizada de operar efectivamente a nivel nacional a causa de las circunstancias, la Oficina no puede llevar a cabo su mandato de manera eficiente. A la vez, es dudoso que disponga del personal suficientemente experimentado y previsor como para abordar realmente todas las cuestiones relacionadas con el desplazamiento forzado. A este respecto, también cabe mencionar la falta de leyes y marcos políticos a nivel nacional que permitirían abordar y resolver la crisis del desplazamiento de forma duradera. Pero esto solamente podría lograrse si el gobierno ya no estuviera dividido en el GNA en Trípoli y la HoR en Tobruk. A raíz de la experiencia con los tawerghanos y otras comunidades de IDP, las respuestas internacionales a su situación se han caracterizado principalmente por escasa asistencia de emergencia y pocos esfuerzos para documentar las violaciones cometidas contra ellos. Pero lo que verdaderamente habrían necesitado y siguen necesitando son medidas concretas para prevenir las violaciones continuas, garantizar su protección, facilitar apoyo en cuanto a un retorno seguro a sus hogares, y tratar de promover el proceso de paz²⁷⁷. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó las graves y sistemáticas violaciones en Libia contra los tawerghanos y otros grupos marginados y demandó la creación de una Comisión de Investigación (*cf.* HRW 2011, *cit. en* Kuwali y Viljoen 2016), muchas IDP cuestionan el efecto positivo de tales esfuerzos, dada su continua situación precaria y la imposibilidad de poder contar con un gobierno estable.

Con respecto a las intenciones a largo plazo de las IDP libias en cuanto a la resolución de su desplazamiento, se puede suponer que de acuerdo con las declaraciones hechas por parte de representantes de las comunidades de IDP, como por ejemplo el antes mencionado Consejo Local de Tawergha, los desplazados están firmemente comprometidos a demandar su derecho a regresar

²⁷⁷ Refugiados (1), (3) y (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

y reconstruir sus hogares (véase parte III, cap. 5.1.5). Pero frente a las agresiones continuas y la inseguridad a causa de su desplazamiento prolongado, la desesperación aumenta cada vez más: pese al rechazo vehemente de la población de Misrata, ya en 2013 su desoladora situación llevó al intento unilateral de volver a su ciudad destruida; un esfuerzo que al final fracasó debido a la falta de apoyo firme por el GNC (véase parte III, cap. 5.1.3). En parte, la intención de un regreso unilateral también fue desaconsejada por la UNSMIL por motivo de temores justificados de una masacre probable entre defensores y oponentes. Por ende, la percibida indiferencia por parte del Estado y de la comunidad internacional ante desplazamientos reiterados debido a la guerra civil y perspectivas desalentadoras de una vida en condiciones precarias, la frustración de las IDP se intensifica cada vez más. Aunque el Estado no se ha negado a la construcción de nuevos hogares, solamente propuso regiones inhóspitas en otras partes del país, en consecuencia rechazados por los tawerghanos (véase parte III, cap. 5.1.5). Otro aspecto clave por el estancamiento de este proceso se debe a la desconfianza de los tawerghanos frente a las autoridades libias: sospechan que el gobierno solamente representa intereses parciales, dado que algunos de los representantes son de origen misratano²⁷⁸.

En este contexto también cabe realzar de nuevo que uno de los obstáculos más destacados en relación a las soluciones duraderas para las IDP libias, especialmente los tawerghanos, es la acusación persistente de una culpabilidad generalizada por las violaciones cometidas durante la Revolución del 17 de febrero, lo que en la sociedad libia ha creado la percepción de un castigo colectivo legitimado; pese al hecho de que la mayoría de los tawerghanos, sobre todo mujeres, niños y ancianos, no estaban involucrados ni siquiera indirectamente en la perpetración de los supuestos crímenes de guerra contra Misrata²⁷⁹. Este asunto se ha agravado en gran medida por la mencionada incapacidad del Estado de actuar eficazmente, así como por una falta de voluntad para tomar medidas urgentemente necesarias con el fin de proteger a las IDP de las represalias continuas.

En general, unas soluciones duraderas para los desplazados libios requieren el establecimiento del orden público, el fin de las detenciones arbitrarias, la liberación inmediata de los presos detenidos sin cargos, el establecimiento de juicios justos para los acusados de violaciones graves y que los presos sean tratados de conformidad con las normas internacionales aplicables. Especialmente en lo que concierne a las IDP tawerghanas, solamente se podrán encontrar soluciones duraderas si se superan los supuestos de la culpabilidad generalizada al condenar las prácticas del castigo colectivo y rebatir e invalidar las acusaciones mediante el diálogo, la sensibilización y la rendición de cuentas a nivel local y nacional. Como se analizará con mayor detalle en lo sucesivo,

²⁷⁸ Refugiado (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁷⁹ Refugiado (1), (2), (3) y (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

tales procesos pueden ayudar a aumentar la sensibilidad y empatía mutua, el reconocimiento de las injusticias cometidas en el pasado, y de este modo podrán fomentar el desarrollo de procesos pertinentes para abordar los problemas de manera transparente, justa y eficaz.

Teniendo en cuenta el estado de guerra y la anarquía en el país, muchas de las víctimas, así como perpetradores de desplazamientos forzados han o bien sufrido o cometido una amplia gama de injusticias interrelacionadas, por lo que será imprescindible promocionar diversos procesos hacia el reconocimiento de la responsabilidad por los crímenes pasados. Sólo de esta manera será posible lograr una resolución del desplazamiento y la reconstrucción de la sociedad libia dividida. Por supuesto, resulta extremadamente complejo poner en práctica tales propuestas, sobre todo al considerar que desde 2011 el Estado libio todavía no ha logrado establecer un gobierno unitario estable que goza del apoyo del centro de la sociedad capaz de unir las diferentes facciones políticas.

No obstante, es importante realzar que, pese a todo, existen algunos representantes de origen misratano que de hecho han abogado por los derechos de los tawerghanos, aunque por su compromiso con los derechos humanos se enfrentan a hostilidades e incluso agresiones violentas. En este contexto conviene mencionar Hassan al-Amin, un ex miembro del GNC que volvió del exilio en Gran Bretaña en 2011 tras la caída de Gadafi. Siempre ha sido un activista de los derechos humanos y de la promoción de la democracia, por lo que ya bajo Gadafi fue detenido en 1983 y sufrió golpizas por las fuerzas de seguridad de Gadafi. También en su cargo en el GNC como director de la Comisión de Derechos Humanos y Sociedad Civil se dedicó a la investigación de las detenciones arbitrarias y la tortura de prisioneros y criticó a las milicias poderosas que luchaban contra Gadafi, debido a su rechazo a deponer las armas. Pero “debido a [las] amenazas de muerte proferidas por estas milicias, al-Amin renunció y regresó a Londres [en marzo de 2013]” (HRW, 27.08.2013).

En agosto de 2013, Ali Zeidan, el primer ministro de aquel entonces, propuso la promoción del proceso de diálogos de reconciliación abarcando también la cuestión del desplazamiento forzado, pero su sugerencia no fue bien recibida en el GNC, causó discordias enormes entre los numerosos grupos tribales en el país, y como consecuencia, Zeidan se vio enfrentado a críticas vehementes y un rechazo total a nivel nacional (*cf.* The Tripoli Post, 27.08.2013). Desde entonces, ha habido poco debate significativo sobre la cuestión, lo que se debe también a nuevos desplazamientos causados por el brote de violencia desde 2014. Si algún día se lleva a cabo un diálogo firme de reconciliación, será fundamental que se realice con el apoyo internacional, y sobre todo, como Zeidan ya declaró en 2013, bajo la supervisión de la UNSMIL (*ibíd.*). Asimismo, junto con representantes de la sociedad civil y políticos, será imprescindible plantear cuestiones relacionadas con la prohibición arbitraria del regreso de los tawerghanos a sus antiguos hogares,

discutirlas desde un punto de vista de los derechos humanos y encontrar soluciones aceptables al respecto para los afectados. Junto con el restablecimiento de la seguridad a nivel regional, tales diálogos pueden simbolizar una primera etapa esencial para abordar otros obstáculos al retorno de las IDP, como la reconstrucción de los hogares y de la infraestructura destruidos en Tawergha y otras regiones devastadas.

De acuerdo con el punto de vista de los tawerghanos, los medios de comunicación libios no se han esforzado en informar de manera imparcial y objetiva sobre su comunidad, sino más bien han alimentado la percepción negativa de la sociedad frente a su comunidad²⁸⁰. Por lo tanto, también será de importancia fundamental sensibilizar a los reporteros libios con el fin de que también comunidades marginadas como los tawerghanos tengan una plataforma y estén representados de forma justa en los medios, influir en la percepción hostil de los libios, y tal vez a largo plazo contribuir a una disculpa formal por parte del Estado. Desesperado con la situación de su comunidad y poco dispuesto a esperar más tiempo con el retorno, Abdelrahman Mahmoud, el jefe del Consejo Local de Tawergha en Trípoli, declaró:

The life which we live now, it is no different from dying, and so we prefer to die at home. This is our final decision. We tried with all sides. We are weak, what can we do? What threat are we to anyone? We are normal people and we want to live our lives. (IRIN, 19.02.2013)

En este contexto cabe mencionar que ya en febrero de 2012, los líderes de los tawerghanos emitieron una disculpa oficial a Misrata por los abusos que fueron cometidos por algunos tawerghanos durante la revolución, ofreciendo también su colaboración con las autoridades jurídicas y la entrega de todos los acusados de crímenes. Pero en vista del hecho de que no había diálogos previos y debido a la falta de sistemas eficaces de rendición de cuentas, Misrata rechazó la disculpa (cf. IRIN, 19.02.2013). La pérdida de confianza entre los diferentes grupos étnicos, especialmente entre los tawerghanos y los demás libios, implica que también la comunidad internacional debe jugar un papel importante, no sólo al apoyar las negociaciones de paz para poner fin a la guerra civil, sino también al fomentar el diálogo, al restablecer la seguridad nacional, así como al ayudar a promover soluciones duraderas al desplazamiento. No obstante, sin duda alguna es sobre todo el Estado libio el que tiene la responsabilidad primordial en cuanto al fomento de procesos hacia la paz.

Lamentablemente, hay que estar consciente de que los procesos deseables de diálogo, sobre todo entre Tawergha y Misrata, y la rendición de cuentas como señal importante hacia la resolución del desplazamiento de los tawerghanos presenta un desafío particularmente complejo,

²⁸⁰ Refugiado (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

especialmente a causa del aspecto de la violencia sexual basada en el género. Aunque Misrata parezca dispuesta a considerar una resolución negociada sobre los asesinatos cometidos durante el asedio de la ciudad, rechaza tocar el tema de las violaciones. De acuerdo con Fraihat (2016), Salah al-Marghani, el ministro de justicia del GNC de aquel entonces, explicó que el patrimonio cultural de los libios, o sea su sistema de valores, puede proporcionar medios para tratar crímenes como asesinatos o robos, pero no para abordar violaciones sistemáticas, dado que incluso la mera discusión sobre el tema presenta una fuente de vergüenza. Si bien el sistema legal dispone de normas sobre cómo tratar casos individuales de abuso sexual, no proporciona respuestas adecuadas cuando una ciudad entera es acusada de violaciones colectivas por otra ciudad; por lo que ni los sistemas legales ni los sistemas de valores libios pueden claramente indicar qué hacer en tal caso (*cf.* 35-36). Pese a este dilema, es importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales: al igual que Misrata y Tawergha, muchas otras comunidades sufrieron bajo la escalada de violencia en el marco de la Revolución del 17 de febrero, tanto bajo el régimen de Gadafi como por los rebeldes y la guerra civil.

Consecuentemente, es esencial que el Estado proporcione una respuesta adecuada para poder abordar los reclamos y demandas de las víctimas, y de esta manera evitar que se recurra a represalias extrajudiciales con el fin de vengarse de los daños sufridos. En segundo lugar, como ya se ha puesto de relieve anteriormente, la mayoría de las IDP y refugiados no estaban involucrados directa o indirectamente en el régimen de Gadafi. La mayor parte de las IDP libias son, de hecho, las familias de personas que en cierta medida servían en el anterior régimen. El sufrimiento desproporcionado de los inocentes por delitos cometidos por el régimen equivale al castigo colectivo. Y en tercer lugar, hay que señalar que sin duda alguna muchos libios eran simpatizantes de Gadafi. No obstante, no todos estaban involucrados en las violaciones y otros actos de violencia. Muchos huyeron del país debido al colapso del sistema político, de la seguridad y por el temor justificado a represalias en contra de todos los antiguos aliados del régimen (*cf.* FIDH, 30.06.2011).

Todas estas consideraciones requieren la creación de un marco legal que trate de manera transparente y justa con todas las partes, por lo que el establecimiento de una justicia transicional es esencial. Mediante tal jurisdicción se podría prevenir que las comunidades perjudicadas recurrieran a medidas extrajudiciales. Además, su aplicación específica ante todos los verdaderamente culpables de atrocidades pasadas impediría la práctica corriente de amenazar y juzgar arbitrariamente a comunidades enteras, como en el caso de los tawerghanos. Poner fin a este castigo colectivo significaría que muchos de los inocentes en los campamentos de IDP y refugiados de Libia podrían regresar a sus hogares. Es imprescindible asegurar que el Estado libio tenga el control sobre la seguridad nacional, que logre limitar el establecimiento de sistemas

judiciales locales, así como que restrinja el poder de las milicias y que monopolice el uso de la fuerza. Pero la necesidad de la intervención estatal tiene que ir más allá de la implementación del Estado de derecho. Será indispensable que el papel del Estado incluya también el cumplimiento con una serie de condiciones necesarias para poder facilitar el retorno de las comunidades desplazadas: entre ellas destaca particularmente la garantía de un retorno digno, de la seguridad de los repatriados en sus hogares, la gestión y restauración de los servicios básicos en estas zonas, como la reconstrucción de la infraestructura, del suministro de agua potable, de asistencia médica, así como de centros de educación, etc. En resumen, los retos principales serán el diálogo nacional, la repatriación de los IDP y refugiados, el desarme de las milicias, la reintegración tanto de víctimas como de agresores (tras su juicio justo), y una reforma del sistema de seguridad y de las instituciones.

No obstante, es evidente que solamente un Estado fuerte y unificado será capaz de cumplir con estas condiciones. Por consiguiente, el establecimiento de un gobierno unitario será de máxima importancia para poder comenzar a emprender estos retos en el marco de un proceso de reconciliación nacional.

6. Empezar el camino hacia la reconciliación nacional: la aplicación de la asistencia humanitaria en el contexto libio

Una de las cuestiones políticas menos consideradas pero con un impacto destabilizador enorme en la nueva Libia es la situación actual de las casi 300.000 IDP a principios de 2017 (véase parte III, cap. 5). Como se ha analizado en los capítulos anteriores, la mayoría de estos desplazados internos fue objeto de expulsiones colectivas de sus hogares durante los levantamientos de 2011, debido a su supuesta lealtad con el régimen de Gadafi. Como tales, han estado sujetos a constantes abusos de derechos humanos y frecuentemente se enfrentan a resistencias violentas a su regreso por parte de las comunidades vecinas.

La situación de estos desplazados internos “perseguidos” (A/HRC/19/68, 28.01.2014) se ha agravado cada vez más por la imposibilidad de acceder a sus hogares y propiedades, que a menudo han sido saqueados, destruidos u ocupados (*cf.* Williams 2012: 15). Estos problemas relacionados con la vivienda, la tierra y la propiedad (en inglés: ‘housing, land and property’; HLP) presentan otra violación masiva de los derechos humanos de las IDP, así como un obstáculo grave hacia la consecución de soluciones duraderas para su desplazamiento (*cf.* GPC 2017). De hecho, incluso los desplazados internos que no pertenecen a un grupo perseguido, pero que sufren el desplazamiento por los efectos de la guerra en regiones reñidas como Sirte o Misrata, no tienen la posibilidad de reintegrarse en la sociedad de verdad hasta que sus hogares destruidos sean reconstruidos o indemnizados.

Más allá de la cuestión sobre los derechos de los IDP y refugiados a regresar a sus hogares, otro problema relativo a HLP en Libia está vinculado con las necesidades actuales de vivienda de los desplazados internos en relación con el levantamiento de 2011. Oficialmente, las autoridades libias son responsables de satisfacer las necesidades humanitarias básicas de las IDP, es decir, que los refugios proporcionados cumplan por lo menos con criterios fundamentales como seguridad física, habitabilidad y seguridad de tenencia (OHCHR, *Fact Sheet No. 21 (Rev. 1)*, 2009:4). Cabe destacar que la seguridad de tenencia sigue siendo un asunto crucial para muchos refugiados y otros no ciudadanos en Libia que sufren desalojos arbitrarios de hogares que muchas veces han habitado durante décadas.

No obstante, con el fin de poder entender los problemas humanitarios relacionados con las viviendas, tierras y propiedades en el país, es imprescindible examinar algunas cuestiones políticas al respecto que tenían origen en la era del régimen de Gadafi: a partir de la década de los ‘70, el gobierno de Gadafi impuso una amplia redistribución de propiedades con el fin de asegurar que cada hogar libio tuviera acceso a suficiente propiedad residencial y agrícola para sus propias necesidades de subsistencia, pero sin derecho a propiedades adicionales. Una de las medidas más importantes de esta reforma constituyó la Ley No. 4 de 1978 que transformó a

inquilinos en propietarios de sus viviendas sin proporcionar ninguna indemnización inmediata a los dueños originales (*cf.* Ibrahim 2016: 142s.). Estas políticas de Gadafi también se extendieron a nivel de comunidades enteras, con tribus favorecidas recibiendo acceso preferencial a infraestructura pública, servicios públicos y concesiones de tierras a cambio de su apoyo y lealtad.

Aunque las leyes de Gadafi que permitieron estas confiscaciones han sido derogadas, la cuestión sobre cómo abordar sus consecuencias con el fin de restablecer el orden público y la paz social será uno de los temas más conflictivos a los que deben hacer frente los líderes de la nueva Libia. Si se aspirara a remediar completamente estas confiscaciones a través de un proceso de restitución a nivel nacional, se requeriría el realojamiento de aproximadamente una cuarta parte de la población del país. De acuerdo con Ibrahim (2016), sólo en Trípoli como mínimo el 75% de la población vive en propiedades afectadas por la Ley No. 4 (*cf.* 136). Sin embargo, al no actuar se prolongaría una de las injusticias más incisivas cometidas por el régimen de Gadafi. Por lo tanto, será decisiva la manera cómo resolver este asunto. Si bien es evidente que será necesario remediar los perjuicios causados a los propietarios desposeídos en el pasado por Gadafi, también es preciso tener en cuenta los intereses de las comunidades vulnerables y marginadas que hoy en día se ven enfrentadas a la pérdida de sus bienes debido a la guerra. Dado que algunos de los grupos de mayor riesgo en Libia son IDP y refugiados, será imperativo abordar el legado de Gadafi con respecto a las cuestiones de propiedad desde un punto de vista humanitario y al considerar medidas sostenibles, como serán discutidas a continuación, con el fin de promover el proceso de reconciliación nacional y una resolución del conflicto libio de manera duradera.

Debido al impacto amenazante que conlleva la pérdida de viviendas y propiedades para la existencia de las poblaciones afectadas, es comprensible que los problemas relacionados con cuestiones de HLP son tratados de manera integral a través de la organización en diferentes sectores temáticos en el marco del *Global Protection Cluster* ya expuesto en la parte I, capítulo 4.2. Al intervenir y abordar tales problemas activamente, este concepto contribuye a

- salvar vidas y preservar la dignidad de las víctimas
- posibilitar la acción humanitaria
- mitigar conflictos y desastres, y
- promover soluciones duraderas.

El denominado clúster *Housing, Land and Property Area of Responsibility* (HLP AoR) fue creado en 2007. Los designados *HLP Focal Point Agencies*, el NRC y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) coordinan conjuntamente el HLP AoR global que reúne una amplia gama de agentes, tanto internacionales como nacionales, regionales y locales.

6.1 Cuestiones relativas a las viviendas, tierras y propiedades

6.1.1 Antecedentes históricos y el marco jurídico del régimen de Gadafi

Durante las cuatro décadas entre el golpe de Estado de 1969 por el que Gadafi llegó al poder y los levantamientos de 2011 que provocaron su caída, todas las políticas y relaciones de propiedad anteriores fueron derogadas sin haberse encargado del fomento de la seguridad y estabilidad jurídica. Cabe mencionar que la era de Gadafi estaba caracterizada más de normas ideológicas y políticas que de directivas legales: oficialmente tenía como objeto asegurar un reparto equitativo y el uso productivo de los bienes sociales, pero al final favoreció la arbitrariedad y la corrupción y socavó el Estado de derecho (*cf.* Williams 2012: 15). Asimismo, la política de Gadafi en cuanto a las viviendas y tierras, así como la accesibilidad arbitraria a servicios públicos llevaron a rivalidades tribales y étnicas en la sociedad libia que desde 2011 se han agravado cada vez más debido al conflicto bélico y desplazamientos masivos.

Después de haber asumido el poder en septiembre de 1969, el coronel Gadafi comenzó a establecer la redistribución del patrimonio como instrumento para promover la justicia social y para consolidar su propio poder al debilitar a posibles adversarios. Tenía el fin de prevenir cualquier forma de explotación y acabar con las desigualdades entre las diferentes clases sociales. Aunque la propiedad pública fue proclamada como fundamento del desarrollo social, aun así se permitió poseer propiedad privada sin fines de explotación (*cf.* Metz 1989: 186). Todas las leyes y decretos que no estuvieron en contradicción con el nuevo sistema seguían en vigor.

En casi la misma época en la que Gadafi se comprometió a cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por la monarquía que estaban todavía vigentes, el nuevo régimen expulsó a los colonos italianos restantes, así como a la comunidad judía remanente y confiscó sus propiedades (*ibíd.* 64). El principal instrumento jurídico utilizado por Gadafi para realizar estos fines fue la Ley No. 4 de 1978, por la que se redistribuyeron todas las propiedades alquiladas *ex lege* y se convirtieron todos los inquilinos en propietarios de sus objetos arrendados ante la obligación de hacer pagos hipotecarios al gobierno, en efecto inferiores a sus rentas anteriores. El impacto de la ley es evidente si se considera el contexto en la que entró en vigor: hasta 1978, una tercera parte de la población libia era inquilinos, mientras que los propietarios terratenientes desde siempre habían representado una élite poderosa e influyente (*ibíd.* 163). En combinación con otra ley por la que los denominados comités populares asumieron el control de las empresas privadas, la Ley No. 4 contribuyó a la emigración masiva de libios formados y provocó un caos económico que habría podido causar una grave inestabilidad económica, si el régimen no hubiera lanzado contramedidas políticas firmes para maximizar los ingresos petroleros. Por cierto, los efectos perjudiciales en las empresas privadas conllevados por las medidas de nacionalización

explican la dimensión en la que el régimen dependía de empresas extranjeras, sobre todo en cuanto a la construcción de viviendas e infraestructura (cf. Bertelsmann Stiftung, *BTI 2010 - Libya Country Report*, p. 2, 14).

También con respecto a las tierras agrícolas se adoptaron medidas similares, mientras que las empresas privadas sucesivamente fueron nacionalizadas. Aunque los derechos territoriales tribales fueron derogados, cabe señalar que numerosas tribus no se atuvieron al reglamento, excepto los casos en los que Gadafi decidió trasladar comunidades enteras a otras regiones y otorgó los derechos a las tierras a grupos tribales que consideraba leales.

Desde un punto de vista normativo, en un corto plazo de tiempo el régimen de Gadafi abolió la Constitución de la monarquía del rey Idris I, pero nunca cumplió con su intención de adoptar formalmente una nueva ley orgánica. En cambio, el régimen se fundamentó en textos de carácter jurídico, como por ejemplo un importante discurso político pronunciado por Gadafi en abril de 1973 en la ciudad de Zuara, cuando proclamó el inicio de la “Revolución Popular”, o las normas políticas establecidas más tarde en los tres volúmenes incoherentes de su denominado Libro Verde (cf. World Heritage Encyclopedia 2009).

En 1977, el régimen de Gadafi restringió la propiedad tribal de tierras y agricultura comercial al legislar que cada familia particular exclusivamente tenía derecho a tierra suficiente para satisfacer sus propias necesidades, y que la cuestión sobre la tenencia seguiría el uso real de la tierra (cf. Metz 1989: 156s.). Ya en 1971, se había establecido una norma por la que todas las tierras no cultivadas se brindaban al Estado. Estas reglas se basaban en la opinión de Gadafi de que la tierra, en particular, no podía ser propiedad privada, sino que era más bien la propiedad colectiva de toda la nación (*ibíd.* 226). Los grupos tribales en el interior del país trataron de hacer caso omiso a dichos reglamentos, y siguieron cultivando sus tierras de acuerdo con sus reglas tradicionales. La fragmentación de las tierras agrícolas más fértiles a lo largo de la costa fueron propulsadas cada vez más, lo que conllevó el riego excesivo en la región y el descenso de la capa freática. Durante este periodo, también emprendió una serie de programas extensivos relacionados con las viviendas, tierras y propiedades. En particular, el régimen lanzó un proyecto de construcción de complejos de apartamentos a gran escala con el fin de reemplazar las viviendas precarias en barrios pobres que habían surgido sobre todo en la periferia de las ciudades (*ibíd.* 126). Frente al rápido crecimiento demográfico y la falta enorme de viviendas urbanas, este proyecto fue percibido como un éxito importante para el nuevo régimen. Al mismo tiempo, se establecieron normas especiales para el alojamiento de los numerosos extranjeros viviendo en Libia, incluidos refugiados. A lo largo de la era de Gadafi, un gran número de trabajadores extranjeros era un aspecto esencial para la economía nacional. De acuerdo con el ACNUR, a finales de los años ‘70, los extranjeros cuyos contratos de trabajo fueron firmados mediante el Ministerio de Trabajo,

comenzaron a recibir contratos de alquiler subvencionados y ocuparon viviendas confiscadas de conformidad con la Ley No. 4 (cf. ETF 2014: 4). Frecuentemente tales viviendas también se asignaron a refugiados palestinos en Libia, si tuvieran o no contratos de trabajo.

Asimismo, en aquella época se notan cambios significantes en la política ideológica del gobierno libio: durante las décadas de 1970 y 1980, Gadafi se apartó de su política original por la cual había aspirado a fomentar el nacionalismo árabe libio al suprimir las diversas identidades tribales. En su lugar, cambió a una táctica más sutil al fomentar las rivalidades ya existentes entre las diferentes tribus, debilitar la cohesión social y de esta manera consolidar su poder (cf. Metz 1989: 64). Por una parte, lo logró a través de la prestación o denegación de inversiones públicas en infraestructura como proyectos agrícolas, escuelas, viviendas y hospitales. De cierta forma se puede suponer que Gadafi consideraba las inversiones más bien como expresión de recompensa que como responsabilidad y obligación del Estado, dado que apoyaba sobre todo a grupos de la población percibidos como leales a su régimen, como por ejemplo los tawerghanos. En los años ‘70, invirtió en la fundación de una nueva ciudad para este grupo minoritario, llamada Tawergha, así como en el desarrollo de algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Libia (cf. Openanthropology 2012: 45), lo que consecuentemente generó envidia y antipatía en otros grupos de la población que se sentían perjudicados.

A lo largo de su régimen, Gadafi persiguió una política que no sólo aspiraba a la implementación del modelo de la “Jamahiriya” (‘Estado de las masas’) en su país, sino también a una política exterior que tenía por objeto promover su “Tercera Teoría Universal”, una alternativa ideológica al capitalismo y al comunismo, sobre todo para los países del Tercer Mundo (cf. Metz 1989: 218). Gadafi definió su tercer teoría universal como “socialismo natural”, refiriéndose sobre todo a las ideologías izquierdistas del antiguo presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, así como de Ernesto “Che” Guevara. Parte de este esfuerzo implicó la articulación de un conjunto libio socialista de normas de derechos humanos. La denominada “Gran Carta Verde de los derechos humanos en la era de las masas” adoptada en 1988 sirvió para determinar algunos de los principios fundamentales de la filosofía política de Gadafi en relación con cuestiones y derechos de las viviendas, tierras y propiedades:

12. Estamos liberados de cualquier feudalismo. El terreno es propiedad de nadie. Cada persona tiene el derecho a explotar y beneficiarse de ella por el trabajo, la agricultura o la cría de animales, a lo largo de su vida, la de los herederos, y dentro de los límites del esfuerzo personal y la satisfacción de las necesidades.

13. Estamos libres de la renta. Una casa pertenece a la persona que vive en ella. Goza de una inmunidad sagrada en materia de derechos de barrio: “Cierra los vecinos de los vecinos o distantes”. La residencia no se puede utilizar para dañar a la sociedad. (Carta Verde Internacional de 1988, art. 12 y 13)

Con el fin de promover y mejorar la percepción del régimen, tanto a nivel nacional como internacional, a finales de los años '90, Saif al-Islam, el hijo de Gadafi y presunto heredero, lanzó una serie de esfuerzos en el ámbito de la infraestructura del país. A nivel nacional, esto incluyó un programa extenso de construcción de viviendas, así como un intento de calmar el resentimiento persistente frente a la Ley No. 4 al indemnizar a los antiguos dueños de viviendas que fueron desposeídos. No obstante, estas medidas fueron consideradas insuficientes, y hasta hoy día la restitución de todos los bienes confiscados por Gadafi sigue siendo una de las demandas más firmes y persistentes a las que se enfrentan las nuevas autoridades de Libia. No cabe duda de que las políticas arbitrarias del régimen de Gadafi con respecto a los derechos de propiedad e inversiones en la infraestructura pública fueron causas significantes del descontento global que en febrero de 2011 estalló a través de protestas masivas y levantamientos armados que, junto con la intervención militar de la OTAN, provocaron el derrocamiento del régimen en octubre del mismo año.

Pero en este contexto, cabe mencionar que en lo que concierne al análisis de las causas del levantamiento, la cuestión de viviendas, tierras y propiedades es uno de los aspectos menos considerados. El acontecimiento más importante y conocido que causó las protestas fue la detención de un abogado que trabajaba en nombre de los familiares de los asesinados en la masacre de la prisión de Abu Salim en 1996 (véase parte II, cap. 3.1.1). Ante los levantamientos populares en Túnez y Egipto poco antes de su extensión a Libia, Gadafi trató de calmar el descontento popular sobre la crisis de vivienda al haber propuesto en un discurso en enero de 2011 que los afectados ocuparan los inmuebles inacabados todavía encontrándose en construcción en todo el país (*cf.* Lubin, 25.01.2011). Pero cuando esto llevó a una invasión descontrolada de las viviendas, Gadafi retiró su declaración y envió sus fuerzas policiales para desalojar a los ocupantes, lo que provocó aun más la ira y el descontento de la población con el régimen.

A pesar de que la Ley No. 4 fue abolida por la Declaración Constitucional provisional adoptada por el NTC, las nuevas autoridades de Libia aún no se han comprometido a definir medidas concretas con respecto a la cuestión de las indemnizaciones (*cf.* Otto *et al.* 2013: 119s.). Aunque la frecuencia de los desalojos se ha reducido después del levantamiento de 2011, la dirección política de Libia se enfrentará a una presión inmensa para adoptar normas relativas a las confiscaciones y expropiaciones bajo Gadafi. Mientras tanto, las autoridades de transición no han tomado muchas medidas para aliviar la situación difícil de las IDP en el país o para promover soluciones duraderas a su desplazamiento. Por lo que se refiere al papel del NTC, cabe mencionar que apenas emprendió el problema y por lo tanto tampoco adoptó ninguna política explícita

respecto al desplazamiento forzoso.

Por consiguiente, las respuestas humanitarias han sido lanzadas sobre todo por la sociedad civil y organizaciones como la Media Luna Roja Libia, junto con el apoyo del ACNUR y sus colaboradores ejecutantes. Asimismo, los consejos locales desempeñan un papel importante en ciudades como Trípoli, Sirte y Bengasi que han acogido grandes poblaciones de IDP (véase parte III, cap. 5). En los casos en los que la respuesta humanitaria ha permanecido ampliamente desregulada, la justicia de transición ha sido objeto de la legislación del NTC: la Ley 38, adoptada en mayo de 2011, fue la primera ley en cuestiones de justicia de transición con el fin de promover la “reconciliación” en el caso de conflictos entre diferentes comunidades, pero ofrece indemnizaciones legales exclusivamente a las víctimas del régimen de Gadafi. Este enfoque implica que las comunidades que son blanco de ataques y expulsiones de sus hogares como resultado de su supuesta lealtad al régimen de Gadafi, incluyendo la mayoría de las IDP actuales, no son considerados como víctimas con derecho a indemnización legal por los delitos que han sufrido (*cf.* Clatham House 2012: 12s.). Además, al haber amnistiado los actos cometidos por los revolucionarios anti-Gadafi, esta impresión ha aumentado (véase parte III, cap. 5.1.4).

El fracaso del NTC en cuanto a establecer políticas estructuradas y transparentes para resolver el legado de las confiscaciones de la era de Gadafi y encontrar soluciones adecuadas en cuanto a los ocupantes de las propiedades reclamadas, mientras tanto ha desestabilizado considerablemente las expectativas legales de todas las partes, así como la seguridad de tenencia de aquellos que actualmente siguen ocupando viviendas reclamadas. Esta inseguridad de tenencia se revela particularmente frente a los no ciudadanos, incluidos los refugiados. Para las IDP, tales consideraciones legales siguen siendo secundarias ante sus temores omnipresentes por su propia seguridad física. No obstante, como se analizará a continuación, numerosas IDP que pertenecen a las denominadas “comunidades perseguidas” (A/HRC/19/68, 28.01.2014) tienen motivos justificados para temer que la negación de sus derechos de propiedad que se originan en la era de Gadafi puedan convertirse en un pretexto para impedir el posible retorno a sus hogares.

Tanto en las políticas con respecto a la respuesta humanitaria al desplazamiento forzoso y la futura legislación, así como en las relaciones de propiedad y la justicia transicional deberán reflejarse los diversos tratados mundiales y regionales de derechos humanos ratificados por el régimen de Gadafi y aún vinculantes para las autoridades actuales. Algunos de los derechos humanos violados en el caso de las comunidades perseguidas siendo blanco de ataques y desplazamientos incluyen el derecho a la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia (DUDH de 1948, art. 13; PIDCP de 1966, art. 12.1), el derecho a la intimidad (DUDH de 1948, art. 12; PIDCP de 1966, art. 17.1), el derecho a una vivienda adecuada (DUDH de 1948, art. 25.1; PIDESC de 1966, art. 11.1) y el derecho a la propiedad (DUDH de 1948, art. 17). Si han

ocurrido violaciones de tales derechos, las víctimas tienen derecho a recursos jurídicos, tanto al recurrir a un juez imparcial como al demandar reparaciones por los daños que han sufrido, generalmente a través de restituciones de bienes perdidos y de compensaciones por otros daños. Al aplicar estos derechos humanos a favor de las IDP, para las autoridades libias debe ser fundamental considerar los *Guiding Principles on Internal Displacement* (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos) adoptados por la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en 1998. Con sus treinta principios, es uno de los mejores manuales que determina los derechos y garantías relevantes para la protección de las IDP en toda fase de desplazamiento. Estas incluyen la protección de desplazamiento arbitrario, la asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o la reubicación internos, así como la reintegración en la sociedad. Provee guías para todos los actores relevantes, como por ejemplo el Representante en cuanto a la realización de su mandato, los Estados afectados por crisis de desplazamiento, las autoridades pertinentes, grupos y personas relacionados con IDP, así como ONGs y organizaciones intergubernamentales. Además, al estar en línea con el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y los derechos humanos, los Principios Rectores son ampliamente aceptados y aplicados a nivel mundial (véase parte I, cap. 7). Otra medida por la que se podría impulsar que la respuesta nacional libia al desplazamiento cumpla con sus compromisos internacionales presentaría la ratificación de la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala) de 2009. En todo caso, siendo un Estado soberano, son las autoridades libias las que deben asumir la responsabilidad por las IDP en su país y garantizarles tanto protección como asistencia durante el período en el que sigan siendo desplazadas. Deben facilitarles refugios que cumplan con las normas básicas de adecuación, habitabilidad y seguridad de tenencia. Asimismo, dado que Libia se ha comprometido a garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio, el derecho de protección de los desalojos forzosos también tiene que aplicarse a los refugiados y otros no ciudadanos.

En lo que concierne al NTC, cabe realzar que incumplió con la adopción de una política relativa al desplazamiento interno. Al parecer, tampoco consideró aplicar la norma internacional principal, es decir, los Principios Rectores que serán discutidos más detalladamente a continuación. En el ámbito político nacional, el único Ministerio que ha asumido un papel definido con respecto a la ayuda humanitaria a las IDP es el Ministerio de Asuntos Sociales: en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia, el Ministerio se ocupa de proporcionar asistencia humanitaria a numerosas IDP, entre otros en Misrata²⁸¹.

No obstante, en la práctica una gran parte de la responsabilidad de coordinar la respuesta

²⁸¹ Libyan Express, “Misurata: Social Affairs Ministry and Red Cross distribute humanitarian aids for Sirte IDPs”, 23.05.2016.

humanitaria a la crisis del desplazamiento está en manos de los consejos locales que para sus ciudades y comunidades se han comprometido a los incontables deberes administrativos que conlleva la coordinación de la ayuda (cf. ICG 2012: 31). Este papel ha revelado aspectos tanto positivos como negativos: como se explicará a continuación, algunos municipios han introducido prácticas y políticas radicales que limitan o, en el peor caso, impiden el retorno de las IDP a sus hogares o la restitución de su propiedad, como muestra el ejemplo de los tawerghanos. Pero por otro lado, conviene mencionar que también hay consejos locales, como por ejemplo de Bani Walid, que han hecho esfuerzos considerables para recibir a IDP de otras partes del país y para proporcionarles refugio²⁸².

Sin embargo, dado que no todas las IDP a nivel nacional han sido expulsadas de sus hogares por los mismos motivos, no pueden ser consideradas un grupo “homogéneo” en el que todos los individuos se enfrentan a los mismos problemas y amenazas. Por lo tanto, y con el fin de aclarar las causas principales de su desplazamiento, en el próximo capítulo se intentará definir las categorías principales de IDP en Libia.

6.1.2 La distinción entre comunidades de IDP perseguidas y no perseguidas, refugiados y extranjeros

En lo sucesivo, se diferenciará entre tres categorías claves de desplazados en Libia. La primera y principal categoría se compone de IDP que pertenecen a “comunidades perseguidas” que en la mayoría de los casos han sido expulsadas de sus hogares a causa de su origen étnico y/o tribal, por lo que se enfrentan a hostilidades masivas por parte de las comunidades vecinas en sus lugares de origen. Como consecuencia, de forma indefinida está descartada la posibilidad de un regreso seguro.

El segundo grupo constituyen comunidades de IDP “no perseguidas” encontrándose en situaciones de desplazamiento en sus regiones de origen, mayoritariamente desde 2011, que esperan poder reconstruir sus viviendas destruidas por la guerra sin enfrentarse a amenazas tan graves como el grupo anterior.

El tercer grupo de preocupación abarca a refugiados y otros no ciudadanos que han sido desalojados o que corren el riesgo de ser desalojados de sus hogares. Generalmente, en el pasado se les exigía alquilar casas del Estado; una “regla” que se basaba en sus contratos de trabajo: antes del comienzo de la crisis en 2011, alrededor de 2,5 millones de inmigrantes trabajaban en Libia, lo que convirtió el país en uno de los mercados más atractivos para manos de obra en la

²⁸² Cesvi Libya; UNICEF, *IDP Child Protection Assessment in Tripoli and Bani Walid*, June 2016.

región. Los migrantes vinieron principalmente de África y Asia para asumir trabajos en la industria petrolera y la construcción. La afluencia de trabajadores extranjeros comenzó en la década de los ‘90, cuando, en respuesta a las sanciones comerciales de la ONU, Libia dependía cada vez más de la mano de obra subsahariana para poder impulsar su economía petrolera (cf. Gurman, 23.03.2011). Desde los levantamientos en 2011, los residentes de tales viviendas se enfrentan a un alto riesgo de desalojos, por un lado por sus mínimos derechos legales a sus hogares, por otro lado debido al hecho de que tales propiedades muchas veces eran disponibles para alquilar por el Estado, porque habían sido confiscadas de conformidad con la Ley No. 4. Por ello, para las autoridades libias debería constituir una tarea primordial garantizar que este grupo de personas no sea un blanco de desalojos arbitrarios y que también se considere su inclusión en futuros programas asistenciales de vivienda de forma no discriminatoria.

Las comunidades de IDP perseguidas, que serán estudiadas más profundamente en los próximos capítulos, constituyen el mayor de los tres grupos y conllevan los mayores desafíos. Ante una resistencia continua y violenta a su regreso, se puede decir que muchas se encuentran en una situación de desplazamiento prolongado, en la que la falta de posibilidades a corto plazo de reintegración social incrementa tanto su vulnerabilidad como su dependencia de ayuda humanitaria. Los derechos a las viviendas, tierras y propiedades de las IDP son infringidos gravemente, ya que por un lado no pueden acceder a sus hogares y tierras que poseían antes del conflicto, y por otro lado apenas gozan de garantías de seguridad en sus lugares de refugio actuales. Uno de los problemas principales es la supuesta antigua lealtad de tales grupos al régimen de Gadafi que para las autoridades nacionales inevitablemente presenta un factor disuasorio en cuanto a la priorización de las respuestas humanitarias a su crítica situación. En algunos casos, las demandas de las IDP para recuperar sus antiguos hogares también se complican por el hecho de que los habían adquirido en relación con los actos jurídicos de la era de Gadafi.

Al referirse a esta categoría de IDP como “perseguidas”, se adopta la terminología utilizada en el Informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia (en su versión original inglesa del 2 de marzo de 2012; la versión española del 28 de enero de 2014) que abarca los grupos de desplazados descritos en este capítulo, así como otros que no están sujetos a impactos significativos de desplazamiento continuo (A/HRC//19/68, 28.01.2014). En un seminario de expertos de 2007, los participantes acordaron una definición del “desplazamiento interno prolongado” al no centrarse ni en el tamaño de la población afectada, ni en la duración de su desplazamiento, sino en el aspecto que las IDP se ven marginadas debido a violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y/o porque el

proceso de encontrar soluciones duraderas a su situación está estancado (*cf.* UNHCR y Brookings-Bern Project on Internal Displacement 2007).

Para muchas comunidades que han sido percibidas como seguidores de Gadafi, el castigo ha sido la expulsión forzosa de sus hogares. Tales expulsiones no sólo pueden considerarse como actos de represalia, sino también como intención de remediar errores históricos en los casos en los que la presencia de una comunidad en una región particular ha sido percibida como una consecuencia directa de las políticas del régimen de Gadafi. Por consiguiente, es muy probable que en el futuro las expulsiones sigan siendo una amenaza muy real en las áreas del país donde perduran graves tensiones tribales y donde al mismo tiempo la influencia y el poder del gobierno, así como de las autoridades estatales siguen siendo limitados.

Resumido en una frase, la característica clave que distingue a las IDP “perseguidas” de otros desplazados es la resistencia local de las poblaciones vecinas contra su regreso a sus lugares de origen. Algunos grupos perseguidos todavía no han logrado iniciar negociaciones sobre su retorno y siguen siendo amenazados por comunidades aledañas que rechazan violentamente su reintegración. Dado que numerosos de los principales responsables de las agresiones vienen de ciudades militarmente influyentes como Misrata y Zintan, es decir, los núcleos de oposición en las luchas contra Gadafi, las autoridades estatales no tienen mucha potencia para controlar o restringir los actos violentos contra comunidades perseguidas. Ante tales circunstancias y al tener en cuenta el poder y la voluntad limitados por parte del Estado de encontrar soluciones adecuadas al respecto en un futuro cercano, el mejor procedimiento de las autoridades estatales, no obstante, debería abarcar el reconocimiento incondicional de su responsabilidad y de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la toma de medidas para asegurar la protección y asistencia necesarias a las IDP en todo el país y garantizar soluciones adecuadas y duraderas. Pero frente al mandato relativamente restringido y la escasa capacidad tanto del antiguo NTC como de la HoR y el GNA, no resulta sorprendente que tanto durante el periodo de transición como después de las primeras elecciones las condiciones de las IDP aún no se han mejorado mucho. Pero incluso en el mejor de los casos, con el gobierno actual asumiendo la responsabilidad total de “establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual” de acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principio 28.1) y las obligaciones internacionales de Libia, el espacio político de acción momentáneo para iniciar procesos correspondientes de asistencia a los desplazados “para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron” (Principio 29.2) parece muy limitado.

Tal y como hemos analizado en la parte III, capítulo 5, aparte de las comunidades de las

mashashya, entre otras, en las montañas de Nafusa, el grupo de IDP mayor y más vulnerable son los tawerghanos cuya ciudad fue atacada y destruida en agosto de 2011 por las brigadas y milicias anti-Gadafi de Misrata. El regreso de los tawerghanos resulta muy complejo ante acusaciones graves en su contra de violaciones colectivas acontecidas durante el asedio de Misrata por las fuerzas de Gadafi presuntamente apoyado por combatientes de Tawergha. Alrededor de 30.000 tawerghanos permanecen internamente desplazados en lugares dispersos por todo el país (véase parte III, cap. 4.2.6.1). En la actualidad, ataques y amenazas continuos imposibilitan cualquier esfuerzo a su regreso. Asimismo, hay que tener en cuenta que los derechos de propiedad de los tawerghanos en cierta medida se originan en los actos jurídicos de la era de Gadafi, lo que por lo tanto puede conllevar desafíos graves, incluso si su retorno seguro fuera aceptado en el futuro. En la actualidad, la mayoría de los tawerghanos se encuentran en refugios provisionales en condiciones precarias en las que ni gozan de seguridad de tenencia, ni de ninguna garantía de que su integración local a largo plazo sería autorizada, en el caso de que su retorno fuera imposible. Asimismo, cabe realzar que hay numerosos individuos y familias de otro origen que también tenían que huir de los combates en Misrata y que en la mayoría de los casos buscaban refugio con parientes en otras partes del país. Al igual que los tawerghanos, han sido impedidos de regresar a sus hogares por los ataques y las amenazas continuas en la región, por lo que se estableció la práctica de ocupar los hogares abandonados de otros desplazados²⁸³. En numerosos casos, los hogares de IDP originalmente de Misrata han sido formalmente asignados a personas desplazadas (no perseguidas) que esperan la reconstrucción de sus propios hogares. En otros casos, simplemente están ocupados o saqueados sin ninguna base legal y en un entorno de impunidad (*cf.* Williams, 17.06.2012).

Un número considerable de IDP en Libia se puede denominar “no perseguido”, dado que siguen viviendo en sus comunidades locales que también les proporcionan apoyo, y su desplazamiento únicamente se debe a los daños en sus hogares causados por la guerra. Las mayores comunidades de desplazados no perseguidos se encuentran en Sirte y Misrata, las dos ciudades más dañadas durante los enfrentamientos en 2011²⁸⁴. En ambas ciudades, las IDP gozan de seguridad básica de tenencia, tal como mencionado anteriormente, con las de Misrata asignadas a ocupar los hogares de otros desplazados que huyeron de la ciudad, y las de Sirte con el permiso de ocupar complejos de apartamentos construidos parcialmente. Dado que en ambos casos no hay ninguna oposición violenta a su retorno, los obstáculos son relativamente controlables, por lo que las autoridades estatales podrían demostrar su capacidad de actuar y

²⁸³ Lealista con Gadafi (1), entrevista con la autora.

²⁸⁴ UNHCR, “Numbers of internally displaced in Libya double since September – UNHCR”, 30.06.2015; OCHA, “Sirte displacement reaches 90.000: Protection and WASH needs on the rise”, Issue 05, July 2016.

implementar primeras medidas sostenibles de reconstrucción.

Los problemas relacionados con el derecho a la vivienda, la tierra y la propiedad en situaciones de desplazamiento continuo resultan muy complicados. En lo que concierne a las IDP perseguidas, tienden a insistir en un regreso rápido a sus hogares originales y consideran el retorno como preocupación primordial²⁸⁵. No obstante, teniendo en cuenta la resistencia masiva de algunas comunidades vecinas en los lugares de origen de las IDP, su regreso en condiciones de seguridad y dignidad no es muy probable en un futuro cercano. Por consiguiente, es importante que las IDP afectadas puedan contar con estancias relativamente prolongadas en refugios temporales y provisionales, lo que inevitablemente conlleva desafíos y riesgos enormes, tal como discutidos en la parte III, capítulo 5.1 en cuanto a la falta de seguridad, detenciones arbitrarias, incursiones y asesinatos en los campamentos y la falta de acceso a servicios públicos (entre otros, centros de salud, escuelas y bancos). Para las autoridades estatales será esencial no sólo reconocer el derecho de las IDP a regresar voluntariamente en condiciones de seguridad y dignidad, sino también el derecho a decidir si quieren integrarse localmente donde se hayan establecido, o reasentarse en cualquier otro lugar del país (*cf. Guiding Principles on Internal Displacement*, Principle 28.1).

Para las IDP que se han refugiado en sitios abandonados de construcción, se puede suponer que tendrán que trasladarse cuando las empresas extranjeras vuelvan al país para completar sus contratos (p.ej. Rusia que tiene gran interés en realizar proyectos todavía acordados bajo Gadafi; véase parte II, cap. 4.2.1). No obstante, al parecer, no se han tomado medidas para el caso probable que una gran parte de las IDP vaya a optar por la integración local en las regiones donde están asentadas. Aparte de los campamentos, se supone que muchos desplazados viven en alojamientos privados, ya sea con familiares, amigos o en arrendamientos privados, sobre todo en sitios urbanos. Al parecer, actualmente se sabe poco sobre el grado de seguridad de tenencia de estas IDP, por lo que la predecibilidad en cuanto a su situación a largo plazo es restringida. Aunque con alojamientos privados las IDP tengan mejores posibilidades de integrarse en su nuevo entorno y tal vez incluso encontrar empleo, es probable que tengan que gastar los recursos de los que todavía disponen, y, cuando ya no tengan los medios financieros necesarios, se enfrentarán al desalojo de sus hogares actuales sin ninguna alternativa definida. Al mismo tiempo, se puede suponer que en un entorno urbano y en alojamientos privados, los desplazados internos tienen una mejor sensación de protección, así como mejor acceso a infraestructura y servicios sociales²⁸⁶. Por lo general, es probable que la promoción de la integración local ayude a las IDP a preservar su independencia económica y a facilitar su retorno si en el futuro tuvieran la

²⁸⁵ Refugiado (1) y (3) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁸⁶ Refugiado (3) de Tawergha, entrevista con la autora.

oportunidad. Medidas claves para promover tal integración local sería garantizar la seguridad de tenencia para sus alojamientos actuales y proporcionarles apoyo sostenible al respecto.

No obstante, debido a las circunstancias difíciles de las comunidades perseguidas no solamente en el proceso de reconciliación, en lo sucesivo se enfocará en este grupo de IDP y su situación actual en materia de cuestiones de vivienda y propiedad. Dado que Misrata está estrechamente vinculada con el destino de los tawerghanos, ambas comunidades serán tratadas y sus problemas relacionados con HLP incluidos en la discusión con el fin de poder proporcionar un análisis más coherente.

6.1.2.1 Comunidades de IDP perseguidas de Misrata y Tawergha

A lo largo de todo el conflicto y las luchas intensas de 2011, Misrata, la tercera ciudad más grande de Libia con unos 300.000 habitantes²⁸⁷, quedó en manos de fuerzas opositoras al régimen de Gadafi. Con una gran parte de la ciudad disputada entre las diferentes facciones beligerantes, miles de civiles huyeron a otras regiones del país, a menudo a comunidades donde todavía tenían vínculos familiares o tribales²⁸⁸. Situada a unos 37 kilómetros al sur de Misrata, la ciudad de Tawergha se convirtió en una de las ubicaciones claves de la que las fuerzas pro-Gadafi iniciaban sus ataques a Misrata.

Como ha sido mencionado en la parte II, capítulo 5.4 y parte III, capítulos 4.2.6.1 y 5.1, los tawerghanos obtuvieron cierto apoyo especial por Gadafi, debido a su ideología política de un nacionalismo islámico panárabe, por lo que en los años '70 les entregó unos 3.000 hectáreas de tierras para promover un proyecto agrícola alrededor de la ciudad (*cf.* Deutsche Afrika-Gesellschaft 1973: 63). Dado que muchos tawerghanos fueron leales con Gadafi y formaron parte de las unidades militares que sitiaron Misrata, se les atribuye haber cometido atrocidades graves contra la población civil. Como descrito anteriormente, a mediados de agosto de 2011, las brigadas revolucionarias de Misrata (*thuwar*) lograron dominar los combates al romper el asedio e iniciaron un asalto masivo contra Tawergha que provocó la huida de sus 30.000 habitantes. Los ataques por las brigadas de Misrata han continuado hasta la fecha, incluyendo la detención y ejecución arbitraria de tawerghanos e incursiones violentas en los campamentos de IDP, en los cuales numerosas víctimas han sido arrestadas, secuestradas e incluso asesinadas (véase parte III, cap. 5.1.4). Pese a las críticas infinitas a nivel internacional acerca de la incapacidad del Estado de protegerles y encontrar soluciones a su desplazamiento, muchos tawerghanos siguen estando en situaciones de gran peligro. Sin embargo, como discutido en los capítulos 5.1, por su parte, las

²⁸⁷ Fanack Chronicle, "Libya. Population", 29.09.2009, 12.12.2016 (actualizado).

²⁸⁸ BBC News, "Misrata: Libya's city under siege", 10.05.2011.

autoridades de Misrata han negado las acusaciones de detenciones ilegales y de tortura de los tawerghanos e insisten en que la única solución no es su retorno a Tawergha, sino el traslado de la población entera a otro lugar. Esta resistencia vehemente al retorno, frecuentemente está relacionada a una de las acusaciones más conflictivas contra los tawerghanos que también constituye un crimen de guerra, es decir, de haber participado con las fuerzas de Gadafi en violaciones sistemáticas contra civiles de Misrata capturados durante el asedio de la ciudad. El delito de violación sexual conlleva problemas particularmente delicados en la cultura libia (véase parte III, cap. 5.1.7). Tal como lo reconoce la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia, este hecho ha complicado la capacidad de los observadores externos para verificar la existencia de tal política (A/HRC/19/68, 02.03.2012, párr. 536). Por su parte, las autoridades de Misrata dan a entender que el desplazamiento de los tawerghanos se debe a su culpa, por lo que su situación no depende de la responsabilidad de Misrata. La suposición de que los tawerghanos huyeran voluntariamente, dado que sabían que sus crímenes eran imperdonables y que no puedan regresar a su ciudad, porque no se les puede perdonar, también se refleja en la respuesta oficial del Consejo Local de Misrata a las denuncias de violaciones de derechos humanos por *Human Rights Watch*: según, ni el pueblo, ni los revolucionarios de Misrata desplazaron a la fuerza a los tawerghanos; más bien, cuando los revolucionarios entraron en Tawergha, solamente encontraron a unas pocas personas ancianas, niños y mujeres “que fueron bien atendidas” y a las que proporcionaron transporte para unirse voluntariamente a sus familiares en otras ciudades. Supuestamente, durante estos días, no hubo ningún ataque contra las propiedades de los tawerghanos o sus hogares. Al parecer, los ataques exclusivamente fueron “actos individuales” cometidos por “personas desconocidas” sin poder identificarles, y solamente se produjeron después de que se había aumentado la presión sobre los ciudadanos de Misrata de aprobar que los tawerghanos pudieran regresar a sus hogares. Consecuentemente, el Consejo declaró:

As coexistence between the two areas is impossible at the current time, we believe it is necessary to search for alternative solutions that will be appropriate and acceptable to the people of Tawergha. This is an appeal to the government and all citizens to solve this problem on the national level. (HRW, 11.04.2012)

No obstante, estas descripciones no concuerdan con las conclusiones de marzo de 2012 de la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia de la ONU que no sólo registró un ataque concertado a la ciudad de Tawergha por las brigadas de Misrata, sino también la destrucción sistemática y total de su infraestructura y sus propiedades, al parecer en una tentativa obvia de evitar toda posibilidad de retorno (véase parte III, cap. 5.1.4):

59. Meses después del éxodo de la población de Tawergha, los thuwar de Misratah seguían saqueando y destruyendo viviendas y edificios públicos de la ciudad. La Comisión observó

carreteras cortadas y casas incendiadas en la ciudad. Edificios enteros parecían haber sido arrasados. También observó señales de tráfico en las que el nombre "Tawergha" había sido borrado y sustituido por "Nueva Misratah". La Comisión toma nota de que los thuwar de Misratah no disimulaban su opinión sobre los tawerghas. Un combatiente dijo a la Comisión que a su juicio merecían "ser borrados de la faz de la tierra". El lenguaje supuestamente utilizado por los combatientes de Misratah durante las detenciones era a menudo racista y peyorativo e incluía referencias a "esclavos", "negros" y "animales". A algunos detenidos les dijeron que nunca podrían regresar. (ONU, A/HRC/19/68, 28.01.2014, secc. E., 4, 59)

A pesar de la evidencia de saqueos masivos y la destrucción de la propiedad privada, no parece que las casas y tierras de los tawerghanos estén ocupadas²⁸⁹.

En este contexto cabe mencionar que no se ha logrado verificar ni los informes de las asignaciones de tierras por Gadafi a los tawerghanos u otros grupos beneficiarios, ni los desalojos de ciudadanos no tawerghanos, lo que se debe sobre todo a la quema pública de registros de propiedades en 1986 en las plazas principales de las ciudades libias. En todo caso, está claro que en el conflicto presente, por ninguna de las partes los títulos de propiedad son considerados la cuestión primordial (cf. Williams, 17.06.2012). Para los tawerghanos, su estatus de propiedad siempre ha sido incuestionable y no habían contado con la impugnación por otros grupos de la población²⁹⁰. La actitud de Misrata se centra principalmente en la prevención del regreso de los tawerghanos, pero no hay muchos motivos por los que se debe suponer que los misratanos pusieran en duda la legitimidad de la presencia anterior de los tawerghanos o sus derechos de propiedad, o que codiciaran sus tierras y bienes. Por eso, para las IDP de Tawergha, el principal problema relacionado con el regreso a su ciudad es la recuperación económica con respecto a sus bienes destruidos y saqueados. Por lo tanto, muchos afectados se esfuerzan por realizar una amplia reclamación de indemnizaciones basada en el conjunto de todas las propiedades muebles e inmuebles destruidas o robadas hasta la fecha²⁹¹. No obstante, al igual que con la cuestión del retorno, no está claro en absoluto quién se hace responsable para abordar esta demanda de indemnización, dada la tendencia pasada de las autoridades gubernamentales interinas de no hacer frente enérgicamente a dicho problema. Mientras tanto, la situación actual de refugio para muchos tawerghanos se caracteriza por la falta de seguridad de tenencia que tienen en común con otras IDP perseguidas, así como por una falta notable de seguridad física.

En centros urbanos como Trípoli y Bengasi, las IDP de Tawergha están distribuidas entre viviendas privadas en barrios residenciales, mientras que en otras localidades viven en campamentos de IDP situados en edificios públicos o lugares abandonados de construcción²⁹². Al igual que otras poblaciones de IDP perseguidas, sobre todo los tawerghanos en los campamentos carecen de seguridad de tenencia. De acuerdo con el ACNUR, aparte de los tawerghanos, más de

²⁸⁹ Refugiado (3) y (4) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁹⁰ Refugiado (4) de Tawergha, entrevista con la autora

²⁹¹ Refugiado (2) de Tawergha, entrevista con la autora.

²⁹² Refugiado (1) y (2) de Tawergha, entrevista con la autora.

6.100 antiguos habitantes de Misrata también han sido desplazados desde 2012. Algunos fueron leales con Gadafi, pero se supone que la mayoría simplemente huyó de la ciudad en lugar de quedarse y apoyar a los rebeldes, debido a los peligros cada vez mayores durante el asedio y las luchas que desencadenó. Resulta que hoy en día cualquier residente que no se quedó durante el asedio es percibido como lealista con el antiguo régimen de Gadafi y por lo tanto sospechoso, lo que, al igual que en el caso de los tawerghanos, gravemente complica el retorno a sus hogares (cf. UNHCR, “External Update – May 2014”). Acorde con la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia de la ONU, las autoridades de Misrata aplican una política de bloquear rotundamente la recuperación de propiedades para misratanos supuestamente por no haber apoyado a los *thuwar* de Misrata durante la revolución:

477. The Commission received information that a number of people from Misrata itself were subject to a refusal to allow them to return to their homes after the conflict. These were people who had left the town prior to the fighting and seem to have been considered insufficiently committed to the revolution as a consequence.

478. According to multiple interviews conducted by the Commission, families who left Misrata during the conflict returned to find their houses occupied and their belongings given over to those now occupying the houses. Another interviewee told the Commission that the person living in her house told her “you are traitors. You didn’t defend Misrata. You have no rights”. Attempts to appeal to the local council have reportedly been in vain. (...)

479. The Commission has also heard from two separate interviewees that the children of these families are not being allowed to return to their schools in Misrata. Interviewees have also reported being fired from their workplaces. (UN, A/HRC/19/68, 02.03.2012, párr. 477-79)

La situación actual de refugio de las IDP de Misrata es variada: mientras que algunas viven en asentamientos colectivos en los alrededores de la ciudad, se supone que la mayoría se refugió con familiares fuera de Misrata o en regiones con poblaciones de su origen tribal o étnico²⁹³. Sin embargo, su situación actual supone una presión para los familiares y compatriotas tribales y es poco probable que se alivie hasta que empiecen a crearse las condiciones para soluciones voluntarias duraderas y relacionadas con la propiedad. Si bien hay motivos para esperar que el problema pueda ser al menos parcialmente resuelto una vez que las familias alojadas en viviendas asignadas en Misrata tengan la posibilidad de trasladarse a sus propias casas reconstruidas otra vez, aquellos sospechosos de haber colaborado con Gadafi, y los desplazados cuyas casas son destruidas u ocupadas ilegalmente, se enfrentan a una perspectiva muy incierta en cuanto a un retorno seguro. Por lo tanto, también a este respecto se revela la importancia fundamental de la justicia transicional y de indemnizaciones que será discutida una vez más en el próximo capítulo.

²⁹³ IDMC, “Libya. Many IDPs return but concerns persist for certain displaced groups”, 07.11.2011.

6.1.2.2 La aplicación selectiva de la justicia transicional y de la política de indemnizaciones en la nueva Libia

Una de las primeras leyes adoptadas por el NTC fue la Ley No. 4 de 2011 relacionada con la cuestión de la reconciliación nacional y la justicia de transición²⁹⁴. Aunque por un lado se considera que la ley de la justicia transicional constituye un paso importante hacia la consolidación de la Libia post-Gadafi, por otro lado es objeto de críticas enormes debido a su enfoque exclusivo en sanciones y el castigo de los crímenes cometidos por el régimen de Gadafi. Por ejemplo, la definición de la justicia transicional implica (1) indemnizaciones por las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales cometidas por el antiguo régimen libio, y (2) intentos de lograr la reconciliación entre algunos grupos comunitarios²⁹⁵. Parece que mediante este enfoque las autoridades actuales tratan de garantizar medidas de reparación exclusivamente a las víctimas del régimen de Gadafi, mientras que las víctimas de los revolucionarios anti-Gadafi ni siquiera son tomadas en consideración.

Como mencionado en la parte II, capítulo 6 y parte III, capítulo 5, esta crítica se ha intensificado desde que han surgido pruebas de violaciones significativas cometidas por las fuerzas revolucionarias, incluyendo el desplazamiento forzoso y la expropiación de las comunidades perseguidas consideradas como partidarios del antiguo régimen de Gadafi durante el conflicto de 2011. En particular el Informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia de marzo de 2012 confirmó que ambas partes en el conflicto evidentemente habían cometido violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra (véase parte II, cap. 2.2 y 3.1.2; parte III, cap. 5.1.3). Asimismo informó que actos como tortura, asesinatos, la destrucción de la propiedad y el desplazamiento forzado por las brigadas revolucionarias y milicias no sólo han sido violaciones masivas de los derechos humanos, sino que en algunos casos constituyen crímenes de lesa humanidad (véase parte III, cap. 4). También en 2012, la UNSMIL señaló que los crímenes habían sido cometidos por todas las partes, y abogó por una revisión del enfoque de la justicia transicional del NTC con el fin de poder plantear un enfoque integral para abordar las causas fundamentales del pasado y las injusticias cometidas en aquel entonces (*cf.* UNSMIL, 17.09.2012).

Los delitos involucrando el desplazamiento y la expropiación por parte de las fuerzas revolucionarias requieren la asunción de responsabilidades por parte de las autoridades gubernamentales actuales y futuras en cuanto a la proporción de reparaciones adecuadas (véase parte III, cap. 5.1.7), en el mejor de los casos en forma de soluciones duraderas, incluidos el retorno voluntario de las IDP y la restitución y reconstrucción de sus propiedades cuando sea

²⁹⁴ National Transitional Council (NTC), *Law No. 4 for the year 2011 AD Concerning National Reconciliation and Transitional Justice Law*, 2011.

²⁹⁵ *Cf. ibid.* Article 1.

necesario. Pero cabe realzar que hasta la fecha la respuesta tanto normativa como legislativa de las autoridades libias en todos los ámbitos a estas exigencias, así como a demandas de respetar los derechos humanos y la rendición de cuentas han sido decepcionantes. Además, el NTC aprobó la controvertida Ley 38, ya discutida en la parte III, capítulos 5.1.4 y 5.1.6, con respecto a ciertas cuestiones relacionadas con la justicia transicional por la que se estableció una amnistía general de los crímenes cometidos por los revolucionarios anti-Gadafi. En cierto sentido, se puede decir que la ley representa un retroceso comparable a la impunidad que había caracterizado la política de Gadafi.

Estos acontecimientos evidentemente causan serias preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades libias de cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos establecidos en su Declaración Constitucional. En lo que concierne a la situación de las IDP en particular, se puede inferir que a comunidades enteras consideradas leales con Gadafi se les ha atribuido una culpa colectiva, y que su desplazamiento prolongado y la expropiación impuestos a estas comunidades actualmente son considerados por gran parte de la sociedad libia como una forma legítima de castigo colectivo. Tal conclusión plantea graves problemas para Libia ante sus obligaciones del derecho internacional que se discutirán a continuación. Pero resulta difícil sacar cualquier otra conclusión frente al fracaso total del NTC de adoptar por lo menos un borrador de una política nacional que aborda el desplazamiento interno y aplica la justicia transicional también a las IDP de manera inclusiva sin estigmatizarlas.

6.1.3 Libia y sus obligaciones del derecho internacional

A lo largo de su régimen, Gadafi ratificó una amplia gama de convenciones mundiales y regionales de derechos humanos. A mediados de 2011, éstas fueron nombradas en un informe de la ACNUDH según el cual Libia forma parte de los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCEM), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanas y Degradantes (CTTPCID), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CIPDTMF). También ratificó el Primer Protocolo Facultativo del PIDCP, así como el Protocolo Facultativo de la CDN sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (OP-CRC-AC). Asimismo, Libia es parte de la Convención sobre la

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En lo que concierne al derecho internacional humanitario, Libia también es Estado Parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus dos Protocolos adicionales (UN Human Rights Commission, A/HRC/17/45, párr. 18, 07.06.2011).

Con respecto al desplazamiento forzado, las normas más aplicables a los derechos relativos a las viviendas, tierras y propiedades son derivados de dos tratados mundiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, ambos ratificados por Libia en 1970. Estos tratados son los citados PIDCP y PIDESC. Ambos son supervisados por comités de la ONU, respectivamente, o sea el Comité de Derechos Humanos (CDH) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR). Mediante la interpretación de las normas fijadas en cada uno, tienen el mandato de proporcionar observaciones generales al respecto con enfoque particular en grupos sufriendo discriminación, como determinado en tratados claves como la CIEFDR y la CETFDCM. A nivel regional, cabe mencionar sobre todo la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que incluye numerosas de las normas anteriormente citadas.

6.1.3.1 Normas internacionales de derechos humanos y su vínculo con el derecho a la vivienda, la tierra y la propiedad

Algunas normas de derechos humanos se refieren específicamente al desplazamiento y a las cuestiones de la vivienda, la tierra y la propiedad. Estas abarcan, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada incluido en el artículo 11 del PIDESC:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. [...]. (PIDESC de 1966, art. 11 (1))

En 1991, el CESCR de las Naciones Unidas identificó varios criterios para evaluar la “adecuación” de la vivienda, de los que uno de los más importantes es la seguridad de la tenencia, así como la protección legal contra el desalojo forzoso:

a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. (CESCR, Observación general No. 4 (1991), párr. 8 (a)).

Seis años más tarde, el Comité determinó que a “desalojos forzosos se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (CESCR, Observación general No. 7 (1997), párr. 3). El derecho a no ser desalojado a la fuerza también se aplica a los residentes de asentamientos improvisados u ocupantes ilegales de propiedad pública. Como consecuencia, se nota un enfoque especial en la protección de la vida doméstica, por lo que resulta un vínculo directo con el derecho a la privacidad establecido en el artículo 17 del PIDCP (véase abajo). Por ende, el CESCR declaró que se debería recurrir al mismo conjunto de principios para regir la aplicación de ambos derechos (*ibíd.* párr. 14).

Otra norma destacada relacionada con el desplazamiento y los derechos de HLP es el derecho a la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia en el territorio del Estado donde una persona se encuentra legalmente, determinado en el artículo 12 del PIDCP:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. (PIDCP de 1966, art. 12 (1))

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que “el derecho de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno forzado”²⁹⁶. En este contexto, también cabe mencionar que el derecho a la libertad de circulación está vinculado al derecho al regreso. No obstante, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, este derecho está relacionado con el derecho personal a abandonar su país y se refiere solamente a los países de origen y no a los lugares o hogares de origen (PIDCP de 1966, art. 12 (4); “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”). Pero sobre todo tras la Guerra Fría, la interpretación del derecho al regreso se ha ampliado y hoy en día cubre también el retorno dentro del propio país al lugar de origen, tal como definen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos:

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.
2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración. (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998), Principio 28)

Con el fin de poder ejercer su derecho de elegir libremente su residencia tras haber sido

²⁹⁶ Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones generales núm. 27 (1999), párr. 7.

desplazadas, para las IDP, esta determinación constituye una necesidad fundamental. No obstante, es evidente que para poder garantizar este derecho, se requieren medidas sostenibles para restituir las tierras y propiedades abandonadas por los desplazados.

Otra norma en este contexto es el anteriormente mencionado derecho a la privacidad: de acuerdo con el artículo 17 del PIDCP está garantizada la protección de todas las personas de interferencias arbitrarias o ilícitas tanto en su vida familiar, incluido su hogar, como en su vida personal:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
(PIDCP de 1966, art. 17 (1) y (2))

En cuanto al término “domicilio”, cabe realzar que el Comité de Derechos Humanos lo ha definido como el “lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual”²⁹⁷. Dicho con otras palabras, incluso en situaciones en las que las personas no tengan derechos legales para poseer sus hogares, su tenencia y su uso no debe verse restringidos de manera ilegal o arbitraria.

Aunque es de importancia similar como los derechos anteriores, el derecho a la propiedad no es ni incluido en el PIDCP ni en el PIDESC. No obstante, de acuerdo con la CETFDCM, está determinada la protección de la igualdad de derechos de las mujeres en cuanto a poseer y disponer de propiedad (art. 16 (h)):

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
(CETFDCM de 1979, art. 16 (h))

Además, la CIEFDR afirma el derecho a la propiedad sin discriminación por motivos de raza (art. 5 (d)):

v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros (CIEFDR de 1965, art. 5 (v))

En lo que concierne al contexto libio, es imprescindible mencionar la CADHP que en su artículo 14 incluye una firme afirmación de los derechos de propiedad:

Estará garantizado el derecho a la propiedad. Este solamente podrá ser usurpado en el interés público o general de la comunidad y de conformidad con las disposiciones de las leyes adecuadas. (CADHP de 1981, art. 14)

²⁹⁷ *Ibid.*, Observaciones generales núm. 16 (1988), párr. 5.

Al igual que las normas ya mencionadas, el derecho a un recurso tiene un vínculo importante con las cuestiones relativas al desplazamiento y los derechos de HLP. El desplazamiento frecuentemente causa la violación de muchos de los derechos citados, tanto en el lugar de origen a través de confiscaciones de hogares y tierras, como en el lugar del desplazamiento por no disponer de condiciones de vivienda adecuadas. Uno de los derechos humanos más importantes, el derecho a un recurso efectivo, se convierte en un instrumento esencial cuando se violen otros derechos. El derecho a un recurso, como está establecido en el PIDCP, implica el acceso a la justicia, en forma de procesos nacionales permitiendo a los individuos reclamar que sus derechos han sido violados:

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (PIDCP de 1966, art. 2 (3))

También del PIDESC se puede deducir dicha determinación:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. (PIDESC de 1966, art. 2 (1))

Las normas y prácticas internacionales tienden cada vez más a reconocer el derecho a la indemnización; sobre todo en los casos en los que se hayan constatado violaciones en forma de recursos, como la restitución de bienes y la compensación financiera. Por lo tanto, en este contexto también hay que mencionar los denominados “Principios Pinheiro” de 2005 sobre la Restitución de Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Desplazados que establecen:

Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia reformativa. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista ese derecho. (Principios Pinheiro (2005), Principio 2.2)

6.1.3.2 La aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, de los *Guiding Principles on Internal Displacement* y de los *Pinheiro Principles* a las IDP

Ante la crisis del desplazamiento en Libia de dimensión nacional sin precedentes, es indispensable que las autoridades libias aborden el problema al cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las normas de derechos humanos enumeradas en el subcapítulo anterior. A pesar de que Libia aún no ha ratificado la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala, 2009)²⁹⁸, aun así existe una guía sobre cómo llevar a cabo una respuesta al desplazamiento interno basada en un enfoque jurídico. Alentado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General, en 1998 se establecieron los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase parte I, cap.7), un conjunto de normas no vinculantes que han sido ampliamente adoptadas tanto por los Estados a nivel mundial como las organizaciones regionales, así como por órganos y agencias de la ONU. Se originan en las normas de derechos humanos y del derecho humanitario más ampliamente aceptadas y tratan de aplicarlas a las cuestiones planteadas por el desplazamiento interno, especialmente para Estados que no han experimentado tales crisis nunca antes. En breve, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos describen en una versión “comprimida”, de acuerdo con el derecho internacional, las medidas que se deben adoptar para prevenir y atenuar los impactos conllevados por el desplazamiento interno, así como para implementar soluciones duraderas para las IDP. Por lo general, según el enfoque de los Principios Rectores, se supone que las personas expulsadas involuntariamente de sus hogares tienen en común ciertas vulnerabilidades, entre ellas la pérdida de su vivienda, de medios de subsistencia, de seguridad y privacidad. Asimismo, hay obstáculos comunes en cuanto al cumplimiento con sus derechos, como por ejemplo dificultades en acceder a sus propiedades, así como a servicio médico, recurso judicial o a educación para sus hijos. Tal como hemos estudiado en la parte I, en los casos en los que los desplazados atraviesan fronteras y, por tanto, se convierten en refugiados, otros Estados pueden proporcionar apoyo internacional de conformidad con el derecho internacional de los refugiados. No obstante, mientras que permanezcan dentro del territorio de sus propios Estados, las autoridades nacionales mantienen la responsabilidad primordial para garantizar que las IDP “no serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos” y que “disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país” (Principio Rector 1.1). Pero debido a los obstáculos a los que se enfrentan las IDP en el

²⁹⁸ IDMC, “The Kampala Convention. Two years on: time to turn theory into practice”, 08.12.2014.

ejercicio de sus derechos, es imprescindible que el Estado adopte medidas especiales para ayudar a este grupo de personas, tanto durante su desplazamiento como en el proceso de encontrar soluciones duraderas a su situación.

En el contexto de los derechos relativos a la vivienda, la tierra y la propiedad, hay que mencionar unos cuantos principios que están destinados a la protección de los derechos de propiedad de las IDP. En primer lugar, cabe realzar el Principio 9 que hace hincapié en la necesidad de prevenir el desplazamiento, sobre todo en situaciones en las que los afectados pertenecen a poblaciones vulnerables con alto riesgo de perder sus tierras:

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma. (Principios Rectores (1998), Sección II, Principio 9)

Otro principio relevante es el Principio Rector 21 que procede del derecho humano a la propiedad (véase el capítulo anterior) y describe las medidas que las autoridades en cuestión deben tomar para proteger la propiedad abandonada por las IDP durante su desplazamiento:

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.

*2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:
expolio;
ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;
utilización como escudos de operaciones u objetos militares;
actos de represalia; y
destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.*

3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales. (Principios Rectores (1998), Sección III, Principio 21)

Y en tercer lugar, cabe recurrir al Principio Rector 29.2 que se basa en el derecho a un recurso en forma de indemnizaciones (véase parte III, cap. 6.2.2). Exige la restitución o compensación de las IDP por los bienes perdidos, lo que debe formar parte del proceso general hacia soluciones duraderas y la reconciliación nacional:

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan. (Principios Rectores (1998), Sección V, Principio 29.2)

Un ejemplo del modo en que los Principios Rectores vinculan las normas generales del derecho internacional a medidas particulares para hacer frente de forma sostenible a las crisis del desplazamiento es el Principio Rector 18 que en primer lugar realza la garantía de los derechos económicos y sociales de un nivel de vida adecuado, lo que también incluye el derecho a una vivienda adecuada, explicado anteriormente en el subcapítulo 6.3.1. Encomienda entonces que los Estados implementen este derecho en situaciones de desplazamiento interno al garantizar incondicionalmente la prestación de ayuda humanitaria básica a las IDP, incluyendo protección y refugio:

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado.

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:

alimentos esenciales y agua potable;

alojamiento y vivienda básicos;

vestido adecuado; y

servicios médicos y de saneamiento esenciales.

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en la planificación y distribución de estos suministros básicos. (Principios Rectores (1998), Sección III, Principio 18)

Otros principios rectores tienen una importancia especial para la situación en Libia, incluyendo los siguientes:

- el Principio Rector 1.2, en el que se establece que “estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”; o sea no se impide la investigación y el enjuiciamiento legal de sospechosos de delitos penales que resultan ser desplazados internamente.
- El Principio Rector 2.1, que fija que “estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna”; es decir, que incluso las brigadas revolucionarias y los consejos locales deberían proteger y asistir a las IDP en situaciones en las que tienen un control real sobre ellas.
- Con relación a la soberanía estatal y las responsabilidades de un Estado, en el Principio Rector 3.1 se establece que “las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción”.
- El Principio Rector 6 relativa a la prevención aclara que los desplazamientos son “arbitrarios” y prohibidos de acuerdo con el derecho internacional “cuando se utilicen como castigo colectivo”, y que en todos los casos, el desplazamiento no debería tener “una duración superior a la impuesta

por las circunstancias”.

Por último, el Principio 28 sobre las soluciones duraderas al desplazamiento se basa en el igual derecho de las IDP a gozar de la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia (véase el capítulo anterior). Este principio subraya el derecho de las IDP a elegir voluntariamente entre el regreso a sus lugares de origen y el reasentamiento en otro sitio en el país, lo que generalmente se entiende o bien como ‘integración local’ en el lugar de refugio, o como reubicación a un tercer lugar, incluso en el extranjero:

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración. (Principios Rectores (1998), Sección V, Principio 28)

En el contexto del derecho a la propiedad, también cabe destacar una norma más reciente que, aunque tampoco sea jurídicamente vinculante, afirma el derecho de los refugiados e IDP a la restitución de bienes perdidos tras un conflicto. Los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, también conocidos como Principios Pinheiro, fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2005²⁹⁹. Aunque no tan ampliamente aceptados y aplicados como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, resumen las mejores prácticas hasta la fecha en cuanto a la provisión de recursos en situaciones de despojo de bienes. En lo sucesivo, se presentan las afirmaciones más relevantes con respecto a los derechos relativos a HLP:

- todas las personas desplazadas tienen derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y propiedades de las que fueron arbitrariamente privadas o, si esto no resulta posible, una indemnización justa:

2.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. (Principios Pinheiro (2005), Sección II, Principio 2.1)

- De acuerdo con el Principio 10.3, la restitución de las propiedades debe contribuir al logro de soluciones duraderas, aunque no debe fungir como factor determinante para las decisiones de las IDP con respecto a su retorno:

²⁹⁹ UN, Economic and Social Council, E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28.06.2005.

10.3. Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio. (ibíd., Sección IV, Principio 10.3)

- Los Estados en cuestión deben garantizar procedimientos e instituciones independientes, imparciales, transparentes y no discriminatorios para la evaluación pronta y la imposición judicial de las demandas de los desplazados relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad:

12.1. Los Estados deben establecer procedimientos, instituciones y mecanismos que de una manera equitativa, oportuna, independiente, transparente y no discriminatoria, y con su apoyo, permitan evaluar y dar curso a las reclamaciones relativas a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio. (ibíd., Sección V, Principio 12.1)

- Estos susodichos procedimientos relativos a las demandas deben ser accesibles a todos los demandantes potenciales sobre una base de justicia y equidad, gratuitos y no dificultados por requisitos irracionales:

13.11. Los Estados deben garantizar la prestación de una asistencia jurídica adecuada y, de ser posible, gratuita a quienes deseen presentar una reclamación de restitución. Esta asistencia jurídica, cuya prestación podrá correr a cargo de instituciones gubernamentales o no gubernamentales (nacionales o internacionales), deberá estar exenta de discriminación y satisfacer normas adecuadas de calidad, equidad e imparcialidad, a fin de que los procedimientos de reclamación no se vean menoscabados. (ibíd., Sección V, Principio 13.11)

- Los procesos de reparación relacionados con cuestiones de la vivienda, la tierra y la propiedad deben fundamentarse en la consulta con las personas afectadas y especialmente con los grupos más vulnerables de los desplazados internos:

14.1. Los Estados y los demás actores nacionales e internacionales interesados deben velar por que los programas de repatriación voluntaria y de restitución de viviendas, tierras y patrimonio se lleven a cabo previo mantenimiento de consultas apropiadas con las personas, las comunidades y los grupos afectados y con su adecuada participación. (ibíd., Sección V, Principio 14.1)

- Las medidas de indemnización deben ir acompañadas de medidas por las que se reconocen los derechos de propiedad informales que sean necesarios para garantizar la seguridad jurídica de tenencia:

15.2. Los Estados deben velar por que toda declaración judicial, cuasi judicial, administrativa o consuetudinaria relativa a la propiedad legítima de las viviendas, las tierras o el patrimonio, o a los derechos correspondientes, vaya acompañada de medidas encaminadas a hacer efectivos el registro o la delimitación de dichos bienes, como requisito para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia. (ibíd., Sección V, Principio 15.2)

- Por último, con respecto a los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad, incluso en casos en los que los afectados carecen de tenencia absoluta, se establece que lo que se ha perdido debe

ser restituido en la mayor medida posible:

16.1. Los Estados deben velar por que en los programas de restitución se reconozcan los derechos de los arrendatarios, de los titulares de derechos de ocupación social y de otros ocupantes o usuarios legítimos de las viviendas, las tierras o el patrimonio. Los Estados se deben comprometer, en la mayor medida posible, a que estas personas puedan regresar y recuperar y utilizar sus hogares, tierras y patrimonio en condiciones similares a las de los titulares de derechos de propiedad oficiales. (ibíd., Sección V, Principio 16.1)

6.1.3.3 El derecho a la seguridad de tenencia y medidas de protección en situaciones de desplazamiento

En el contexto del derecho a la vivienda también cabe mencionar otra responsabilidad de los Estados de “adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección” (CIEFDR de 1965, art. 8 (a)). Estas medidas incluyen la protección legal contra desalojos forzosos o arbitrarios. Los desalojos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada y a la seguridad jurídica de la tenencia (*cf.* OHCHR, Fact Sheet No. 25/Rev. 1, 2014, p. 1). Cuando se produzcan desalojos forzosos, se puede suponer que o bien el Estado en cuestión haya fallado en el cumplimiento de su responsabilidad de adoptar medidas jurídicas para garantizar la seguridad de tenencia, o porque tales medidas no hayan sido respetadas o aplicadas eficazmente.

En situaciones de desplazamiento, el acceso a un refugio protegido es uno de los aspectos más esenciales de las medidas básicas del apoyo humanitario, con el fin de aliviar el sufrimiento de las IDP y refugiados. Otros aspectos fundamentales presentan el suministro de alimentos y de agua, el acceso a instalaciones de saneamiento y servicios médicos esenciales. Pero también los servicios como la educación y el asesoramiento jurídico constituyen aspectos cada vez más importantes, sobre todo en situaciones de crisis prolongadas. Cabe mencionar que dado que los organismos humanitarios han adoptado un enfoque basado cada vez más en los derechos, la ayuda como la provisión de refugio ha sido prestada sobre la base de las normas de derechos humanos: este enfoque ya se puede encontrar en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que en el Principio Rector 25 no sólo hacen hincapié en el tenor estándar de la responsabilidad de los Estados de facilitar la asistencia humanitaria, sino que también implican un derecho a dicha asistencia al hacer un vínculo a sus elementos básicos, incluyendo “alojamiento y vivienda básicos” y el “derecho a un nivel de vida adecuado” (Principio Rector 18).

Un aspecto clave con respecto al refugio también constituye la autoayuda. Las decisiones de los desplazados de invertir y dedicarse a la mejora de su situación relativa al alojamiento durante el desplazamiento pueden implicar un reconocimiento de la posibilidad de integración local como

una solución duradera, en lugar de regresar a sus lugares de origen. No obstante, hay que realzar que la integración local difiere tanto del retorno como del asentamiento en un tercer lugar, dado que no siempre conlleva la opción para los desplazados de decidir conscientemente sobre la integración local en cierto momento (*cf.* Brookings Institution, IDMC y NRC, mayo de 2011, p. 6). Es importante tener en cuenta que la seguridad de tenencia suele ser una condición clave para que los desplazados estén dispuestos a participar activamente en el mejoramiento voluntario de su situación de vivienda, lo que de hecho no automáticamente equivale a su integración local de manera efectiva.

6.1.4 Recomendaciones relativas al apoyo humanitario a las IDP

Por lo general, sobre todo en un contexto dominado por conflictos bélicos continuos y anarquía como en el caso de Libia, es imprescindible que las respuestas humanitarias al desplazamiento sean caracterizadas por enfoques basados en los derechos. En lo que concierne a las IDP, una implementación mayor y la observancia de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos facilitaría un conjunto eficaz de normas objetivas para asegurar que la respuesta humanitaria de Libia al desplazamiento cumpliera con sus anteriormente citadas obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos. Sobre todo para poder abordar las cuestiones complejas y polémicas relativas a la vivienda, la tierra y la propiedad, este procedimiento sería de importancia fundamental. Como mencionado anteriormente, ya durante el régimen de Gadafi, Libia había ratificado una serie de convenios y pactos claves de derechos humanos (véase parte III, cap. 6.3), y las nuevas autoridades de Libia han afirmado reiteradamente su compromiso con ellos. Pero cabe realzar de nuevo que los enfoques de la justicia transicional se han centrado en gran medida en las víctimas del régimen de Gadafi, excluyendo a aquellos cuyos derechos habían sido violados por los crímenes cometidos por las fuerzas anti-Gadafi. Para este grupo de personas, incluidas las IDP perseguidas, hasta la fecha el énfasis principal se centra en el proceso de reconciliación y no en la justicia. Se podría suponer que ésto implica que la violencia contra dichas comunidades en cierto sentido es considerada justificada, dada su presunta lealtad y su apoyo a Gadafi que conllevan el estigma de su culpabilidad. Por consiguiente, sus demandas actuales de indemnización y asistencia jurídica no son tratadas con mucha atención, lo que a largo plazo y mediante la sensibilización a nivel nacional debería compensarse. Pero debido a la complejidad de la situación y la gran desconfianza entre los diferentes grupos étnicos, será probable (aunque no sea considerado ‘justo’) que las comunidades perseguidas tendrán que ceder de ciertas demandas con el fin de recuperar por lo menos una parte de lo que han perdido, y de este modo lograr un avance hacia la

reconciliación y la paz³⁰⁰. Este enfoque de reconciliación refleja una realidad de suma importancia en la nueva Libia, es decir, que las comunidades diferentes, como objetos de manipulación, han sido escindidas y utilizadas unas contra otras de manera partidista, lo que consecuentemente ha provocado el sufrimiento por todas partes. Pero, como señalado varias veces, mientras que el sufrimiento y las pérdidas sean apoyados por los percibidos *thuwar*, los percibidos *azlam* se enfrentan al estigma de una culpabilidad colectiva, implicando también el castigo colectivo y una falta de justicia. Hacer hincapié en un enfoque del desplazamiento basado en los derechos humanos puede ayudar a enfatizar que las diferentes comunidades de IDP se componen de individuos, de los que algunos en conformidad con un Estado de derecho legítimo deben ser procesados por sus crímenes. Este modo de proceder también se acepta en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. No obstante, hay que estar consciente de que muchos individuos no sólo son inocentes, sino que son extremadamente vulnerables y requieren asistencia sostenible para poder satisfacer sus necesidades básicas y reintegrarse en la sociedad (*cf.* ICG 2012: 32). En lo sucesivo, tal como discutido en los capítulos anteriores, serán resumidas las recomendaciones específicas para la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos.

6.1.4.1 Implementar un enfoque de desplazamiento basado en los derechos humanos

La integración de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en la legislación libia: como se ha señalado anteriormente, los Principios Rectores de las Naciones Unidas presentan una norma bien establecida y probada sobre cómo aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en la respuesta humanitaria al desplazamiento. Tienen una gran acogida internacional debido a su estructura que incluye y trata todas las fases de desplazamiento, y que presta asesoramiento específico sobre la prevención, las respuestas apropiadas durante el desplazamiento y medidas para encontrar soluciones duraderas. Asimismo, a nivel regional son aceptados ampliamente, lo que también se refleja en la adopción de la Convención de Kampala sobre IDP en 2009 por la UA basada en los Principios Rectores. Desde su adopción en 1998, han sido ampliamente ‘probados en el campo’ de desplazamientos, o sea diez años después de haberlos introducido ya en más de quince países³⁰¹. Como resultado, mientras que los propios Principios Rectores son sumamente concisos y por lo tanto no muy detallados, se han publicado guías y manuales adicionales sobre la implementación de los mismos basados en las vastas experiencias de países que frente al desplazamiento sistemáticamente intentaron abordar la crisis.

³⁰⁰ Lealista con Gadafi (1), Refugiado (4) de Tawergha y activista de los derechos humanos, entrevista con la autora.

³⁰¹ EGUREN, Luis Enrique, “A quick guide to IDP”, 18.01.2014.

En este contexto cabe mencionar el denominado *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* del ACNUR de 2008 de más de 500 páginas que incluye, entre otros, capítulos sobre temas relevantes en el ámbito humanitario como refugio, cuestiones relativas al género y la restitución de bienes. Otro aspecto importante es que muchos de estos documentos, incluidos los Principios Rectores y el *Handbook* también son disponibles en árabe.

Al proporcionar una orientación sistemática no sólo sobre el trato del desplazamiento interno, sino también sobre su prevención, en el caso de Libia los Principios Rectores son fundamentales sobre todo para comunidades y grupos asediados, como por ejemplo los mashashya que siguen desplazados en las montañas de Nafusa y que por tanto son muy vulnerables (véase parte III, cap. 5 y 6.2). El enfoque principal de los Principios Rectores es abordar los impactos que conlleva el desplazamiento al cubrir los grupos fundamentales de derechos, incluyendo:

- seguridad física e integridad (p.ej. el derecho a la vida, protección de tortura y abuso sexual)
- necesidades básicas de la vida (p.ej. el derecho a alimentos, agua, refugio, salud y saneamiento)
- otras necesidades de protección de carácter económico, social y cultural (p.ej. los derechos al trabajo, acceso a educación, la restitución de bienes e indemnizaciones)
- otras cuestiones de protección de carácter político y social (p.ej. los derechos a la documentación personal y participación política) (cf. UNHCR 2008, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, p. 33).

Pero como ya se ha señalado, también está incluida la orientación amplia sobre cómo poner fin a los desplazamientos forzados a través de soluciones duraderas a base voluntaria, abarcando tanto el retorno a los lugares de origen como la integración local, así como la restitución de las propiedades perdidas. Hasta hoy día, casi veinte años después de su implementación, sigue siendo el documento más recurrido para identificar las cuestiones principales a las que se enfrentan los desplazados internos, y para indicar maneras adecuadas de abordarlas en cumplimiento con las normas fundamentales de derechos humanos.

A lo largo de los años, se han elaborado directrices más detalladas para responder a asuntos específicos conllevados por el desplazamiento interno, como los derechos de propiedad y las cuestiones de seguridad de tenencia. Mediante misiones de asesoramiento coordinadas por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos (véase parte I, cap. 4) se suele prestar apoyo directo a los esfuerzos nacionales, así como al fomento del desarrollo de capacidades e instrucción adaptados a los contextos específicos de los países en cuestión. Al considerar la situación en Libia, medidas específicas que podrían adoptarse para aplicar los Principios Rectores a nivel nacional son los siguientes:

- debido a la falta de experiencia de los actores humanitarios libios en cuanto a hacer frente eficazmente a la crisis del desplazamiento en el país, será imprescindible elaborar estrategias de sensibilización para formar los diferentes agentes en cuestión (funcionarios públicos y gubernamentales, representantes de las IDP, organizaciones de la sociedad civil, etc.) de acuerdo con las normas internacionales sobre el desplazamiento interno.
- Es esencial fomentar la promoción de la difusión de los Principios Rectores al instar las autoridades gubernamentales de Libia a reconocer la necesidad de abordar el desplazamiento interno y desarrollar una política adecuada para responder a la crisis mediante nuevas leyes, así como adoptar los Principios Rectores como fundamento de su respuesta humanitaria. Asimismo, aparte de ratificar los *Guiding Principles on Internal Displacement*, las autoridades libias deberían considerar firmar convenios claves relacionados con la protección de las IDP, como por ejemplo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, 1998), la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala, 2009) y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (ACNUR, 1951) y su Protocolo adicional (1967).
- Desde un punto de vista político, los Principios Rectores ofrecen un planteamiento basado en los derechos, por lo que pueden ayudar de manera integral a abordar el problema del desplazamiento. Podrían contrarrestar la tendencia actual por la que el apoyo humanitario a las IDP es percibido por el público como acto caritativo o de compasión y no como un derecho. Asimismo, la implementación de los Principios Rectores en las leyes libias podría influir positivamente en el punto de vista común de que el retorno de las IDP a sus lugares de origen depende más de negociaciones y de la aprobación por otras comunidades libias que de obligaciones y responsabilidades.
- La adopción de un enfoque basado en los derechos servirá para vincular la crítica situación de los desplazados internos con los compromisos de Libia en materia de derechos humanos. Al asumirlos, se podría facilitar el discurso indispensable de reconciliación por el que hasta la fecha solamente han sido proporcionadas seguridad y protección de los derechos humanos a las víctimas del régimen de Gadafi.

Elaborar un marco político nacional para responder de manera persistente al desplazamiento: dada la dimensión alarmante de la crisis del desplazamiento interno en Libia y los retos que conlleva al tratar de reintegrar a los afectados, la meta fundamental de la respuesta humanitaria debería ser el apoyo a las autoridades libias a desarrollar un marco político nacional sobre el desplazamiento interno. Éste puede abarcar una amplitud enorme en sus contenidos, como lo demuestra por ejemplo el nivel de detalle del mencionado *Handbook for the Protection*

of Internally Displaced Persons de 2008 sobre la aplicación de los Principios Rectores a través de leyes y políticas nacionales. Sin duda, en algunos ámbitos tales políticas tendrán que abordar cuestiones de complejidad considerable. No obstante, idealmente deberían incluir los siguientes objetivos:

- es imprescindible que sean las autoridades libias, y sobre todo el gobierno nacional los que asumirán la responsabilidad primordial en cuanto a la prevención del desplazamiento arbitrario, así como a la protección y asistencia a las IDP. Además, deberán establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan lograr soluciones voluntarias y duraderas a la crisis del desplazamiento.
- Otro aspecto clave tras una consulta e inclusión verdadera de las IDP mismas será la identificación de las necesidades específicas de protección de este grupo de personas en Libia y de las medidas que deben tomarse para satisfacerlas mientras que permanezcan desplazadas.
- En el marco de una política nacional e integral también será fundamental envolver más a los actores de la sociedad civil, reconocer sus méritos y fomentar sus contribuciones. Cabe realzar el papel significativo que la sociedad civil puede desempeñar en el desarrollo, la implementación y la supervisión de las políticas nacionales relacionadas con soluciones duraderas. En el caso particular de Libia, también deberá considerarse el papel que pueden asumir las comunidades tribales, los líderes religiosos y las organizaciones regionales con el fin de garantizar respuestas eficaces a las necesidades de las IDP.

Promover la seguridad jurídica de la tenencia de las IDP en su vivienda actual: brindar refugio y alojamiento adecuado a los desplazados internos generalmente se considera tanto una obligación humanitaria en tiempos de crisis como una cuestión de respeto de los derechos humanos de los afectados. Debido a su importancia en el contexto del apoyo humanitario a las IDP, será discutido con más detalle en el subcapítulo siguiente.

6.1.4.2 La importancia de la seguridad jurídica de la tenencia de las IDP en sus refugios

En el anteriormente citado Principio 18, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos relacionan la ayuda humanitaria vital, a la que también pertenece la provisión de refugio y alojamiento, con el derecho a un nivel de vida adecuado incluyendo el derecho a una vivienda adecuada y la seguridad de tenencia (véase parte III, cap. 6.3.2 y 6.3.3). Resalta el respeto a este derecho como una obligación fundamental del Estado:

Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan

Las normas de derechos humanos ayudan tanto a subrayar la urgencia de proporcionar refugio, fundamental sobre todo en situaciones de emergencia, como de aportar criterios de acuerdo con las normas de derechos humanos sobre vivienda con el fin de poder clasificar el refugio humanitario como ‘adecuado’ o no. Uno de los criterios más importantes para la adecuación de la vivienda enunciado por el CDESCR de la ONU es la seguridad de la tenencia que abarca el derecho a la protección legal contra los desalojos arbitrarios.

Es importante recordar que el nivel de protección de la seguridad de tenencia proporcionado depende de la legalidad de la tenencia en cuestión. No obstante, incluso residentes de asentamientos informales, que no tienen derecho legal a sus hogares, aun así tienen derecho a cierto grado de seguridad de tenencia: se revela en forma de un proceso legal debido y el respeto del principio de proporcionalidad en caso de desalojo; es decir, que por ejemplo no se recurra a la fuerza desproporcionada o a medidas discriminatorias (*cf.* OHCHR, Thiele, *Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights*, 2012: 6, 18). En lo que concierne a las IDP, dado que se encuentran dentro de un territorio nacional determinado y sus necesidades de vivienda presentan una responsabilidad estatal, un nivel relativamente alto de seguridad de tenencia debe proporcionarse por el Estado en cuestión. No obstante, esto no significa que a las IDP no se les puede trasladar de un asentamiento a otro, sino que se deberían evitar tales traslados salvo que sean justificados y realizados de manera proporcional (véase parte II, cap. 4.1). En el contexto de Libia, una motivación justificada para mover a las IDP sería sacarlas de entornos de uso público en los que tienen poca seguridad de tenencia, como por ejemplo las mencionadas instalaciones abandonadas de fábricas o sitios de construcción que en algún momento probablemente serán reclamados por empresas nacionales o extranjeras otra vez, por lo que el traslado de las IDP a lugares donde gozarán de más seguridad de tenencia y adecuación de vivienda sería inevitable. En tales casos, la proporcionalidad presenta el aspecto clave, así como el procedimiento: sería de importancia clave buscar el diálogo con las IDP afectadas, consultar e informarlas sobre los motivos de la mudanza, y, en el mejor de los casos, permitirles elegir entre varias opciones de refugio, como por ejemplo campamentos con mejores condiciones de vida y seguridad o, aunque en la situación actual de Libia sea poco probable de realizar, viviendas subvencionadas en zonas urbanas para facilitarles a las IDP una mejor reintegración social. Al establecer estrategias de refugio transitorio, frente al impacto y la destrucción inmensa que el conflicto bélico ha conllevado hasta la fecha, se debería tener en cuenta que será muy probable que algunas o tal vez incluso numerosas personas desplazadas opten por la integración local aun cuando sea posible su retorno, y por lo tanto algunas supuestas condiciones de vivienda temporales podrían convertirse

en situaciones duraderas.

Debido a la complejidad enorme de las distintas situaciones de vivienda actuales de las IDP a nivel nacional, el punto inicial más importante es garantizar que sea vigente al menos un fundamento jurídico a medio plazo para tratar las condiciones diferentes. Por ejemplo, en los casos en los que las IDP están establecidas en sitios de construcción, se debería comprobar el estado de estos últimos. Si no se tiene alternativas a mano y si se considera necesario que las IDP permanezcan en dichos sitios, será imprescindible elaborar métodos eficaces con el fin de garantizar tanto la seguridad y protección de las IDP como el respeto de los derechos de las empresas, en casos necesarios tras haber revisado la validez de sus contratos de inversión. El mismo procedimiento debería aplicarse a la aclaración de las condiciones en instalaciones públicas utilizadas como refugio por las IDP. Junto con los responsables, se deberían alcanzar acuerdos que establezcan los términos bajo los cuales la propiedad que poseen o administran puede ser utilizada por las IDP, sea mediante el pago de renta y/o la compensación eventual por cualquier daño causado por tal uso. Cuando no sea posible llegar a este tipo de acuerdos, por ejemplo debido a la negativa de los responsables de las instalaciones, será preciso preparar el traslado de los afectados a sitios donde se pueda garantizarles refugio adecuado, incluida la seguridad de tenencia.

Otro punto clave es averiguar la situación de las IDP alojadas en viviendas privadas. Por lo general, tales desplazados viven con familiares o tienen una relación arrendaticia a base privada. Diseminados en diferentes lugares por todo el país, resulta muy difícil encontrarlos y oficialmente registrarlos como IDP, tal como es posible a través de la recopilación de datos demográficos en el caso de desplazados alojados en campamentos y otros asentamientos colectivos. Aunque generalmente se piensa que el alojamiento privado es una condición más segura y propicia para poder acceder a servicios diversos como asistencia médica, educación, apoyo jurídico, etc., de acuerdo con el ACNUR en el contexto libio estas IDP se ven forzadas a recurrir a sus propios recursos para pagar el alquiler y cubrir otros costos adicionales. Como resultado, y por la falta común de empleo en el país, se enfrentan a un riesgo mayor de empobrecimiento y desalojos reiterados que las IDP en los campamentos colectivos. Este dilema se debe sobre todo al hecho de que a largo plazo hay más gastos que posibles ingresos. La invisibilidad de estas IDP urbanas, en particular, tal vez puede ofrecerles una seguridad mayor a corto plazo de detenciones y ataques arbitrarios, pero al mismo tiempo puede conllevar cierto grado de exclusión de la asistencia humanitaria. Como se indica en la *IDP Protection Monitoring Assessment, Libya* del ACNUR de febrero de 2016:

The majority of IDPs in Libya are staying in urban environments, with host community families, in rented accommodation or collective shelters. UNHCR reports that urban IDPs, who are less

visible than their counterparts in camps or rural settings, are often denied basic human rights; living in squalor and lacking physical security and freedom of movement. (UNHCR, IDP Protection Monitoring, Libya, February 2016, p. 3)

En todo caso, cabe resumir que sea el alojamiento en campamentos colectivos o en el sector privado, es la obligación y responsabilidad primordial del Estado y de las autoridades libias de garantizar que mientras que sigan desplazadas, las IDP deben tener acceso a viviendas adecuadas básicas, incluyendo la seguridad de tenencia. En el entorno de refugios colectivos, será fundamental prevenir los desalojos forzosos al gestionar de manera sostenible y mediante el diálogo el uso de los campamentos y organizar el traslado de los desplazados a otros refugios cuando sea necesario.

No obstante, teniendo en cuenta la guerra civil, la anarquía que conlleva a gran escala y la falta de recursos, es evidente que Libia no será capaz de hacer frente al problema del desplazamiento forzoso sin el apoyo persistente de la comunidad internacional.

6.1.4.3 El reto de elaborar soluciones duraderas y ofrecer compensaciones para las IDP

Frente a la anarquía extensa, los actuales problemas de seguridad y las violaciones masivas de los derechos humanos en Libia, el regreso seguro y la recuperación de propiedades perdidas o abandonadas por las IDP en la mayoría de los casos todavía no parece realista.

Por lo tanto, se puede suponer que una de las medidas más importantes es la prevención del desplazamiento continuo en el futuro. Como se ha destacado antes, la publicación de informes por ONGs como Amnistía Internacional y *Human Rights Watch* ha contribuido a aclarar que los actos de desplazamiento constituyen graves violaciones de los derechos humanos y en muchos casos incluso pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad (véase parte III, cap 5.1.2 y 5.1.6). Dadas las circunstancias, la comunidad internacional y los agentes humanitarios involucrados deberían apoyar de manera persistente a las autoridades gubernamentales libias y hacer hincapié en que la resolución de conflictos locales a través de la violencia y el desplazamiento es inaceptable en un supuesto Estado democrático basado en el respeto del Estado de derecho. Por lo tanto, mientras que posibles soluciones voluntarias sigan estando fuera del alcance de los desplazados, sería de importancia fundamental que las IDP afectadas sean tenaces en el intento de documentar sus reclamaciones de propiedades lo más detallado posible (*cf.* UNHCR, *IDP Protection Monitoring, Libya, February 2016*, p. 8, 19). Sin embargo, en lo que concierne a las IDP de comunidades perseguidas, como por ejemplo los tawerghanos, se debería proceder con mucha cautela, dado que se enfrentan a una firme resistencia a su regreso por las propias autoridades locales, como el Consejo Local de Misrata, que gozan tanto de influencia

política como de control físico sobre sus bienes.

Por este motivo, la recopilación y el resguardo de las pruebas de reclamaciones de propiedades tanto individuales como comunitarias podría realizarse mediante diferentes maneras: en la medida de lo posible, las comunidades de IDP deberían compilar y guardar toda documentación formal comprobando sus derechos de propiedad, incluidos también documentos menos formales como por ejemplo facturas de servicios públicos. Asimismo, de ser posible, las autoridades responsables deberían poner a disposición para las IDP la documentación oficial de los archivos públicos para ayudar a posibilitar la aclaración de la distribución de las propiedades. El desarrollo de tales mecanismos claramente incumbe a las autoridades gubernamentales actuales, pero debido a las numerosas crisis que sufre el país, es evidente que no se pueden esperar progresos rápidos al respecto.

Otra medida que se debería adoptar es fomentar el proceso de sensibilización y del diálogo dentro de las comunidades de IDP. Mediante el intercambio de datos, sería imperativo establecer redes que permitan la rápida difusión y discusión de información relacionada con la situación de los bienes abandonados y posibles medidas que permitan su recuperación. A este respecto también sería fundamental aclarar de antemano con representantes de las diferentes comunidades afectadas a qué tipo de soluciones duraderas aspiran, y asegurar que estén involucrados activamente en la toma de decisiones tan determinantes. Tales discusiones deberían llevarse a cabo acorde con las normas internacionales relativas al retorno y la restitución, como determinadas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

Es importante recordar que tanto soluciones voluntarias duraderas como la restitución de bienes son cuestiones relacionadas con los derechos humanos que no se interfieren; es decir, a todas las IDP se les reconoce el derecho a elegir libremente dónde quieren vivir dentro de su propio país y todas las IDP que han perdido injustamente sus bienes tienen derecho a restitución como medio preferente de reparación (*remedies*), ya sea que decidan o no regresar (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998), Principios 28 y 29; Principios Pinheiro (2005), Principio 2). El objetivo del fomento de tales discusiones por supuesto no debería conllevar presión sobre los afectados en cuanto a su toma de decisiones sobre su retorno o su integración en otro lugar. Más bien mediante responsables y asesores principales, como por ejemplo el mencionado Ministerio de Asuntos Sociales (véase parte III, cap. 6.1), se debería alentar a las IDP a que estén conscientes de los obstáculos concretos que tendrían que afrontar en caso de regreso o integración local, de sus propias capacidades para superar tales retos y del papel que las autoridades y otros agentes pueden desempeñar con el fin de asistirles eficazmente. En estas discusiones, las cuestiones relacionadas con la propiedad serán claramente de gran importancia, pero también serán fundamentales otros temas complejos, tales como la seguridad, la mitigación de

discriminación y el acceso a educación, empleo y subsistencia general. En última instancia, este intercambio de datos, las discusiones y el diálogo deberían ayudar a desarrollar enfoques de soluciones duraderas y sostenibles permitiendo tanto las opciones de retorno como de reintegración. Además, mediante la participación activa de las IDP, se facilitará la determinación de necesidades y dificultades, y las comunidades afectadas podrán presionar directamente a las autoridades gubernamentales en lugar de esperar pasivamente a decisiones sobre su destino.

En lo que concierne al apoyo de reconstrucción de casas dañadas por la guerra, también para IDP de comunidades no perseguidas que siguen viviendo en sus ciudades de origen, los actores humanitarios deberían abogar por medidas de reconstrucción que se realicen de manera eficaz, sin demora y justas sin favorecer a ninguna comunidad o ciudad por su apoyo a Gadafi o su oposición al antiguo régimen (como p.ej. Sirte o Misrata, respectivamente). En este caso, programas de reconstrucción podrían promover el proceso de reconciliación al reconocer que el conflicto bélico cobró numerosas víctimas en ambas partes, por lo que la reconstrucción presenta una necesidad urgente para todo el país con el fin de poder avanzar y superar lo acontecido y los daños sufridos.

Debido al gran número de refugiados que se encuentra en Libia, así como otros individuos perseguidos de origen extranjero, es imprescindible asegurar su seguridad física y su seguridad de tenencia en caso de que se enfrentan a desalojos arbitrarios de sus hogares. Ante la incapacidad de las autoridades estatales de restablecer un Estado de derecho, graves violaciones de derechos humanos y por motivos racistas, sobre todo contra los refugiados de origen subsahariano siguen dominando las circunstancias actuales en el país, y las condiciones de vivienda de este grupo de personas son insostenibles. Por lo tanto, en lo concerniente a las personas que ya han sido desalojadas, se puede suponer que no tienen perspectivas para recuperar sus hogares. Consecuentemente, es fundamental abordar estos problemas y tomar medidas adecuadas. Entre ellas destacan las siguientes:

- dado que en la sociedad libia tendencias de racismo son extendidas, sobre todo contra personas de piel oscura, es de importancia esencial asegurar que a largo plazo el entendimiento jurídico del derecho internacional excluya la discriminación en la elaboración de políticas nacionales. En particular, es importante incluir a los no ciudadanos en cuanto a la seguridad de tenencia, y ayudar a los desalojados o bien a recuperar sus hogares de forma legal o, si sus viviendas están sujetas a reclamaciones legítimas por parte de arrendatarios oficiales de la era pre-Gadafi, a encontrar hogares alternativos. Estos enfoques deberían realizarse mediante programas de asistencia social y en materia de vivienda, posiblemente con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales, sobre todo si se trata de refugiados perseguidos y de residentes legales de larga duración. Tales conceptos relacionados con la no discriminación general respecto a cuestiones de

vivienda y propiedad también deberían incorporarse en las políticas y la legislación de la nueva Libia.

- Muchos refugiados y no ciudadanos se encuentran en situaciones precarias sin recursos y sin hogares, frecuentemente ya desde 2011. Por lo tanto, la inclusión de este grupo de personas en programas humanitarios tiene que ser garantizada con el fin de poder atender y satisfacer sus necesidades de manera adecuada.
- Debido a su estado indefinido en Libia sin protección jurídica garantizada, a nivel internacional sería conveniente aspirar a una sensibilización más extensa frente a este grupo de personas, dado que sin ninguna concienciación clara sobre su situación, tampoco se podrá ejercer presión alguna sobre las autoridades libias para que respeten los derechos de los refugiados y no ciudadanos perseguidos.

6.1.5 Recomendaciones de reformas jurídicas para abordar las reclamaciones relativas a la restitución de viviendas, tierras y propiedades

Tanto para las IDP como para los refugiados y otros grupos vulnerables será indispensable atender sus demandas de propiedad relacionadas con las confiscaciones bajo el régimen de Gadafi con un alto grado de sensibilidad y empatía conforme con las necesidades de los afectados para poder asegurar soluciones justas y sostenibles. Ya en marzo de 2013, bajo el régimen del GNC, se implementó el proceso de derogar o modificar ciertas leyes y políticas de la era de Gadafi respecto a cuestiones de tierra y propiedad, por lo que también la Ley No. 4 de 1978, que convirtió todas las viviendas en la propiedad de sus arrendatarios, fue reformada al abordar diversas cuestiones relativas a compensaciones e indemnizaciones (*cf.* USAID 2013: 5). En este contexto, y al tener en cuenta la complejidad de los problemas, es de importancia fundamental evitar de simplificarlos al tratar de anular toda política de la era de Gadafi de manera uniforme y sustituirla por completo por nuevos procedimientos legislativos.

En cambio, las normas que se tendrán que elaborar para poder abordar este legado histórico deberían facilitar un enfoque equilibrado que considere no sólo los derechos históricos de los propietarios, sino también los intereses y necesidades más básicas de una parte significativa de la sociedad libia que hoy en día sigue dependiendo de las políticas y normas establecidas todavía durante el régimen de Gadafi. Las recomendaciones siguientes hacia una reforma jurídica a largo plazo tienen en cuenta la importancia de estas cuestiones fundamentales, no sólo para las respuestas humanitarias al desplazamiento, sino también para la justicia transicional, el establecimiento de un Estado de derecho, la consecución de la paz, así como para la seguridad y estabilidad en la nueva Libia:

Ofrecer compensaciones adecuadas para los desplazados que cumplan con las normas internacionales pertinentes al respecto:

- es importante recordar que las únicas fuentes de derechos para las IDP son el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Los *Guiding Principles on Internal Displacement* no constituyen ninguna fuente de derecho y no son legalmente vinculantes como tal. Únicamente reafirman las normas vinculantes y brindan directrices sobre la manera en la que deberían aplicarse estas normas a las necesidades de las IDP. No obstante, la ley sobre refugiados ha servido como referencia para la elaboración de los *Guiding Principles*. Por lo tanto, aunque no es directamente aplicable a la situación de las IDP, se ha recurrido a dicha ley con el fin de proponer normas pertinentes para la protección de las IDP.

En lo que concierne a la cuestión de las soluciones duraderas, tendrá que ser garantizado que son los desplazados mismos los que deciden sobre sus destinos, o sea si desean regresar a sus hogares originales deberán recibir apoyo eficaz para poder superar los obstáculos que conlleva su regreso, y aquellos que deseen permanecer donde estén desplazados o si eligen reasentarse en un tercer lugar del país, también necesitarán apoyo hasta que se hayan integrado en las comunidades locales.

En relación con la susodicha referencia de las normas internacionales relevantes de la ley sobre refugiados con los *Guiding Principles*, cabe mencionar el Principio Rector 15 que declara:

Los desplazados internos tienen derecho a: buscar seguridad en otra parte del país; abandonar su país; solicitar asilo en otro país; y recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro. (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998), Sección III, Principio 15)

La prohibición del retorno forzoso a zonas de riesgo se deriva de la prohibición de ‘expulsión’ o ‘devolución’ (*refoulement*) según la ley sobre refugiados, pero con aplicación nacional, por lo que también se denomina ‘prohibición de devolución interna’³⁰².

- En cuanto a los casos en los que los desplazados hayan sido desposeídos de sus viviendas, tierras y propiedades, se les debería proporcionar recursos jurídicos eficaces, independientemente de si los afectados decidan regresar o no.

De todos modos, en el contexto libio será imperativo considerar los siguientes aspectos:

- las reparaciones de propiedad pueden consistir o bien en la indemnización física de la propiedad perdida para las IDP, o en una indemnización mediante recursos financieros o propiedades alternativas de valor comparable a las propiedades perdidas (*cf.* UNHCR, *IDP Protection Monitoring, Libya, February 2016*, p. 39). En general, como mencionado en la parte III, capítulo 6.4.3, la indemnización no debería ser una opción preferible a la

³⁰² UNHCR, Global IDP Project, Reach Out. A refugee protection training project, “Optional Module. Internally Displaced Persons (IDPs)”, 2005.

restitución física, a menos que las IDP la elijan voluntariamente o la restitución no sea posible por razones justificadas (Principios Rectores (1998), Principios 28 y 29; Principios Pinheiro (2005), Principio 2). Sin embargo, las normas que determinen los recursos ofrecidos en los diferentes contextos respectivos deberían tener en cuenta los diferentes factores e intereses de todas las partes involucradas. Sólo en caso de imposibilidad, se aceptarán otras formas de indemnización como la compensación financiera. Como señalado anteriormente, las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de ayudar a las IDP regresadas y/o reasentadas a recuperar al máximo posible sus bienes que abandonaron o de los que fueron desposeídos por su desplazamiento. Si la recuperación de los bienes no es posible, las autoridades competentes deberán proporcionar ayuda a estas personas al ofrecer una indemnización adecuada u otra forma de reparación equitativa (*cf.* Principios Rectores (1998), Principio 29.2).

- Cabe recordar que el desplazamiento arbitrario constituye una violación grave de los derechos humanos y por lo tanto requiere de recursos adecuados. No obstante, hay que estar consciente de que no todas las confiscaciones decretadas por el régimen de Gadafi equivalen a violaciones de derechos humanos. En virtud del derecho internacional, los Estados mantienen cierto margen de discrecionalidad para expropiar e incluso nacionalizar tierras, especialmente si tiene un propósito público, si es realizado en el respeto de los derechos de los desposeídos y si los afectados reciben indemnizaciones adecuadas (*cf.* López Escarcena 2014: 95). Sin duda, el procedimiento del régimen de Gadafi tanto respecto a las expropiaciones como a las indemnizaciones no cumplía efectivamente con normas internacionales; no obstante, no se puede negar que algunos esfuerzos al respecto aun así se llevaban a cabo (véase parte III, cap. 6.1). Lamentablemente, hasta la fecha no se puede constatar nada semejante sobre el despojo continuo de numerosas comunidades de desplazados que siguen viviendo en condiciones precarias sin ningún apoyo estatal perceptible. Por lo tanto, es esencial que las autoridades libias traten las cuestiones relativas a la propiedad de las IDP con prioridad y que no demoren más con el cumplimiento de las normas internacionales vigentes.

Pese a los impactos desastrosos que han causado tanto el desplazamiento forzado como las expropiaciones forzosas en la sociedad libia, con respecto al establecimiento de procedimientos para facilitar la restitución de la propiedad de las IDP perseguidas, Libia goza de una ventaja sustancial comparado con otros entornos:

- teniendo en cuenta los motivos principales de los desalojos forzosos, o sea castigar o expulsar ciertas comunidades percibidas como lealistas con el régimen de Gadafi en lugar de adueñarse de

sus propiedades por intereses propios, en numerosos casos se ha registrado relativamente poca ocupación de los bienes abandonados por las IDP, como demuestra también el ejemplo de Tawergha. Por lo tanto, no necesariamente se requeriría de leyes particulares de restitución para que la mayoría de las IDP afectadas pudiera regresar a sus hogares³⁰³.

- No cabe duda de que será un asunto altamente complejo determinar en cuáles de los casos se deberá recurrir a la restitución o la indemnización, dado que las dos opciones evidentemente no se pueden ni deben excluir. Será de importancia fundamental proporcionar indemnización adecuada no sólo en casos en los que la restitución no sea posible, sino también cuando propiedades recuperadas han sido destruidas ilícitamente para posibilitarles a los afectados la reconstrucción de sus hogares.

Garantizar imparcialidad en cuanto a los recursos de propiedad común de las IDP y otras comunidades, tanto jurídica como políticamente:

como hemos estudiado en el capítulo 5, en cuanto a la aplicación de las normas internacionales en las que deberían basarse las soluciones duraderas para las IDP, las autoridades libias tienen que abordar las preocupaciones e intereses de las comunidades y autoridades locales que siguen oponiéndose al retorno de las IDP y la restitución de propiedad. Se puede suponer que las reparaciones serán más eficaces y sostenibles y el retorno más seguro si son al menos aceptados por las autoridades y comunidades locales en el lugar de origen de las IDP. No obstante, sin ninguna sensibilización profunda a nivel nacional frente a las injusticias y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por todas partes durante los últimos años, no será posible desarrollar estrategias procediendo del reconocimiento de que el desplazamiento permanente de las comunidades perseguidas no es un castigo colectivo ‘justificado’, sino que constituye un grave incumplimiento de las obligaciones de Libia en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es ineludible considerar los siguientes aspectos:

- por parte del gobierno nacional, será crucial que apoye activamente la (futura) resolución de la crisis a través de negociaciones en cuanto a los conflictos y controversias territoriales que ya han causado escisiones alarmantes en la sociedad libia. Asimismo, las autoridades y el gobierno deberían garantizar que acuerdos locales sean conformes con las obligaciones internacionales de Libia, asegurar su cumplimiento y prevenir infracciones continuas con las normas del derecho internacional.
- El gobierno también tendrá que restablecer la seguridad básica en todo el país, un Estado de derecho y un sistema judicial operativo. Es evidente que sin seguridad será imposible iniciar el

³⁰³ Al contrario, en contextos como la guerra en Bosnia (1992-95), las conquistas territoriales y bienes expropiados de los bosnios musulmanes se refundieron activamente a través de la redistribución de propiedades conquistadas a lealistas con las fuerzas del ejército yugoslavo, principalmente de origen serbobosnio. Ante incontables cuestiones de restitución e indemnización, esta política se ha convertido en un desafío histórico no resuelto hasta la fecha (cf. ROSER, Thomas, “Der Krieg, der nicht vergeht”, 05.04.2017).

retorno de las IDP perseguidas a sus lugares de origen, igual que sin una justicia eficaz no será posible restringir y evitar conflictos futuros al respecto. El establecimiento exitoso de un Estado de derecho significaría un verdadero cambio en el país hacia una jurisdicción imparcial.

- Dado que el régimen de Gadafi se caracterizaba por una política de concesión o denegación en la que inversiones públicas no constituían ninguna responsabilidad del Estado, sino meramente recompensaciones para lealistas, es de importancia crucial que en la nueva Libia cualquier proyecto de reconstrucción y el desarrollo de infraestructura se realice de manera imparcial. Por lo tanto, los programas y proyectos de reconstrucción con el fin de apoyar a las IDP que opten por regresar deberían beneficiar a la población entera asentada en el lugar de origen sin perjudicar a nadie.

Apoyar la integración local de las IDP, si no desean regresar:

- ante los impactos destructivos que los levantamientos de 2011 y la guerra civil desde 2014 han provocado, es de esperar que un número significativo de IDP simplemente no tenga la posibilidad de regresar o recuperar sus propiedades. Además, mientras que no exista una política gubernamental estable sobre soluciones duraderas con las capacidades de imponerse, y mientras que no se pueda garantizar que las IDP tengan la oportunidad de regresar voluntariamente bajo circunstancias seguras, deberán tener acceso a refugio adecuado y requerirán apoyo hacia una mayor integración local donde estén desplazadas. Una vez más, serán el gobierno y las autoridades libios, junto con el apoyo de la comunidad internacional, los que tienen la responsabilidad principal de implementar el derecho de las IDP a elegir libremente dónde quieran vivir dentro de su país. Tanto en los casos de integración local como en los casos de retorno, las comunidades locales afectadas por las decisiones de las IDP tendrán que ser sensibilizadas frente a los derechos de los desplazados, así como a las medidas que se adopten al respecto para asegurar que la reintegración de las IDP en la sociedad no incremente la actitud hostil dada en muchos casos por las comunidades vecinas.

En entornos de desplazamiento prolongado, la mencionada seguridad de tenencia constituye una condición imprescindible para la integración. En casos en los que la titularidad de las propiedades en cuestión esté aclarada, la seguridad de tenencia podría lograrse mediante concesiones duraderas (en lugar de temporales) de derechos a la vivienda en la que estén alojadas las IDP. En otros casos, las IDP deberán recibir apoyo en la búsqueda por una vivienda propia.

Asegurar que las cuestiones relativas a las viviendas, tierras y propiedades estén incluidas en el debate sobre la justicia transicional:

es importante tener en cuenta que el desplazamiento forzoso y la expropiación de bienes no meramente presentan un evento o resultado provocados por la guerra en Libia, sino una

consecuencia violenta del pasado del país con impactos enormes para el actual periodo de transición y el futuro:

- en lo que concierne a los derechos de las IDP y otros grupos vulnerables en relación con las viviendas, tierras y propiedades es ante todo una cuestión de la justicia transicional y la reconciliación nacional. Una reconciliación nacional verdadera no sólo requerirá que se asuma la responsabilidad por los crímenes de Gadafi, sino que también se aborden los castigos colectivos sufridos por las comunidades perseguidas consideradas como lealistas y cómplices de tales crímenes. Este castigo ha adoptado principalmente la forma del desplazamiento y despojo forzado de bienes, tal como se revela extremadamente en el caso de los tawerghanos.

Como resultado, la rehabilitación de las comunidades desplazadas a la condición de ciudadanos iguales será un aspecto primordial de cualquier respuesta significativa a su desplazamiento, así como una condición necesaria para un proceso de reconciliación nacional sostenible basado en el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos libios.

- Cabe mencionar que muchos de los grupos castigados por sus vínculos con el régimen de Gadafi han reconocido su propia responsabilidad por atrocidades cometidas y expresaron su voluntad de perdonar las represalias desproporcionadas que a menudo se han adoptadas contra ellos. En este contexto, el ejemplo más notable es la comunidad desplazada de Tawergha que ofreció una disculpa formal a la ciudad de Misrata en febrero de 2012, que, debido a la falta significativa de diálogos previos de reconciliación entre las dos comunidades enemistadas fue rechazada por el Consejo Local de Misrata (véase parte III, cap. 5.1.7). Sin embargo, puede representar un inicio ineludible hacia un proceso en el que tanto el victimismo como la responsabilidad por los crímenes cometidos deben ser reconocidos por ambas partes; pero hasta la fecha, el poder político y militar sigue estando en su mayor parte en manos de antiguos opositores de Gadafi.

Sin duda, el concepto de una reconciliación negociada significaría conceder y llegar a acuerdos recíprocos en los que se esperaría de las comunidades perseguidas tolerar cierto grado del daño que se les había hecho como precio de ser rehabilitadas en la comunidad política libia, así como para obtener el consentimiento para regresar en los casos en los que estén desplazadas. Se puede suponer, por lo tanto, que son las víctimas del desplazamiento las que tendrán que llevar el peso de conceder con el fin de lograr la reconciliación. Esta conciencia representa un desafío enorme al concepto de los derechos humanos, según el cual el desplazamiento arbitrario constituye una violación grave y las víctimas deben tener derecho a recursos al respecto, incluida la restitución e indemnización. También sugiere que los esfuerzos para promover una respuesta al desplazamiento basada en los derechos serán mejores si están incorporados en un discurso político orientado en una resolución sostenible y duradera del conflicto, más allá de los problemas

relativos a las viviendas, tierras y propiedades.

Desarrollar una estrategia de promoción conjunta e internacional de enfoques diferenciados respecto a cuestiones de HLP en un entorno transicional:

como discutido en los subcapítulos anteriores, es evidente que la resolución de los problemas de propiedad de las IDP en Libia está estrechamente vinculada con el reto significativo de abordar las confiscaciones de propiedad efectuadas todavía durante el régimen de Gadafi:

- tal como se ha indicado, muchas personas desplazadas, y en particular las de Misrata, pudieron haber sido desalojadas de hogares que habían adquiridos en relación con la Ley No. 4, y es posible que sus demandas no podrán ser consideradas como se espera. En el marco de los actos del régimen de Gadafi, a muchas comunidades de IDP perseguidas fueron concedidos derechos significativos a sus tierras. Pero las consecuencias de cualquier decisión adoptada por las autoridades libias sobre cómo resolver el legado de las cuestiones de propiedad van mucho más allá de estas preocupaciones humanitarias. Desde un punto de vista político, la forma en la que se resuelven los problemas de propiedad será un momento decisivo para Libia, un elemento esencial para el desarrollo económico del país, un indicador clave para la adhesión a las normas del Estado de derecho y un factor determinante para la estabilidad estatal. Hasta la fecha, lamentablemente el desarrollo no ha sido prometedor, con un gran número de actores políticos en Libia abordando los conflictos nacionales de manera radical sin ningún fundamento diplomático y estrategias claras sobre cómo encontrar una resolución pacífica.

- Si bien la discusión sobre este asunto rebasa el campo de investigación de la presente tesis, conviene señalar que para las IDP probablemente sería mejor un enfoque alternativo con la capacidad de permitir la resolución de los problemas relativos a la propiedad en concordancia con el tratamiento de las injusticias más graves de la era de Gadafi, y de esta manera prevenir el surgimiento de nuevos conflictos sociales en el futuro. Si existe la posibilidad política de realizar tal enfoque, el presente análisis sugiere que la cuestión de la propiedad debería resolverse de acuerdo con normas claras establecidas en una nueva legislación que considere tanto los derechos de los demandantes y titulares desposeídos como los derechos de los ocupantes subsiguientes de propiedades reivindicadas.

- En lugar de preservar o derogar completamente los actos jurídicos de Gadafi, puede resultar inevitable que, basado en evidencia, la nueva asamblea constitutiva trate de alcanzar un equilibrio entre reconocer el grado de dependencia de los ocupantes actuales de las propiedades confiscadas y cumplir con los derechos de los anteriores propietarios desposeídos. Antes de debatir sobre la anulación de la Ley No. 4, debería posibilitarse la revisión de los casos anteriores a 2011 todavía pendientes de un proceso de indemnización, con el fin de poder determinar mejor las diferentes categorías de demandantes y ocupantes actuales cuyos derechos serán objeto de debate. A este

respecto, para la asamblea constitutiva, la recogida de datos estadísticos sobre estos casos podría proporcionar una base empírica sólida para disponer de una directriz sobre cómo proceder en la legislación que tendrá que abordar y resolver cuestiones tan importantes.

Dado que el *Global Protection Cluster* no sólo trata problemas relacionados con la vivienda, la tierra y la propiedad, sino una amplia gama de sectores afectados como salud, agua, saneamiento e higiene, educación y protección de niños, acciones antiminas y coordinación multisectorial, a continuación será analizada su operatividad general y se discutirá en qué medida cumple con las normas oficiales ya expuestas en la parte I, capítulo 4.2. De esta manera, será posible contrastar los objetivos perseguidos con los esfuerzos realizados, y evaluar su aplicación en el caso real de Libia.

6.2 El *Global Protection Cluster* y su implementación en la crisis libia

En el momento de redactar estas líneas, en verano de 2017, los civiles en Libia siguen sufriendo los resultados del conflicto bélico, inseguridad, inestabilidad política y el colapso de la economía. Tal como hemos visto extensivamente en los capítulos anteriores, el impacto humanitario directo implica que cientos de miles de personas en todo el país viven en condiciones precarias, inseguras y en entornos de alto riesgo con poco o ningún acceso a asistencia sanitaria, medicamentos esenciales, alimentos, agua potable y limpia, refugio y educación. De acuerdo con la OMS, de la población libia total de 6,4 millones, unos 1,3 millones de personas, incluidas las IDP, repatriados, libios muy vulnerables aunque no desplazados, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo urgentemente requieren de ayuda humanitaria (WHO, “Libya Humanitarian Response Plan 2017”). También los migrantes y refugiados que transitan o permanecen en Libia están sufriendo bajo estas condiciones difíciles y frecuentemente son víctimas de abusos físicos, discriminación, trabajo forzado no remunerado, explotación financiera, violencia de género, detenciones arbitrarias y marginación. Asimismo, son víctimas fáciles de traficantes de personas que les prometen viajes de alto riesgo a través del mar Mediterráneo hacia Europa y les explotan o abusan financieramente en Libia. En un intento de llegar a Europa, miles de migrantes y refugiados siguen perdiendo la vida en el Mediterráneo en embarcaciones sobrecargadas.

En marzo de 2011, inmediatamente después del brote de la Revolución del 17 de febrero, las Naciones Unidas ya habían comenzado a lanzar un *planning and budgeting horizon*; inicialmente por tres meses para suministrar ayuda humanitaria a las zonas más reñidas en el este y oeste del país y a las zonas fronterizas de Túnez y Egipto. Denominaron un *Humanitarian*

Coordinator (HC) para la crisis libia con el fin de colaborar estrechamente con coordinadores residentes (*Resident Coordinators*) de Libia, Egipto y Túnez en la supervisión del apoyo humanitario y en la provisión de una plataforma de recuperación en un escenario posconflicto. En aquel entonces, el sistema de *clusters* ha sido formalmente activado con el establecimiento de ocho grupos, así como con dos grupos sectoriales adicionales para cubrir cuestiones de educación y necesidades multisectoriales de refugiados y otras personas desplazadas a través de la frontera. Pero debido al agravamiento del conflicto, este llamamiento urgente (*Flash Appeal*) fue prorrogado por otros tres meses con un horizonte temporal de planificación y presupuestación hasta principios de septiembre, en total para unas 1,6 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria en Libia y hasta 500.000 personas requiriendo ayuda fuera del país. Este llamamiento urgente revisado requirió USD 407,8 millones para lograr sus objetivos. Teniendo en cuenta la financiación recibida de USD 175 millones, ya en aquel entonces el *Appeal* revisado reveló necesidades no satisfechas de USD 232,8 millones (UN, *Regional Flash Appeal for the Libyan Crisis. Revision. 18 May 2011*, p. 1).

Desde entonces, el *Regional Flash Appeal for the Libyan Crisis* de las Naciones Unidas ha sido extendido cada vez más, adaptándose a las necesidades de las incontables víctimas del conflicto.

6.2.1 El *Humanitarian Response Plan 2017* para Libia

Generalmente, el *Humanitarian Response Plan* (HRP) está preparado para intervenir en emergencias repentinas o prolongadas que requieren de asistencia humanitaria internacional. El HRP articula la visión común de cómo responder adecuada y eficazmente a las necesidades evaluadas y expresadas de la población afectada. El desarrollo de un plan de respuesta estratégico significa un paso clave en el proceso de los programas humanitarios y sólo se lleva a cabo cuando las necesidades hayan sido comprendidas y analizadas a través del denominado *Humanitarian Needs Overview* (HNO) u otros procesos de evaluaciones conjuntas y/o análisis.

Esta acción humanitaria eficaz y fundamentada está coordinada por la OCAH, y se caracteriza por su compromiso con los derechos de las personas necesitadas, el fomento de la preparación y prevención, así como por la facilitación de soluciones sostenibles. La OCAH cumple su mandato a través de cinco funciones centrales:

- (1) la coordinación de la acción humanitaria en colaboración con agentes nacionales e internacionales;
- (2) la financiación humanitaria mediante la coordinación de llamamientos globales a la aportación de fondos humanitarios y la gestión de los fondos para la respuesta humanitaria a nivel mundial y nacional;

- (3) una política eficaz mediante el establecimiento de una agenda política humanitaria prospectiva basada en pruebas;
- (4) la defensa de los intereses de las poblaciones afectadas por desastres y conflictos al actuar en su nombre; y
- (5) la gestión de la información mediante la recopilación, el análisis y el intercambio de datos e informaciones humanitarias claves (cf. Humanitarian Response, “Humanitarian Programme Cycle”, 2017).

El denominado *Humanitarian Response Plan* para Libia estrictamente da prioridad a la prestación de apoyo vital. Fue implementado tras extensas consultas con colaboradores libios locales y un taller con más de cien participantes, de los cuales más de la mitad eran libios expertos en todos los sectores de *cluster* (OCHA 2016, *Humanitarian Response Plan. January-December 2017. Libya*). Todas las acciones previstas para 2017 tienen por objeto proporcionar remedios temporales y a corto plazo al colmar las lagunas en los servicios básicos, mientras que la comunidad internacional y sus asociados libios aspiran a fomentar soluciones más sostenibles a nivel económico, político y de seguridad. Es de importancia fundamental apoyar a los agentes humanitarios sobre todo en su misión de salvar vidas al mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos esenciales, así como promover otros servicios sociales básicos como alimentos, agua, higiene, saneamiento, vivienda y educación, y proteger a los libios, inmigrantes y refugiados más vulnerables (OCHA 2016, *Humanitarian Needs Overview 2017. Libya*, p. 5s.). Con el fin de garantizar que los esfuerzos nacionales de la respuesta humanitaria sean adaptados a las circunstancias y necesidades actuales en Libia, las organizaciones internacionales colaboran estrechamente con sus asociados libios.

La estrategia de respuesta se basa en unos pilares claves, fundamentados tanto en el contexto libio como en los compromisos globales surgidos de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016³⁰⁴ y el *Grand Bargain*³⁰⁵: (1) la comunidad humanitaria continuará apoyando a las autoridades nacionales, los comités locales de crisis, así como a ONGs nacionales y locales en un espíritu de asociación para fortalecer su capacidad como primeros intervinientes en situaciones de violencia extrema y costos humanos en un conflicto; (2) pese a los grandes desafíos de operar en Libia

³⁰⁴ La primera Cumbre Humanitaria Mundial que tuvo lugar en Estambul del 23 al 24 de mayo de 2016 fue un llamamiento mundial a la acción del ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La Cumbre tenía tres objetivos principales: (1) reinspirar y revitalizar un compromiso con la humanidad y la universalidad de los principios humanitarios; (2) iniciar un conjunto de acciones y compromisos concretos que permitan a los países y las comunidades prepararse y responder mejor a las crisis en el mundo; (3) compartir las mejores prácticas que pueden ayudar a salvar vidas en todo el mundo, centrarse en las personas afectadas en la acción humanitaria y aliviar su sufrimiento. La Cumbre generó más de 3.000 compromisos de acción y más de 2.500 armonizaciones con los compromisos básicos de la Agenda para la Humanidad. Además, se iniciaron o se reforzaron más de veinte iniciativas con el objeto de mejorar la vida de las personas afectadas por las crisis humanitarias (ONU, “Cumbre Humanitaria Mundial”, 2017).

³⁰⁵ Uno de los aspectos más destacados de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 fue el *Grand Bargain*, un compromiso común para servir mejor a las personas necesitadas. Treinta representantes de donantes de la OCDE y agencias de ayuda elaboraron una serie de reformas, así como cincuenta y un compromiso para hacer más eficaces la financiación y la respuesta humanitaria (Agenda for Humanity, *Initiative Grand Bargain*, 2016).

debido a la violencia enorme, la inseguridad y la dificultad de gestionar el apoyo humanitario eficazmente, serán los colaboradores ejecutantes los que tendrán que comprometerse con las poblaciones afectadas e identificar las necesidades prioritarias para la respuesta humanitaria; (3) es imprescindible tener en cuenta que ningún sector a solas es capacitado para aliviar de manera integral el sufrimiento de las personas afectadas, por lo que los asociados han adoptado un enfoque multisectorial para poder abordar las múltiples necesidades de las víctimas; (4) el plan claramente señala las interrelaciones entre intervenciones de estabilización y de desarrollo, tanto en curso como previstas más allá de la respuesta humanitaria. Estos vínculos son fundamentales en el contexto libio, dado que es indispensable que la comunidad internacional implemente procesos de desarrollo y estabilización con una sostenibilidad a medio y largo plazo. En lo que concierne a los medios financieros, para 2017 se requirieron un total de USD 151 millones para cubrir los numerosos sectores y actividades humanitarias, que con los fondos de USD 71.078.157 (estado: 07.09.2017; Humanitarian Response, “Libya 2017 Funding”) no han sido alcanzados hasta la fecha.

Los sectores principales del HRP para Libia abarcan *Health* (salud), *Protection* (protección), *Shelter and NFI* (*non-food items*; materiales para refugio y no alimentarios), *WASH* (*Water, Sanitation & Hygiene*; agua, saneamiento e higiene), *Food Security* (seguridad alimentaria) y *Education* (educación), así como *Refugee and Migrant Response* (respuesta a refugiados y migrantes), de los que los sectores con el mayor número de personas necesitadas presentan *Health* y *Protection* con un total de 1,3 millones de personas, respectivamente. Como muestra el siguiente gráfico, unas 940.000 serán destinatarias del HRP en el sector de la salud, y unas 680.000 en el sector de la protección, lo que revela que, al igual que en los demás sectores, no todos los afectados podían contar con apoyo en el marco del *Humanitarian Response Plan* para 2017:

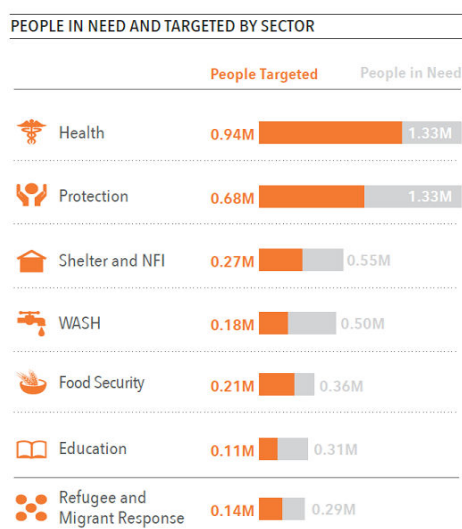


Gráfico 5: Personas necesitadas y destinatarias por sectores (OCHA, HRP 2017, p. 5).

6.2.2 Las prioridades esenciales del HRP 2017 en la crisis libia

La crisis humanitaria en Libia se caracteriza gravemente por inseguridad y violencia masiva que consecuentemente constituyen las principales causas de las condiciones de vida peligrosas y las infraestructuras dañadas en el país; las circunstancias dadas obstaculizan significativamente el restablecimiento de la estabilidad política. El brote de la anarquía en gran parte del país no sólo ha perturbado la operatividad de los servicios públicos, sino también ha agravado extremadamente el desplazamiento forzoso. La crisis económica también tiene sus impactos desastrosos en la crisis humanitaria, con la combinación de inflación, devaluación del dinar en el mercado negro, el aumento de los costos de los bienes básicos y la reducción de los salarios llevando a una reducción significativa del poder adquisitivo de la población libia (*cf.* Humanitarian Access Team 2017: 5). Además, el deterioro continuo del Estado de derecho lleva a un aumento constante de criminalidad, violaciones de los derechos humanos e impunidad. Secuestros y detenciones arbitrarias se producen con frecuencia. En numerosas regiones en todo el país y en ausencia de fuerzas policiales, grupos armados no sólo han asumido el papel de aplicar la ley, a menudo con carácter arbitrario, sino también el control sobre el transporte, la distribución y la venta de gasolina y, entre otros, incluso de productos alimenticios básicos (*ibíd.* 18). Estos desarrollos han favorecido cada vez más el aumento de una economía sumergida con incrementos de precios apenas pagables para la población civil³⁰⁶.

El siguiente gráfico presenta de manera concisa tanto los impactos de la crisis como los desafíos y consecuencias humanitarias:

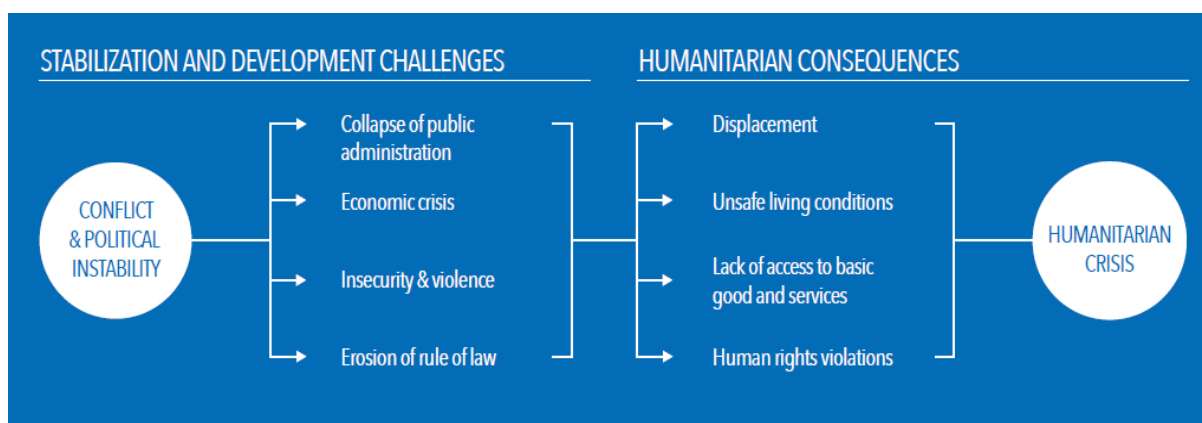


Gráfico 6: Impactos, desafíos y consecuencias humanitarias de la crisis libia (OCHA, HNO 2017, p. 7).

³⁰⁶ La economía sumergida y sus efectos han impactado el precio y la distribución de pan, uno de los elementos más importantes de la dieta libia. La disminución del suministro nacional de harina subsidiada, que normalmente se vendía a las panaderías locales, y la demanda ya existente en el mercado negro de contrabandear harina al extranjero, así como otros productos subsidiados utilizados en la producción de pan, como por ejemplo el aceite, han contribuido al aumento de los precios: como resultado, el precio de una hogaza de pan hoy en día es cinco veces el precio, pasando de 0,05 dinares en 2014 a 0,25 dinares en 2017. La falta de los productos básicos consecuentemente también conlleva una producción limitada (HAT 2017: 18).

A través del *Humanitarian Needs Overview* para 2017 llevado a cabo por la OCAH en noviembre de 2016, se han identificado tres necesidades humanitarias prioritarias:

1. Asistencia médica y medicamentos esenciales

Por la crisis, el sistema de salud en Libia se encuentra al borde del colapso. Por lo tanto, cientos de miles de personas no tienen acceso a servicios de salud y medicamentos esenciales. Los hospitales y los centros de salud son dañados o destruidos; de los 98 hospitales encuestados, 16 están completamente cerrados y sólo cuatro revelaron una funcionalidad superior a 75%. Los médicos no tienen ni el personal, ni el equipo funcional o los recursos para poder trabajar eficazmente. Con la crisis persistiendo y las personas afectadas volviéndose cada vez más vulnerables y expuestas a los peligros incontrolables, la necesidad de servicios médicos capaces de actuar, así como de medicamentos disponibles a diario se convierte en un asunto muy crítico (*cf.* OCHA, HNO 2017: 5).

2. Protección de los grupos de personas más vulnerables

Como hemos analizado profundamente en los capítulos anteriores, la crisis en Libia se caracteriza por ataques frecuentes contra la población civil y la infraestructura, anarquía, un acceso limitado a seguridad, la falta de libertad de movimiento, una escalada alarmante de violencia de género, violaciones graves de los derechos de los niños y derechos de la mujer, así como un número creciente de accidentes por minas terrestres y artefactos explosivos causando heridos y muertos civiles (*cf.* GPC, “Mission Report Libya. 09-12 October 2016”, p. 2). Asimismo, en numerosos centros de detención, migrantes y refugiados siguen sufriendo de abusos masivos de sus derechos y viven en condiciones de vida precarias. En particular, los migrantes irregulares corren el mayor riesgo de ser detenidos arbitrariamente, por lo que constituyen uno de los grupos más vulnerables. De acuerdo con el HNO, la mayoría de las violaciones se cometen fuera de los centros de detención, donde muchos migrantes o bien están a merced de los traficantes de personas o arriesgan su vida al intentar encontrar trabajo (*cf.* OCHA, HNO 2017: 5).

3. Acceso a bienes y servicios esenciales

El acceso a bienes y servicios esenciales como agua potable, saneamiento, alimentación, vivienda y educación es un desafío enorme en toda Libia agravado principalmente por el conflicto bélico, la inseguridad y la crisis económica. Sin embargo, la gravedad del problema varía dependiendo de la extensión del daño infraestructural, de la inseguridad, la disponibilidad de recursos y la capacidad de adaptación de las poblaciones afectadas en las diferentes partes del país. Las personas que más necesitan asistencia humanitaria evidentemente son las que menos son capaces de recuperarse de los impactos de la crisis. Incluye a las IDP, repatriados y personas

específicamente sometidas a abusos y explotación con acceso limitado a protección, como las minorías étnicas, refugiados y migrantes (*ibíd.*).

Las necesidades humanitarias de las IDP, repatriados y personas no desplazadas con necesidades especiales: como se ha indicado anteriormente, en la actualidad, unas 1,3 millones de personas requieren urgentemente de ayuda humanitaria en toda Libia. Entre ellas, se encuentran alrededor de 241.000 IDP, 356.000 repatriados y aproximadamente unos 437.000 no desplazados (*ibíd.* 6). Las personas necesitadas se encuentran principalmente en las zonas orientales y occidentales de la costa, o sea las regiones más pobladas del país. No obstante, también existen zonas en las provincias del sur que revelan necesidades humanitarias urgentes, como por ejemplo en Aljufrah, Sebha y Ubari, donde el subdesarrollo y la pobreza agravan aun más el impacto del conflicto en las personas más vulnerables (véase anexo 5).

El conflicto prolongado, la inseguridad y la violencia, así como la crisis económica y la inestabilidad política continua han llevado al colapso de la administración pública, lo que da resultado a una incapacidad de proveer los servicios públicos más esenciales y proteger los derechos humanos de los ciudadanos libios, así como de los migrantes y refugiados. Como consecuencia, carecen de acceso a servicios básicos vitales. Estos incluyen:

- la atención médica de emergencia y medicamentos esenciales: como ha sido mencionado anteriormente, en lo que concierne al sector de la salud, sólo cuatro de los 98 hospitales encuestados desempeñan una funcionalidad por encima de 75% (OCHA, HNO 2017: 17);
- el acceso a agua limpia, instalaciones de saneamiento e higiene: unas 500.000 personas no tienen acceso a tales servicios. Debido a la crisis prolongada, la operatividad de la infraestructura básica, así como de redes de aguas residuales sigue agravándose. El 54% de las personas encuestadas informaron sobre una reducción significativa de la cantidad de agua potable, principalmente debido a la falta de electricidad y daños en los redes de abastecimiento. Asimismo, 33% informaron sobre un déficit enorme en la recogida de basuras (*ibíd.* 18);
- la disponibilidad de refugio adecuado e NFI: unas 552.000 personas requieren de asistencia para encontrar refugio de emergencia y materiales no alimentarios a causa de daños enormes en sus viviendas y en la infraestructura (*ibíd.* 20);
- el acceso a servicios de educación: más de 558 escuelas en el país ya no son operativas o sólo parcialmente, de las que 30 son destruidas completamente y 51 sirven como refugio de emergencia para IDP. Por lo tanto, se ha registrado un número creciente de niños que ya no tienen la posibilidad de ir a la escuela, sobre todo chicas. Especialmente niños

entre 15 y 17 años son un blanco particular para milicias, grupos extremistas y narcotraficantes. Pero es sobre todo la institución escolar la que puede proporcionar estabilidad, estructura y protección para niños con el fin de restablecer su rutina diaria y para poder recuperar de sus experiencias relacionadas con el conflicto y la violencia (*ibíd.* 21);

- la disponibilidad de seguridad alimentaria: 17% de las IDP están en situaciones de inseguridad alimentaria, debido sobre todo a su desplazamiento, la desorganización de los mercados y una disponibilidad limitada de productos básicos a causa de una producción severamente reducida a nivel nacional (*ibíd.* 16); y
- las IDP, así como los repatriados y no desplazados con necesidades especiales son expuestos a riesgos masivos de seguridad y altamente vulnerables por las violaciones de sus derechos.

Las condiciones de vida de los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo: frente a la crisis humanitaria, al igual que las IDP y libios no desplazados, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes se enfrentan a condiciones muy precarias. Pese al conflicto bélico, Libia sigue siendo un país de tránsito e incluso destino muy importante, sobre todo para africanos subsaharianos. No obstante, debido a su estatuto inseguro, es evidente que los aproximadamente 100.600 refugiados y 195.000 migrantes con necesidades especiales pertenecen a los grupos más vulnerables en Libia (*ibíd.* 6). En lo que concierne a los migrantes, con unos 381.463, el DTM de OIM llevado a cabo entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 identificó un número mucho mayor en el país (IOM, 28.04.2017). De acuerdo con informes sobre derechos humanos, a los refugiados y migrantes frecuentemente se les niega apoyo jurídico, y son arrestados y encarcelados arbitrariamente en centros de detención bajo condiciones inhumanas, así como expuestos a maltrato, tortura y extorsión. Sufren un estatus migratorio irregular, restricciones de movimiento, confiscaciones o la pérdida de sus documentos de identidad y/o de viaje, y discriminación de forma alarmante (*ibíd.* 10-14). Para traficantes de personas son víctimas fáciles al prometerles viajes de alto riesgo a través del Mediterráneo hacia Europa o por el abuso financiero y/o sexual. Al intentar de escaparse a Europa, miles de migrantes y refugiados siguen perdiendo sus vidas en el mar hacinados en barcas superpobladas. En este contexto, cabe mencionar que en los primeros cinco meses de 2016, la OIM registró unos 205.858 migrantes y refugiados llegados a Europa a través del Mediterráneo y unos 2.512 muertos. Como consecuencia de la seguridad fronteriza reforzada por la UE, en 2017 se registró un número mucho menor, con unos 71.029 migrantes y refugiados llegados, pero unos 1.650 muertos (Townsend, 03.06.2017). Por lo tanto, a largo plazo será fundamental hacer hincapié mucho más en el trato de las causas de la migración, influir

directamente en los países de origen de los migrantes, y apoyar a Libia a establecer condiciones de vida dignas para este grupo de personas más necesitadas.

El sufrimiento de mujeres y niños: al pertenecer a los más débiles en la sociedad, en particular las mujeres y niños han sufrido en esta crisis bajo violencia física, verbal y abuso psicosocial. Dada la presencia limitada o ausencia total de hospitales, centros de salud y consultorios específicos, las mujeres sólo tienen acceso limitado a servicios especiales de salud y obstetricia, así como tratamiento tanto físico como psicológico, sobre todo en los numerosos casos de violencia de género.

En cuanto a los niños, son particularmente las niñas que se han visto afectadas más gravemente por la crisis y enfrentadas a violencia de género. La falta de seguridad y protección a nivel nacional han llevado a muchos padres a sacar a sus hijas de la escuela y como último recurso arreglar su matrimonio en una edad muy temprana. Por lo general, los conflictos armados y la consiguiente crisis humanitaria en el país ha tenido un impacto desastroso en niños y jóvenes libios: como descrito anteriormente, con más de 500 escuelas ya no operativas o sólo parcialmente, más de 279.000 alumnos son afectados al ya no tener acceso a educación escolar. Al parecer, sobre todo en regiones más afectadas por el conflicto la situación sigue empeorándose cada vez más. Asimismo representan un blanco fácil para milicias, traficantes de personas y narcotraficantes.

En total, unos 439.000 niños requieren urgentemente de servicios de protección, así como apoyo psicosocial, servicios comunitarios de protección del niño y programas de reintegración para poder superar los traumas causados por los abusos y la violencia de género (cf. OCHA, HRP 2017: 8).

6.2.3 Los objetivos estratégicos del HRP 2017

En el marco del *Humanitarian Needs Overview* para 2017, el *Humanitarian Country Team* (HCT) de Libia ha identificado tres objetivos estratégicos principales para orientar una respuesta humanitaria concreta y eficiente. Estos fueron comunicados a través de varias evaluaciones de necesidades, análisis y consideraciones de carácter operativo:

1. Salvar vidas a través de un acceso seguro y digno a atención médica de urgencia y medicamentos esenciales: para la población civil libia y el HCT, una mayor disponibilidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria y medicamentos esenciales es una prioridad absoluta. Dado que la mayoría de los centros sanitarios están dañados o destruidos y el personal médico huyó del

país, cientos de miles de personas carecen de asistencia médica. Por ende, el acceso seguro a atención médica de urgencia no sólo tendrá que incluir medicamentos esenciales y suministros médicos, sino también recursos humanos como médicos especializados, enfermeras y técnicos. Mediante la estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, el apoyo por parte de la comunidad internacional se centrará en los centros sanitarios cercanas a las poblaciones necesitadas (cf. OCHA, HNO 2017: 5; HRP 2017: 9).

2. Proteger a los libios más vulnerables, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo: para la comunidad internacional, deberá ser de suma importancia proteger a estos grupos de personas. Al intentar reducir el impacto de minas terrestres y peligros de explosión, los asociados humanitarios tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de movimiento y el acceso a sus refugios. Será esencial proporcionar apoyo específico de protección, incluidos servicios jurídicos y psicosociales para los más vulnerables y con especial atención a las mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidades y sobrevivientes de tortura y violencia sexual. Los agentes humanitarios ayudarán a las víctimas maltratadas a superar lo vivido y recuperarse de sus traumas. También apoyarán la reintegración de niños reclutados forzosamente por grupos armados y la reunificación con sus familias (*ibíd.*).

3. Salvar vidas a través de un acceso seguro y digno a servicios sociales básicos de múltiples sectores: el acceso seguro a los bienes y servicios básicos como alimentos, agua potable, servicios de saneamiento, educación y una vivienda adecuada constituye una condición esencial para las personas necesitadas con el fin de poder satisfacer sus necesidades y cumplir con sus derechos a una vida digna. De acuerdo con el HRP 2017, mediante el suministro de alimentos, agua, higiene y NFI, la reparación de sistemas hidráulicos dañados, el suministro de materiales básicos de educación y recreación, así como el mejoramiento de las condiciones de vivienda, los asociados humanitarios harán el máximo esfuerzo para apoyar tanto al pueblo libio como a los migrantes y refugiados más necesitados.

6.2.4 La capacidad operativa del HRP 2017 y la cuestión del acceso a las regiones deprimidas

Desde principios de 2017, los agentes humanitarios han ampliado su presencia en Libia. De conformidad con los principios y normas humanitarios, el HCT sigue coordinando su apoyo junto con los demás esfuerzos de respuestas humanitarias nacionales e internacionales.

Desde la evacuación de gran parte del personal internacional en 2014, se han realizado algunos progresos en el restablecimiento de la presencia de agentes internacionales en el país. En 2016,

algunas ONGs internacionales reabrieron sus oficinas en Libia y la colaboración con los actores locales fue consolidada. Asimismo, el HCT inició misiones internacionales de apoyo para coordinar más estrechamente su asistencia con sus colaboradores nacionales, asesorarles y supervisar el trabajo de las organizaciones responsables de la ejecución. A través del personal nacional, también agencias, fondos y programas de la ONU han mantenido presencia en el país. No obstante, cabe destacar que por la difícil situación de seguridad, la mayoría de los agentes humanitarios sigue gestionando sus operaciones de respuesta para Libia a distancia desde Túnez. En un entorno tan complejo e inseguro como Libia, la meta de optimizar las capacidades de acción requiere una coordinación estrecha, tanto a nivel estratégico como operativo. Actualmente, hay un total de 38 agentes humanitarios activos en Libia, de los cuales 27 son organizaciones internacionales y 11 nacionales. En el marco del HRP 2017, unas 22 organizaciones han solicitado financiación adicional (OCHA, HRP 2017: 14). En colaboración con el HCT, y mediante mecanismos de coordinación dentro de los sectores respectivos, estas organizaciones no sólo proporcionan asistencia humanitaria, sino también aplican una amplia gama de programas. En cuanto a las agencias involucradas, por ejemplo para el sector de *Protection* en las regiones de Bengasi, Ghat, Murzuq, Sebha y Trípoli las agencias principales son *Save the Children*, DRC y CESVI, para el sector WASH y *Health* en toda Libia es UNICEF y la OMS, respectivamente, y para el sector de *Food Security* en diversas regiones del país es la FAO (véase anexo 6). Aparte de la coordinación de las diferentes agencias, el HCT también colabora estrechamente con las autoridades nacionales de Libia, las comunidades locales y diferentes instituciones como por ejemplo los comités locales de crisis y las autoridades municipales que generalmente suelen ser los primeros en responder a la violencia, el coste humano del conflicto y los daños infraestructurales. Por lo tanto, estos asociados locales desempeñan un papel clave en cuanto a la cooperación y coordinación de la ayuda humanitaria y son vitales en la respuesta a las necesidades de las personas afectadas.

En lo que concierne al acceso a la ayuda humanitaria en las regiones más deprimidas, cabe señalar que pese al desarrollo de mecanismos de coordinación cada vez más estrechos, operar en Libia sigue siendo muy peligroso e impredecible. Esto se debe a múltiples factores: amenazas graves de secuestro, también de personal internacional, la presencia de minas, la proliferación de incontables grupos armados anárquicos y el conflicto continuo tanto a nivel político como militar. Después de numerosas operaciones militares contra el EI, las fuerzas gubernamentales han recobrado el control sobre la mayor parte del país. Aunque sobre todo las fuerzas de Jalifa Haftar han logrado liberar numerosas regiones del control del EI, entre ellas también Sirte y Bengasi³⁰⁷,

³⁰⁷ Sputniknews, “Bengasi: Nationalarmee befreit zweitgrößte Stadt Libyens von Dschihadisten”, 06.07.2017.

el grupo terrorista sigue manteniendo algunas células en diferentes partes del país, lo que conlleva peligros enormes para los agentes humanitarios. Asimismo, la destrucción de la infraestructura vial y puentes debido a las luchas, así como deficiencias y obstáculos administrativos y la confiscación de bienes materiales complican el suministro y el acceso a la asistencia humanitaria. Por consiguiente, la libertad de movimiento de las agencias humanitarias, del personal y los bienes dentro de las zonas afectadas a menudo está restringida gravemente. Por lo tanto, por parte del HCT es de importancia fundamental continuar sus esfuerzos, negociar sobre el acceso humanitario y tratar de facilitar la ejecución de los programas para alcanzar las personas más necesitadas (OCHA, HRP 2017: 15).

6.2.5 La estrategia de respuesta humanitaria según el HRP 2017

Frente al caos actual en Libia, se puede suponer que la violencia y los conflictos continúan causando más desplazamientos. En algunas partes del país donde se espera que la situación mejore, los retornos serán posible, pero al mismo tiempo con el alto riesgo de la presencia de minas terrestres. El acceso a dinero efectivo seguirá siendo un desafío significativo debido a la funcionalidad limitada y falta de liquidez del sistema bancario, lo que a las poblaciones locales les imposibilita el acceso a servicios y bienes básicos. Las capacidades locales para responder adecuadamente a estos problemas continuarán siendo tensas sin poder satisfacer las crecientes necesidades de los afectados. Sin embargo, dependiente de las dinámicas del conflicto en el país, el impacto y la escala de estos factores varían en las diferentes regiones y deberán ser consideradas en la respuesta humanitaria de todos los diferentes sectores.

En lo que concierne a la implementación del HRP 2017 a nivel operativo, cabe mencionar los siguientes rasgos: por lo general, hay que destacar que para 2017, el HCT adoptó un enfoque muy estricto para garantizar una respuesta humanitaria operativa precisa y bien coordinada. El alcance de acción fue definido sobre la base de elementos claves, como las necesidades humanitarias identificadas por el HNO 2017, la capacidad operativa de responder, el acceso humanitario a las poblaciones necesitadas, y la existencia de otros tipos de apoyo como ayuda al desarrollo y a estabilización. Según el HRP 2017, los parámetros fueron discutidos extensivamente con los asociados libios, incluidos las ONGs locales, comités locales de crisis, municipalidades y representantes de los respectivos ministerios competentes. Para la respuesta humanitaria de 2017, el criterio más importante ha presentado y sigue presentando el enfoque de salvar vidas. Por lo tanto, el plan humanitario solamente incluye medidas vitales a este respecto y aspira, en un plazo de un año, a prevenir o mitigar la pérdida de vidas, así como del daño físico y psicológico. La respuesta humanitaria se centra en las regiones del país con mayor gravedad de necesidades,

incluyendo entre otras las provincias de Trípoli, Azzawyah, Aljufarah, Misrata (en particular Bani Walid), Sirte, Almargeb (en particular Tarhuna) y Al Jabal al Gharbi en el oeste; Bengasi, Derna, Ejdaibiya y Al Jabal al Akhdar en el este; y Ghat, Ubari, Sebha y Aljufrat en el sur (OCHA, HRP 2017: 10). Para la realización de la respuesta humanitaria, el HCT también definió límites demográficos claros. En todas las regiones, la comunidad humanitaria se enfoca en las IDP, los repatriados, los no desplazados más necesitados, así como en los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Dentro de estos grupos, se presta especial atención a los grupos de personas más vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidades y personas con escasos medios financieros (*ibíd.*).

Frente al estado de necesidad extrema a nivel nacional, es evidente que ningún sector a solas es capaz de hacer frente de manera global al sufrimiento de las personas necesitadas. Consecuentemente, la complejidad de las necesidades requiere una respuesta multisectorial. A este respecto, los asociados humanitarios han adoptado una doble estrategia de respuesta multisectorial que aborda integralmente las múltiples necesidades, por un lado de las IDP, los repatriados y no desplazados necesitados, y por otro lado de los migrantes y refugiados, al implementar otra respuesta específica centrándose en las necesidades particulares de estos últimos. Dado que el impacto de la crisis varía en las regiones del país, es imperativo coordinar las respuestas multisectoriales a través de enfoques locales. Esto se logrará mediante una planificación y programación conjuntas flexibles con colaboradores nacionales y locales, incluidos los ministerios competentes y consejos municipales locales que también son los primeros en responder a las necesidades de su población. Junto con agentes enfocados en la estabilización y el desarrollo a largo plazo, se enfocará en el fortalecimiento de su autosuficiencia económica hacia soluciones más duraderas, el acceso sostenible a servicios básicos de calidad y un mejor acceso a oportunidades de subsistencia. Por ejemplo, el sector WASH coordina su asistencia con el sector de *Health* y el Ministerio de Salud para asegurar el acceso a agua potable, saneamiento e instalaciones de higiene, sobre todo en centros de salud pública y hospitales (UNSMIL, 15.09.2017). Además, planea conjuntamente su apoyo y sus programas con el sector de *Education* y el Ministerio de Educación para poder proporcionar agua potable, instalaciones de saneamiento e higiene en las escuelas y otros entornos de aprendizaje. El sector de *Shelter and NFI* por un lado coordina su apoyo con el sector de *Food Security* con el fin de poder distribuir NFI a las IDP, los repatriados y los no desplazados, y por otro lado con el sector de WASH para poder garantizar viviendas dignas y refugios colectivos en las provincias y municipios identificados como más necesitados. Por lo que respecta al sector de *Protection*, colabora estrechamente con todos los sectores de todas las provincias con el fin de promover la protección de las IDP, los repatriados y no desplazados afectados por el conflicto y para garantizar su acceso

seguro y digno a los diferentes servicios sociales básicos (*ibíd.*).

En el marco de la respuesta humanitaria, es fundamental identificar las necesidades prioritarias de los afectados, así como adaptar los programas de ayuda a ellos y supervisar su realización para poder aumentar su efectividad. Pese a que la gestión y asistencia remota de las operaciones humanitarias desde Túnez no es nada ideal, las organizaciones internacionales involucradas aun así han realizado esfuerzos para poder interactuar con las comunidades afectadas. En este contexto, es indispensable la colaboración con las comunidades locales para poder apoyar eficazmente a mujeres y niños. Por ejemplo, a través de asociados locales, los actores humanitarios se han comprometido con comités locales en las diferentes comunidades con el fin de identificar niños que no han podido asistir a la escuela y que requieren de educación y apoyo psicosocial (OCHA, HRP 2017: 11). Estos comités disponen de registros de familias desplazadas y también pueden realizar campañas y sesiones periódicas de concienciación y orientación para sus comunidades. Asimismo, a través de tales terceros agentes, para las organizaciones internacionales es posible obtener *feedback* por parte de los beneficiarios de los programas, lo que permite organizar y adaptar las operaciones de manera adecuada y fortalecer la rendición de cuentas y responsabilidad frente a las comunidades necesitadas. Dado que el impacto de las crisis es mayor en mujeres y niñas, el HCT se comprometió a prestar especial atención a este grupo de población en todas las intervenciones de respuesta. Por lo tanto, todos los sectores han determinado medidas concretas para mitigar o reducir el sufrimiento de las mujeres y niñas causado por violencia, conflictos y el acceso limitado o nulo a servicios esenciales, y proporcionarles condiciones de vida seguras y dignas. Con este fin, la mayoría de los proyectos del HRP 2017 debe contribuir significativamente a la igualdad de género. De un total de 2,4 millones de niños, aproximadamente 439.000 requieren de ayuda humanitaria urgente en Libia. Los niños han sido gravemente traumatizados por el conflicto armado y necesitan servicios inmediatos y especializados, en particular protección, educación, salud, agua y saneamiento. Con su enfoque especial en niños, el programa de UNICEF cubre a todo el país prestando atención especial a Bengasi, Trípoli y Sebha. Firmó una serie de memorandos de cooperación bajo la campaña nacional *Together for Children* con un total de 28 municipios en todo el país (UNSMIL, 15.09.2017).

Garantizar la protección vital es fundamental para la acción humanitaria en Libia. Por tal motivo, los agentes humanitarios continuarán haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger a las personas afectadas por los riesgos y consecuencias de la violencia, abuso y coerción, y para defender sus derechos. En lo que concierne a la respuesta humanitaria, los colaboradores humanitarios se han comprometido a dar prioridad al aspecto de protección, así como a influir en las autoridades gubernamentales para promover su asunción de responsabilidad primaria de

respetar, proteger y cumplir con los derechos de sus ciudadanos, así como de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en su territorio. El HCT ha identificado la protección como uno de los objetivos estratégicos más importantes de la respuesta humanitaria internacional para Libia (OCHA, HRP 2017: 11). Asimismo, las acciones humanitarias de todos los sectores deben contribuir a la protección de las personas necesitadas garantizando acceso seguro a los servicios esenciales y condiciones de vida dignas.

La prestación de la asistencia humanitaria en Libia sigue siendo muy desafiante. Con el estallido de la guerra civil en 2014, la mayoría del personal internacional fue evacuado. Desde entonces, las organizaciones internacionales han gestionado sus programas y operaciones remotamente desde Túnez. No obstante, progresivamente, la situación se está mejorando. La optimización de la prestación, por lo tanto, es de importancia fundamental. Como mencionado en el subcapítulo anterior, sólo desde 2016, unas pocas ONGs internacionales han restablecido su presencia en Libia y comenzaron la implementación directa de ayuda humanitaria a través de la cooperación con personal nacional e internacional. Desde principios de 2017, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas también han anunciado aumentar su presencia en el país, pero la gestión remota a través de autoridades y organizaciones locales sigue siendo el procedimiento principal en la prestación de la asistencia humanitaria. Las ONGs locales y nacionales, así como los comités de crisis y municipios han desempeñado una función esencial al ser los primeros en actuar y responder al conflicto y la violencia extrema, y también seguirán siendo los principales asociados. Es imperativo que la comunidad humanitaria internacional continúe apoyándolos incondicionalmente con el fin de reforzar sus capacidades y recursos.

El HRP 2017 prevé la asistencia multisectorial siempre que sea posible. Según, al optimizar la capacidad de los colaboradores locales sin sobrecargarlos, la eficiencia de la respuesta humanitaria podría maximizarse, lo que al mismo tiempo reduciría los gastos (*ibíd.* 12). Esto incluye la combinación de la distribución de diferentes tipos de asistencia (NFI, alimentos, artículos de higiene) en prestaciones únicas, y un conjunto de medidas de asistencia multisectorial a poblaciones destinatarias en determinados lugares. Otro aspecto importante de la ayuda humanitaria es la asistencia en efectivo polivalente por el ACNUR para satisfacer las múltiples necesidades de los afectados. En 2016, *cash assistance* o artículos básicos de socorro fueron suministrado tanto a hogares de IDP (en total 5.200) como de refugiados (en total 8.300). Para 2017, se ha aspirado a apoyar a 8.000 hogares, respectivamente (UNHCR, “Libya”, 21.11.2016).

Como se ha mencionado anteriormente, en la realización de las distintas operaciones y la asistencia vital por las organizaciones humanitarias, es indispensable colaborar con asociados de diferentes ámbitos: con el fin de contribuir a una estrategia más duradera y sostenible, son sobre

todo sinergias mayores con otros sectores, es decir, asociados especializados en el desarrollo y la estabilización que serán cada vez más importantes para la asistencia y respuesta humanitaria a la crisis libia actual. Las estrategias de respuesta sectorial y sinergias claras con programas de desarrollo y estabilización han sido de gran importancia para 2017. De acuerdo con el *Libyan Political Agreement* de diciembre de 2015, la comunidad internacional se ha comprometido a apoyar intervenciones de desarrollo y estabilización en seis ámbitos claves: recuperación económica e infraestructura (incluidos aeropuertos y puertos marítimos), migración y gestión fronteriza, restablecimiento de los servicios básicos, gobernanza, derechos humanos, justicia y el Estado de derecho (OCHA, HRP 2017: 12-13). A este respecto, se estableció un Comité de Coordinación Técnica Conjunta (*Joint Technical Coordination Committee*; JTCC³⁰⁸) presidido por el Ministerio de Planificación y bajo la dirección del Comité Superior de Políticas (*Senior Policy Committee*, SPC³⁰⁹) y del primer ministro para coordinar todos estos esfuerzos de cooperación internacional. La comunidad humanitaria sigue colaborando con el JTCC para complementar las intervenciones de medio y largo plazo con apoyo de emergencia, pero aspira a poder lograr un cese progresivo de su involucramiento (cf. UNSMIL, 12.10.2016). En este contexto, en 2016 también fue lanzado el denominado *Stabilization Facility Programme* financiado por múltiples donantes. El programa tiene como objetivo apoyar la rehabilitación de la infraestructura ligera destruida por el conflicto, tales como hospitales, comisarías de policía, instalaciones de agua, redes eléctricas y vías de acceso. Asimismo, aspira a fortalecer la capacidad de los municipios en coordinar, planificar y aplicar la prestación de diferentes servicios. En general, el desarrollo y los programas contribuyen a superar el periodo de transición desde el socorro humanitario inicial hacia el apoyo al desarrollo a medio y largo plazo que también es el enfoque principal del programa. Otros programas de estabilización comunitaria tienen como fin promover la cohesión social entre los migrantes y las comunidades locales mediante intervenciones a pequeña escala para restablecer y mejorar servicios esenciales, fortalecer la capacidad de la sociedad civil y reforzar la autosuficiencia al mejorar las oportunidades de subsistencia (*ibíd.*). No obstante, cabe mencionar que el apoyo al desarrollo y su éxito dependerá significativamente de la situación de seguridad y de los avances políticos a nivel nacional. Hasta que se logren primeros progresos, para Libia la asistencia humanitaria representará el apoyo más importante, patente y perceptible.

De acuerdo con el HRP 2017, en 2017 el sistema de la ONU también ha finalizado su *UN Common Country Strategic Framework* (UNCCSF) en apoyo a Libia. En este marco, las

³⁰⁸ El JTCC es el órgano técnico dentro del Marco de Coordinación para la cooperación internacional con el gobierno libio GNA. Está encargado de facilitar y mejorar la coordinación de la asistencia para el desarrollo a Libia (UNSMIL, 12.10.2016).

³⁰⁹ El SPC, el órgano superior del Marco de Coordinación, está encargado de supervisar la coordinación de la asistencia internacional bajo la titularidad libia (*ibíd.*).

Naciones Unidas prestan asistencia al GNA para que cumpla su responsabilidad y función primordial de fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales y subnacionales en prestar servicios básicos eficaces, responsables y equitativos, rehabilitar la infraestructura física (como edificios, suministro de energía y agua, desecho, servicios de información y comunicación) y social (sistema educativo, sistema de salud, seguridad pública, instituciones culturales, etc.), y mejorar el sistema de protección social. Estas intervenciones también podrán contribuir a la recuperación económica, el restablecimiento de una subsistencia digna y un desarrollo basado en los derechos humanos.

A pesar de los esfuerzos intensos de la comunidad internacional y de los asociados libios para lograr una solución a los conflictos actuales, no es probable que se produzca una mejora notable de la situación humanitaria en un futuro cercano. Sin embargo, con un proceso político continuo, negociaciones y el diálogo, sobre todo entre representantes de las Naciones Unidas, la HoR y el GNA, aun así será posible esperar una solución a la crisis. Si se logra una mayor estabilidad política, las autoridades nacionales y locales podrían reanudar progresivamente la provisión de los servicios sociales públicos, en particular en las zonas afectadas por los conflictos. Esto permitiría a la comunidad humanitaria realizar su estrategia de retirada al reducir paulatinamente su presencia en el país hasta poder cesar por completo.

Con el fin de poder estimar mejor los esfuerzos humanitarios de los agentes internacionales en el marco del *Global Protection Cluster*, a continuación serán presentados los diferentes órganos de las Naciones Unidas involucrados en el HRP para Libia, dado que desempeñan un papel fundamental en la respuesta a la crisis. No obstante, al tener un enfoque especial en la crisis del desplazamiento, será concedida prioridad a los órganos relevantes para las IDP, migrantes y refugiados.

6.2.6 La presencia de las Naciones Unidas en Libia

El sistema de asistencia al desarrollo por parte de la ONU ha estado activo en Libia desde los años '50 a través de la presencia de diversos fondos, programas y organismos especializados, conjuntamente conocidos como el Equipo de las Naciones Unidas en el País (*United Nations Country Team*; UNCT). Al poder aprovechar de los conocimientos específicos de cada agente, fondo y programa, el sistema de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental al ayudar a Libia a abordar los desafíos de desarrollo y poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (*Sustainable Development Goals*; SDG³¹⁰) fijados en la *2030 Agenda for Sustainable Development*. En la Cumbre del Desarrollo Sostenible en 2015 en Nueva York, ésta fue aprobada unánimemente por todos los 193 Estados miembros de la ONU (Tralac, 22.09.2015).

El objetivo principal del UNCT es asegurar la consecución integrada de resultados concretos en apoyo de la agenda nacional humanitaria y de desarrollo bajo el liderazgo del Coordinador Residente de las Naciones Unidas para Libia (UNHCR 2008, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, p. 47). El UNCT asegura la coordinación, planificación, implementación y toma de decisiones entre los diferentes organismos a nivel nacional (*ibíd.* 377, 506). En el marco del sistema de la ONU, el Coordinador Residente para Libia es el jefe del equipo en el país, con la responsabilidad general por la ejecución eficaz y coordinada de los programas de desarrollo. Relata directamente al Secretario General de las Naciones Unidas y trabaja de conformidad con las prioridades establecidas por las autoridades nacionales libias competentes. Sus responsabilidades son determinadas en la Resolución 32/197 de la Asamblea General del 20 de diciembre de 1977, en la que se establecen disposiciones para una mejor coordinación de las actividades operativas de desarrollo por parte del sistema de la ONU a nivel nacional de los países en cuestión (A/RES/32/197).

La *United Nations Support Mission for Libya* (UNSMIL) es una misión política especial establecida el 16 de septiembre de 2011 por la Resolución 2009 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a petición de las autoridades libias para apoyar a las nuevas autoridades de transición en sus esfuerzos de reconstrucción posconflicto. El Consejo de Seguridad ha modificado y ampliado el mandato de la UNSMIL en las resoluciones S/RES/2022 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2238 (2015), 2323 (2016) y 2376 (2017). Su mandato actual es válido hasta el 15 de septiembre de 2018 (UN Security Council, SC/12991, 14.09.2017; UNSMIL 2017, “Mandate”).

Todas las actividades de las Naciones Unidas en Libia se realizan bajo la dirección de un Representante Especial del Secretario General (SRSG) apoyado por un Representante Especial Adjunto del Secretario General, y son supervisadas por el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas que brinda orientación y asistencia operativa (UN Department of Political Affairs 2017, “Libya”). La UNSMIL cuenta con personal profesional sustantivo tanto en asuntos políticos como derechos humanos, justicia transicional, acciones antiminas, desmovilización,

³¹⁰ En la Cumbre del Desarrollo Sostenible del 25 de septiembre de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la *2030 Agenda for Sustainable Development* que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) para poner fin a la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

Los SDG, también conocidos como Objetivos Globales, se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que son una serie de ocho objetivos anti-pobreza que la comunidad mundial se comprometió a alcanzar para 2015. Los ODM, aprobados en 2000, se centraron en diversos problemas, entre ellos reducir la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y mejorar el acceso al agua y al saneamiento. Aunque la pobreza no haya acabado para todos, de hecho se han realizado progresos en los ODM, lo que demuestra el valor de una agenda unificadora respaldada por metas. Los nuevos Objetivos Globales y la nueva Agenda más amplia van mucho más allá de los ODM, abordando las causas profundas de la pobreza y la necesidad universal de un desarrollo más sostenible para todos (UNDP 2017, “2030 Agenda for Sustainable Development”).

desarrollo, empoderamiento femenino, información y comunicación públicas, y personal de apoyo (Worldinz 2017, “UNSMIL”).

Todas las actividades de la ONU en Libia se rigen por el principio de la titularidad nacional. Tras la adopción reciente por unanimidad de la Resolución 2376 en septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad ha encomendado a la UNSMIL el ejercicio de mediación con el fin de apoyar las fases posteriores del proceso de transición, la implementación del LPA, la consolidación de la gobernanza, la supervisión e información en materia de derechos humanos, la provisión y coordinación de la asistencia internacional, el aseguramiento de armas incontroladas, así como para apoyar los esfuerzos del GNA para estabilizar zonas posconflictos, incluyendo zonas liberadas del EI (UN Security Council, SC/12991, 14.09.2017).

Siendo una misión integrada, todos los organismos, fondos y programas de la ONU trabajan en colaboración con la UNSMIL para que las actividades políticas, humanitarias y de desarrollo sean complementarias. En el caso de Libia, desde julio de 2017 Ghassan Salamé del Líbano es el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL y, por consiguiente, lidera los esfuerzos para garantizar una buena coordinación en los ámbitos políticos, humanitarios y de desarrollo. Desde noviembre de 2016, la portuguesa Maria do Valle Ribeiro actúa como Representante Especial Adjunta y Jefa Adjunta de UNSMIL, así como Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora Humanitaria bajo cuya supervisión se llevan a cabo las actividades humanitarias (UNSMIL 2017, “Leadership”). La ONU en Libia colabora tanto con asociados nacionales como internacionales para apoyar un progreso de transformación verdadero con el objetivo de:

- políticas inclusivas y un proceso participativo de transición posconflicto que involucre a todas las partes de la sociedad libia, incluyendo mujeres, jóvenes y grupos marginados;
- una buena gobernanza establecida en la seguridad y el Estado de derecho;
- una economía diversificada y un proceso de desarrollo humano inclusivo; y
- la prestación de asistencia humanitaria vital en respuesta a la crisis actual.

Basado en consultas con colaboradores libios, el sistema de las Naciones Unidas en Libia ha adaptado sus planes y programas con las prioridades nacionales mediante el desarrollo del *interim United Nations Strategic Framework* cuyos resultados se centran en tres áreas prioritarias:

- 1) apoyar al gobierno con un marco provisional de política de desarrollo que debe llevar al establecimiento de instituciones eficaces y responsables;
- 2) asegurar la disposición y la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales y subnacionales y mejorar su desempeño con el fin de mejorar la prestación de servicios básicos y su capacidad de contribuir a la cohesión social y la prevención de conflictos; y

- 3) promover los principios democráticos de gobernanza, reforzar la supremacía de la ley y garantizar el desarrollo basado en los derechos humanos para todos (UNSMIL, 14.12.2016).

Las tres áreas temáticas claves fueron seleccionadas en asociación con el gobierno de Libia y elegidas debido a su relación directa con la capacidad futura de Libia de alcanzar los SDG y su fuerte relación con los esfuerzos de consolidación de la paz y los procesos de construcción de un nuevo Estado libio.

En el marco del HRP 2017 para Libia y los diversos sectores operativos del *Cluster Approach* como *Health, Protection, Shelter and NFI, WASH, Food Security, Education, Coordination y Refugee and Migrant Response*, los organismos de la ONU más involucrados son: FAO, OIM, OCAH, FPNU, ONU-Habitat, ACNUR, UNICEF, PMA, OMS, ONU Mujeres y PNUD. Por lo tanto, a continuación serán resumidas las necesidades prioritarias de cada sector, así como expuestas las estrategias de respuesta de los organismos del sistema de las Naciones Unidas responsables al respecto.

6.2.6.1 El sector de *Health*

Principales organismos de la ONU involucrados: OIM, ACNUR, UNICEF, OMS, FPNU, ONU-Habitat.

Personas necesitadas: 1,33 millones; personas destinatarias: 941.000; requisitos financieros: USD 38 millones.

De acuerdo con el HNO 2017, los análisis llevados a cabo en 2016 revelaron algunas necesidades humanitarias claves, incluyendo, como mencionado anteriormente, una falta masiva de medicamentos esenciales y suministros médicos a todos los centros de salud, así como una falta de personal sanitario y un alto riesgo de enfermedades transmisibles como polio, sarampión, VIH/SIDA, etc.

En cuanto a la estrategia de respuesta y su alcance, los asociados involucrados operan en todas las 22 provincias libias, con enfoque especial en las regiones en las que los centros de salud carecen de capacidades debido a interrupciones del suministro médico y/o la presencia limitada de personal sanitario. La respuesta se dirige a IDP, así como a personas no desplazadas necesitadas y repatriadas, con un enfoque especial en las personas más vulnerables como personas lesionadas, ancianos, niños, discapacitados y mujeres, sobre todo embarazadas y madres lactantes (OCHA, HNO 2017: 17). Al tener un enfoque multisectorial, la respuesta se planifica y ejecuta conjuntamente con el sector de WASH, con el fin de garantizar condiciones dignas en los ámbitos de higiene y saneamiento, y agua potable en los centros de salud. Para mejorar la cooperación, los

asociados también utilizarán diferentes medios para poder comunicar con las comunidades necesitadas sobre problemas sanitarios y un mejor uso de los servicios médicos.

El principal organismo de ejecución es el Ministerio de Salud y sus unidades técnicas, es decir, el Centro Nacional del Control de Enfermedades y el Sistema de Información de Salud (OCHA, HRP 2017: 19). Asimismo, colaboran varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y ONGs internacionales y nacionales. Las modalidades de ejecución incluyen una gestión remota a través de las autoridades y organizaciones locales y una implementación directa por los asociados del sector a través de personal nacional. En regiones que carecen de centros de salud operativos, servicios básicos de salud son proporcionados a través de equipos móviles. Para poder fomentar el funcionamiento de los servicios médicos establecidos, el sector de *Health* no sólo colabora estrechamente con el Ministerio de Salud, sino también con el Ministerio de Planificación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Asimismo, colaborará activamente con proyectos de desarrollo y estabilización con el fin de rehabilitar las instalaciones médicas dañadas por el conflicto, y apoyará el desarrollo de la infraestructura de las Oficinas de Suministro Médico para que el material sanitario sea almacenado y repartido adecuadamente (*ibíd.*).

6.2.6.2 El sector de *Protection*

Principales organismos de la ONU involucrados: OIM, ACNUR, UNICEF.

Personas necesitadas: 1,33 millones; personas destinatarias: 689.000; requisitos financieros: USD 47,6 millones.

Las necesidades prioritarias incluyen las condiciones precarias de vida y la falta de seguridad física y jurídica de la población afectada por violencia, la presencia de artefactos explosivos en todo el territorio de Libia, e incontables incidentes no reportados basados en la violencia de género, discapacidades físicas y mentales y los riesgos relacionados con la protección de niños. Por consiguiente, la estrategia de respuesta prevé que las intervenciones prioritarias se enfoquen en abordar el riesgo alarmante de artefactos explosivos para garantizar un acceso seguro y digno a la asistencia vital, e identificar y responder a las necesidades inmediatas de protección de los más vulnerables (incluyendo mujeres, niños, discapacitados y supervivientes de la violencia) a través de servicios especiales de protección, especialmente apoyo psicosocial (OCHA, HNO 2017: 19). El alcance de la respuesta del sector se dirige a las necesidades de los grupos más vulnerables, es decir, IDP, repatriados, personas no desplazadas necesitadas, niños, mujeres y niñas, ancianos y personas con discapacidades físicas, sobre todo en las regiones de Al Jabal al Gharbi y su capital Gharyan en el noroeste de Libia, así como en Bengasi, Misrata y Trípoli (OCHA, HRP 2017: 20).

Teniendo también un enfoque multisectorial, el sector de *Protection* colabora con el sector de *Shelter and NFI* para garantizar el acceso seguro a la población afectada y para poder supervisar la protección. Asimismo, colabora estrechamente con el sector de *Health* con enfoque en las víctimas de violencia por razón de género y personas heridas por explosivos para asegurar asistencia médica además de los servicios de protección. Cabe mencionar que en el marco del sector se intenta garantizar que toda la asistencia humanitaria beneficie a mujeres y hombres igualmente. Con el fin de poder realizar la respuesta adecuadamente, el sistema de las Naciones Unidas prevé que los agentes comuniquen regularmente con las comunidades afectadas a través de los asociados locales y el personal nacional. Por lo tanto, las modalidades de respuesta continúan con la gestión remota a través de colaboradores y organizaciones internacionales con presencia en Libia. Asimismo, para poder asegurar una respuesta más sostenible y para poder complementar las operaciones humanitarias, el sector se compromete con la creación de capacidad a largo plazo y asistencia técnica a las autoridades con el fin de poder crear un entorno más digno para las poblaciones más vulnerables (*ibíd.*).

6.2.6.3 El sector de WASH

Principales organismos de la ONU involucrados: OIM, UNICEF, FPNU, ONU-Habitat.

Personas necesitadas: 0,5 millones; personas destinatarias: 184.000; requisitos financieros: USD 7,25 millones.

De acuerdo con los datos obtenidos en el HNO 2017, se estima que unas 500.000 personas, incluyendo 200.000 niños, necesitan acceso a agua potable, saneamiento e higiene. Debido a la crisis prolongada, la funcionalidad de las infraestructuras básicas, como redes de agua y aguas residuales, han sido afectadas y siguen deteriorándose. En cuanto a la estrategia de respuesta, se da prioridad a intervenciones que incluyen la provisión de agua potable, saneamiento e higiene a las personas más necesitadas. El sector de WASH apoya a las comunidades más afectadas al promover la restauración de los sistemas municipales más importantes de agua y saneamiento, así como las instalaciones básicas de WASH en escuelas dañadas por el conflicto (OCHA, HNO 2017: 18). En lo que concierne al alcance de la respuesta del sector, para 2017 se ha dirigido a un total de 150.000 IDP, sobre todo en centros colectivos y edificios inacabados, a repatriados sin acceso seguro a agua y saneamiento, y a no desplazados necesitados por el conflicto, incluidos 55.000 niños que tienen ningún o limitado acceso a agua, saneamiento e higiene. Refugiados y migrantes son atendidos por el ACNUR y la OIM. Geográficamente, el sector se enfoca sobre todo en Bengasi, Trípoli, Derna, Sirte, Al Jabal al Gharbi en el noroeste y las ciudades más afectadas en el sur. Siendo también una operación multisectorial, el sector de WASH colabora

con el sector de *Education, Protection, Shelter and NFI* y *Health* para mejorar la respuesta de WASH a los niños y sus familias en las zonas más afectadas por conflictos, así como en centros de salud, escuelas y espacios acogedores para los niños. Asimismo, todas las intervenciones tienen un enfoque de género, es decir, el sector de WASH prestará especial atención a la protección de personas con discapacidades, niños y hogares dirigidos por mujeres. En la realización de los proyectos y campañas de promoción de higiene, es fundamental incluir las comunidades en cuestión, implicando también las mujeres. La prestación de los servicios de WASH se ejecuta tanto por ONGs internacionales como nacionales y locales con presencia establecida en Libia. Como en los años anteriores, el sector de WASH sigue operando a distancia. Por lo tanto, el sistema de coordinación se mantiene a través de asociados nacionales, locales e internacionales para poder brindar asistencia adecuada y para ampliar las intervenciones, según sea necesario. Dado que el objetivo es la integración de la respuesta humanitaria en un concepto de apoyo al desarrollo a largo plazo, el sector de WASH asegurará una coordinación eficaz con los proyectos de estabilización y recuperación dirigidos a la restauración de la infraestructura básica, tales como instalaciones de agua y sistemas de aguas residuales (OCHA, HRP 2017: 21).

6.2.6.4 El sector de *Shelter and NFI*

Principales organismos de la ONU involucrados: OIM, UNICEF, FPNU, ONU-Habitat.

Personas necesitadas: 0,55 millones; personas destinatarias: 277.000; requisitos financieros: USD 21 millones.

Como se ha analizado extensamente en los capítulos anteriores, el conflicto bélico en Libia ha tenido un impacto destructivo enorme en las viviendas y la infraestructura. La destrucción de viviendas y la falta de refugios adecuados es una de las causas principales del desplazamiento tanto interno como transfronterizo. Sobre todo refugiados y migrantes que cruzan Libia en su camino hacia Europa están particularmente expuestos a refugios en condiciones muy precarios. En cuanto a la estrategia de respuesta, se da prioridad a intervenciones dirigidas a la prestación de refugios de emergencia y NFI. El apoyo consiste en un programa multisectorial y ayuda diversa que incluye agua, saneamiento e higiene, alimentos y componentes de protección. En coordinación con el sector de WASH, la respuesta también se dirige a poblaciones viviendo en condiciones deficientes y/o viviendas dañadas, incluyendo refugios colectivos, edificios inacabados y asentamientos informales que dependen de la ayuda humanitaria para sus necesidades básicas (OCHA, HNO 2017: 20). Asimismo, el sector de *Shelter and NFI* se dirige a los más vulnerables en riesgo de desalojo por falta o escasez de recursos financieros, incluidas las IDP. En el marco de la respuesta humanitaria y una asistencia multifuncional, la provisión de

dinero a los más necesitados constituye otro aspecto para asegurar su acceso a NFI básicos. Con respecto al alcance de la respuesta del sector, la intervención se enfoca sobre todo en las zonas donde el impacto por la crisis es más severo y donde se encuentra el mayor número de personas necesitadas, o sea Trípoli, Bengasi, Sirte, Derna, Alkufra, Sebha, Ubari, Murzuq, Al Jabal Al Gharbi y Nalut (OCHA, HRP 2017: 22). Al igual que los demás *clusters*, en la realización de las intervenciones hay una coordinación estrecha con otros sectores, en particular WASH, *Protection* y *Food Security*. Por ejemplo, en entornos de refugios colectivos, la colaboración incluye que WASH se ocupa del mejoramiento de las instalaciones. También en el sector de *Shelter and NFI* el compromiso con las comunidades es fundamental y las intervenciones son caracterizadas por un enfoque de género, centrándose primordialmente en hogares dirigidos por mujeres, personas con discapacidad, ancianos y menores de edad no acompañados. Dado que en algunas partes del país se han registrado retornos de desplazados, es de importancia fundamental el vínculo entre intervenciones orientadas a la consecución de sustento y refugio, y coordinarlas en estrecha colaboración con otros sectores.

6.2.6.5 El sector de *Food Security*

Principales organismos de la ONU involucrados: FAO, OIM, PMA.

Personas necesitadas: 0,36 millones; personas destinatarias: 211.000; requisitos financieros: USD 24,8 millones.

Mediante el HNO 2017 llevado a cabo a lo largo del año 2016, se identificaron las siguientes necesidades claves de las poblaciones más vulnerables: una falta o el acceso limitado a los productos alimenticios básicos, una falta de insumos agrícolas, sobre todo semillas de trigo, para los agricultores que producen sus propios alimentos, y el riesgo de brotes de enfermedades mortales zoonóticas (enfermedades transmitidas de los animales al hombre, y viceversa) para personas no desplazadas (OCHA, HNO 2017: 16). En cuanto a la estrategia de respuesta, el sector de *Food Security* prioriza intervenciones dirigidas a la distribución mensual de alimentos para prevenir los efectos de la escasez de alimentos, así como insumos agrícolas y vacunas. Con respecto al alcance de la respuesta del sector, se enfoca en los IDP, repatriados, refugiados y personas no desplazadas enfrentados a una inestabilidad alimentaria grave o moderada, lo que incluye a unas 175.000 personas requiriendo ayuda alimentaria inmediata y unos 6.000 agricultores pequeños no desplazados con necesidad de insumos agrícolas (OCHA, HRP 2017: 23). Geográficamente, la respuesta del sector se centra en Bengasi, Al Wahat y Al Kufra en el este del país; en el oeste a Sirte, Nalut, Almargeb, Trípoli, Aljifarah, Azzawyah, Misrata, An Nigat Al Khums y Al Jabal Al Garbi; y a Aljufrah, Wadi Ashshati, Sebha, Wadi Al Hayaa y Ghat

en el sur, así como en la región de Murzuq en la zona fronteriza de Chad y Níger. Con su enfoque multisectorial, el sector de *Food Security* colabora tanto con los sectores de *Protection* y *Coordination* como con *Shelter and NFI* para garantizar una distribución adecuada de los alimentos y la seguridad de los beneficiarios. Junto con el sector de *Health*, opera de forma multisectorial, sobre todo en los ámbitos de nutrición y salud para proporcionar apoyo nutricional y abordar problemas relacionados con la transmisión de enfermedades mortales de animales a hombres. Al igual que en los demás sectores, el compromiso con las comunidades destinatarias y un enfoque de género son fundamentales, por lo que la respuesta humanitaria da prioridad a hogares dirigidos por mujeres sin ingresos regulares o estables. Como determina el HRP 2017, la asistencia alimentaria se entrega y distribuye en sitios y entornos relativamente seguros con el fin de garantizar que los beneficiarios no se enfrenten a los riesgos de explotación. Cabe mencionar que el sector de *Food Security* sigue gestionando sus operaciones de forma remota, con asociados como ONGs y autoridades locales comprometidos a la distribución de la asistencia alimentaria *in situ* (OCHA, HRP 2017: 23). A través de asociados cooperantes, los comités de crisis proporcionan listas de beneficiarios y observaciones por parte de los beneficiarios que obtienen por un organismo de control, con el fin de poder responder mejor a las necesidades de los afectados. Estos organismos son responsables de la recopilación de datos básicos y resultados relativos a la seguridad alimentaria. Siendo un órgano clave del sector, la FAO tiene presencia en Libia a través del personal local (*ibíd.*). A largo plazo, en el marco del desarrollo humanitario se aspira a poder pasar de la asistencia alimentaria a la transferencia de fondos y de esta manera apoyar actividades de seguridad alimentaria iniciadas por las autoridades estatales de Libia y otros asociados para el desarrollo.

6.2.6.6 El sector de *Education*

Principales organismos de la ONU involucrados: UNICEF, FPNU, ONU-Habitat.

Personas necesitadas: 0,32 millones; personas destinatarias: 115.000; requisitos financieros: USD 7,4 millones.

Debido al conflicto bélico prolongado en el país, la infraestructura educativa ha sido deteriorada gravemente a nivel nacional. Como mencionado en la parte III, capítulo 6.2.2, de las 558 escuelas afectadas por la crisis, 30 están completamente destruidas, 477 parcialmente dañadas y 51 han sido convertidas en refugios para IDP (OCHA, HNO 2017: 21). Alrededor de 315.000 niños, incluyendo niños refugiados y migrantes, requieren apoyo educativo, muchos de ellos sin tener la posibilidad de ir a la escuela, por lo que constituyen blancos fáciles de grupos militares y extremistas, así como de traficantes de drogas. En cuanto a la estrategia de respuesta según el

HRP 2017, las intervenciones prioritarias para el sector de *Education* se dirigen a la mejora del acceso a una educación de emergencia de buena calidad a través del establecimiento de clases adicionales y móviles en zonas afectadas por el conflicto; la rehabilitación en pequeña escala de escuelas dañadas con el fin de aumentar el acceso otra vez y proporcionar un entorno protector; y la integración de apoyo psicosocial para los niños en la educación formal para mitigar los impactos psicosociales por la crisis. El alcance de la respuesta del sector prevé alcanzar a los más vulnerables, especialmente aquellos que viven en áreas afectadas por los conflictos. Como determina el HRP 2017, la respuesta se dirige a los niños de los grados 1 al 12 en el este (Bengasi, Ajdabiya y Derna), en el oeste (entre otros Sirte, Bani Walid y Tarhuna) y el sur (por ejemplo Ghat, Ubari, Murzuq y Sebha), y a numerosos grupos de desplazados, tales como los tawerghanos en los campamentos de Bengasi, Trípoli, Aljufra, entre otros. Siendo caracterizado también por un enfoque multisectorial, el sector de *Education* colabora estrechamente con los sectores de *Protection* y WASH, y trabaja con los coordinadores de refugiados y migrantes para garantizar que los niños migrantes también tengan la posibilidad de incorporarse en los programas educativos y psicosociales existentes. En el marco de la respuesta, el compromiso con las comunidades, así como la incorporación de la perspectiva de género y la protección son fundamentales. Mediante una amplia gama de actividades educativas, el sector intenta satisfacer las diferentes necesidades de las niñas y niños adolescentes según su edad, género y otras circunstancias específicas (OCHA, HRP 2017: 24). Se presta especial atención a la oferta de oportunidades para niñas y niños con discapacidades. Al tener en cuenta un número considerable de niños que no han visitado la escuela por periodos prolongados, es un aspecto clave para el sector identificarlos a través de los comités locales que disponen de registros de niños desplazados en edad escolar y/o fuera de la escuela al llevar a cabo sesiones regulares de concienciación y orientación en sus comunidades. Junto con el Ministerio de Educación y los municipios, el sector coordina sus actividades, sobre todo al fortalecer y ampliar la colaboración con asociados y ONGs nacionales en zonas afectadas por los conflictos. La prestación del apoyo educativo y psicosocial se realiza a través de ONGs locales y nacionales. Dado que la supervisión de las intervenciones es remota, el sector vela por un mecanismo de control para la planificación e implementación remotas, incluyendo la supervisión por terceras partes y la colaboración con asociados del ámbito educativo (Ministerio de Educación, municipios y ONGs). En el marco del desarrollo humanitario, y con el fin de poder garantizar una respuesta más sostenible, el sector aspira a la rehabilitación y reconstrucción de escuelas dañadas por el conflicto que se debe llevar a cabo mediante programas de estabilización. A este respecto, UNICEF proporciona apoyo preliminar a la reforma educativa al mejorar la calidad de la educación, incluidos el desarrollo y la distribución del personal docente en el país. Asimismo, apoya los denominados Sistemas de

Información de la Gestión de Educación (EMIS) con el fin de mejorar la calidad, fiabilidad, presentación oportuna y la cobertura de los datos.

6.2.6.7 El sector de *Coordination*

Principales organismos de la ONU involucrados: OCAH.

Requisitos financieros: USD 5 millones.

Operar en Libia sigue siendo una misión muy peligrosa e impredecible. Desde la evacuación de casi todo el personal de las agencias de las Naciones Unidas y asociados internacionales en 2014, las organizaciones humanitarias han dirigido sus operaciones de forma remota desde Túnez (véase parte III, cap. 6.2.4). Sólo desde 2016, unas pocas ONGs han restablecido una limitada presencia operativa en Libia. El HCT también ha iniciado misiones de apoyo en Libia para coordinar su trabajo con asociados nacionales, y desde 2017 ha restablecido una limitada presencia internacional en Libia. Pero con la situación de la seguridad nacional siendo muy frágil, las Naciones Unidas decidieron desplegar alrededor de 150 a 250 guardias, principalmente de origen nepalés, con el fin de vigilar la base principal de la ONU en Trípoli y de este modo poder lanzar y supervisar mejor sus operaciones *in situ* (cf. Reuters, 08.09.2017). En tal contexto complejo, las necesidades prioritarias constituyen una fuerte coordinación intersectorial y gestión de seguridad para poder asegurar una respuesta efectiva basada en principios y evidencia. La comunidad humanitaria en Libia está compuesta de 38 agentes humanitarios, de los que 27 son organizaciones internacionales y 11 nacionales; un total de 22 organizaciones hicieron un llamamiento a apoyo financiero. Además, las comunidades locales libias, los comités de crisis, así como las autoridades municipales son agentes claves en responder al coste humano por el conflicto, la violencia extrema y el trastorno de los servicios sociales básicos (OCHA, HRP 2017: 25). En el marco de la respuesta humanitaria, actualmente son los seis sectores antes presentados los que son activos en Libia, o sea *Food Security, Health, Protection, WASH, Shelter and NFI, y Education*. En cuanto a los refugiados y solicitantes de asilo, cabe mencionar que debido a la naturaleza específica de sus necesidades y su estatus, se han establecido mecanismos de coordinación adicionales específicos incumbiendo la responsabilidad del ACNUR. En general, todas las operaciones de respuesta se coordinan junto con asociados nacionales pertinentes. En lo que concierne a la estrategia de respuesta de 2017, el apoyo por el sector de *Coordination* se ha enfocado en las siguientes prioridades:

- apoyar los esfuerzos del HCT y del grupo de coordinación intersectorial en cuanto a la toma de decisiones sobre operaciones, cuestiones políticas claves y desafíos de seguridad;
- fortalecer la colaboración con las autoridades gubernamentales nacionales y locales y su

capacidad de responder, dado que son las primeras en reaccionar a las necesidades de las personas;

- fortalecer las capacidades de gestión de datos e información, y mejorar los sistemas de supervisión e información sobre los movimientos migratorios;
- asegurar una respuesta basada en principios y abogar por una asistencia humanitaria neutral, imparcial e independiente en todo momento;
- promover y defender la protección de los civiles, incluidos los IDP, repatriados, no desplazados afectados por el conflicto, así como migrantes y refugiados, y, en colaboración con los asociados pertinentes, tomar todas las medidas necesarias para asegurar que sean tratados humanamente y en conformidad con el derecho internacional humanitario;
- supervisar y analizar la seguridad y las limitaciones de acceso, y comprometer a las partes pertinentes a abordar estas cuestiones humanitarias;
- gestionar el ciclo del programa humanitario implementado, incluyendo evaluaciones de necesidades, análisis y la planificación de la respuesta;
- garantizar que cuestiones de género y de protección sean aspectos integrados en la respuesta en todo momento, y que los asociados humanitarios interactúen con las comunidades afectadas siempre que sea posible;
- aumentar las iniciativas de promoción y la gestión de movilización de recursos con la comunidad de donantes, países vecinos y el público a favor de la ayuda humanitaria en la crisis libia; y
- promover la coordinación con los programas de desarrollo y estabilización (*ibíd.*).

6.2.6.8 El sector de *Refugee and Migrant Response Plan*

Principales organismos de la ONU involucrados: OIM, ACNUR.

Personas necesitadas: 296.000; personas destinatarias: 144.000; requisitos financieros: USD 56,1 millones.

De acuerdo con los resultados del HNO 2017, las necesidades prioritarias claves para los refugiados y migrantes incluyen sobre todo dificultades continuas de acceder a servicios básicos a causa de discriminación generalizada, una falta de recursos económicos y/o una amenaza grave a su seguridad física y jurídica. Por otra parte, para los agentes humanitarios el acceso limitado a los refugiados y migrantes en centros de detención presenta uno de los mayores desafíos en su intento de proporcionar asistencia necesaria. Otro desafío importante constituye la capacidad limitada de llevar a cabo operaciones de rescate de migrantes en el desierto y el mar libio provocando cada vez más la muerte de personas inocentes. La estrategia de respuesta prevé como

intervenciones prioritarias la prestación de servicios vitales, el fortalecimiento de la recolección de datos y evaluaciones específicas, así como la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados al incorporar en todo momento también una perspectiva de género y de protección. En cuanto al alcance, el *Response Plan* se dirige a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, detenidos, supervivientes del tráfico de personas, niños no acompañados y separados de sus familias, migrantes abandonados, mujeres embarazadas y/o solteras, así como a víctimas de explotación y de abusos (OCHA, HNO 2017: 11-12; HRP 2017: 26). Geográficamente, se enfoca en las principales vías de tránsito de los refugiados y migrantes y lugares de encuentro, en el sureste con las regiones de Al-Kufrah, Ajdabiya y Tobruk, en el sudoeste con Ghat, Al Qatrun y Gadamés, así como Sebha y Bani Walid que pertenecen a las ciudades de tránsito más importantes para los migrantes y refugiados en su camino hacia la costa y más al norte hacia Europa. Además, el *Response Plan* prevé asistencia en los puntos de desembarque en el este en Tobruk y en el oeste entre otros en las ciudades de Sabratha, Trípoli, Zuara y Zauiya, así como en centros de detención y zonas urbanas. Al tener un enfoque multisectorial, la asistencia humanitaria se presta en estrecha colaboración con organizaciones nacionales e internacionales. Esto contribuirá tanto a un aumento de la eficiencia como a la prevención de coincidencias en las respuestas. Intervenciones que integren las perspectivas de género y protección se llevarán a cabo al promover la capacidad de los asociados locales responsables de la implementación directa de los programas humanitarios. Por parte de la OIM, operaciones de supervisión de las poblaciones afectadas serán consolidadas a través de una comunicación bidireccional con las comunidades destinatarias. Además, el ACNUR se comprometerá con las comunidades a través de programas de divulgación, así como a través de sus centros de desarrollo comunitario. A la luz de la situación grave de seguridad en Libia, la asistencia humanitaria continuará mediante una gestión remota a través de ONGs locales y nacionales. En el marco del desarrollo humanitario cabe destacar que de momento el sector da prioridad a la asistencia inmediata vital. No obstante, a largo plazo aspira a una respuesta más amplia y un enfoque global para abordar la ausencia del Estado de derecho y el fuerte incremento del tráfico de personas, así como la discriminación y los abusos de derechos humanos contra los migrantes. De esta manera intentará incrementar la capacidad de las autoridades competentes para abordar estos flujos migratorios complejos (*ibíd.*). A este respecto, las actividades en curso y previstas incluyen la expansión de los servicios públicos básicos, la rehabilitación de la infraestructura, medidas de solidaridad social y actividades con el fin de mitigar el contrabando de migrantes y el tráfico de personas.

6.2.6.9 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

Las principales áreas de apoyo de la OCAH en Libia abarcan la coordinación y promoción de las respuestas humanitarias, así como la gestión de información y la financiación humanitaria. La OCAH es responsable de reunir a los agentes humanitarios para asegurar una respuesta coherente a las emergencias y ayudar a las personas afectadas cuando más requieren de alivio y/o protección. Un pilar fundamental de su mandato es la coordinación de una acción humanitaria eficaz y fundamentada en asociación con agentes nacionales e internacionales. Mediante la coordinación humanitaria, la Oficina aspira a mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria al garantizar una mayor previsibilidad, responsabilidad y colaboración (OCHA, HRP 2017: 25). Siendo el agente principal al respecto, la OCAH desempeña un papel esencial en la coordinación operativa en situaciones de crisis. Esto incluye la evaluación de situaciones y necesidades, el acuerdo de prioridades comunes, el desarrollo de estrategias comunes para abordar cuestiones tales como la negociación del acceso a servicios básicos para personas necesitadas, la promoción, la movilización de medios financieros y otros recursos, así como la gestión de información y la supervisión de los progresos de las diversas respuestas humanitarias (*ibíd.*). En el caso particular de Libia y frente al colapso total del Estado, la OCAH proporciona coordinación estratégica y operativa para mejorar las respuestas a la crisis humanitaria a nivel nacional, aumentar el acceso humanitario y garantizar que las personas necesitadas tengan acceso a los servicios básicos hasta que se establezcan planes nacionales y prioridades en materia de desarrollo para poder prestar los servicios necesarios. Con respecto a la coordinación, la OCAH apoya al Coordinador Humanitario y al HCT en sus respuestas a las necesidades humanitarias inmediatas de los más vulnerables dentro de Libia. Facilita la inclusión de los asociados humanitarios libios y colabora con los asociados humanitarios internacionales, con el fin de lograr una respuesta humanitaria más participativa (*cf.* UNSMIL, 15.09.2017). Asimismo, coordina los esfuerzos de los asociados humanitarios para identificar las necesidades humanitarias y asegurar que la respuesta sea impulsada por las necesidades y no por la accesibilidad. La OCAH también promueve y aboga por un mejor acceso humanitario a las personas necesitadas en las áreas afectadas, incluyendo iniciativas para negociar el acceso con distintas partes en el conflicto y para mejorar el compromiso con el gobierno GNA con objeto de cumplir con sus responsabilidades por el pueblo libio. Además, la OCAH se compromete con los diferentes agentes humanitarios con el fin de asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y para proteger a las personas más vulnerables, tanto de origen libio como de otros países. En el marco de la gestión de información, la OCAH elabora datos fundamentales para informar a la comunidad internacional sobre la situación, así como sobre las principales necesidades y prioridades por la crisis humanitaria libia con tendencia de deterioro cada vez más. Mediante estos datos también se comunica sobre la

toma de decisiones estratégicas y la planificación de las respuestas (*ibíd.*). Por lo tanto, la recopilación de datos, evaluaciones conjuntas y la presentación de informes sobre las actividades humanitarias son otros aspectos claves del mandato de la OCAH. Asimismo, apoya la financiación humanitaria al realizar actividades de promoción para aumentar la colaboración de los donantes y la financiación de las actividades en Libia implementadas y previstas sobre todo por el HRP.

6.2.6.10 El Programa Mundial de Alimentos

La producción agrícola de Libia siempre ha sido muy limitada. Con gran parte de su territorio cubierto por desierto y escasamente habitado, ya antes del brote de la revolución en 2011, un 80% de las necesidades alimentarias de la población fue importado. No obstante, hasta 2012, Libia era uno de los Estados productores de petróleo más prolíficos del mundo con un gran superávit comercial (*cf.* Trading Economics 2017). Como se ha descrito más detalladamente en la parte II, capítulos 2, bajo el régimen de Gadafi, Libia se había convertido de uno de los países más pobres del mundo en el más rico de África. Hasta su muerte en 2011, los gastos por alimentos en el ámbito doméstico en cierta medida fueron compensados por un estado de bienestar que ofreció educación y atención médica gratuitas (*cf.* Henken 2011). Hoy en día, el país se ve enfrentado a un colapso total, tiene un déficit comercial enorme y la población sufre una crisis humanitaria sin precedentes. Esto incluye pobreza, inseguridad, violencia de género, desplazamientos masivos, una escasez de alimentos, de agua potable y de dinero en efectivo en los bancos, y frecuentes cortes eléctricos (OCHA, HNO 2017: 8; WFP, “Libya”, 2017). De acuerdo con el HNO 2017, la inseguridad alimentaria en la población afectada está aumentándose, lo que se debe principalmente al desplazamiento prolongado, perturbaciones en el mercado y una disminución de la producción de alimentos (OCHA, HNO 2017: 16). Como resultado, los más vulnerables están expuestos a un alto riesgo de consumo insuficiente de alimentos. Ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, muchas familias se ven obligadas a reducir el número de comidas diarias y los gastos no relacionados con alimentos, especialmente en atención médica y educación.

De acuerdo con su evaluación rápida de la seguridad alimentaria de octubre de 2016, el PMA indicó que comparado con 2015, el desarrollo del índice de la inseguridad alimentaria en todo el país se ha agravado: de las IDP, por ejemplo, unos 24% sufren de inseguridad alimentaria, mientras que en 2015 todavía no se había registrado ninguna escasez (WFP, “Rapid Food Security Assessment. Libya. September 2016”, 2016: 22-23). En general, tanto IDP como repatriados y refugiados pertenecen a los grupos de la población más vulnerables que son

dependientes de asistencia alimentaria internacional.

Desde abril de 2011, cuando los levantamientos comenzaron a causar una grave crisis de escasez de alimentos a nivel nacional, especialmente en las zonas de conflicto, el PMA proporciona socorro de emergencia en Libia. Hoy en día, el principal objetivo del PMA es apoyar a los más vulnerables al prestar asistencia vital mediante el suministro de alimentos y la protección de los medios de sustento en situaciones de emergencias. Debido al conflicto y la inestabilidad política, el UNCT en Libia fue evacuado a mediados de julio de 2014 y desde entonces opera de forma remota desde Túnez. Por lo tanto, la colaboración con organizaciones nacionales es fundamental. No obstante, el número de asociados fiables es muy limitado y el WFP sólo puede contar con dos colaboradores ejecutantes: la *Shaikh Taher Azzawi Charity Organization* (STACO) en el oeste y el sur, *LibAid* en el este, y desde septiembre de 2016 la *Ayady Al Khair Society* que proporciona alimentos en Trípoli y los alrededores (WFP, “Libya Emergency Operation 200925”, 2016: 2; WFP, “Libya”, 2017). El PMA proporciona alimentos a los más vulnerables, sobre todo IDP y refugiados, al suministrar a cada familia dos raciones de alimentos, es decir, suficiente para alimentar cinco personas por un mes. Consisten en arroz, pastas, harina de trigo, garbanzos, aceite vegetal, azúcar y puré de tomates. No obstante, cabe destacar que se asume que aparte de las raciones, las IDP tengan acceso a fuentes de alimentos adicionales. El PMA colabora con el UNCT, el HCT y el Equipo de Gestión de la Seguridad para coordinar sus actividades con otras agencias de las Naciones Unidas y para evaluar las situaciones políticas y de seguridad que afectan a las personas más necesitadas en todo el país (*ibíd.* 7). Asimismo, sigue buscando opciones para ampliar sus alianzas operativas con el fin de poder garantizar el acceso a zonas afectadas por el conflicto difíciles de alcanzar. Por lo tanto, los asociados del PMA trabajan en estrecha colaboración con los comités de crisis locales que representan a las comunidades y que pueden proporcionar al PMA las informaciones necesarias para evaluar las zonas que urgentemente requieren de asistencia alimentaria vital.

6.2.6.11 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Los ámbitos de apoyo de la FAO en Libia son la agricultura y la seguridad alimentaria, así como la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. En mayo de 2012, la FAO y el NTC, el gobierno de aquel entonces, firmaron un acuerdo de cooperación con el objeto de desarrollar el sector agrícola, la seguridad alimentaria del país y la protección de los recursos naturales. El acuerdo determinó una serie de áreas prioritarias en las que el apoyo de la FAO es urgentemente necesario, incluyendo la sanidad y producción animales y vegetales, el manejo de plaguicidas, el desarrollo de semillas, la gestión de los recursos naturales, el desarrollo de

capacidad, y el fortalecimiento institucional (cf. McIlhone, 18.05.2012). El acuerdo incluye varios proyectos estratégicos para apoyar a Libia a abordar sus metas de desarrollo hacia el aumento de la producción de alimentos y la preservación de los recursos naturales, como el agua, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria del país. Además, ante el brote de enfermedades animales transfronterizas, como por ejemplo la influenza aviar, así como el deterioro de la seguridad alimentaria, la FAO presta asistencia a través de proyectos de emergencia para prevenir y mitigar los riesgos, lo que también incluye el apoyo a pequeños agricultores mediante el suministro de semillas mejoradas que permitan impulsar su producción agrícola y producir sus propios alimentos (*ibíd.*). No obstante, cabe realzar que debido a la precaria situación de seguridad en Libia y la falta de personal en el país, los proyectos, originalmente acordados bajo un acuerdo marco de cinco años, no se han podido implementar. Consecuentemente, ha sido extendido desde 2017 a 2022 (cf. FAO, 10.08.2017). Por tanto, pese a los esfuerzos intensos hasta el momento, las iniciativas de la FAO no han podido registrar éxitos considerables.

6.2.6.12 La Organización Internacional para las Migraciones

Las principales áreas de apoyo de la OIM en Libia son el establecimiento de la *Displacement Tracking Matrix* (véase parte III, cap. 5), la estabilización comunitaria, repatriación y reintegración humanitaria, asistencia humanitaria vital, el fomento de capacidades, la protección tanto de los IDP y migrantes más vulnerables como de las comunidades de acogida afectadas, y salvar vidas en el mar a través de la implementación de diferentes programas. En cuanto a la asistencia humanitaria vital, la OIM proporciona diferentes servicios esenciales como raciones alimentarias, NFI y productos de higiene personal, material médico básico, atención médica esencial, apoyo psicosocial y servicios de orientación, para de esta manera poder satisfacer las necesidades urgentes de los IDP y migrantes vulnerables, especialmente de los detenidos y rescatados en el mar (IOM, “Libya. Humanitarian Compendium 2017”, 2017). Para la estabilización comunitaria, el programa de la OIM en el sur de Libia en Sebha y Al Qatrun tiene como objetivo mejorar la cohesión social y la estabilidad, por lo que apoya una serie de intervenciones a pequeña escala, entre ellas la restauración de la infraestructura básica y de servicios esenciales, la promoción de oportunidades de sustento, el fomento de la capacidad de la sociedad civil, actividades socioculturales y el apoyo a la gobernanza local (*ibíd.*). La DTM Libia a su vez ha sido establecida con el fin de proporcionar informaciones exactas y puntuales sobre las ubicaciones y movimientos de los IDP, repatriados y migrantes. Los datos y los resultados producidos por la DTM se utilizan para coordinar la asistencia humanitaria de manera definida y con base empírica (IOM, “DTM Displacement Tracking Matrix”, 2017). Con respecto a su

misión de salvar vidas en el mar, la OIM colabora con la Guardia Costera Libia, el Directorio de Lucha contra la Migración Irregular y las autoridades portuarias, así como con la Guardia Costera Italiana y otros agentes relevantes. Conjuntamente establecieron los denominados Procedimientos Operativos Estándar para el desembarco seguro de los migrantes rescatados en el mar, la asistencia inmediata para hombres, mujeres y niños, revisiones de vulnerabilidad y protocolos de identificación, referencias para acceder a más asistencia y el desarrollo de soluciones sostenibles (*cf.* IOM, 20.06.2017). Con el fin de mejorar la protección de los IDP y migrantes más vulnerables, así como de comunidades de acogida afectadas, la OIM aboga por la regularización de la situación de los migrantes, así como por alternativas a su detención y el acceso a servicios básicos, lo que también incluye la atención médica. A este respecto, la OIM desarrolla y difunde campañas multimedias para informar sobre prácticas migratorias seguras y los peligros de la migración irregular (IOM, “Libya Plan of Action, 2016-2017”, 2016, p. 6). En lo concerniente a la asistencia de repatriación y reintegración humanitaria, los migrantes abandonados y más vulnerables pueden acceder a una asistencia digna de repatriación voluntaria y a servicios sostenibles de reintegración en sus países de origen. En los casos particularmente vulnerables, tales como víctimas de tráfico humano o niños migrantes no acompañados, la OIM aplica procedimientos basados en los derechos y de conformidad con las normas internacionales (*ibíd.* 11). Asimismo, la OIM se enfoca en el fomento de capacidades de las entidades gubernamentales y no gubernamentales al proporcionar una amplia gama de programas de capacitación, con el fin de aumentar su capacidad de responder a las crecientes necesidades humanitarias a nivel nacional (*ibíd.* 3, 7, 10).

6.2.6.13 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Al tener como mandato principal asegurar la protección y asistencia directa a los refugiados, solicitantes de asilo, IDP, repatriados y personas apátridas, así como garantizar su acceso a soluciones duraderas, los ámbitos de acción del ACNUR son sobre todo el apoyo a estos grupos de personas en los sectores de *Health, Protection, Shelter and NFI*, y en el área de intervenciones basadas en dinero efectivo y bonos (*Cash-Based Interventions*; CBI), lo que significa un mejor acceso a medios de subsistencia. En Libia, en materia del sector de *Protection*, el principal objetivo del ACNUR es mejorar el entorno de protección, por lo que colabora con sus asociados para promover la asistencia humanitaria vital a refugiados, solicitantes de asilo, IDP y repatriados que se enfrentan a amenazas a su seguridad física y jurídica en el país. El ACNUR identifica, registra y documenta a las personas que requieren protección internacional. Libia sigue revelando una de las situaciones migratorias mixtas más complejas del mundo, con

refugiados y migrantes viajando a través de rutas peligrosas y expuestos a abusos violentos que incluyen violencia sexual, tortura, detención en condiciones inhumanas y secuestros relacionados con exigencias de rescate (UNHCR, 12.09.2017). Si bien los movimientos irregulares de migración mixta representan desafíos enormes para los Estados afectados, la detención no puede ser la respuesta. Con la protección de los refugiados siendo un aspecto clave de su mandato, el ACNUR se opone vehementemente a la detención habitual de refugiados y desplazados y critica claramente las terribles condiciones en las que se encuentran estos grupos de personas en los centros de detención. Por lo tanto, negocia con las autoridades libias sobre el establecimiento de un centro abierto de acogida que permita a los refugiados y solicitantes de asilo libertad de movimiento, dando prioridad a los más vulnerables. En tal centro de acogida, el ACNUR podría proporcionar servicios de registro, alojamiento, alimentos, asesoramiento y apoyo a sobrevivientes de violencia sexual y de género, así como soluciones en terceros países para los más vulnerables. En total, el ACNUR está trabajando para ayudar y proteger a más de 535.000 personas en Libia, incluyendo a más de 226.000 libios desplazados por el conflicto, 267.000 libios que han regresado a sus hogares, pero que siguen en situaciones críticas, y unos 42.834 refugiados y solicitantes de asilo registrados (*ibíd.*). Además, el ACNUR contribuye a mantener y mejorar la supervisión de las IDP con el fin de asegurar una respuesta humanitaria en un entorno que respete sus derechos en el país (UNHCR, 11.02.2016). El fomento de capacidades sobre los principios básicos de protección y el derecho de refugiados es otra actividad clave del ACNUR, con varias capacitaciones organizadas tanto para funcionarios libios como la sociedad civil y otros agentes relevantes (UNHCR, *Expanded Response in Libya 2017*, May 2017, pp. 11-12, 17, 19). Con respecto al sector de *Health*, el ACNUR presta asistencia médica primaria y apoyo psicosocial a refugiados y solicitantes de asilo a través de sus dos Centros de Desarrollo de la Comunidad situados en Trípoli. También presta atención médica básica a los detenidos en centros de detención. En este contexto, adicionalmente aspira a establecer tres equipos médicos móviles de emergencia para poder atender hasta 1.000 personas vulnerables en las regiones de Sabha y Al Qatrun, y para establecer equipos móviles en seis puntos de desembarco por los que podría asistir a unas 6.000 personas por mes (*ibíd.* 20). A nivel nacional, el ACNUR colabora con las autoridades sanitarias competentes para que los refugiados y solicitantes de asilo tengan acceso al sistema de salud público. Como mencionado anteriormente, también en el sector de *Shelter and NFI*, así como CBI, el ACNUR está involucrado activamente: distribuye asistencia financiera mensual a unos 3.000 refugiados y unas 2.000 IDP para cubrir sus gastos de vivienda y de necesidades básicas (*ibíd.*). Asimismo, sigue distribuyendo artículos no alimentarios, tales como artículos de higiene en las zonas urbanas y en los centros de detención, y continúa proporcionando NFI vitales a las IDP desplazadas recientemente.

6.2.6.14 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

La asistencia humanitaria de UNICEF en Libia cubre todo el país con un enfoque particular en Bengasi, Trípoli y Sabha. En el marco de la campaña *Together for Children* con 28 municipios colaborando a nivel nacional, firmó una serie de Memoranda de Cooperación (UNICEF, 31.03.2017, p. 3). La cooperación con los municipios es una herramienta clave para poder evaluar las necesidades, la supervisión y la promoción de la asistencia humanitaria. Entre los objetivos principales de dicha cooperación destaca la liberación de niños reclutados por grupos armados. En el sector de *Education*, UNICEF apoya el denominado Sistema de Información de la Gestión de Educación (EMIS) y brinda apoyo de emergencia a través de la rehabilitación de escuelas, incluyendo de las instalaciones de agua y saneamiento, y a través del fomento de capacidades de maestros sobre educación en emergencias. Asimismo, proporciona clases de recuperación para niños que no han visitado la escuela (*ibíd.* 7). El programa de protección de los niños de UNICEF apoya el establecimiento de un entorno protector para los niños mediante el fomento de capacidades institucionales en el sistema judicial, la promoción de la liberación y reintegración de niños asociados con grupos armados y el establecimiento de zonas de juego seguras para los niños. UNICEF también continúa sensibilizando sobre el riesgo de las minas (UNICEF, August 2016, p. 1). Las intervenciones de UNICEF en el sector de WASH se dirigen a unas 400.000 personas afectadas por el conflicto y tienen como objetivo mejorar la situación general de salud, el acceso a agua, saneamiento e higiene para las familias afectadas, así como mejorar las instalaciones de WASH en las escuelas (*ibíd.* 5). En este contexto, también proporciona apoyo en el desarrollo de capacidades técnicas a nivel de municipios y para asociados nacionales tanto en Trípoli como en Bengasi. En el sector de *Health*, UNICEF, la OMS y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades acordaron un Memorando de Cooperación para apoyar los derechos de todos los niños en Libia, en especial el derecho a la supervivencia y al desarrollo, principalmente mediante la vacunación. En 2016, lograron vacunar unos 1,36 millones de niños contra polio con lo que lograron una cobertura universal (UNICEF, “Libya”, 25.01.2017). El programa para la juventud de UNICEF abarca a niños y jóvenes de los 10 a 24 años de edad a través de una serie de intervenciones de desarrollo juvenil. Programas integrales y sensibles al género han sido adaptados para fomentar la inclusión social, y de esta manera satisfacer las necesidades de los niños en diferentes ámbitos y servir como modelos para la expansión geográfica de los mismos a nivel nacional (EU Neighbours, 10.08.2016). A largo plazo, estos programas deben contribuir al desarrollo de políticas y servicios nacionales para la juventud.

6.2.6.15 La Organización Mundial de la Salud

Las condiciones precarias en el sector de *Health* siguen siendo uno de los problemas más alarmantes en Libia. De acuerdo con estudios recientes llevados a cabo en el marco del HRP 2017 para Libia por la OMS y el Ministerio de Salud de Libia, de unos 97 hospitales examinados, 17 están cerrados por daños sufridos durante el conflicto y solamente cuatro están operativos entre 75 y 80%. De los 80 hospitales restantes, 48, es decir unos 60%, operan con menos de 50% de su capacidad (WHO, “Libya Health Emergencies and Humanitarian Update. June-July 2017”, July 2017, p. 1). La OMS y los asociados de salud nacionales e internacionales colaboran estrechamente para maximizar la asistencia necesaria, reducir el número de muertes y enfermedades evitables y para prevenir brotes graves. En este contexto, en marzo de 2016, la OMS junto con el Ministerio de Salud, asociados de las Naciones Unidas y otras partes interesadas examinaron las acciones prioritarias identificadas y los planes de acción propuestos para el sistema de salud de Libia. Se estableció un equipo principal de administradores nacionales de los servicios de salud para fortalecer la capacidad de atención de emergencia en los hospitales libios (cf. WHO, 20.03.2016). También aspiran a establecer una “unidad multisectorial de preparación y respuesta a emergencias” (EPRU) en el Ministerio de Salud que les permita a los responsables responder a diferentes situaciones de emergencias. Otra iniciativa fundamental es el sistema de alerta precoz y de respuesta (EWARS) que se implementó en febrero de 2016 con el fin de detectar cualquier fenómeno de enfermedades transmisibles anormales y para proporcionar una respuesta adecuada y oportuna (cf. UNSMIL, 16.06.2017). Para una mayor observación, el sistema del EWARS se extenderá de 32 a 100 sitios centinela. Los equipos de respuesta rápida no sólo mitigarán los brotes, sino también responderán a otras emergencias graves en colaboración con la EPRU. Asimismo, con el apoyo financiero de la UE, la OMS ha comenzado a implementar un proyecto de dos años para fortalecer los sistemas de gestión de la cadena de suministro e información de salud, permitiendo a los órganos decisorios tomar decisiones fundamentadas y abordar el problema de los precios inflados en la adquisición de medicamentos (*ibíd.*). Siendo el responsable principal, la OMS lidera la coordinación del sector de *Health* en Libia y trata de implementar servicios médicos adecuados a nivel nacional. A este respecto, organiza reuniones de coordinación mensuales con todos los asociados ejecutantes del sector de en Túnez y Trípoli, incluyendo colaboradores nacionales e internacionales, agencias de la ONU, comunidades de donantes y funcionarios sanitarios del gobierno (WHO, “Libya Health Emergencies and Humanitarian Update. June-July 2017”, July 2017, p. 2). El fomento de capacidades de los médicos y paramédicos en directrices actualizadas es otro proyecto llevado a cabo en el marco de la asistencia humanitaria, tanto a nivel nacional y regional como mundial. La OMS se está enfocando más en desarrollar capacidades institucionales como por ejemplo el establecimiento de

la EPRU, un sistema de almacenamiento de suministros médicos, escuelas de enfermería y un sistema moderno de información sanitaria (*ibíd.* 4). Además, en colaboración con sus asociados, provee suministros de medicamentos vitales y material médico esencial en todo el país. El fortalecimiento de los servicios de atención médica para todos, incluidos los migrantes y refugiados, es otra misión clave. La OMS, en colaboración con el Ministerio de Salud y las Naciones Unidas, así como con ONGs internacionales y nacionales, está negociando un contrato con la UE para fortalecer la atención primaria, secundaria y terciaria³¹¹ que no sólo beneficiará a la población local, sino que también garantizará una cobertura médica digna y gratuita, tanto para las IDP como para migrantes y refugiados.

6.2.6.16 El Fondo de Población de las Naciones Unidas

En el marco de la asistencia humanitaria, el FPNU en Libia está enfocado en los ámbitos de la salud reproductiva, violencia sexual basada en el género y el empoderamiento juvenil, así como en datos y estadísticas demográficos. Debido al conflicto armado desde 2011, la debilidad del sistema de salud en Libia ha agravado cada vez más, especialmente en las zonas afectadas, lo que empeora aun más los servicios de salud ya insuficientes. El servicio de salud reproductiva es uno de los sectores más afectados en todo el país, lo que se debe sobre todo a perturbaciones de la red de la atención primaria de salud, el deterioro o la destrucción de los principales centros de salud, la falta de suministros y medicamentos obstétricos, y débiles capacidades gerenciales a nivel gubernamental y local (*cf.* OCHA, “Libya 2015-2016. UNFPA”, 2016: 2). Asimismo, hay que tener en cuenta que alrededor de 80% de las enfermeras y parteras eran de origen extranjero, principalmente de las Filipinas y otros países árabes. Con el estallido de la guerra civil en 2014, la evacuación del personal de instituciones internacionales, así como con la huida de empleados extranjeros, el acceso a los servicios de atención obstétrica se vio obstaculizado drásticamente debido a la ausencia casi completa de mujeres profesionales de salud.

Por lo tanto, en lo concerniente a la salud reproductiva, el FPNU se esfuerza para restablecer y facilitar el acceso a los centros de salud y hospitales de atención primaria y secundaria, sobre todo para mujeres embarazadas y en edad fértil, y para promover la provisión de servicios de calidad a

³¹¹ “Clásicamente se distinguen tres niveles de atención. El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de salud de la población. El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen”. (JULIO, Dr. Vignolo *et al.*, 2011: 12).

todas las personas en Libia al proporcionar apoyo a las intervenciones de salud básicas y vitales, mediante la provisión de botiquines de emergencia de salud reproductiva y material esencial para los centros de atención primaria y secundaria de salud. En este contexto, también hace hincapié en proporcionar intervenciones básicas vitales en áreas difíciles de alcanzar a través de servicios médicos móviles. Asimismo, el FPNU se ocupa del fortalecimiento de capacidades de los asociados de salud locales para brindar servicios de calidad a todas las personas en Libia. En el ámbito de la violencia sexual basada en el género, el FPNU colabora con el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes, así como con la sociedad civil y las comunidades al brindar asistencia técnica para mejorar la coordinación entre los agentes nacionales sobre el terreno, aumentar la capacidad nacional, y combatir la violencia sexual a través de respuestas adecuadas y medidas de prevención. Al igual que en los demás sectores, el aspecto de género es fundamental en la asistencia humanitaria. Por lo tanto, el FPNU se ocupa de proteger y empoderar a las mujeres a través de capacitación y sensibilización adecuada, así como del establecimiento de centros comunitarios de mujeres donde se brindan apoyo psicosocial y actividades sociales a mujeres desplazadas (UNSMIL, 19.05.2017; UNSMIL, 15.09.2017).

En materia del empoderamiento juvenil, en colaboración con asociados gubernamentales y la sociedad civil, el FPNU lanzó el desarrollo de un documento de política juvenil hacia una estrategia nacional para la juventud, con el fin de presentar un análisis detallado sobre la situación y los desafíos actuales de los jóvenes libios. De este modo aspira a poder fomentar sus capacidades y unirlos mediante aplicaciones móviles para convertirlos en agentes activos en el desarrollo de la nueva Libia (*ibíd.*).

Con respecto a los datos y estadísticas demográficos, el FPNU colabora estrechamente con el gobierno y los municipios libios para modernizar el Sistema Nacional de Estadística, apoyar la planificación de bases empíricas y mejorar la calidad, así como el acceso y la utilización de los datos. El FPNU también respalda la Oficina Central de Estadística y Censo para llevar a cabo unas evaluaciones regulares de las necesidades multisectoriales a nivel nacional a fin de poder proporcionar a las instituciones libias nacionales y locales, así como a las agencias internacionales humanitarias y de desarrollo datos precisos para poder realizar una intervención humanitaria rápida (*cf.* París 21, 01.03.2016). En este contexto, y en cooperación con ONU-Habitat, desde 2016 lleva a cabo una iniciativa para perfilar ciudades. El perfil de las localidades examinadas proporciona análisis espaciales de ciudades y barrios, revisa la funcionalidad de la infraestructura y servicios urbanos y analiza el impacto de la crisis en las personas y sus mecanismos de adaptación (UNSMIL, 15.09.2017).

6.2.6.17 El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

La inestabilidad y la violencia continua en la crisis libia han resultado en que alrededor de 1,3 millones de personas requieren urgentemente de asistencia humanitaria (OCHA, HNO 2017: 5; véase parte III, cap. 6.2), de las que los IDP, refugiados y migrantes presentan los grupos más necesitados de protección. No obstante, un panorama completo basado en datos comparables sobre estas poblaciones es difícil de recopilar, lo que se debe sobre todo a las estructuras políticas escindidas y la gestión remota de las operaciones por parte de la ONU y otros agentes internacionales. Si bien varios agentes, incluidos las autoridades locales y asociados humanitarios en los diferentes sectores, continuamente elaboran análisis de la situación, un análisis integral e intersectorial podría proporcionar pruebas necesarias para diversas iniciativas humanitarias de estabilización y recuperación (*cf.* JIPS 2017).

La agencia ONU-Habitat, con sede principal en Nairobi, es autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, así como viviendas adecuadas para todos. Asimismo, dentro del sistema de la ONU es la agencia principal para coordinar las actividades en el campo de los asentamientos humanos. A través de la *Habitat Agenda* asume el mando en la prevención de desastres, preparación, mitigación y las capacidades para la rehabilitación posterior a una crisis en asentamientos humanos (UN, *Habitat Agenda*, 2003: 74). Las responsabilidades globales de ONU-Habitat en emergencias, así como en las respuestas humanitarias durante y después de una crisis abarcan el apoyo a los gobiernos nacionales, las autoridades locales y la sociedad civil en el fortalecimiento de sus capacidades de gestionar catástrofes naturales o provocados por el hombre que afectan a los asentamientos humanos. La experiencia ha demostrado que existe un potencial elevado para las posibilidades de desarrollo en el periodo posterior de una crisis, lo que constituye un principio clave de ONU-Habitat al desplegar sus esfuerzos a la mayor brevedad posible después de un desastre, con un enfoque especial en ciudades y asentamientos humanos (UN-Habitat, “Tripoli City Profile 2016”, p. 1).

En el contexto libio, por más de dos décadas ONU-Habitat ha trabajado en apoyo de la Agencia de Planificación Urbana en cuestiones de planificación espacial. A partir de 2002, también ha abarcado la prestación de respaldo institucional y del desarrollo de capacidades con el fin de lograr una política nacional de planificación espacial entre 2006 y 2030, un número considerable de planes regionales y subregionales, así como el diseño básico de ciudades, pueblos y aldeas (UNSMIL, 15.09.2017). Desde 2016, en colaboración con el FPNU, ONU-Habitat emprende una iniciativa para perfilar ciudades. El perfil de las localidades examinadas proporciona análisis espaciales de ciudades y barrios al considerar los cambios demográficos resultantes del desplazamiento forzado, revisa la operatividad de la infraestructura y los servicios urbanos

dañados por el conflicto, incluyendo agua, saneamiento, salud y educación que pueden verse afectados por la rápida afluencia de poblaciones, y analiza el impacto de la crisis en las personas y sus mecanismos de adaptación.

Los análisis también revisan la economía local, los costes de vida, el sector inmobiliario y el mercado de alquiler, así como alimentos y servicios de empleo (*ibíd.*). A través del análisis espacial, multisectorial e intersectorial mediante el mapeo del sistema de información geográfica (GIS), se proporciona una perspectiva general y dinámica de las ciudades al identificar los barrios críticos necesitados y las prioridades claves para la acción en cada sector humanitario. ONU-Habitat apoya a los esfuerzos de estabilización, recuperación y reconstrucción de las Naciones Unidas en las zonas urbanas a través de la provisión de asistencia técnica en la planificación espacial y la rehabilitación de viviendas e infraestructura. Asimismo, aborda cuestiones relativas a los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad, en particular para las poblaciones desplazadas que desean regresar, y apoya el desarrollo institucional y las políticas en el ámbito de viviendas, de la planificación urbana y los asuntos relacionados con las tierras (*ibíd.*).

6.2.6.18 La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

Como indica el nombre de este organismo, ONU Mujeres se ocupa principalmente de cuestiones relativas a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En el contexto de la Primavera Árabe, en 2012 fue establecida la Oficina Regional de los Estados Árabes (ROAS) en El Cairo, Egipto. La oficina abarca 17 países de la región de los Estados árabes y brinda apoyo directo a las oficinas nacionales de ONU Mujeres en Egipto, Irak, los territorios palestinos ocupados, Jordania y a la Oficina Multinacional en Marruecos que cubre Marruecos, Túnez y Argelia (ONU Mujeres, “Oficinas regionales y en el país”, 2017). Además, por diversos programas ONU Mujeres también tiene presencia en el Yemen, Líbano, Siria y Libia. La Oficina Regional colabora con las oficinas en los países respectivos para apoyar a los gobiernos nacionales a cumplir con sus compromisos en materia de igualdad de género según las leyes nacionales e internacionales aplicables. Asimismo, fomenta intervenciones programáticas en los seis ámbitos temáticos identificados en el plan estratégico de la organización para 2014 a 2017 que incluye:

- promover la participación y el liderazgo de las mujeres;
- fomentar el empoderamiento económico de las mujeres;
- poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas;

- implementar la agenda de paz y seguridad de las mujeres³¹²;
- fortalecer la gobernanza y la planificación nacional, con el fin de mejorar la rendición de cuentas con respecto a los compromisos y prioridades en materia de igualdad de género; y
- consolidar e implementar el marco de política global y normativo para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (UN Women, “Regional Office for the Arab States”, 2017).

Desde 2014, ONU Mujeres se ha asociado con la sociedad civil libia y organismos gubernamentales para abordar los diferentes obstáculos impidiendo a las mujeres participar activamente en el ámbito público y político. En sus intervenciones, ONU Mujeres se ha enfocado en la participación política de las mujeres con el objetivo de garantizar que las mujeres libias participen de manera equitativa en los procesos políticos de transición y que estén representadas en los órganos políticos decisorios en los diferentes niveles. La mayor parte del trabajo se ha podido realizar a través del denominado proyecto *Promoting Libyan Women as Agents of Peace* financiado por el gobierno suizo y el programa *Spring Forward for Women* subvencionado por la UE y llevado a cabo en colaboración con UNSMIL (UNSMIL, 15.09.2017). Mediante estas intervenciones, más de 50 mujeres representantes de los órganos gubernamentales y de la sociedad civil tenían la oportunidad de aumentar sus capacidades para participar activamente en el diálogo nacional y el periodo de transición al fortalecer sus capacidades en la promoción de sus derechos, la resolución de conflictos y negociaciones, así como en la redacción de una nueva constitución. Asimismo, se les proporcionó una plataforma para discutir sus necesidades y prioridades, seguido por otra reunión de 38 de las susodichas mujeres libias en Montreux, Suiza, en 2015 donde emitieron su *Minimum Women’s Peace Agenda for Libya* con el fin de asegurar la plena participación de las mujeres en los procesos humanitarios, de pacificación y de transición. Más recientemente, en septiembre de 2016, ONU Mujeres organizó una reunión sobre la temática de ‘garantizar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos humanitarios, de paz y de recuperación en la fase de transición en Libia’ (UN Women, 07.09.2016). La reunión brindó la oportunidad de reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como medios esenciales hacia la consolidación de la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Los participantes libios y la comunidad internacional intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre el fomento del compromiso y la participación igualitaria y activa de las mujeres en todo el ámbito humanitario.

³¹² En noviembre de 2015, ONU Mujeres, junto con UNSMIL y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, apoyaron a un grupo de 38 mujeres libias representando a oponentes políticos y agentes de la sociedad civil a unirse en Montreux, Suiza, y a redactar una *Minimum Women’s Peace Agenda for Libya*. Se centra en proteger y promover el derecho de las mujeres mediante una representación de 30% en los órganos gubernamentales y electos, fijar la igualdad de género en la nueva constitución y reformar las leyes para proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Alcanzaron un consenso sobre cómo asegurar la paz y proteger los derechos de las mujeres durante los procesos de pacificación y transición (UN Women, 10.11.2015).

6.2.6.19 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El PNUD ha estado trabajando en Libia desde 1976. A lo largo de los años, el apoyo prestado ha sido adaptado a las circunstancias respectivas para poder cumplir con las prioridades emergentes en el país. Desde el estallido de la guerra civil en 2014 y el deterioro de la situación humanitaria, sigue apoyando el proceso de transición hacia un acuerdo político inclusivo, una gobernanza responsable, la estabilización y la recuperación económica. La cooperación actual del PNUD se basa en tres pilares de trabajo: (1) estabilización y recuperación; (2) gobernanza de transición; y (3) compromiso cívico y el diálogo local (UNDP, “Our work. Overview”, 2017). En lo que concierne a la estabilización y recuperación, el PNUD se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de estabilización en el país y acortar el periodo crítico de transición, desde la ayuda humanitaria hasta el desarrollo sostenible y la gobernanza democrática. Liderado por el GNA, en 2016 se lanzó un Fondo de Estabilización para Libia constituyendo una iniciativa multinacional respaldada por el PNUD que tiene como objeto proporcionar mejoras concretas y visibles a nivel local. En este contexto, también se brinda apoyo para rehabilitar la infraestructura dañada, fortalecer las competencias de las autoridades locales con el fin de poder abordar las necesidades de la población, y mejorar las capacidades de mediación local y de resolución de conflictos (UNSMIL, 15.09.2017). Con respecto al ámbito de la gobernanza de transición, cabe mencionar que desde el estallido del conflicto armado en 2011, el PNUD ha colaborado estrechamente con UNSMIL para apoyar el proceso de transición democrática en el país. El PNUD apoyó a la Comisión Electoral Nacional de Alto Nivel (HNEC) en la organización de tres elecciones a nivel nacional: para el GNC en 2012, y para la Asamblea Redactora de la Constitución y la HoR en 2014. Las áreas prioritarias incluyen el fortalecimiento del diálogo político, asistencia en la elaboración de una constitución, y la consolidación de un Estado de derecho. En el ámbito del compromiso cívico y diálogo local, el PNUD apoya los esfuerzos y acciones hacia el empoderamiento de la sociedad civil, el fortalecimiento de los procesos de justicia transicional y la capacitación de mujeres para fomentar su participación en la toma de decisiones. La cooperación en este ámbito incluye el apoyo al compromiso cívico en la transición de Libia, el trabajo con mujeres libias para fortalecer su participación política a través del proyecto AMAL (Esperanza), y el apoyo a procesos de justicia transicional a través del diálogo y la resolución de conflictos entre diferentes comunidades (*ibíd.*; UNDP, “Our work. Overview”, 2017).

6.2.7 Reflexiones finales: la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria internacional para Libia

Más de siete años han pasado desde el estallido de los levantamientos que provocaron la caída de Muamar el Gadafi en 2011 y el surgimiento de un conflicto bélico desde 2014 sin precedentes.

Mientras que en 2011 en el contexto de los levantamientos violentos durante la Primavera Árabe el número de las IDP alcanzó 550.000 (IDMC 2012), en 2014, tras el estallido de la guerra civil, se produjo otro flujo de desplazamiento forzado: a principios de 2015, el ACNUR informó que de acuerdo con datos recopilados en diferentes regiones del país, como mínimo unas 377.500 personas fueron desplazadas de sus hogares, de las que la mayoría no ha podido regresar hasta la fecha. De acuerdo con la Media Luna Roja Libia, a principios de 2016, hubo más de 500.000 IDP libias en estado urgente de apoyo humanitario (*cf.* Ben Ibrahim, 20.02.2016; véase parte III, cap. 4.1). Según el IDMC, se estima que en 2016 hubo unas 304.000 IDP y 8.800 refugiados en el país. Asimismo, entre enero y junio de 2017, unas 34.000 personas fueron desplazadas por la violencia y el conflicto.

En total, más de 1,3 millones de personas, incluidos los IDP, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades de acogida requieren urgentemente de asistencia humanitaria. La inestabilidad continua, junto con la ubicación geográfica de Libia, han estimulado las redes de contrabando que se aprovechan de los flujos masivos de refugiados y migrantes desesperados intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa; un viaje en el que entre enero y julio de 2017 al menos 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto o desaparecido, lo que según la tendencia ha convertido el año en el más mortífero (Samuelson, 06.07.2017).

En este contexto, es fundamental que los organismos de la ONU intensifiquen el diálogo con los altos funcionarios del GNA, incluidos los ministros de Educación, Asuntos Sociales y responsables de cuestiones relativas a los migrantes y desplazados, con el fin de definir medidas prácticas que se pueden asumir para hacer frente a la creciente crisis en Libia.

En lo que concierne a las miles de personas sin hogar, es imprescindible que el ACNUR siga cooperando estrechamente con la OIM y otras agencias humanitarias en el país con objeto de ayudar a las autoridades a gestionar mejor los flujos de refugiados y migrantes a través del país y mejorar los mecanismos de protección. No obstante, hay que tener en cuenta que las nuevas realidades y patrones migratorios presentan una complejidad enorme con impacto global, por lo que es indispensable abordar las causas raíces, principalmente la pobreza, en los países de origen. Dado que los migrantes y refugiados terminan en Libia debido a una variedad de problemas en otros lugares, es esencial fortalecer las formas en las que los países de tránsito gestionan los flujos.

Desde el derrocamiento de Gadafi en 2011, cientos de miles de personas en Libia han sido afectadas gravemente por el colapso total del orden público, la atención médica inadecuada y la falta de medicamentos esenciales, agua potable, alimentos, refugio adecuado y educación. Por lo tanto, no se deberían subestimar los desafíos de operar en un entorno tan inestable y peligroso como Libia. La capacidad de las agencias humanitarias de acceder y brindar efectivamente la protección y asistencia que tanto se requiere es un reto constante. Las personas a las que se intenta ayudar, así como el personal mismo y todos los demás trabajadores humanitarios viven y operan bajo una tensión y riesgos enormes. Con respecto al apoyo para refugiados y solicitantes de asilo, cabe señalar que aparte del establecimiento de nuevas oficinas y centros de desarrollo comunitario, el ACNUR planea aumentar su presencia en los puntos de embarque y desembarque para las personas rescatadas en el mar en estrecha cooperación con la OIM y otros asociados. Entre 2016 y mediados de 2017, el ACNUR ha podido lograr el rescate de más de 800 refugiados y solicitantes de asilo vulnerables (*ibíd.*), un número considerable que aspira a aumentar.

Pese a los desafíos y peligros enormes, es indispensable que la acción humanitaria continúe y que obtenga más atención y apoyo por parte de la comunidad internacional. Hay que estar consciente de que sin la acción inmediata, la crisis actual agravará aun más: la limitada seguridad física, jurídica y material, la restringida libertad de movimiento, los ataques contra civiles y la infraestructura civil, así como niveles alarmantes de violencia, muertos causados por minas terrestres y dispositivos explosivos tendrán un impacto cada vez peor en las 1,3 millones de personas ya necesitadas en este momento. Una falta de acción también puede llevar al deterioro de los problemas existentes en materia de protección, y a un aumento potencial de personas necesitadas de protección. A este respecto, mujeres y niños seguirán siendo los más gravemente afectados por la crisis, siendo víctimas tanto de violencia física y verbal como de abuso psicosocial. Como se ha mencionado en los subcapítulos anteriores, sobre todo los niños seguirán corriendo un alto riesgo del reclutamiento forzado por milicias y del tráfico sexual y de drogas. Los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes seguirán siendo particularmente vulnerables a la discriminación y marginación. Sin ninguna red social en la que pueden confiar, en centros de detención superpoblados en malas condiciones de vida, y por la falta de acceso a servicios vitales, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes siguen estando expuestos a abuso, acoso y explotación por contrabandistas. Frente a las circunstancias dadas, seguirán intentando cruzar el Mediterráneo en la búsqueda de seguridad y una vida mejor en Europa. La incapacidad de protegerlos les expone aun más al riesgo de marginación y discriminación.

Fallar en proporcionar la asistencia humanitaria internacional requerida urgentemente, conllevará un impacto grave, probablemente sin precedentes, en las 1.3 millones de personas necesitadas en Libia. Implicaría también un aumento de las personas más vulnerables que dependen de la

asistencia humanitaria para poder satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, sin apoyo inmediato, estas personas necesitadas de atención médica urgente no tendrán acceso a asistencia sanitaria y medicamentos vitales, lo que constituye una amenaza para millones de vidas. Si la respuesta humanitaria fallara en este sector, el efecto sobre los servicios de salud será devastador y impondrá cada vez más tensión en los recursos ya estirados al límite. Más de 500.000 personas no tendrán acceso adecuado a agua potable, higiene y saneamiento básico, por lo que es probable que se produzcan brotes de enfermedades transmisibles evitables y transmitidas por el agua, si no se establece una prevención adecuada y medidas de emergencia.

Además, si no se presta la asistencia necesaria, más de 552.000 personas no tendrán refugios dignos y artículos NFI, lo que les obligaría a vivir en espacios públicos colectivos inadecuados (ACAPS 2017). Los niños han sufrido especialmente en este conflicto y seguirán siendo las víctimas más vulnerables de la crisis. El conflicto continuo ha dejado más de 315.000 niños sin acceso a educación (UNICEF, “Libya Humanitarian Situation Report”, 2017: 1). Como en todas las crisis humanitarias, los más vulnerables serán los más afectados, con los impactos conllevados como pobreza, la falta de alimentos, el riesgo de enfermedades e inseguridad física y social convirtiéndose en una realidad prolongada.

No obstante, hay que tener en cuenta un aspecto muy preocupante a nivel global que obstaculiza, y, en muchos casos, incluso paraliza a los agentes humanitarios y sus acciones necesarias en situaciones de emergencia: organizaciones como el ACNUR por lo general carecen de recursos financieros urgentemente requeridos. Por lo tanto, es preciso tener cuidado al interpretar las promesas hechas en el marco de conferencias de donantes. De acuerdo con Axel Bisschop, el director financiero del *Central Emergency Response Fund* del ACNUR, la demanda siempre es mucho mayor que los ingresos. Y si en alguna conferencia se hacen promesas, no significa automáticamente que el dinero se transmita ese mismo día. A veces tarda meses hasta que se realicen las transferencias esperadas (cf. Engelhardt 2016: 12). Una de las razones principales es la prioridad que algunos gobiernos dan a organizaciones humanitarias en el propio país, por lo que transferencias a la ONU y sus agencias se realizan mucho más tarde. Aunque otros donantes tengan razones distintas para su demora, las consecuencias siempre son las mismas. Si los fondos de ayuda requeridos no se pagan de inmediato, entonces las Naciones Unidas tienen que detener ciertos programas hasta que el dinero esté disponible para poder seguir con su realización, lo que evidentemente constituye un problema enorme para los agentes humanitarios *in situ*. Constantemente están confrontados con la toma de decisiones sobre qué acciones son particularmente importante y con cuáles tienen que esperar para poder economizar los gastos. Pero organizaciones como el ACNUR no disponen de muchas reservas para poder anticipar dinero. El hecho de que la ayuda financiera prometida muchas veces se transfiere demasiado

tarde es un problema extremadamente preocupante para los trabajadores humanitarios. Sobre todo las organizaciones globales tienen plazos largos de planificación, lo que se debe, entre otras cosas, a las docenas de agentes involucrados en cada acción. Mediante un mecanismo determinado, los donantes transfieren los fondos prometidos a la ONU, es decir, al *Central Emergency Response Fund* (CERF) gestionado por la OCAH. De allí se los reparte a las organizaciones humanitarias internacionales que entonces a su vez transfieren la ayuda a los agentes *in situ* (cf. UN, “Deliver Humanitarian Aid”, 2017). Sin embargo, tal cadena sólo puede funcionar si los donantes pagan precozmente. La gran incertidumbre sobre cuándo se transfieren los fondos de ayuda prometidos causa sufrimiento innecesario para las personas afectadas, dado que muchas veces conlleva recortes significantes, por ejemplo en las raciones de alimentos como lo demuestra el caso de Siria, donde el PMA se vio obligado a reducir los suministros de alimentos para las víctimas del conflicto, debido a una falta enorme de fondos (The Guardian, 18.09.2014). Dado que el público apenas se entera de si los supuestos donantes realmente realizan los pagos anunciados, frecuentemente las agencias humanitarias no reciben nada. Este dilema se ha convertido en una situación tan alarmante que en octubre de 2015, António Guterres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de aquel entonces, declaró:

In the past, we used to have emergencies and protracted refugee situations; now we seem to have more and more protracted emergencies. For years, we struggled to put displacement on the global political agenda - not always successfully. (...) As the explosion in humanitarian needs inevitably outpaces the very generous support of our donor community, the gap between the requirements and the resources we have is growing steadily.

Let me be clear: the humanitarian system is not broken, as some try to argue - it is far more effective than many others, from development to security areas. But the humanitarian system is financially broke. We are no longer able to meet even the absolute minimum requirements of core protection and lifesaving assistance to preserve the human dignity of the people we care for. (Guterres, A., 05.10.2015)

En este contexto, cabe recurrir a algunas estadísticas de la ONU, según las cuales queda claro que las necesidades financieras para el apoyo humanitario a nivel mundial están aumentándose cada vez más, mientras que los fondos recibidos se mantienen limitados: a finales de 2016, los requisitos financieros ascendieron a USD 22,1 mil millones con los fondos alcanzando USD 13,1 mil millones a finales del año. En comparación, para 2017 se han requerido aproximadamente USD 23,5 mil millones, pero hasta el 21 de junio, las Naciones Unidas sólo pudieron registrar fondos por valor de USD 3,5 mil millones. En el caso de Libia, este dilema se refleja también: para 2017, de los USD 151 millones necesitados, los fondos recibidos sólo han ascendido a USD 85,1 millones, lo que corresponde a unos 56% (OCHA, “Global Humanitarian Overview 2017”). El personal de la ayuda humanitaria dependiente de este dinero no puede hacer nada al respecto, dado que ningún gobierno está obligado a cumplir con promesas hechas en el marco de conferencias de donantes. Para programas como por ejemplo el

PMA, que se financia exclusivamente mediante contribuciones voluntarias, esto significa recortes masivos en la realización de sus proyectos. Aunque haya acuerdos que determinan cuánto se prevé pagar, el PMA no puede hacer nada si en algún momento un determinado gobierno decide no querer apoyarlo (*cf.* Engelhardt 2016: 14).

Pero frente a las crisis cada vez más complejas y prolongadas, debería ser del interés común de la comunidad internacional asegurar que las organizaciones humanitarias reciban apoyo debido para poder prevenir el surgimiento de condiciones progresivamente más dramáticas. Es la falta de apoyo *in situ* la que contribuye significativamente a la decisión de muchísimos refugiados abandonar sus países nativos y huir hacia Europa. Más asistencia directa sobre el terreno podría ayudar a eliminar por lo menos una de las causas principales que originan la migración y el éxodo. Es por eso que en septiembre de 2015, Frank-Walter Steinmeier, el Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania y presidente del G-7 de aquel entonces, invitó a una conferencia de donantes en la que al final los Estados participantes acordaron proporcionar unos USD 1,8 mil millones a las organizaciones humanitarias de la ONU. Pero cabe mencionar que en los meses siguientes resultó imposible determinar quién había prometido qué cantidad de dinero. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania no pudo presentar ninguna lista de donantes con un desglose detallado sobre los compromisos. Se puede suponer que tal vez ni siquiera existe alguna lista, dado que ninguna de las promesas hechas durante la conferencia se había afirmado de forma vinculante. Esto también sugiere la declaración de un diplomático alemán en Nueva York que afirmó que no se disponía de ninguna lista (*ibíd.* 16). Frente a estas inseguridades financieras, es evidente por qué las Naciones Unidas disponen de su propio sistema de control que contrasta los fondos prometidos de los realmente transferidos. Ubicado en la OCAH, el denominado Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) es la base de datos más completa sobre pagos de ayuda en todo el mundo. Sólo después de que un gobierno haya confirmado su apoyo por escrito, es registrado como compromiso en el sistema (*cf.* ReliefWeb, 19.04.2013). En general, puede tardar alrededor de un mes hasta poder confirmar los pagos de los donantes y transferencias a los receptores, especialmente cuando se trata de grandes sumas de varios donantes. No obstante, también hay casos en los que tarda años hasta que los pagos se realicen (Engelhardt, 14.12.2015).

Promesas sobre millones de dólares tienen impactos considerables en la política. Por eso es tan importante que sean respetadas y que el público en los países donantes y receptores también tenga la posibilidad de controlarlas. Solamente de esta manera se puede garantizar que los gobiernos no sólo utilicen las conferencias de donantes como plataforma para darle un toque humanitario a su política internacional, sino que realmente cumplan con sus promesas. Solamente de esta forma será posible mejorar el sistema del *Global Protection Cluster* y fomentar los agentes

humanitarios, tanto internacionales como regionales y locales, así como sus respectivos sectores operativos del *Cluster Approach* como *Health, Protection, Shelter and NFI, WASH, Food Security, Education, Coordination y Refugee and Migrant Response* para poder garantizar el suministro de servicios vitales a las víctimas en situaciones de crisis humanitarias.

En lo que respecta al fenómeno del desplazamiento, es evidente que son los conflictos armados los que constituyen el principal factor causante. Parece que nada es más difícil que terminar un conflicto bélico, sobre todo cuando se trata de una crisis prolongada. Vivimos en un mundo caótico en el que las relaciones de poder son inciertas y donde no podemos contar con ningún sistema de gobernanza global eficaz. Como consecuencia, prosperan tanto la impredecibilidad como la impunidad, las guerras se prolongan por años y, como resultado, millones de personas son desplazadas. Tenemos que ser conscientes de que no habrá soluciones humanitarias a las crisis humanitarias. Soluciones duraderas y sostenibles sólo podrán lograrse a nivel político. No habrá ninguna mejora real hacia la paz hasta que los que financian, arman y apoyan las partes beligerantes en un conflicto superen sus enemistades e intereses divergentes, y reconozcan que en guerras nunca habrá vencedores. Aunque sea una idea idealista, lograr acordar un camino común para poner fin al derramamiento de sangre debería constituir la única opción para todas las partes involucradas.

Un elemento clave hacia un mundo mejor son las respuestas humanitarias exhaustivamente discutidas en los subcapítulos anteriores. Sobre todo las intervenciones humanitarias en combinación con proyectos de desarrollo tienen que recibir más apoyo internacional para poder vincularse y colaborar más estrechamente, y de este modo poder cooperar desde el inicio de una crisis, impedir nuevos conflictos, apoyar a las comunidades de acogida y preparar el camino hacia soluciones duraderas. Las crisis humanitarias masivas a gran escala pueden provocar enormes problemas estructurales para los países afectados, echando por tierra los avances en materia de desarrollo logrados durante varios años. Con el fin de evitar que se produzca una nueva espiral de inestabilidad, los agentes de desarrollo deberían tener mejores instrumentos y más flexibilidad para poder actuar precoz y rápidamente en el marco de las respuestas humanitarias. Pero para lograr este fin, se requiere urgentemente una revisión y reforma fundamental de las estrategias y políticas de la cooperación al desarrollo, tanto en el marco bilateral como multilateral.

Para resumir, cabe realzar que es imprescindible considerar la complejidad de la situación, no sólo a nivel global, sino también nacional: en lo que se refiere a la crisis humanitaria en Libia, cabe realzar una vez más que se trata de una crisis de alimentos, una crisis de salud y una crisis de refugio. Tanto el agua como la higiene presentan desafíos enormes. De más de 90%, Libia depende de importaciones de su abastecimiento alimentario (FAO, 04.10.2017). Por consiguiente,

la ayuda alimentaria no sólo es precisa para los refugiados en regiones determinadas, sino a nivel nacional donde las reservas de alimentos se están agotando. Los trágicos acontecimientos que se revelan en el contexto libio deberían demostrarnos la necesidad fundamental de instituciones y fondos potentes y coordinados para ser capaces de ayudar eficazmente cuando este tipo de desastre ocurra. Todos los días, en algún lugar del mundo incontables vidas están en peligro. Programas claves con responsabilidades enormes, como de la OCAH o el ACNUR, crónicamente sufren de una carencia de fondos. Esto clarifica el problema estructural en las finanzas públicas en todo el mundo. Los programas de salud, vivienda y alimentos que verdaderamente salvan vidas y protegen a las personas de desastres naturales y provocados por el hombre pasan por alto, mientras que los presupuestos militares aumentan cada vez más. Es fácil criticar la falta de presencia *in situ* de los organismos internacionales o plantear propuestas de mejora remotamente, con toda probabilidad sólo aplicables en teoría, mientras que las crisis se están agravando. De momento, los ojos del mundo todavía están puestos en la crisis en Libia y será de importancia fundamental evitar que caiga en el olvido. Tenemos que comprender que son los programas humanitarios basados en la cooperación internacional que pueden contribuir mucho más a la paz y la seguridad mundiales que los miles de millones de dólares que hemos estado gastando en guerras contraproducentes. Las amenazas y crisis de hoy en día ya no constituyen retos nacionales. Por lo tanto, a largo plazo es imperativo dar más importancia, tanto política como económicamente, a los organismos humanitarios internacionales como UNICEF, ACNUR, OCAH y OIM, etc., facilitarles la financiación de sus programas humanitarios a largo plazo, y de este modo fomentar su capacidad de reaccionar adecuadamente a los nuevos retos de las crisis prolongadas. En consecuencia, es indispensable un cambio radical y urgente en la cultura política internacional hacia estrategias sostenibles para poder hacer frente a las crisis en el mundo eficazmente y fomentar la paz mediante soluciones duraderas.

E. Conclusiones finales

Refugiados e IDP: dos diferentes enfoques analíticos

Como hemos tratado de revelar en la presente tesis, el desplazamiento interno continúa siendo un asunto polémico en la agenda humanitaria. A lo largo de los últimos años, numerosos debates y estudios se han realizado con el fin de establecer una concepción más clara de la situación y de los derechos de las IDP. Evidentemente, no es ninguna tarea fácil, dada la gran complejidad del sujeto. Erróneamente, la primera impresión de la situación de las IDP puede inducir a suponer que este grupo de personas básicamente está en las mismas circunstancias que los refugiados transfronterizos, por lo que deberían poder beneficiar del mismo sistema de protección internacional. Pero la respuesta al desplazamiento interno no es tan simple.

1.^a) Como se ha tratado de aclarar extensivamente en la parte I de la presente tesis, por muy similar que sea su situación, a los refugiados e IDP se aplican dos conceptos legales totalmente diferentes. En general, una mejora de la respuesta internacional al problema no automáticamente debería llevar a la suposición de que la protección de los refugiados se ve socavada. Mientras que los esfuerzos dirigidos a las IDP vayan acompañados por el requisito de que las fronteras estatales permanezcan abiertas para ellas, el derecho del asilo no se verá comprometido. La mejora de la protección de las IDP, especialmente la aplicación del *Cluster Approach* y la coordinación entre los diferentes agentes humanitarios involucrados, es una parte integral de los esfuerzos generales para hacer cumplir el derecho internacional de los derechos humanos. Los desplazados internos constituyen un grupo especial de víctimas de los derechos humanos, dado que se enfrentan a problemas específicos relacionados con el hecho de haber sido desplazadas. Sin embargo, a diferencia de los refugiados, no se benefician de la protección sustitutiva por un tercer Estado. Como se ha señalado en la parte I, capítulos 1 y 2, las IDP aún se hallan sometidas a la jurisdicción de su propio Estado que es responsable de su protección, pero que es incapaz o no dispuesto a asumir dicha responsabilidad.

Con respecto a la protección de las personas desplazadas internamente, a diferencia de la protección de los refugiados, una definición jurídica para las IDP no presenta una cuestión clave. La protección de las IDP está más relacionada con la protección inmediata y práctica contra los abusos de los derechos humanos, especialmente en tiempos de conflictos armados. Asimismo, depende más de la situación política general imperante en el Estado en cuestión. En consecuencia, las medidas de protección sólo pueden ofrecer soluciones a corto plazo a las IDP, hasta que se aborden las causas fundamentales del desplazamiento. En cambio, la protección de personas perseguidas que han obtenido asilo en otro país no es vinculada con la situación que causó su huida, sino se deriva principalmente de la aplicación de los derechos jurídicos enunciados en la

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El enfoque de la presente tesis se ha centrado sobre todo en la protección de los derechos humanos de los desplazados internos sin necesariamente haber pretendido ampliar el alcance del derecho de los refugiados hacia la inclusión de las IDP. El énfasis temático está en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como en las diversas medidas concretas de protección. La metodología utilizada consistió, por lo tanto, en un análisis jurídico combinado con una investigación extensa de cuestiones institucionales y operativas.

Cabe señalar una vez más que a diferencia del concepto de los refugiados, el concepto de las IDP no requiere ningún principio jurídico. Más bien sirve como una herramienta útil para promover la conciencia sobre este grupo especial de personas que urgentemente requieren de protección internacional. Desde una perspectiva operativa, también son consideradas un grupo al que se pueden aplicar determinadas interpretaciones de las disposiciones pertinentes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario al elaborar programas y medidas específicos. Evidentemente, el concepto de “refugiado” también implica aspectos operativos, pero se fundamenta principalmente en un concepto legal. La clasificación del grupo de “personas desplazadas internamente” no siempre conlleva un plan de acción humanitaria definida. Como se ha tratado de demostrar en varias ocasiones en el marco de esta tesis, especialmente en relación con la ayuda humanitaria de emergencia no siempre es práctico y/o relevante considerar a los desplazados internos como una categoría operativa distinta de otras víctimas de las violaciones de derechos humanos. No obstante, aun así puede ser útil y necesario cuando las organizaciones internacionales tienen que enfrentar y responder a sus problemas específicos. En la mayoría de los conflictos, las IDP están más expuestas a abusos contra los derechos humanos que los civiles no desplazados, y a menudo requieren protección especial adaptada a sus necesidades.

2.^a) La presente tesis ha tenido por objeto analizar y detallar la extensión de la protección internacional disponible para las IDP en un marco global y en el caso particular de Libia. Se ha argumentado que el tema del desplazamiento interno requiere ser discutido dentro de un contexto más amplio de derechos humanos y que un análisis de la respuesta por parte de las Naciones Unidas a este problema debe, por lo tanto, basarse en un marco de derechos humanos. Con el fin de demostrar la necesidad de tal enfoque en cuanto al asunto del desplazamiento interno, se ha detallado que las IDP no deberían incluirse en el mismo régimen jurídico de protección como los refugiados, sino en un contexto de derechos humanos más amplio al consolidar los marcos de protección desarrollados para situaciones de desplazamiento interno y la responsabilidad del Estado en cuestión. Por consiguiente, simplemente extender el sistema de protección de los refugiados a los desplazados internos no sería ninguna solución adecuada. Más bien es de

importancia primordial considerar la protección de las IDP en un marco jurídico de protección distinto que ha sido identificado en la parte I de esta tesis. Asimismo, se ha intentado demostrar que en gran medida se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El trabajo con las IDP debe basarse en las disposiciones legales internacionales pertinentes, tal como se refleja en los *Guiding Principles on Internal Displacement*.

3.^a) Al haber examinado los mecanismos de la respuesta humanitaria actual de la ONU a la cuestión del desplazamiento interno, se ha tratado de evidenciar que este enfoque es deficiente, dado que conceptualmente los enfoques políticos no están desarrollados suficientemente. Los actores relevantes tendrán que conceptualizar las cuestiones relacionadas con las IDP en términos de derechos humanos, y esto a su vez debe influir en el proceso de un desarrollo político adecuado. Un enfoque de derechos humanos frente a las cuestiones relativas a los desplazados internos también ha mostrado que la idea de otorgar la responsabilidad general por las IDP a un solo órgano de las Naciones Unidas, como el ACNUR, no es el planteamiento apropiado, sino que las IDP deberían ser de interés para todos los organismos pertinentes (véase parte III, cap. 6.2). La OCAH debería seguir promoviendo la colaboración entre las diferentes agencias, tanto en sus sedes principales como sobre el terreno, y garantizar que el trabajo con los desplazados internos se base en los objetivos de protección de los derechos humanos. Las actividades *in situ* para apoyar a las IDP también deben llevarse a cabo dentro de este marco jurídico a fin de promover soluciones efectivas, rápidas y duraderas a su situación difícil.

El estudio de caso sobre el desplazamiento interno en Libia ilustra los límites inherentes de las actividades sobre el terreno, pese a la conciencia sobre la importancia de un marco jurídico y los objetivos vinculados con los derechos humanos. Demuestra que las actividades locales de la ONU durante el conflicto todavía se centran principalmente en la provisión de asistencia material a la población civil, incluida las IDP, y aún no son complementadas por esfuerzos más amplios con el fin de impedir los abusos contra los derechos humanos y asegurar el asilo en terceros países para los refugiados transfronterizos.

4.^a) El problema del desplazamiento interno también ha sido analizado dentro de un marco conceptual más amplio al examinar el concepto de la soberanía estatal y la intervención humanitaria, ya que la prestación de asistencia y protección internacional a las IDP básicamente depende de la intervención en el país que no puede o no quiere protegerlas. Mientras que las concepciones tradicionales de la soberanía hacen hincapié en las fronteras nacionales, en la presente tesis se argumenta que cada vez más destaca la responsabilidad de proteger a aquellos encontrándose capturados entre estas fronteras. Se ha argumentado que los Estados deberían ser

considerados responsables de la protección de los derechos humanos de su población, incluidos los desplazados internos; no obstante, al mismo tiempo, los Estados intervinientes también son responsables del ejercicio del poder militar que menoscaba la soberanía de otro Estado. Por lo tanto, también los poderes intervinientes tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades con respecto a los derechos humanos frente a toda la población y en particular con las IDP, sobre todo si pretenden intervenir en su nombre.

5.^a) A la luz de todos estos aspectos, parece que todavía no es posible formular un conjunto de declaraciones firmes sobre las obligaciones de los Estados, las responsabilidades de las organizaciones internacionales y los derechos de las IDP. Tal como están las condiciones actuales, no se ha adoptado una respuesta política única e integral al problema del desplazamiento interno. El compromiso internacional continuo con las IDP podrá contribuir a que, un día, tengamos una idea más clara de su situación y de sus derechos, pero debido a la amplia variedad de situaciones de desplazamiento interno a nivel global, es poco probable que surja un solo modelo de respuesta. Aunque se puedan realizar mejoras con el fin de garantizar una respuesta internacional más coherente y predecible a las crisis de desplazamiento interno, es imprescindible seguir siendo flexible y adaptar la respuesta operativa a cada situación individual. En unos casos, será de importancia primordial prestar atención a las necesidades de protección de las IDP. En otros casos, es posible que sea necesario formular estrategias específicas para abordar los problemas de protección a los que se enfrentan. Asimismo, puede o no ser necesario dirigirse a las IDP como un grupo específico con necesidades distintas de otras víctimas de un conflicto.

Posibles mejoras a la respuesta de las Naciones Unidas al problema del desplazamiento interno

6.^a) La respuesta de la ONU al problema del desplazamiento interno necesariamente es de índole diferente comparada con su respuesta al problema de los refugiados. Esta tesis ha identificado algunas indicaciones para acciones futuras. Hasta la fecha, el Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos (véase parte I, cap. 4.1.1) ha sido un promotor importante para crear una conciencia y sensibilidad mayor ante el problema del desplazamiento. Durante la última década, se han registrado progresos notables en la promoción de la cuestión del desplazamiento interno en la agenda internacional, pero ahora las preocupaciones por las IDP tienen que traducirse en medidas concretas.

La elaboración de los *Guiding Principles on Internal Displacement* en 1998 y del *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons* en 2008 han marcado pasos importantes. Teniendo en cuenta la carencia de interés internacional de dar pasos ulteriores a establecer normas vinculantes en la ONU, los Principios Rectores han sido aceptados en un periodo notablemente corto. Es de suma importancia que continúen las iniciativas dirigidas a la capacitación de los

agentes operando sobre el terreno en la comprensión y el uso de los *Guiding Principles* y el *Handbook*. Ambos documentos podrían resultar útiles como referencia en el trato de las IDP. Aunque no vinculantes, tanto los trabajadores humanitarios como las IDP pueden confiar en que reflejan las disposiciones vigentes en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No obstante, el uso de los Principios Rectores y del *Handbook* en cuanto a la proporción de protección sobre el terreno necesariamente es limitado, por lo que naturalmente puede surgir la pregunta qué diferencia habría producido, si estas directrices ya hubieran existido durante crisis tan graves como en Ruanda en 1994. Al considerar que a las IDP no se les ha otorgado ningún estatuto legal específico, tiene poco sentido tener los *Guiding Principles* oficialmente adoptados como un tratado internacional jurídicamente vinculante. En la actualidad, parece poco probable que las Naciones Unidas vayan más allá de la redacción de los Principios Rectores, pero deben continuar sus esfuerzos para divulgarlos más entre las agencias internacionales y los gobiernos nacionales a nivel global.

7.^a) Los esfuerzos internacionales recientes se han centrado principalmente en mejorar el marco institucional de protección para las IDP, y en particular en ampliar el papel del ACNUR. Pero la asistencia y protección de los desplazados internos deberían seguir siendo responsabilidad de todos los actores de la ONU. Se puede notar una creciente actividad por parte de las Naciones Unidas en el ámbito del desplazamiento interno, y los órganos y agencias progresivamente han comenzado a identificar las áreas en las que tienen más experiencia. Necesitan continuar este diálogo e intercambio y desarrollar un entendimiento común de la cuestión de las IDP como un problema sumamente grave de derechos humanos, lo que puede resultar en el establecimiento de estrategias comunes para abordarlo. Es erróneo pensar que solamente el ACNUR dispone de las capacidades para poder tratar con crisis de desplazamiento interno y las necesidades específicas de las IDP. Como señalado en la parte III, capítulos 6.2.6, otros órganos de la ONU como el PNUD u ONU-Mujeres, así como agencias internacionales como el OIM y CICR han desarrollado experiencias para hacer frente a los problemas particulares de las IDP y operar en cooperación sobre el terreno.

Lo que de hecho será esencial, es un liderazgo más firme a nivel de la OCAH para poder garantizar que las necesidades de las IDP, y en particular sus necesidades de protección, estén cubiertas en las diferentes situaciones en cada crisis. La OCAH debería identificar con la mayor precisión posible con qué tipo de mandato y responsabilidad tendrá que cumplir con respecto a las IDP, y examinar las situaciones particulares de cada país en cuestión, con el fin de determinar el mejor reparto de las diferentes tareas en cada crisis. En lo que respecta a la participación constante de las Naciones Unidas en la asistencia humanitaria, la OCAH podría esforzarse más en

llamar la atención sobre crisis y conflictos inminentes y muy graves de desplazamiento interno para poder garantizar mejor una intervención puntual, eficaz y coordinada, si es precisa. No obstante, es evidente que la decisión de intervenir en última instancia frecuentemente depende de la voluntad de los Estados donantes que financian las operaciones y actividades para los desplazados internos.

8.^a) Cabe realzar que la cuestión de la protección sigue siendo el desafío más serio con respecto a las IDP. A lo largo de los últimos años, se ha invertido demasiado tiempo y esfuerzo en debatir cuáles podrían ser los mejores arreglos institucionales, mientras que los graves problemas operacionales no se han abordado directamente. Será imprescindible que las Naciones Unidas prosigan los esfuerzos para aclarar el concepto de la protección de las IDP: debería imponerse como uno de los aspectos primordiales en todos los programas y actividades dirigidos a las IDP; y esto requiere que todos los organismos estén sensibilizados con sus necesidades de protección. Los desplazados internos no sólo tienen que huir de las violaciones de los derechos humanos, sino también están más expuestos a otros abusos como resultado de su desplazamiento, lo que les distingue significativamente de los civiles no desplazados. Las agencias humanitarias y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU tendrán que interiorizar que su mera presencia en zonas de crisis no es suficiente, por lo que es imperativo aumentar su participación activa en la vigilancia y presentación de informes en materia de derechos humanos. De ser posible, deberían realizar una intervención más enérgica para prevenir o detener las violaciones de los derechos humanos cometidas contra civiles. La ayuda de emergencia a solas podría resultar negativa, sobre todo mientras que la seguridad física de las poblaciones necesitadas no esté garantizada. Pero cabe destacar que en los últimos años el sistema de las Naciones Unidas ha avanzado bastante en su comprensión del fenómeno del desplazamiento interno. Lo que ahora tiene que hacer es transformar esta comprensión en medidas concretas. Asimismo, necesita ajustar más sus actividades relacionadas con las IDP y promover una “cultura” de protección entre todos los asociados involucrados con estas poblaciones sobre el terreno. Al fin y al cabo, la única forma efectiva de responder a los problemas relacionados con la protección de las IDP es abordar las causas subyacentes del desplazamiento interno, y esto a menudo requiere esfuerzos y medidas de resolución de conflictos. En el marco de la presente tesis, su enfoque específico en Libia y la guerra civil en curso, solamente se han podido examinar las estrategias internacionales para mejorar la protección de los desplazados internos a corto y mediano plazo. A largo plazo, hay que dejar claro que sin paz y estabilidad, las perspectivas de protección son muy limitadas.

9.^a) Al haber examinado el desplazamiento interno, una de las principales dificultades encontradas es que no constituye un asunto bien definido, dado que revela muchísimos vínculos con temáticas y debates más amplios. Uno de los argumentos centrales desarrollados en la presente tesis es que el problema del desplazamiento interno conceptualmente debe abordarse en el marco de los derechos humanos. Pero cabe mencionar que pocas investigaciones científicas han abordado este tema como asunto clave. Aquellas encargadas de la migración forzosa generalmente tienen enfoques especiales en los refugiados transfronterizos. No obstante, existe un vínculo inherente entre los derechos humanos y la migración forzada que también implica a las IDP, como lo ha demostrado esta investigación. Por lo tanto, estudios adicionales del fenómeno del desplazamiento interno podrían contribuir a cerrar la brecha entre las dos disciplinas.

Esta tesis ha analizado un aspecto específico del problema de derechos humanos y de la migración forzada. En particular, ha intentado explorar formas de proporcionar protección adecuada de los derechos humanos en tiempos de conflicto armado y/o en situaciones en las que el Estado, tradicionalmente siendo el principal protector y defensor de los derechos humanos, no puede o no quiere desempeñar este papel frente a un grupo de personas determinado, ya que no las considera dignas de su protección. El problema del desplazamiento interno también muestra otro asunto emergente en materia de derechos humanos: plantea la cuestión de cómo aplicar los derechos humanos con respecto a los agentes no estatales, como por ejemplo las cientos de milicias en el caso de Libia. En las crisis de desplazamiento interno, casi siempre existe este desafío enorme para las autoridades centrales frente a grupos insurgentes que, en algunos casos, son responsables del desplazamiento de las IDP.

El fenómeno del desplazamiento interno claramente demuestra la complejidad de los movimientos forzados de poblaciones en el periodo posterior a la Guerra Fría. Los estudios de migración ya no pueden ignorar la investigación del desplazamiento interno y necesitan abordar nuevas formas de migración forzada, como el desplazamiento inducido por el desarrollo o el traslado forzoso³¹³. Tales desplazamientos de poblaciones predominantemente tienen lugar dentro del territorio nacional de los Estados. Además, el estudio del desplazamiento interno señala algunas de las dimensiones más llamativas del sistema humanitario actual que se enfrenta a desafíos como la negociación con facciones beligerantes, en el caso libio también con clanes y tribus, la cooperación con fuerzas militares, la intervención en zonas en conflicto, etc., y que tendrá que hacer más hincapié en el vínculo entre la asistencia de emergencia y la protección. De hecho, la relación operativa con las IDP muchas veces implica que en situaciones difíciles la mera

³¹³ Algunas reubicaciones forzadas notables en los últimos años se han asociado con megaeventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 (BENDER 2008), la copa mundial de fútbol en Sudáfrica en 2010, así como la copa mundial en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016 en Brasil (SÁNCHEZ y BROUDEHOUX 2013; NALANI BUTLER y AICHER 2015).

ayuda urgente ya no es suficiente, sino que el aspecto de la protección resulta cada vez más crucial para los necesitados. El análisis sobre la implicación de las Naciones Unidas con las IDP recalca la necesidad de integrar los derechos humanos en la acción humanitaria.

10.^a) No obstante, al mismo tiempo hay que estar consciente de que un análisis del problema del desplazamiento interno no puede evitar la cuestión fundamental de la soberanía estatal. Aunque el Estado tiene la responsabilidad principal de los desplazados internos, el problema reside en el hecho de que sus acciones también pueden ser la causa del desplazamiento. La soberanía estatal plantea un desafío enorme para la resolución de las crisis del desplazamiento interno: de por sí, este fenómeno representa una amenaza significativa para la integridad territorial de un Estado, pero, como se ha discutido en la parte I, capítulos 5, los esfuerzos internacionales de brindar protección a las IDP también desafían la autoridad estatal. En la actualidad, las concepciones tradicionales de la soberanía se ven socavadas, con un énfasis cada vez mayor en el concepto de la Responsabilidad de Proteger.

Sin embargo, esta idea de responsabilidad no sólo debe aplicarse a los países enfrentándose a crisis de desplazamiento interno, sino a todos los Estados que tienen la obligación de proteger los derechos humanos de su propia población, pero que también tienen el deber de no violarlos, e, incluso, de proteger a los ciudadanos en otros Estados de abusos. En consecuencia, los Estados tienen la responsabilidad de no causar daños a los civiles cuando intervienen en otros Estados. Además, en situaciones de crisis masivas, deberían asumir la responsabilidad de mantener sus fronteras abiertas para los posibles refugiados. Se debe sobre todo al cambio de los conceptos tradicionales de soberanía en la segunda mitad del siglo XX, por lo que hoy en día el problema del desplazamiento interno puede considerarse como una fuente de preocupación a nivel internacional. No obstante, el cumplimiento de la protección de los derechos humanos todavía depende en gran medida de la voluntad del Estado en cuestión. Del mismo modo, los esfuerzos internacionales para proteger a las IDP se enfrentan a obstáculos enormes, si este mismo Estado les niega el acceso a su territorio.

En tiempos recientes, los Estados parecen estar cada vez más dispuestos a eludir las preocupaciones por la soberanía al intervenir en otros Estados por la protección civil de las IDP y otros grupos necesitados. Pero la intervención humanitaria es solamente un aspecto de la respuesta a las crisis graves de derechos humanos. Además, parece que actualmente los Estados están redefiniendo el concepto de la soberanía de una manera potencialmente peligrosa: el principio clásico de la no intervención en los asuntos internos de un Estado se fundamenta en el principio de la igualdad soberana de los Estados y sirve para proteger sobre todo a los Estados más pequeños y débiles contra la interferencia de Estados más poderosos. De todos modos, existe

la preocupación justificada de que hoy en día los Estados intervengan en otros Estados oficialmente en nombre de los derechos humanos y de la democratización, como demuestra el propósito declarado de la intervención militar en Libia en 2011, pero que al mismo tiempo fortalecen el control sobre sus propias fronteras y su influencia política, económica y geoestratégica en otros países, lo que incluso “legitima” un cambio de régimen forzoso como en el caso de Gadafi. Esta tendencia indica que la era de la soberanía estatal, tal como se manifiesta en el control del propio territorio y de las fronteras, aún no ha acabado.

Aunque el tema del desplazamiento interno puede parecer, al principio, un tema diferenciado, esta investigación ha intentado demostrar que su alcance realmente es bastante amplio y que influye en otros debates importantes. El hecho de que se relaciona con tantas temáticas diferentes resalta la complejidad del problema del desplazamiento interno y demuestra por qué su investigación y análisis requieren un enfoque multidimensional.

11.^a) Tras las primeras manifestaciones masivas el 17 de febrero de 2011, en marzo la OTAN dirigió una intervención militar en Libia de conformidad con la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorizaba a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil bajo amenaza de ataques. Originalmente, el mandato tenía el propósito de proteger a los civiles de Bengasi que se habían sublevado contra el antiguo régimen. A pesar de este mandato limitado, la forma masiva en la que se llevaron a cabo las operaciones militares de la OTAN hizo inmediatamente evidente que el verdadero objetivo de la intervención era mucho más extenso, es decir, provocar el colapso del régimen de Gadafi. Sin embargo, cabe realzar que más de siete años después de la rebelión armada y la intromisión internacional, la falta de un plan concreto para estabilizar el país otra vez ha provocado una situación cada vez más compleja y peligrosa.

Las numerosas milicias que originalmente lucharon contra Gadafi han desarrollado intereses divergentes, y a lo largo del tiempo han logrado consolidar su poder y control sobre ciudades y aldeas locales en todo el país. Esto no sólo ha llevado a la proliferación de más milicias rivales, sino a una escisión total de la autoridad estatal, el surgimiento alarmante de grupos terroristas y organizaciones criminales, tales como traficantes de personas y armas, lo que gravemente socava cualquier intento de recobrar condiciones estables y seguras en el país. Inevitablemente, la rivalidad entre las diferentes facciones beligerantes ha conllevado la implicación de una serie de actores externos en la política de Libia, que en 2014 convirtió el conflicto nacional no sólo en una guerra civil, sino también en una guerra por poder. Los intereses y acciones militares de los agentes regionales e internacionales en Libia son complejos con rasgos de violencia generalizada. El entendimiento de estas dinámicas hace evidente que solamente una actuación y medidas

coordinadas por parte de la comunidad internacional con el fin de restringir los intereses regionales opuestos en los asuntos internos de Libia tendrían la capacidad de restablecer el orden público eficazmente.

12.^a) Cabe realzar que la mayor deficiencia de la intervención de la OTAN en 2011 fue su incapacidad de apoyar al país en cuanto al fomento de un proceso de estabilización integral tras haberse retirado y terminado la operación militar. Aunque la OTAN no hubiera podido evitar que los actores regionales se involucren en el conflicto libio (de hecho, el país es de gran interés en cuanto a la seguridad económica y nacional para sus vecinos Túnez, Argelia y Egipto, así como para la región del Golfo), una presencia continua en Libia dedicada a la estabilización nacional habría podido ayudar a controlar el potencial de conflicto posterior a la intervención entre las distintas partes rivales. Al contrario, la retirada de la OTAN y la determinación de no querer asumir la responsabilidad del dilema libio han causado una agravación considerable de la crisis sobre el terreno. La rivalidad entre las facciones domésticas y sus partidarios internacionales alcanzó su punto culminante en verano de 2014 cuando el país se dividió *de facto* en dos partes: una en el este con la ciudad de Tobruk bajo el control del general Jalifa Haftar, su LNA y la Cámara de Representantes (HoR) elegida en junio de 2014; y otra en el oeste dirigida por líderes de milicias con tendencias islamistas y su núcleo en Misrata. Como se ha intentado demostrar a lo largo de los diversos capítulos de esta tesis, aunque en la mayoría de los casos las rivalidades entre las facciones en Libia tienen causas reales, se han intensificado por los intereses de agentes de terceros países. Frente a la guerra civil prolongada, la ONU y la UE como organizaciones supranacionales han intentado encontrar una solución negociada que el 17 de diciembre de 2015 desembocó en la firma del *Libyan Political Agreement* (LPA) en Skhirat, Marruecos, patrocinado por las Naciones Unidas. Mediante el LPA, en enero de 2016 se formó un *Presidential Council* (PC) y un gabinete, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), liderado por el primer ministro Fayez al-Serraj. A pesar de los esfuerzos notables para reforzar el PC y el GNA, las Naciones Unidas y la UE se ven socavadas por las alianzas frecuentemente inestables entre las diferentes partes involucradas.

De hecho, si bien casi todos los Estados miembros formalmente prometieron lealtad a las iniciativas políticas dirigidas por la ONU, *in situ* muchos actúan de forma distinta. Por lo tanto, esta tesis ha explorado los motivos y la dinámica de los actores extranjeros más intensamente involucrados en la intervención en marzo de 2011 y el conflicto de poder de Libia que la ha seguido (véase parte II, cap. 4). Como se ha indicado, evidentemente no todos los intereses de los diversos actores en Libia son idénticos, no sólo entre los agentes internacionales, sino también entre los regionales. Pero en lo que concierne a Occidente, cabe destacar que en última instancia

la estabilización del país debería ser el objetivo principal de cualquier compromiso. El LPA, en el que se origina el PC y el GNA, no ha conllevado el éxito esperado y la debilidad del gobierno de unidad es el resultado del fracaso de liderazgo de la ONU: el escándalo tras la renuncia del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Bernardino León, gravemente dañó la credibilidad y la eficacia de la UNSMIL³¹⁴. Actualmente, existe un consenso mayoritario de que el LPA requiere una modificación. Con respecto al análisis presentado en la parte II de esta tesis, se deduce claramente que el fracaso de las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas y la falta de solidaridad entre los actores europeos requieren un papel más responsable para los EE.UU. en Libia. Son la única potencia capaz de actuar sosteniblemente tanto frente a los que aspiran a alcanzar un acuerdo negociado como a quienes que sabotean el proceso de paz al favorecer soluciones militares. Consta que hasta ahora los intereses opuestos de los principales actores internacionales han sido la razón principal del fracaso del LPA. Es indispensable que los EE.UU. empleen toda su influencia para obligar a los actores internacionales involucrados en el conflicto libio a que renuncien su apoyo a las facciones armadas sobre el terreno y que utilicen su influencia con el fin de convencer a todas las partes beligerantes a que lleguen a un acuerdo sostenible hacia la pacificación nacional.

De este modo, será fundamental que la administración del actual presidente Donald Trump comprenda que la situación *in situ* en Libia no permite ninguna solución militar. En este contexto, también se puede suponer que incluso si los EE.UU. apoyaran a las fuerzas orientales dirigidas por el poderoso general Haftar, esto no automáticamente conllevaría la consecución de soluciones fáciles, ya que no se deberían subestimar las fuerzas opuestas a Haftar y sus aliados internacionales, así como el descontento que causaría la restauración de un gobierno autocrático bajo la influencia estadounidense. Los mismos reparos se pueden esperar frente a aquellos que consideran la división de Libia como la mejor manera de superar la crisis actual. Teniendo en cuenta la desintegración de las diferentes regiones, la escisión interna y la falta de liderazgo de alto nivel por autoridades legítimas reconocidas, así como el potencial de conflicto que provocaría el reparto de los recursos naturales, resulta evidente que cualquier idea de división solamente provocaría mayor violencia en el país.

Sin embargo, es de suponer que parece poco probable que la administración de Trump asuma tal papel de liderazgo, aunque Washington claramente tiene intereses propios en una Libia estable y pacificada, y, contrario a las observaciones del presidente Trump, deberían asumir un papel más

³¹⁴ En noviembre de 2015, un año tras haber sido nombrado SRSG, el diplomático español Bernardino León dejó su cargo para dirigir la academia diplomática de los Emiratos Árabes Unidos por un sueldo de unos EUR 49.000 al mes. Causó gran polémica, dado que los EAU (en alianza con Arabia Saudita y Egipto) apoyan a la HoR en Tobruk y a Jalifa Haftar con su LNA, mientras que el GNA en Trípoli, influido significativamente por hermanos musulmanes, recibe apoyo por Qatar y Turquía. Consecuentemente, su decisión de trabajar por una de las partes beligerantes más poderosas justificadamente puso en duda la imparcialidad de León y su labor de mediación en Libia (RAMESH, 04.11.2015).

importante en Libia. Varios funcionarios estadounidenses reconocen este hecho³¹⁵. Además, hasta la fecha, no hay ninguna evidencia de que los EE.UU. estén dispuestos a apoyar a Haftar y la HoR en lugar del GNA. De hecho, en una reunión en abril de 2017 de los ministros de asuntos exteriores de los G-7, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, expresó su firme apoyo a al-Serraj y al GNA y firmó una declaración en la que se afirmó que “there is no military solution to Libya’s problems”³¹⁶. Por ende, es fundamental que los funcionarios estadounidenses con poder ejecutivo y legislativo reconozcan la importancia de alcanzar una solución pacífica en Libia y que presionen al gobierno para abogar más en favor de un proceso de negociación inclusivo. Asimismo, países con intereses relevantes en cuanto a la estabilización de Libia, como Italia y Alemania, deberían desempeñar un papel primordial también al fomentar un proceso de paz más integral. Europa en general debería comprometerse más firmemente con el establecimiento de un frente unido entre los funcionarios principales en apoyo de un proceso de paz inclusivo, no sólo retóricamente, sino también en cuanto a sus acciones políticas al instar a los actores internacionales a dejar de apoyar a fuerzas rivales, y al promover el diálogo entre las partes contrarias. Mediante una postura unida, podrían conseguir el apoyo de líderes del Congreso estadounidense y de esta manera convencer al gobierno de Trump de asumir una posición de liderazgo para encontrar una solución sostenible al conflicto libio. En este contexto, cabe mencionar que Roma ya está desempeñando un papel importante al haber unido las facciones rivales del conflicto³¹⁷. Debería continuar promoviendo el diálogo político para que, de este modo, se pueda alcanzar el mayor consenso posible en cuanto a la realización de las modificaciones urgentemente necesarias del LPA, y establecer una base para las negociaciones de paz. A este respecto, también será imprescindible involucrar a los líderes de los grupos armados más potentes del país, así como a representantes tribales y del sector económico, dado que su presencia podría asegurar una representación de un gran número de intereses diferentes que se tendrán que considerar concerniente al éxito del proceso de negociación y su resultado. Dada su función mediadora, Italia también debería instar a Washington y a la comunidad internacional en general, para que consideren a Libia y la situación de seguridad en el sur del Mediterráneo como una cuestión prioritaria para la seguridad mundial.

13.^a) Tal como se ha intentado demostrar en esta tesis, la actitud indecisa de Europa en Libia, así como la falta de un liderazgo expresado por los EE.UU. hacia un esfuerzo sostenible de estabilizar a Libia ha dejado un vacío en el país del que los principales partidarios de Haftar, o sea los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, han podido beneficiar. A través de una iniciativa impulsada

³¹⁵ United States Senate Committee on Foreign Relations, 25.04.2017.

³¹⁶ Libya Analysis, 12.04.2017.

³¹⁷ WINTOUR, 03.05.2017.

por estas dos potencias en mayo de 2017, se organizó una reunión entre Haftar y al-Serraj, es decir, el primer encuentro entre los dos rivales desde principios de 2016 tras haber firmado el LPA³¹⁸. Si bien no hubo declaraciones oficiales sobre los resultados particulares de la reunión, es evidente que Haftar sigue rechazando reconocer la autoridad del GNA, por lo que supuestamente el propósito principal no fue el logro de avances diplomáticos, sino el intento continuo de Haftar de imponer a al-Serraj su renuncia. Frente a la debilidad del gobierno de al-Serraj, la fuerte involucración directa de los EAU y Egipto en favor de Haftar, así como la intensificación reciente del conflicto libio, Occidente debería aumentar su apoyo al PC y GNA al fomentar activamente la pacificación de Trípoli y sus alrededores. Dado que hasta la fecha ningún Estado occidental tiene la intención de enviar tropas terrestres a Libia, será de importancia fundamental colaborar con los grupos armados y milicias locales que estén dispuestos a apoyar a un nuevo gobierno elegido tras la revisión del LPA; y en última instancia, a disponer sus armas o incorporarse a una fuerza armada libia profesional. A este respecto, sería favorable la participación de Occidente al formar el ejército sobre el terreno, así como la guardia presidencial y otras fuerzas de seguridad a nivel nacional. Estos esfuerzos deberían emprenderse mediante políticas redistributivas con el fin de promover un proceso de descentralización de diversas funciones desde el centro del Estado hacia su periferia. Con el fin de crear una base sólida, será indispensable que la estabilización de Libia comience a nivel local al involucrar también las comunidades y al considerar sus necesidades particulares. Con un número de habitantes que representa aproximadamente un tercio de la población de Libia, el restablecimiento de un nivel mínimo de seguridad en Trípoli no sólo es un aspecto clave en el proceso de consolidación de la paz, sino también constituiría un paso esencial para que el PC y el GNA eventualmente puedan lanzar una serie de proyectos económicos con el fin de restaurar la infraestructura gravemente destruida de la ciudad, tanto en el sector de salud como educativo, eléctrico, hídrico y viario. Si bien el éxito de estos esfuerzos avanzará lentamente, es imperativo fomentar los procesos de manera progresiva y constante en todo el país. A largo plazo, los progresos en Trípoli deberían repetirse en todas las regiones de Libia, con las milicias locales jugando un papel clave en caso de entender la necesidad de unirse a las fuerzas de seguridad municipales bajo la supervisión de un gobierno central apoyado por las fuerzas armadas nacionales reconstituidas.

14.^a) No obstante, en lo concerniente a la situación política en Libia a mediano y largo plazo, Occidente tendrá que aceptar que el pueblo libio debe ser el elemento determinante en cuanto a la decisión sobre su régimen. Frente a la escisión profunda, las rivalidades graves entre la HoR, el GNA y el NGNC, la guerra civil continua y una infraestructura destrozada, en la

³¹⁸ Arab News, 04.05.2017.

actualidad, cada vez más libios prefieren recuperar el antiguo régimen de Gadafi considerándolo un mal menor comparado con la anarquía en muchas regiones del país. Como consecuencia, la popularidad de Saif al-Islam Gadafi está incrementándose considerablemente. Desde su liberación en junio de 2017, ha anunciado su regreso a la política con el fin de imponer más seguridad y estabilidad de conformidad con la geografía libia y las facciones rivales. Pese a la controversia sobre su persona, es un hecho indiscutible que ha sido una figura clave ya antes de los levantamientos en 2011, por lo que dispone de la influencia necesaria para poder contribuir a reconciliar las diferentes partes beligerantes. Para las elecciones previstas para invierno de 2018, en las que tanto Jalifa Haftar como Fayeze al-Serraj y Saif al-Islam Gadafi aspiran a presentarse como candidatos, será de importancia fundamental que la comunidad internacional, y sobre todo Occidente, no intenten sabotear el resultado de las elecciones en su beneficio. Es evidente que ante los retos enormes relacionados con la situación jurídica y de seguridad, será muy complejo organizar una votación regulada. Las Naciones Unidas, por lo tanto, tendrán que abogar vehementemente por una realización de elecciones democráticas y limpias y apoyar el censo electoral. Asimismo, la búsqueda de diálogo, así como la colaboración en los procesos de pacificación, la reconstrucción del país y la promoción de programas de rehabilitación serán aspectos claves y decisivos sobre el éxito de una nueva Libia.

15.^a) Además, la comunidad internacional debería respaldar la reactivación económica mediante el establecimiento de un fondo internacional para apoyar las reformas del gobierno y los proyectos de desarrollo, y asumir una función de asesoramiento a través de un comité de expertos financieros y de desarrollo específicamente establecido para Libia. Este comité también podría fomentar la transparencia institucional y responsabilidad en las principales instituciones económicas y financieras de Libia, como la *Libyan National Oil Corporation*, así como el Banco Central de Libia y el Banco Extranjero de Libia que desde 2011 están registrados en la lista de personas e instituciones afectadas por las sanciones de la UE contra Libia. Estas medidas también podrían estimular el interés de inversores internacionales y empresas privadas de identificar áreas de desarrollo en el país, lo que, en cooperación con agentes e instituciones locales, crearía un ambiente con impacto positivo en el que las capacidades económicas podrían prosperar y contribuir a un crecimiento económico sostenido.

El éxito de este plan depende por gran parte de los agentes libios actualmente más potentes, es decir, Fayeze al-Serraj y sobre todo Jalifa Haftar, de los que cada uno intenta debilitar el gobierno rival al perseguir una victoria militar. Con el fin de evitar un agravamiento mayor de la situación, hay que tener en cuenta que también depende significativamente de las cientos de milicias con

objetivos e ideologías divergentes a los que se debería persuadir que solamente mediante el diálogo y una solución negociada será posible considerar sus intereses.

16.^a) El firme compromiso occidental basado en esfuerzos diplomáticos e iniciativas de mediación por la UE y los EE.UU. serán de importancia clave para que Libia pueda establecer un nuevo gobierno de consenso capaz de unir a las diferentes fuerzas opuestas a que participen activamente en la reconstrucción del país y de sus instituciones.

Conviene realzar una vez más que frente a la crítica situación de seguridad nacional y el caos exacerbado considerablemente por la intromisión de Occidente desde 2011, la decisión de retirarse y no asumir la responsabilidad por el Estado fallido en el que Libia se ha convertido, muy probablemente alentaría un nuevo proceso de escaladas violentas sobre el terreno que finalmente se extendería a países vecinos afectando la paz mundial, lo que tarde o temprano arrastraría a la comunidad internacional a una espiral de violencia de consecuencias incalculables. Por lo tanto, un esfuerzo de estabilización bien estructurado ahora, en lugar de una intervención no deseada en el futuro, a largo plazo sería la mejor respuesta para satisfacer no sólo los intereses occidentales, regionales y locales en Libia, sino sobre todo los intereses y necesidades del pueblo libio.

17.^a) No obstante, como se ha mencionado anteriormente, a la luz del caos político libio y el conflicto continuo, las soluciones duraderas parecen cada vez más remotas. Dado el impacto enorme de la guerra civil en la situación grave del desplazamiento forzoso, es evidente que se requiere urgentemente una nueva estrategia para gestionar esta crisis hasta que la guerra haya terminado y se pueda implementar un apoyo humanitario integral hacia soluciones duraderas. La autoridad del Estado en Libia ya ha sido puesta en peligro severamente como resultado de las luchas entre las numerosas milicias rivales. Sin embargo, y sobre todo con la ayuda de la ONU y otros agentes internacionales, el Estado todavía es capaz de desarrollar estrategias mejoradas para abordar la crisis actual, y aplicar medidas de asistencia para los desplazados dentro de su alcance. Frente a la situación precaria de protección, las autoridades gubernamentales deberían aumentar significativamente las inversiones en refugios seguros para las IDP. Como se ha intentado demostrar en la parte III, capítulos 6.2, en la casi ausencia del Estado, el papel de ONGs nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y consejos locales que operan de forma remota a través de asociados locales, es crucial en el apoyo a los desplazados, en particular a los afectados por la guerra civil desde 2014 y grupos de personas excluidos socialmente, como por ejemplo los tawerghanos. Pero la capacidad de estos agentes sigue siendo limitada, lo que significa que las necesidades actuales no se pueden cubrir sin el apoyo estatal aumentado. A pesar de su debilidad, el Estado también tendrá que incrementar la provisión de otros tipos de asistencia

humanitaria, incluido el suministro de *cash assistance* (véase parte III, cap. 6.2.5 y 6.2.6.13) basado en dinero efectivo y bonos, ya sea directamente o a través de asociados. Los esfuerzos del Estado libio para desempeñar sus funciones básicas frente a una guerra civil y tres parlamentos rivales son indispensables, pero el apoyo a las IDP y refugiados en el país tendrá que convertirse más en una responsabilidad central del Estado en colaboración con organizaciones internacionales y ONGs. Será una asistencia humanitaria estratégica que puede evitar que la crisis empeore cada vez más y que los desplazados se vean obligados a buscar alternativas peligrosas y denigrantes para poder sustentarse.

A pesar de la importancia de desarrollar e implementar una estrategia mejorada para enfrentar los problemas acuciantes planteados por la crisis de desplazamiento, las siguientes conclusiones deben ofrecer algunas reflexiones adicionales con respecto a algunos asuntos claves que deben considerarse en el contexto de la búsqueda por soluciones duraderas y sostenibles para las personas desplazadas en Libia. Estos asuntos incluyen el restablecimiento de la seguridad y el Estado de derecho, la implicación activa de representantes de los diferentes grupos de desplazados en los procesos de diálogo, negociación y reconciliación, y el establecimiento de una justicia transicional transparente:

18.^a) Sin duda, la situación de seguridad precaria constituye el principal obstáculo al retorno. Por ende, mientras que las autoridades libias no sean capaces de controlar a los incontables grupos armados y las milicias, es de suponer que no hay garantía de que los desplazados con voluntad de regresar a sus hogares estarán seguros sin sufrir amenazas a su integridad física. El alcance de los disturbios, la inestabilidad y los ataques arbitrarios en Libia, tanto contra civiles como contra personajes importantes y personal de seguridad, deja a los posibles repatriados temerosos de no recibir el apoyo necesario para poder reasentarse en sus lugares de origen. En este contexto, cabe mencionar el caso de Ali Zeidan, el primer ministro del GNC entre 2012 y 2014, cuyos secuestros en 2013 y en agosto de 2017 por un grupo armado vinculado con el GNA, marcaron un nuevo grado alarmante de inseguridad al mostrar el poder de las milicias rivales, la debilidad grave de las autoridades gubernamentales y un aumento del extremismo islámico en el país. Bajo estas circunstancias, para muchos refugiados libios la idea de regresar equivale a una sentencia de muerte³¹⁹.

Es evidente que el agravamiento de la situación en Libia, en particular desde 2014, refleja el fracaso de la comunidad internacional, sobre todo de las Naciones Unidas y la OTAN, de proporcionar apoyo humanitario sostenido en el proceso de consolidación del Estado tras la caída del antiguo régimen de Gadafi. Asimismo, la escisión social entre los diferentes grupos tribales y

³¹⁹ Refugiado (4) de Tawergha y activista de los derechos humanos, entrevista con la autora.

étnicos constituye un reto que con toda certeza requiere un compromiso internacional más sólido en cuanto a la toma de medidas de reformas jurídicas, políticas y del sistema de seguridad. Sin embargo, hay que enfatizar que la respuesta humanitaria a solas no será suficiente para atender las necesidades de cientos de miles de desplazados, mejorar la situación de seguridad y encontrar soluciones duraderas al conflicto. Será de importancia fundamental formar y equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales operando en Libia y fomentar sus capacidades. Es indispensable que la comunidad internacional comprenda la dinámica y las complejidades del desplazamiento en Libia, así como la importancia de una estrategia clara con el fin de resolver la crisis de desplazamiento en el marco de un proceso de paz responsable y sostenible basado en un enfoque de los derechos humanos.

19.^a) El restablecimiento de la seguridad en Libia y la resolución de la crisis del desplazamiento interno y transfronterizo claramente depende de una resolución negociada a la guerra civil y la creación de un nuevo gobierno de unidad. Si bien se ha logrado cierto progreso en las conversaciones patrocinadas por la ONU en Skhirat, Marruecos, en 2015 con la firma del LPA, las negociaciones entre las diferentes facciones beligerantes en Tunis en septiembre de 2017 bajo la supervisión del actual Representante Especial del Secretario General, Ghassan Salamé, con el fin de acordar un plan de acción de un año hacia elecciones presidenciales y parlamentarias, terminaron sin resultados y sin haber fijado una nueva fecha para continuar el diálogo³²⁰. La medida en la que las negociaciones han abordado los derechos y las necesidades de los desplazados también constituye una cuestión no resuelta. Por lo menos a una escala modesta y a nivel local ha habido esfuerzos para abordar la cuestión del desplazamiento. Por ejemplo, como se ha señalado en la parte III, capítulo 5.1.7, los líderes de los tawerghanos emitieron una disculpa oficial a Misrata por los abusos supuestamente cometidos por algunos miembros de su comunidad durante la revolución en 2011. Pero debido a la falta de diálogos previos y la falta de sistemas eficaces de rendición de cuentas, la búsqueda del diálogo fue rechazada por Misrata. Por lo tanto, pese a los esfuerzos, hasta la fecha no se han logrado grandes avances para la situación de las IDP de Tawergha. Con la mediación de UNSMIL y la asistencia de expertos internacionales, otro intento se lanzó en octubre y noviembre de 2015 en Tunis y Ginebra, respectivamente, con la reunión del denominado *Joint Misrata/Tawergha Dialogue Committee* que discutió sobre la cuestión de indemnizaciones y acordó una serie de principios para un programa de reparaciones para las víctimas. Asimismo, abordó el tema de la justicia transicional, así como sobre programas relacionados con el retorno voluntario de las IDP en condiciones seguras y dignas a sus lugares de origen (cf. UNSMIL, 05.11.2015). El gran esfuerzo de los representantes tawerghanos llevó a

³²⁰ LAESSING, 21.10.2017.

algunos resultados, y se alcanzaron varios acuerdos con Misrata, entre otros en cuanto a la liberación de prisioneros, así como a la implicación de la UNSMIL en la asistencia a las IDP y de UNICEF en cuanto al apoyo psicosocial a los niños y la reconstrucción de las escuelas dañadas. Aunque el asunto del desplazamiento no se ha resuelto, las negociaciones por lo menos contribuyeron a la promoción de una comprensión mutua entre las dos comunidades. Esto indica que en el diálogo nacional, las comunidades libias deberán asumir un papel más importante, dado que la búsqueda por soluciones duraderas y la reconciliación solamente podrán lograrse desde el nivel comunitario.

20.^a) Evidentemente, nadie puede representar a las comunidades desplazadas mejor en la defensa de sus intereses y su futuro que las IDP mismas. Al constituir una parte significativa en la sociedad libia, asegurar la representación de los desplazados en las negociaciones y los diálogos puede contribuir a una implementación mejor de cualquier acuerdo alcanzado sobre su futuro. No obstante, hay que estar consciente de que llegar a un acuerdo no automáticamente conlleva su realización exitosa en la práctica. Es fundamental que las partes negociadoras siempre tengan en cuenta los intereses y las necesidades de las IDP para evitar que los acuerdos adoptados sean rechazados por las comunidades desplazadas. Los Representantes Especiales del Secretario General y la UNSMIL han lanzado un proceso impresionante al unir a las partes beligerantes a la mesa de negociaciones, pero los mediadores internacionales y las facciones rivales en Libia parecen desconocer e ignorar la complejidad de los desafíos a los que se enfrentan tanto los refugiados transfronterizos como las IDP. Por lo tanto, resulta aun más urgente que a las comunidades desplazadas se les brinde la oportunidad de participar activamente en los procesos de negociación y diálogo nacional para que puedan comunicar sus preocupaciones y garantizar soluciones adecuadas.

21.^a) Los desafíos de seguridad no solamente son una cuestión de la violencia física, sino también de una profunda inseguridad económica, así como la ausencia de normas reglamentarias. Esto indica la necesidad de adaptar los procesos de la justicia transicional y reconciliación al reformar el sector de la seguridad y la justicia con el fin de eliminar los obstáculos al retorno y la reintegración planteados por marcos excesivamente punitivos, tales como la Ley de Aislamiento Político adoptada en 2013 y revocada en 2015³²¹.

En algunos ámbitos, las autoridades gubernamentales de Libia aun así han reconocido la necesidad de involucrar a las poblaciones desplazadas en los procesos de justicia transicional y reconciliación, y de utilizar estos procesos para promover la resolución de la crisis de

³²¹ BBC News, 02.02.2015.

desplazamiento del país. En este contexto, cabe mencionar los esfuerzos del Ministerio de Justicia del GNC de 2012 a 2014 que celebró numerosas reuniones sobre la ley estatal, justicia y el respeto futuro de los derechos humanos. Informó que los participantes de las reuniones discutieron sobre planes de elevar el nivel de rendimiento de los diferentes departamentos y de desarrollar una judicatura independiente con el fin de facilitar una justicia transicional, así como juicios justos de conformidad con las normas internacionales. En el marco de las reuniones, el ministerio presentó un plan de acción para trasladar prisioneros y capacitar a las fuerzas de seguridad. Asimismo, el ministro de justicia de aquel entonces, Salah Marghani, expresó la exigencia de formar a miles de nuevos reclutas de la policía judicial con el fin de reforzar el cuerpo policial en su control sobre las instalaciones judiciales que a su vez tienen el control sobre instalaciones bajo control militar (Bassiouni 2013: 354-355).

En lo que concierne a los desplazados, cabe señalar que si bien los funcionarios tanto del GNC como del GNA han hecho algunos esfuerzos e identificaron formas de ayudarles, las iniciativas lanzadas hasta la fecha tienen un alcance limitado sin efectos sostenibles. Ante los inmensos desafíos a los que se enfrenta el país, resulta muy difícil llamar la atención sobre las cuestiones complejas del desplazamiento y la justicia transicional mediante un enfoque imparcial y no vengativo que considera sus intereses. Mientras que ciertos agentes dentro y fuera de los gobiernos libios posiblemente deseen sostener la privación de derechos de los lealistas de Gadafi, es importante reconocer la diversidad de opiniones y posturas asumidos por los cientos de miles de desplazados tanto dentro del país como en otras regiones del mundo, por lo que la exclusión y el ostracismo de los defensores del antiguo régimen, así como de los seguidores de Saif al-Islam Gadafi no es ninguna opción beneficiosa para el futuro de Libia. Más bien es fundamental tomar medidas apropiadas para regularizar las relaciones entre las diferentes facciones y partes contrarias y entablar el diálogo y los procesos de reconciliación.

En ausencia de un liderazgo gubernamental efectivo y unificado para instigar un diálogo nacional, incluyendo representantes de los libios en la diáspora, más que nunca las iniciativas de instituciones imparciales y experimentadas en el ámbito de la mediación son cruciales: en este contexto, conviene mencionar al *Centre for Humanitarian Dialogue* (HD), una organización privada de origen suizo basada en los principios de humanidad, imparcialidad e independencia³²². Desde abril de 2011, HD ha estado apoyando el diálogo entre las diferentes partes interesadas en el conflicto libio en cuanto a cuestiones polémicas, tanto a nivel local como nacional, y ha mantenido su presencia permanente en Trípoli y Bengasi. HD impulsó a numerosos alcaldes libios a reunirse en Túnez en diciembre de 2017 con el fin de promover la estabilidad del país.

³²² Por más de veinte años, el *Centre for Humanitarian Dialogue* ha apoyado soluciones pacíficas en todo el mundo. En la actualidad, la organización está involucrada en más de 40 iniciativas de diálogo y mediación en más de 25 países. Su misión principal es prevenir, mitigar y resolver conflictos armados a través del fomento de diálogos y procesos de mediación (Centre for Humanitarian Dialogue, 2017).

Por primera vez desde que comenzó el conflicto hace más de siete años, casi todos los municipios libios y las autoridades locales se reunieron durante tres días para analizar cómo pueden contribuir a poner fin a la violencia y el sufrimiento de todos los ciudadanos. Pese a su significado histórico y la voluntad evidente a nivel local de acabar la guerra civil e implementar el respeto de los derechos humanos en la nueva Libia, hay que estar consciente de que frente a la escisión profunda del país, tales iniciativas (todavía) deben lidiar con la oposición vehemente del público libio, los partidos políticos y los medios de comunicación.

En el futuro, un proceso de paz negociado y sostenible tendrá que incluir el desarrollo y la implementación de una justicia transicional más individualizada que busque mitigar el desplazamiento prolongado de comunidades enteras, como es el caso de los tawerghanos. Por ende, y como discutido exhaustivamente en la parte III, capítulos 6.1, se requiere un enfoque ajustado a las cuestiones altamente complejas relativas a las viviendas, tierras y propiedades, con el fin de poder hacer frente al pasado y superar los antecedentes históricos, así como el marco jurídico que se originaba todavía en el régimen de Gadafi.

Pero en general, en ausencia de un marco legal efectivo, constituyen primeros pasos muy importantes la participación activa de las comunidades afectadas por el desplazamiento y la adopción conjunta de iniciativas de negociaciones entre los representantes comunitarios y líderes tribales con el propósito de identificar condiciones aceptables para la resolución del desplazamiento y de los problemas relacionados. Será fundamental integrar tales enfoques informales en el marco jurídico, sin desconocer sus restricciones en cuanto a su impacto decisivo. Dado que a nivel nacional será urgentemente necesario llevar a las incontables milicias a la mesa de negociaciones, a largo plazo es imprescindible restablecer el Estado de derecho con autoridades poderosas, capaces de actuar y celebrar acuerdos duraderos con el fin de promover un proceso de pacificación y reconciliación integral.

El conflicto bélico, así como la anarquía en los que Libia está hundiéndose particularmente desde mediados de 2014, evidencia que la grave crisis de desplazamiento interno y transfronterizo no se resolverá en un futuro cercano. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones deben entenderse como pilares claves en la búsqueda de maneras efectivas para gestionar y resolver la crisis. Las recomendaciones elaboradas se basan en el análisis de esfuerzos previos tanto a nivel local y nacional como internacional. Pese a la confianza en una resolución pacífica del conflicto libio, ojalá en un futuro no muy lejano, hay que ser consciente de la naturaleza profundamente escindida de la sociedad y de las autoridades gubernamentales, así como de la necesidad primordial de restablecer la seguridad, por lo que la implementación de las recomendaciones para poner fin al desplazamiento reiterado y prolongado de cientos de miles de libios se verá

obstaculizada significativamente. Como consecuencia, las prioridades principales deberán centrarse en el establecimiento de un gobierno de unidad nacional elegido, la mejora de la situación de seguridad y la consolidación del Estado de derecho.

Recomendaciones a corto y mediano plazo

i.) Como se ha mencionado en la parte III, capítulo 4.1, hasta la fecha la gran mayoría de los refugiados libios transfronterizos formalmente no ha solicitado el estatus de refugiado, sino ha entrado en los países vecinos, sobre todo Túnez, sin haber recorrido trámites oficiales, dado que en principio los ciudadanos libios no requieren ni de visado, ni de permiso específico para poder trabajar en este país vecino. No obstante, en otros países de acogida los refugiados se enfrentan a situaciones más inseguras imponiéndoles consecuencias socio-económicas de gran impacto, así como una carga psicológica enorme, debido a temores de cambios de política que podrían conllevar su expulsión colectiva y su retorno forzoso a Libia. Con el fin de garantizar que los libios exiliados no queden marginados, los gobiernos de acogida sucesivamente deberían tomar medidas en cooperación con las autoridades gubernamentales libias y organizaciones internacionales, como el ACNUR, para resolver la situación de este grupo de personas, lo que también tendrá que abarcar el reconocimiento del estatus de refugiado cuando sea necesario. Aparte de la recopilación de datos sobre los afectados a través de la colaboración con miembros de las comunidades de refugiados, su registro y la concesión del asilo, también será fundamental fomentar procesos de sensibilización entre las sociedades de acogida para impedir la exclusión social de los exiliados. Asimismo, un proceso de registro obligatorio contribuirá a la detección de personas sospechosas de haber estado involucradas en abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra, y garantizar que sean tratadas debidamente en las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y la ley sobre refugiados. El papel de las Naciones Unidas a este respecto, sobre todo del ACNUR, así como de organizaciones experimentadas como la OIM, será de importancia clave para poder asegurar un proceso organizado y sostenible.

ii.) En lo que respecta a las entidades estatales libias, es crucial que se esfuercen a generar lazos de confianza con las poblaciones desplazadas, tanto internas como transfronterizas, lo que incluye respetar sus derechos y responder a sus necesidades políticas y socioeconómicas particulares. Al estar enfrentadas a condiciones sociales y financieras precarias, es de importancia fundamental tomar medidas rápidas para reanudar el pago de los salarios frecuentemente suspendidos tras la caída del régimen de Gadafi y el sucesivo colapso del Estado, así como proporcionar pagos de ayuda para los desplazados que no son capaces o que no tendrán la oportunidad de reasumir su trabajo. Asimismo, y como ha sido señalado en la parte III, capítulo

5.1.5 con el ejemplo de los tawerghanos, con el fin de poder reintegrar los diferentes grupos marginados, es crucial garantizarles el derecho a una vivienda y al reconocimiento de la personalidad jurídica, incluyendo la emisión de papeles de identidad y el acceso a un juicio justo en el caso de haber sufrido expropiaciones u otros crímenes y violaciones de los derechos humanos. En cooperación con las Naciones Unidas y ONGs, las autoridades gubernamentales libias también tendrán que identificar maneras de facilitar un acceso mejor a los servicios de salud y educación, y apoyar a los sistemas en los países de acogida sobrecargados por la gran cantidad de refugiados necesitados. Siendo una crisis relativamente olvidada en la conciencia de la comunidad internacional y los medios de comunicación, es aun más importante que los agentes involucrados aboguen por la asunción de medidas inmediatas con el fin de garantizar que los operadores humanitarios *in situ* cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para poder proporcionar tanto asistencia de emergencia como apoyo de recuperación a largo plazo a las víctimas de la guerra.

iii.) En lo que concierne a la situación precaria de protección, es crucial que las autoridades gubernamentales libias, los gobiernos de los países de acogida y los agentes internacionales como el ACNUR y la OIM fortalezcan sus mecanismos de coordinación para intercambiar datos y promover estrategias y enfoques de solución hacia más seguridad. Deberán desarrollar e implementar estrategias específicas para abordar los problemas relativos a la protección y ofrecer asistencia para los grupos de personas que carecen de recursos socioeconómicos suficientes para sostenerse, por lo que también es vital afrontar el riesgo de abusos y explotación.

La presencia de UNSMIL, así como la acción humanitaria a través del *Cluster Approach* en Libia son imperativas para la reconstrucción coordinada del país. Por lo tanto, se requiere mayor apoyo internacional para ampliar la capacidad de las diferentes misiones y actividades, mejorar su implicación en el restablecimiento de instituciones estatales, esforzarse en la realización de reformas del sector de seguridad, y de este modo facilitar soluciones duraderas. Con respecto al desplazamiento forzoso, sería esencial involucrar más extensamente a expertos sobre el terreno y representantes de las diferentes poblaciones desplazadas como parte del equipo de agentes de UNSMIL y de otros agentes humanitarios con el fin de asegurar que los programas y misiones sean capaces de responder eficazmente a las situaciones altamente complejas del desplazamiento interno y transfronterizo, así como para poder ofrecer apoyo adecuado para los que decidan retornar a sus lugares de origen.

iv.) Para las organizaciones libias de la sociedad civil que se encuentran en primera fila de la crisis, así como para los organismos gubernamentales, será crucial que la comunidad internacional les facilite mejores oportunidades de capacitación y mayor apoyo financiero para

poder asegurar respuestas eficaces a los problemas *in situ* y aliviar el sufrimiento de los desplazados.

v.) En cooperación con agentes internacionales pertinentes, las organizaciones libias de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos deberían desarrollar campañas de sensibilización con el fin de aumentar la comprensión y concienciación en la sociedad libia en cuanto a los problemas a los que se enfrentan los conciudadanos desplazados, tanto a nivel nacional como internacional. Dada la antipatía y hostilidad generalizada frente a las IDP que persiste en muchas comunidades libias, como demuestra el caso de Misrata y Tawergha, una mayor conciencia pública y el respeto de los derechos de los desplazados son primordiales para poder lograr soluciones duraderas.

vi.) Los diálogos nacionales sobre el futuro del país deben concebirse de manera integral, representativa y participativa. El trato de los crímenes e injusticias cometidos tanto bajo el régimen de Gadafi como por milicias y otros grupos armados desde 2011 tendrá que implicar el compromiso activo y la participación representativa de las comunidades desplazadas, y asegurar que las negociaciones se lleven a cabo teniendo en cuenta los intereses particulares de los afectados. A pesar de los obstáculos y la complejidad relacionados con tal esfuerzo, es imperativo llevar tanto a los perpetradores como las víctimas a la mesa de negociaciones, promover el diálogo entre los diferentes grupos enemistados y de esta forma sucesivamente preparar el camino para una solución pacífica al conflicto bélico y la estabilización del país.

Recomendaciones a largo plazo

vii.) En un contexto posconflicto, será importante que el Estado libio no sólo reconozca el derecho de los libios exiliados al regreso en condiciones de seguridad y dignidad, sino que también promueva su retorno al apoyarles en la recuperación de sus hogares o, de no ser posible, otorgue indemnizaciones adecuadas, así como oportunidades de ingresos, y de este modo facilitar su reintegración en la sociedad. El derecho a regresar de los ciudadanos libios deberá especificarse en la ley nacional y basarse en los principios internacionales de derechos humanos. A largo plazo, en cooperación con representantes de las comunidades desplazadas y los asociados internacionales, Libia debería determinar las medidas necesarias para, por un lado, poder abordar adecuadamente las problemáticas complejas relacionadas con los diversos casos de desplazamiento, y, por otro lado, para fomentar la posibilidad de que los libios desplazados ejerzan su derecho al regreso. Asimismo, a los refugiados libios que libremente deciden no querer regresar, será imperativo desarrollar programas e iniciativas de apoyo para poder encontrar soluciones alternativas eficaces y duraderas.

viii.) Como se ha estudiado detalladamente en la parte III, capítulos 6.1, en cuanto a las cuestiones altamente complejas relativas a las viviendas, tierras y propiedades (HLP), será crucial incluirlas en el debate sobre la justicia transicional y desarrollar un marco político, así como reformas jurídicas pertinentes para poder ofrecerles a los desplazados compensaciones adecuadas que cumplan con las normas internacionales relevantes. Asimismo, se deberá garantizar la imparcialidad en cuanto a los recursos de propiedad común de los desplazados y otras comunidades, y desarrollar una estrategia de promoción conjunta e internacional de enfoques diferenciados respecto a cuestiones de HLP en un entorno transicional.

ix.) Hay que subrayar que todo proceso de paz dirigido a encontrar una solución duradera al conflicto libio tendrá que fundamentarse en el reconocimiento de la necesidad de involucrar a los refugiados e IDP, y dar voz a las víctimas que de otra manera no serán escuchadas. Por lo tanto, deberán tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de justicia transicional y reconciliación para garantizar que estos procesos reconozcan (1) el desplazamiento forzoso como violación de los derechos humanos, y (2) en caso pertinente, los actos violentos a los que han sido y siguen siendo víctimas como crímenes de guerra. A largo plazo, los marcos de justicia transicional actuales de Libia tendrán que ser revisados y reformados, y, preferiblemente con el apoyo de expertos y bajo la supervisión de agentes relevantes como UNSMIL y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, deberá promoverse la búsqueda de la verdad, el sistema de la justicia, mecanismos de reparaciones y medidas de prevención para evitar una repetición de estos crímenes contra la humanidad en el futuro de la nueva Libia.

x.) Cabe destacar que un exitoso proceso de reconciliación nacional debe involucrar, entre otros, a los protagonistas más importantes de la reconciliación del país, es decir, la sociedad civil, las mujeres y tribus. En conjunto, desempeñan un papel incomparable en situaciones de transiciones políticas, ya que, particularmente en la historia de Libia, frecuentemente han logrado llenar vacíos cuando el Estado ha sido incapaz de cumplir con sus funciones en los ámbitos de la seguridad, la mediación y resolución de conflictos, así como en los procesos de reconciliación. Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, cabe realzar que frente a la falta de una autoridad central del Estado, desde 2011 han asumido cierta responsabilidad al promover la estabilidad y la paz, y exitosamente han resuelto disputas comunitarias. Con sus distintos orígenes del ámbito de los derechos humanos, la construcción de la paz, mujeres y justicia, el significado de las organizaciones también ha sido reconocido por las Naciones Unidas, por lo que la UNSMIL y el PNUD se han comprometido a mejorar sus capacidades en cuanto a los esfuerzos de justicia transicional y reconciliación nacional. La capacitación se centra, entre otros, en el fomento del diálogo intercomunitario, la documentación y la presentación de informes sobre

violaciones de los derechos humanos, así como en la participación de las comunidades en las iniciativas de reconciliación (UNSMIL, 11.11.2017).

Las tribus, a su vez, han contribuido a mantener cierto nivel de seguridad durante los tiempos de transición y a prevenir el colapso total del orden público. En un país como Libia, las tribus son suficientemente grandes y poderosas como para tener un impacto decisivo en el periodo de transición. Los warfalla, por ejemplo, tienen aproximadamente un millón de miembros en un país que cuenta con solamente unos seis millones de habitantes. Por consiguiente, se encuentran en buenas condiciones de desempeñar una función importante en proporcionar seguridad interna. Marcado profundamente por las estructuras de clanes, es imprescindible en el contexto libio prestar especial atención a las tribus, ya que su posición de poder puede revelar un impacto político significativo en el futuro del país.

Con respecto al papel de las mujeres, cabe enfatizar que no sólo efectivamente contribuyeron al lanzamiento de los levantamientos en 2011, sino también al inicio de los esfuerzos de reconciliación después del colapso del régimen de Gadafi. En este contexto, hay que mencionar que durante casi un año antes de la Revolución del 17 de febrero, las parientes mujeres de las víctimas del masacre de Abu Salim (véase parte II, cap. 3.1.1) manifestaron frente a la corte de Bengasi cada sábado demandando el conocimiento de la verdad sobre lo que les sucedió a sus 1.270 familiares. El 15 de febrero, o sea, dos días antes del estallido de la revolución, las manifestantes habían intensificado su protesta frente a las oficinas de las fuerzas de la seguridad interna. Habiendo reclamado enérgicamente “reformular el régimen”, poco después exigieron “cambiar el régimen” (*cf.* Fraihat 2016: 204). Por lo tanto, el movimiento de las mujeres de Abu Salim se puede considerar la base de una cultura de la resistencia libia contra el sistema despótico de Gadafi en una época en la que el resto del país todavía no se había opuesto a la dictadura (*cf. ibíd.*).

xi.) Dado que el éxito de la transición hacia la paz y estabilidad en Libia no sólo es de interés fundamental para los países vecinos, sino también para toda la comunidad mundial, en particular los agentes internacionales pueden contribuir activamente a que este éxito sea una realidad. Para la comunidad internacional será crucial tener un papel bien definido y transparente con el fin de fomentar el proceso de reconciliación nacional. Además, como mencionado anteriormente, Libia urgentemente requiere asistencia técnica para desarrollar y aplicar leyes relacionadas con la justicia transicional, investigar crímenes cometidos tanto bajo el régimen de Gadafi como posteriormente, celebrar juicios transparentes y justos de perpetradores, ofrecer indemnizaciones a las víctimas y sus familias y emprender reformas institucionales integrales para impedir que se repitan los crímenes y violaciones de los derechos humanos pasados. En lo

que concierne a las víctimas de estos crímenes, se requiere urgentemente apoyo financiero directo para satisfacer sus demandas y prestarles asistencia psicológica, tanto para poder asimilar el pasado como para poder avanzar hacia un futuro mejor. Es indispensable el apoyo que la comunidad internacional pueda brindar en estas áreas, ya que Libia podría beneficiar de las experiencias y lecciones aprendidas de otros países, y adaptar los diferentes enfoques a su contexto cultural árabe.

xii.) Hay que estar consciente de que también la comunidad internacional aprovechará de una reconciliación nacional exitosa en Libia: por un lado, una transición sostenible hacia la paz puede contribuir significativamente al conjunto de conocimientos en cuanto a los procesos de transición de un régimen despótico hacia la paz y reconciliación sostenibles tras haber sufrido levantamientos, una guerra civil y una sociedad gravemente escindida. Por otro lado, una transición exitosa puede ayudar a mejorar la situación de seguridad y estabilización en toda la región, lo que también es de gran interés a nivel mundial. Consecuentemente, como se ha enfatizado anteriormente, es imperativo proporcionar apoyo político, financiero y técnico, pero sin corromper la independencia y soberanía estatal de Libia. Por ende, el proceso de reconciliación nacional siempre debe ser dirigido a nivel nacional y local. Sobre todo al considerar el aspecto de la continuidad del proceso, es inevitable que sea un “proyecto” únicamente nacional, dado que la influencia dominante desde terceros países fácilmente puede llevar a dependencias y a la implementación de soluciones posiblemente inapropiadas para los desafíos locales, por lo que todo el proceso de reconciliación se vería afectado y podría debilitar el Estado en transición aun más.

Desafortunadamente, hay que realzar que todos los países de la Primavera Árabe, con la excepción de Túnez, van rezagados con sus esfuerzos para unir el pueblo y avanzar hacia el establecimiento de un liderazgo gubernamental estable y la consolidación de una paz duradera. Libia, a su vez, todavía ni siquiera ha comenzado con su proceso de reconciliación, sino se va cada vez más hacia inestabilidad y caos total, lo que implica que no sólo Libia, sino toda la región árabe tendrá que enfrentarse por muchos años más a situaciones de transición y cambios radicales, tanto a nivel político como sociocultural.

Pero desde una perspectiva reflexiva y autocrítica, sobre todo Occidente debe estar consciente de su responsabilidad por el futuro de Libia con respecto a los siguientes aspectos: sea como sea el desarrollo de los acontecimientos en Libia, no hay ninguna duda de que la guerra civil continua claramente significa el hundimiento moral de Occidente, el fracaso militar de la OTAN, así como el fallo diplomático total de los EE.UU., y, en particular, de la UE (véase parte II, cap. 3.2). También el mito de la supuesta plena independencia de los principales medios de comunicación

internacionales (lamentablemente) ha sido refutado (véase parte II, cap. 5.1). Especialmente los países occidentales, que durante décadas desplegaron la alfombra roja a Gadafi y se aprovecharon de negocios altamente rentables con la venta de armas y proyectos de infraestructura, quieren hacernos creer que el “perro loco de Oriente Medio” (véase parte II, cap. 5.5) nunca era nada más que un tirano despótico y uno de los peores terroristas del mundo, o sea la encarnación del mal; una representación falsa y simplificada de la realidad que a menudo ya hemos experimentado.

Asuntos de investigación relevantes para estudios futuros

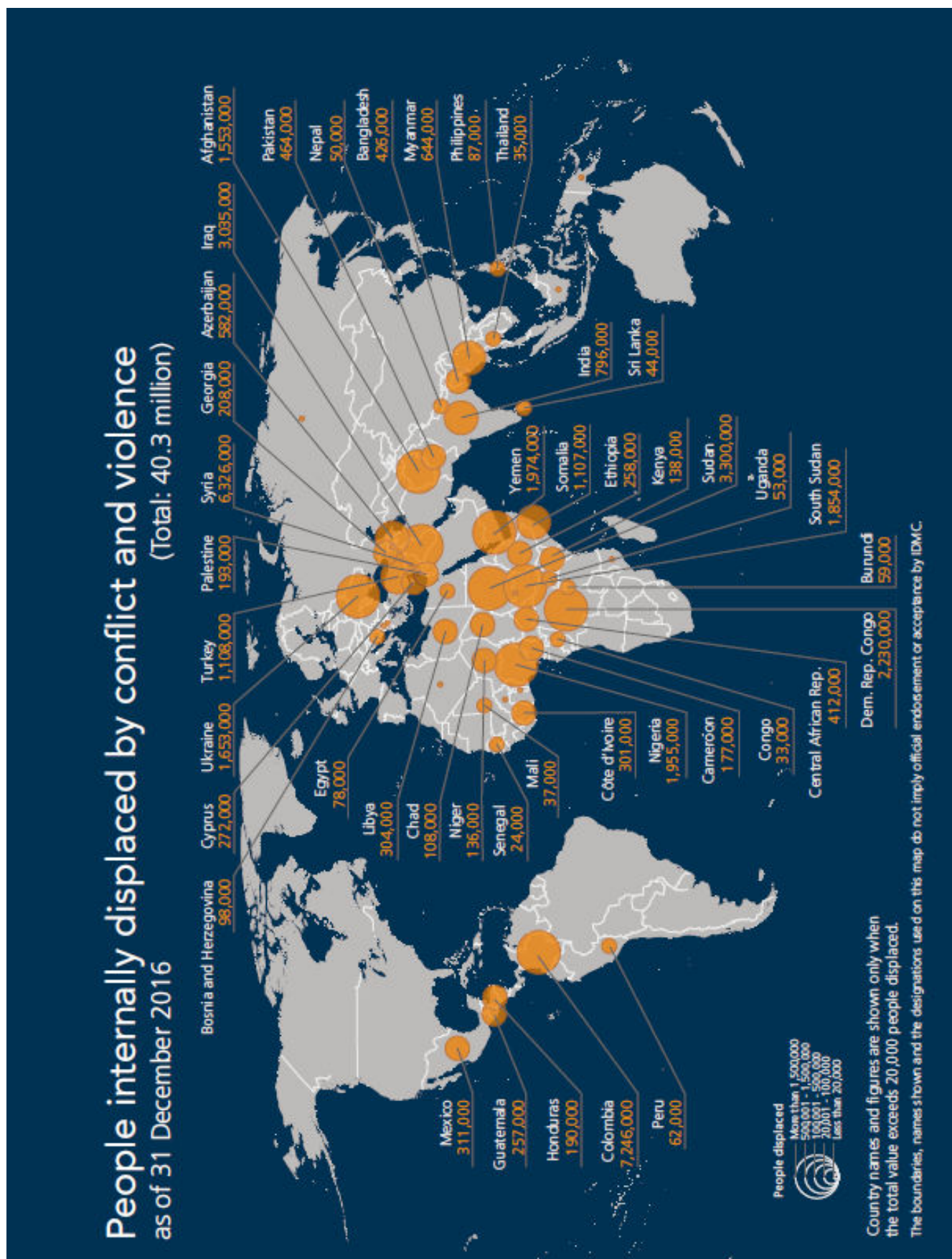
Para resumir este tema sumamente complejo y polifacético, se abriga la esperanza de que la presente tesis proporcione una sólida base para la investigación futura que aspire a la búsqueda de la verdad en Libia y los demás países encontrándose en la era pos-primavera árabe. Esta tesis solamente constituye un primer paso en lo que podría impulsar la realización de investigaciones adicionales sobre las lecciones aprendidas de intervenciones militares llevadas a cabo de manera irreflexiva y apresurada, el debate sobre las perspectivas futuras del concepto tradicional de la soberanía estatal, el papel polémico de los medios de comunicación internacionales, los procesos de transición y reconciliación, así como la consolidación de una paz duradera y sostenible en la región. Muchas preguntas todavía siguen sin respuesta, por lo que estudios futuros pueden ayudar a proporcionar soluciones. Algunos asuntos de interés particular incluyen, entre otros, los siguientes enfoques:

- al tener en cuenta la intervención militar evidentemente fallida en Libia, el abuso severo del mandato de la OTAN y la actuación en contra de la Resolución 1973 (2011), surge la cuestión ¿qué impacto y consecuencias tendrán estas lecciones en la aplicación futura de la *Responsibility to Protect* en otras crisis humanitarias graves como Siria o el Yemen? Considerando que el principio de la R2P surgió de la idea omnipresente que “nunca más” debían repetirse crímenes de lesa humanidad, tales como el mundo ha sufrido a lo largo de nuestra historia, el caso de Libia demuestra con claridad que la comunidad internacional no ha aprendido de verdad de los acontecimientos pasados. A este respecto será crucial encontrar una respuesta a la cuestión sobre qué la comunidad mundial deberá hacer cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado por un veto. Es evidente que una reforma en cuanto a la institucionalización e implementación de la R2P ya no debería aplazarse. En este aspecto, serán necesarias investigaciones adicionales para identificar (1) si la doctrina de la Responsabilidad de Proteger pudiera establecerse como una responsabilidad jurídica realmente vinculante, y (2) si subsiguientemente se pudiera establecer una rendición de cuentas en relación con las obligaciones legales del Consejo de Seguridad, en caso de que no cumpla con su responsabilidad de proteger.

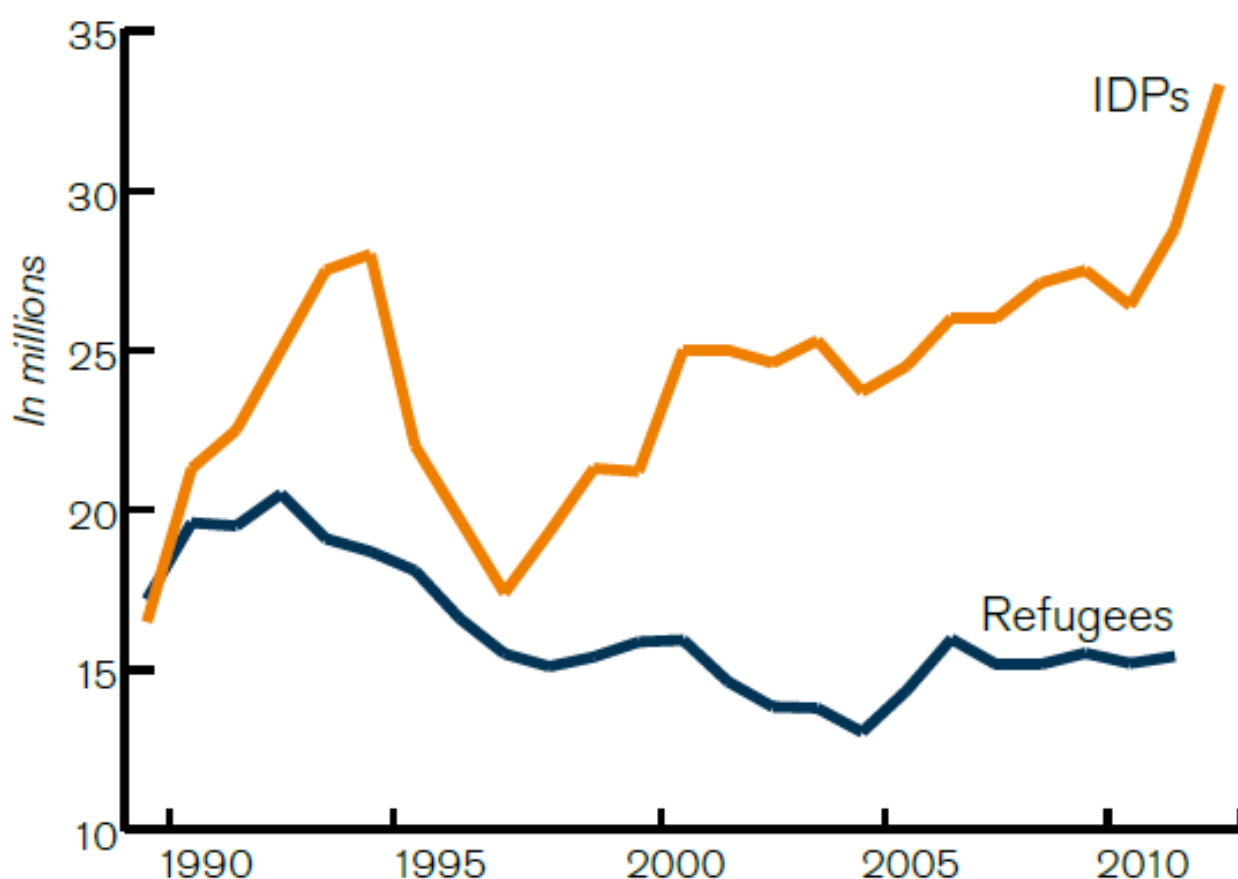
- En relación con la sociedad libia, su patrimonio cultural y su sistema de valores, parece existir una tendencia de evitar de tratar con ciertas heridas del pasado, lo que “impide”, por ejemplo, el trato jurídico de crímenes masivos como violaciones sistemáticas (véase parte III, cap. 5.1.7). Por lo tanto, cabe plantear la pregunta ¿cómo afectarán estas circunstancias las perspectivas futuras de paz y estabilidad en el país?
- Al considerar las personas desplazadas y otras víctimas de violaciones de los derechos humanos, parece haber una diferencia notable entre las expectativas de estos grupos de personas y la capacidad del Estado de cumplir con las demandas relacionadas. ¿Qué tipo de impacto tendrá esto en la voluntad de compromiso de las víctimas, y en su disposición a participar y apoyar los procesos de pacificación en el país?
- Debido al conflicto armado continuo, la anarquía generalizada y un estado de emergencia tanto a nivel político como social, el papel tradicional de las mujeres libias ha cambiado. ¿Cómo podría el estado de crisis en Libia provocar un replanteamiento en la sociedad y el cambio de las normas tradicionales para que las mujeres tengan la oportunidad de convertirse en agentes independientes, emancipadas y equiparadas en la sociedad libia, y para que de esta manera puedan contribuir activamente a la construcción de una nueva Libia mejor y más justa?
- Adicionalmente, estudios futuros podrían centrarse en la cuestión sobre cómo los procesos nacionales de consolidación de la paz, del diálogo y de la reconciliación se distinguirán en países que probablemente emprenderán tales procesos en un futuro más lejano, como Siria y el Yemen, y qué relevancia tendrán para la investigación de conflictos y los estudios de paz en general.

ANEXOS

Anexo 1 – Las IDP en el mundo (estado: 31 de diciembre de 2016)



Proportion of IDPs and refugees fleeing conflict and violence from 1989 to 2013



OFICINA DE COORDINACION DE ASUNTOS HUMANITARIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS –

OCHA-Online

OCHA Publications

Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos

**Prólogo del Secretario General Adjunto
para Asuntos Humanitarios
Sr. Sergio Vieira De Mello**

La comunidad humanitaria está cada vez más consciente de la crisis del desplazamiento interno que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Aunque la responsabilidad de la protección de las personas internamente desplazadas incumbe primordialmente a los gobiernos nacionales y a las autoridades locales, conviene que la comunidad internacional examine la mejor manera de contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de conflicto y de crisis. Debemos también concebir una asistencia humanitaria que promueva la protección de las personas internamente desplazadas.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas se han adoptado medidas importantes para atender a tiempo y con eficacia a las necesidades de las personas internamente desplazadas. El Comité Permanente entre Organismos me ha encomendado la responsabilidad de actuar como centro de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con respecto a las cuestiones relacionadas con los internamente desplazados. En el desempeño de este mandato, me he comprometido a mejorar la capacidad de las Naciones Unidas en conjunto para responder a las situaciones de desplazamiento interno y a promover una firme coordinación y una división más clara de las responsabilidades institucionales así como a prestar el apoyo adecuado a los organismos operacionales.

En este contexto, me complace la publicación por el Representante Especial del Secretario General sobre personas internamente desplazadas de los *Principios Rectores de los desplazamientos internos*. Estos Principios, que se fundan en el derecho humanitario internacional y en los instrumentos relativos a los derechos humanos vigentes, servirán de pauta internacional para orientar a los gobiernos así como a los organismos humanitarios y de desarrollo internacionales en la prestación de asistencia y protección a las personas internamente desplazadas.

El Comité Permanente entre Organismos apoya plenamente los Principios Rectores y ha alentado a sus miembros a que los compartan con sus juntas ejecutivas y su personal, especialmente el personal sobre el terreno, para que los Principios se apliquen en sus actividades en favor de las personas internamente desplazadas.

Creo que los Principios Rectores pueden contribuir considerablemente a que se tome conciencia de las necesidades de las personas internamente desplazadas, a movilizar el apoyo de la comunidad humanitaria y a ayudar a los colegas sobre el terreno a hallar soluciones cuando hagan frente a las necesidades de protección y asistencia de los internamente desplazados. Los

Principios ayudarán asimismo a los gobiernos a proporcionar seguridad y bienestar a sus poblaciones desplazadas.

Confío en que todos y cada uno de ustedes se esforzarán por lograr la difusión y aplicación más amplias posibles de los Principios Rectores con el fin de que se produzca ese mejoramiento tan necesario en la situación y el trato de las personas internamente desplazadas.

**Nota de Introducción
del Representante del Secretario General sobre
las Personas Internamente Desplazadas
Sr. Francis M. Deng**

La comunidad internacional se enfrenta a la ingente tarea de garantizar protección a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos violentos, graves violaciones de los derechos humanos u otros acontecimientos traumáticos, pero que permanecen dentro de las fronteras de sus propios países. Casi siempre sufren de graves privaciones, dificultades y discriminación. Los Principios Rectores de los desplazamientos internos se han elaborado para hacer frente a este reto.

Los Principios señalan los derechos y las garantías relacionados con la protección de los internamente desplazados en todas las fases de su desplazamiento. Les protegen contra el desplazamiento arbitrario, sientan las bases para su protección y asistencia y establecen garantías para su regreso, reasentamiento y reintegración en condiciones de seguridad. Aunque no constituyen un instrumento vinculante, estos Principios reflejan y son compatibles con el derecho internacional humanitario y relativo a los derechos humanos y con el derecho análogo relativo a los refugiados.

Los Principios se elaboraron a lo largo de varios años en aplicación del mandato que me otorgó en 1992 la Comisión de Derechos Humanos y que reforzaron resoluciones posteriores tanto de la Comisión como de la Asamblea General. Inicialmente se me pidió que estudiara las causas y consecuencias de los desplazamientos internos, el estatuto de las personas internamente desplazadas en el derecho internacional, la medida en que se están atendiendo sus necesidades con los arreglos institucionales actuales y la forma de mejorar la protección y la asistencia que se les presta.

En consecuencia, la elaboración del marco jurídico e institucional necesarios con respecto a los internamente desplazados y la realización de misiones a los países para emprender con los gobiernos y otros un diálogo en su nombre han sido las principales actividades de mi mandato. En colaboración con un equipo de expertos jurídicos internacionales, examiné en qué grado las personas internamente desplazadas reciben una protección adecuada del derecho internacional y preparé un estudio sobre la compilación y el análisis de normas jurídicas (E/CN.4/1996/52/Add.2 en inglés solamente). El estudio puso de manifiesto que, si bien existen leyes que proporcionan una protección sustancial a los internamente desplazados, existen considerables esferas en que no se cuentan con una base adecuada para su protección y asistencia. Posteriormente la Comisión y la Asamblea General me pidieron que preparara un marco normativo adecuado con respecto a los internamente desplazados. Esto desembocó en la redacción de los Principios Rectores que reiteran las normas existentes y tratan de aclarar aspectos dudosos y de llenar las lagunas.

Después de presentar los Principios Rectores a la Comisión en 1998, la Comisión aprobó una resolución en la que tomaba nota de los Principios Rectores y de mi intención declarada como

Representante del Secretario General de utilizarlos en mi diálogo constante con los gobiernos y con todas las personas cuyos mandatos y actividades guardan relación con las necesidades de los internamente desplazados. La Comisión tomó asimismo nota de la decisión del Comité Permanente entre Organismos, que había acogido con satisfacción los Principios y estimulado a sus miembros a compartirlos con sus juntas ejecutivas y su personal, especialmente el personal sobre el terreno, y a aplicarlos en las actividades en favor de los internamente desplazados. Los Principios Rectores deben aportar unas pautas prácticas valiosas a los gobiernos, otras autoridades competentes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en su trabajo con las personas internamente desplazadas. Confío en que se distribuyan ampliamente y en que se les dé aplicación práctica sobre el terreno.

Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos

Introducción: Alcance Y Finalidad

1. Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.

2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

3. Estos Principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Sirven de orientación a:

(a) El Representante del Secretario General sobre la cuestión de los desplazados internos, en el cumplimiento de su mandato;

(b) Los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos internos;

(c) Todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los desplazados internos; y

(d) las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer con las poblaciones desplazadas.

4. Estos Principios se deberán difundir y aplicar con la mayor amplitud posible.

Sección I. Principios Generales

Principio 1

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.

2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Principio 2

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas.

2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho interno. En particular, estos Principios no afectarán al derecho de solicitar y obtener asilo en otros países.

Principio 3

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Principio 4

1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar.

2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Sección II. Principios Relativos A La Protección Contra Los Desplazamientos

Principio 5

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.

Principio 6

1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:

(a) Basados en políticas de *apartheid*, "limpieza étnica" o prácticas similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada;

- (b) En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de la población civil afectada o razones militares imperativas;
- (c) En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial;
- (d) En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación; y
- (e) cuando se utilicen como castigo colectivo.

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias.

Principio 7

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.

2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia.

3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las garantías siguientes:

- (a) La autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas adoptará una decisión específica.
- (b) Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;
- (c) Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;
- (d) Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;
- (e) Las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y
- (f) Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Principio 8

El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados.

Principio 9

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.

Sección III. Principios Relativos A La Protección Durante El Desplazamiento

Principio 10

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en particular contra:

- (a) El genocidio;
- (b) El homicidio;
- (c) Las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y
- (d) Las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte.

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos precedentes.

2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohibidos en toda circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- (a) Los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil;
- (b) La privación de alimentos como medio de combate;
- (c) Su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militares;
- (d) Los ataques a sus campamentos o asentamientos; y
- (e) el uso de minas antipersonal.

Principio 11

1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental o moral.

2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- (a) La violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual;
- (b) La esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños; y

(c) Los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los desplazados internos;. Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos precedentes.

Principio 12

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser reclusos o confinados en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias.
3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o prisión arbitrarias como resultado de su desplazamiento.
4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso.

Principio 13

1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades.
2. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen a quienes no lo hagan.

Principio 14

1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia.
2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos.

Principio 15

Los desplazados internos tienen derecho a:

- (a) Buscar seguridad en otra parte del país;
- (b) Abandonar su país;
- (c) Solicitar asilo en otro país; y
- (d) Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.

Principio 16

1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos.
2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados.

3. Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso.

4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos.

Principio 17

1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.

2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias de desplazados internos que deseen estar juntos.

3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, particularmente en los casos de familias con niños. Las autoridades responsables facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y estimularán y cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.

4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a estar juntos.

Principio 18

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado.

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:

(a) Alimentos esenciales y agua potable;

(b) Alojamiento y vivienda básicos;

(c) Vestido adecuado; y

(d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales.

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en la planificación y distribución de estos suministros básicos.

Principio 19

1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole.

3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos.

Principio 20

1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad personal, partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los documentos necesarios.
3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre.

Principio 21

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.
2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:
 - (a) Expolio;
 - (b) Ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;
 - (c) Utilización como escudos de operaciones u objetos militares;
 - (d) Actos de represalia; y
 - (e) Destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo
3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.

Principio 22

1. No se harán entre los desplazados internos, con independencia de que vivan o no en campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento en el disfrute de los siguientes derechos:
 - (a) El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, opinión y expresión;
 - (b) El derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar en las actividades económicas;
 - (c) El derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en los asuntos comunitarios;
 - (d) El derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para ejercerlo; y
 - (e) El derecho a comunicar en un idioma que comprendan.

Principio 23

1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, su idioma y su religión.
3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educativos.
4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos.

Sección IV. Principios Relativos A La Asistencia Humanitaria

Principio 24

1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.
2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares.

Principio 25

1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.
2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Este ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos del Estado y se examinará de buena fe.
Su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.
3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos.

Principio 26

Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.

Principio 27

1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y los demás órganos competentes prestarán la debida consideración a la protección de las necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las normas y códigos de conducta internacionales pertinentes.

2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las responsabilidades en materia de protección de las organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.

Sección V. Principios Relativos Al Regreso, El Reasentamiento Y La Reintegración

Principio 28

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Principio 29

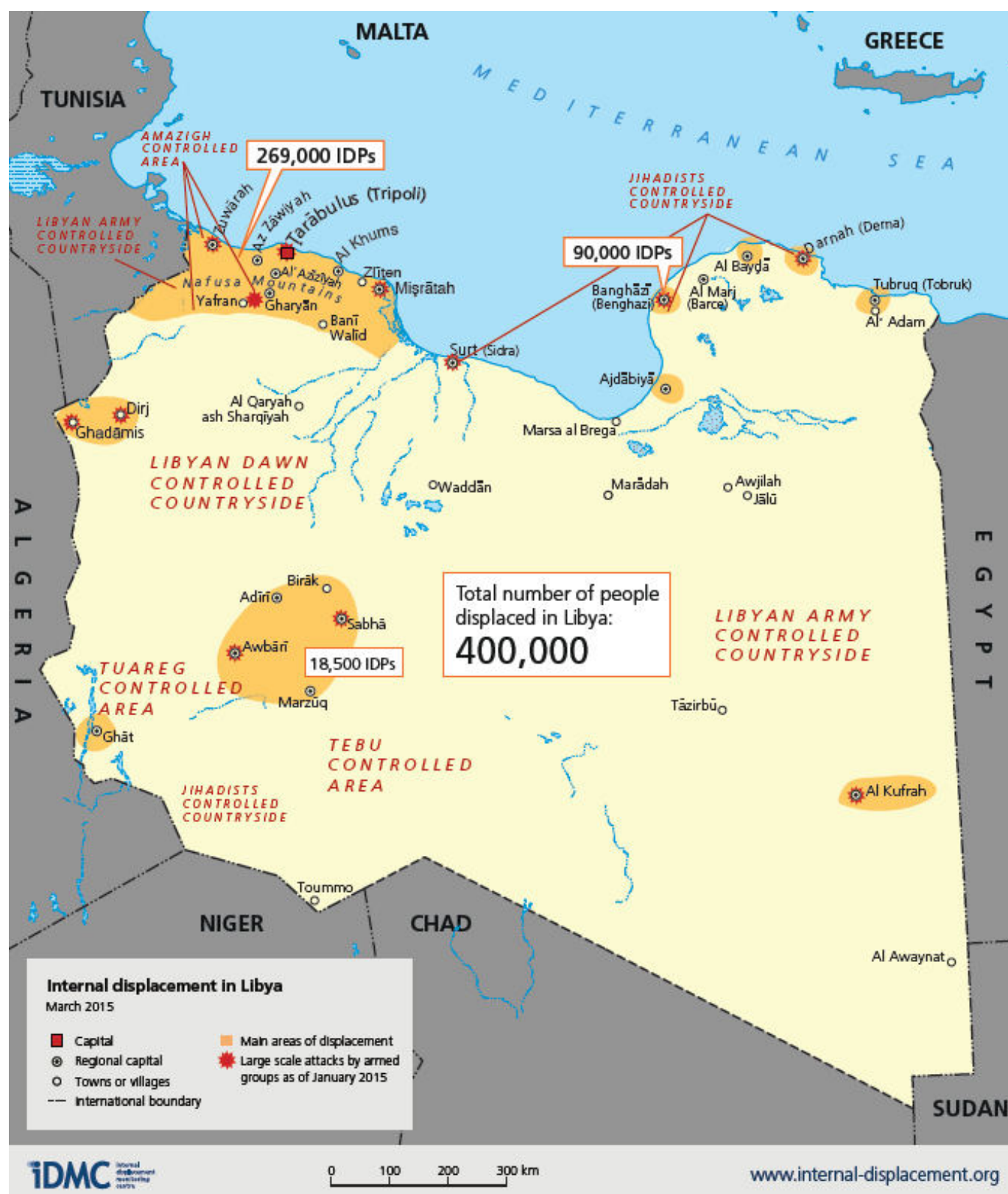
1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.

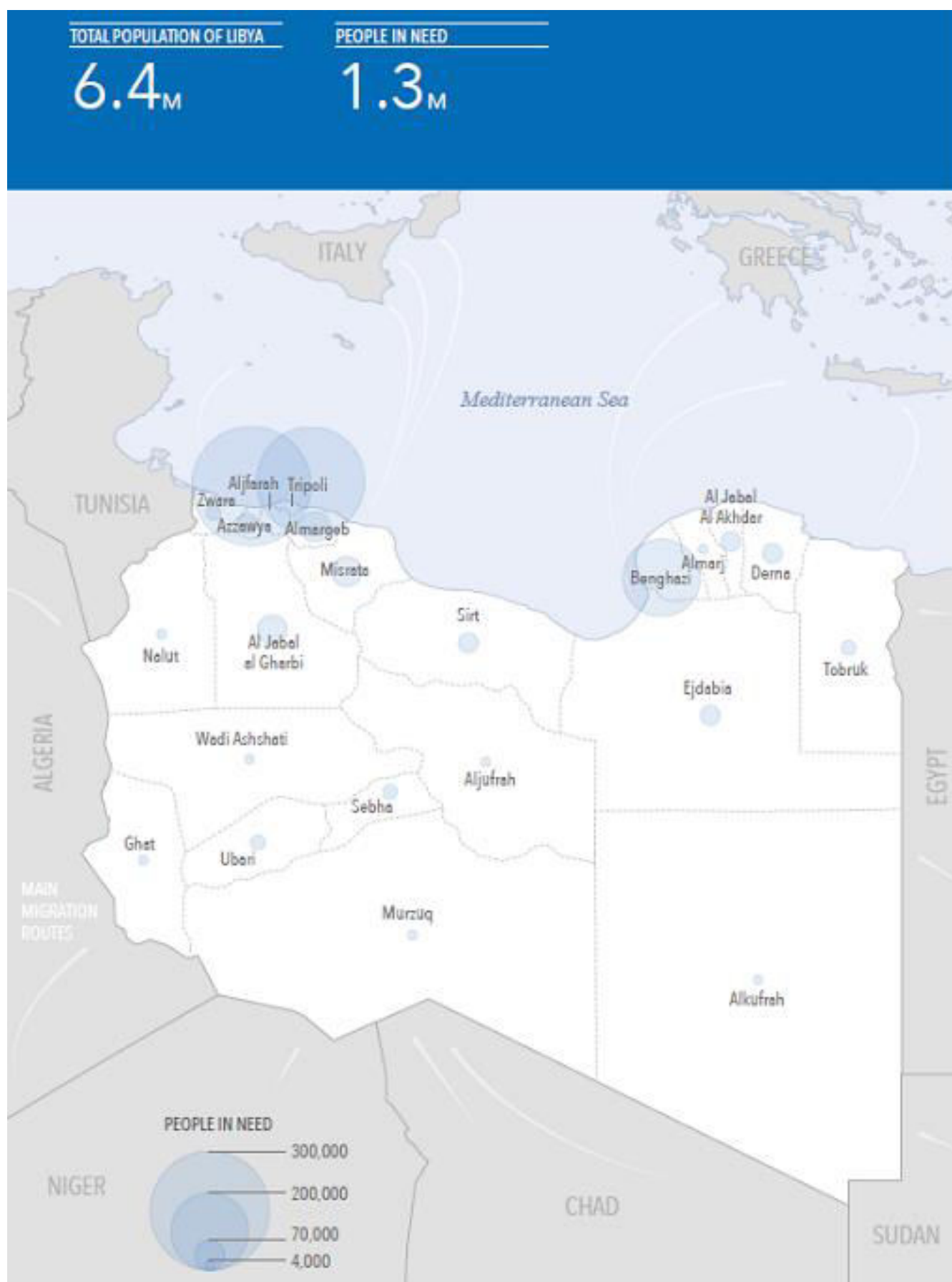
Principio 30

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones humanitarias internacionales y a otros órganos competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y reintegración.

Anexo 4 – El desplazamiento interno en Libia (estado: marzo de 2015)



Anexo 5 – Personas necesitadas en Libia según el HNO 2017



**Anexo 6 – Agencias humanitarias involucradas en el *Global Protection Cluster* en Libia
según el HNO 2017**

PLANNED NEEDS ASSESSMENTS

SECTOR	LOCATION	LEAD AGENCY	PLANNED COMPLETION DATE	TITLE
Multi-Sector	Whole of Libya	IOM	Monthly	Migration Assessment
Multi-Sector	Whole of Libya	IOM	Every Six weeks	IDPs, Returnees, Migrants Baseline Tracking
Protection	Benghazi, Ghat, Murzuq, Sebha, Tripoli	Save the Children/ DRC/ CESVI	Nov 2016	Central Mediterranean Migration Research Initiative - CEMRI
WASH	Whole of Libya	UNICEF	Nov 2016	Water quality assessment
WASH	Benghazi	UNICEF	Dec 2016	WASH needs assessment
Protection	Aljfarah, Alkufrah, Murzuq, Tripoli, Ubari, Sebha	UNHCR/ IMPACT	Dec 2016	Migration Assessment in the South of Libya
Protection	Benghazi, Misrata, Sirt, Tripoli	UNHCR/ Mercy Corps	Dec 2016	IDP Protection Monitoring Assessment
Multi-Sector	Whole of Libya	UNFPA	Dec 2016	Multi-Sector Needs Assessments (MSNA)
Health	Whole of Libya	WHO	Dec 2016	Service Availability and Readiness Assessment of Primary Health Care Facilities
Food Security	Al Butnan, Al Jabal Al Akhdar, Almarqeb, Azzawya, Benghazi, Misrata, Sirt, Tripoli, Zwara	FAO	Jan 2017	Fisheries Socio-Economic Assessment - Libya
Multi-Sector	Whole of Libya	REACH	Apr 2017	Multi-Sector Needs Assessments (MSNA)
Multi-Sector	Whole of Libya	REACH	Jul 2017	Multi-Sector Needs Assessments (MSNA)

LISTADO DE FUENTES

Bibliografía

BASSIOUNI, M. Cherif (ed.), *Libya: From Repression to Revolution: A Record of Armed Conflict and International Law Violations, 2011-2013*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013.

BEDSZENT, Gerd, “42 Jahre Volks-Dschamahirija”, en EDLINGER, Fritz (ed.), *Libyen. Hintergründe, Analysen, Berichte*, Promedia, Viena, 2011, pp. 13-31.

BELLAMY, Alex, *Whither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit. Ethics and International Affairs*, Wiley-Blackwell Publishing, Cambridge, 2006, 20 (2), pp. 143-169.

BELLAMY, Alex, *Responsibility to Protect. The global effort to end mass atrocities*, Polity Press, Cambridge, 2009.

BELLAMY, Alex; WILLIAMS, Paul, “The new politics of protection? Cote d’Ivoire, Libya and the responsibility to protect”, en *International Affairs*, 87 (4), 2011, pp. 825-850.

Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (autores, eds.), *Improving the Governance of International Migration*, Verlag Bertelsmann Stiftung, Bielefeld, 2011.

BLITZ, Brad, “Libyan Nationals in the United Kingdom: Geopolitical Considerations and Trends in Asylum and Return”, en *International Journal on Multicultural Societies* 10 (2), 2008, pp. 106-127.

BROOKS, Stephen, “Dueling Realisms”, en *International Organization*, 51 (3), 1997, pp. 445-477.

BRUNNÉE, Jutta; TOOPE, Stephen J., *Legitimacy and Legality in International Law. An International Account*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

CHESTERMAN, Simon, *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

COHEN, Roberta; DENG, Francis M., *Masses in flight – The global crisis of Internal Displacement*, Brookings Institution, Washington, 1998a.

COHEN, Roberta; DENG, Francis M., *The Forsaken People: Case Studies of the Internally Displaced*, The Brookings Institution, 1998b.

COOPER, Richard H.; VOINOV KOHLER, Juliette (eds.), *Responsibility to Protect. The Global Moral Compact for the 21st Century*, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2009.

CREMER, Uli, “Deutschland, Frankreich und der Libyenkrieg”, en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die “Verantwortung zu schützen”*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 135-148.

- CROME, Erhard, *Der libysche Krieg des Westens*, no. 248, Spotless, Berlín, 2011b.
- DAHNS, Daniela, “Störfaktor Gaddafi”, en *Blätter für deutsche und internationale Politik*, 7/11, 2011, pp. 35-39.
- DAS, Veena; KLEINMAN, Arthur; LOCK, Margret; RAMPHELE, Mamphela; REYNOLDS, Pamela, *Remaking a World. Violence, Social Suffering and Recovery*, University of California Press, Los Angeles, 2001.
- DEMNY, Oliver, “Geschichte Libyens von der Revolution bis heute”, en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die “Verantwortung zu schützen”*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 37-51.
- DENG, Francis M., *Protecting the Dispossessed. A Challenge for the International Community*, A Brookings Occasional Paper, The Brookings Institution, Washington D.C., 1993.
- DENG, Yong, “The Power and Politics of Recognition: Status in China’s Foreign Relations”, en VOLGY T.; CORBETTA, R.; GRANT, K.; BAIRD, R. (eds.), *Major Powers and the Quest for Status in International Politics*, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2011, pp. 77-95.
- Deutsche Afrika-Gesellschaft, *Afrika heute. III Welt*, Forum Afrika-Emanzipation, Dritte Welt, PDW-Verlag, Bonn, 1973.
- Deutscher Bundestag, “Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen, Wolfgang Gehrcke, Andrej Hunko, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE”, no. 17/5666, 26.04.2011.
- DUTHIE, Roger, “Transitional Justice and Displacement”, en *International Journal of Transitional Justice*, 5, no. 2, 2011.
- ERALP, Pelin, “Motivations Behind Third Party Military Interventions in Intrastate conflicts”, Conference Paper at the International Studies Association Convention 2004, 17 a 20 de marzo, Montreal, Canadá.
- ERIKSSON, Mikael, “Towards selective regionalization? The intervention in Libya and the emerging global order”, en WALLENSTEEN, Peter; BJURNER, Anders (eds.), *Regional Organizations and Peacemaking. Challenges to the UN?*, Routledge, Nueva York, 2015, pp. 217-237.
- FINNEMORE, Martha; SIKKINK, Kathryn, “International Norm Dynamics and Political Change”, en *International Organization*, 52 (4), 1998, pp. 886-918.
- FRANCK, Thomas M., “Chapter 26. Humanitarian Intervention”, en BESSON, Samantha, TASIOULAS, John (eds.), *The Philosophy of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 531-548.
- GEHRING, Thomas; OBERTHÜR, Sebastian, “The Causal Mechanisms of Interaction between International Institutions”, en *European Journal of International Relations*, 15 (1), 2009, pp. 124-157.
- GILLMAN, Nina, *Interagency Coordination During Disaster: Strategic Choices for the UN, NGOs, and other Humanitarian Actors in the Field*, Kiel, 2010.

GÖZEN ERCAN, Pinar Gözen, *Debating the Future of the 'Responsibility to Protect': The Evolution of a Moral Norm*, Palgrave Macmillan, Ankara, 2016.

Great Britain, Cabinet Office, *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*, HM Government, Londres, 2010.

GREINER, Farina, “Los retos para la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria del desplazamiento interno”, en COCA VILLAR, Cristina; GARCÍA VALLINAS, Eulogio; MARTÍN SOLBES, Victor M.; RAMÍREZ HURTADO, Carmen, *Estudios en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. In memoriam Francisco A. Muñoz*, Editorial Síntesis, Madrid, 2015, pp. 97-111.

GRIECO, Joseph, “Realist International Theory and the Study of World Politics”, en *New Thinking in International Relations Theory*, Westview Press, Boulder, 1997, pp. 162-202.

GRUBMÜLLER, Verena, *Das Konzept der Intervention zum Schutz bedrohter Menschen als Antwort auf Völkermord?. Maßnahmen, Kriterien und Anforderungen*, en *Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Linz*, Trauner Verlag, Linz, 2007.

HADDADT, Saïd, *The role of the Libyan army in the revolt against Gaddafi's regime*, en Al Jazeera Network, Al Jazeera Centre for Studies, Qatar, 16.03.2011.

HEHIR, Aidan, *Humanitarian Intervention. An Introduction*, Palgrave Macmillan, Londres/Nueva York, 2010.

HIPPLER, Jochen, “Globale Werte, Völkerrecht und zwischenstaatliche Gewalt”, en HAUCHLER, Ingomar; MESSNER, Dirk; NUSCHELER, Franz (eds.), *Globale Trends 2004/2005 – Fakten, Analysen, Prognosen*, Für die Stiftung Entwicklung und Frieden, Fráncfort del Meno, 2003, pp. 83-97.

HISCOCK, Kevin M., *Hydrogeology. Principles and Practice*, Blackwell Publishing, 2005.

HOMES, Sir J. (ex Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia), *Learning the lessons of Haiti*, Humanitarian Exchange, No. 48. Humanitarian Policy Group, 2010.

HOPPE, Thomas (ed.), *Schutz der Menschenrechte. Zivile Einmischung und militärische Intervention*, Berlín, 2004.

HYDE-PRICE, Adrian, “‘Normative’ power Europe: a realist critique”, en *Journal of European Public Policy*, 13 (2), 2006, pp. 216-235.

International Business Publications (IBP), *Libya. Electoral, Political Parties Laws and Regulations Handbook. Strategic Information, Regulations, Procedures*, IBP, Washington, 2015.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, International Development Research Center, Ottawa, 2001.

JOFFE, George, “Libya and Europe”, en *The Journal of North African Studies*, 6 (4), 2001, pp. 75-92.

KANT, Immanuel, “Gesammelte Schriften, Band 8, Abhandlungen nach 1781”, en Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1912.

KANT, Immanuel, “Sobre el tópico: Esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica”, 1793, en KANT, Immanuel, *En defensa de la Ilustración*, trad. de ALCORIZA, Javier; LASTRA, Antonio, Alba, Barcelona, 1999.

KERSTEN, Mark, *Justice in Conflict: The effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

KHALIL, Andrea, *Crowds and Politics in North Africa: Tunisia, Algeria and Libya*, Routledge, Nueva York, 2014.

KLOTZ, Audie, *Norms in International Relations. The Struggle Against Apartheid*, Cornell University Press, Ithaca, 1995, pp. 4-36.

KOCS, Stephen, “Explaining the Strategic Behavior of States: International Law as System Structure”, en *International Studies Quarterly*, 38 (4), 1994, pp. 534-557.

KOHL, Ines, “Gaddafis Instrumentalisierung der Tuareg. Von Rebellen, Banditen und Söldnern”, en EDLINGER, Fritz (ed.), *Libyen. Hintergründe, Analysen, Berichte*, Promedia, Viena, 2011, pp. 71-86.

KRIEG, Andreas, *Socio-Political Order and Security in the Arab World. From Regime Security to Public Security*, War & Defence Studies, King's College London, Palgrave Macmillan, Londres, 2017.

KUWALI, Dan; VILJOEN, Frans (eds.), *Africa and the Responsibility to Protect. Article 4(h) of the African Union Constitutive Act*, Routledge Taylor & Francis Group, Londres y Nueva York, 2016.

LAUBACH, Birgit, “Angriffskrieg oder Humanitäre Intervention? Völkerrechtliche Aspekte der NATO-Luftschläge in Jugoslawien”, en *Zeitschrift für Rechtspolitik* 32, no. 7, 1999, pp. 276-280.

LÓPEZ ESCARCENA, Sebastián, *Indirect Expropriation in International Law*, Leuven Centre for Global Governance Studies, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2014.

LOWE, V.; ROBERTS, A.; WELSH, J.; ZAUM, D., *The United Nations Security Council and War. The Evolution of Thought and Practice since 1945*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

LU, Sheldon H., *China, Transnational Visuality, Global Postmodernity*, Stanford University Press, Stanford, 2001.

LUTTERBECK, Derek; ENGELBRECHT, Georgij, “The West and Russia in the Mediterranean: Towards a Renewed Rivalry?”, en *Mediterranean Politics*, 14 (3), 2009, pp. 385-406.

MARCH, James; OLSEN, Johan, “The Logic of Appropriateness”, en MORAN, Michael; REIN, Martin; GOODIN, Robert (eds.), *The Oxford Handbook of Public Policy*, Oxford University Press, Nueva York, 2006, pp. 688-710.

MARCOWITZ, Reiner, “Staatsräson und Legitimität: Die Außenpolitik von Bundesrepublik Deutschland und DDR 1949-1989”, en CLEMENS, Gabriele (ed.), *Nation und Europa. Studien*

zum internationalen Staatensystem im 19. und 20. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2001, pp. 153-171.

MARTIN, Susan F.; WEISS FAGEN, Patricia; JORGENSEN, Kari M.; SCHOENHOLTZ, Andrew; MANN-BONDAT, Lydia, *The Uprooted – Improving Humanitarian Responses to Forced Migration*, Lexington Books, Nueva York, 2005.

MAZUR, Robert E., *Supporting Local Capacities for Peace and Development. Reconceptualizing and Redirecting Aid Efforts in War Torn Societies*, Brookings Institution, Delhi, 2004.

MEARSHEIMER, John, *The Tragedy of Great Power Politics*, Norton, Nueva York, 2001.

MEARSHEIMER, John, “Structural Realism”, en DUNNE, Timothy; KURKI, Milja; SMITH, Steve (eds.), *International Relations Theories. Discipline and Diversity*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 76-95.

MEGGLE, Georg, “Ist dieser Krieg gut? Ein ethischer Kommentar”, en MERKEL, R. (ed.), *Der Kosovo-Krieg und das Völkerrecht*, Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 2000, pp. 138-159.

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto, *Der zweite Kalte Krieg: Zur Geopolitik und strategischen Dimension der USA*, Springer, Wiesbaden, 2016.

MUTZ, Reinhard, “Libyen: Lizenz zum Töten?”, en *Blätter für deutsche und internationale Politik*, (6), 2011, pp. 52-57.

NACHTWEI, Winfried, *Militärintervention in Libyen - Notwendigkeit, Legitimität, Risiken*, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, Berlín, 2011.

NEWMAN, Edward, “Refugees, international security, and human vulnerability: Introduction and survey”, en NEWMAN, Edward; VAN SELM, Joanne, *Refugees and Forced Displacement – International Security, Human Vulnerability, and the State*, 2003, pp. 3-30.

O’CONNELL, Mary, “How to Lose a Revolution”, en STARK, Alex (ed.), *The Responsibility to Protect: challenges and opportunities in light of the Libyan intervention*, e-International Relations, 2011, pp. 15-17.

OPPENHEIM, Lassa F.L., *International Law*, por JENNINGS, Robert; WATTS, Arthur (eds.), 9th ed., Longman, Londres, 1996.

PAECH, Norman, “Libyen und das Völkerrecht”, en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die “Verantwortung zu schützen”*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 65-77.

PHUONG, Catherine, *The International Protection of Internally Displaced Persons*, CSICL Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, Nueva York, 2004.

PRADETTO, August, “Der andere Preis der Freiheit. Intervention in Libyen: Zwischen Regimewechsel und humanitären Anspruch”, en *Internationale Politik*, 66 (4), 2011, pp. 53-59.

QUINN, Joanna R., “Introduction”, en QUINN, Joanna R. (ed.), *Reconciliation(s): Transitional Justice in Postconflict Societies*, McGill Queen’s University Press, Montreal, 2009.

RAWLS, John, *The Law of Peoples*, Harvard University Press, Cambridge, 2002.

RUF, Werner, “Libyen und die arabische Welt”, en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die “Verantwortung zu schützen”*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 163-176.

RUFFA, Chiara, “Realist-normative power Europe? Explaining EU policies toward Lebanon from an IR perspective”, en *Comparative European Politics*, 9 (4/5), 2011, pp. 562-580.

SCHEFFLER, Jan, “Möglichkeiten und Grenzen eines ständigen europäischen Sitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen”, en Dr. habil. BRZOSKA, Michael *et.al.* (eds.), *Sicherheit und Frieden. Security and Peace*, Nomos, 2/2006, pp. 80-81.

SCHIMMELFENNIG, Frank, *Internationale Politik*, Schöningh, Paderborn, 2010, pp. 65-87.

SCHINDLER, Dietrich, “Bürgerkrieg”, en Görres-Gesellschaft (ed.), *Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft*, Herder, Freiburg, 1985, pp. 1050-1053.

SCHÖRNIG, Niklas, “Neorealismus”, en SCHIEDER, Siegfried; SPINDLER, Manuela (eds.), *Theorien der Internationalen Beziehungen*, Opladen, 2003, pp. 62-86.

SCHWELLER, Randall, “Bandwagoning for Profit. Bringing the Revisionist State Back In”, en *International Security* 19 (1), 1994, pp. 72-107.

SENSINI, Paolo, *Es war einmal Libyen. If you don't come to democracy, democracy will come to you*, Zambon, Fráncfort del Meno, 2012.

SKINNER, Benjamin, E., *Menschenhandel. Sklaverei im 21. Jahrhundert*, Bastei Lübbe Verlag, Colonia, 2010.

SOMMER, Gert, “Der Libyen-Krieg: Reflektionen zu Gaddafi und anderen Beteiligten”, en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die “Verantwortung zu schützen”*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 193-223.

STAHN, Carsten, “Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?”, en *The American Journal of International Law*, Cambridge University Press, vol. 101, no. 1, enero 2007, pp. 99-120.

STEETS, J., Grunewald, F., BINDER, A., DE GEOFFROY, V., KAUFFMANN, D., KRUGER, S., *et al.*, *Cluster Approach Evaluation 2 Synthesis Report*, Global Public Policy Institute, URD, 2010.

TANNENWALD, Nina, *The Nuclear Taboo. The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

THAKUR, Ramesh, *The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics*, Routledge, Londres/Nueva York, 2011.

THAKUR, Ramesh, “R2P, Libya and International Politics as the Struggle for Competing Normative Architectures”, en STARK, Alex (ed.), *The Responsibility to Protect: challenges and opportunities in light of the Libyan intervention*, e-International Relations, 2011, pp. 12-14.

TOMUSCHAT, Christian, "Humanitäre Intervention – ein trojanisches Pferd?", en MÜNKLER, Herfried; MALOWITZ, Karsten (eds.), *Humanitäre Intervention. Ein Instrument außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Grundlagen und Diskussion*, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008, pp. 64-87.

Unión Europea (UE), BGUE-B2013-19.080101-C1-DEVCO, "Jahresaktionsprogramm 2013 (Teil 1) für Libyen für die Entwicklung des privaten Sektors und den Schutz schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen zulasten des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union", Bruselas, 2013.

VILMER, Jean-Baptiste, "Humanitarian Intervention and Disinterestedness", en *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 19 (2), 2007, pp. 206-215.

WAGNER, Jürgen, "Der Libyen-Krieg und die Interessen der NATO", en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die "Verantwortung zu schützen"*, vol. 26, LIT, Berlín, 2013, pp. 113-134.

WALLING BOOTH, Carrie, "The United Nations Security Council and Human Rights Advocacy", Albion College, Michigan, 2013.

WALT, Stephen, "Alliance Formation and the Balance of World Power", en *International Security*, 1985, pp. 3-42.

WALT, Stephen, "Revolution and War", en *World Politics*, 44 (3), 1992, pp. 322-367.

WALTZ, Kenneth, "Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics", en KEOHANE, Robert (ed.), *Neorealism And Its Critics*, Columbia University Press, Nueva York, 1986, pp. 323-344.

WALTZ, Kenneth, "Structural Realism after the Cold War", en *International Security* 25 (1), 2000, pp. 6-40.

WALTZ, Kenneth, "The United States: Alone in the World", en ZARTMAN, William (ed.), *Imbalance of Power. US Hegemony and International Order*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2009, pp. 28-35.

WALTZ, Kenneth, *Theory of International Politics*, Waveland Press, Long Grove, 2010.

WICKS, Malcolm, *Energy Security: A National Challenge in a Changing World*, Great Britain Department of Energy and Climate Change, DECC, Londres, 2009.

WILLEITNER, Joachim, *Libyen: Tripolitaniien, Syrtebogen, Fezzan und Kyrenaika*, DuMont, Ostfildern, 2011.

WINFIELD, P. H., *The History of Intervention in International Law*, vol. 3, BYBIL, Cambridge, 1922.

WULF, Herbert, "Libyen: Land voller Waffen", en BECKER, Johannes M.; SOMMER, Gert (eds.), *Der Libyen-Krieg. Das Öl und die "Verantwortung zu schützen"*, 26 (2), LIT, Münster, 2013, pp. 241-259.

YOUNGS, Richard, "Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU's External Identity",

en JCMS 42 (2), 2004, pp. 416-434.

ZHANG, Tiejun, “Trilateral Relations Among Africa, China and Europe: A Chinese Perspective”, en KUMAR, Ashwani; MESSNER, Dirk (eds.), *Power Shifts and Global Governance. Challenges from South and North*, Anthem Press, Londres, 2011, pp. 167-179.

ZHANG, Xiang, *Erfolgreich verhandeln in China. Risiken minimieren, Verträge optimieren*, Gabler, Wiesbaden, 1997.

ZIEGLER, Charles E., “The Energy Factor in China’s Foreign Policy”, en GUO, Sujian; HUA, Shiping (eds.), *New Dimensions of Chinese Foreign Policy*, Lexington Books, Lanham, 2007, cap. 9.

Webgrafía

ONU y OTAN:

ANNAN, Kofi, “Programa de divulgación sobre el Genocidio en Rwanda y las Naciones Unidas”, marzo 2014, URL: <http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/bgresponsibility.shtml>, última vista: 11/2017.

Centro de Noticias de la ONU, “Libia: Comisión Investigadora confirma crímenes de guerra de gobierno y opositores”, 09.03.2012, URL: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=22912#.WS_r7tykKpo, última vista: 06/2017.

DAVIS, Ian, “Libya: NATO must stick to R2P script”, en NATO Watch, 31.03.2011, URL: http://natowatch.org/sites/default/files/Libya_-_NATO_must_stick_to_the_R2P_script.pdf, última vista: 02/2016.

GUTERRES, António, “Opening remarks at the 66th session of the Executive Committee of the High Commissioner’s Programme. António Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees. Geneva, 5 October 2015”, en UNHCR, 05.10.2015, URL: <http://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/56122bd76/opening-remarks-66th-session-executive-committee-high-commissioners-programme.html>, última vista: 10/2017.

Integrated Regional Information Networks (IRIN), “Chad: Mixed verdicts on coordination of massive relief effort”, IRIN News Africa, Ndjamena, 2008a, URL: <http://www.irinnews.org/Report/76386/CHAD-Mixed-verdicts-on-coordination-of-massive-relief-effort>, última visita: 06/2016.

Integrated Regional Information Networks (IRIN), “Libya’s displaced Tawergha threaten unilateral return”, en Relief Web, 19.02.2013, URL: <http://reliefweb.int/report/libya/libyas-displaced-tawergha-threaten-unilateral-return>, última vista: 06/2017.

Integrated Regional Information Networks (IRIN), “Thousands of Libyan families displaced in the Nafusa Mountains”, 02.04.2013, URL: <http://www.irinnews.org/report/97772/thousands-libyan-families-displaced-nafusa-mountains>, última vista: 05/2017.

Inter-Agency Standing Committee (IASC), “Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response”, 24.11.2006, URL: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Cluster%20implementation%2C%20Guidance%20Note%2C%20WG66%2C%2020061115-.pdf, última vista: 11/2017.

International Organization for Migration (IOM), “IOM Libya Brief”, octubre 2014, URL: <https://www.iom.int/countries/libya>, última vista: 05/2017.

International Organization for Migration (IOM), “Libya Plan of Action, August 2016-December 2017”, 2016, URL: <https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/Libya/IOM-Libya-Plan-of-Action-2016-2017.pdf>, última vista: 10/2017.

International Organization for Migration (IOM), “Libya. Humanitarian Compendium 2017”, 2017, URL: <https://humanitariancompendium.iom.int/appeals-print/69>, última vista: 10/2017.

International Organization for Migration (IOM), “La OIM lanza un mapeo de centro de detención en Libia”, 20.06.2017, URL: <https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-un-mapeo-de-centros-de-detencion-en-libia>, última vista: 10/2017.

International Organization for Migration (IOM), “DTM Displacement Tracking Matrix”, 2017, URL: <http://www.globaldtm.info/global/>, última vista: 10/2017.

International Organization for Migration (IOM), “Displacement Tracking Matrix. DTM Round 3. March-April 2016. Libya”, Libya Mission, Tunis, 2016, URL: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya%20Displacement%20Tracking%20Matrix%20%28DTM%29%20Round%20Three%20Report%20-%20IOM.pdf>, última vista: 10/2017.

International Organization for Migration (IOM); Displacement Tracking Matrix (DTM), “Internal Displacement in Libya. 2016 In Review. Mobility Tracking Rounds 1-7”, Libya Country Office, Trípoli, 2017, URL: <https://drive.google.com/file/d/0Bz9sUHOxDRMOMnhjU1FhdHRoTHc/view>, última vista: 05/2017.

International Organization for Migration (IOM); Displacement Tracking Matrix (DTM), “Libya’s IDP & Returnee Report. Round 8. 2017 January-February”, DTM Libya, Túnez, 2017, URL: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9sUHOxDRMOSV90ZmdnbWZjS00>, última vista: 05/2017.

International Organization for Migration (IOM), “IOM Displacement Tracking Matrix: 381,463 Migrants in Libya”, 28.04.2017, URL: <https://www.iom.int/news/iom-displacement-tracking-matrix-381463-migrants-libya>, última vista: 09/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, 12.01.1951, URL: <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados*, Ginebra, 28.07.1951, URL: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, Resolución 2131, A/RES/2131 (XX), 21.12.1965, URL: [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2131\(XX\)&Lang=S&Area=RESOLUTION](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2131(XX)&Lang=S&Area=RESOLUTION), última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad*, 26.11.1968, en CICR, URL: <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm>, última vista: 06/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, “Resolución 2625 (XXV)”, 1970, URL: <http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo8/documento-2-res.-2625-xxv-1970.pdf>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Informe del Secretario General*, A/54/2000*, 27.03.2000, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/54/2000>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio*, A/59/565, 02.12.2004, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del Secretario General*, A/59/2005, 21.03.2005, URL: <http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005. Documento final de la Cumbre Mundial 2005*, A/RES/60/1, 24.10.2005, URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Informe del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Walter Kälin. Adición. Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos*, A/HRC/13/21/Add.4, 09.02.2010, URL: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2011/8151>, última vista: 02/2017.

Naciones Unidas (ONU), Asamblea General, *Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger. Informe del Secretario General*, A/64/864, 14.07.2010, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/864>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), *Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicación de los “Principios Pinheiro”*, E/CN.4/Sub.2/2005/17, marzo 2007, 28.06.2005, URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), *Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 4, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del*

artículo 11 del Pacto)”, 1991, URL: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), *Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 7*, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzados”, 1997, URL: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN7, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Comité de Derechos Humanos (CDH), *Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 16*, “Derechos a la intimidad (artículo 17)”, 1988, URL: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN16, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Comité de Derechos Humanos (CDH), *Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 27*, “La libertad de circulación (artículo 12)”, 1999, URL: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN27, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, *Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Seguridad*, A/HRC/WG.6/9/LBY/1, Ginebra, 01.-12.11.2010, URL: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LYSession9.aspx>, última vista: 05/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Derechos Humanos, 25º periodo de sesiones, A/HRC/25/42, “Prestación de asistencia técnica a Libia en la esfera de los derechos humanos”, 13.01.2014, URL: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-25-42_sp.doc, última vista: 03/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia*, A/HRC/19/68, 28.01.2014, URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/106/01/PDF/G1410601.pdf?OpenElement>, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Resolución 678 (1990)”, 29.11.1990, URL: [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/678%20\(1990\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/678%20(1990)), última vista: 07/2016.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Resolución 688 (1991)”, S/RES/688, 04.04.1991, URL: [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/688%20\(1991\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/688%20(1991)), última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Resolución 1079 (1996)”, S/RES/1079, URL: [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1079%20\(1996\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1079%20(1996)), última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Resolución 1674 (2006)”, 28.04.2006, §4, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1674%20%282006%29>, última vista: 01/2016.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Resolución 1970 (2011), S/RES/1979 (2011), 26.02.2011, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20%282011%29>, última vista: 02/2016.

Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, “Carta de fecha 10 de marzo de 2011 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General”, S/2011/126, 11.03.2011, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/126>, última vista: 02/2016.

Naciones Unidas (ONU), *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR)*, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19, URL: [http://nuevosistemadejusticiapenalsinaloa.gob.mx/images/sampledata/documentos_de_consulta/ciefdr\[1\].pdf](http://nuevosistemadejusticiapenalsinaloa.gob.mx/images/sampledata/documentos_de_consulta/ciefdr[1].pdf), última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), *Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDICM)*, Aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, entrando en vigor en septiembre de 1981, URL: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, 16.12.1966, URL: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>, última vista: 11/2016.

Naciones Unidas (ONU), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, 16.12.1966, URL: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>, última vista: 11/2016.

Naciones Unidas (ONU), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes*, 10.12.1984, URL: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx>, última vista: 06/2017.

Naciones Unidas (ONU), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos*, E/CN.4/1998/53/Add.2, Comisión de Derechos Humanos, sesión 54, 11.02.1998, URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf>, última vista: 02/2017.

Naciones Unidas (ONU), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), “¿Qué es el Fondo Central de Respuesta a Emergencia?”, junio 2010, URL: https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CERF_Spanish.pdf, última vista: 06/2016.

Naciones Unidas (ONU), Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, “La responsabilidad de proteger”, 2014, URL: <http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>, última vista: 03/2016.

Naciones Unidas (ONU), ONU Mujeres, “Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer”, 2017a, URL: <http://www.unwomen.org/es/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), ONU Mujeres, “Oficinas regionales y en el país”, 2017, URL:

<http://www.unwomen.org/es/where-we-are/arab-states-north-africa/regional-and-country-offices>, última vista: 10/2017.

Naciones Unidas (ONU), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), *Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno. Una Guía para el personal de UNICEF*, octubre 2005, URL: https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Emergency_Field_Handbook_SP.PDF, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), *Carta de las Naciones Unidas*. “Capítulo VII: Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión”, 26.06.1945, URL: <http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>, última vista: 01/2016.

Naciones Unidas (ONU), *Carta de las Naciones Unidas*, 24.10.1945, URL: <http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html>, última vista: 11/2017.

Naciones Unidas (ONU), *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR)*, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19, URL: [http://nuevosistemadejusticiapenalsinaloa.gob.mx/images/sampled/data/documentos_de_consulta/ciefdr\[1\].pdf](http://nuevosistemadejusticiapenalsinaloa.gob.mx/images/sampled/data/documentos_de_consulta/ciefdr[1].pdf), última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), *Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFD CM)*, Aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, entrando en vigor en septiembre de 1981, URL: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf, última vista: 07/2017.

Naciones Unidas (ONU), “Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)”, CIREFCA 89/9, abril 1989, URL: https://www.oas.org/dil/esp/cirefca_89-9_esp.pdf, última vista: 01/2018.

Naciones Unidas (ONU), “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”, A/59/565, 02.12.2004, URL: http://www.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World_Our_Shared_Responsibility_-_ES.pdf, última vista: 05/2016.

Naciones Unidas (ONU), “Misión del Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL)”, 2011, URL: <http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2011/unsmil.shtml>, última vista: 03/2017.

Naciones Unidas (ONU), “Cumbre Humanitaria Mundial”, 2017, URL: <http://www.un.org/es/conf/whs/about.shtml>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), “UN High-Level Panel on Threats, Challenges and Change Report, ‘A More Secure World, Our Shared Responsibility’”, en Council on Foreign Relations, 2004, URL: <http://www.cfr.org/conflict-assessment/un-high-level-panel-threats-challenges-change-report-more-secure-world-our-shared-responsibility/p30076>, última vista: 05/2016.

United Nations (UN), “Security Council Press Statement on Libya”, 22.02.2011, URL: <http://www.un.org/press/en/2011/sc10180.doc.htm>, última vista: 02/2016.

United Nations (UN), “Statement. Secretary-General’s remarks to Security Council Meeting on Peace and Security in Africa”, 25.02.2011, URL: <http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=5109>, última vista: 02/2016.

United Nations (UN), “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions”, 17.03.2011, URL: <http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm>, última vista: 02/2016.

United Nations (UN), *Repertoire of the Practice of the Security Council, 2010-2011*, Part I. Consideration of questions under the responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security, “16. The situation in Libya”, 2011, URL: http://www.un.org/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20I/2010-2011_Libya.pdf, última vista: 09/2016.

United Nations (UN), *Regional Flash Appeal for the Libyan Crisis. Revision. 18 May 2011*, URL: <http://www.unhcr.org/partners/donors/4dd61f859/regional-flash-appeal-libyan-crisis-2011-2011.html>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), “Ban calls on Security Council to consider immediate steps to stop killings in Libya”, 25.02.2016, URL: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37628>, última vista: 02/2016.

United Nations (UN), “Deliver Humanitarian Aid”, 2017, URL: <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), Central Emergency Response Fund (CERF), “Consolidated Appeals Process”, 2017, URL: <http://www.unocha.org/cerf/about-us/humanitarian-financing/consolidated-appeal-process>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), Commission on Human Rights, *Resolution 1997/39 on Internally Displaced Persons*, E/CN.4/RES/1997/39, 11.04.1997, URL: <http://www.refworld.org/docid/3dda50b44.html>, última vista: 01/2018.

United Nations (UN), Commission on Human Rights, *Resolution 2003/51 on Internally Displaced Persons*, E/CN.4/RES/2003/51, 23.04.2003, URL: <http://www.refworld.org/docid/3f7aa2264.html>, última vista: 01/2018.

United Nations (UN), Commission on Human Rights, *Report of the High Commissioner under Human Rights Council resolution S-15/I, A/HRC/17/45*, 07.06.2011, URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.45_AUV.pdf, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), Department of Political Affairs, “Libya”, 2017, URL: <http://www.un.org/undpa/en/africa/libya>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), Economic and Social Council, E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28.06.2005, URL: <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html>, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “FAO partners with Libya to boost the country’s national capacities in the agricultural sector”, 10.08.2017, URL: <http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1028232/>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “GIEWS – Global Information and Early Warning System. Country Briefs. Libya”, 04.10.2017, URL: <http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=LBY>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), General Assembly, *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, Ginebra, 28.07.1951, URL: <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), General Assembly, *Resolution adopted by the General Assembly. 32/197. Restructuring of the economic and social sectors of the United Nations System*, A/RES/32/197, 20.12.1977, URL: <http://www.un-documents.net/a32r197.htm>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), General Assembly, “International Conference on the Plight of Refugees, Returnees and Displaced Persons in Southern Africa (SARRED): Report of the Secretary-General”, 19.10.1988, URL: <http://www.refworld.org/docid/3ae68f410.html>, última vista: 01/2018.

United Nations (UN), General Assembly, *A more secure world: our shared responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, A/59/595, 02.12.2004, URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/31/PDF/N0460231.pdf?OpenElement>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), General Assembly, *In larger freedom: towards development, security and human rights for all. Report of the Secretary-General*, A/59/2005, 21.03.2005, URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston*, A/HRC/14/24/Add.6, 28.05.2010, URL: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf>, última vista: 05/2016.

United Nations (UN), General Assembly, *Summary prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21. Libya*, A/HRC/WG.6/22/LBY/3, 23.02.2015, URL: https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453302677_g1503174.pdf, última vista: 06/2017.

United Nations (UN), Human Rights Council, *Report of the International Commission of Inquiry on Libya*, A/HRC/19/68, 19th session, Agenda item 4, 02.03.2012, URL: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/.../A_HRC_19_68_en.doc, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Guiding Principles on Internal Displacement*, 1998, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/Tools-and-Frameworks/199808-training-OCHA-guiding-principles-Eng2.pdf>, última vista: 05/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Libya 2015-2016. United Nations Population Fund (UNFPA)”, 2016, URL: https://ops.unocha.org/Reports/daily/CAPProjectSheet_487_81589_20171019.pdf, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Sirte displacement reaches 90.000: Protection and WASH needs on the rise”, Issue 05, julio 2016, URL: https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/humanitarian_bulletin_libya_issue_5_july_2016_en.pdf, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Humanitarian Needs Overview 2017. Libya*, noviembre 2016, URL: <http://reliefweb.int/report/libya/2017-libya-humanitarian-needs-overview-november-2016>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Humanitarian Response Plan. January-December 2017. Libya*, noviembre 2016, URL: <http://reliefweb.int/report/libya/libya-2017-humanitarian-response-plan-january-december-2017-enar>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Global Humanitarian Overview 2017. A Consolidated Appeal to Support People Affected by Disaster and Conflict”, June Status Report, 2017, URL: <http://interactive.unocha.org/publication/globalhumanitarianoverview/>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Internally displaced persons. Commission on Human Rights Resolution 2003/51”, 59th meeting, 23.04.2003, URL: <http://www.refworld.org/pdfid/3f7aa2264.pdf>, última vista: 01/2018.

United Nations (UN), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Habitat, *The Right to Adequate Housing*, Fact Sheet no. 21 (Rev. 1), 2009, URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf, última vista: 06/2017.

United Nations (UN), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Security of Tenure: Legal and Judicial Aspects. Research Paper prepared for the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living and on the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik, to inform her Study on Security of Tenure”, en THIELE, Bret, *Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights*, 2012, URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SecurityTenure/BretThiele-BackgroundPaper-Jan2013.pdf>, última vista: 08/2017.

United Nations (UN), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Habitat, *Forced Evictions*, Fact Sheet no. 25 (Rev. 1), 2014, URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf>, última vista: 08/2017.

United Nations (UN), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Introduction to the mandate of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, Dr. Chaloka Beyani”, 2016, URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Mandate.aspx>, última vista: 07/2016.

United Nations (UN), Security Council, “S/PV.6498”, 17.03.2011, URL: <http://responsibilitytoprotect.org/Security%20Council%20meeting%20on%20the%20situation%20in%20Lybia%2017%20March%202011.pdf>, última vista: 08/2016.

United Nations (UN), Security Council, “S/2011/160”, 20.03.2011, URL:

<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%202011%20160.pdf>, última vista: 02/2016.

United Nations (UN), Security Council, 19th session, Agenda item 4, A/HRC/19/68, “Report of the International Commission of Inquiry on Libya”, 08.03.2012, URL: <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf>, última vista: 06/2017.

United Nations (UN), Security Council, SC/12377, 7698th Meeting, “Despite ‘Significant Developments’ in Libya, International Criminal Court Chief Prosecutor Tells Security Council Support for Rule of Law Critical to Stability”, 26.05.2016, URL: <https://www.un.org/press/en/2016/sc12377.doc.htm>, última vista: 04/2017.

United Nations (UN), Security Council, SC/12991, 8048th Meeting, “Security Council Extends Mandate of United Nations Support Mission in Libya, Unanimously Adopting Resolution 2376 (2017)”, 14.09.2017, URL: <https://www.un.org/press/en/2017/sc12991.doc.htm>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2010*, Nueva York, 2010, URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf, última vista: 09/2016.

United Nations (UN), United Nations Development Programme (UNDP), UNDP in Libya, “2030 Agenda for Sustainable Development”, 2017, URL: <http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/post-2015/sdg-overview.html>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations Development Programme (UNDP), UNDP in Libya, “Our work. Overview”, 2017, URL: <http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/ourwork/overview.html>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 157 EX/44, 01.10.1999, URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001173/117399S.pdf>, última vista: 10/2016.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global IDP Project, Reach Out. A refugee protection training project, “Optional Module. Internally Displaced Persons (IDPs)”, 2005, URL: <http://www.unhcr.org/4371fae52.pdf>, última vista: 08/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); The Brookings-Bern Project on Internal Displacement, *Expert Seminar on Protracted IDP Situations*, 21-22 Ginebra, junio 2007, URL: <http://migracije.org/files/2007/2007%20Brooking%20EXPERT%20SEMINAR%20ON%20PROTRACTED%20IDP%20Situations.pdf>, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Internally Displaced People. Questions & Answers”, Septiembre 2007, URL: <http://www.unhcr.org/basics/BASICS/405ef8c64.pdf>, última vista: 07/2016.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, Global Protection Cluster Working Group, 2008,

URL: <http://www.unhcr.org/4c2355229.pdf>, última vista: 08/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Internally Displaced People. Figures”, 2012, URL: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c23.html>, última vista: 01/2016.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Financial Figures”, 2013, URL: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1a.html>, última vista: 06/2016.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “External Update – May 2014”, 18.05.2014,
URL: http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1410953456_54193a644.pdf, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Numbers of internally displaced in Libya double since September – UNHCR”, 30.06.2015, URL: <http://www.unhcr.org/news/latest/2015/6/5592a8286/numbers-internally-displaced-libya-double-since-september-unhcr.html>, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Libya 2015-2016”, 11.02.2016,
URL: https://ops.unocha.org/Reports/daily/CAPProjectSheet_487_81563_20171015.pdf, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR IDP Protection Monitoring, Libya, Februray 2016*, febrero 2016, URL: http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/unhcr_idp_protection_monitoring_libya_assessment_report_feb_2016.pdf, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Libya”, 21.11.2016, URL: <http://reporting.unhcr.org/node/12003?y=2016#year>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Q&A: The 1951 Refugee Convention ‘is as relevant today as it was at the time’”, 02.12.2016, URL: <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/12/584036047/qa-1951-refugee-convention-relevant-today-time.html>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Internally Displaced People. On the Run in Their Own Land”, 14.12.2016, URL: <http://www.unhcr.org/ceu/80-enwho-we-helpinternally-displaced-people-html.html>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Know Your Numbers“, estadísticas de 2016/2017, URL: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c11.html>, última vista: 01/2016.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Humanitarian principles”, 2017, URL: <https://emergency.unhcr.org/entry/95307>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Expanded Response in Libya 2017. Supplementary Appeal. January-December 2017*, mayo 2017, URL:

<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Expanded%20Response%20in%20Libya%20Supplementary%20Appeal%20-%20Jan-Dec%202017%20-%20May%202017.pdf>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR steps up efforts towards alternatives to detention in Libya and solutions for vulnerable refugees”, 12.09.2017, URL: <http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b7b0c24/unhcr-steps-efforts-towards-alternatives-detention-libya-solutions-vulnerable.html>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Protection Cluster”, 2017, URL: <https://emergency.unhcr.org/entry/82767/protection-cluster>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syria, “Internally Displaced People”, 2001-2017, URL: <http://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people>, última vista: 11/2017.

United Nations (UN), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), *The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action*, 2003, URL: http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/habitat_agenda.pdf, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), “Tripoli City Profile 2016”, 2016, URL: <https://unhabitat.org/tripoli-city-profile-2016/>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), “Libya Humanitarian Situation Report. August 2016”, agosto 2016, URL: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Libya%20Humanitarian%20Situation%20Report-August%202016.pdf>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), “Libya”, 25.01.2017, URL: <https://www.unicef.org/appeals/libya.html>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), “Libya Humanitarian Situation Report. 01 January-31 March 2017”, 31.03.2017, URL: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Libya%20Humanitarian%20Sitrep%20C%201%20January%20-%2031%20March%202017.pdf>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), “Libya Humanitarian Situation Report”, 2017, URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya%20Sitrep%20Mid-2017%20Final%2027072017_V1.pdf, última vista: 10/2017.

United Nations Secretary-General, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies”, S/2004/616, 23.08.2004, párr. 8. *Apud*.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “Transitional Justice – Foundation for a New Libya”, 17.09.2012, URL: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Transitional_Justice-Foundation_for_a_new_Libya_%28English%29.pdf, última vista: 07/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “Joint Misrata /

Tawergha Dialogue Committee Makes Progress at Meetings in Tunis and Geneva”, 05.11.2015, URL: <https://unsmil.unmissions.org/joint-misrata-tawergha-dialogue-committee-makes-progress-meetings-tunis-and-geneva>, última vista: 12/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), *Report on the Human Rights Situation in Libya*, en OHCHR, 16.11.2015, URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15.pdf, última vista: 06/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “Libyan Political Agreement. As signed on 17 December 2015”, 17.12.2015, URL: <https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=miXuJYkQAQg%3D&tabid=3559&mid=6187&language=fr>, última vista: 04/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “The Joint Technical Coordination Committee meets in Tripoli to agree on international cooperation for Libya”, 12.10.2016, URL: <https://unsmil.unmissions.org/joint-technical-coordination-committee-meets-tripoli-agree-international-cooperation-libya>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “United Nations Discusses Its 2017-2020 Strategic Framework With Libyan Officials And Civil Society”, 14.12.2016, URL: <https://unsmil.unmissions.org/united-nations-discusses-its-2017-2020-strategic-framework-libyan-officials-and-civil-society>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “Gender based violence (GBV) multi-sectoral coordination in Libya”, 19.05.2017, URL: <https://unsmil.unmissions.org/gender-based-violence-gbv-multi-sectoral-coordination-libya>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “EU/Libya Health System Strengthening Project 2”, 16.06.2017, URL: <https://unsmil.unmissions.org/eulibya-health-system-strengthening-project-2>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “UN in Libya”, 15.09.2017, URL: <https://unsmil.unmissions.org/un-libya>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “In Tripoli, Libyan civil society organizations receive training on conflict resolution, transitional justice and reconciliation”, 11.11.2017, URL: <https://unsmil.unmissions.org/tripoli-libyan-civil-society-organizations-receive-training-conflict-resolution-transitional-justice>, última vista: 01/2018.

United Nations (UN), United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), “Mandate”, 2017, URL: <https://unsmil.unmissions.org/mandate>, última vista: 09/2017.

United Nations (UN), UN Term, “Representative of the Secretary-General on internally displaced persons”, URL: <http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/6a23bdb9385a68c5852569fa0000b12c?OpenDocument>, última vista: 06/2016.

United Nations (UN), UN Women, “Libyan women launch Libya’s first minimum peace agenda”, 10.11.2015, URL: <http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2015/11/libyan-women-launch>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), UN Women, “EU, UN Women, Libyan women and international actors meet in Tunisia to ensure women’s engagement in decision making in Libya”, 07.09.2016, URL: <http://spring-forward.unwomen.org/en/news/libya-press-release>, última vista: 10/2017.

United Nations (UN), UN Women, “Regional Office for the Arab States”, 2017, URL: <http://arabstates.unwomen.org/en/about-us/regional-office>, última vista: 10/2017.

UN News Centre, “With call for action, not more words, Annan outlines plan for radical UN reform”, 21.03.2005, URL: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13715#.Wf7gfnaDOpo>, última vista: 11/2017.

World Food Programme (WFP), “Rapid Food Security Assessment. Libya. September 2016”, 2016, URL: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290979.pdf?_ga=2.172173091.1423470815.1508239098-1894132001.1508239098, última vista: 10/2017.

World Food Programme (WFP), “Libya Emergency Operation 200925”, 2016, URL: http://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp280663.pdf?_ga=2.164169919.1423470815.1508239098-1894132001.1508239098, última vista: 10/2017.

World Food Programme (WFP), “Libya”, 2017, URL: <http://www1.wfp.org/countries/libya>, última vista: 10/2017.

World Health Organization (WHO), “Libya Humanitarian Response Plan 2017”, 2016, URL: <http://www.who.int/emergencies/response-plans/2017/libya/en/#>, última vista: 09/2017.

World Health Organization (WHO), “Libya. Workshop on development of a national health sector strategy for emergency preparedness and response”, 20.03.2016, URL: <http://www.emro.who.int/lby/libya-news/health-sector-strategy-for-emergency-preparedness-and-response.html>, última vista: 10/2017.

World Health Organization (WHO), “Libya Health Emergencies and Humanitarian Update. June-July 2017”, julio 2017, URL: <http://www.who.int/hac/crises/lby/libya-health-situation-report-june-july2017.pdf?ua=1>, última vista: 10/2017.

Organizaciones internacionales, instituciones estatales y fuentes políticas:

African Union (AU), “Communiqué of the 261st Meeting of the Peace and Security Council. PSC/PR/COMM(CCLXI)”, 23.02.2011, URL: <http://www.peaceau.org/uploads/psc-communique-on-the-situation-in-libya.pdf>, última vista: 02/2016.

African Union (AU), “Communiqué of the 265th Meeting of the Peace and Security Council of the African Union, 10 March 2011. PSC/PR/Comm.2(CCLXV)”, 10.03.2011, URL: http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/arabspring/libya/Libya_18_Communique_265th_Meeting_PSC.pdf, última vista: 02/2016.

Auswärtiges Amt, “Libyen. Wirtschaft und Umwelt”, abril 2016, URL: <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Libyen/Wirtschaft.html>, última vista: 09/2016.

Board of Governors of the Federal Reserve System, “Does the Federal Reserve own or hold gold?”, 03.12.2014, URL: <https://www.federalreserve.gov/faqs/does-the-federal-reserve-own-or-hold-gold.htm>, última vista: 10/2016.

Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB), “Panarabismus”, 2008, URL: <http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21615/panarabismus>, última vista: 09/2016.

Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB), “Souveränität”, estado 2017, URL: <http://www.bpb.de/wissen/S7SFCL>, última vista: 06/2016.

Cámara Baja del Parlamento alemán, “Antwort der Bundesregierung. Hintergründe des bewaffneten Angriffs auf Libyen”, 26.04.2011, URL: <http://polit-x.de/drucksachen/antwort-der-bundesregierung-auf-die-kleine-anfrage-der-abgeordneten-sevim-dagdelen-3>, última vista: 02/2016.

Casa Blanca, “National Security Strategy”, mayo 2010, Washington, URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, última vista: 08/2016.

Casa Blanca, “United States Activities in Libya”, 15.06.2011, Washington, URL: <https://fas.org/man/eprint/wh-libya.pdf>, última vista: 08/2016.

Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), *La Responsabilidad de Proteger. Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados*, diciembre 2001, en Naciones Unidas (NU), A/57/303, 14.08.2002, URL: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/57/303>, última vista: 11/2017.

Consejo General de la Nación (GNC), *Law No. 29 of 2013 on Transitional Justice*, trad. extraoficial de UNSMIL, 2013, URL: [http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/631-Law%20No.%20\(29\)%20of%202013_EN.pdf](http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/631-Law%20No.%20(29)%20of%202013_EN.pdf), última vista: 05/2017.

CRAWLEY, Vince, “Bush Praises NATO as Values-Based Alliance Ahead of Riga Summit”, en IIP Digital (Bureau of International Information Programs), 27.10.2006, URL: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2006/10/20061027161912mvyelwarc0.1012842.html#axzz4GrZ8XYm7>, última vista: 08/2016.

EGUREN, Luis Enrique, “A quick guide to IDP”, en Europa.eu, 18.01.2014, URL: <https://europa.eu/capacity4dev/training-protection/minisite/quick-guide-idp-and-humanitarian-protection/idp>, última vista: 08/2017.

EU Neighbours, “EU and UNICEF support youth social inclusion in Libya”, 10.08.2016, URL: <http://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eu-and-unicef-support-youth-social-inclusion-libya>, última vista: 10/2017.

European Commission, “United Kingdom – Energy Mix Fact Sheet”, 2007, URL: <http://www.jimhadams.com/eco/UKEnergyMix2004.pdf>, última vista: 08/2016.

European Council on Foreign Relations, “A Quick Guide to Libya’s Main Players”, diciembre 2016, URL: http://www.ecfr.eu/page/-/Lybias_Main_Players_Dec2016_v2.pdf, última vista: 02/2017.

European Training Foundation (ETF), BARDAK, Ummuhan *et al.*, *Labour Market and Employment Policy in Libya*, 2014, URL: [file:///C:/Users/Frank/Downloads/etf_employment_policies_libya%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Frank/Downloads/etf_employment_policies_libya%20(1).pdf), última vista: 06/2017.

FCO – UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy Report 2013 – Section XI: Human Rights in Countries of Concern – Libya*, 10.04.2014, 21.01.2015 (actualizado), URL: <https://www.gov.uk/government/publications/libya-country-of-concern/libya-country-of-concern>, última vista: 06/2017.

Federal Reserve, “Informing the public about the Federal Reserve. Does the Federal Reserve own or hold gold?”, 2014, URL: <https://www.federalreserve.gov/faqs/does-the-federal-reserve-own-or-hold-gold.htm>, última vista: 11/2016.

GADAFI, Muamar, *Carta Verde Internacional. Derechos Humanos para el Tercer Milenio*, en SCRIBD, 1988, URL: <https://de.scribd.com/document/150763493/Carta-Verde-Internacional>, última vista: 06/2017.

General National Congress (GNC), *Law No. (29) of 2013 On Transitional Justice*, en Security Legislation, 08.12.2013, URL: [http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/631-Law%20No.%20\(29\)%20of%202013_EN.pdf](http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/631-Law%20No.%20(29)%20of%202013_EN.pdf), última vista: 06/2017.

Interim Transitional National Council (TNC), “Founding Statement of the Interim Transitional National Council (TNC)”, 05.03.2011, URL: http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/arabspring/libya/Libya_12_Founding_Statement_TNC.pdf, última vista: 02/2016.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), “The Decision to Intervene. Extreme Cases Only”, en *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, Ottawa, IDRC, diciembre 2001, URL: <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>, última vista: 05/2016.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, International Development Research Center, Ottawa, diciembre 2001, URL: <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>, última vista: 11/2017.

International Criminal Court (ICC), “Clarification on media information regarding the ICC position on the Libyan situation” (ICC-CPI—20110224-MA88), 24.02.2011, URL: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/press%20releases/Pages/ma88.aspx, última vista: 02/2016.

LPB Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, “Flüchtlinge in Deutschland”, 2017, URL: <http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html>, última vista: 02/2017.

National Transitional Council (NTC), *Law No. 4 for the year 2011 AD Concerning National Reconciliation and Transitional Justice Law*, 2011, URL: <https://de.scribd.com/document/83976561/Transitional-Justice-Law-of-Libya>, última vista: 07/2017.

National Transitional Council (NTC), *The Constitutional Declaration*, 03.08.2011, URL: <https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf>, última vista: 05/2017.

National Transitional Council (NTC), *Law No. (38) of 2012 On Some Procedures Concerning the Transitional Phase*, 02.05.2012, en Security Legislation, URL: [http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/72-Law%20No.%20\(38\)%20of%202012%20on%20some%20of%20the%20procedures%20concerning%20the%20transitional%20phase_EN.pdf](http://security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/72-Law%20No.%20(38)%20of%202012%20on%20some%20of%20the%20procedures%20concerning%20the%20transitional%20phase_EN.pdf), última vista: 06/2017.

Organisation of African Unity (OAU), *OAU Convention. Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*, 20.06.1974, URL: <http://www.unhcr.org/45dc1a682.html>, última vista: 11/2017.

Organización para la Unidad Africana (OUA), *Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África*, 10.09.1969, URL: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac934b2>, última vista: 02/2017.

Organización para la Unidad Africana (OUA), *Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos*, aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. Entrada en vigor: 21.10.1986, URL: <http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/afrika/CAFDH/1981-CAFDH.htm>, última vista: 07/2017.

Parlamento Europeo, “Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Libia”, 2016/2537/(RSP), 01.02.2016, URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0180+0+DOC+XML+V0//ES>, última vista: 06/2016.

Prime Minister’s Office, “UK-France Summit 2010 Declaration on Defence and Security Co-operation”, 02.11.2010, URL: <https://www.gov.uk/government/news/uk-france-summit-2010-declaration-on-defence-and-security-co-operation>, última vista: 08/2016.

Séptima Conferencia Internacional Americana, *Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados*, Montevideo, 1933, URL: <https://catedrareyes.files.wordpress.com/2017/04/oea-convencic3b3n-derechos-estados-1933.pdf>, última vista: 11/2017.

The White House, Office of the Press Secretary, 28.03.2011, URL: www.whitehouse.gov, última vista: 02/2016.

TOALDO, Mattia, “A Quick Guide to Libya’s Main Players”, en European Council on Foreign Relations, Campagna di San Paolo, International Affairs, 2016, URL: http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict, última vista: 04/2017.

Unión Africana (UA), *Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala)*, Traducción no oficial realizada por la Unidad Legal Regional del Buró para las Américas del ACNUR, 2009, URL: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bc2d8112>, última vista: 07/2017.

United States Senate Committee on Foreign Relations, “The Crisis in Libya: Next steps and US Policy Options”, 25.04.2017, URL: <https://www.foreign.senate.gov/hearings/crisis-in-libya-next-steps-and-us-policy-options-042517>, última vista: 12/2017.

USAID – United States Agency International Development, “Country Profile. Libya. Property Rights & Resource Governance”, 2013, URL: https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Libya_Profile-1.pdf, última vista: 08/2017.

ONGs, instituciones (independientes) y proyectos:

ACAPS – Assessment Capacities Project, “Libya”, 2017, URL: <https://www.acaps.org/country/libya>, última vista: 10/2017.

ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project, “ACLED Version 5 (1997-2014)”, URL: <http://www.acleddata.com/data/version-5-data-1997-2014/>, 2014, última vista: 09/2016.

ActionAid International, CAFOD, Care International UK, International Council of Voluntary Agencies, IRC – UK, Oxfam GB, Save the Children UK, *Synthesis Report. Review of the engagement of NGOs with the humanitarian reform process*, octubre 2009, URL: http://actionaid.org/sites/files/actionaid/synthesis_report_-_review_of_the_engagement_of_ngos_with_the_humanitarian_report_process.pdf, última vista: 11/2017.

Agenda for Humanity, *Initiative Grand Bargain*, 2016, URL: <http://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861>, última vista: 09/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Mohammed Masood Algady born in 1994”, 23.04.2013, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168656>, última vista: 06/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Holocaust Misrata and Tawergha children”, 16.06.2013, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168048>, última vista: 06/2017.

Alrased Alliby – The Libyan Monitor Organization, “The death of the child Amr Altaworgy in prisons of Misrata”, 18.06.2013, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168047>, última vista: 06/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, The official website of the Alrased Alliby, estado 2017, URL: <http://alrasedalliby.com/en/>, última vista: 06/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, The official website of the Alrased Alliby, News, estado 2017, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168047>, última vista: 09/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Girl’s body was found after Libyan between 17 to 20 miles from the port of Giris”, estado 2017, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168040>, última vista: 06/2017.

Alrased Alliby – Libyan Monitor Organization, “Najat Mohammed Marghany”, estado 2017, URL: <http://alrasedalliby.com/en/news/news.aspx?id=2168042>, última vista: 06/2017.

Amnesty International (AI), “Nordafrika und Mittlerer Osten: Gefahr von Gewalt und Unterdrückung auch 2012”, 10.01.2012, URL: <https://www.amnesty.de/presse/2012/1/10/nordafrika-und-mittlerer-osten-gefahr-von-gewalt-und-unterdrueckung-auch-2012>, última vista: 11/2016.

Amnesty International (AI), “Afghanistan: Die vergessenen Opfer des Konflikts”, 23.02.2012, URL: <https://www.amnesty.de/2012/2/22/afghanistan-die-vergessenen-opfer-des-konflikts>, última vista: 06/2016.

Amnesty International (AI), “Barred from their homes. The continued displacement and persecution of Tawerghas and other communities in Libya”, 2013, URL: <http://www.refworld.org/pdfid/526e57a64.pdf>, última vista: 06/2017.

Amnesty International (AI), “Rising from the shadows of Abu Salim Prison”, 26.06.2014, URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/06/rising-shadows-abu-salim-prison/>, última vista: 02/2016.

Amnesty International (AI), “Libyen”, 31.12.2014, URL: <http://www.amnesty.de/laenderbericht/libyen>, última vista: 11/2016.

Amnistía Internacional (AI), “Turquía: Derechos humanos en grave peligro tras el golpe de Estado y la campaña represiva posterior”, 18.07.2016, URL: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/07/turkey-human-rights-in-grave-danger-following-coup-attempt-and-subsequent-crackdown/>, última vista: 09/2016.

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), “Quién es quién en el conflicto de Libia”, 07/2015, URL: http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/libia/quien_es_quien_en_el_conflicto_de_libia, última vista: 02/2017.

Bertelsmann Stiftung, *BTI 2010 – Libya Country Report*, Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2009, URL: http://www.bti2010.bertelsmann-transformation-index.de/fileadmin/pdf/Gutachten_BTI2010/MENA/Libya.pdf, última vista: 06/2017.

Brookings Institution, IDMC y NRC, “IDPs in protracted displacement: Is local integration a solution? Report from the Second Expert Seminar on Protracted Internal Displacement, 19-20 January 2011, Geneva”, mayo 2011, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2011/201106-IDPs-in-protracted-displacement-Is-local-integration-a-solution-thematic-en.pdf>, última vista: 07/2017.

Cesvi Libya, *Rapid Needs Assessment of IDP Camps in Tripoli and Benghazi. January – February 2016*, en Relief Web, 29.02.2016, URL: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cesvi_rapid_needs_assessment_idp_camps_tripoli_benghazi.pdf, última vista: 06/2017.

Cesvi Libya; UNICEF, *IDP Child Protection Assessment in Tripoli and Bani Walid*, junio 2016, URL: https://mhps.net/?get=316/cesvi_idp_child_protection_assessment_in_tripoli_and_bani_walid_june_2016.pdf, última vista: 07/2017.

CIAR – Colectivo de Investigación sobre las Armas Radioactivas; AMC – Asociación de Medicinas Complementarias, “Operaciones psicológicas y mentiras para ocultar los crecientes

crímenes de la OTAN”, 28.07.2011, en Boletín Armas contra las Guerras, 379, URL: http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol379.htm, última vista: 09/2016.

Clatham House, *Middle East and North Africa Programme: Libya Working Group Meeting Summary. Libya: Establishing the Rule of Law*, mayo 2012, URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/0512libya_summary.pdf, última vista: 06/2017.

CMWG Principles of Partnership, “Annex A. Guidelines on the Cluster Approach: CRD Desk Officer’s Tool Kit”, agosto 2008, p. 13, URL: http://pakresponse.info/Portals/0/Contingency_Planning/HToolkit_Docs/5.3%20Guidelines-Cluster%20Approach.pdf, última vista: 11/2017.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Posición del CICR con respecto a la cuestión de las personas desplazadas”, en Guerra y personas desplazadas, 2006, URL: http://extranet.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/idp-icrc-position-030706?OpenDocument&style=custo_print, última visita: 08/2016.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Crímenes de Guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su base en el Derecho Internacional Humanitario”, octubre 2008, URL: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_crmenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf, última vista: 10/2016.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Internally Displaced. Humanitarian Response to Internally Displaced People in Armed Conflict”, Ginebra, junio 2010, p. 8. URL: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0867.pdf, última vista: 06/2017.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Historia del CICR”, 29.10.2010, URL: <http://www.icrc.org/spa/who-we-are/history/overview-section-history-icrc.htm>, última vista: 06/2016.

Corte Penal Internacional (CPI), *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, Parte II “De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable”, art. 5-8, 2002, p. 4-5, URL: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute%28s%29.pdf, última vista: 05/2016.

CountryMeters, “Libya historical population (1951-2016)”, estado 2016, URL: <http://countrymeters.info/en/Libya>, última vista: 09/2016.

CROME, Erhard, *Der libysche Krieg des Westens. Ein Zwischenstand*, Rosa Luxemburg Stiftung, Berlín, 2011a, URL: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/RLS-Papers_DerLibyscheKrieg.pdf, última vista: 08/2016.

CURTIN, Edward, “Happy Fifth Anniversary, Hillary Clinton, You’ve Destroyed Libya... We Await Your Next War”, en Global Research, 27.07.2016, URL: <https://www.globalresearch.ca/happy-fifth-anniversary-hillary-clinton-youve-destroyed-libya-we-await-your-next-war/5538659>, última vista: 01/2018.

Global Protection Cluster (GPC), “Working Together for Protection. Who We Are”, 2014, URL: <http://www.globalprotectioncluster.org/en/about-us/who-we-are.html>, última vista: 06/2016.

Global Protection Cluster (GPC), “Mission Report Libya. 09 – 12 October 2016”, 2016, URL:

http://www.globalprotectioncluster.org/assets/files/field_protection_clusters/Libya/files/gpc-mission-report-october-2016.pdf, última vista: 09/2017.

Global Protection Cluster (GPC), “Housing, Land and Property”, 2017, URL: <http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/housing-land-and-property.html>, última vista: 06/2017.

GURMAN, Hannah, “Migrant Workers in Libya. CNN and other media outlets are missing the real story about foreign laborers in Libya and elsewhere in the Middle East”, en Foreign Policy In Focus (FPIF), 23.03.2011, URL: http://fpif.org/migrant_workers_in_libya/, última vista: 07/2017.

Humanitarian Access Team (HAT), “Libya’s Shadow Economy. Executive Summary”, abril 2017, en Mercy Corps, URL: https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Mercy%20Corps_Libya%20Shadow%20Economy.pdf, última vista: 09/2017.

Humanitarian Response, “What is the Cluster Approach?”, 2005 URL: <https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/page/what-cluster-approach>, última vista: 06/2016.

Humanitarian Response, “Why do we need the Cluster Approach?”, 2005, URL: <https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/why-do-we-need-the-cluster-approach>, última vista: 09/2017.

Humanitarian Response, “Who does what?”, 2005a, URL: <https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/who-does-what>, última vista: 09/2017.

Humanitarian Response, “Humanitarian Programme Cycle”, 2017, URL: <https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning>, última vista: 09/2017.

Humanitarian Response, “Libya 2017 Funding”, 2017, URL: <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya>, última vista: 09/2017.

Human Rights Investigations, “Libyan rebel ethnic cleansing and lynching of black people”, 07.07.2011, URL: <https://humanrightsinvestigations.org/2011/07/07/libya-ethnic-cleansing/>, última vista: 11/2016.

Human Rights Investigations, “Ethnic cleansing, genocide and the Tawergha”, 26.09.2011, URL: <https://humanrightsinvestigations.org/2011/09/26/libya-ethnic-cleansing-tawargha-genocide/>, última vista: 11/2016.

Human Rights Investigations, “Barred from their Homes briefing on Tawergha fails to address NATO and Amnesty complicity”, 26.10.2013, URL: <https://humanrightsinvestigations.org/2013/10/26/barred-from-their-homes-briefing-on-tawergha-fails-to-address-nato-and-amnesty-complicity/>, última vista: 06/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Stop Arbitrary Arrests of Black Africans”, 04.09.2011, URL: <https://www.hrw.org/news/2011/09/04/libya-stop-arbitrary-arrests-black-africans>, última vista: 11/2016.

Human Rights Watch (HRW), “Misrata Local Council Response to Human Rights Watch”, 11.04.2012, URL: <https://www.hrw.org/news/2012/04/11/misrata-local-council-response-human-rights-watch>, última vista: 07/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Abu Salim Prison Massacre Remembered. After 16 Years, Chance for Justice”, 27.06.2012, URL: <https://www.hrw.org/news/2012/06/27/libya-abu-salim-prison-massacre-remembered>, última vista: 02/2016.

Human Rights Watch (HRW), “Libya and the International Criminal Court. Questions and Answers”, mayo 2013, URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/QA_Libya_ICC_May_2013.pdf, última vista: 04/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Reject ‘Political Isolation Law’”, 04.05.2013, URL: <https://www.hrw.org/news/2013/05/04/libya-reject-political-isolation-law>, última vista: 02/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Displaced People from Tawergha Barred From Return. Authorities Should Let Them Go Home Safely”, 27.06.2013, URL: <https://www.hrw.org/news/2013/06/27/libya-displaced-people-tawergha-barred-return>, última vista: 06/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Hassan-al-Amin, Libia”, 27.08.2013, URL: <https://www.hrw.org/es/news/2013/08/27/hassan-al-amin-libia>, última vista: 06/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Displaced Camp Residents Need Immediate Protection. Militia Attacks on Tawerghans Leave One Dead”, 19.11.2013, URL: <https://www.hrw.org/news/2013/11/19/libya-displaced-camp-residents-need-immediate-protection>, última vista: 05/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Government Institutions at Risk of Collapse. Security, Justice Reforms Should Top Agenda of Rome Ministerial Conference”, 07.03.2014, URL: <https://www.hrw.org/news/2014/03/07/libya-government-institutions-risk-collapse>, última vista: 04/2017.

Human Rights Watch (HRW), “Libya: Civilian Toll Mounts in Benghazi. Displaced Person Camps Hit; No Military Target”, 24.01.2016, URL: <https://www.hrw.org/news/2016/01/24/libya-civilian-toll-mounts-benghazi>, última vista: 05/2017.

Human Rights Watch (HRW), “NATO: Zivile Opfer in Libyen untersuchen”, 14.05.2016, URL: <https://www.hrw.org/de/news/2012/05/14/nato-zivile-opfer-libyen-untersuchen>, última vista: 09/2016.

Human Rights Watch (HRW), *World Report 2017: Libya*, enero 2017, URL: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya>, última vista: 05/2017.

Humanitarian Accountability Partnership (HAP), “What is Accountability?”, 2010, URL: <http://www.hapinternational.org/about/what-is-accountability.aspx>, última vista: 05/2016.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Para que se sepa. Hablan las personas desplazadas en Colombia*, Panos, Londres, 2007, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2007/2007-am-colombia-para-que-se-sepa-thematic-sp.pdf>, última vista: 11/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Global IDP estimates (1990-2011)”, 2011, URL: <http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpPages%29/10C43F54DA2C34A7C12573A1004EF9FF?OpenDocument&count=1000>, última vista: 05/2016.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Libya. Many IDPs return but concerns persist for certain displaced groups”, Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre, 07.11.2011, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/library/Middle-East/Libya/pdf/201110-me-libya-overview-en.pdf>, última vista: 04/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Overview 2011: People Internally Displaced by Conflict and Violence*, Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre, abril 2012, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2012/2012-global-overview-2011-global-en.pdf>, última vista: 03/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Libya: Internal displacement in brief. As of December 2013”, 31.12.2013, URL: <http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/summary>, última vista: 05/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Overview 2014: People Internally Displaced by Conflict and Violence*, Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre, mayo 2014, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf>, última vista: 06/2016.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “The Kampala Convention. Two years on: time to turn theory into practice”, 08.12.2014, URL: <http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/kampala-convention/>, última vista: 07/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Libya IDP Figures Analysis”, 2015, URL: <http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/figures-analysis>, última vista: 06/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *GRID 2016. Global Report on Internal Displacement*, Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre, 31.12.2015, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-internal-displacement-IDMC.pdf>, última vista: 03/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement*, Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre, 2017, URL: <http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf>, última vista: 11/2017.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Libya. Internal Displacement Updates”, 2017, URL: <http://www.internal-displacement.org/countries/libya>, última vista: 10/2017.

International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP), “Impact of Action in Libya on the Responsibility to Protect”, mayo 2011, URL: <http://www.responsibilitytoprotect.org/RtoP%20in%20Light%20of%20Libya%20FINAL.pdf>, última vista: 02/2016.

International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP), “An Introduction to the Responsibility to Protect”, estado 2017, URL: <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/learn-about-rtop>, última vista: 06/2016.

International Committee of the Red Cross (ICRC), “Internally Displaced. Humanitarian Response to Internally Displaced People in Armed Conflict”, Ginebra, junio 2010, p. 8. URL: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0867.pdf, última vista: 06/2016.

International Committee of the Red Cross (ICRC), “Treaties and States parties to such Treaties”, 2016, URL: http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475, última vista: 05/2016.

International Crisis Group (ICG), *Divided We Stand: Libya's Enduring Conflicts. Middle East/North Africa Report No 130 – 14 September 2012*, 2012, URL: http://old.crisisgroup.org/_media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/libya/130-divided-we-stand-libyas-enduring-conflicts.pdf, última vista: 07/2017.

International Federation for Human Rights (FIDH), *Exiles from Libya flee to Egypt. Double tragedy for Sub-Saharan Africans*, 30.06.2011, URL: <https://www.fidh.org/IMG/pdf/libyeegypt565ang.pdf>, última vista: 06/2017.

International Justice Resource Center (IJRC), “Asylum & the Rights of Refugees”, 2017, URL: <http://www.ijrcenter.org/refugee-law/>, última vista: 02/2017.

Joint IDP Profiling Service (JIPS), “Libya. Combining analysis of population groups & urban systems”, 2017, URL: <http://www.jips.org/en/field-support/country-operations/libya/city-profiling-2017>, última vista: 10/2017.

Libya Analysis, “G7 Issues Statement in Support of GNA”, 12.04.2017, URL: <http://www.libya-analysis.com/g7-issues-statement-in-support-of-gna/>, última vista: 12/2017.

Libyan Organization Of Policies & Strategies (Loops Research), *The Reality of Higher Education in Libya*, mayo 2016, URL: <http://loopsresearch.org/media/images/photo1y463soniq.pdf>, última vista: 01/2018.

Migration Policy Centre (MPC), *Migration Profile. Libya*, Florencia, 06/2013, URL: http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Libya.pdf, última vista: 01/2017.

Politische Bildung, “Libyen. Ein Land zwischen Bürgerkrieg und Neuanfang”, 2016, URL: <http://www.politische-bildung.de/libyen.html>, última vista: 11/2016.

ReliefWeb, “OCHA Financial Tracking Service – Tracking Global Humanitarian Aid Flows”, 19.04.2013, URL: <https://reliefweb.int/map/world/ocha-financial-tracking-service-tracking-global-humanitarian-aid-flows>, última vista: 10/2017.

SALAH, Hanan, “Libya's Justice Pandemonium”, en Human Rights Watch, 14.04.2014, URL: <https://www.hrw.org/news/2014/04/14/libyas-justice-pandemonium>, última vista: 03/2017.

SHEPHERD-BARRON, James, “Clusterwise: Everything you wanted to know about cluster coordination but were afraid to ask”, 2009, URL: <http://www.clustercoordination.org/files/ccohb/Clusterwise.pdf>, última vista: 07/2016.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Arms Transfers Database”, 2016, URL: <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>, última vista: 08/2016.

Tawergha Foundation, *Situation report on the Misrata & Tawergha reconciliation process. February 2014*, 17.02.2014, URL: <http://www.tawergha.org/docs/2014-02-17-libya-tawergha-foundation-sitrep-on-the-misrata-tawergha-reconciliation-process-full-english.pdf>, última vista: 06/2017.

Tawergha Foundation, “44 detainees from Tawergha released”, 02.10.2014, URL: <http://tawergha.org/home/media.html>, última vista: 05/2017.

Tralac (Trade Law Centre), “United Nations Sustainable Development Summit 2015: Resource box”, 22.09.2015, URL: <https://www.tralac.org/news/article/8115-united-nations-sustainable-development-summit-2015-resource-box.html>, última vista: 09/2017.

Transparency International, “Corruption by Country”, 2015, URL: <https://www.transparency.org/country/#LBY>, última vista: 09/2016.

UCDP – Uppsala Conflict Data Program, “Libya: Government”, URL: <http://ucdp.uu.se/#/statebased/11980>, última vista: 09/2016.

Water Technology, “GMR (Great Man-Made River) Water Supply Project, Libya”, 2012, URL: <http://www.water-technology.net/projects/gmr/>, última vista: 10/2016.

World Heritage Encyclopedia, “Muammar Al-Qaddafi”, en World eBook Library, 2009, URL: http://www.worldbooklibrary.org/articles/eng/Muammar_al-Qaddafi, última vista: 06/2017.

Worldinz, “United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)”, 2017, URL: http://www.worldinz.com/en/repertoire_fiche_Organisation.php?id=659, última vista: 09/2017.

Artículos científicos y fuentes orales:

BASSIOUNI, Cherif M., “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, en *Law and Contemporary Problems*, vol. 59, no. 4, 1996, URL: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=lcp>, última vista: 11/2017.

BELL, Anthony, “A Surer Footing for a Light Footprint Strategy in Libya”, en FYSA, 26.02.2016, URL: <http://fysa.csis.org/2016/02/26/a-surer-footing-for-a-light-footprint-strategy-in-libya/>, última vista: 03/2017.

BELLAMY, Alex J., “The Responsibility to Protect. Towards a “Living Reality”. Report written for the United Nations Association-UK”, abril 2013, URL: <https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-UK%20Alex%20J%20Bellamy%20R2P%20Briefing%20Report%20no.%201.pdf>, última vista: 11/2017.

BELLAMY, Alex J., “The Three Pillars of the Responsibility to Protect”, en SERBIN, Andrés; SERBIN PONT, Andrei, *Pensamiento Propio 41 – Latin America and the Responsibility to Protect: Divergent Views from the South?*, vol. 20, enero-junio 2015, pp. 35-64, URL: <http://www.cries.org/wp-content/uploads/2015/09/006-bellamy.pdf>, última vista: 11/2017.

BENDER, Carolin, “London 2012 – Displaced by the Olympics”, en *Trialog* 98, 03/2008, 34-39, URL: http://www.trialog-journal.de/en/wp-content/uploads/2016/01/TRIALOG_98_FreeDownload.pdf#page=34, última vista: 12/2017.

BENNER, Thorsten, “Responsibility to Protect”, en DGAP Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., 01.03.2012, URL: <https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2012/maerz-april/responsibility-protect>, última vista: 01/2016.

BLÁZQUEZ, Adrián, “La guerra civil libia: un reto para el mundo”, en *El Orden Mundial en el S.XXI*, 19.04.2015, URL: <http://elordenmundial.com/2015/04/19/la-guerra-civil-libia-un-reto-para-el-mundo/>, última vista: 08/2016.

BLOKKER, Niels, “Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorize the Use of Force by ‘Coalitions of the Able and Willing’”, en *European Journal of International Law*, Vol. 11 (3), 2000, 541-568, URL: <http://ejil.oxfordjournals.org/content/11/3/541.full.pdf+html>, última vista: 07/2016.

BURGERMAN, Susan, “Soberanía estatal y responsabilidad comunitaria”, en *Revista Jurídica*, Edición 16, Tomo 1, 2003, URL: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2003/16-tomo-1/16_Soberania_Estatal_y_Responsabilidad_Comunit.pdf, última vista: 06/2016.

CHALMERS, Malcolm, “A Transatlantic New Deal. What Europe should pay to promote US engagement”, The Foreign Policy Centre, Policy Brief, no. 2, Londres, 2001, URL: <http://fpc.org.uk/fsblob/73.pdf>, última vista: 08/2016.

CHENGU, Garikai, “Libya: From Africa’s Richest State under Gaddafi, to Failed State After NATO Intervention”, 19.10.2014, en Centre for Research on Globalization, URL: <http://www.globalresearch.ca/libya-from-africas-richest-state-under-gaddafi-to-failed-state-after-nato-intervention/5408740>, última vista: 09/2016.

CHOI, Kang, “A Changing East Asia and U.S. Foreign Policy”, mayo 2012, en Council on Foreign Relations, URL: <http://www.cfr.org/south-korea/changing-east-asia-us-foreign-policy/p28385>, última vista: 08/2016.

CHOMSKY, Noam, “La política de Estados Unidos en el Medio Oriente”, Charla presentada en el Palacio UNESCO, Beirut, 25.05.2010, URL: https://chomsky.info/20100525_sp/, última vista: 08/2016.

CLARKE, Paul; RAMALINGAM, Ben, “Organisational Change in the Humanitarian Sector”, en *ALNAP Review of Humanitarian Action*, Chapter 2, 2008, URL: www.alnap.org/pool/files/7rha-Ch2.pdf, última vista: 07/2016.

COGHLAN, Jo, “Arab Spring Refugees: the Cost of War”, en *Foreign Policy Journal*, 28.06.2011, URL: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/06/28/arab-spring-refugees-the-cost-of-war/>, última vista: 04/2017.

COHEN, Roberta, “Some Reflections on National and International Responsibility in Situations of Internal Displacement”, en MISHRA, Omprakash, *Forced Migration in the South Asian Region – Displacement, Human Rights and Conflict Resolution*, Jadavpur University, Kolkata & Brookings Institution Project on Internal Displacement, Washington DC, 2004, pp. 343-356, URL: <http://206.155.102.64/pdfid/4c5153ae2.pdf>, última vista: 05/2016.

COHEN, Roberta, “Law and Ethics. Strengthening Protection of IDPs. The UN’s Role”, en Georgetown Journal of International Affairs, Georgetown, 2006, URL: http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/articles/cohen_2006_gjia.pdf, última vista: 05/2016.

DAW, Mohamed A.; EL-BOUZEDI, Abdallah; DAU, Aghnaya A., “Libyan armed conflict 2011: Mortality, injury and population displacement”, vol. 5, no. 3, Trípoli, 26.05.2015, URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X15000348>, última vista: 09/2016.

DEMBINSKY, Matthias; REINOLD, Theresa, “Libya and the Future of the Responsibility to Protect – African and European Perspectives”, PRIF-Report no. 107, Peace Research Institute Frankfurt, Fráncfort del Meno, 2011, URL: https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/prif107.pdf, última vista: 11/2017.

DÖRR, Oliver, “Gewalt und Gewaltverbot im modernen Völkerrecht”, en BPB (B 43/2004), 15.10.2004, URL: <http://www.bpb.de/apuz/28036/gewalt-und-gewaltverbot-im-modernen-voelkerrecht?p=all>, última vista: 05/2016.

DOWNES, Alexander B., “Catastrophic Success: Foreign-Imposed Regime Change and Civil War”, Department of Political Science, Duke University, Durham, NC, 2010, URL: http://www.securitymanagementinitiative.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=515&Itemid=28, última vista: 06/2016.

DROEGE, Cordula, “Developments in the legal protection of IDPs. Ten years of experience since the Guiding Principles”, en ICRC Resource Centre, 2008, URL: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/refugees-idps-legal-article-300908.htm>, última vista: 09/2016.

ENGELHARDT, Marc, “‘Aus den Augen, aus dem Sinn’ – Flüchtlinge und Migranten an den Rändern Europas. Globale Mangelwirtschaft”, en Heinrich-Böll-Stiftung, septiembre 2016, URL: https://www.boell.de/sites/default/files/2016-09-globale_mangelwirtschaft.pdf, última vista: 10/2017.

EVANS, Gareth, “Russia, Georgia and the Responsibility to Protect”, en ALF Amsterdam Law Forum, Vol 2, no. 2, 2009, URL: <http://amsterdamlawforum.org/article/view/58/115>, última vista: 07/2016.

GINSBURG, Jennifer, “A Failure to Rise to the Occasion: Syria and the Failure of ‘Responsibility to Protect’”, en Brandeis International Journal, noviembre 2013, URL: <http://www.brandeisij.com/FailureRise.html>, última vista: 08/2016.

HOFF, Brad, “Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention”, en Foreign Policy Journal, 06.01.2016, URL: <http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/>, última vista: 10/2016.

HUMPHRIES, Vanessa, “Improving Humanitarian Coordination: Common Challenges and Lessons from the Cluster Approach”, en *The Journal of Humanitarian Assistance*, 30.04.2013, URL: http://sites.tufts.edu/jha/archives/1976#_ftn1, última vista: 06/2016.

IBRAHIM, Suliman, *Property Claims in Post-Gaddafi Libya: Political Debates and Justice Seeking in the Aftermath of Law 4/1978*, Springer, Universidad de Leiden, 19.12.2016, URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40803-016-0046-6.pdf>, última vista: 06/2017.

JULIO, Dr. Vignolo; VACAREZZA, Dra. Mariela; ÁLVAREZ, Dra. Cecilia; SOSA, Dra. Alicia, “Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud”, en *Arch Med Interna, Prensa Médica Latinoamericana*, XXXIII (1), 2011, pp.11-14, URL: <http://www.scielo.edu.uy/pdf/ami/v33n1/v33n1a03.pdf>, última vista: 10/2017.

KAN, Michael, “China’s Investment in Libya”, en *The African Business Journal*, junio 2012, URL: http://www.tabj.co.za/northern_africa/michael_kan_and_belinda_yan_assess_what_chinese_investors_will_n.html, última vista: 08/2016.

KANT, Immanuel, *La Paz Perpetua. Ensayo filosófico*, 1795, trad. de RIVERA PASTOR, Francisco, Madrid, Calpe, 1919, URL: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.htm#8, última vista: 04/2016.

KANT, Immanuel, *Principios metafísicos del derecho*, 1797, trad. de LIZARRAGA, G., Madrid, 1873, URL: <http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/principiosMetafisicosKant.pdf>, última vista: 05/2016.

KARASAPAN, Omer, “The impact of Libyan middle-class refugees in Tunisia”, en *Brookings*, 17.03.2015, URL: <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/03/17/the-impact-of-libyan-middle-class-refugees-in-tunisia/>, última vista: 02/2017.

KARNAVAS, Michael G., “Saif al-Islam Gaddafi and the ICC: is the purported “amnesty” (or pardon) and “double jeopardy” a game-changer?”, en *International Criminal Law Blog*, 18.07.2016, URL: <http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/07/18/gaddafi-icc-part-1/>, última vista: 05/2017.

KAUFMAN, Stephen, “Voto unánime en la ONU para suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos”, en *US Embassy, IIP Digital*, 01.03.2011, URL: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2011/03/20110302105300x6.502497e-02.html>, última vista: 02/2016.

KINACIOĞLU, Müge, “The Principle of Non-intervention at the United Nations: The Charter Framework and the Legal Debate”, en *SAM Center for Strategic Research. Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs*, 2005, pp. 15-39, URL: <http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2012/01/Muge-Kinacioglu.pdf>, última vista: 11/2017.

KIOKO, Ben, “The right of intervention under the African Union’s Constitutive Act: From non-interference to non-intervention”, en *IRRC December*, vol. 85, no. 852, 2003, URL: http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5868~v~The_right_of_intervention_under_the_African_Union_8217s_Constitutive_Act_From_non-interference_to_non-intervention.pdf, última vista: 11/2017.

KLEIN, Margarete, “Russia and the Arab Spring”, *German Institute for International and Security Affairs, SWP* (3), Berlín, 2012, URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C03_kle.pdf, última vista: 08/2016.

KRIEGER, Helmut, “Der ‘humanitäre’ Regimewechsel in Libyen”, en Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), 15.05.2011, URL: <http://www.vidc.org/?id=1492>, última vista: 02/2016.

KUNIG, Philip, “Prohibition of Intervention”, en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law, Oxford, abril 2008, URL: <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1434?prd=EPIL>, última vista: 11/2017.

KUPERMAN, Alan J., “Lessons from Libya: How Not to Intervene”, en Belfer Center for Science and International Affairs, septiembre 2013, URL: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html, última vista: 06/2016.

KUPERMAN, Alan J., “Obama’s Libya Debacle. How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure”, en Foreign Affairs, March/April 2015 Issue, 2015, URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle>, última vista: 07/2016.

LOTZE, Walter, “We do indeed reap what we sow”, en University of Denver, Human Rights and Human Welfare, 2011, URL: <http://www.du.edu/korbel/hrhw/roundtable/2011/panel-a/03-2011/lotze-2011c.html>, última vista: 09/2016.

LOWE, Vaughan; TZANAKOPOULOS, Antonios, “Humanitarian Intervention”, en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law, Oxford, mayo 2011, URL: <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e306>, última vista: 11/2017.

MAHER, Laurence W., “Light Between War and Peace: Herbert Vere Evatt, The Rule of International Law, and The Corfu Channel Case”, en *Australian Journal of Legal History*, 2005, URL: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJLH/2005/3.html>, última vista: 11/2017.

MARTINEZ, Luis, “El levantamiento de las sanciones y las nuevas relaciones diplomáticas con Libia”, en Instituto Europeo del Mediterráneo y Fundación CIDOB, 2005, URL: <http://www.iemed.org/anuari/2005/earticles/emartinez.pdf>, última vista: 08/2016.

MCWHINNEY, Edward Q.C., “Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1965. Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía”, 2011, URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_s.pdf, última vista: 11/2017.

MERKEL, Reinhard, “Die NATO-Intervention gegen das Gaddafi-Regime war illegitim”, en BPB, 11.07.2012, URL: <http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/140315/meinung-die-nato-intervention-gegen-das-gaddafi-regime-war-illegitim>, última vista: 02/2016.

METZ, Helen Chapin (ed.), *Libya: A Country Study*, Library of Congress, Federal Research Division, Washington, 1989, URL: https://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/li/libyacountrystud00metz_0/libyacountrystud00metz_0.pdf, última vista: 06/2017.

MOUNTAIN, Thomas C., “NATO Poisons Libya With Depleted Uranium”, en *Foreign Policy Journal*, 14.05.2011, URL: <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/05/14/nato-poisons-libya-with-depleted-uranium/>, última vista: 09/2016.

NALANI BUTLER B.; AICHER, Thomas J., “Demonstrations and displacement: social impact and the 2014 FIFA World Cup”, *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, vol. 7, issue 3, 2015, pp. 299–313, URL: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19407963.2014.997436>, última vista: 12/2017.

OTTO, Jan Michiel; CARLISLE, Jessica, IBRAHIM, Suliman (eds.), *Searching for Justice in Post-Gaddafi Libya. A Socio-Legal Exploration of People's Concerns and Institutional Responses at Home and From Abroad*, Van Vollenhoven Institute, Universidad de Leiden, 2013, URL: <file:///C:/Users/Frank/Downloads/Searching%20for%20Justice%20in%20Post-Gaddafi%20Libya%20Searching%20for%20Justic.pdf>, última vista: 06/2017.

PERAL, Luis, “Implementing R2P in Libya – How to Overcome the Inaction of the UN Security Council”, European Union Institute for Security Studies, 2011, URL: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/R2P_in_Libya.pdf, última vista: 06/2016.

ROBERTS, Adam, *Yearbook of International Humanitarian Law. The So-called ‘Right’ of Humanitarian Intervention*, vol. 3, Trinity College, Universidad de Melbourne, 2000, pp.3-51, URL: https://weblearn.ox.ac.uk/access/content/user/1044/YBIHL_vol_3_2000_publ_2002_-_So-called_right_of_humanitarian_intervention.pdf, última vista: 11/2017.

RUDOLF, Peter, “Schutzverantwortung und humanitäre Intervention”, en BPB, 02.09.2013, URL: <http://www.bpb.de/apuz/168165/schutzverantwortung-und-humanitaere-intervention?p=all>, última vista: 07/2016.

RYAN, Christopher M., “Sovereignty, Intervention, and the Law: A Tenous Relationship of Competing Principles”, en *Millennium: Journal of International Studies*, March 1, 1997, pp. 77-100, URL: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298970260010801>, última vista: 11/2017.

SÁNCHEZ, Fernanda; BROUDEHOUX, Anne-Marie, “Mega-events and urban regeneration in Rio de Janeiro: planning in a state of emergency”, en *International Journal of Urban Sustainable Development*, vol. 5, issue 2, 2013, pp. 132–153, URL: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19463138.2013.839450>, última vista: 12/2017.

SCHMIDT, Dr. Lars Peter; HERR, Michael, “Russlands Außenpolitik im Nahen Osten und Nordafrika am Beispiel der Libyenkrise”, en Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 12.10.2011, Länderberichte, URL: <http://www.kas.de/ru-moskau/de/publications/29132/>, última vista: 08/2016.

SCHULZE, Peter W., “Russland und die Europäische Union”, 13.01.2011, en BPB, URL: <http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47974/europaeische-union?p=all>, última vista: 08/2016.

SHARQUIEH, Ibrahim, “Reconstructing Libya: Stability through national reconciliation”, Brookings Doha Center Analysis Paper, no. 9, December 2013, en Foreign Policy at Brookings, Doha, 2013, URL: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Libya-National-Reconciliation-English.pdf>, última vista: 05/2017.

SWINNEN, Jérémie, “La responsabilidad de proteger, el impacto de una noción que continua avanzando”, en Public International Law, 2014, URL: <http://publicinternationallaw.com/la-responsabilidad-de-proteger-el-impacto-de-una-nocion-que-continua-avanzando/>, última vista: 03/2016.

TOMUSCHAT, Christian, “Zwischen Autonomierechten und Interventionspflichten”, en Eichholzbrief, Zeitschrift für politische Bildung, No. 4/1995, Sankt Augustin, 1995, URL: <http://www.kas.de/wf/de/33.1023/>, última vista: 07/2016.

TURNER, Simon, “Angry young men in camps: gender, age and class relations among Burundian refugees in Tanzania”, New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 9, Roskilde University, 1999, URL: <http://www.unhcr.org/3ae6a0c38.pdf>, última vista: 07/2016.

UCHE, Chibuike, “Oil, British Interests and the Nigerian Civil War”, en Journal of African History, 49 (1), marzo 2008, pp. 111-135, URL: https://www.researchgate.net/publication/231950374_Oil_British_interests_and_the_Nigerian_Civil_War, última vista: 08/2016.

Université de Genève, Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, “Rule of Law in Armed Conflicts Project. International Refugee Law”, 2016, URL: http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_refugee_law.php, última vista: 01/2016.

VAN DEN RUL, Celine, “Why Have Resolutions of the UN General Assembly If They Are Not Legally Binding?”, en E-International Relations Students, 16.06.2016, URL: <http://www.e-ir.info/2016/06/16/why-have-resolutions-of-the-un-general-assembly-if-they-are-not-legally-binding/>, última vista: 11/2017.

WEIPERT-FENNER, Irene, “Die Generäle und die Demokratie: Zur Rolle der Armee in Ägypten und Tunesien”, 12.07.2013, URL: <http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/07/12/die-generale-und-die-demokratie-zur-rolle-der-armee-in-agypten-und-tunesien/>, última vista: 09/2016.

WIERDA, Marieke, “Confronting Qadhafi’s Legacy. Transitional Justice in Libya”, en COLE, Peter; MCQUINN, Brian (eds.), *The Libyan Revolution and its Aftermath*, Hurst & Company, London, 2015, pp. 153-154.

WILLIAMS, Rhodri C., “Dispossession and displacement in Libya”, en Forced Migration Review FMR 39, *North Africa and displacement 2011-2012*, junio 2012, URL: <http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/north-africa/williams.pdf>, última vista: 06/2017.

WOOD, Sir Michael, “Non-Intervention (Non-interference in domestic affairs)”, en Encyclopedia Princetoniensis, 2017, URL: <https://pesd.princeton.edu/?q=node/258>, última vista: 11/2017.

ZIMMERMANN, Dominik, “Why is the Practice of Humanitarian Intervention so Controversial?”, en E-International Relations Students, Staffordshire University, 2013, URL: <http://www.e-ir.info/2014/04/30/why-is-the-practice-of-humanitarian-intervention-so-controversial/>, última vista: 07/2016.

Fuentes periodísticas y de televisión:

AG Friedensforschung, “Streit um Waffen für Rebellen”, en Neues Deutschland, 31.03.2011, URL: <http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/waffen2.html>, última vista: 02/2016.

AHMED, Nafeez M., “How NATO Deliberately Destroyed Libya’s Water Infrastructure”, 29.05.2015, URL: <http://www.informationclearinghouse.info/article41999.htm>, última vista: 09/2016.

AHMED, S.; BOTHELO, G.; MCLAUGHLIN, E. C., “20 claves para entender los intereses de Rusia en Ucrania”, 04.03.2014, en CNN en Español, URL: <http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/04/20-claves-para-entender-los-intereses-de-rusia-en-ucrania/>, última vista: 08/2016.

Al Jazeera, “Libya protests spread and intensify”, 21.02.2011, URL: <http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/2011221133557377576.html>, última vista: 02/2016.

Al Jazeera, “Arab States seek Libya no-fly zone”, 12.03.2011, URL: <http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/03/201131218852687848.html>, última vista: 02/2016.

Arab News, “Videos. Libya’s Tawergha remain displaced”, 27.04.2017, URL: <http://www.arabnews.com/libyas-tawergha-remain-displaced%E2%80%AC>, última vista: 04/2017.

Arab News, “UAE ‘optimistic’ after Libyan ally meets PM Sarraj”, 04.05.2017, URL: <http://www.arabnews.com/node/1094131/middle-east>, última vista: 12/2017.

ASHER-SCHAPIRO, Avi, “Libyan Oil, Gold, and Qaddafi: The Strange Email Sidney Blumenthal Sent Hillary Clinton In 2011”, 12.01.2016, URL: <https://news.vice.com/article/libyan-oil-gold-and-qaddafi-the-strange-email-sidney-blumenthal-sent-hillary-clinton-in-2011>, última vista: 11/2016.

AVENARIUS, Tomas, “Gaddafis teuflische Wasser-Strategie”, en Süddeutsche Zeitung, 02.09.2011, URL: <http://www.sueddeutsche.de/politik/libyens-ex-diktator-nutzt-wasser-als-druckmittel-gaddafis-teuflische-wasser-strategie-1.1138090>, última vista: 10/2016.

AVN – Agencia Venezolana de Noticias, “Gaddafi acepta propuesta de Venezuela de conformar comisión de paz para Libia”, 03.03.2011, URL: <http://www.avn.info.ve/contenido/gaddafi-acepta-propuesta-venezuela-conformar-comisi%C3%B3n-paz-para-libia>, última vista: 09/2016.

BALMES, Chiden, “The world’s largest multidonor trust funds: A primer”, 08.02.2011, URL: <https://www.devex.com/news/the-world-s-largest-multidonor-trust-funds-a-primer-72695>, última vista: 11/2017.

BARBER, Benjamin, “Libya: This is Nato’s dirty war”, en The Guardian, 02.05.2011, URL: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/may/02/nato-gaddafi-libya-air-strikes>, última vista: 02/2016.

Basler Zeitung, “Nato-Generalsekretär ruft zum finalen Schlag gegen Ghadhafi auf”, 06.06.2011, URL: <http://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Nato-bombardiert-weiter-->

GhadhafiRegime-geschwaecht/story/27720728, última vista: 02/2016.

BBC Mundo, “La muerte de Gadafi minuto a minuto”, 20.10.2011, URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_libia_gadafi_livetext.shtml, última vista: 11/2016.

BBC News, “Dr Faraj Najem and Colonel Bob Stewart on UN Libya resolution”, 18.03.2011, URL: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-12786916>, última vista: 09/2016.

BBC News, “Libya letter by Obama, Cameron and Sarkozy: Full text”, 15.04.2011, URL: <http://www.bbc.com/news/world-africa-13090646>, última vista: 09/2016.

BBC News, “Misrata: Libya’s city under siege”, 10.05.2011, URL: <http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13118724>, última vista: 07/2017.

BBC News, “Libya’s NTC hands power to newly elected assembly”, 09.08.2012, URL: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19183300>, última vista: 04/2017.

BBC News, “Libya revokes bill which banned Gaddafi-era officials from office”, 02.02.2015, URL: <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31104099>, última vista: 02/2017.

BBC News, “Guide to key Libyan militias”, 11.01.2016, URL: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19744533>, última vista: 02/2017.

BBC News, “Profile: Libya’s military strongman Khalifa Haftar”, 15.09.2016, URL: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27492354>, última vista: 04/2017.

BBC News, “Libya profile - Timeline”, 21.11.2016, URL: <http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445>, última vista: 03/2017.

BEN IBRAHIM, Abdullah, “500,000 IDPs are in need of urgent humanitarian assistance, Libyan Red Crescent says”, en The Libya Observer, 20.02.2016, URL: <https://www.libyaobserver.ly/news/500000-idps-are-need-urgent-humanitarian-assistance-libyan-red-crescent-says>, última vista: 03/2017.

BITTNER, Jochen, “Wann ist ein Krieg gerechtfertigt?”, en Zeit Online, 03.11.2011, URL: <http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-11/libyen-krieg-gerechtigkeit-replik>, última vista: 06/2016.

BLACK, Ian, “Libya cracks down on protesters after violent clashes in Benghazi”, en The Guardian, 17.02.2011, URL: <http://www.theguardian.com/world/2011/feb/16/libya-clashes-benghazi>, última vista: 02/2016.

BLACK, Ian, “Have Gaddafi’s tanks gone underground?”, en The Guardian, 18.04.2011, URL: <https://www.theguardian.com/world/2011/apr/18/have-gaddafis-tanks-gone-underground>, última vista: 09/2016.

BLACK, Ian, “Libyan revolution casualties lower than expected, says new government”, en The Guardian, 08.01.2013, URL: <https://www.theguardian.com/world/2013/jan/08/libyan-revolution-casualties-lower-expected-government>, última vista: 09/2016.

BLASCHKE, Björn, “Kliniken in Libyen. Ärzte mit leeren Händen”, en Tagesschau, 18.04.2017,

URL: <https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-krieg-101.html>, última vista: 05/2017.

BROWN, Ellen, “Why Qaddafi had to go: African gold, oil and the challenge to monetary imperialism”, en The Ecologist, 14.03.2016, URL: http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2987399/why_qaddafi_had_to_go_african_gold_oil_and_the_challenge_to_monetary_imperialism.html, última vista: 11/2016.

BROWN, Ellen, “Los emails de Hillary Clinton revelan el plan secreto de EE.UU. en Libia: DINERO, PODER, PETROLEO”, trad. de MUNOZ DE BUSTILLO, Paco, Rebelión, 19.03.2016, URL: <http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/03/20/los-emails-de-hillary-clinton-revelan-el-plan-secreto-de-ee-uu-en-libia-dinero-poder-petroleo/>, última vista: 11/2016.

BÜRGENDER, A., “Was wurde aus Gaddafis “Great-Man-Made-River-Projekt?”, 01.06.2016, URL: <http://www.gegenfrage.com/great-man-made-river-projekt/>, última vista: 09/2016.

BURNS, John F., “Qaddafi Compound Is Pounded in Day Raid”, 07.06.2011, en The New York Times, URL: <http://www.nytimes.com/2011/06/08/world/africa/08tripoli.html>, última vista: 09/2016.

CARTER, Tom, “The American Psychological Association, Torture, and the Nuremberg Doctors’ Trial”, en Transcend Media Service, 20.07.2015, URL: <https://www.transcend.org/tms/2015/07/the-apa-torture-scandal-and-the-nuremberg-doctors-trial/>, última vista: 09/2016.

CBS News, “Qaddafi calls rebels ‘rats’, says West wants oil”, 15.03.2011, URL: <http://www.cbsnews.com/news/qaddafi-calls-rebels-rats-says-west-wants-oil/>, última vista: 02/2016.

CBS News, “U.S.: Libya death toll as high as 30,000”, 27.04.2011, URL: <http://www.cbsnews.com/news/us-libya-death-toll-as-high-as-30000/>, última vista: 09/2016.

CBS News, “Clinton on Qaddafi: “We came, we saw, he died””, 20.10.2011, URL: <http://www.cbsnews.com/news/clinton-on-qaddafi-we-came-we-saw-he-died/>, última vista: 11/2016.

Chaîne de The Humanitarian War, “Humanitarian War in Libya: There is no evidence!”, 28.11.2011, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pU9IzXsALwo>, última vista: 09/2016.

Channel4, “MSF suspends work in Misrata amid torture claims”, 26.01.2012, URL: <http://www.channel4.com/news/msf-suspends-work-in-misrata-amid-torture-claims>, última vista: 11/2016.

Christian Science Monitor, “686,000 Libya refugees flee to Egypt, Tunisia”, 05.05.2011, URL: <http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0505/686-000-Libya-refugees-flee-to-Egypt-Tunisia>, última vista: 01/2017.

CHULOV, Martin, “Libyan rebels reject Hugo Chávez mediation offer”, 03.03.2011, en The Guardian, URL: <http://www.theguardian.com/world/2011/mar/03/libyan-rebels-reject-hugo-chavez>, última vista: 02/2016.

COCKBURN, Patrick, “Amnesty questions claim that Gaddafi ordered rape as weapon of war”, en The Independent, 24.06.2011,

URL: <http://www.independent.co.uk/news/world/africa/amnesty-questions-claim-that-gaddafi-ordered-rape-as-weapon-of-war-2302037.html>, última vista: 09/2016.

COWELL, Alan, ERLANGER, Steven, “France Becomes First Country to Recognize Libyan Rebels”, en The New York Times, 10.03.2011, URL: http://www.nytimes.com/2011/03/11/world/europe/11france.html?_r=0, última vista: 02/2016.

CRAMER, Mary Lynn, “Before US-NATO Invasion, Libya Had The Highest Human Development Index, The Lowest Infant Mortality, The Highest Life Expectancy In All Of Africa”, 04.05.2011, URL: <http://www.countercurrents.org/cramer040511.htm>, última vista: 01/2018.

Crónica Popular, “La Minustah y las violaciones de los derechos humanos en Haití”, 05.03.2012, URL: <http://www.cronicapopular.es/2012/03/la-minustah-y-las-violaciones-de-los-derechos-humanos-en-haiti/>, última vista: 05/2016.

DE FILIPPIS, V., “Pétrole: L'accord secret entre le CNT et la France”, en Liberation, 01.09.2011, URL: http://www.liberation.fr/planete/2011/09/01/petrole-l-accord-secret-entre-le-cnt-et-la-france_758320, última vista: 08/2016.

Destino Infinito, “El Gran Río Artificial de Gadafi”, 18.07.2015, URL: <http://destinoinfinito.com/el-gran-rio-artificial-de-gadafi/>, última vista: 10/2016.

Deutsche Welle, “La OTAN sale de Libia: ¿misión cumplida?”, 31.10.2011, URL: <http://www.dw.com/es/la-otan-sale-de-libia-misi%C3%B3n-cumplida/a-15500844>, última vista: 12/2016.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten, “Libyen: Neuer Stellvertreter-Krieg um Öl und Pipelines”, 17.01.2017, URL: <https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/01/17/libyen-neuer-stellvertreter-krieg-um-oel-und-pipelines/>, última vista: 04/2017.

Die Entwickler, “Ärzte ohne Grenzen verurteilt Initiative zur Abschiebung von Bootsflüchtlingen nach Libyen”, 24.06.2011, URL: <http://entwickler-netz.de/blog/2011/06/24/arzte-ohne-grenzen-verurteilt-initiative-zur-abschiebung-von-bootsfluchtlingen-nach-libyen/>, última vista: 09/2016.

Die Presse, “Neues Video über letzte Minuten Gaddafis aufgetaucht”, 05.02.2016, URL: <http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4919794/Neues-Video-uber-letzte-Minuten-Gaddafis-aufgetaucht>, última vista: 11/2016.

DiPublico, “Tratado de renuncia a la guerra – pacto Briand-Kellogg (1928)”, URL: <http://www.dipublico.org/3584/tratado-de-renuncia-a-la-guerra-pacto-briand-kellogg-1928/>, última vista: 09/2016.

DITZ, Jason, “Disappeared: Thousands of Libyan Blacks Turn Up Missing in Rebel Offensives”, 13.09.2011, URL: <http://news.antiwar.com/2011/09/13/disappeared-thousands-of-libyan-blacks-turn-up-missing-in-rebel-offensives/>, última vista: 06/2017.

DU BOISPÉAN, Stéphane, “Libyen: Wir müssen draußen bleiben!”, en Treffpunkt Europa, 2011, URL: <http://www.treffpunkteuropa.de/Libyen-Wir-mussen-draussen-bleiben>, última vista: 07/2016.

El Economista, “Hechos importantes en las relaciones libio-estadounidenses”, en EcoDiario

Global, 05.09.2008,

URL: <http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/737067/09/08/Hechos-importantes-en-las-relaciones-libioestadounidenses.html>, última vista: 07/2016.

EL-GAMATY, Guma, “International bodies are ignoring Haftar’s war crimes in Libya”, en Al-Araby, 29.03.2017, URL: <https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/3/29/international-bodies-are-ignoring-haftars-war-crimes-in-libya>, última vista: 04/2017.

El Mundo, “El terrorista de Lockerbie, entre abrazos del hijo de Gadafi y confeti”, 21.08.2009, URL: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/20/internacional/1250798411.html>, última vista: 08/2016.

El Mundo, “Las fuerzas de Gadafi causan ‘un genocidio’ entre los manifestantes”, 22.02.2011, URL: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/21/internacional/1298306695.html>, última vista: 09/2016.

El Mundo, “Gadafi, muerto”, 21.10.2011,

URL: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/20/internacional/1319109552.html>, última vista: 11/2016.

El País, “Zapatero justifica la muerte de Bin Laden”, 04.05.2011, URL: http://elpais.com/elpais/2011/05/04/actualidad/1304497019_850215.html, última vista: 11/2016.

El País, “Gadafi alienta la violación como arma de guerra”, 10.06.2011, URL: http://elpais.com/diario/2011/06/10/internacional/1307656802_850215.html, última vista: 09/2016.

El País, “Cronología de la guerra en Libia”, 22.08.2011, URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/22/actualidad/1313964006_850215.html, última vista: 06/2016.

El País, “Libia acelera la transición tras la muerte de Gadafi”, 20.10.2011, URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/20/actualidad/1319104472_834719.html, última vista: 11/2016.

El Periódico, “El Consejo Nacional de Transición tendrá la ‘sharia’ como base del derecho”, 23.10.2011, URL: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/consejo-nacional-transicion-proclama-liberacion-total-libia-1194150>, última vista: 11/2016.

El Universal, “Rebeldes reportan 50.000 muertos durante el conflicto libio”, 31.08.2011, URL: <http://www.eluniversal.com/internacional/revuelta-arabe/110831/rebeldes-reportan-50000-muertos-durante-el-conflicto-libio>, última vista: 06/2016.

El Universal, “Inclusión de exmiembros del régimen de Gadafi amenaza nuevo gobierno libio”, 16.02.2016, URL: http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/inclusion-exmiembros-del-regimen-gadafi-amenaza-nuevo-gobierno-libio_9087, última vista: 03/2017.

ESTELLE, Emily, “Fighting Forces in Libya: January 2017”, en Critical Threats, 18.01.2017, URL: <https://www.criticalthreats.org/analysis/fighting-forces-in-libya-january-2017>, última vista: 04/2017.

EurActiv, “EU prepares for worst after Gaddafi ‘genocide’ threats”, 23.02.2011, URL:

<http://www.euractiv.com/global-europe/eu-prepares-worst-gaddafi-genoci-news-502424>, última vista: 02/2016.

Europa Press, “Gadafi se niega a dimitir, asegura que morirá en Libia y que luchará hasta su última gota de sangre”, 22.02.2011, URL: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-libia-gadafi-niega-dimitir-asegura-morira-libia-luchara-ultima-gota-sangre-20110222183214.html>, última vista: 06/2016.

Europa Press, “Libia cifra en 4.700 los muertos entre los revolucionarios de la Guerra civil”, 08.01.2013, URL: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-libia-cifra-4700-muertos-revolucionarios-guerra-civil-20130108082210.html>, última vista: 06/2016.

Fanack Chronicle, “Libya. Population”, 29.09.2009, 12.12.2016 (actualizado), URL: <https://chronicle.fanack.com/libya/population/>, última vista: 08/2017.

FARMER, Ben, “Col Gaddafi killed: no mercy for a merciless tyrant”, en The Telegraph, 20.10.2011, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8840104/Col-Gaddafi-killed-no-mercy-for-a-merciless-tyrant.html>, última vista: 11/2016.

FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Washington plant Waffenlieferungen”, 30.03.2011, URL: <http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/libyen-washington-plant-waffenlieferungen-1609948.html>, última vista: 09/2016.

FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Nato: UN sollen Libyen-Truppe vorbereiten”, 09.06.2011, URL: <http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/treffen-der-verteidigungsminister-nato-un-sollen-libyen-truppe-vorbereiten-1653250.html>, última vista: 09/2016.

FETOURI, Mustafa, “Libya’s forgotten war victims”, en Al Monitor, 04.02.2014, URL: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/02/libya-nato-bombing-victims-excluded-martyrs-compensation.html#>, última vista: 02/2016.

FETOURI, Mustafa, “Five years on, predictions by Gadhafi’s son come true”, en Al-Monitor, 28.02.2016, URL: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/libya-gaddafi-son-predictions-chaos.html>, última vista: 08/2016.

FORTE, Maximilian, “The Top Ten Myths in the War Against Libya”, 31.08.2011, URL: <http://www.counterpunch.org/2011/08/31/the-top-ten-myths-in-the-war-against-libya/>, última vista: 02/2016.

FORTIN, Jacey, “Green-On-Blue, Fade to Black: Are Insider Attacks Drawing Down In Afghanistan?”, 2013, URL: <http://www.ibtimes.com/green-blue-fade-black-are-insider-attacks-drawing-down-afghanistan-1120935>, última vista: 05/2016.

Frankfurter Rundschau, “Gaddafi verliert immer mehr an Rückhalt”, 23.02.2011, URL: <http://www.fr-online.de/home/gaddafi-verliert-immer-mehr-an-rueckhalt-1472778,7400150.html>, última vista: 02/2016.

FRAU, Dr. Robert, “Legale Waffenlieferungen sind nicht unmöglich”, 01.04.2011, URL: <http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/aufreuestung-fuer-libysche-rebellen-legale-waffenlieferungen-sind-nicht-unmoeglich/>, última vista: 02/2016.

FREFEL, Astrid, “Afrikanische Union zwischen den Fronten”, en Der Tagesspiegel, 11.04.2016, URL: <http://www.tagesspiegel.de/politik/libyen-afrikanische-union-zwischen-den-fronten/4049144.html>, última vista: 02/2016.

FRIDAY, Kaushik, “The Great Man-Made River of Libya”, 17.07.2015, URL: <http://www.amusingplanet.com/2015/07/the-great-man-made-river-of-libya.html>, última vista: 10/2016.

GEBAUER, Matthias, “CIA-Kooperation mit Gaddafi: Foltern als Freundschaftsdienst”, en Spiegel Online, 06.09.2012, URL: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-cia-tauschte-gaddafi-gegner-gegen-informationen-a-854340.html>, última vista: 08/2016.

GIBBS, David N., “Power Politics, NATO, and the Libyan Intervention”, en CounterPunch, 15.09.2011, URL: <http://www.counterpunch.org/2011/09/15/power-politics-nato-and-the-libyan-intervention/>, última vista: 08/2016.

GLAZEBROOK, Dan, “Las lecciones de Libia”, en Sin Permiso, 16.11.2014, URL: <http://www.sinpermiso.info/textos/las-lecciones-de-libia>, última vista: 06/2017.

GRITSCH, Kurt, “Ein politischer Machtfaktor”, 12.03.2013, URL: <http://www.hintergrund.de/201304112530/hintergrund/medien/ein-politischer-machtfaktor.html>, última vista: 09/2016.

Handelsblatt, “Merkel sagt Nein zum Einsatz in Libyen”, 19.03.2011, URL: <http://www.handelsblatt.com/politik/international/keine-bundeswehrintervention-merkel-sagt-nein-zum-einsatz-in-libyen/3968606.html>, última vista: 02/2016.

Handelsblatt, “Eingreifen in Syrien: Wie China und Russland ihr Veto Begründen”, 21.07.2012, URL: <http://www.handelsblatt.com/politik/international/eingreifen-in-syrien-wie-china-und-russland-ihr-veto-begrunden/6904992-2.html>, última vista: 05/2016.

HARRIS, Paul, “Barack Obama defends US military intervention in Libya”, en The Guardian, 29.03.2011, URL: <http://www.theguardian.com/world/2011/mar/29/barack-obama-us-speech-libya>, última vista: 02/2016.

HART, Peter, “Now It Can Be Told: Libyan Civilian Deaths”, en FAIR, 18.12.2011, URL: <http://fair.org/uncategorized/now-it-can-be-told-libyan-civilian-deaths/>, última vista: 09/2016.

HEBEL, Christina; SYDOW, Christoph, “Libyscher General Haftar. Putins Wüstenfuchs”, en Spiegel Online, 20.03.2017, URL: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyens-general-khalifa-haftar-wladimir-putins-wuestenfuchs-a-1139580.html>, última vista: 04/2017.

HENKEN, Lühr, “Krieg gegen Libyen – Ursachen, Motive und Folgen”, IMI-Analyse 2011/025, 2011, URL: <http://www.imi-online.de/2011/06/28/krieggegenlibyen/>, última vista: 04/2016.

HOOK, Leslie; DYER, Geoff, “Chinese oil interests attacked in Libya”, en Financial Times, 24.02.2011, URL: <http://www.ft.com/cms/s/0/ef58d52-3fe2-11e0-811f-00144feabdc0.html#axzz4IBDnSiEj>, última vista: 08/2016.

ILLESCAS MARTÍNEZ, Jon E., “La muerte de Gadafi, la muerte de un perro”, en Ediciones Herramienta, 21.10.2011, URL: <http://www.herramienta.com.ar/content/la-muerte-de-gadafi-la-muerte-de-un-perro>, última vista: 11/2016.

International Business Times, “Libya: Civil War Casualties Could Reach 100,000”, 26.10.2011, URL: <http://www.ibtimes.co.uk/libya-conflicting-death-toll-raises-questions-about-what-truly-happened-237895>, última vista: 06/2016.

Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), “Armed Humanitarian Intervention”, 2017, URL: <http://www.iep.utm.edu/hum-mili/>, última vista: 11/2017.

Islamopedia online, “Mustapha Abd al-Jalil”, 2016, URL: <http://www.islamopediaonline.org/profile/mustapha-abd-al-jalil>, última vista: 02/2017.

Islamweb, “Gaddafi committing genocide”, 22.02.2011, URL: <http://www.islamweb.net/en/article/165119/>, última vista: 02/2016.

IVANOVA, Maya, “NGOs – a threat to state sovereignty?”, 06.10.2014, URL: <https://prezi.com/ccwxexkynzkb/ngos-a-threat-to-state-sovereignty/>, última vista: 11/2017.

IWB, “Fed Lawyer Alvarez: ‘The Federal Reserve does not own any gold at all’”, 04.06.2011, URL: <http://investmentwatchblog.com/fed-lawyer-alvarez-%E2%80%9Cthe-federal-reserve-does-not-own-any-gold-at-all%E2%80%9D/>, última vista: 10/2016.

JALIL, Mustafa Abdul, “Libyen-Krieg: Rebellen sprechen von 50.000 Toten”, en Spiegel Online, 31.08.2011, URL: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-krieg-rebellen-sprechen-von-50-000-toten-a-783483.html>, última vista: 06/2016.

JALLOUL, Faisal, “Libya conflict threatens entire Maghreb”, en Al Monitor, 07.01.2015, URL: <http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/security/2015/01/libya-south-extremists-intervention-unlikely.html>, última vista: 04/2017.

JOHNSON, Dominic, “Beratung über Libyen-Krieg. Rebellen als Regierung anerkannt”, en TAZ, 15.07.2011, URL: <http://www.taz.de/!5116299/>, última vista: 02/2016.

KUDASCHEFF, Alexander, “9 de octubre de 1989: un hito histórico”, en DW Política, 09.10.2014, URL: <http://www.dw.com/es/9-de-octubre-de-1989-un-hito-hist%C3%B3rico/a-17985017>, última vista: 05/2016.

LAESSING, Ulf, “U.N. ends month-long Libya talks in Tunisia without proposing new date”, en Reuters, 21.10.2017, URL: <https://www.reuters.com/article/us-libya-security/u-n-ends-month-long-libya-talks-in-tunisia-without-proposing-new-date-idUSKBN1CQ0MM>, última vista: 12/2017.

La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar, “Entre el Viejo Tiempo y el Nuevo Milenio”, estado 2016, URL: https://www.salohogar.net/Salones/Historia/4-6/Viejo_y_Nuevo_Milenio/Viejo_Nuevo_Milenio.htm, última vista: 10/2016.

La Nación, “Habría 50.000 muertos”, 31.08.2011, URL: <http://www.lanacion.com.ar/1402077-habria-50000-muertos>, última vista: 06/2016.

La Prensa, “Libia proclama ‘liberación’”, 24.10.2011, URL: http://impresa.prensa.com/mundo/Libia-proclama-liberacion_0_3235176635.html, última vista: 06/2016.

LAURENS, Henry, “Cómo se repartió Oriente Medio (1916-1920)”, en Le Monde Diplomatique, 2003, URL: <http://monde-diplomatique.es/2003/04/laurens.html>, última vista: 10/2016.

LEHNER, Michael, “Wahrer Grund für Libyenkrieg enthüllt – Gaddafi und der Golddinar”, en NEOPresse, 19.01.2016, URL: <http://www.neopresse.com/politik/afrika/wahrer-grund-fuer-libyenkrieg-enthueellt-gaddafi-und-der-golddinar/>, última vista: 11/2016.

LEUKEFELD, Karin, “Keine Lust auf Frieden. Libysche Rebellen und NATO blockieren Waffenstillstand und Vermittlung durch die Afrikanische Union. Auch Bundesregierung auf Kriegskurs”, en AG Friedensforschung, 12.04.2011, URL: <http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/vermittlung2.html>, , última vista: 02/2016.

LOSURDO, Domenico, “Krieg der Begriffe. Vorabdruck. Obama und Orwell: Die Sprache des Imperiums und das ‘Newspeak’”, en AG Friedensforschung, Junge Welt, 18.06.2011, URL: <http://www.ag-friedensforschung.de/themen/neuekriege/losurdo.html>, última vista: 09/2016.

Libyan Express, “Misurata: Social Affairs Ministry and Red Cross distribute humanitarian aids for Sirte IDPs”, 23.05.2016, URL: <http://www.libyanexpress.com/misurata-social-affairs-ministry-and-red-cross-distribute-humanitarian-aids-for-sirte-idps/>, última vista: 06/2017.

LUBIN, Gus, “How Colonel Qaddafi Accidentally Sent a Mob to Beat Up Korean Construction Workers”, en Business Insider, 25.01.2011, URL: <http://www.businessinsider.com/libya-tripoli-korea-mob-2011-1?IR=T>, última vista: 06/2017.

MANDRAUD, Isabelle, “Kadhafi est toujours là pour les Libyens de Tunis”, en Le Monde, Tunis, 13.05.2014, URL: http://www.lemonde.fr/international/article/2014/05/13/kadhafi-est-toujours-la-pour-les-libyens-de-tunis_4415916_3210.html, última vista: 01/2017.

McClatchyDC, “Gadhafi accused of genocide against his own people”, 21.02.2011, URL: <http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24612940.html>, última vista: 02/2016.

MCDERMOTT, Yvonne, “How Libya became the International Criminal Court’s latest failure”, en The Conversation, 06.08.2015, URL: <http://theconversation.com/how-libya-became-the-international-criminal-courts-latest-failure-45389>, última vista: 05/2017.

MCELROY, Damien; IRVINE, Chris, “Libya ‘granted oil concession to BP on understanding Lockerbie bomber Megrahi would return home’”, en The Telegraph, 07.09.2011, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8745905/Libya-granted-oil-concessions-to-BP-on-understanding-Lockerbie-bomber-Megrahi-would-return-home.html>, última vista: 08/2016.

MCELROY, Damien, “Colonel Gaddafi died after being stabbed with bayonet, says report”, en The Telegraph, 17.10.2012, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/9613394/Colonel-Gaddafi-died-after-being-stabbed-with-bayonet-says-report.html>, última vista: 11/2016;

MCILHONE, Marc, “Libya and FAO renew commitment to develop the country’s agriculture and food security”, en African Brains, 18.05.2012, URL: <http://africanbrains.net/2012/05/18/libya-and-fao-renew-commitment-to-develop-the-countrys-agriculture-and-food-security/>, última vista: 10/2017.

MEIKLE, James; BLACK, Ian, “Muammar Gaddafi says he will die a martyr rather than quit”, en The Guardian, 22.02.2011, URL: <http://www.theguardian.com/world/2011/feb/22/muammar-gaddafi-libyan-tv-martyr>, última vista: 02/2016.

MENDICK, Robert, “Colonel Gaddafi warned Tony Blair of Islamist attacks on Europe, phone conversations reveal”, en The Telegraph, 07.01.2016, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/12086505/Tony-Blairs-phone-conversations-with-Colonel-Gaddafi-revealed.html>, última vista: 11/2016.

MERKEL, Reinhard, “Die Militärintervention gegen Gaddafi ist illegitim”, en FAZ, 22.03.2011, URL: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/voelkerrecht-contra-buergerkrieg-die-militaerintervention-gegen-gaddafi-ist-illegitim-1613317.html>, última vista: 11/2016.

MEYSSAN, Thierry, “Algunas mentiras sobre la guerra de Libia”, en Red Voltaire, 25.03.2011, URL: <http://www.voltairenet.org/article169074.html>, última vista: 09/2016.

MILNE, Seumas, “If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic failure”, en The Guardian, 26.10.2011, URL: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/26/libya-war-saving-lives-catastrophic-failure>, última vista: 06/2016.

MOHAMED, Essam, “Libya: Tawerghans Delay Return Amid Tension”, 25.06.2013, URL: <http://allafrica.com/stories/201306261435.html>, última vista: 06/2017.

MULHOLLAND, Rory; DESHMUKH, Jay, “Residents flee Gaddafi hometown”, en The Sydney Morning Herald, 3.10.2011, URL: <http://www.smh.com.au/breaking-news-world/residents-flee-gaddafi-hometown-20111003-1149x.html>, última vista: 09/2016.

NAJJAIR, Housam, “Tawergha IDPs not cleared to return home just yet”, en Libya Observer, 08.06.2017, URL: <https://www.libyaobserver.ly/inbrief/tawergha-idps-not-cleared-return-home-just-yet>, última vista: 06/2017.

Neue Züricher Zeitung, “Ghadhafis Truppen im Gegenangriff”, 01.03.2011, URL: <http://www.nzz.ch/ghadhafis-truppen-im-gegenangriff-1.9731210>, última vista: 08/2016.

NEUMAYER, Ingo, “Binnenflüchtlinge – Vertriebene im eigenen Land”, en Planet Wissen, 23.08.2017, URL: <http://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/fluechtlinge/pwiebinnenfluechtlingevertriebeneimeigenenland100.html>, última vista: 11/2017.

NEWMAN, Alex, “Gadhafi’s Gold-money Plan Would Have Devastated Dollar”, en The New American, 11.11.2011, URL: <http://www.thenewamerican.com/economy/markets/item/4630-gadhafi-s-gold-money-plan-would-have-devastated-dollar>, última vista: 11/2016.

New York Times (NYT), “Three Days, 700 Deaths on Mediterranean as Migrant Crisis Flares”, 29.05.2016, URL: https://www.nytimes.com/2016/05/30/world/europe/migrants-deaths-mediterranean-libya-italy.html?_r=0, última vista: 01/2017.

NORDLAND, Rod, “Libya Counts More Martyrs Than Bodies”, en The New York Times, 16.09.2011, URL: <http://www.nytimes.com/2011/09/17/world/africa/skirmishes-flare-around-qaddafi-strongholds.html>, última vista: 09/2016.

Noticias Terra, “París: grupo de contacto reconocerá autoridad de consejo de transición libio”, 15.07.2011, URL: <http://noticias.terra.com/mundo/europa/paris-grupo-de-contacto-reconocera-autoridad-de-consejo-de-transicion-libio,9fe0f26e2ad21310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>, última vista: 09/2016.

Notihoy, “La ONU recuerda su fracaso en Ruanda y reafirma compromiso contra genocidios”, 16.04.2014, URL: <http://notihoy.com/la-onu-recuerda-su-fracaso-en-ruanda-y-reafirma-compromiso-contra-genocidios/>, última vista: 07/2016.

OBAMA, Barack; CAMERON, David; SARKOZY, Nicolas, “Libya’s Pathway to Peace”, en The New York Times, 14.04.2011, URL: http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html?_r=0, última vista: 02/2016.

Openanthropology, “Libya Report. Ethnic Cleansing” 29.03.2012, URL: http://openanthropology.org/libya/Libya%20Ethnic_Cleansing.pdf, última vista: 06/2017.

PAECH, Norman, “Der Türöffner zum Krieg. UN-Resolution 1973 diene als Lizenz für einen Regimewechsel”, en AG Friedensforschung, 17.03.2012, URL: <http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/paech3.html>, última vista: 03/2016.

Panapress, “Libya: UN needs US\$35m for Libya’s IDPs”, 10.10.2014, URL: <http://www.panapress.com/pana-pays-pagination-16-20212-7-lang2-ly-index.html>, última vista: 05/2017.

PANY, Thomas, “Libyen: Russland versucht ein alternatives Projekt”, en Telepolis, 13.03.2017, URL: <https://www.heise.de/tp/features/Libyen-Russland-versucht-ein-alternatives-Projekt-3651431.html>, última vista: 04/2017.

Paris 21, “Assessing the national statistics system in Libya”, 01.03.2016, URL: <http://www.paris21.org/node/2481>, última vista: 10/2017.

PECKEL, Marcos, “Libia está peor ahora que durante el gobierno de Gadafi”, en Sputnik News, 15.02.2016, URL: <http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20160215/1056784482/libia-peor-gadafi.html>, última vista: 06/2016.

Peds Ansichten, “Libyen und die Lüge vom Volksaufstand”, 27.12.2015, URL: <http://peds-ansichten.de/2015/12/libyen-und-die-luege-vom-volksaufstand/>, última vista: 02/2016.

PEREGIL, Francisco, “Libia ya tiene tres Gobiernos”, en El País, 16.03.2016, URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458123424_282087.html, última vista: 06/2016.

PFAFF, Isabel, “Gaddafis Machtzirkel vor Gericht”, en Süddeutsche Zeitung, 19.09.2013, URL: <http://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-gaddafis-machtzirkel-vor-gericht-1.1775205>, última vista: 05/2017.

PIRIS, Alberto, “Estados Unidos cambia su foco estratégico”, en Rebelión, 10.01.2012, URL: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142657>, última vista: 08/2016.

Politaia, “Die “Libysche Revolution” und die gigantischen libyschen Wasserreserven”, 06.03.2011, URL: <http://www.politaia.org/kriege/die-libysche-revolution-und-die-gigantischen-libyschen-wasserreserven-politaia-org/>, última vista: 10/2016.

PUHANIC, Andrew, “The Globalists”, en The Globalist Report, 02.04.2012, URL: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite95.htm, última vista: 10/2016.

PUTZ, Ulrike, “Streit über Flugverbotszone: Araber bitten Westen um Hilfe gegen Gaddafi”, en Spiegel Online, 09.03.2011, URL: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/streit-ueber-flugverbotszone-araber-bitten-westen-um-hilfe-gegen-gaddafi-a-749918.html>, última vista: 02/2016.

RAMESH, Randeep, “UN Libya envoy accepts £1,000-a-day job from backer of one side in civil war”, en The Guardian, 04.11.2015, URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/un-libya-envoy-accepts-1000-a-day-job-from-backer-of-one-side-in-civil-war>, última vista: 12/2017.

RAMEZANI, Kian, “Die NATO hat in Libyen Carte Blanche”, en 20 Minuten, 18.03.2011, URL: <http://www.20min.ch/news/dossier/libyen/story/-Die-NATO-hat-in-Libyen-Carte-Blanche--16503133>, última vista: 07/2016.

RAYMENT, Sean, “How the special forces helped bring Gaddafi to his knees”, en The Telegraph, 28.08.2016, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8727076/How-the-special-forces-helped-bring-Gaddafi-to-his-knees.html>, última vista: 09/2016.

Red Voltaire, “Resolución 1973 aprobada por el Consejo de Seguridad”, 17.03.2011, URL: <http://www.voltairenet.org/article169035.html>, última vista: 02/2016.

Rehmat's World, “UK author: Israel is an ‘illegal state’”, 08.06.2014, URL: <https://rehmat1.com/2014/06/08/uk-author-israel-is-an-illegal-state/>, última vista: 10/2016.

Reuters, “Arab League suspends Libya delegation – TV”, 22.02.2011, URL: <http://www.reuters.com/article/libya-protests-league-idUSLDE71L2GK20110222>, última vista: 02/2016.

Reuters, “U.S. envoy: Gaddafi troops raping, issued Viagra”, 29.04.2011, URL: <http://www.reuters.com/article/us-libya-troops-rape-idUSTRE73S74B20110429>, última vista: 09/2016.

Reuters, “Factbox: Latest developments in the Libyan conflict”, 22.08.2011, URL: <http://uk.reuters.com/article/us-libya-nato-idUKTRE77L48420110822>, última vista: 09/2016.

Reuters, “U.N. Beefs up Guards as It Scales up Presence in Libya”, en U.S. News, 08.09.2017, URL: <https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-09-08/un-to-deploy-security-force-to-guard-its-base-in-libya-envoy>, última vista: 10/2017.

RISEN, James, *et. al.*, “U.S.-Approved Arms for Libya Rebels Fell Into Jihadis’ Hands”, en The New York Times, 05.12.2012, URL: http://www.nytimes.com/2012/12/06/world/africa/weapons-sent-to-libyan-rebels-with-us-approval-fell-into-islamist-hands.html?_r=0, última vista: 09/2016.

RNF – Rhein Neckar Fernsehen, “Heidelberg: Noch mehr Flüchtlinge auf dem Patrick-Henry-Village”, 20.05.2016, URL: <http://www.rnf.de/mediathek/video/heidelberg-noch-mehr-fluechtlinge-auf-dem-patrick-henry-village/>, última vista: 02/2017.

RÖSSLER, Hans-Christian, “Das Regime kämpft ums Ganze”, 21.02.2011, en FAZ, URL:

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/libyen-das-regime-kaempft-ums-ganze-1593788.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2, última vista: 09/2016.

ROSER, Thomas, “Der Krieg, der nicht vergeht”, en Zeit Online, 05.04.2017, URL: <http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/bosnien-krieg-sarajevo-erinnerungen-ethnische-konflikte/komplettansicht>, última vista: 08/2017.

ROTTER, Manfred, “Erst bomben, dann denken?”, en Der Standard, 21.03.2011, URL: <http://derstandard.at/1297820998557/Erst-bomben-dann-denken>, última vista: 03/2016.

RP Online, “Bundesregierung: Erfolg für die “Kräfte des Friedens””, 02.05.2011, URL: <http://www.rp-online.de/politik/ausland/bundesregierung-erfolg-fuer-die-kraefte-des-friedens-aid-1.766451>, última vista: 11/2016.

Russia Today News (RT News), “Gaddafi was not deliberately killing civilians, victim of conspiracy between Western powers and rebels”, 19.04.2011, URL: <https://www.sott.net/article/237029-Gaddafi-Was-Not-Deliberately-Killing-Civilians-Victim-of-Conspiracy-Between-Western-Powers-and-Rebels>, última vista: 06/2016.

Russia Today News (RT News), “Refugee camp massacre: Libyan militia launch racist raid”, 08.02.2012, URL: <https://www.rt.com/news/libya-war-crimes-racism-827/>, última vista: 05/2017.

SÁENZ DE UGARTE, Iñigo, “La decadencia de Al Jazeera”, 31.12.2012, URL: <http://www.guerraeterna.com/la-decadencia-de-al-jazeera/>, última vista: 09/2016.

Sahara Reporters, “World And Press Watch As Africans Are Lynched In Libya”, 28.02.2011, URL: <http://saharareporters.com/2011/02/28/world-and-press-watch-africans-are-lynched-libya>, última vista: 11/2016.

SAJOO, Aryn B., “A win for ‘secularists’ in Libya? It’s not what you think”, en The Christian Science Monitor, 19.07.2012, URL: <http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2012/0719/A-win-for-secularists-in-Libya-It-s-not-what-you-think>, última vista: 08/2016.

SAMEDOVA, Evlalia; SOSNYTSKA, Olga, “Russland kann Milliarden in Libyen verlieren”, en Deutsche Welle, 31.08.2011, URL: <http://www.dw.com/de/russland-kann-milliarden-in-libyen-verlieren/a-6607515>, última vista: 04/2017.

SAMUELSON, Kate, “Amnesty: 2017 on Course to Be Deadliest Year Yet for Refugees Crossing the Mediterranean”, en Time, 06.07.2017, URL: <http://time.com/4845054/amnesty-2017-refugees-crossing-mediterranean/>, última vista: 10/2017.

SCHLÄGER, Philipp, “Obamas Lügen. Neun Tage nach Beginn des Krieges gegen Libyen versucht der US-Präsident, die Angriffe zu rechtfertigen”, en AG Friedensforschung, 30.03.2011, URL: <http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/usa2.html>, última vista: 02/2016.

SCHMID, Ulrich, “Kampf um Öl und Macht. Ohne den Kreml-Freund Haftar läuft nichts in Libyen”, en Neue Zürcher Zeitung, 07.03.2017, URL: <https://www.nzz.ch/international/erdoelhaefen-in-libyen-ein-feldmarschall-mit-beziehungen-zum-kreml-ld.149563>, última vista: 04/2017.

SEBAG MONTEFIORE, Simon, “Ende eines Diktators. Muammar al-Gaddafi bekam den Tod, den er verdiente”, en Die Welt, 29.10.2011, URL: <https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13687349/Muammar-al-Gaddafi-bekam-den-Tod-den-er-verdiente.html>, última vista: 11/2016.

SEYMOUR, Richard, “Libya’s spectacular revolution has been disgraced by racism”, 30.08.2011, en The Guardian, URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/30/libya-spectacular-revolution-disgraced-racism>, última vista: 11/2016.

SMITH, David, “Murder and torture ‘carried out by both sides’ of uprising against Libyan regime”, en The Guardian, 12.09.2011, URL: <https://www.theguardian.com/world/2011/sep/12/murder-torture-both-sides-libyan-regime>, última vista: 09/2016.

SMITH, Lewis, “Obama, Cameron and Sarkozy state their commitment to regime change”, 15.04.2011, en The Independent, URL: <http://www.independent.co.uk/news/world/politics/obama-cameron-and-sarkozy-state-their-commitment-to-regime-change-2268090.html>, última vista: 02/2016.

SOLIMAN, Asmahan; BAHGAT, Hossam, “Haftar and Sarraj in Cairo: The details of Egypt’s partially successful Libyan summit”, en Mada Masr, 25.02.2017, URL: <http://www.madamasr.com/en/2017/02/25/feature/politics/haftar-and-sarraj-in-cairo-the-details-of-egypts-partially-successful-libyan-summit/>, última vista: 04/2017.

SOTLOFF, Steven, “China’s Libya Problem”, en The Diplomat, 14.03.2012, URL: <http://thediplomat.com/2012/03/chinas-libya-problem/>, última vista: 08/2016.

SPENCER, Richard, “Libyan officials will seek death penalty for Saif al-Islam Gaddafi”, en The Telegraph, 21.11.2011, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8905151/Libyan-officials-will-seek-death-penalty-for-Saif-al-Islam-Gaddafi.html>, última vista: 05/2017.

Spiegel Online, “Aufstand in Libyen: Rebellen lehnen AU-Friedensplan ab”, Reuters, 11.04.2011, URL: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/aufstand-in-libyen-rebellen-lehnen-au-friedensplan-ab-a-756405.html>, última vista: 02/2016.

Sputniknews, “Bengasi: Nationalarmee befreit zweitgrößte Stadt Libyens von Dschihadisten”, 06.07.2017, URL: <https://de.sputniknews.com/politik/20170706316466667-libyen-nationalarmee-bengasi-befreiung/>, última vista: 09/2017.

STARR, Barbara, “Foreign forces in Libya helping rebel forces advance”, en CNN, 24.08.2011, URL: <http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/24/libya.foreign.forces/>, última vista: 09/2016.

Süddeutsche Zeitung, “Gaddafis Gedankenwelt – Warum raubt ihr mir meine Ruhe?”, 22.03.2011, URL: <http://www.sueddeutsche.de/kultur/libyen-gaddafis-gedankenwelt-flucht-in-die-hoelle-1.1074975>, última vista: 09/2016.

Sunday Mirror, “Crack SAS troops hunt Gaddafi weapons inside Libya”, 20.03.2011, URL: <http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/crack-sas-troops-hunt-gaddafi-117405>, última vista: 09/2016.

SWANSON, David, “Libya: another neocon war”, en The Guardian, 21.04.2011, URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/21/libya-muammar-gaddafi>, última vista: 11/2016.

TAZ – Die Tageszeitung, “Von Coca-Cola bis Juventus Turin”, 09.03.2011, URL: <http://www.taz.de/!5125159/>, última vista: 09/2016.

Terra, “Nuevo presidente chino quiere “un gran renacimiento de la nación””, 17.03.2013, en Terra Asia, URL: <http://noticias.terra.com/mundo/asia/nuevo-presidente-chino-quiere-un-gran-renacimiento-de-la-nacion,057ad29cae47d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html>, última vista: 08/2016.

The Daily Mail, “Gaddafi soldiers given ‘Viagra’ and ordered to rape hundreds of women, says UN”, 09.06.2011, URL: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2001283/Gaddafi-soldiers-WERE-given-Viagra-rape-innocent-women-civilians-says-UN.html>, última vista: 09/2016.

The Guardian, “Gaddafi ‘supplies troops with Viagra to encourage mass rape’, claims diplomat”, 29.04.2011, URL: <https://www.theguardian.com/world/2011/apr/29/diplomat-gaddafi-troops-viagra-mass-rape>, última vista: 09/2016.

The Guardian, “Libya”, 2011-2017, URL: <https://www.theguardian.com/world/libya>, última vista: 03/2017.

The Guardian, “Humanitarian response. UN to cut food aid to Syria”, 18.09.2014, URL: <https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/18/world-food-programme-cut-aid-syria>, última vista: 10/2017.

The Independent, “Leaked UN report reveals torture, lynchings and abuse in post-Gaddafi Libya”, 24.11.2011, URL: <http://www.independent.co.uk/news/world/africa/leaked-un-report-reveals-torture-lynchings-and-abuse-in-post-gaddafi-libya-6266636.html>, última vista: 11/2016.

The Independent, “Babies among more than 200 refugees drowned boat disaster in the Mediterranean Sea”, 03.11.2016, URL: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-latest-boat-disaster-capsizing-sinking-mediterranean-sea-libya-239-un-a7395376.html>, última vista: 01/2017.

The Libya Observer, “Libya celebrates anniversary of February revolution”, 17.02.2016, URL: <https://www.libyaobserver.ly/news/libya-celebrates-anniversary-february-revolution>, última vista: 02/2017.

The Sun, “Gaddafi gives troops Viagra for mass rapes”, 09.06.2011, URL: <https://www.thesun.co.uk/archives/news/594994/gaddafi-gives-troops-viagra-for-mass-rapes/>, última vista: 09/2016.

The Telegraph, “Blair, Gaddafi and the BP oil deal”, 30.07.2007, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1553044/Blair-Gaddafi-and-the-BP-oil-deal.html>, última vista: 08/2016.

The Telegraph, “Gaddafi ordered mass rape as a weapon, International Criminal Court claims”, 09.06.2011, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8564999/Gaddafi-ordered-mass-rape-as-a-weapon-International-Criminal-Court-claims.html>, última vista: 09/2016.

The Tripoli Post, “Libya National Dialogue Initiative Criticised”, 27.08.2017, URL: <http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=10588>, última vista: 06/2017.

TOWNSEND, Mark, “Mediterranean death rate doubles as migrant crossings fall”, en The Guardian, 03.06.2017, URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/03/mediterranean-refugees-migrants-deaths>, última vista: 09/2017.

Trading Economics, “Libya Balance of Trade. 1990-2017”, 2017, URL: <https://tradingeconomics.com/libya/balance-of-trade>, última vista: 10/2017.

ULACK, Chris, “The Arab Spring’s looming refugee crisis”, en Foreign Policy, 23.06.2011, URL: <http://foreignpolicy.com/2011/06/23/the-arab-springs-looming-refugee-crisis/>, última vista: 04/2017.

VOGT, Ragnar, “Ein abtrünniger General mit CIA-Vergangenheit”, en Zeit Online, 19.05.2014, URL: <http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-05/libyen-general-chalifa-hafta>, última vista: 04/2017.

VON PAX, Wilhelm, “Dokumente freigeben – Der wahre Grund für den Libyen-Krieg der NATO”, en NEO Presse, 11.01.2016, URL: <http://www.neopresse.com/politik/leak-der-wahre-grund-fuer-die-libyen-intervention-der-nato-gold-oel-dollar/>, última vista: 02/2016.

WALKER, Peter, “Gaddafi forces using civilians as human shields, says France”, en The Guardian, 06.04.2011, URL: <https://www.theguardian.com/world/2011/apr/06/gaddafi-using-civilian-human-shields>, última vista: 09/2016.

WATERFIELD, Bruno, “Gaddafi attacks Sarkozy plan for Union of the Med”, en The Telegraph, 10.07.2008, URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2277517/Gaddafi-attacks-Sarkozy-plan-for-Union-of-the-Med.html>, última vista: 08/2016.

WATT, N.; HOPKINS, N.; TRAYNOR, I., “Nato to take control in Libya after US, UK and France reach agreement”, en The Guardian, 22.03.2011, URL: <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/22/libya-nato-us-france-uk>, última vista: 08/2016.

WEAVER, M.; OWEN, P.; BATTY, D.; “Libya: the fall of Tripoli – Wednesday 24 August 2011”, en The Guardian, 24.08.2011, URL: <http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2011/aug/24/libya-rebels-take-gaddafi-compound-live-updates>, última vista: 02/2016.

WILE, Anthony, “Gaddafi Planned Gold Dinar, Now Under Attack”, en The Daily Bell, 05.05.2011, URL: <http://www.thedailybell.com/editorials/anthony-wile-gaddafi-planned-gold-dinar-now-under-attack/>, última vista: 10/2016.

WILLIAMS, Rhodri C., “Land, property and displacement in post-revolution Libya”, en Terra Nullius, 17.06.2012, URL: <https://terra0nullius.wordpress.com/2012/06/17/land-property-and-displacement-in-post-revolution-libya/>, última vista: 07/2017.

WILLIAMS, S., “North Sea Oil Production Continues to Slide”, en The Wall Street Journal, 23.02.2015, URL: <http://www.wsj.com/articles/north-sea-oil-production-continues-to-slide-1424736097>, última vista: 08/2016.

WINKLER, Thomas, “Über Flugverbotszonen und den Missbrauch des Völkerrechts”, 16.03.2011, URL: <http://www.marxismus-online.eu/display/dyn/pc0bd1da0-5050-11e0-8cc2-e8a4ea36d0ef/content.html>, última vista: 03/2016.

WINTOUR, Patrick, “Russia increases involvement in Libya by signing oil deal”, en The Guardian, 21.02.2017, URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/21/russia-increases-involvement-libya-signing-oil-deal-rosneft>, última vista: 04/2017.

WINTOUR, Patrick, “Breakthrough Libya talks appear to yield deal between rival factions”, en The Guardian, 03.05.2017, URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/may/03/libya-rival-factions-appear-to-reach-outline-agreement>, última vista: 12/2017.

Wirtschaftswoche, “Die größten Ölreserven der Welt”, 30.04.2014, URL: <http://www.wiwo.de/politik/ausland/rohstoffe-die-groessten-oelreserven-der-welt/5813074.html>, última vista: 09/2016.

Yo Político, “La Paz Positiva y Paz Negativa”, 28.10.2008, URL: <http://yopolitico.blogspot.de/2008/10/la-paz-positiva-y-paz-negativa.html>, última vista: 03/2016.

ZAPTIA, Sami, “UN’s Humanitarian Aid report on Libya paints grim picture and underfunding”, en Libya Herald, 02.09.2016, URL: <https://www.libyaherald.com/2016/09/02/uns-humanitarian-aid-report-on-libya-paints-grim-picture-and-underfunding/>, última vista: 05/2017.

ZAPTIA, Sami, “A total of 1,523 violent deaths were reported in Libya in 2016: Libyanbodycount”, en Libya Herald, 05.01.2017, URL: <https://www.libyaherald.com/2017/01/05/a-total-of-1523-violent-deaths-were-reported-in-libya-in-2016-libyanbodycount/>, última vista: 04/2017.

Zeit Online, “Flug und Trug”, 22.03.2011, URL: <http://www.zeit.de/2011/13/01-Libyen-Nato/seite-2>, última vista: 02/2016.

Zeit Online, “Frankreich bricht diplomatische Beziehungen zu Libyen ab”, 26.02.2011, URL: <http://www.zeit.de/news-022011/26/iptc-hfk-20110226-109-28956298xml>, última vista: 02/2016.

ZURUTUZA, Karlos, “Displaced Libyans still dream of home”, en Al Jazeera, 26.11.2013, URL: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/11/displaced-libyans-still-dream-home-201311267354295146.html>, última vista: 06/2017.

Anexos:

Anexo 1, “Las IDP en el mundo (estado: 31 de diciembre de 2016)”: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC); Norwegian Refugee Council (NRC), *GRID 2016. Global Report on Internal Displacement*, mayo 2015, p. 26, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-internal-displacement-IDMC.pdf>, última vista: 12/2017.

Anexo 2, “La proporción de IDP *versus* refugiados que huyeron de conflictos y violencia desde 1989 a 2013”: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC); Norwegian Refugee Council (NRC), *Global Overview 2014. People internally displaced by conflict and violence*, mayo 2014, p. 10, URL: <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf>, última vista: 12/2017.

Anexo 3, “Los *Guiding Principles on Internal Displacement* (1998), version española”: Naciones Unidas (NU), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos*, 1998, URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf>, última vista: 12/2017.

Anexo 4, “El desplazamiento interno en Libia (estado: marzo de 2015)”: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Libya: internal displacement as of March 2015”, 30.03.2015, URL: <http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/2015/libya-internal-displacement-as-of-march-2015>, última vista: 12/2017.

Anexo 5, “Personas necesitadas en Libia según el HNO 2017”: United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Humanitarian Needs Overview 2017. Libya*, noviembre 2016, p. 4, URL: <http://reliefweb.int/report/libya/2017-libya-humanitarian-needs-overview-november-2016>, última vista: 09/2017.

Anexo 6, “Agencias humanitarias involucradas en el *Global Protection Cluster* en Libia según el HNO 2017”: United Nations (UN), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Humanitarian Needs Overview 2017. Libya*, noviembre 2016, p. 24, URL: <http://reliefweb.int/report/libya/2017-libya-humanitarian-needs-overview-november-2016>, última vista: 09/2017.